



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

118
4900



Harvard College Library

FROM

National Library of Chile

bind

TRIBUNAL ANGLO-CHILENO

(1894-1896)



RECLAMACIONES

PRESENTADAS AL

TRIBUNAL ANGLO-CHILENO

(1894-1896)

TOMO SEGUNDO



SANTIAGO DE CHILE
IMPRESA I LIBRERIA ERCILLA

BANDERA 21-K

—
1896



BOUND. MAY 8 1911

12/29/15

DEC 29 1915



TRIBUNAL ARBITRAL
ANGLO-CHILENO, (1894-1896)

RECLAMACION N.º 23

THE SANTA ELENA NITRATE COMPANY LIMITED

MEMORIAL

El que suscribe Federico Jorge Lomax residente actualmente en Iquique, socio de la firma Inglis, Lomax i Compañía, comerciantes; i representante legal i apoderado de la Compañía titulada *The Santa Elena Nitrate Company Limited* registrada en Inglaterra, por la presente declaró con toda formalidad lo que sigue, referente al reclamo contra el Gobierno de Chile:

1 Residia en Iquique cuando tuvieron lugar los incidentes que orijinan este reclamo;

2 Soi súbdito británico natural de Manchester, Inglaterra, donde nació el año de mil ochocientos cincuenta i siete;

3 No tomé parte alguna directa o indirectamente en la guerra civil de mil ochocientos noventa i uno, ni tampoco servía o recibía pago de las partes beligerantes;

4 Que ningún dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, el cual no ha sido presentado a ningún otro Tribunal.

5 Los pormenores del reclamo son a saber;

LLEVADO DE LA OFICINA DE «SANTA ELENA»

8 Enjalmas de \$ 10 c/u	\$	80.00
-------------------------	----	-------

LLEVADO DE CAMARONES

26 mulas	\$	4,625.00
----------	----	----------

	\$	4,705.00
--	----	----------

Al cambio de 24 peniques por peso	£	470-10-00
-----------------------------------	---	-----------

Intereses desde el 7 de Abril de mil ochocientos noventa i uno al treinta i uno de Diciembre de mil ochocientos noventa i cuatro al 6% anual	£	105-14-01
--	---	-----------

6 La pérdida de las enjalmas i mulas en cuestion, solo se puede atribuir al estado de desórden en que se encontraba la provincia de Tarapacá, debido a las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas del Congreso por un lado i las del Gobierno por el otro, siendo todo lo reclamado tomado para usos militares.

7 Ningun recibo se dió por las mulas llevadas de la hacienda de Camarones; pero en cambio se obtuvo recibo por las ocho enjalmas que se llevaron de la oficina junto con veinte mulas, devolviendo estas últimas i reteniendo las enjalmas.

Acompaño los siguientes documentos:

A—Copia de protesta hecha por mí ante el cónsul de Su Majestad Británica en Iquique, el día 20 de Agosto de mil ochocientos noventa i uno.

B—Copia de Protesta de Fermín Hernández referente a las mulas llevadas de su hacienda.

C—Copia del poder de *The Santa Elena Nitrate Company Limited* que acredita mi representacion de la Compañia mencionada.

F. J. LOMAX.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion número 23, en la cual don Federico Jorge Lomax, a nombre de la *Compañía Santa Elena de Salitres, Limitada*, demanda \$ 4,705, o sea, al cambio de 24 peniques por peso, £ 470-10-0, mas £ 105-14-1 por intereses, valor atribuido a 8 enjalmes i 26 mulas que se dicen tomadas para usos militares en Tarapacá durante la revolucion de 1891.

1 El señor Lomax, olvidando que procede a título de mandatario, da de su persona los datos que el Reglamento de Procedimientos exige de la persona del reclamante.

No ha comprobado el estado i carácter neutral de éste, ni podría comprobarlo por tratarse de una compañía anónima, que en ningun caso puede ser comprendida bajo la denominacion de súbdito ingles, término que solo corresponden a personas naturales i no a las meramente jurídicas o ficticias.

Resulta que V. E. es incompetente para conocer de esta reclamacion, segun mas latamente se ha demostrado en los casos análogos a éste de las reclamaciones números 4, 5, 7, 21, etc.

2 No consta que el señor Lomax sea, como se titula, socio de la firma Inglis, Lomax i Ca., ni que obre lejitimamente en representacion de la Compañía reclamante.

El poder acompañado, que parece otorgado en Lóndres el 29 de Julio de 1889, nada prueba en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él quisieron hacer los interesados: no prueba ni el hecho de la constitucion de la Compañía reclamante, la cual en todo caso mas seria chilena que inglesa, ni la lejitimidad de los títulos de administrador i secretario atribuido a los otorgantes, ni la facultad de éstos para conferir poderes en representacion de dicha Compañía.

No estando, pues, justificada la personeria del señor Lomax, la reclamación no debe ser admitida.

3 Además, el memorial no se ajusta a las formalidades reglamentarias, principalmente a las indicadas en los artículos VII i IX del respectivo Reglamento de Procedimientos, lo cual obsta también a la admisión de la reclamación.

4 Las protestas anexas, del mismo señor Lomax i de un señor Hernández, no prueban ni pueden probar cosa alguna en favor de la reclamación. Mas bien ofrecen demostraciones en contra.

Según una i otra de esas protestas, las mulas i enjalmes cuyo valor se reclama pertenecían no a la Compañía reclamante «Santa Elena», sino a la casa James, Inglis i Ca., que no ha reclamado.

Según la protesta del señor Lomax, las mulas que se suponen tomadas en Camarones fueron 25 i no las 26 que cobra. El precio de todas ellas se hace subir a \$ 4,625, lo que da para cada una un valor de \$ 177, 88 centavos.

Al cobrar este precio no reparó el reclamante en que el recibo acompañado por 20 mulas, da a cada una de éstas un valor de solo 150 pesos, siendo que, por estar en servicio en la oficina, debían valer mas, que las enviadas a reponerse en los lejanos potreros de Camarones.

En la reclamación subsiguiente, núm. 25, enteramente análoga a esta; otro titulado socio de la misma casa de James, Inglis i C.ª aprecia cada mula de las de Camarones en 160 pesos. Todas esas cifras son antojadizamente exajeradas. Su falta misma de fijeza concurre a demostrarlo.

Según la referida protesta del señor Lomax, un oficial de las fuerzas del Gobierno penetró al establecimiento de Santa Elena i sacó 20 mulas que fueron devueltas, i 8 sillas de montar, que no lo fueron. A ellas se refiere el recibo anexo firmado con el nombre de Gustavo Julian: puedo asegurar que éste no era oficial de ejército, i en todo caso, que no estaba autorizado debidamente para tomar mulas por cuenta de la Intendencia de Tarapacá. Por lo demas, ni consta la autenticidad del recibo, ni de él aparece en que carácter se recibieron las mulas i sillas, si efectivamente se recibieron.

3 Siendo que en derecho nada valen afirmaciones sin comprobación, el reclamante no ha comprobado ninguno de los hechos a que el memorial se refiere; sin embargo, los afirmó como si hubiera

podido desde Iquique. donde residía. presenciar lo que pasaba en la Pampa i en Camarones.

No dice ni se sabe quién o quiénes tomaron dichas mulas; i aunque en una parte dice el memorial que se tomaron para usos militares, en otra dice que se perdieron i que la pérdida solo puede atribuirse al desórden en que la provincia se encontraba a causa de las operaciones militares.

Esto haria inútil toda prueba: a los dueños, señores James, Inglis i C.^a, correspondia cuidar sus mulas para que no se perdieran en el desórden; i si a consecuencia natural de la guerra se perdieron, sin poderlo evitar, seria el caso de fuerza mayor, que no impone responsabilidad a mi Gobierno, el cual nada ha sabido de todo lo que el reclamante cuenta.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

En la presente réplica contestaré con toda la concision posible las alegaciones formuladas por el señor ajente de Chile en su contestacion a nuestro memorial, i procederé así por cuanto la mayor parte de esas alegaciones son exactamente las mismas que se han formulado i se han rebatido en muchas de las reclamaciones anteriores.

1 El señor Federico J. Lomax dió en su memorial respecto de su persona los datos que exige el Reglamento, por cuanto creyó que eso era lo que allí se exijia i con tanta mayor razon cuanto que esas prescripciones sobre datos relativos a la persona del reclamante

no son aplicables a las sociedades anónimas. como lo dispone terminantemente el artículo V del Reglamento.

Respecto del argumento que niega a las sociedades anónimas el derecho de interponer reclamaciones ante este Tribunal, diré solo que esta alegacion carece de todo fundamento, como lo he demostrado con perfecta claridad en la réplica que presenté en la reclamacion núm. 20 de la Compañía Salitrera *Nueva Tamarugal*.

2 Como se objeta el derecho del señor Lomax para obrar en representacion de la casa de Inglis, Lomax i C.^a haré presente que con la réplica que presenté en la reclamacion núm. 19 de esos mismos señores, acompañé el contrato de sociedad de Inglis, Lomax i C.^a que justifica ámpliamente la personeria del señor Lomax.

Se arguye por el agente de Chile que el poder presentado por el señor Lomax no es bastante, por cuanto en él no aparece justificado el carácter de director i de secretario de la Compañía reclamante, que se atribuyen las personas que firman ese poder, ni prueba tampoco que la Compañía haya sido incorporada en Inglaterra con arreglo a las leyes de ese país.

Dado los deberes que los notarios tienen en Inglaterra, el hecho solo de que el poder que presenté aparezca autorizado por un notario público prueba por sí solo que la Compañía ha sido incorporada legalmente i que las personas que firman ese documento son en realidad el director i el secretario de la Compañía reclamante.

3. El agente de Chile se excepciona tambien diciendo que el memorial no se ajusta a las prescripciones contenidas en los arts. VII i IX del Reglamento. Léase nuestra solicitud i los pormenores que la acompañan con espíritu tranquilo i se verá que en esos documentos se comprende una esposicion del reclamo tan completa i detallada como ha sido posible hacerla. En cuanto al juramento prescrito en el art. IX diré que el señor Lomax creyó i cree cumplida esa formalidad con haber jurado como lo hizo ante el cónsul inglés en Iquique la protesta acompañada al memorial.

4. Se dice tambien que las protestas de los señores Lomax i Hernandez léjos de ser un argumento en favor del reclamo, lo son encontra de éste, por cuanto segun esos documentos, las mulas i enjalmas cuyo valor se reclama pertenecen a Inglis, Lomax i Ca.,

que no reclaman ese valor, i no a la Compañía *Santa Elena* que lo reclama,

Para desvanecer este argumento basta sólo fijarse en que el señor Lomax, socio jector de la casa de Inglis, Lomax i Cia., reclama el valor de esas mulas no para esta casa, sino para la Compañía reclamante. ¿Que mejor prueba que ésta puede producirse para justificar que las mulas i las enjalmas cuyo valor se reclama pertenecen a la Compañía *Santa Elena* i no a Inglis, Lomax i Cia.?

El señor ajente de Chile hace mucho hincapié en que en diversas reclamaciones se cobran diferentes precios por las mulas, recordando que algunas se cobran a \$ 150, otras a \$ 160 y otras en la presente reclamacion a \$ 177.88, i concluye afirmando que esta falta de uniformidad en los precios comprueba que todos ellos son arbitrariamente exajerados. Esta falta de uniformidad prueba solo que las mulas valían mas o ménos segun su calidad i segun el lugar donde eran tomadas, del mismo modo que una casa grande i cómoda vale mucho mas que una casa chica e incómoda, i que una casa cualquiera vale mas en Santiago que en San Bernardo. Por consiguiente, la falta de uniformidad en los precios manifiesta la correccion del reclamo.

Para desvirtuar la fuerza probatoria del recibo firmado por el señor Gustavo Jullian se dice que este caballero no era oficial del ejército; que no estaba autorizado para tomar mulas en nombre de la Intendencia de Tarapacá; que no está probada la autenticidad del recibo i que en él no aparece la razon por que se entregaron las mulas i las enjalmas cuyo valor se cobra. Basta saber quien es don Gustavo Jullian para comprender que este caballero no habría procedido jamas a tomar aquellos objetos sin tener orden superior para hacerlo así i a la Compañía nada le importa el que el recibo no espresa la causa por que se tomaron las mulas, pues para justificar su derecho basta que diga que le fueron tomadas en realidad.

5. En este número de la contestacion se dice que el reclamante no ha probado ninguno de los hechos que refiere en su memorial; que el señor Lomax que los asegura, no podia desde Iquique, donde residia, ver lo que pasaba en las salitreras i en Camarones; que no espresa los nombres de los que tomaron las mulas i que

en una parte del memorial se dice que esos animales fueron tomados para objetos militares, i en otra parte se dice que se perdieron, i se concluye diciendo que si se perdieron por culpa de los reclamantes o por accidentes de la guerra, el Gobierno de Chile no tiene en ningun caso responsabilidad alguna.

A todo esto responderemos diciendo que el señor Lomax asegura los hechos tales como los ha sabido de fuente fidedigna i que la prueba que se rendirá oportunamente vendrá a poner en claro todo lo demas.

Con lo espuesto anteriormente espero que el Excelentísimo Tribunal se servirá aceptar en todas sus partes esta reclamacion.

MANUEL LECAROS

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en la reclamacion hecha a nombre de la Compañia Salitrera *Santa Elena* por enjalmas i mulas que se dicen tomadas o perdidas en Tarapacá durante la revolucion de 1891.

1 En cuanto se refiere a la existencia legal de la Compañia reclamante, a la justificacion de la personeria del memorialista, señor Lomax, i a la capacidad de aquella sociedad anónima para reclamar ante V. E., como si tuviera al efecto el estado i carácter de súbdito británico, me refiero a lo espuesto i alegado por mi parte, con referencia a esos mismos puntos, en otras reclamaciones [núm. 19. 21, etc.]

2 Aun despues de la réplica, subsiste la observacion que al principio hice relativa a la propiedad de las mulas cuyo valor se reclama.

Quiero admitir que el memorialista señor Lomax sea efectivamente socio de Inglis, Lomax i C.^a, i que, a ese título, represente tambien a la Compañia salitrera reclamante *Santa Elena*; pero, nada de eso prueba el dominio de esta Compañia sobre aquellas mulas, las cuales parecen mas bien propiedad de los señores James, Inglis i C.^a, en representacion de los cuales no obra aquí el señor Lomax.

Sin aceptar como comprobante contra Chile la protesta anexa al memorial, hecha por el peruano señor Hernández el 2 de Junio de 1891, puede observarse que en la distribucion de animales que allí se hace, entre diversos propietarios i con referencia a determinadas oficinas salitreras, no hai partida que pueda relacionarse con la presente reclamacion si no es la siguiente: «cuarenta i nueve mulas de James, Inglis i C.^a, oficinas *San Jorge, San Pablo i Santa Elena*.» De aquí no puede deducirse el dominio de la sociedad reclamante sobre las 26 mulas cuyo valor se reclama.

Anexa al memorial se presentó tambien una protesta, hecha igualmente en Iquique el 20 de Agosto de 1891 por el memorialista señor Lomax «socio de la firma de James, Inglis i C.^a;» título que él mismo se da i que concurre a acreditar que las 25 mulas de que allí habla no eran ni de Inglis, Lomax i C.^a, ni de la Compañia *Santa Elena*, sino de James, Inglis i C.^a, una tercera entidad, que no ha reclamado ni por sí ni por mandatario.

En consecuencia, no apareciendo hecha la reclamacion por el lejítimo interesado, no sé yo cómo podria ser admitida por V. E.

3 Asi como no se ha acreditado el dominio de la *Santa Elena* sobre las referidas 25 o 26 mulas, tampoco se ha comprobado de ninguna manera la pérdida de ellas.

Las referidas protestas de 1891 no pueden al efecto servir de comprobantes contra Chile: la del memorialista señor Lomax, por la calidad de éste i por estar en contradiccion con el memorial mismo; la del señor Hernández, por tener éste interes en eximirse de responder por los animales que recibió a talaje o en administracion a virtud de contrato celebrado entre él i los dueños de esos animales, sin intervencion alguna de parte de los agentes de la autoridad; ambas, por ser declaraciones prestadas fuera de juicio, no juramentadas, sin conocimiento de mi parte, sin autorizacion de V. E.

En cuanto al precio de las mulas, el replicante lo supone tan variable como el de las casas, por ejemplo. Supone que entre individuos de una misma especie natural puede haber la misma diferencia de valor que entre objetos nacidos de la obra del hombre, de uno a un millon o mas. No discutiré este punto. i seguiré afirmando que cada mula de las comunes en Camarones dista muchí-

simo de tener el exajerado valor que se reclama. Sobre esto ofrezco reglamentariamente el testimonio de los testigos indicados con relacion al valor de mulas en la reclamacion No. 49 si bien creo inoficiosa toda prueba de hechos cuando la reclamacion carece en derecho de base para ser admitida.

Tratándose de mulas de Camarones i del papel de contratante de transportes que con dichas mulas, propias o ajenas, asumió el señor Hernández, poniéndose voluntariamente al servicio de uno de los belijerantes, segun se confiesa en la réplica de la citada reclamacion No. 49. me refiero a lo dicho por mi parte en esa misma reclamacion.

4 Supuesta la efectividad de la pérdida de las referidas mulas, cómo y cuándo se habría ella verificado? El memorialista ha sido bien poco esplicito acerca de las circunstancias del hecho, no obstante la prescripcion del artículo VII del Reglamento de Procedimientos.

Segun la referida protesta de 1891, hecha por el señor Lomax en Iquique, donde residia cuando tuvieron lugar los hechos fundamentales de la reclamacion, «diversas partidas de soldados del Gobierno de Chile penetraron á la hacienda del señor Fermin Hernández, en el valle de Camarones, i sacaron de allí cierto número de animales,» de los cuales 25 mulas eran de propiedad de la Compañía reclamante Santa Elena; pero, esa declaracion vaga y jeneral, basada solo en la protesta interesada del depositario señor Hernández, a la cual se refiere, no ha sido mantenida por el señor Lomax cuatro años mas tarde, cuando, bien impuesto ya de la verdad de las cosas, presentó la reclamacion. Con efecto, el memorial jurado, que es lo que vale i que no ha sido rectificado en la réplica, dice testualmente:

«La pérdida de las enjaldas y mulas en cuestion solo se puede atribuir al estado de desórden en que se encontraba la provincia de Tarapacá, debido á las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas del Congreso, por un lado i las del Gobierno. por el otro.»

Si bien por el memorialista se agrega incidentalmente que todo lo reclamado fué tomado para usos militares, esa frase descarnada, que no explica ni acredita cosa alguna, no desvirtúa la clara i pre-

cisa significacion del párrafo antes transcrito: siempre queda, como última espresion de la verdad, que la pérdida, si fué efectiva, no se debió a la accion mas o ménos directa de funcionarios públicos, capaces de comprometer la responsabilidad del Gobierno, sino que fué el resultado natural del estado de guerra i del desórden consiguiente, caso de fuerza mayor imputable solo a la fatalidad.

Se pretende dar al caso presente el carácter, que propiamente no le corresponde, de requisicion militar, sobre lo cual llamo la atencion de V. E. No se trata aquí de prestaciones exigidas a los particulares por las respectivas autoridades o jefes militares para el uso ó consumo del ejército: fuera de las 20 mulas a que se refiere el recibo anexo [sin valor legal] atribuido al señor Jullian, las otras no aparecen exigidas a nadie, ni empleadas en el servicio del ejército de la República. No veo de dónde podria derivarse una responsabilidad para aquélla. Si el señor Hernández u otros individuos desautorizados dispusieron de las mulas, el reclamante ha debido dirigirse contra ellos.

§ En el final de la réplica, firmada por no sé quién, se ratifica lo espuesto en el memorial i se agrega que la prueba que se rendirá oportunamente vendrá a poner en claro todo lo demás.

La oportunidad ha pasado. Si se trata de prueba documental, ha debido acompañarse al memorial, o siquiera a la réplica; si de prueba testimonial, debió ofrecerse en esas mismas presentaciones, con las indicaciones determinadas en los artículos I i X del Reglamento de Procedimientos, para evitar sorpresas. Despues de eso, habrá que aguardar la vista de la causa para ver si V. E. ordena alguna diligencia probatoria, lo que yo no espero: el reclamante no ha indicado ningun hecho preciso sobre el cual hubiera de recaer la prueba.

En conclusion, con lo espuesto aquí i en la contestacion, suplico a V. E. se sirva resolver como tengo pedido, negando lugar a la reclamacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Inglis, Lomax i C.^a, por la sociedad anónima *The Santa Elena Nitrate Company Limited*, reclama del Gobierno de Chile cuatrocientas setenta libras esterlinas diez chelines (£ 470.10.0), mas ciento cinco libras esterlinas catorce chelines un penique (£ 105.14.1) de intereses, por mulas i enjalmas tomadas.

En el memorial se dice que se tomaron de la oficina *Santa Elena*, para usos militares, ocho enjalmas estimadas en diez pesos (§ 10) cada una, lo que equivale a ochenta pesos (§ 80), i por las cuales se otorgó recibo; i que de la hacienda Camarones se sacaron, tambien con el mismo objeto, veintiseis mulas, de propiedad de la Compañía reclamante, cuyo valor asciende a cuatro mil seiscientos veinticinco pesos (§ 4,625), por las cuales no se otorgó recibo; que las dos partidas, sumadas, importan cuatro mil setecientos cinco pesos (§ 4,705) o su equivalente al cambio de veinticuatro peniques, a cuatrocientas setenta libras esterlinas diez chelines (£ 470.10.0), que es el valor reclamado, mas intereses desde el 7 de abril de 1891 al 31 de diciembre de 1894, a razon de seis por ciento anual, o sea ciento cinco libras esterlinas catorce chelines un penique [£ 105.14.1]; se agrega que la pérdida de las enjalmas i mulas en cuestion solo se puede atribuir al estado de desórden en que se encontraba la provincia de Tarapacá, debido a las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas del Congreso, por un lado, i por las del Gobierno por otro; que cuando se tomaron ocho enjalmas de la oficina *Santa Elena*, se llevaron tambien veinte mulas, devolviéndose éstas pero no aquéllas.

Se acompañan los siguientes documentos: copia de la protesta hecha por el memorialista ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique el 20 de Agosto de 1891; copia del poder de *The Santa Elena Company Limited*, a los ocurrentes, i recibo orijinal de don Gustavo Jullian, de 2 de Febrero de 1891, otorgado en la oficina *Santa Elena*, en que se da por recibido, por cuenta de la Intendencia de Tarapacá, de veinte mulas i ocho enjalmas que, para el caso de que no sean devueltas, la Intendencia pagará ciento cincuenta pesos (§ 150) por cada mula i diez pesos (§ 10) por cada enjalma.

El ajente de Chile, contestando la reclamacion, pide que el Tribunal se declare incompetente, pues se reclama a nombre de una Compañia anónima i, segun lo ha demostrado latamente en la reclamaciones números 4, 5, 7 i 12 i otras, no pueden presentarse ante el Tribunal las personas meramente jurídicas o ficticias; que la demanda no puede ser admitida, por cuanto el poder con que se ocurre es deficiente; que, ademas, el memorial no se ajusta a las formalidades reglamentarias, principalmente a las indicadas en los artículos VII i IX del respectivo Reglamento de Procedimientos; que las protestas anexas no prueban, ni pueden probar, cosa alguna en favor de la reclamacion; que mas bien ofrecen demostraciones en contra; que segun una i otra de esas protestas, las mulas i enjalmas, cuyo valor se reclama, pertenecian no a la Compañia reclamante *Santa Elena* sino a la casa *James, Inglis i C.^a*; que no ha reclamado; que segun la protesta del señor Lomax, las mulas que se supone fueron tomadas en Camarones, fueron veinticinco i no las veintiseis que cobra; que el precio de todas ellas se hace subir a cuatro mil seiscientos veinticinco pesos [\$ 4,625], lo que da para cada una un valor de ciento setenta i siete pesos ochenta i ocho centavos, (\$ 177.88), no reparando el reclamante en que el recibo acompañado por veinte mulas da a cada una de estas solo un valor de ciento cincuenta pesos [\$ 150], siendo que, por estar en servicio de la oficina, debian valer mas que las enviadas a reponerse a los lejanos potreros de Camarones; que en la reclamacion subsiguiente, núm. 25, enteramente análoga a esta, otro titulado socio de la casa *James, Inglis i C.^a*, aprecia cada mula de las de Camarones en ciento sesenta pesos [\$ 160]; que esta falta de fijeza prueba que todas esas cifras son antojadizamente exajeradas; que, segun la referida protesta del señor Lomax, un oficial de las fuerzas del Gobierno penetró al establecimiento de *Santa Elena* i sacó veinte mulas que fueron devueltas i ocho sillas de montar, que no lo fueron; que a ellas se refiere el recibo anexo, firmado con el nombre de Gustavo Jullian; que puede asegurar que éste no era oficial del Ejército, i que en todo caso no estaba autorizado debidamente para tomar mulas por cuenta de la Intendencia de Tarapacá, ni consta la autenticidad del recibo; que, en derecho, nada valen las afirmaciones sin

comprobacion i que el reclamante no ha comprobado ninguno de los hechos a que el memorial se refiere; que no dice, ni se sabe, quiénes tomaron dichas mulas i que en una parte dice el memorial que se tomaron para usos militares, i, en otra, que se perdieron, i que la pérdida solo puede atribuirse al desórden en que la provincia se encontraba a causa de las operaciones militares; que si las mulas se perdieron en el desórden, correspondia a sus dueños cuidarlas; i si se extraviaron a consecuencia natural de la guerra, seria el caso de fuerza mayor, que no impone responsabilidad al Gobierno de Chile, el cual nada ha sabido de todo lo que el reclamante cuenta; en conclusion, pide al Tribunal se sirva declararse incompetente para conocer de la reclamacion i, en subsidio, no dé lugar a su admision o la deseche en todas sus partes.

En la réplica se sostiene que el artículo V del Reglamento no es aplicable a sociedades anónimas i que los poderes con que se presenta el mandatario de la Compañia reclamante son suficientes, en derecho, i no adolecen de irregularidad alguna; que los otros defectos que se atribuyen al memorial no tienen tampoco razon de ser; que respecto a quien pertenecen las mulas, el hecho solo de que el memorialista, socio jector de la casa Inglis, Lomax i C.ª, no las reclama para su firma social sino para la Compañia *Santa Elena*, comprueba a quien pertenecen; que respecto a la diversidad de precios atribuidos a las mulas en distintas reclamaciones, ello no significa sino que las mulas, segun su clase i el lugar donde estaban, tienen distinto precio; que los argumentos con que se trata de desvirtuar la fuerza probatoria del recibo firmado por don Gustavo Jullian, pierden su valor si se toma en cuenta quien es don Gustavo Jullian, pues es bien sabido que dicho caballero jamas habria procedido sin órden superior; que respecto de los demas hechos que el ajente de Chile dice estar improbados, cuando llegue la época de prueba se justificaran plenamente.

En la dúplica se refutan las alegaciones de la réplica i se insiste en todo lo que se ha aducido en la contestacion.

La causa se recibió a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que el señor Federico Jorje Lomax, socio de la casa de comercio de Inglis, Lomax i Ca., tiene poder suficiente para

representar ante este Tribunal a la Sociedad reclamante *The Santa Elena Nitrate Company Limited*;

Considerando: que, por las razones enunciadas en la sentencia recaída en la reclamación número 4 (Robert Stirling) a nombre de la Sociedad inglesa *Anglo Chilean Nitrate and Railway Company, Limited*, este Tribunal es competente para conocer de las reclamaciones deducidas por la sociedad anónima reclamante;

Considerando: con respecto al primer capítulo de la demanda, que se ha comprobado que se practicó una requisición de veinte mulas i ocho aparejos el 2 de Febrero de 1891 en la *Oficina Santa Elena* de propiedad de la Compañía reclamante; que la sociedad reconoce que las veinte mulas le fueron devueltas; pero no los ocho aparejos, i que debe considerarse esta confesión como indivisible;

Considerando: que el recibo de la requisición fué otorgado por un señor Gustavo Jullian, que declaraba obrar en representación de la Intendencia de Tarapacá; que resulta de la prueba rendida por el agente del Gobierno de Chile, que el precitado Gustavo Jullian desempeñaba en aquella época las funciones de Inspector Fiscal de Salitreras, i que, por consiguiente, era empleado público;

Considerando: que no es necesario para que una requisición hecha en tiempo de guerra se considere regular, que ella se efectúe por un funcionario militar; que el ex-intendente de Tacna, en su esposición, declara haber alquilado en aquella época en diversas ocasiones, mulas para acarrear víveres a las oficinas salitreras; que esto deja comprender que un empleado civil, dependiente de un alto funcionario de su clase, haya podido, a virtud de órdenes recibidas, efectuar una requisición regular cuyo objetivo era procurar medios de acarreo para el ejército;

Considerando: por consiguiente, que esta requisición es regular i que el precio de diez pesos asignado a cada aparejo no es exajerado;

Considerando: con respecto al segundo capítulo de la reclamación, que la sociedad reclamante no ha justificado que una requisición de veintiseis mulas de su propiedad i que se encontraban, según dice, pastando en potreros del señor Francisco Hernández en el valle de Camarones, se hubiera efectuado para el servicio del

Ejército o del Gobierno; que el único documento producido para comprobar la exactitud del hecho, es una protesta otorgada por el precitado Hernández ante un notario público de Iquique en 2 de junio de 1891, en la cual declara que tenía en aquella época en su hacienda de Faltape, valle de Camarones, cierta cantidad de animales de tiro pertenecientes a diversas personas que se los habían enviado a talaje; que en distintas épocas las autoridades gubernamentales utilizaron algunos de estos animales para la movilización del Ejército, pero que fueron restituidos, i por último, que las mismas autoridades habían hecho sacar cuatrocientas veintiocho mulas i doce caballos, sin dar recibo, i sin que se hubieran devuelto;

Considerando: que esta declaración del señor Hernández no es suficiente para comprobar el hecho de una requisición regular; que el declarante no designa nominalmente a las autoridades que hubieran efectuado lo que espone i ni aun precisa la fecha en que se tomaron los animales; que a mayor abundamiento el señor Hernández tiene interés en descargarse de la responsabilidad que le afecta como depositario de dichos animales;

Considerando: que no hai justificativo alguno que compruebe que los recibos por mulas otorgados por las autoridades civiles i militares de que se ha hecho caudal en otras reclamaciones análogas, se refieran a las 26 mulas de que la sociedad reclamante se dice propietaria; que, por lo demás, no corre en autos ningun documento que compruebe que la espresada sociedad fuera dueña de una parte de las mulas que se encontraban en los potreros de Faltape, i que hubieran sido tomadas; que el único título invocado por ella para establecer su derecho de propiedad sobre los preindicados animales es una declaración del señor Fermin Hernández, i que la simple afirmación de un tercero no basta para probar el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesión de los animales, i que su declaración, si fuera admitida, daría por resultado el favorecer al pretendido propietario con una jurisdicción excepcional;

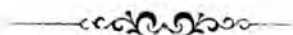
Considerando: que la sociedad reclamante, a pesar de haber solicitado un término de prueba, el que le fué concedido para comprobar los hechos en que funda su demanda, no practicó jestión alguna,

ni presentó ningun testigo que hiciera a ese propósito; que, por consiguiente, queda improbadada esta parte de la demanda.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral por mayoría de votos, disintiendo el árbitro de Chile en lo que respecta a la requisicion de los aparejos, i el árbitro británico, disintiendo, por su parte, en cuanto a la requisicion de las 26 mulas, condena al Gobierno de Chile a pagar a la sociedad reclamante, en los plazos i condiciones prescritas en el artículo VIII de la Convencion de 26 de setiembre de 1893, la cantidad de ochenta pesos, moneda corriente, mas intereses sobre esta suma a razon de 6 por ciento anual, devengados desde el 7 de abril de 1891 hasta el 31 de diciembre de 1894, i desecha los demas capítulos de la demanda. El árbitro de Chile, al suscribir la presente resolucion, reproduce la reserva contenida al final de los fallos 5 i 7 que se refiere a sociedades anónimas i su voto especial en el 8, en cuanto a la teoría de los requisitos que deben reunir las requisiciones.

Santiago, 14 de febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de febrero de 1896
—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 24

THE SAN PABLO NITRATE COMPANY LIMITED

MEMORIAL

El que suscribe Guillermo Shiell residente actualmente en Iquique, socio de la firma Inglis, Lomax i Compañía, comerciantes de Iquique i representantes legales i apoderados de *The San Pablo Nitrate Company Limited* registrada en Inglaterra; por la presente declaro con toda formalidad referente al reclamo contra el Gobierno de Chile, lo que sigue:

1 Residia en Iquique cuando tuvieron lugar los incidentes que originan este reclamo.

2 Soy súbdito británico natural de Edinburgo, Escocia, donde nací el año de mil ochocientos cincuenta i tres.

3 Ni yo ni ninguno de mis socios tomamos parte alguna directa o indirectamente en la guerra civil de mil ochocientos noventa i uno, ni tampoco servíamos o recibíamos pago de las partes beligerantes.

4 Los nombres de los socios de la firma Inglis, Lomax i Compañía son Jorje Martin Inglis, Federico Jorje Lomax i Guillermo Shiell, todos súbditos británicos.

5 Que ningun dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, el cual no ha sido presentado a ningun otro tribunal, pero fué entre-

gado hace algun tiempo al ministro de Su Majestad Británica en Santiago,

6 Los pormenores del reclamo son a saber:

Valor de los siguientes artículos tomados por fuerza, para las tropas al mando del coronel Robles.

6 mulas a \$ 160 cada una.	\$ 960.00
6 aparejos a \$ 50 cada uno.	300.00
61 kilos carne a \$ 1.80 kilo.	109.80
27 1/2 kilos azúcar a \$ 0.66 kilo	18.15
1 saquito sal	0.50
1 saco porotos 280 libras a 10 centavos libra. . .	28.00
1/2 barrica galletas	30.00
4 libras té a \$ 2 libra.	8.00
1 lata galletas finas	2.00
50 cajetillas cigarrillos.	10.00
30 latas sardinas	12.00
2 chupallas a \$ 1.50 cada una.	3.00
6 fardos pasto picado a \$ 9 cada uno.	54.00
2 bueyes a \$ 350 cada uno	700.00

\$ 2,235.45

Valor de once mulas llevadas por fuerza de la hacienda de don Fermin Hernández.

1,760.00

\$ 3,995.45

Al cambio de 24 d. por peso £ 399-10-11

Intereses desde el treinta de mayo de mil ochocientos noventa i uno al treinta i uno de diciembre de mil ochociento noventa i cuatro al 6% anual

£ 86-4-8

7 Todos los artículos reclamados fueron llevados por fuerza. Acompaño recibos firmados por los señores E. Kinast i Félix Vivanco, por las mercaderías tomadas de la oficina cuyo valor asciende a dos mil doscientos treinta i cinco pesos cuarenta i cinco centavos. Por las once mulas no se entregó recibo alguno.

Acompaño tambien los siguientes documentos.

A.—Copia de protesta hecha por el señor F. G. Lomax ante el cónsul de Su Majestad Británica en Iquique.

B.—Copia de protesta hecha por el señor Fermin Hernández ante el notario público señor Enrique Vergara referente a las mulas llevadas.

C.—Copia del poder de la Compañía Salitrera San Pablo que acredita la representacion de los mencionados Inglis, Lomax i Compañía.

GMO. SHIELL

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Don Guillermo Shiell se ha presentado reclamando la suma de £ 399-10-11 i sus respectivos intereses, como indemnizacion por el valor de mercaderías i animales vacunos i mulares pertenecientes a la sociedad anónima *The San Pablo Nitrate Company Limited*, que dice le fueron tomadas por la fuerza para las tropas del coronel Robles. Solicito de V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, que lleva el núm. 24, o bien rechazarla por falta de poder suficiente para deducirla, o por no estar comprobados los hechos en que se funda.

Lo mismo que respecto de otros memoriales anteriores, hago notar a V. E. que una sociedad anónima no puede ser considerada como un súbdito británico en el sentido jenuino de estas palabras. Un súbdito de S. M. B. debe ser una persona natural, i no una ficticia que solo existe en virtud de la lei i dentro del territorio en

que ésta rije. La Convencion de 26 de Setiembre de 1893 creó este alto Tribunal para oír reclamaciones de súbditos británicos, i no tuvo el propósito de favorecer meras entidades jurídicas que, si pueden ser formadas por ciudadanos ingleses, bien pueden serlo tambien por extranjeros, en favor de los cuales no tiene por qué intervenir la augusta Reina de la Gran Bretaña. Lo creó así mismo para indemnizar a los verdaderos perjudicados, i si se estendiese el sentido de la Convencion a las sociedades anónimas, se correria el riesgo de favorecer a accionistas que, por haberse incorporado últimamente en la sociedad, no han sufrido los daños que motivan la reclamacion. Suplico, por tanto, a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de este reclamacion.

2 El memorial no se ajusta a las disposiciones del Reglamento. No están consignados en él los datos exijidos por los artículos III, IV i VI, pues los incompletos que se aducen se refieren a la persona del mandatario, i no a la del mandante. Tampoco se ha prestado el juramento o declaracion solemne que preceptúa el artículo IX; i, por fin, no se hace relacion alguna de los hechos, i mucho ménos la esposicion detallada i clara que espresa el artículo VII.

Estas faltas hacen inadmisibile la reclamacion i autorizan a V. E. para rechazarla sin necesidad de otro motivo o antecedente; i así lo solicito respetuosamente.

3 El poder presentado por Shiell no lo autoriza sino para los actos ordinarios de los negocios de la Compañía. No se sabe, por consiguiente, si era voluntad de ésta deducir ante V. E. la reclamacion que nos ocupa. Para ello habria sido menester un poder especial o una cláusula espresa, que no se encuentra en el documento presentado. No consta tampoco en él la facultad de los otorgantes para conferirlo, ni la efectividad del título que se atribuyen. Ademas, no habiendo sido otorgado en castellano, falta el testo ingles, que no ha sido traducido oficialmente; i, por lo tanto, no puede prestarse a esa traduccion toda la fe que corresponde a un documento público.

Objeto, pues, la personería del señor Shiell i pido a V. E. se sirva declarar que no es bastante para considerarlo como parte en esta reclamacion.

4 Para acreditar el hecho de haberse apoderado las tropas del coronel Robles de las mercaderías i bueyes cuyo valor se reclama, se acompañan dos recibos, firmado uno por un señor Kinast, que se titula subdelegado de la Noria, i otro por don Félix Vivanco, cuyas funciones públicas no se indican. Respecto de la requisición de mulas no se presenta otro justificativo que una protesta hecha en Iquique por don Fermin Hernández, que se dice dueño de un fundo ubicado en Camarones, de donde dichos animales fueron sustraídos.

El recibo del señor Kinast manifiesta que los dos bueyes no han sido tomados por las fuerzas del coronel Robles. El señor Kinast se titula subdelegado, i este es en Chile un cargo político i administrativo, que nada tiene que ver con el servicio del ejército. Si este señor reconoce su firma, habrá acción personal contra él, mas no contra el Gobierno de Chile, que no ha conferido al señor Kinast facultad alguna para hacer requisiciones de guerra.

Don Félix Vivanco no indica tampoco ser un agente del coronel Robles o del Gobierno chileno. El reclamante no ha tenido a bien indicar el carácter que este señor Vivanco investía cuando se apoderó de las mercaderías a que se refiere el recibo firmado por él. El Gobierno de Chile puede responder de los actos de sus agentes, que han obrado conforme a sus instrucciones; pero no podría cargar con las consecuencias de actos llevados a cabo por personas desconocidas o a quienes él, o el jefe del ejército, no hubiera comisionado para ejecutarlos.

El silencio del memorialista i su falta de esplicaciones es causa de que este punto no quede dilucidado como debiera ser.

Escusado me parece manifestar que la protesta del señor Hernández no constituye prueba de ninguna especie, i ménos en los términos vagos en que está concebida, pues refiriéndose a esta Compañía i a otras en conjunto, se limita a decir que le fueron sustraídas «49 mulas de James, Inglis i C.^a, oficina *San Jorge, San Pablo i Santa Elena.*»

No puedo en ningún caso aceptar el precio en que el reclamante valora las mercaderías i los animales, porque salta a la vista su estremada exajeración. Las mulas, por ejemplo, han valido ordinaria-

mente cien pesos cada una, i en esa época estaban notablemente despreciadas. Los salitreros suelen enviar a Camarones aquellas que están fuera de servicio, i que en realidad casi no tienen precio, mientras no se reponen con un largo descanso i una sana i abundante alimentacion. Los bueyes llegan a valer doscientos pesos en tiempo de escasez i siendo de buena calidad.

§ El cobro de intereses es improcedente en derecho cuando se trata de una deuda ilíquida i aun incierta. Cuando la deuda es cierta i líquida no puede cobrarse a menos de que el deudor incurra en mora, ya por haberse excedido del plazo estipulado, ya por haber sido reconvenido judicialmente. Ninguna de estas circunstancias ocurre en el presente caso, por lo que el Gobierno de Chile, aun siendo condenado a pagar alguna indemnizacion, no podria ser obligado al pago de intereses.

Espero, pues, que V. E. se servirá aceptar las peticiones que dejo formuladas, rechazando en todo caso la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

REPLICA

El ajente de Chile pide en su contestacion que el Tribunal se declare incompetente para conocer de esta reclamacion o, en subsidio, que la rechace por falta de personería del señor Shiell, que la presenta como apoderado, o por no haberse producido prueba suficiente para justificarla.

1 Funda el ajente de Chile la excepcion de incompetencia del Tribunal en el hecho de que el reclamante sea una sociedad anónima, o lo que es lo mismo, una persona ficticia, i en que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 favorece solo a los súbditos británicos, carácter este último que pueden tener las personas naturales pero que no pueden tenerlo jamas las personas ficticias. Amplía este argumento diciendo que, si la Convencion fuera interpretada

de otro modo, se correria el riesgo de fovorecer a accionistas no ingleses o que no hubieran sufrido perjuicio alguno, por haber comprado sus acciones con posteridad a los hechos que motivan el reclamo.

Este argumento, que ha sido repetido por el ajente de Chile hasta el cansancio, lo hemos refutado en la réplica que presentamos en la reclamacion núm. 20 de la Compañia salitrera *Nueva Tamarugal*. I a la razon que hoi se agrega para robustecer ese argumento responderemos manifestando que ella es inaplicable al caso actual, por cuanto toda sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, axioma de derecho incorporado en el artículo 2,053 del Código Civil de Chile.

2 Se nos objeta tambien que el memorial no cumple con lo prescrito en los artículos III, IV i VI del Reglamento.

Con el artículo III i con el IV se cumplió en la forma prescrita por el artículo V para las sociedades anónimas, pues al decir que se reclamaba en nombre de la Compañia Salitrera *San Pablo*, registrada en Inglaterra, se espresaron todas las circunstancias que eran necesarias para identificar al reclamante i establecer su carácter neutral. El señor Shiell espresó respecto de su persona los datos que exige el Reglamento, por cuanto creyó que eso era lo que alli se exijia. El memorial se ajusta tambien a lo prescrito en los arts. VII i IX de las reglas, pues el reclamo i los documentos que lo acompañan constituyen una esposicion tan completa i detallada como era posible hacerla. El señor Shiell creyó al presentar su memorial i cree todavia que ha cumplido con lo prescrito en el artículo IX por haber jurado ante el cónsul ingles en Iquique la protesta que acompañó a su memorial.

3 El ajente de Chile objeta tambien la personeria del señor Shiell diciendo que el poder que ha exhibido no le confiere espresamente la facultad de presentarse ante este Tribunal; que el mismo poder no comprueba en el otorgante la facultad de otorgarlo ni tampoco el carácter que se atribuye i que la traduccion que de ese poder se acompaña al memorial no merece fe, por cuanto no ha sido hecha oficialmente.

Respecto a lo primero observaré que el Reglamento no exige

poder especial para presentarse ante V. E. Respecto a lo segundo me refiero a lo espuesto sobre esta materia en el párrafo B del núm. 2 de mi réplica en la reclamacion núm. 21 de la *Nitrate Provision Supply Co. Lled.* Respecto a lo último me limitaré a decir que el poder presentado se otorgó en Lóndres en idioma castellano i por consiguiente no existe el orijinal ingles a que el señor ajente de Chile se refiere.

4 No pudiendo mi contradictor desconocer la fuerza probatoria de los recibos firmados por los señores Eduardo Kinast i Félix Vivanco, se limita a desconocer el carácter público que invistian esos señores i a negar que los actos ejecutados por ellos obliguen al Gobierno de Chile.

Triste defensa es esta por cuanto es cosa bien sabida, i que se recuerda con toda exactitud, que don Eduardo Kinast desempeñó en 1891 en la provincia de Tarapacá un empleo político i militar de cierta importancia. En cuanto al carácter que invistiera don Félix Vivanco no nos ha sido posible todavia saberlo con exactitud, pero lo estamos averiguando i si llegamos a saberlo lo haremos presente cuando esta causa sea vista por el Tribunal.

El ajente de Chile cree que los precios asignados a los artículos que se quitaron a la Compañia es mui exajerado i se fija en el de \$ 160 que asignamos a cada mula i en el de \$ 350 que cobramos por cada buei, i dice que las primeras valen más o menos \$ 100 cada una i los segundo \$ 200 cada animal.

Al hacer estas observaciones, el ajente de Chile se olvida de que en Febrero de 1891 el precio de todos los artículos de consumo subió enormemente en Tarapacá a causa de la escasez producida por la incomunicacion de esa provincia con el resto del mundo. Este es un hecho tan natural i tan conocido que juzgamos inoficioso rendir prueba al respecto, pero la rendiremos si el Tribunal lo ordena.

5 En la contestacion se dice que el cobro de intereses es enteramente ilegal por cuanto el reclamo no se refiere a una deuda líquida i reconocida i porque en casos como éste no hai intereses sino desde que interviene reclamacion judicial.

Cierto es que estas son las reglas jenerales de derecho, pero no

es menos cierto que, atendiendo a la equidad natural, deben abonarse intereses en este caso en que el cobro se hizo hace ya mucho tiempo por conducto de la Legacion Británica en Santiago i en que la legitimidad del crédito quedó justificada desde el primer momento por medio de los recibos de los señores Kinast i Vivanco.

Con todos estos antecedentes espero que el Excmo. Tribunal se ha de servir aceptar esta reclamacion en todas sus partes.

MANUEL LECAROS

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El señor agente británico ha replicado en la reclamacion núm. 24 manteniendo en nombre de la sociedad *The San Pablo Nitrate Company Limited* el cobro de una indemnizacion ascendente a £ 485-14-19, por razon de requisiciones que asegura haber sido hechas durante la revolucion de 1891 para el servicio del Ejército que en Tarapacá sostenia el Gobierno del señor Balmaceda. Voi a responder por mi parte a ese escrito.

1 Sosteniendo la competencia del Tribunal para conocer de esta reclamacion apesar de ser el reclamante una sociedad anónima, el señor agente británico no hace sino referirse o lo que tiene espuesto en su réplica de la reclamacion núm. 20 acerca de la misma materia. Juzgando tambien el infrascrito que es inútil repetir la discusion de esta cuestion que estima suficientemente dilucidada, cree que basta dar por reproducidas en este lugar las razones que ha alegado en la misma reclamacion núm. 20 i en varias anteriores, para sostener que las sociedades anónimas no están comprendidas entre los súbditos británicos a que se refiere la Convencion de 26 de setiembre de 1893.

Se ha observado, sin embargo, que carece de valor el argumento fundado en que no ha podido entrar en el espíritu de la Convencion, ya que es evidente que no lo está en sus términos literales, el conceder a las sociedades anónimas el el derecho de ocurrir a este

Tribunal, por cuanto pueden los socios no ser súbditos ingleses o no haber sido ellos mismos los damnificados. Se dice al efecto que, segun los principios legales, la sociedad es una persona distinta de los socios individualmente considerados, i que por tanto no hai para qué preocuparse de si estos son o nó súbditos británicos o si eran o nó accionistas en la época en que se causaron los perjuicios, bas-tando solamente la constancia de que la sociedad reclamante sea inglesa.

El principio legal es exacto dentro de las teorías del Derecho civil interno de este país; pero no puede ser tomado en cuenta de igual modo cuando se ventila una cuestion internacional. Los gobiernos tienen el deber de amparar las personas i propiedades de sus súbditos radicados en país extranjero. Les conviene a un fomentar i amparar las asociaciones de súbditos que juntan sus capitales para emprender grandes negocios o especulaciones. Pero no se vé que clase de consideracion podria impulsarlo a amparar reclamaciones contra un Gobierno extranjero en favor de capitales tambien extranjeros, o a pedir indemnizaciones para personas distintas de las que han sido damnificadas.

Cuando un Gobierno ha querido llevar hasta este punto sus exigencias de reparacion, lo ha pactado espresamente como sucedió en el tratado Anglo-americano de 8 de Mayo de 1871 o en el Chileno-americano de 7 de Agosto de 1892. Por no haber sido comprendidas las sociedades o corporaciones en la Convencion de 4 de Enero de 1883, el Tribunal creado por esa Convencion resolvió, por su sentencia núm. 16, en favor de los reclamantes, que personalmente eran súbditos ingleses, la reclamacion núm. 14 presentada por una sociedad anónima peruana titulada *Compañía de Gas de Chorrillos*. No aplicó, por consiguiente, al caso, el principio de que la sociedad es una entidad distinta de los socios individualmente considerados. Al contrario, estableció que no tenia para que tomar en cuenta a la sociedad en sí, i se fijó solamente en que los socios que la componian eran súbditos británicos.

Esta parece ser tambien la opinion de V. E. desde que ha prescrito en el art. V del Reglamento que en todo memorial elevado por una sociedad que no sea anónima, se indique ademas de su

domicilio, el nombre de los socios i demas circunstancias prevenidas en los art. III i IV del mismo Reglamento. Si V. E. hubiese considerado a la sociedad como persona diversa de los socios, habria sido inútil consignar esta disposicion. Habria bastado que se espresase que la sociedad era inglesa i que sus administradores no habian puesto los intereses sociales al servicio de alguna de las partes contendientes. V. E. ha querido que se hiciese constar que los socios mismos eran súbditos británicos, que se habian mantenido neutrales en la contienda i que no habian recibido sueldo de alguno de los belijerantes.

Esto indica claramente que el Tribunal no ha pretendido dar a su propia jurisdiccion sino el alcance limitado que le señaló la Convencion del 93, i que no ha pensado en tomar en consideracion sino las reclamaciones elevadas por súbditos británicos, i no por entidades ficticias nacidas i mantenidas únicamente al amparo de la lejislacion inglesa.

2 Las deficiencias de que adolece el memorial son cohonestadas por el señor ajente británico fundándose en que no era posible suministrar respecto de una sociedad algunos de los datos prescritos por el Reglamento; en que los hechos han sido espuestos en el memorial con los detalles necesarios; i en que la protesta hecha ante el cónsul ingles en Iquique, que se acompaña por via de documento contiene la aseveracion juramentada de ser exactos los hechos espuestos en ella.

Sobre el primer punto, solo observaré, como en otras ocasiones, que las sociedades anónimas no están eximidas de cumplir las prescripciones reglamentarias sino únicamente por cuanto son inhábiles para comparecer ante este Tribunal.

Respecto del segundo, insisto en creer que no se han dado en el memorial las esplicaciones i detalles exigidos por el art. VIII del Reglamento. Así, no se precisa fecha alguna de los sucesos, ni se espresa cómo i para qué, ni en que circunstancias se verificaron las requisiciones que motivan la reclamacion. No se indica siquiera el nombre de los jefes que las ordenaran: en suma no se suministran ni los datos mas indispensables para formarse idea exacta de los hechos que permitan comprobar si son o nó verdaderos.

Por lo que hace al juramento, olvida mi honorable colega que lo que se manda abonar de esta manera, es el memorial mismo i no tal o cual pieza acompañada. El art. IX del Reglamento es espreso a este respecto, i cuando existe una disposicion tan clara, no es lícito darle una interpretacion abiertamente opuesta a lo que aparece de su tenor literal.

Mantengo, pues, mi peticion de que no se dé curso a esta reclamacion formulada en un memorial que no cumple con las condiciones señaladas en el Reglamento.

3 Respecto de la deficiencia del poder con que el señor Shiell dedujo esta reclamacion, mi honorable colega despues de referirse a lo que sobre el particular tiene dicho en la réplica de la que lleva el núm. 21, hace notar que el poder se estendió en Lóndres en idioma castellano. Por regla jeneral los instrumentos públicos se estienden en el idioma del pais en que funciona el notario autorizante. Si en Inglaterra existe alguna disposicion legal que faculte a los notarios ingleses para estender instrumentos en idioma extranjero, convendria que el señor agente británico la diera a conocer al Tribunal. De otra manera no se podria decir que el mandato ha sido otorgado en la forma establecida por la leislacion del pais, como es necesario que lo sea para que surta efecto, en virtud del conocido aforismo: *locus regit actum*.

4 El § 4.º de mi escrito de contestacion se contrae a manifestar el ningun mérito probatorio de los documentos privados que se han exhibido, a lo ménos mientras no sean reconocidos por las personas que los suscriben. Agregué todavia que, aun reconocidos, seria menester probar el carácter de funcionarios públicos autorizados para hacer las requisiciones, que se atribuye a los señores Kinast i Vivanco. Esto no ha obstado para que mi honorable colega manifieste que no me ha sido posible dejar de conocer la fuerza probatoria de los recibos acompañados; i para calificar como triste defensa la exigencia de mi parte para que se compruebe el título oficial con que aquellos señores procedieron a efectuar las requisiciones.

En cuanto a la primera aseveracion, me atengo a lo que consta de mis propias palabras, i por lo que hace a la segunda, solo diré

que tengo el derecho i el deber de pedir que a lo ménos se comprueben los hechos que sirven de base a las reclamaciones. Si es triste defensa la que eso exige, me será forzoso aceptar el calificativo; pero convencido estoi de que seria mucho mas triste aun el que por ahorrar a los reclamantes cortas dilijencias probatorias, tuviera que aceptar los infinitos cargos que se han formulado ante V. E. contra el Gobierno a quien tengo la honra de representar.

Piensa, así mismo, mi honorable colega que estoi en el caso de aceptar como equitativo el enorme precio que el reclamante señala a los animales que fueron objeto de las requisiciones. Por mi parte me creo tambien en el deber de exigir que se compruebe la equidad de la valorizacion. V. E. habrá de tomar en cuenta que se pretende cargar precios exajerados fundándose en que la guerra misma fué causa del alza de valor en muchas especies. Este verdadero negocio que en grande escala realizaron los damnificados por la guerra, compensa en gran parte los sacrificios que esta pudo imponerles. Aun puede asegurarse que para muchos extranjeros, la situacion bélica fué ocasion de ganancias considerables.

Pretender efectuarlas a costa del Gobierno de Chile, es algo que traspasa los límites de toda equidad i justicia.

Dejar de percibir una enorme ganancia puede equivaler a lo mas a un perjuicio indirecto; i estas no se abonan en reclamaciones como la actual. (Calvo, t. III § 1755; Fiore, t. III, § 1719; Whar-ton, t. 2, § 247.)

§ Sostiene el señor agente británico en la conclusion de su réplica que, aun cuando en derecho no habria razon para cobrar intereses, ellos se deberian en equidad por haberse pedido hace mucho tiempo el pago del capital i porque la deuda apareció justificada desde un principio con los recibos de los señores Kinast i Vivanco.

No puedo estar de acuerdo en este punto con mi honorable colega. El Tribunal ante quien debatimos esta cuestion es tribunal de derecho i no de equidad; i si fuera llamado a fallar conforme a equidad, seria mi parte i no él quien podria invocarla en su favor. No hai razon alguna para hacer mas gravoso al deudor el pago de

lo que debe, i lo equitativo en estos casos es interpretar la lei o el contrato, cuando uno u otro se prestan a duda, en favor del deudor.

Por lo demas, no se puede aseverar que el crédito que se cobra esté comprobado desde el primer momento. Los recibos exhibidos no constituyen prueba sino en las condiciones que ántes he manifestado; i la protesta del señor Hernández no forma prueba de ninguna especie. Así, pues, aun cuando se declarase la responsabilidad del Gobierno de Chile con respecto al capital que se cobra, no podría hacerse valer razon alguna de derecho o equidad para obligarlo a pagar intereses.

Suplico, en consecuencia, al Excmo. Tribunal que se sirva rechazar esta reclamacion en el caso de no dar lugar a las escepciones dilatorias que he deducido.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Guillermo Shiell, por la *San Pablo Nitrato Company Limited*, reclama del Gobierno de Chile tres mil novecientos noventa i cinco pesos cuarenta i cinco centavos (\$ 3,995 45), que al cambio de 24 peniques por peso equivalen a trescientas noventa i nueve libras esterlinas diez chelines once peniques (£ 399 10-11), mas intereses del seis por ciento anual que importan ochenta i seis libras esterlinas cuatro chelines ocho peniques (£ 86-4-8), por artículos tomados a viva fuerza.

El memorialista espone que una série de artículos, que enumera, agregando su valor, le fueron tomados de su oficina por fuerza a la Compañia reclamante para las tropas al mando del coronel Robles, por los cuales se otorgó recibo firmado por los señores Eduardo Kinast i Félix Vivanco; que asimismo le fueron llevadas por fuerza de la hacienda de Fermin Hernández once mulas, que pertenecian tambien a la Compañia demandante; que siendo el valor de los

artículos dos mil doscientos treinta i cinco pesos cuarenta i cinco centavos (§ 2,235 45) i el de las mulas mil setecientos sesenta pesos [§ 1,760], se reclama la suma de estas dos cantidades, o sea tres mil novecientos noventa i cinco pesos cuarenta i cinco centavos [§ 3,995 45], que al cambio de 24 peniques equivalen a trescientos noventa i nueve libras esterlinas diez chelines once peniques (£ 399 10-11), mas intereses del seis anual, devengados desde el 30 de mayo de 1891 hasta el 31 de diciembre de 1894.

Se acompaña, copia de protesta hecha por el señor F. G. Lomax ante el cónsul de S. M. B. en Iquique; copia de protesta hecha por el señor Fermin Hernández ante el notario público señor Enrique Vergara referente a las mulas llevadas; copia del poder de la Compañía salitrera *San Pablo* que acredita la representacion de los señores Inglis, Lomax i Compañía.

El agente de Chile, en su contestacion, pide que el Tribunal se declare incompetente, pues se reclama a nombre de una compañía anónima i la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 no les confiere a esa clase de sociedades la facultad de presentarse ante este Tribunal; que no se debe admitir la demanda, porque el memorial no se ajusta a lo prescrito en los artículos III, IV, VI, VII i IX del Reglamento; que objeta la personeria del memorialista por cuanto el poder presentado no es suficiente para considerarlo como parte en esta reclamacion; que la manera como se acreditan los hechos, materia de la reclamacion, es completamente ineficaz; que los recibos son firmados por personas que no tienen carácter militar i que tampoco justifican ellos el que se procediera de órden superior; que la protesta acompañada no constituye prueba de ninguna clase i que, ademas, está concebida en términos mui vagos; que el precio atribuido a los animales es en extremo exajerado; que el cobro de intereses es improcedente, en derecho, cuando se trata, como en este caso, de una deuda ilíquida e incierta, i que por los motivos precedentes solicita el rechazo de la reclamacion en todas sus partes.

En la réplica se afirma el derecho que tiene una sociedad anónima registrada en Inglaterra para presentarse ante este Tribunal; que se ha cumplido con todas las exigencias del Reglamento i que

el poder del memorialista es suficiente para constituirlo parte en esta reclamacion; que respecto a la fuerza probatoria de los recibos no cabe duda, desde que es notorio que don Eduardo Kinast, uno de los firmantes, desempeñó en 1891 en la provincia de Tarapacá un empleo político i militar de cierta importancia, i que en cuanto al carácter que invistiera don Félix Vivanco para autorizarle a firmar dicho recibo, se justificará en la época de prueba; que tambien se comprobará en ese tiempo el valor que se atribuye a los animales, que está mui léjos de ser exajerado; que respecto al cobro de intereses, es verdad que estas son las reglas jenerales de derecho, pero que en un caso como el presente, la equidad natural obliga los intereses desde que hace mucho tiempo se produjo el cobro por el conducto de la Legacion Británica en Santiago.

En la dúplica se mantienen la fuerza de las alegaciones hechas en la contestacion i se insiste en las peticiones allí deducidas.

Se acompañó posteriormente copia del decreto supremo que autoriza a la *San Pablo Nitrate Company Limited* para tener agentes en Chile; como asimismo certificado de la incorporacion legal de dicha Compañia en Inglaterra.

La causa se recibió a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que el señor Guillermo Shiell, socio de la casa de comercio Inglis, Lomax i C.^a tiene poder suficiente para representar ante este Tribunal a la sociedad reclamante *San Pablo Nitrate Company*;

Considerando: que, por las razones enunciadas en la sentencia recaida en la reclamacion núm. 4 (Robert Stirling, a nombre de la Sociedad Inglesa *Anglo Chilian Nitrate i Railway Company Ltd*), este Tribunal es competente para conocer de las reclamaciones deducidas por la sociedad anónima reclamante.

Considerando: con respecto al primer capítulo de la reclamacion, que se ha comprobado que se practicaron dos requisiciones diversas en 1.º i 2 de Marzo de 1891 en la oficina de *San Pablo* perteneciente a la Compañia reclamante por la division del coronel Eulio Robles; que la primera, que comprendió mulas, aparejos, bueyes, forraje i víveres. cuyo valor la sociedad estima en 2,235 pesos 45 centavos, está comprobada. En cuanto a la cantidad de las

especies entregadas por un recibo firmado por el señor Félix Vivanco que resulta de las declaraciones de testigos examinados por este Tribunal que el precitado Vivanco pertenecía en aquella época, con el grado de capitán o de sarjento-mayor, al ejército; que la division del coronel Robles, para cuyo servicio se hizo la requisicion, como lo indica el recibo, se encontraba entónces en la rejion donde se produjo aquélla; que una requisicion semejante hecha en tiempo de guerra, cuando las exigencias son urgentes i el ejército se encuentra en un territorio desprovisto, como lo es el de Tarapacá, está plenamente justificada i compromete la responsabilidad del Gobierno cuando el recibo por las especies entregadas está firmado por un oficial que tenga el grado de capitán o sarjento-mayor; que estas especies no fueron pagadas, puesto que se entregó recibo por ellas.

Considerando: que el segundo recibo, por dos bueyes para la division del coronel Robles está firmado por el señor A. Kinast, subdelegado interino de la *Noria*; que de ninguna manera es necesario para que una requisicion hecha en tiempo de guerra sea regular, que ella la efectúe un funcionario del ejército; que un empleado civil puede válidamente firmar recibos por artículos entregados a virtud de órdenes superiores para el abastecimiento del ejército.

Considerando: que la autencidad de las firmas, la calidad de las personas, i los hechos, estan, ademas comprobados por la informacion sumaria rendida en 22 de agosto de 1895 ante el juez de subdelegacion de la *Noria*;

Considerando: con respecto al valor de los artículos de la requisicion, que no puede tomarse por base el precio accidental que pudieran tener en aquel momento dado en razon de la interrupcion transitoria del tráfico con el puerto de Iquique entonces ocupado por el enemigo, sino el valor normal, comercial, en aquella rejion; que los precios cargados en cuenta son un tanto exajerados i que la sociedad reclamante quedaria perfectamente compensada con la suma de mil ochocientos treinta i cinco pesos cuarenta i cinco centavos [\$ 1,835 45] por las especies que entregó.

Considerando: en lo que concierne a la parte de la reclamacion

que se refiere a las once mulas tomadas que pertenecian a la sociedad i que se encontraban, segun se dice, en la hacienda del señor Fermin Hernández, en el valle de Camarones; que no se ha probado ni que las once mulas que el reclamante pretende le fueron tomadas a principios del año 1891 de orden de las autoridades gubernamentales, fuera de su esclusiva propiedad; ni que esta apropiacion fuera una verdadera requisicion militar; que el único título invocado por la sociedad reclamante para justificar su derecho de propiedad sobre los preindicados animales es una declaracion del señor Fermin Hernández, propietario de la hacienda «Faltape», valle de Camarones, i en la cual esos animales se encontraban a talaje con muchos otros en aquella época, i que la simple afirmacion de un tercero no basta para probar el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesion de los animales i tiene interés en descargar su propia responsabilidad de depositario, i que su declaracion, si ella fuera admitida, daria por resultado el favorecer al pretendido propietario con una jurisdiccion escepcional; que aun cuando los espresados animales hubieran pertenecido a la sociedad reclamante, ésta no ha comprobado que estaban ellos entre los que sirvieron para la movilizacion de las fuerzas i que causaron los recibos exhibidos por Hernández i firmados por Sofanor Parra, Arteaga Alemparte, David Puch, Luis Fuentes i el alférez Porta;

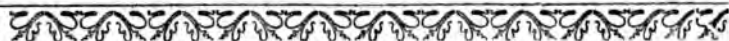
Considerando: en fin, que habiendo la sociedad reclamante obtenido del Tribunal un término para comprobar los hechos en que funda su demanda, no presentó ningun testigo ni practicó jestion alguna durante él;

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por mayoria de votos, disintiendo el árbitro de Chile en lo que respecta al primer capítulo de la demanda, i el árbitro británico, en lo que concierne al segundo, condena al Gobierno de Chile a pagar a la sociedad reclamante en los términos i condiciones prescritos en el artículo VIII de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 la cantidad de mil ochocientos treinta i cinco pesos cuarenta i cinco centavos (§ 1,835.45), moneda corriente de Chile, mas los intereses deven-gados por esta suma a razon del seis por ciento anual desde el 30 de Mayo de 1891 hasta el 31 de Diciembre de 1894, i no da lugar a

los demas puntos de la demanda. El arbitro de Chile, al suscribir la presente resolucion, reproduce la reserva contenida al final de los fallos 5 i 7, que se refiere a sociedades anónimas i su voto especial en la 8, en cuanto a la teoria sobre requisiciones.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Febrero de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 25

THE SAN JORGE NITRATE COMPANY LIMITED

MEMORIAL

El que suscribe Guillermo Shiell residente actualmente en Iquique socio de la firma Inglis, Lomax i Compañía, comerciantes de Iquique i representantes legales i apoderados de la compañía titulada *The San Jorge Nitrate Company Limited* registrada en Inglaterra; por la presente declaro con toda formalidad lo que sigue, referente al reclamo contra el Gobierno de Chile:

1 Residía en Iquique cuando tuvieron lugar los incidentes que orijinan este reclamo.

2 Soi súbdito británico natural de Edimburgo, Escocia, donde nació el año de mil ochocientos cincuenta i tres.

3 Ni yo ni ninguno de mis socios tomamos parte alguna directa o indirectamente en la guerra civil de mil ochocientos noventa i uno, ni tampoco servíamos o recibíamos pago de las partes beligerantes.

4 Los nombres de los socios de la firma Inglis, Lomax i Compañía son Jorge Martin Inglis, Federico Jorge Lomax i Guillermo Shiell todos súbditos británicos.

5 Que ningun dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, el

cual no ha sido presentado a ningun otro Tribunal, pero fué entregado hace algun tiempo al ministro de Su Majestad Británica en Santiago.

6 Los pormenores del reclamo son a saber:

Valor de 9 mulas a 160 c/u \$	1,440.00
» » 80 corderos a 16 c/u	1,280.00
25 juegos herrajes para mulas	25.00
6 lb. clavos para idem	5.40

\$	2,750.40
----	----------

Al cambio de 24 peniques por peso £	275-0-11
---	----------

Intereses desde el diez i ocho de Febrero de mil ochocientos noventa i uno al treinta i uno de Diciembre de mil ochocientos noventa i cuatro al 6% anual. £ 63-19-10

7 Todos los artículos reclamados fueron llevados por la fuerza.

8 El único recibo obtenido fué el del mayor Almarza por los ochenta corderos tomados por el coronel Soto.

Acompaño los siguientes documentos:

A. Recibo firmado por el mayor Almarza por ochenta corderos.

B. Copia de protesta hecha por el señor F. J. Lomax en Iquique ante el cónsul de Su Majestad Británica.

C. Copia de protesta hecha por el señor Fermin Hernández referente a las mulas llevadas de su hacienda.

D. Copia del poder de *The San Jorge Nitrate Company Limited* que acredita la representacion de los mencionados Inglis, Lomax i Compañía.

GMO. SHIELL.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion núm. 25, en la cual don Guillermo Shiell, a nombre de la *Compañía Salitrera San Jorge, Limitada*, demanda la suma de \$ 2,750.40, o sea £ 275-0-11, al cambio de 24 peniques por peso, mas £ 63-19-10 por intereses, valor atribuido a ciertos animales i herraduras que se dicen llevados por la fuerza.

1 A esta reclamacion cabe oponer las mismas excepciones i objeciones opuestas a la núm. 23, precedente, en que aparece de mandatario otro titulado socio de la misma casa Inglis, Lomax i Ca., reclamando en análogas condiciones.

Desde luego, cabe la excepcion de incompetencia de V. E., por no corresponder a la Compañía anónima reclamante el estado i carácter de neutral: si aquella no es chilena por tener en Chile su único establecimiento de explotacion i estar acogida a la lei chilena, seria inglesa, i en este carácter, careceria de existencia fuera de los dominios ingleses; en ningun caso seria súbdito ingles, términos que solo corresponden a personas naturales i no a las jurídicas.

2 El señor Shiell, que no ha probado su carácter de socio de la firma Inglis, Lomax i Ca., que se atribuye, tampoco ha probado que obra lejitimamente en representacion de la Compañía reclamante *San Jorge*.

El poder acompañado, que parece otorgado en Lóndres el dia 6 de marzo de 1894, no prueba ni el hecho de la constitucion o incorporacion de la Compañía, ni la lejitimidad de los títulos de administrador i secretario que se atribuyen los otorgantes, ni la facultad de éstos para conferir poderes por aquélla.

Segun la protesta anexa, que parece hecha por un señor Hernandez el 2 de junio de 1891, las mulas cuyo valor se reclama pertenecian a la firma James, Inglis i Ca. Lo mismo aparece de la otra protesta, tambien anexa, del mismo señor Shiell, hecha por éste como socio de dicha firma James, Inglis i Ca., la cual figuró allí

como propietaria de la oficina salitrera *San Jorge* i de todos los bienes cuyo valor se reclama.

Todas estas circunstancias hacen inadmisibile esta reclamacion por falta de personería del mandatario, señor Shiell.

3 A la misma inadmisibilidad ha de llegarse observando que el memorial no se ajusta a las formalidades reglamentarias.

El mandatario hace, con referencia a su persona, las declaraciones o indicaciones que el Reglamento de Procedimientos exige con referencia a la persona del reclamante mismo. Desde su residencia en Iquique, no pudo presenciar lo que pasaba en la pampa i en Camarones, i sin embargo, aparece como confirmando todos los hechos aseverados en el memorial con aquella vana fórmula de *juramentado ante mí*.

Así entiende cumplir la prescripcion del artículo IX del Reglamento, ya que se olvidó de la del artículo VII en términos de no esponer en el memorial ni siquiera cuándo, cómo i por quiénes fueron llevados los bienes cuyo valor se reclama.

4 Segun la citada protesta del señor Shiell, partidas de soldados sacaron de la hacienda del señor Hernández, en Camarones, diez mulas propiedad de James, Inglis i Ca., i de ellas devolvieron dos. De estas dos, una murió, i por esa tambien se cobra, a consecuencia del mal trato que recibió de los soldados de Chile. ¿Está comprendido esto tambien en el juramento aludido?

Por cada mula, viva o muerta, pide el señor Shiell \$ 160, i fija a cada peso el valor acomodaticio de 24 peniques, con mas intereses que no sé a qué mora corresponden. Sobre aquel precio, observaré que don Federico Jorge Lomax, titulado consocio del señor Shiell, presentó en la reclamacion núm. 2; un recibo en que se fijaba convencionalmente a cada mula el precio de \$ 150.

Segun el memorial, los ochenta corderos, cuyo fabuloso precio de \$ 16 cada uno, al cambio de 24 peniques, está comprendido en la reclamacion, fueron tomados por el coronel Soto, lo que tengo por inexacto. En comprobante, el señor Shiell acompaña un papelucho, de todo punto informal, con estas solas palabras, sin fecha i medio borradas: «Recibí de Manuel Pinto ochenta corderos para el coronel Soto.—(Firmado).—A. Almarza.»

Eso es todo. De las herraduras i clavos nada dice el memorial; i en cuanto a las circunstancias relacionadas con la supuesta pérdida, agrega estas descosidas palabras: «Todos los artículos reclamados fueron llevados por la fuerza.»

En resúmen, nada ha probado el reclamante, ni la propiedad de los bienes reclamados, ni la efectividad de la pérdida, ni la violencia de que se dice víctima, ni su cuantía, etc., etc., de modo que no habrá cómo hacer aceptable esta reclamacion.

Que en cuanto a la falta de esplicaciones i a la informalidad de éste i de la mayor parte de los memoriales, llego a considerarlas poco respetuosas del Excmo. Tribunal a quien se dirijen.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamación, i en subsidio, no dar lugar a su admision, o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

La contestacion del señor agente de Chile a esta reclamacion reproduce casi en totalidad las alegaciones hechas en el reclamo número 24 de la Compañía Salitrera *San Pablo*.

1 Se dice que la Compañía reclamante no puede presentarse ante este Tribunal porque una persona ficticia no puede tener el carácter de súbdito británico que exige la Convencion de 26 de setiembre de 1895. Sostengo que sí i para probarlo me limito a reproducir lo que espuse sobre esta materia en el reclamo número 20 de la Compañía Salitrera *Nueva Tamarugal*.

2 Se dice que el señor Shiell no ha probado su carácter de socio gestor de la sociedad de Inglis, Lomax i C.^{ta}, pero esto no es exacto, como lo comprueba la escritura de sociedad que presentó en la reclamacion número 19 de los mismos señores Inglis, Lomax i C.^{ta}.

Se nos objeta que el poder presentado por el señor Shiell no

prueba que la Compañía *San Jorge* esté legalmente incorporada, ni que las personas que confieren ese poder sean realmente el director i el secretario de esa Compañía, ni que tengan la facultad de otorgar ese poder. El hecho solo de haber sido otorgado basta para probar todo aquello, dadas las obligaciones que la lei inglesa impone a los notarios de Inglaterra. Por lo demas, me refiero a lo que sobre esta misma materia tengo espuesto en la réplica que presenté en la reclamacion número 21.

Se dice tambien que segun la protesta otorgada por don Fermin Hernández el 2 de junio de 1891, las mulas cuyo valor se reclama pertenecen a la sociedad de James, Inglis i C.^a Para convencerse de la inexactitud de este argumento, basta fijarse en que don Guillermo Shiell, que era socio de la firma James, Inglis i C.^a que es liquidador de ella, como se ha visto en la escritura de sociedad de Inglis, Lomax i C.^a i que es en el presente juicio, el mandatario de la Compañía reclamante, ha declarado que esas mulas pertenecen a esta sociedad i nó a la de James, Inglis i C.^a

3 Sostiene tambien el ajente de Chile que el memorial no se ha estendido en conformidad al Reglamento, porque el mandatario señor Shiell, da solo respecto de su persona los datos que se exigen respecto de la persona del reclamante i hace notar, que el señor Shiell, que residia en Iquique, asegura con juramento hechos ocurridos en las pampas salitreras i en Camarones. Para desvanecer el efecto de esta observacion, me limitaré a decir que los datos exigidos por el artículo III para establecer la identidad del reclamante no se exigen respecto de las sociedades anónimas en virtud de lo dispuesto por el artículo V i que el señor Shiell asegura los hechos ocurridos en la pampa i en Camarones tales como los ha sabido de fuente fidedigna.

Tambien se dice que el memorial no hace la esposicion completa i detallada que prescribe el artículo VII, ni está ratificado con el juramento prescrito por el artículo IX.

El memorial i los documentos que lo acompañan constituyen la esposicion mas completa i detallada que era posible hacer i el juramento, con que se hizo la protesta, importa el cumplimiento exacto de la prescripcion contenida en el artículo IX.

4 El ajente de Chile se manifiesta mui sorprendido de que se cobre el valor de una mula muerta a causa de malos tratamientos inferidos por los soldados del coronel Robles. Esto nada tiene de sorprendente porque el que hace un daño lo debe pagar i el Estado responde de los actos de sus soldados.

Tambien se nos enrostra que cobremos \$ 160 por cada mula, siendo que en el reclamo número 23 se ha presentado por el señor Lomax un recibo que las avalúa en \$ 150. A este respecto nos limitaremos a decir que no todas las mulas tienen un mismo precio, reproduciendo por lo demas lo que dijimos sobre esta materia en el número 4 de la réplica presentada en la reclamacion número 23.

Tambien el defensor de Chile se manifiesta mui sorprendido de los términos tan concisos en que está redactado el recibo suscrito por el mayor Almarza, por los 80 corderos tomados para la tropa del coronel Soto i por este motivo niega en absoluto el mérito legal de ese documento. Mi distinguido contradictor se olvida de que ese recibo no ha sido escrito por un abogado sino por un militar en activa campaña i que las circunstancias no le permitian acordarse en esos momentos ni de la literatura ni del derecho.

Por último, se dice, que el reclamante nada ha probado con relacion a su reclamo. Tenga un poco de paciencia el señor ajente de Chile que cuando llegue el momento de probar, entónces probaremos, pues no nos hemos olvidado de que cuando en otras reclamaciones el memorial, ha sido acompañado de pruebas, el ajente de Chile, las ha impugnado diciendo que se han rendido fuera de término i sin cumplir los demas requisitos del Reglamento.

En cuanto al cargo que se nos hace de falta de respeto al Tribunal, lo consideramos infundado i estamos seguros de que V. E. no le atribuirá valor alguno.

Con estos antecedentes espero que el Excmo. Tribunal aceptará esta reclamacion en todas sus partes.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

En la réplica del señor agente británico no he encontrado cosa alguna que adelante lo ya dicho en el memorial, enigmáticamente i bajo la fe de su palabra, por el señor Shiell.

Así en las cuestiones relativas al dominio i precio de los animales i objetos cuyo valor se reclama, a la personeria del memorialista i a las formalidades reglamentarias, como en lo que se refiere a la comprobacion de los hechos i a las consecuencias que de ellos pueden derivarse para la recta aplicacion del derecho, subsisten en todo su vigor las alegaciones deducidas por mi parte en la contestacion.

Unos u otros de aquellos puntos de forma o de fondo, de hecho o de derecho, han sido mas ampliamente dilucidados en las reclamaciones precedentes núms. 19 i siguientes hasta la presente número 25, en todas las que figuran como memorialistas o el señor Shiell o el señor Lomax, de la firma Inglis, Lomax i C.^ª, la cual en vano se pretendé confundir para estos casos con la de James, Inglis i C.^ª

A lo espuesto i alegado por parte de los reclamantes en una u otra de aquellas reclamaciones, se refiere en la actual el replicante. Lo mismo hago por mi parte, con razon tanta mas fundada cuanto que no toca a ella sino al reclamante probar fehacientemente la verdad de los hechos, lo que no ha verificado presentando documentos sérios i auténticos, ni ha ofrecido verificarlos por medio de testigos haciendo respecto a éstos las indicaciones previas prescritas en los artículos I i X del Reglamento de Procedimientos.

A semejanza del caso precedente número 23, el caso actual no tiene ni las apariencias de una requisicion militar. De nada aparece que los animales cuyo valor el señor Shiell cobra para la Compañía salitrera *San Jorge* hayan sido exigidos i recibidos para el uso i consumo del ejército i por orden i con autorizacion del comandante de la localidad, coronel Robles.

El recibo anexo al memorial sobre corderos no es regular ni reviste ningun carácter de seriedad, siendo desconocidos así el que

aparece entregando como el que aparece recibiendo, sin fecha ni designacion de lugar. Segun aquel titulado documento, los corderos se recibieron «para el coronel Soto;» segun el memorial, fueron «tomados por el coronel Soto»; segun la protesta del señor Lomax, anexa al memorial, fuerzas estacionadas en Huara i comandadas por el coronel Soto penetraron en el establecimiento *San Jorge* i exijieron la entrega, no de 80 corderos, sino de 80 ovejas, el dia 18 de *Febrero* de 1891. El señor Lomax habia talvez olvidado que el coronel Soto, al amanecer del dia 19, estaba, allá mui léjos, asaltando la aduana de Iquique en memorable combate!

Respecto a las mulas que se dicen tomadas en Camarones,—no se sabe cuándo ni por quiénes—todo descansa en la palabra del señor Hernández, que era el dueño o las debia a sus dueños, i que, autorizado o nó, negoció con ellas como contratista de trasportes de tropas, carácter que anteriormente le he atribuido i que se le reconoce en la réplica a la reclamacion núm. 49.

Cuando, para movilizar entre Arica i Tarapacá las fuerzas de los coroneles Arrate i Gana, a principios de 1891, se necesitaron mulas, las autoridades las tomaron a flete del señor Hernández, a quien dieron por ellas los correspondientes recibos para que despues se le pagara el precio convenido por el servicio, lo que se hizo por decretos de la Intendencia de Tacna. Asi está dicho i comprobado en la citada reclamacion núm. 49, concordante con los núms. 48, 51 i 52. Ahora, si efectivamente se hubieran tomado tambien las mulas cuyo valor, exajerado además, se cobra en la presente reclamacion i en la anterior núm. 23 ¿porqué no se presentan, como en aquellas, recibos que siempre se dieron? No se ha oído, a este respecto, explicacion satisfactoria.

En conclusion, con lo espuesto aquí i en la contestacion, suplico a V. E. que, teniendo ademas presente lo dicho i alegado por mi parte en las otras reclamaciones citadas, se sirva resolver como tengo pedido, negando lugar a esta reclamacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Guillermo Shiell, como socio de Inglis, Lomax i Compañia, representante de la *San Jorge Nitrate Company Limited*, reclama del Gobierno de Chile dos mil setecientos cincuenta pesos cuarenta centavos (2,750.40) que al cambio de 24 peniques equivalen a doscientas setenta libras esterlinas once peniques (£ 270-0-11), mas intereses del 6 por ciento anual, desde el 18 de Febrero de 1891 al 31 de Diciembre de 1894, que ascienden a sesenta i tres libras esterlinas diezinueve chelines diez peniques (£ 63-19-10), por animales i especies tomados a dicha oficina.

El memorialista espone que le fueron tomadas por la fuerza a sus mandantes nueve mulas, que estimadas en ciento sesenta pesos cada una, importan mil cuatrocientos cuarenta pesos (1,440); ochenta corderos a dieziseis pesos cada uno, que son mil doscientos ochenta pesos (1,280); veinticinco juegos herrajes para mulas, que valen veinticinco pesos (§ 25); seis libras de clavos para id., cuyo valor es cinco pesos cuarenta centavos (§ 5.40); partidas que sumadas dan la cantidad de dos mil setecientos cincuenta pesos cuarenta centavos [§ 2,750.40]; que el único recibo que se obtuvo fué uno firmado por el mayor Almarza por los ochenta corderos que se tomaron para el coronel Soto.

Acompáñanse a la demanda, recibo escrito con lapiz firmado por el mayor Almarza por ochenta corderos, copia de protesta hecha por el señor F. G. Lomax en Iquique, ante el cónsul de S. M. B. copia de protesta hecha por el señor Fermin Hernández referente a las mulas llevadas de su hacienda, copia del poder de la *San Jorge Nitrate Company Limited* conferido a Inglis, Lomax i Compañia.

El agente del Gobierno de Chile, en la contestacion, dice que opone a la demanda las mismas excepciones i objeciones que dedujo en contra de la reclamacion número 23, en que aparece como mandatario otro que se dice socio de la misma casa Inglis, Lomax i Compañia i que reclama en condiciones análogas, a saber: incompetencia del Tribunal por ser el reclamante compañía anónima; insufi-

ciencia del poder del memorialista i que, por consiguiente, carece éste de personería para presentarse a nombre de la Compañía reclamante; inadmisibilidad del memorial por no ajustarse a las prescripciones del Reglamento; que el reclamante no ha probado ni la propiedad de los bienes reclamados, ni la efectividad de la pérdida, ni la violencia de que se dice víctima, ni su cuantía; que el memorial ni siquiera explica los hechos; que el papelucho que se acompaña como recibo por los ochenta corderos es de todo punto informal i que, por consiguiente, en subsidio debe el Tribunal desechar la reclamacion en todas sus partes.

En la réplica se espresa que las sociedades anónimas tienen derecho para ocurrir ante este Tribunal como ya se ha probado en otras reclamaciones; que la personería del memorialista está por demas justificada, i que si hai algun hecho que necesita comprobarse mas aún, él será cumplidamente justificado en el término de prueba, única época en que cabe hacerlo.

En la dúplica se insiste en lo espuesto en la contestacion i se agrega que el hecho, aun cuando fuera cierto de que un señor Almarza recibió ochenta corderos, no implica que fuera un acto militar i que no debe olvidarse que el coronel Soto, para quien se dice se tomaron el dia 18 de febrero, estaba en ese momento mui léjos del sitio donde se pretende se entregaron los corderos, pues el 19 de febrero al amanecer [como es notorio] estaba ese jefe asaltando la Aduana de Iquique.

Se acompañaron posteriormente los estatutos de la Compañía anónima *The San Jorge Nitrate Company Limited*, una copia de una parte del libro diario de la *San Jorge* i seis declaraciones simples en papel de la *San Jorge*.

Se recibió la causa a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que el señor Guillermo Shiell, socio de la casa de comercio Inglis Lomax i C.^a, tiene poderes suficiente para representar ante este Tribunal a la sociedad reclamante *The San Jorge Nitrate Company Limited*;

Considerando: que por las razones enunciadas en la sentencia recaida en la reclamacion número 4 (Robert Stirling, a nombre de la sociedad inglesa *Anglo-chilian Nitrate and Railway Company Li-*

miled), este tribunal es competente para conocer de las reclamaciones deducidas por la Sociedad anónima reclamante;

Considerando: en lo que concierne a la pretendida entrega al ejército del coronel Soto, de ochenta ovejas, veinticinco juegos de herraduras para mulas i seis libras de clavos; que la sociedad reclamante se limita a acompañar un papel en el que hai dos líneas escritas con lápiz i en las cuales un señor Almarza declara haber recibido ochenta ovejas del señor Manuel Pinto, para el coronel Soto; que se ignora el grado que tenia el señor Almarza i que se ignora tambien si Manuel Pinto era ajente de la sociedad; que el otorgamiento aun, en condiciones, de un recibo a un dependiente como justificativo de la entrega de los artículos, no prueba que estos no hubieran sido pagados; que ningun documento comprueba la entrega de los veinticinco juegos de herraduras para mulas ni las seis libras de clavos;

Considerando: que habiéndole concedido el Tribunal a la Sociedad reclamante un término para probar los hechos en que se funda la demanda, ella no presentó testigo alguno ni lo inutilizó de ninguna manera;

Considerando: en lo que concierne a la parte de la reclamacion que se refiere a las nueve mulas tomadas que pertenecian a la Sociedad i que se encontraban, segun se dice, en la hacienda del señor Fermin Hernández, en el valle de Camarones, que no se ha probado ni que las nueve mulas que el reclamante pretende, le fueron tomadas a principios del año 1891 de orden de las autoridades gubernamentales, fuera de su exclusiva propiedad, ni que ésta apropiacion fuera una verdadera requisicion militar; que el único título invocado por la Sociedad reclamante para justificar su derecho de propiedad sobre los preindicados animales es una declaracion del señor Fermin Hernández, propietario de la hacienda «Faltape», valle de Camarones, i en la cual esos animales se encontraban a talaje con muchos otros en aquella época i que la simple afirmacion de un tercero no basta para probar el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesion de los animales i tiene interes en descargar su propia responsabilidad de depositario, i que su declaracion, si fuera admitida, daria por resultado el

favorecer al pretendido propietario con una jurisdiccion escepcional; que aun cuando los espresados animales hubieran pertenecido a la Sociedad reclamante, ésta no ha comprobado que estaban ellos entre los que sirvieron para la movilizacion de las fuerzas i que causaron los recibos exhibidos por Hernández i firmados por Sofanor Parra, Arteaga Alemparte, David Puch, Luis Fuentes i el alférez Porta:

Considerando: en fin, que habiendo la Sociedad reclamante obtenido del Tribunal un término para comprobar los hechos en que funda su demanda, no presentó ningun testigo ni practicó jestion alguna durante él.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion. El árbitro de Chile, al suscribir esta reclamacion, reproduce la reserva contenida al final de los fallos 5 i 7.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Febrero de 1896.
—Diego Armstrong, secretario.



RECLAMACION N.º 26

GUILLERMO PATTERSON ROBERTSON

MEMORIAL

Yo, Guillermo Patterson Robertson, súbdito británico nacido en Dundee, en el condado de Forfar, en esa parte de las Islas Británicas llamada Escocia, el 8 de Enero de 1854, residente actualmente en Iquique, provincia de Tarapacá, en la República de Chile, bien nacido declaro bajo juramento lo siguiente:

1.º Que estaba presente en la antedicha ciudad de Iquique el 19 de Febrero último i me acuerdo de los sucesos de ese día, los cuales, segun mis recuerdos i creencia, fueron como sigue:

En la fecha indicada Chile estaba en estado de guerra civil, i la mencionada ciudad de Iquique estaba ocupada por las tropas del partido revolucionario, o como se las llama, del partido constitucional los que tenían tambien en la bahía de Iquique la flota de buques de guerra siguientes: *Blanco Encalada* (buque de la insignia), *Esmeralda*, *Abtao*, *O'Higgins*, *Huáscar* i *Magallanes*.—Un poco ántes de las seis de la mañana del día 19 de Febrero, las tropas del Gobierno, o, como se las llama, las tropas del partido presidencial, en número de menos de 300 hombres entraron a la dicha ciudad de Iquique i avanzaron hasta la plaza principal, i allí

tuvo lugar una batalla sangrienta entre las tropas de los ántes mencionados partidos, i poco despues la citada flota de buques abrió el fuego sobre la dicha ciudad de Iquique i continuó bombardeando la ciudad con bala i metralla hasta las cuatro i media de la tarde, hora en que se ajustó una tregua entre las partes combatientes. Se hallaban presentes en la bahía de Iquique i testigos del hecho, los buques de guerra de Su Majestad *Warspile* i *Pheasant*. A eso de las dos i media de dicho día de la batalla i bombardeo i a consecuencia de ello, se declaró simultáneamente en varios lugares un incendio que causó la total destruccion de varias grandes manzanas de edificios i la destruccion parcial i daños de otras. Las propiedades así destruidas pertenecian, casi en su totalidad a súbditos estranjeros, i de estos la mayor parte súbditos de Su Majestad.—Habiendo comenzado el incendio de la manera relatada anteriormente, tomó rápidamente cuerpo i en poco tiempo alcanzó a la manzana de edificios en que estaba el Hotel en que yo ocupaba un departamento (segun se declara mas adelante).— El incendio tuvo lugar en medio de la batalla i de los combatientes luchando por posesionarse del sitio devastado por el fuego. El incendio no pudo contenerse, ni pudo intentarse salvar cosa alguna a causa de que el combate tenía lugar en las calles inmediatamente vecinas.

2.º Que al tiempo de comenzar el combate i bombardeo de que se ha hecho mencion, ocupaba yo un departamento en el *Hotel Ingles*, situado en la esquina de la calle de *Luis Uribe*, i «*Bolívar*» en Iquique i poseía los artículos i bienes muebles descritos detalladamente en el inventario o escrito que se acompaña marcado con la letra A, i que se encontraban todos esos artículos i bienes muebles en mi citado departamento al comenzar la mencionada batalla i bombardeo.

3.º Que inmediatamente despues de dicha batalla i bombardeo i concluido el incendio visité el local de dicho hotel i encontré que el edificio con su contenido habia sido totalmente destruido por el citado incendio.

4.º Que a causa del incendio que fué consecuencia de la batalla i bombardeo ya citados, declaro que perdí todos los artículos i bienes muebles detalladamente descritos en el inventario que se

acompaña marcado con la letra A, i que las cantidades colocadas al frente de los respectivos artículos i bienes muebles son en dicho inventario la estimacion verdadera de sus respectivos valores.

5.º Que por las razones espuestas he sufrido pérdidas que suman *Doscientas cuarenta i una libras esterlinas, diez chelines (£241.10.0)* por la cual reclamo.

6.º Que no he tomado parte directa ni indirectamente en dicha guerra civil de Chile.

7.º Que no he recibido compensacion alguna por mis citadas pérdidas, de ninguna de las partes combatientes en dicha guerra civil.

8.º Que no he transferido mi antedicho reclamo ni parte alguna de él.

W. P. ROBERTSON

Jurada en Iquique en la provincia de Tarapacá, hoi 29 de Septiembre de 1891.

Ante mí (firmó):

H. W. MORRISON
Cónsul de S. M. B.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile, contestando la reclamacion número 26 presentada a nombre de don Guillermo Patterson Robertson, tiene el honor de esponer lo siguiente:

1 El memorial presentado no se ajusta a las prescripciones del Reglamento, No se espresa en él si el reclamante estuvo al servicio de alguno de los combatientes o si recibió sueldo de alguno de ellos, no se dice si se ha presentado esta reclamacion ante otro tribunal; ni los hechos espuestos estan abonados con el juramento o declaracion solemne que indica el artículo IX. Ni siquiera lleva al

pié la firma del reclamante o de su mandatario. Es cierto que en la copia manuscrita aparece una firma que puede ser la del señor Robertson; pero el Reglamento manda que el memorial se presente impreso; i por consiguiente ese debe ser el que contenga la firma del suplicante.

Estas irregularidades bastan, a juicio del que suscribe, para desechár la reclamacion por no haber sido entablada con las formalidades que prescribe el Reglamento.

2 No se ha presentado antecedente alguno para comprobar la nacionalidad del reclamante. Llamado V. E. a conocer de las reclamaciones de súbditos británicos, debe comenzarse por acreditar que el reclamante lo es realmente, sin que su sola palabra pueda bastar para ello. Así lo ha determinado la Convencion de 26 de setiembre de 1893 cuando ha dispuesto en su artículo 3.º que el tribunal dé acogida a los medios probatorios que tiendan a establecer, entre otras cosas, el estado del reclamante. V. E. mismo ha dispuesto en el artículo 4.º del Reglamento que se consignen en el memorial los datos necesarios para obtener ese objeto, a fin sin duda, de asegurarse desde un principio de que el tribunal no carece de la competencia necesaria para conocer de la reclamacion. Tribunales análogos al presente se han declarado de oficio incompetentes para conocer de reclamaciones entabladas por individuos que no habian cuidado de comprobar su nacionalidad. En el caso presente, i por el motivo indicado, espero que V. E. se ha de servir declararse incompetente para conocer de la presente reclamacion.

3 Como ni el señor Juan Blair ni don Ernesto Hübner suscriben la peticion del señor Robertson, no tengo para que tomar en cuenta el poder que se ha presentado con el propósito de dar personería al segundo de los nombrados para llevar adelante las jestionnes de esta reclamacion. A mi juicio, ese poder es insuficiente para tal objeto, i me reservo para hacerlo presente en el caso de que se trate de hacer uso de él mas adelante.

4 El señor Robertson procura comprobar los hechos que afirma en el memorial, por medio de la declaracion de dos testigos que, afirmándolos por su parte, establecen que, a su juicio, el valor de

los objetos que el reclamante dice haber perdido a consecuencia del combate de 19 de febrero de 1891, está estimado de un modo razonable i justo. No acepto estas declaraciones porque ellas proceden *ex parte*, habiendo sido presentadas sin mi citacion, fuera del juicio i ante funcionario no autorizado para ese objeto. Además, uno de los testigos, el señor Donald Mac-Queen ha presentado la reclamacion número 50, fundada en motivos iguales a la presente; i es incuestionable su interes de que la sentencia que se dicte en la presente favorezca las pretensiones del señor Robertson que son las mismas que él mismo ha formulado.

5 Mirada esta reclamacion bajo el punto de vista del puro derecho, ella es absolutamente inaceptable ante los principios del Derecho Internacional. Todos los tratadistas reconocen en los pueblos i en los gobiernos el derecho de hacer la guerra; i hasta ahora nadie ha puesto en duda la lejitimidad de la que se declaró en Chile en 1891. Llevada a efecto, los dos partidos contendientes podian ejecutar todas las operaciones militares que eran indispensables para la consecucion de sus propósitos, siempre que fuesen observadas las reglas del Derecho Internacional que se denominan leyes de la guerra.

En el caso de que se trata, es sabido que el 19 de febrero de 1891, se libró un combate en la ciudad de Iquique, el cual no tuvo otro objeto que obtener la posesion de aquel puerto, llave de la provincia de Tarapacá i principal fuente de recursos para la República de Chile. La posesion de Iquique importaba casi la seguridad del éxito final de la guerra, como los hechos lo demostraron posteriormente. Era pues una operacion lejitima de guerra el intentar apoderarse de esa ciudad, i ella se llevó a cabo sin violacion alguna de las leyes de la guerra.

Las pérdidas sufridas a consencia del combate, por los chilenos que tomaban parte en la contienda i por los extranjeros residentes en la ciudad no son imputables al Gobierno de Chile, que hizo uso de su derecho. *Qui id facit quod jure permittitur injuriam facere non censetur.*

Los extranjeros como los nacionales deben soportar las pérdidas que ocasiona una operacion militar necesaria para el éxito de la

guerra como se soportan las desgracias causadas por una plaga natural, por un incendio casual, por un terremoto de tierra.

Tal es la doctrina unánime de los tratadistas del Derecho Internacional. Habiendo citado *in extenso* en reclamaciones anteriores los términos en que se espresan algunas de las mas notables acerca de esta cuestion, me limitaré ahora a llamar la atencion a lo que esponen Bluntschli, en los artículos 652 i 662 de su *Derecho Internacional Codificado*; i Fiore en el tomo 3.^o § 1714 i siguientes de su *Nuevo Derecho Internacional* i en el artículo 1336 del *Derecho Internacional Codificado*.

Basta con lo espuesto para solicitar de V. E., como lo hago, el rechazo de la presente reclamacion, si es que V. E. llega a resolver que es competente para conocer de ella.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Estando destinada la réplica a discutir las aseveraciones de hecho i de derecho consignadas en la contestacion entraré a ocuparme rápidamente de ésta.

1 Se dice, por parte del señor agente de Chile, que el memorial no es admisible porque el reclamante no manifiesta si estuvo al servicio de alguna de las partes contendientes, si recibió pago de alguna de ellas o si ha presentado su reclamo a otro tribunal, i agrega, que se ha omitido el juramento prescrito por el art. IX.

Las dos primeras indicaciones no son necesarias segun el artículo IV del Reglamento, porque el reclamante manifestó en su memorial que no habia tomado parte directa ni indirecta en la guerra civil de 1891.

El memorial hace comprender con bastante claridad que este

reclamo no habia sido presentado anteriormente a ningun otro Tribunal, como yo lo afirmo terminantemente ahora para no dejar lugar a dudas sobre el particular. El hecho de haberse jurado la protesta ante el señor cónsul de S. M. B. en Iquique, importa el cumplimiento anticipado del precepto contenido en el artículo IX: Es verdad tambien que el memorial no está firmado, pero el Reglamento no exige la firma; está firmada la copia manuscrita i ahora presento un ejemplar de la protesta, firmado por don Juan Blair, ante el cónsul ingles en Iquique.

2 Hasta ahora no nos ha sido posible encontrar documentos que justifiquen la nacionalidad británica del señor Robertson, pero los presentaremos en debida forma el dia que el Tribunal se ocupe de este reclamo.

3 Como el señor Blair ha firmado la protesta acompañada i como el señor Hübner no ha hecho uso del poder que se le habia conferido, no tengo para que ocuparme de las alegaciones que el contendor hace a ese respecto.

4 Las declaraciones que se presentaron con el memorial fueron exhibidas, cumpliendo con lo prescrito en el art. I del Reglamento. Si el Tribunal cree necesaria la prueba testimonial, los caballeros que firman esas declaraciones, las ratificarán con todas las solemnidades que prescriba el Reglamento i el agente de Chile podrá contra-interrogar i entónces se verá si la declaracion del señor Donald Mc. Queen, es digna o indigna de fé.

El señor agente de Chile pide se rechace el reclamo, fundándose en que el combate i bombardeo de Iquique del 19 de Febrero de 1891 fué un acto lejítimo de guerra que no produce responsabilidad alguna en contra del Gobierno de Chile, i apoya esta afirmacion en la opinion unánime de los tratadistas del Derecho Internacional.

La afirmacion del señor agente chileno no es del todo exacta; pues, hai muchos autores que aceptan la indemnizacion como un deber de equidad i Gobiernos hai que en casos análogos la han pagado.

I este deber de equidad se convierte en un deber de justicia respecto de los daños causados por el bombardeo de Iquique, por cuanto este no fué debidamente notificado i esta omision importa

una infraccion de los preceptos del Derecho Internacional moderno.

Con estos antecedentes ruego a V. E. de aceptar en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. señor:

El señor ajente británico, insistiendo en la reclamacion núm. 26 que se ha iniciado en nombre de don Guillermo Patterson Robertson, ha presentado el correspondiente escrito de réplica, al cual me propongo responder brevemente en la presente dúplica.

1 Cree mi honorable colega que no son justificadas las observaciones que hice en mi contestacion con respecto a las informalidades del memorial, porque el art. IV del Reglamento autoriza a su juicio para dar cumplimiento a las prescripciones de los arts. II i siguientes en una pieza distinta del memorial mismo; porque ahora asevera que la actual reclamacion no ha sido presentada ántes a ningun otro tribunal; i porque el juramento de ser exactos los hechos espuestos se prestó ante el cónsul ingles en Iquique al formular la protesta acompañada, en 21 de Setiembre de 1891.

Opino por mi parte en sentido mui diverso del que manifiesta el señor ajente británico. Creo que el Reglamento debe cumplirse a la letra, i no hacerlo objeto de interpretaciones arbitrarias en materias en que se espresa con la mas perfecta claridad sin dar lugar a duda. El ordena que sea el memorial en que se interpone el reclamo, el que contenga las indicaciones que espresan los arts. II i siguientes, i en ninguna parte autoriza para consignar dichas indicaciones o prestar el juramento en piezas diversas anteriores o posteriores al memorial. Si éste no está ajustado a las disposiciones del Reglamento i ni siquiera firmado, le faltan las condiciones indispensables para considerarlo como un verdadero memorial, i en rigor debe considerarse la reclamacion como no interpuesta. De aquí proviene

que insista yo en pedir al Tribunal que no dé curso a la presente reclamacion.

2 Insisto igualmente en mantener la excepcion de incompetencia del Tribunal mientras el reclamante no acredite de una manera fehaciente i por los medios que el Derecho establece, su carácter de súbdito británico.

3 En la contestacion no pude hacerme cargo de la personeria del señor Blair para representar al reclamante, porque el memorial no venia firmado por persona alguna. Como el señor Blair pretende hacer valer en este juicio el poder que le confirió el señor Patterson Robertson, es llegado el caso de manifestar a V. E. que no consta de dicho poder la facultad o encargo de presentar esta reclamacion. A mi juicio, un poder de simple administracion, aunque autorice al mandatario para ocurrir a los tribunales de justicia, no basta para comparecer ante V. E. que constituye un tribunal especial i de arbitraje internacional. Creo, en consecuencia, que el señor Blair carece de suficiente personeria, i pido que así se declare.

4 En cuanto a la verdad de los hechos en que se funda la reclamacion, forzoso será atenerse al resultado de la prueba que se rinda. He insinuado ya que no es aceptable el testimonio de personas que hayan presentado reclamaciones análogas a aquella sobre la cual van a declarar. Es evidente que un testigo de esta clase debe tener vivo interes en el éxito de la reclamacion, i que su deposicion no podrá ser considerada como imparcial. El señor Mac. Queen, a quien se cita como testigo i que ya ha declarado ante el cónsul ingles de Iquique en favor del señor Robertson, ha invocado a su vez en la reclamacion número 50, el testimonio de este último, de manera que estos caballeros consideran natural i corriente prestarse este mutuó servicio. Yo aguardo de la justificacion de V. E. que se ha de servir desechar un medio probatorio tan irregular i contrario al derecho. Llamo la atencion del Tribunal a la circunstancia de que el señor Robertson, segun él lo espone, estaba hospedado en el Hotel Ingles, i por consiguiente todo el monto de su reclamacion es estimado como el precio de su ropa i de algunos objetos manuales.

5 Mi honorable colega cree que, si no es un deber de justicia, lo es al menos de equidad reparar las pérdidas sufridas a consecuencia de la guerra. Piensa, además, que en el caso actual el deber de equidad se transforma en obligación de estricta justicia, por cuanto el bombardeo de Iquique se llevó a efecto sin un aviso previo.

Estoi de acuerdo con el señor agente británico en que sería una medida equitativa resarcir de sus pérdidas a todos los que las experimentaron a consecuencia de la guerra civil de 1891. Si los recursos del Erario chileno bastasen a este efecto, podría llevarse a cabo la compensación comenzando por los que mas hubiesen sufrido, fuesen nacionales o extranjeros. Estoi seguro de que en ese caso, la casi totalidad de las reclamaciones presentadas serian las últimas en tocar una parte de esta distribución, porque si es verdad que el comercio extranjero de Iquique se vió afectado con la guerra civil, en cambio pudo realizar cuantiosas ganancias a consecuencia de la misma guerra.

Pero, en todo caso, no se trata actualmente de dictar una medida de equidad, sino de justicia. La cuestión que V. E. va a resolver consiste en determinar si los reclamantes tienen o no en derecho una acción que ejercitar para exigir el pago de la indemnización que pretenden. A esta cuestión responden negativamente todos los autores.

Por regla jeneral, no se concede acción alguna de esta clase a las personas perjudicadas por una guerra civil. En apoyo de esta tesis puedo citar entre otras muchas, la opinión de Calvo, t. 3.º, § 1297; Fiore, t. 1.º, § 675 i 3.º § 1717 i siguientes; Bluntschi, art. 380 bis; Hall, cap. IV, p. 219; Lawrence, t. 3, p. 128; Wharton, t. 2, § 224, etc.

En el caso especial de que se trata, menos existe la obligación de indemnizar desde que ni el combate de Iquique, de 19 de febrero de 1891, fué un bombardeo en el verdadero sentido de la expresión, ni aun cuando se estimara como tal, habria existido obligación de dar el aviso previo que es de costumbre en los bombardeos.

«El bombardeo, dice Guelle, es un medio de destrucción de una violencia extrema, que consiste en hacer llover sobre las obras fortificadas, i a menudo en el interior de las ciudades, proyectiles in-

cendarios; los destrozos, el terror, la desmoralizacion, llevan rápidamente a la capitulacion.»

De esta definicion, semejante a la que dan otros autores de igual reputacion, se desprende que el bombardeo es un ataque que se efectúa siempre desde alguna distancia, i que tiene por objeto rendir una plaza por medio del terror que infunde la destruccion i el incendio. En el caso actual faltan los elementos capitales contemplados en la definicion. El combate de Iquique se trabó el 19 de febrero de 1891, dentro de la misma ciudad, por tropas de uno i otro bando, que ocupaban cada una una parte de la poblacion. La Escuadra no hizo sino coadyuvar al éxito de las tropas que se defendian en el edificio de la Aduana; i para este objeto dirijia sus proyectiles a los puntos ocupados por la tropa del coronel Soto. Esto consta a todos los que presenciaron el suceso, está escrito en los documentos oficiales i no creo que sea negado por el señor agente británico. No se trataba, pues, de rendir una poblacion, ni se hacian llover los proyectiles sobre ella en son de amenaza o por vía de intimidacion. Era un combate de ejército a ejército, una verdadera batalla a la cual la Escuadra llevó un contingente en extremo importante. Esto dista enormemente de ser un bombardeo. i esplica al mismo tiempo cómo fué imposible el aviso previo exigido por el señor agente británico. Miéntras que en la jeneralidad de los casos, los bombardeos se verifican despues de intimaciones de rendicion o entrega de la plaza, i se preparan con la calma que requiere esta operacion de guerra, lo que hace posible el cumplimiento del deber humanitario de prevenir a los habitantes para que se pongan en salvo; en un combate que se traba repentinamente i tratando de aprovechar la sorpresa del enemigo, el aviso previo es imposible. Tal fué lo que aconteció en Iquique el 19 de febrero de 1891. El coronel Soto se dejó caer sobre la poblacion en la madrugada de aquel dia para sorprender al enemigo i apoderarse de la ciudad. La tropa revolucionaria fué efectivamente sorprendida a las seis de la mañana, i le costó gran trabajo organizarse i preparar la defensa en la casa de la Aduana. El combate se trabó entónces entre las tropas del coronel Soto, que ocupaban la plaza Arturo Prat i que bien pronto rodearon la Aduana, i las mandadas por el

comandante Merino Jarpa, que se defendian desde este edificio. La Escuadra favoreció a los suyos dirijiendo sus fuegos con certera puntería sobre la tropa enemiga. Jamás tuvo el propósito de atacar la poblacion misma o de destruir sus edificios. No ha existido, pues, un bombardeo, ni la menor posibilidad de prevenir a los habitantes del hecho de armas que iba a tener lugar de un modo tan imprevisto.

Pero si se pretende considerar como un bombardeo la participacion de la Escuadra en el combate de 19 de Febrero, a pesar de que para tal calificacion faltan los caracteres esenciales de una operacion bélica de ese jénero, todavia sostengo que es claro i evidente que el jefe de la Escuadra no tenia obligacion de dar aviso a la poblacion, i que por consiguiente ninguna responsabilidad puede hacerse pesar sobre el Gobierno de Chile por haberse prescindido de esa notificacion preliminar.

Tratándose de una accion de guerra que se traba de improviso, i en que se trata de arrojar al enemigo de las posiciones que ocupa, i sobre todo cuando es el propio enemigo quien sorpresivamente empeña el combate con el propósito de hacerse dueño de la ciudad, no hai autor conocido de Derecho Internacional que no exima al belijerante que bombardea, de la obligacion de avisar anticipadamente que va a dirijir proyectiles sobre el adversario.

He citado en la dúplica de la reclamacion núm. 22 i a propósito del combate que tuvo lugar en Pisagua el 6 de Febrero, las opiniones conformes de Buntschli, Fiore i Calvo sobre esta materia en el sentido que dejo indicado. Juzgo ocioso repetir esas citas i a ellas me refiero. «La intimacion, dice Guelle, no es necesaria si la intencion del enemigo está manifestamente indicada por sus actos i preparativos de defensa.» I mas adelante añade: «Esta práctica (la del aviso previo) por humanitaria que sea, está subordinada, preciso es reconocerlo, a las necesidades de la guerra; si es menester sorprender al enemigo a fin de arrebatar rápidamente la posicion, en tal caso la falta de denuncia del bombardeo no constituye una violacion de las leyes de la guerra.»—(Guelle, *Précis des lois de la guerre*, t. 2.º, p. 112).

Si el que toma la ofensiva puede llegar hasta el bombardeo sin

aviso previo, cuando por medio de la sorpresa pretende desalojar al contrario de la posicion que ocupa, ¡cuanto mas justificado no será el mismo procedimiento en el que es sorprendido i defiende esa posicion! Basta esponer esta consideracion para comprender que la licitud del bombardeo en el caso de Iquique es *a fortiori* mayor i mas lejitima que en el caso que proponen este autor i los demas que dejo citados.

I todavia prescindo de la doctrina de Geffchen que sostiene que siendo conveniente i humanitaria, en ningun caso es obligatoria la notificacion previa del bombardeo, porque los habitantes saben a qué atenerse desde el principio de la guerra. Puedo observar, ademas, que esta precaucion es aconsejada por todos los escritores con el objeto de poner a salvo las personas, i en especial a las mujeres i niños; pero ninguno de ellos ha creido que mereciesen igual proteccion los bienes de los habitantes. Por simple consideracion a ellos, no hai motivo para retardar o esponerse a que resulte infructuosa una operacion de guerra a causa del aviso previo. El ataque de Iquique no produjo desgracias personales, i esto basta i sobra para manifestar la inutilidad de la notificacion para el único efecto que la prescribe el Derecho Internacional.

Si a esto se agrega que la notificacion se hizo impracticable por las razones que dejo apuntadas, la pretendida responsabilidad del Gobierno de Chile es inaceptable en el terreno del derecho. Con respecto a la simple equidad, seria de desear que todas las pérdidas que ocasionó la guerra civil de 1891 fueran resarcidas por el Estado; pero este deseo no puede ser convertido en una obligacion, ni llegar a producir la accion que el reclamante ha intentado.

Espero, en consecuencia, que V. E. se ha de servir rechazarla, si es que no acepta alguna de las escepciones dilatorias que he tenido el honor de oponer.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Guillermo Patterson Robertson, nacido en Escocia, Islas Británicas, residente en Iquique, reclamó del Gobierno de Chile la cantidad de doscientas cuarenta i una libras esterlinas diez chelines, por pérdidas sufridas en el incendio de Iquique, ocurrido en 19 de Febrero de 1891.

El reclamante espone que el 19 de Febrero de 1891 se trabó, en Iquique, un combate entre las fuerzas congresistas de mar i tierra i las fuerzas de Gobierno, i que durante la refriega, bombas disparadas de los buques de la Escuadra produjeron, a eso de las dos i media de la tarde de dicho día, un incendio que causó la total destruccion de varias manzanas de edificios, incendio que, al propagarse rápidamente, alcanzó a la manzana de edificios donde estaba ubicado el Hotel Ingles, casa esquina de las calles Luis Uribe i Bolívar donde él ocupaba un departamento, causándole la pérdida total de los artículos i bienes muebles que allí tenía i cuyo inventario detallado acompaña.

Presenta como comprobantes una protesta del reclamante estendida en 29 de Setiembre de 1891, ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, i dos declaraciones juradas en la misma fecha ante el mismo cónsul británico, prestadas por los señores D. Mac-Queen i Eujenio Kohler, que esponen ser verídicos todos los hechos relatados en la protesta del reclamante; agrega, ademas, un poder especial a don Ernesto Hubner, estendido ante un notario público de Iquique, para que lo represente ante el Tribunal Arbitral Anglo-chileno.

El agente del Gobierno de Chile contesta que el memorial presentado no se ajusta a las prescripciones del Reglamento, pues no dice el reclamante si estuvo al servicio de alguno de los combatientes, o si recibió sueldo de ellos, ni si ha presentado esta reclamacion ante otro Tribunal; que los hechos no han sido abonados con juramento o declaracion solemne, contraviniendo así al artículo IX, i que, al presentar impreso el memorial, la firma impresa del reclamante no tiene valor; por estas causas pide al Tribunal deseche la

reclamacion; que no ha justificado el reclamante su calidad de súbdito británico, circunstancia indispensable para que el Tribunal tenga jurisdiccion sobre la cuestion; que las declaraciones acompañadas al memorial no tienen valor alguno por la forma i tiempo en que han sido prestadas i la autoridad que las recibió, que no es la que determina el artículo XI del Reglamento; i, por último, que aun subsanados los vacíos precedentes, todavía debiera ser rechazada esta reclamacion bajo el punto de vista del derecho que la hace inaceptable; que el memorialista confiesa que sus útiles i muebles fueron consumidos por el incendio que se produjo en Iquique por consecuencia del combate, dentro de la misma ciudad, el 19 de febrero de 1891, lo que, segun el *Derecho Internacional*, no hace al Gobierno de Chile responsable por los perjuicios ocurridos a neutrales o estraños a la guerra durante ese combate; que el combate en la ciudad de Iquique no tuvo otro objeto que obtener la posesion del puerto, llave de la provincia de Tarapacá i principal fuente de recursos para la República de Chile, importando la posesion de Iquique casi la seguridad del éxito final de la guerra, operacion que se hizo sin violacion alguna de las leyes de la guerra; que las pérdidas sufridas a consecuencia del combate por chilenos que no tomaron parte en la contienda i por estraños residentes en la ciudad, no son imputables al Gobierno de Chile, que hizo uso de un derecho; que los estraños como los nacionales deben soportar las pérdidas que ocasiona una operacion militar necesaria para el éxito de la guerra, como se soportan las desgracias causadas por una desgracia natural, como un incendio casual, un terremoto de tierra; i que, habiendo tratado *in extenso* en otras reclamaciones anteriores las doctrinas de notables tratadistas sobre esta cuestion, se limita por ahora a citar lo que esponen Bluntschli, en los artículos 652 i 662 de su *Derecho Internacional Codificado*, i Fiore, en el tomo 3.º, § 1,714 i siguientes de su *Nuevo Derecho Internacional* i el artículo 3,336 del *Derecho Internacional Codificado*. Por estos fundamentos pide que el Tribunal rechace la reclamacion, si es que resuelva ser competente para conocer de ella.

En la réplica i réplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho.

Considerando: que sin detenerse a discutir varios puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes. importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la legitimidad o ilegitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres, mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra, se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de las seis de la mañana, el coronel Soto del Ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de 300 hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable habitados por muchos extranjeros, entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que en la protesta hecha por el señor William Patterson Robertson, bajo juramento en 29 de Setiembre de 1891, ante el cónsul británico en Iquique, declara que sus pérdidas se deben al incendio producido por bombardeo i batalla de 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que efectivamente resulta de todo lo obrado en autos que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos que estaban en el puerto; que este hecho se deduce no solamente de lo espuesto en el memorial i confesion del reclamante hecha en 29 de Setiembre de 1891, sino tambien de las declaraciones de los testi-

gos presentados por el mismo reclamante i declaracion del almirante ingles Hotham, que estaba en la bahia de Iquique en aquel dia, inserta en el *Blue Book, Correspondance respecting the Revolution in Chile*, año 1891, páj. 82;

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla no solo por un golpe de mano sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. [Declaracion internacional sobre la lei i los usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas de 1874, artículo 15.—Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, artículo 756. núm. 4.—A. J. Hefster, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris 1883, § 125.—Nota de Gessfeken, *Manual de Derechos de la Guerra*, del Instituto de Derecho Internacional citado por Hall, páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículo 55 bis.]

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede

verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente, que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso previo a los habitantes de Iquique, puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas 1874, i que exime de aviso previo.—[Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*. Edicion de 1886 art. 554];

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuanta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los beligerantes, bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia proporcionarles la explotacion i esportacion del salitre, que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

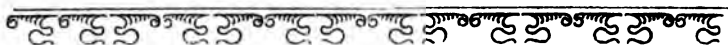
Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique en 19 de Febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos lejitimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile, que, como lo dice Vattel «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que lo sufren.—El soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracia de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho.» (Vattel, *Derecho de Jentes*, libro 3.º, capítulo XV, párrafo 232.—

The Law of Claims, against Governments.—House of Representatives 42 D, Congress Report núm. 134, page 274, Washington, Government Printing Office, año 1875.)

Por estos fundamentos, el Tribunal por mayoría de votos, disintiendo el árbitro inglés, declara sin lugar la presente reclamación i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 14 de Octubre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Octubre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 27

ANDRES KERR

MEMORIAL

Excelentísimo Tribunal:

Yo, J. Gabriel Latorre, vecino de esta ciudad, en representacion del señor Andres Kerr, segun consta del poder que acompaño bajo la letra A, a V. E. espongo: Que mi representado nació en Kelso, Roxburghshire, Escocia, el año de 1854, siendo súbdito británico por nacimiento; i de profesion comerciante, teniendo su casa de comercio en el puerto de Coquimbo de esta República desde mas de ocho años a la fecha, donde reside actualmente. El año 1891, en su carácter de neutral, no tomó parte directa ni indirectamente en la guerra civil, ni en ninguno de los sucesos posteriores relacionados con la misma guerra, pudiendo asegurar que durante el tiempo que ella duró, no estuvo al servicio de ninguna de las partes combatientes, ni recibió sueldo ni otros emolumentos de ninguna de ellas, como es público i notorio en el puerto de su residencia, i lo justificaré si fuese necesario.

Sin embargo de su carácter de neutral, ha recibido los perjuicios que paso a esponer:

Primero. Con motivo de haber dispuesto el señor coronel Holley

al ojar en la Aduana la tropa que llevó a Coquimbo para desarmar la tropa de la division del señor Carvalho Orrego, se le sustrajo de dicha Aduana i por tropa del rejimiento Constitucion N.º 1, varias mercaderías, segun se comprueba con el documento oficial que acompaño bajo la letra B cuyo valor de costo asciende a la cantidad de £ 52.0.7, con mas sus intereses corrientes al 9.º/º anual, hasta que se pague dicha suma que representa la planilla que acompaño bajo el N.º 1.

Segundo. En agosto de 1891, estando ocupado el puerto de Coquimbo por fuerzas de la division al mando del coronel Carvalho Orrego, el señor Kerr fué requerido i obligado, por órden del jefe de la artilleria de esa division, i bajo presion de tomarle a viva fuerza, a entregar las provisiones que se le exijieron para el rancho de ese cuerpo; teniendo presente mi representado lo dispuesto en la lei de 22 de julio de ese año que en copia anexo bajo la letra C, por evitar ultrajes, se dició a entregar las provisiones, exijiendo a su vez los resguardos del caso. La órden que presento bajo la letra D i los planillos bajo los números 2 i 3 con la conformidad i recibo al pie los dos últimos, de los jefes correspondientes, justifican plenamente este reclamo que importa la cantidad de £ 83-8-8, con mas los intereses corrientes al 9.º/º anual desde el 30 de setiembre del 91, valor que se detalla en los referidos planillos números 2 i 3.

Importa pues el reclamo de los dos partidos de que dejo hecho mérito la cantidad total de £ 135-9-3, con mas sus respectivos intereses desde el 30 de setiembre del 91 hasta el dia del pago a razon del 9.º/º anual, que es el tipo de intereses que cobra el Banco de Chile en cuenta corriente.

En nombre de mi representado vengo en interponer esta reclamacion derivada de los hechos espuestos, i

Ruego al Excelentísimo Tribunal se sirva dar lugar a ella por ser de estricta justicia que juro solemnemente a nombre de mi mandante.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion núm. 27, en la cual don Gabriel Latorre, a nombre de don Andres Kerr, demanda la suma de £ 135-9-3, mas intereses del 9 %, valor atribuido a ciertas mercaderías que se dicen sustraídas de la Aduana de Coquimbo i a provisiones que se dicen requeridas para un cuerpo de artillería de esa ciudad, en Agosto de 1891.

1 Debo desde luego observar que no está acreditado el carácter de súbdito ingles atribuido al reclamante, lo cual hace a V. E. incompetente para conocer de esta reclamacion.

2 En cuanto a formalidades, el memorial, que no aparece suscrito por nadie, no se ajusta tampoco a las formalidades requeridas por el Reglamento de Procedimientos, lo cual hace inadmisibile la reclamacion.

Ha dejado particularmente de cumplir la formalidad establecida en el art. IX i la prescripcion terminante del art. VI de dicho Reglamento. La última era en especial imprescindible, atendidas las disposiciones de la Ordenanza de Aduanas de 26 de Diciembre de 1872, artículos 72 i siguientes, título X, que trata de la responsabilidad del Fisco i de los empleados, alcaldes, guarda-almacenes, etc., por pérdida de mercaderías depositadas en los almacenes de aduana. El reclamante no ha jurado ni declarado nada a este respecto.

3 La primera de las dos partidas que componen esta reclamacion asciende a £ 52-0-7, o sea, \$ 674,97 al cambio arbitrario de 18 i medio peniques por peso, segun la planilla acompañada bajo el número 1.

Segun el memorial, tropa del rejimiento *Constitucion*, alojada en la Aduana de Coquimbo por disposicion del señor coronel Holley, sustrajo de dicha Aduana 16 bultos de mercaderías del reclamante, en el mes de Setiembre de 1891. En comprobacion, se acompaña únicamente el certificado espedido tres años despues por

el alcaide de dicha Aduana, anexo B, que ninguna referencia hace ni a la planilla acompañada ni a la tropa del rejimiento *Constitucion*, ni al orijen de la sustraccion, limitándose a decir que ésta tuvo lugar en la fecha que se menciona, es decir en Setiembre de 1891.

Que no aparezcan en almacenes de aduana algunas de las mercaderías depositadas en ellos, es cosa frecuente, que ocurre cada día. En tales casos, ignorándose el orijen de la pérdida, el Fisco depositario responde i paga, salvo caso fortuito, sin perjuicio de reintegro por parte de los alcaides i guarda-almacenes.

Así lo establecen los citados artículos de la Ordenanza de Aduanas.

El certificado del alcaide carece de todo valor contra mi Gobierno porque no seria imparcial, a consecuencia de la responsabilidad de aquél por la pérdida, i porque en realidad nada dice que afecte a la responsabilidad de mi Gobierno. Si hubiera sido cierto, lo que no constar ni es verosímil, que los soldados hubieran hecho la sustraccion o robo indicados, se trataria de merodeo o pillaje ejecutados, no por las fuerzas militares de la República sino por individuos aislados, sin órdenes de sus jefes i burlando la vijilancia de éstos.

Habria sido el caso de las reclamaciones por robos verificados en la Aduana de Mollendo, durante la guerra contra el Perú, en 1880, a que se refieren diversas sentencias absolutorias del Gobierno de Chile, pronunciadas por los tribunales arbitrales que funcionaran en Santiago despues de aquella guerra. (1880-1888]. Básteme citar particularmente las sentencias núms. 14 i 82 del Tribunal Anglo-chileno, dictadas por unanimidad de votos, que son decisivas en el caso actual.

En consecuencia, no estando probados los hechos i careciendo de base en derecho, la primera partida de esta reclamacion debe ser desechada.

4 La segunda partida importa £ 83-8-8 a que ascienden las planillas núms. 2 i 3, fechadas en Coquimbo el mismo día 4 de Setiembre de 1891, por útiles de comedor, licores i provisiones de boca que se dieen requeridas o compradas para el consumo o rancho del

rejimiento de artillería que formaba parte de la división que ocupó a Coquimbo bajo las órdenes del coronel Carvallo Orrego.

Cref, Excmo. señor, que al fin se presentaba una reclamación atendible en derecho, siquiera parcialmente, leyendo esta segunda parte de la reclamación del señor Kerr, presentada a título de requisición de provisiones alimenticias destinadas al consumo de un rejimiento; pero bien considerada aquella, tampoco es posible aceptarla.

Una de aquellas planillas aparece firmada, en calidad de recibo, por un señor Asciél Núñez, titulado capitán, que dice haber recibido las mercaderías por orden del comandante Errázuriz.

La planilla lleva al pie estas palabras: «Conforme por el señor coronel (firmado) *V. de la Sota Beza*.» Aparece traducida en lo impreso aquella firma, que no aparece bien clara.

Es la misma firma que se vé al pie de la orden acompañada como anexo D, fecha 18 de Agosto.

No es fácil saber quien era ese señor de la Sotta Beza o Boza, que primeramente se atribuye el poder de imponer requisiciones indeterminadas e ilimitadas, i en seguida, la facultad de firmar por un señor coronel anónimo.

Tampoco se sabe quién era ese titulado capitán Núñez que recibía por orden de un señor comandante Errázuriz.

Nada de todo eso, cuya autenticidad pongo en duda, reviste caracteres de seriedad. Concorre a demostrarlo la falta de correspondencia o la adulteración de las fechas: la supuesta orden del señor Sotta Beza o Boza aparece dada en 18 de Agosto, al paso que la entrega de botellas había comenzado ántes, según las planillas; las entregas se continuaron hasta el 2 de Setiembre, según la planilla primera, i solo hasta el 29 de Agosto según la otra planilla, si bien la fecha de 26 de Agosto que va a continuación parece haber sido enmendada para no aparecer pidiendo en Setiembre después de la derrota, vino de Champaña, floreros, copas verdes, etc.

No, Excmo. Señor, para que tales requisiciones, supuesta su efectividad, dieran en derecho base a una reclamación contra el Gobierno de Chile, preciso sería que hubieran sido ordenadas por el jefe superior de la división, por escrito i con indicación de can-

tidades i especies, no debiendo éstas salir de lo estrictamente necesario para la vida de campaña, i presentando recibo autorizado i en forma.

Nada de eso ha sucedido en nuestro caso. Si efectivamente el reclamante, cediendo a la presion, hubiera entregado dichos artículos, cuyo precio él mismo ha fijado a su antojo, habria sido víctima de su confianza en la buena fé de sus clientes; víctima de una mala jugada, de que no tiene porque responder el Gobierno de Chile.

La peticion de intereses corrientes del 9 %, no pudiendo existir mora de parte de aquéles absolutamente inaceptable.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

J. Gabriel Latorre por don Andres Kerr en las reclamaciones interpuestas, replicando a V. E. con todo respeto digo:

1 Observa el señor agente de Chile que no está acreditado el carácter de súbdito británico que tiene don Andres Kerr, por lo que su reclamacion es juzgada improcedente ante V. E.

Para desvanecer tal cosa ofrezco presentar un certificado del señor cónsul inglés i aun trataré de acompañar a los autos la partida de nacimiento de mi representado.

Establecido el carácter de súbdito inglés se establece tambien el carácter de neutral: porque siendo la neutralidad deber de los extranjeros, no puede presumirse su falta; sino su cumplimiento. Por eso el artículo III de la Convencion dice que: «El Tribunal dará acogida a los medios probatorios o de investigacion que, segun el criterio i recto discernimiento de sus miembros, fueren conducen-

tes al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos i especialmente a la calificación del estado i carácter neutral del reclamante»; de donde se sigue que debe recibirse prueba sobre el estado i carácter neutral del reclamante cuando se produce controversia acerca de ello. Por ahora ésta no existe; mas, con todo eso si V. E. estima necesaria la prueba puedo presentar testigos que acrediten la neutralidad de Mr. Kerr, testigos cuyos nombres, domicilio, profesion i nacionalidad indicaré en el escrito en que presente interrogatorio.

2 Dícese en la contestacion que el memorial no ha sido suscrito por nadie i que no se ajusta a las prescripciones requeridas por el Reglamento de Procedimientos.

El memorial está suscrito. Tengo entendido que el memorial es uno; los ejemplares de él que hai necesidad de entregar, son simples copias, que no requieren firma del reclamante por lo cual en el presente caso, no fueron firmadas, aunque hubo i hai voluntad de hacerlo.

No se ha dejado de cumplir con la formalidad establecida en el artículo IX del Reglamento. como puede verse.

Cuanto a la prescripcion del artículo VI creo que no se ha faltado a ella. Exije dicho artículo: que el reclamante declare en el memorial si ha recibido alguna suma de dinero o compensacion a cuenta de su reclamo i de quién i si su reclamacion ha sido anteriormente presentada ante cualquier otro tribunal. No se exige, pues, que el reclamante declare si ha recibido o no ha recibido dinero i si se ha presentado o no se ha presentado ante otro cualquier tribunal; lo que se exige es que habiendo recibido dinero o habiéndose hecho otra presentacion, se espresé tal cosa. Por eso aquí, en el caso de un reclamante, como Mr. Kerr, que de nadie ha recibido suma alguna de dinero o compensacion a cuenta de su reclamo que no ha presentado a ningun otro tribunal, la prescripcion del artículo es inaplicable.

3 Mi primera reclamacion, por el importe de las mercaderias que tenia depositadas en la Aduana de Coquimbo, que fueron estraidas de ahí por tropa del rejimiento Constitucion 1.º de línea, no es aceptable segun el señor ajente del Gobierno de Chile.

Dice este señor ajente que el certificado que acompaño para acreditar mi reclamo no hace mencion de la planilla que se encuentra bajo el número 1, pero hace mencion de las mercaderias que se apuntan en dicha planilla; de manera que, segun esto, solo habría discordancia en el precio que se fija a dichas especies. ¿Quiere V. E. que justifique mis precios? Cualesquiera comerciantes podrían justificarlos.

Pero el mismo ajente se refiere a la Ordenanza de Aduanas, i quiere deducir de ella que esta accion no es procedente ante V. E. sino en la forma ordinaria.

La Ordenanza de Aduanas no se pone en el caso que discutimos; no se refiere a guerras internacionales ni civiles, trata de sustracciones i robos efectuados por individuos cualesquiera. En el presente caso han sido las fuerzas armadas de la República de Chile las que han sacado por su poder las mercaderias cuyo precio reclamo.

Ni se hable de merodeo o cosa semejante. Ciertamente que no fué el Excmo. Presidente de la República de Chile en esa fecha quien efectuó aquellas sustracciones; pero las efectuaron los miembros de su ejército.

¿Por qué el reclamo ha de ser ménos justo i fundado efectuándose en la Aduana de Coquimbo, que efectuándose en otro lugar cualquiera?

¿Las tropas que no proceden por orden de un jeneral o coronel, tienen carta blanca para disponer de la propiedad de los estranjeros?

• Mi reclamo es, V. E., perfectamente justo i fundado. Trato con él de indemnizarme de perjuicios obvios; trato de obtener lo que se me arrebató. Si V. E. quiere pruebas a mas del certificado acompañado, pruebas de testigos tendrá.

Confio, pues, en que V. E. se ha de servir aceptar la primera partida de mi reclamacion.

4 La segunda partida de mi reclamo no ha podido presentarse mejor acreditada: la exposicion que de ella se hace, los documentos con que es acompañada, todo manifiesta su justicia, su veracidad.

Tampoco es aceptada esta reclamacion.

Tengo acompañada copia de la requisicion que se hizo por órden del señor de la Sotta Boza, uno de los jefes de la artilleria de Coquimbo en Agosto de 1891; tengo acompañada la planilla de las mercaderias que entregué a virtud de esa requisicion i otras anteriores; tengo para abonar esta planilla la firma del capitán Osciél Núñez, artillero que recibió dichas especies por órden del comandante Errázuriz, pero sin embargo de todo el señor ajente del Gobierno de Chile duda de la veracidad de mis afirmaciones, que fueron confirmadas con juramento; i se permite decir que he sido víctima de una mala jugada, de la cual no responde el Gobierno de Chile.

Acaso el señor ajente no tenga noticias de que hubo un capitán Osciél Núñez i acaso no haya conocido al señor de la Sotta Boza; acaso, i esto es improbable, no haya oído hablar del comandante Errázuriz; mas, todo ese desconocimiento, que es inesplicable, no lo autoriza para negar la existencia de tales personas, a una de las cuales se permite llamarla anónima.

Puedo justificar ante el Excmo. Tribunal la existencia de tales personas, ya por certificados o por testigos, i puedo acreditar tambien de esta última manera la veracidad de los hechos que he afirmado.

Si despues de esto el señor ajente me dice que la reclamacion es inaceptable, yo no se decir cual lo sea.

No puedo figurarme a los jefes de division haciendo requisiciones personalmente; tampoco me los puedo figurar en una i otra parte a la vez i ménos me lo figuro despachando requisiciones en blanco i con designaciones de cantidades i especies que él no puede saber si faltan en el momento oportuno.

I mi representando, ¿debió haberse espuesto a las bayonetas i a todos los peligros de un saqueo mientras averiguaba quién era el jefe de la division i se imponía de cuáles artículos podian considerarse estrictamente necesarios para la vida de campaña?

No, Excmo. Señor; mis reclamos son justos; bien fundados están, i en documentos irredargüibles; proceden naturalmente de los desgraciados sucesos del año 1891 i se hallan rigurosamente comprendidos en el artículo I de la Convencion.

Por todo lo cual me permito solicitar de V. E. que se sirva acogerlos tal como lo pido en la conclusion del memorial.

p. p. Andres Kerr,
J. GABRIEL LATOURRE.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

1 De esta reclamacion, la primera partida, relativa a mercaderías que se dicen sustraídas de la aduana de Coquimbo en Setiembre de 1891, aparece despues de la réplica tan injustificada como ántes.

Fuera del dicho del memorialista, no hai sobre ella otro antecedente que un certificado espedido en 1894 por el alcaide de dicha aduana; pero, tal testimonio, sobre ser único, podria ser tachado en razon de la responsabilidad que a aquél afectaba como guardador de las mercaderías. Debe ademas notarse que el hecho de la sustraccion por tropas chilenas no lo afirma aquel alcaide, i ménos declara haberlo presenciado.

No se indica por el memorialista la fecha, mas o menos precisa, en que se notó el desaparecimiento de las mercaderías; no se señala ni se individualizan el autor o los autores responsables del hecho; no se espresan circunstancias que induzcan a la persuacion de que han debido ser soldados del ejército chileno los autores de la referida sustraccion, si ésta hubiera sido efectiva.

Dados estos antecedentes, no seria arreglado a derecho reconocer que el señor Kerr era el lejítimo dueño de las mercaderías reclamadas, que éstas se hallaban en la Aduana de Coquimbo, que fueron efectivamente robadas i que los ladrones fueron soldados de la República; i, aun aceptando todo eso como cierto, el Gobierno de Chile no podria ser responsable de robos comunes cometidos

ocultamente por soldados del ejército, fuera de la vijilancia i subordinacion de sus jefes, contra los cuales no ha podido ni insinuarse acusacion alguna.

Tal es la doctrina uniformemente establecida sobre la materia por el derecho i la jurisprudencia. Los párrafos anteriores han sido tomados casi a la letra de considerandos adoptados en las sentencias números 14, 82 i 83, dictadas por unanimidad en 1884 i 1887 por el Tribunal Anglo-chileno de Santiago, rechazando reclamaciones motivadas en sustraccion de mercaderías de la Aduana del puerto peruano de Mollendo, ocupado por fuerzas chilenas en Marzo de 1880; casos perfectamente análogos al presente, si bien éste se presenta mas desprovisto aun de antecedentes probatorios, aunque en derecho todos sean igualmente injustificados.

A todo lo dicho, puede agregarse que en el caso actual la sustraccion de mercaderías se supone verificada en el curso del mes de Setiembre de 1891, esto es, despues del 28 de Agosto señalado en el artículo I de la Convencion de 1893 como término de la guerra civil; i si bien, segun el final de dicho artículo, puede V. E. admitir reclamaciones motivadas por sucesos posteriores, claro es que éstos han de tener orijen en la guerra i directa conexion con la guerra, lo que lójicamente se deduce de los antecedentes i del objeto mismo de la citada Convencion.

En el caso presente, no se verifican aquellas circunstancias: el alojamiento de soldados en un patio de la aduana de Coquímbo, bien cerrados por lo demas los almacenes, no fué un acto de guerra ni tuvo con ésta necesaria relacion; pudo efectuarse en cualquier tiempo, como una medida del servicio ordinario del ejército, a falta de cuarteles suficientes o adecuados.

Si al hecho de tratarse aquí de sucesos que se suponen verificados despues de la guerra, se agrega que el reclamante no ha acreditado de ninguna manera su estado i carácter de súbdito británico será forzoso convenir en que una doble causal de incompetencia obsta a que V. E. entre a conocer de esta reclamacion.

2 La segunda partida de esta se refiere a supuestas requisiciones de vinos, provisiones i diversos objetos, hechas a virtud de supuestas órdenes, por supuestos individuos, etc. Todo en ella des-

cansa en cuentas i papeles de caracter privado, emanados o presentados por parte del reclamante mismo.

La réplica no agrega cosa alguna que pueda dar a los hechos espuestos por aquél los caracteres de realidad i exactitud que no tienen.

El replicante dice que puede acreditar con diversos testimonios aquellos hechos, como poco antes ofreció, para probar la nacionalidad británica de aquél, «presentar testigos que acrediten la neutralidad de Mr. Kerr; testigos cuyos nombres, domicilio, profesion i nacionalidad indicaré en el escrito en que presente interrogatorio.»

Al decir esto, olvidó la parte reclamante lo dispuesto en los artículos I, X, i XI del Reglamento de Procedimientos dictado por V. E., segun los cuales, deben aquellas i otras circunstancias indicarse en el memorial o en la réplica, correspondiendo al Tribunal mismo recibir la prueba o indicar la manera de que sea tomada. Dejar para un escrito posterior las referidas indicaciones es un procedimiento no autorizado por dicho Reglamento i ocasionado a sorpresas inconciliables con un honrado propósito de descubrir la verdad.

Por lo demas, para que las requisiciones afecten en derecho la responsabilidad de un Gobierno, deben ser, como se ha dicho, hechas por las autoridades superiores de la localidad u oficiales delegados por ellas, i escepcionalmente, por los jefes de destacamentos aislados, formuladas por escrito i firmadas, etc. [*Guelle. Précis des lois de la guerre*, t. II. p. 189. Geffcken sur Heffter, § 131, note 4).

En nuestro caso, para nada figuran ni el coronel Carvallo Orrego comandante en jefe de la 5.ª division establecida en Coquimbo, ni los coroneles Garreton, Moran, Navarro o Concha, jefes del Estado Mayor i de las brigadas de la misma division. Cierta que entre los cuerpos de que ésta se componia habia un rejimiento de artilleria; pero, ni el supuesto comandante de este cuerpo podia ordenar requisiciones sin autorizacion de sus jefes, ni es verosímil que las ordenara en el puerto de Coquimbo, por aquello mismo i porque en realidad tal cuerpo no estaba acantonado en aquella poblacion sino en el lugar llamado Las Canteras. [Véase sobre esto el *Memorándum de la Revolucion de 1891*, p. 521 i p. 523 nota final.]

La inverosimilitud se acrecienta cuando se observa que en la pasada guerra civil no aparecen verdaderas requisiciones. Todo se pagaba al contado o a la presentacion del respectivo recibo, como que las emisiones de papel moneda i otras operaciones de crédito hicieron que nunca faltara el dinero en las tesorerias e intendencias del ejército del Gobierno de Santiago, lo que ya se ha visto en las reclamaciones relativas a fletes de mulas de Camarones [números 49, 51, 52, etc] Todo demuestra que en el caso actual, como en el de la reclamacion número 54, se trata de una cuenta o crédito abierto en su almacen a algunos oficiales, demandable a ellos solos en el supuesto de haber recibido i no pagado los artículos cuyo valor, exacto o no, se cobra.

Yo creo que, aun tomados los hechos como por el reclamante se relacionan, la reclamacion carece de fundamento en derecho, siendo por lo tanto, inútil recibir prueba testimonial, que no se ha ofrecido en conformidad al Reglamento i que por sí sola seria ineficaz, principalmente para justificar la nacionalidad del reclamante.

En conclusion, con lo espuesto en la contestacion i en esta dúplica, suplico a V. E. se sirva resolver como lo tengo pedido en la primera.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Gabriel Latorre, por don Andres Kerr, reclama del Gobierno de Chile ciento treinta i cinco libras esterlinas nueve chelines tres peniques (£ 135-9-3) mas los intereses de nueve por ciento anual devengados desde el 30 de Setiembre de 1891 hasta el dia del pago, por requisiciones i sustraccion de varias mercaderias de la Aduana de Coquimbo.

El memorialista espone: que con motivo de haber dispuesto el coronel Holley alojar en la Aduana la tropa que llevó a Coquimbo

para desarmar la division del señor Carvalho Orrego, los soldados del Rejimiento Constitucion núm. 1 sustrajeron de la espresada Aduana varias mercaderias que tenia allí depositadas el reclamante, i cuyo valor asciende a cincuenta i dos libras esterlinas siete peniques [£ 52-0-7]; que en Agosto de 1891, estando ocupado el puerto de Coquimbo por fuerzas de la division del coronel Carvalho Orrego, el señor Kerr fué requerido i obligado por órden del jefe de la Artilleria de dicha division i bajo amenaza de tomarlo a viva fuerza, a entregar las provisiones para el rancho de su cuerpo; que teniendo en cuenta lo dispuesto en la lei de 22 de julio de ese año i por evitar ultrajes, habia hecho la entrega preindicada, exijiendo los resguardos del caso; que lo que entregó importa ochenta i tres libras esterlinas ocho chelines ocho peniques (£ 83-8-8); que, por consiguiente, cobra al Gobierno de Chile ciento treinta i cinco libras esterlinas nueve chelines tres peniques (£ 135-9-3), que es a lo que ascienden ámbas partidas, mas intereses del nueve por ciento anuales, desde el 30 de setiembre de 1891, por ser éste el tipo de interes que cobra el Banco de Chile en cuenta corriente.

Se acompañan al memorial el poder conferido por el reclamante al memorialista; certificado de la Aduana de Coquimbo; tres cuentas; copia simple de la lei de 22 de julio de 1891; recibo de Nicanor de la Sota Boza.

El ajente de Chile, contestando, pide que el Tribunal se declare incompetente por no haberse justificado la nacionalidad británica del reclamante; que no se admita el memorial por no haberse cumplido con lo prescrito en los artículos VI i IX del Reglamento; que no se han probado los hechos a que se refiere la primera partida que se cobra, pues el certificado espedido tres años despues de acontecidos los hechos por el alcaide de la Aduana, no espresa quiénes efectuaron la sustraccion i, ademas, ese certificado carece de imparcialidad, porque si faltaban mercaderías depositadas en la Aduana, ese alcaide seria responsable de ellas en último término si no se justificaba cómo se habian perdido esos efectos; que en el peor de los casos, la sustraccion habria sido un acto de merodeo o pillaje, no por las fuerzas militares de la República, sino por individuos aislados, sin órdenes de sus jefes i burlando la vijilancia de

éstos; que éste sería un caso análogo a los robos verificados en la Aduana de Mollendo durante la guerra con el Perú en 1880 i de los cuales fué absuelto el Gobierno de Chile por los Tribunales Arbitrales que funcionaban en Santiago despues de esa guerra; que las sentencias números 14 i 82 del Tribunal Anglo-chileno, dictadas por unanimidad de votos, son decisivas en el caso actual; que, por consiguiente, debe absolverse al Gobierno de Chile del cobro de esta primera partida de la reclamacion; que respecto de la segunda partida, no es posible sea ella acogida por el Tribunal, pues los justificativos no tienen valor alguno, ya por estar firmados por personas que no se sabe quiénes eran, ya porque no están precedidos de orden del jefe superior de la division de Coquimbo, único que tenia facultad para hacer requisiciones; que si el reclamante entregó las especies que menciona, cediendo a presion, habria sido víctima de su confianza en la buena fe de sus clientes, pero el Gobierno de Chile no es responsable por ello; que el cobro de intereses seria absolutamente inaceptable, pues no existe mora.

En la réplica se combaten las excepciones de incompetencia i falta de personería deducidas i los defectos que se atribuyen el memorial; se insiste en la fuerza probatoria de los documentos acompañados al memorial, pues los han otorgado personas caracterizadas, i se rechaza la teoría de que sólo los recibos i órdenes firmados por jefes de una division tengan fuerza i validez.

Se acompaña un certificado otorgado por el Encargado de Negocios de S. M. B. en Chile que atestigua que el reclamante es súbdito británico.

En la réplica se refuerzan los argumentos de la contestacion, insistiendo especialmente en que para que las requisiciones afecten en derecho la responsabilidad de un Gobierno, deben ser, como se ha dicho, i lo que no sucede en el caso presente, hechas por las autoridades superiores de la localidad u oficiales delegados por ellas, i especialmente, por los jefes de destacamentos aislados, formuladas por escrito i firmadas, etc., (Guelle, *Précis des lois de la guerre*, t. II, p. 189. *Geffcken sur Heffler*, 131, note 4); i que por lo que toca a la sustraccion de efectos de la Aduana, ello aconteció en setiembre de 1891, despues de terminada la guerra civil; i que si

bien la parte 2.ª del artículo 1.º de la Convencion de 26 de setiembre, confiere jurisdiccion a este Tribunal sobre reclamaciones «motivadas por sucesos posteriores», se refiere a sucesos que importen actos u operaciones de las fuerzas de mar i tierra de la República, i los hechos a que se refiere la presente reclamacion no revisten tal carácter ni oríjen, así que el tribunal seria incompetente para juzgarla.

Se recibió la causa a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que el reclamante Andres Kerr ha justificado su calidad de súbdito británico por medio del certificado que ha acompañado, otorgado el 15 de octubre de 1895 por el encargado de negocios de S. M. B. en Chile;

Considerando: en lo que concierne al primer capítulo de la reclamacion, que el señor Kerr ha probado legalmente que en los primeros dias del mes de setiembre de 1891, los soldados del rejimiento Constitucion número 1 se apropiaron diversas mercaderías pertenecientes al reclamante, i que se encontraban depositadas en los almacenes de la Aduana de Coquimbo; que estos hechos estan justificados, 1.º con el certificado otorgado por el alcaide de la Aduana de Coquimbo, que declara que dieziseis bultos de propiedad del reclamante i designados en el memorial fueron sustraídos de los almacenes de la Aduana en la fecha indicada; que la declaracion de este funcionario se refiere pertinentemente a los artículos sustraídos de la manera preindicada, puesto que ella está estampada al dorso de la lista acompañada al memorial, que enumera las mercaderías sustraídas «durante la ocupacion de los almacenes por las tropas del Rejimiento Constitucion número 1 en el mes de setiembre de 1891; i 2.º, con la prueba contradictoria rendida en Enero de 1896 ante el juez de letras de Coquimbo i en la cual siete testigos han declarado ser ciertos los hechos;

Considerando: que el Gobierno es responsable de estas sustracciones, desde luego, porque varios testigos declaran que los soldados se encontraban bajo la vijilancia de sus jefes, i en seguida, porque si los jefes del precitado Rejimiento tuvieron necesidad de acuartelar su tropa en los almacenes de Aduana, ellos tenian, por consiguiente, la obligacion de tomar las medidas conducentes para

que las mercaderías que allí estaban depositadas i de propiedad de terceros no fueran sustraídas o consumidas por los soldados; que la omision de tales precauciones constituiría, en todo caso, por sí solo, una negligencia grave que envuelve responsabilidad;

Considerando: que las sentencias números 14, 82 i 85, pronunciadas por el Tribunal Arbitral Anglo-chileno de 1884-1888, invocadas por el ajente del Gobierno demandado, i relativas a la desaparicion de mercaderías de los almacenes de las aduanas de Callao i Mollendo, no pueden aplicarse al presente caso; que en la primera de estas sentencias, número 14, el Tribunal rechazó la demanda, porque el reclamante se habia limitado a afirmar que sus mercaderías habian desaparecido de la Aduana durante la ocupacion de la ciudad por las fuerzas chilenas, sin sostener que dichas mercaderías habian sido sustraídas por los soldados del ejército chileno; que en la segunda sentencia número 82, la reclamacion se rechaza por falta de prueba; que en el tercer fallo número 85, el Tribunal no dió lugar a la demanda porque el reclamante no habia probado su carácter de dueño de las mercaderías, ni que existieran en los almacenes de la Aduana cuando ocuparon las tropas la ciudad, ni que los soldados del ejército hubieran ejecutado la sustraccion; que, en el caso actual, el administrador de la Aduana de Coquimbo vió el saqueo perpetrado por los soldados, mientras que en el de Mollendo no se constató en 1880 la desaparicion de las mercaderías, sino despues del reembarco de la tropa;

Considerando: que si los hechos en que se funda la reclamacion acontecieron despues del 28 de Agosto de 1891, este Tribunal es tambien competente para conocer de ellos a virtud del primer inciso de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, que somete a su jurisdiccion «las reclamaciones que fueren motivadas por sucesos posteriores que, segun los términos enunciados, sean de responsabilidad del Gobierno de Chile»; que el rejimiento *Constitucion número 1* fué enviado a Coquimbo a tomar posesion de la ciudad i a desarmar las tropas balmacedistas que allí se encontraban todavía; que se trata, pues, de un acto íntimamente ligado con la guerra civil;

Considerando: que si no se ha probado por el reclamante el precio atribuido a los dieziseis bultos de mercaderías que le sustrajeron de los almacenes de la Aduana de Coquimbo en los propios dias en que estuvo acuartelado el Rejimiento *Constitucion número 1* en los alrededores de esa localidad, hai constancia, no obstante, en la misma certificacion del alcaide de esa Aduana que comprueba la exactitud de este hecho fundamental, del contenido de cada uno de aquellos dieziseis bultos;

Considerando: en lo que se refiere al segundo capítulo de la reclamacion, que el señor Andres Kerr ha acompañado una orden de requisicion regular firmada por el coronel de artilleria Nicanor de la Sota Boza, datada en 18 de Abril de 1891, en la cual se le mandaba entregar al capitán Osciel Núñez los artículos que este pidiera para el rancho de los oficiales: que el preindicado capitán dió el correspondiente recibo i que la cuenta detallada, que sube a mil ochenta i dos pesos cuarenta centavos fué aprobada por el coronel Sota Boza; que este jefe superior en aquella época formaba parte del ejército i se encontraba en Coquimbo; que el hecho de que el indicado rejimiento de artilleria estuviera acampado a tres kilómetros de Coquimbo no tiene importancia alguna, desde que es natural que el rancho de los oficiales se surtiera del pueblo vecino;

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por unanimidad de votos, declara que el Gobierno de Chile debe pagar al señor Andres Kerr la cantidad de mil setecientos cincuenta i siete pesos treinta i siete centavos mas intereses de seis por ciento anual, desde el 30 de Setiembre de 1891 hasta la fecha de esta sentencia, en los plazos i condiciones que establece el artículo 8.º, inciso 4.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Santiago, 4 de Marzo de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 4 de Marzo de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 28

JORGE GOODWIN

MEMORIAL

Yo, Jorje Goodwin, declaro lo siguiente presentando reclamos al Gobierno de Chile por pérdidas sufridas durante el último período de la guerra civil de 1891.

- Item 1.º** Mecánico de profesion, siendo posteriormente comerciante, nacido en la aldea de Balbrogh provincia de Derby en el año 1828; residente en la actualidad en la calle Chaigneau N.º 3, Caleta Abarca i previamente (1891) en la calle Viana N.º 1, 3 i 5 esquina calle Agua Santa, Miramar.
- » 2.º De nacionalidad inglesa, no tomé parte directa ni indirectamente en la guerra civil de 1891, i no presté servicio voluntario alguno a ninguna de las partes combatientes.
- » 3.º En cumplimiento del artículo VI ningun dinero ni compensacion ha sido recibido por mí, un reclamo habiendo sido presentado ante el cónsul jeneral de S. M. B. en Valparaiso el 7 de setiembre de 1891; fué retirado el 15 de diciembre de 1894, debido a su imperfeccion i por no estar conforme a las Reglas de Procedimientos del Tribunal Arbitral Anglo-Chileno.

J. GOODWIN

» 4.º Perjuicios hechos a la propiedad.

Por granadas i balas lanzadas de los cerros de Salinas por el partido de la Oposicion; el Domingo 23 de Agosto a las 11 a. m. una granada espendida de 3" X 6" pasó por el techo de la casa, como tambien muchas balas de la misma i de otras en varias partes de la propiedad; averiando planchas de fierro galvanizado, canales, vidrios de ventana i etc., que hube de reponer al costo i trabajo mios; ascendiendo a 90 pesos, a razon de cambio de 24 peniques. \$ 90.00

Intereses de 3 años 4 meses al 6 % anual " 18.00

Suma. \$ 108.00

J. GOODWIN

» 5.º Destrucion i deterioro de armaduras i muebles en el almacen i casa, efectuado por los soldados en posesion del mismo, el dia 26, 27 i 28 de agosto 1891.

Un mostrador derribado i escritorio forzado,

composturas. \$ 15.75

Armazones i vidriera destruidos; pérdida . . . 23.50

Un banco usado para pesa, destruido; pérdida. 3.00

Cuatro asientos de junco de sillones americanos destruidos, composturas . . . 8.00

Una mesa dañada i filtro de agua quebrado . . . 12.00

Tres sillas de salon, quebradas. 9.00

Un lavador con espejo, quebrado . . . 12.50

Un peinador dañado i pérdida de varios artículos i cepillos 27.00

Deterioro de alfombra en el salon . . . 5.00

Ciento quince pesos 75 centavos, a razon	
de cambio de 24 peniques.	\$ 115.75
Intereses de 3 años 4 meses a razon del	
6% anual.	21.20
	<hr/>
Suma	\$ 136.95

J. GOODWIN

- » 6.º Deterioro i pérdida de cristalería, incluso copas i vasos en el comedor, que eran arrojados i quebrados licenciosamente: dos botellas de cristal para vino fueron perversamente destruidos, como tambien otro vidriado i servicio de té, mui numeroso para ser detallado, la pérdida de todo lo cual no era ménos de ciento setenta i cinco pesos, al cálculo mas bajo; pero, para mí i familia el agravio era mayor, viendo la voluntaria destruccion de todas estas cosas; al mismo tiempo conozco que estaria faltando a un deber si dejase de espresar mi gratitud con la de mi familia, que sentimos hácia un remanente de treinta i seis soldados del rejimiento de infantería 3.º de línea, quienes patrullaron en i al rededor de mi casa en la noche del 26 de agosto 91, sin ningun oficial ni cabo de su rejimiento ni de ningun otro; despues de ver lo que estaba sucediendo, se colocaron de guardia dentro i fuera de la casa, así, dándome i a mi familia alguna proteccion i seguridad, tanto como previniendo hasta un punto, mas destruccion.

A razon de cambio de 24 peniques. . . \$	175 00
Intereses de 3 años i 4 meses, del 6% anual. . .	35 00
	<hr/>
Suma.	\$ 210 00

J. GOODWIN.

» 7.º Pérdida sostenida por mí en los días 26, 27 i 28 de agosto de 1891, por consumo de artículos en el almacén, por los soldados en posesion de ello:

1 barril vino de mesa, 241 litros, a 30 cts. litro	\$	72 30
11 botellas aguardiente de sustancia superior.		10 00
130 libras azúcar cortada americana, a 30 cts. libra.		39 00
22 1/2 libras café molido, a 90 cts. libra.		20 25
8 tarros de ostras, de 2 libras cada uno, a 80 cts. cada uno.		6 40
6 tarros de salmon, de 2 libras cada uno, a 1 peso cada uno.		6 00
15 cajas de sardinas grandes, a 80 cts. cada una.		12 00
9 cajas de id. chicas, a 25 cts. cada una.		2 25
48 kilógs. de galletas, a 40 cts. kilóg.		19 20
5 botellas whisky de Dunville, a \$ 2 cada una.		10 00
7 botellas whisky de Royal Blend, a \$ 2 cada una.		14 00
3 botellas jerez ordinario, a \$ 2 cada una.		6 00
5 botellas jerez superior, a \$ 3 cada una.		15 00
2 botellas vino oporto ordinario, a \$ 1.50 cada una.		3 00
5 botellas vino oporto superior, a \$ 3 cada una.		15 00
23 botellas vino Panquehue, a \$ 1.50 cada una.		34 50
2 arrobas vino Subercaseaux, a \$ 3 arroba.		6 00
1 cajon de té de 5 libras, a \$ 2 libra.		10 00
1 1/2 quesos del país, 32 libras, a 40 cts. libra.		12 80

4 docenas cerveza doppel, a \$ 1.50 docena.	6 00
2 docenas cerveza lager, a \$ 2.25 docena.	4 50
3 docenas limonada, a \$ 1 docena.	3 00
5 vejigas de mantequilla, 8 libras i 11 libras=19 libras, a 80 cts. libra.	15 20
5 botellas de conservas en vinagre, de Morton, a 80 cts. cada una.	4 00
Copas, vasos i botellas estraviadas i quebradas.	30 00

Suma. . . . \$ 376 40

Intereses del 6% anual, setiembre de 1891 hasta Diciembre de 1894. . . . 75 28

A razon de cambio de 24 peniques:

Suma total. . . . \$ 451 68

J. GOODWIN.

» 8.º Agua potable usada para todas las necesidades por las tropas al rededor de la propiedad, desde el sábado 22 de agosto hasta el dia de la quebradura de la cañería por las tropas. Segun cuenta pagada. . . . \$ 17 50

Interes del 6% anual, setiembre 91 a diciembre 94. . . . 3 50

A razon de cambio de 24 peniques. . . \$ 21 00

J. GOODWIN.

Nota.—Esta cuenta fué pagada al recaudador de la Empresa de Agua Potable en setiembre del 91, i habiéndose estraviado aquel documento, fui a la oficina de la

Empresa a obtener una copia para comprobar este hecho, por el cual reclamo; pero no aparece en los libros cuenta alguna cobrada por agua consumida en Viña del Mar durante el mes citado.

J. GOODWIN.

» 9.º Acto de agresion cometido bajo la bandera comercial británica.

Notificacion habiendo sido recibido de entregar inmediatamente mi casa para almacenar provisiones por orden del intendente de Valparaiso, almirante Oscar Viel, quien envió al efecto a un oficial del rango de teniente coronel, el miércoles 26 de agosto, a la 1 P. M.; el departamento principal, usado para almacen de por mayor i menor, tuvo que ser entregado, no habiéndose permitido el tiempo suficiente para desocuparlo de todas las provisiones, licores i movibles pertenecientes a mí, que contenia al tiempo.

(Pocos dias ántes de esta fecha, yo habia cerrado las puertas de mi almacen, a causa de la actitud amenazante de los reclutas del Gobierno entónces en Viña del Mar).

La casa jardin i patio del frente, estando vitalmente en posesion de ellos i ocupados de provisiones del ejército del Gobierno, hasta evacuados el juéves 27, a las 2.30 P. M.

Reclamo por compensacion, por el acto de agresion, la suma de trescientos pesos.	\$	300 00
I el interes sobre ello de 3 años i 4 meses, a razon de 6% anual, sesenta pesos.	.	60 00

Suma, al cambio de 24 peniques. \$ 360 00

J. GOODWIN.

(COPIA)

- » 10. Taller de herrería, hojalatería i gasfitter,—Calle de Valparaíso núm. 83, Viña del Mar.

Sr. Jorge Goodwin a Nazario Araya		DEBE
Setiembre 20.—3 Llaves de bronce de 3/4,		
1" i 1 1/2—\$ 4.50, 8.50 i 7.50.	\$	20 50
2 Coplas, \$ 3;—3 metros cañería de 7/8" \$ 6.		
i 2 coplas, \$ 2.		11 00
2 Codos 7/8" \$ 1.50; 7 metros cañería galvanizada de 3/4" \$ 8.10.		9 60
2 Coplas 60 cts.; 30 pies de manguera de 7/8" a 50 cts. piés, \$ 15.		15 60
Compostura al medidor.		15 00
Colocacion de cañería, llaves, codos i enderezar cañones.		12 80
TOTAL		\$ 84 50
Viña del Mar, Setiembre 30 de 1891. Intereses de 31.4 años, a razon de 6% anual.		16 50
Suma.		\$ 101 00

- » 11. Siendo súbdito neutral británico durante la revolucion de 1891, [yo] el que suscribe, aquí espongo que tambien he sido perjudicado de la siguiente manera:

La muerte de mi esposa fué producida por haber sido amenazada de un oficial en el empleo del Presidente Balmaceda quien cabalgando hácia una puerta de rejas la amenazó con un revólver cargado, al tiempo que ella estaba a la puerta de su propia casa, a las 4 P. M. del día de la batalla de la Placilla, Agosto 28. Mi casa tenia jardin al frente i estaba situada como a seis metros de la acera (calle Viana núm. 3); este oficial cuyo nombre era Holgar Birkedal, vestia uniforme de teniente coronel de artillería.

ria i era mui conocido en Viña del Mar, como tambien un jóven notorio que le acompañaba, llamado Carlos Cordovez, que era empleado de la estacion de Miramar, de espendedor de boletos.

La señora Goodwin sostuvo un espanto i choque tan graves en su sistema nervioso en la ocasion que jamas recobró de ello i murió el 26 de Febrero de 1893, a pesar del cuidado de mi familia i la atencion de mi doctor de familia, señor Ricardo Cannon, su cerebro fué afectado desde aquel dia.

El nombre paterno de la señora Goodwin, era Spencer i nació en Bakewell, Derbyshire, el 9 de Marzo de 1830. Puedo esponer que la señora Goodwin no habia tenido enfermedad grave durante mas de veinte años i rara vez usaba medicinas, siendo siempre fuerte i gozando buena salud.

El negocio que era dirijido por la señora Goodwin me producía ciento cuarenta pesos (\$ 140) al mes i la paralización de ello ocasionó aquella decadencia durante el período de su enfermedad i hasta su muerte [18 meses]; de consiguiente reclamo por la pérdida sostenida a consecuencia de la mencionada paralización la suma de dos mil quinientos veinte pesos. \$ 2,520

Intereses hasta la fecha de muerte, 18 meses, el 6% anual sobre la mencionada suma . . . 226,80

Suma a razon de cambio de 24 peniques. \$ 2,746 80

J. GOODWIN.

- » 12. Nombres de los testigos que pueden atestiguar de los hechos agresivos cometidos contra la persona de la señora Goodwin i en la propiedad perteneciente al señor Jorge Goodwin, por los soldados del ejército del Gobierno durante la semana que terminó el 29 de agosto de 1891.

1.º Señor Ramon Orrego, mayordomo de la propiedad

del señor Cárlos Fehrmann en Miramar; residente en la calle del Cerro núm. 21, Miramar; de nacionalidad chilena; fué recaudador de la Municipalidad de Viña del Mar durante el período de la guerra civil i no prestó servicio a ninguna de las partes combatientes i no tiene interes en mi reclamo.—Durante el último período de la guerra civil permaneció una semana hospedado en mi casa.

2.º Señor Rosario Carvajal T.; constructor residente en el camino carretero de Valparaíso; Caleta Abarca; de nacionalidad chilena; fué empleado durante el último período de la guerra civil para trasportar materiales al fuerte *Callao* por las fuerzas del Gobierno i no tiene interes en mi reclamo.—Sus servicios me eran prestados anteriormente en el acarreo de mercaderías para mi negocio.

3.º Señor Ricardo Abarca, comerciante, residente en la calle Chaigneau esquina camino carretero Valparaíso, Caleta Abarca; de nacionalidad chilena; sirvió a ninguna de las partes combatientes durante la guerra civil i no tiene interes en mi reclamo.—Durante cuatro años proveía de leche mi casa.

J. GOODWIN

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Don Jorje Goodwin reclama del Gobierno de Chile el pago de la suma de 4,135 pesos 43 centavos, en que estima diversos perjuicios que le fueron causados a consecuencia de la guerra civil de 1891, en los días 23, 26, 27 i 28 de Agosto de aquel año. Como ajente del Gobierno de Chile, paso a contestar este reclamo en la forma siguiente.

1 El memorial no está ajustado en todas sus partes a las prescripciones del Reglamento. Así, el reclamante omite declarar categóricamente si ha estado o no al servicio de alguna de las partes

combatientes o si ha recibido sueldo de alguna de ellas; tampoco espresa dónde residía en la época en que ocurrieron los sucesos, ni relata clara i detalladamente los hechos en que está basado el reclamo. El memorial no está tampoco firmado ni contiene el juramento o solemne declaracion de que se habla en el artículo del Reglamento. Solo la traduccion inglesa aparece firmada i seguida de una declaracion o juramento que no ha sido vertido al castellano.

Estas deficiencias hacen inadmisibile el memorial, i son suficientes para que V. E. se sirva desechar la reclamacion, como lo solicito.

2 El reclamante no presenta para comprobar su nacionalidad inglesa, sino la copia de un apunte que existe en el registro de súbditos británicos en el consulado ingles de Valparaiso. Piensa el infrascrito que esa copia no es documento suficiente para dejar establecido que el señor Goodwin nació efectivamente en el lugar que en él se espresa, porque en realidad está tomado de una simple matrícula que se forma con la esposicion que hace el mismo interesado. Si las designaciones hechas en el registro del consulado estan basadas en documentos fehacientes emanados de autoridad competente, puede el señor Goodwin exhibir esos documentos ante V. E. ya sea orijinales o en copia autorizada. i de esta manera rendirá una prueba clara i evidente de su nacionalidad. Mientras no lo haga, el infrascrito se cree con derecho para negarle el carácter de súbdito británico que se atribuye, i V. E. no podrá entre tanto considerarse competente para conocer en la presente reclamacion, ya que el tribunal ha sido constituido solamente para oír reclamaciones de súbditos británicos, siendo, por consiguiente, lo primero que debe comprobarse el *status*, o nacionalidad del reclamante.

3 Los perjuicios reclamados por el señor Goodwin pueden calificarse en cuatro diversas categorias: A.—Daños causados por granadas i balas lanzadas de los cerros de Salinas el dia 23 de agosto; B.—Destruccion i deterioro de muebles i objetos que tenia en su casa, durante los dias 26, 27 i 28 de agosto, i consumo de artículos del almacen por soldados del ejército chileno; C.—Ocupacion de

la casa para almacen de provisiones del mismo ejército, desde el 26 de agosto a la una del día hasta el 27 del mismo a las dos i media de la tarde; D.—Pérdida sufrida en el negocio que dirijia la esposa del señor Goodwin a consecuencia de la enfermedad i fallecimiento de esta señora, provenientes ámbas del espanto que le causó la amenaza de un oficial llamado Holgar Birkedal. Voi a tratar por su orden cada una de esta série de perjuicios.

Avanzaré desde luego con relacion a todos ellos, que las casas de la poblacion de Miramar han sido construidas a inmediacion del fuerte «Callao» anterior a ellas, contra la espresa prohibicion de las Ordenanzas de Artilleria que rijen en Chile; i que los perjuicios orijinados por esta contravencion solo son imputables a los dueños o arrendatarios de esas propiedades. *Quod quis ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.*

A Daños causados por granadas i balas lanzadas de los cerros de Salinas.

Aunque no esté comprobado que efectivamente los disparos de la artilleria del ejército invasor hubieran causado los destrozos que espresa el reclamante en la segunda foja de su memorial, supuesto el hecho, ninguna responsabilidad incumbiria al Gobierno de Chile por este motivo. Acampado el ejército que habia vencido en Concon el 21 de Agosto, en las alturas de Reñaca i en el punto en que se juntan los caminos que van de Colmo i de Concon a Viña del Mar, el comandante en jefe ordenó atacar en la madrugada las posiciones enemigas de Viña del Mar i del fuerte Callao, a fin de avanzar hacia la ciudad de Valparaiso. En cumplimiento de esta orden tuvo lugar el día 2; un combate de artilleria entre la primera brigada del ejército constitucional i las tropas de esta arma que guarnecian el fuerte Callao i el lugar de Miramar. Posible es que alguna granada o bala disparada desde el cerro de Salinas, ocupada por aquella, hubiera causado los destrozos cuya indemnizacion pretende el reclamante. Pero ellos provendrian en tal caso de una operacion lejitima de guerra, de que no puede nacer responsabilidad alguna. Me atengo a este respecto a la doctrina sostenida por todos los tratadistas de Derecho Internacional, doctrina consagrada por numerosos fallos pronunciados por tribunales análogos al presente,

i de reconocido prestigio como lo fueron las comisiones mistas que funcionaron en Estados Unidos despues de la guerra de separacion i en 1872 i 1873; i de los tribunales anglo-chileno e italo-chileno que funcionaron de 1884 a 1888. [Véase el parte oficial del jefe de Estado Mayor don Emilio Körner fechado en diciembre de 1891, *Memorándum de la Revolucion de 1891*, documento número 74.— Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículos 652 i 662; Fiore, *Nuevo Derecho Internacional*, t. 3.º, § 1714 i siguientes; i artículos 1336 del *Derecho Internacional Codificado* del mismo autor.)

B. Destrucion i deterioro de muebles i objetos i consumo de artículos tomados por la fuerza en los días 26, 27 i 28 de Agosto de 1891.

Debo prevenir para mejor intelijencia de esta reclamacion, que el lugar de Miramar donde se encontraba la casa del reclamante es un barrio de la poblacion de Viña del Mar, situado sobre una colina en la cual se construyó por los años de 1874 a 1876 una fortaleza que se denomina *Callao*. Este barrio fué ocupado desde el día 22 de Agosto de 1891 por fuerzas de artillería e infantería encargada de contener por ese lado el avance del enemigo hacia la ciudad de Valparaiso. El ejército invasor no creyó prudente despues del tiroteo del día 23, emprender por esa parte el ataque del enemigo, i resolvió hacer un movimiento de circunvalacion, para atacar a Valparaiso por el naciente i por el sur. Cuando en el campamento del Gobierno pudo notarse este movimiento i el consiguiente abandono de las posiciones al norte de Viña del Mar, las tropas que guarnecian a Miramar se dirijieron hacia el Alto del Puerto i la Placilla, quedando abandonado i desguarnecido el barrio de Miramar. La presencia del enemigo i la inminencia de un combate próximo, que efectivamente tuvo lugar dos dias despues, no permitieron a las autoridades que dominaban en Viña del Mar, prevenir ni castigar los atentados que pudieran cometerse contra las personas i la propiedad. Es posible que hordas de forajidos, o grupos de soldados desertores o dispersos trataran de aprovechar aquellos aciagos momentos para ejecutar actos de robo i vandalaje; pero hechos de esta naturaleza en tales circunstancias

no comprometen la responsabilidad del Gobierno. Así lo declaran los autores que tratan de la materia, i así fué declarado uniformemente en los tribunales que funcionaron en Chile i Estados Unidos en 1884 i en 1894. El principio establecido por esos tribunales ha sido resumido por Wharton en estas palabras: «Los actos ejecutados por soldados o personas agregadas al ejército sin órdenes de sus jefes superiores no comprometen al Gobierno.» (Wharton, *International Law Digest*, § 225, p. 599.)

A su turno el Tribunal chileno-americano estableció como una base para sus decisiones, la regla siguiente: «Los actos de simple merodeo o pillaje practicados por soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes no afectan la responsabilidad de los Gobiernos. Tales hechos son considerados como delitos comunes, sujetos solo a la represion penal ordinaria.» (Sentencia núm. 18 del Tribunal de Washington).

Mal puede, pues, el reclamante pretender que el Gobierno de Chile le indemnice esta clase de perjuicios.

C. Ocupacion de la casa durante 25 horas treinta minutos para almacen de provisiones del ejército.

Asegura el reclamante que el vice almirante Viel lo obligó a desocupar su casa para hacerla servir de almacen para las provisiones del ejército.

A ser cierta esta medida, estaria perfectamente autorizada por las leyes de la guerra salvo la indemnizacion que era justo pagar al propietario. Sin embargo, el hecho me parece dudoso i hasta inverosímil, porque no se concibe que se hubiera llevado a cabo sin que el reclamante exijiese un recibo o una orden escrita para comprobar su derecho; ni ménos puede aceptarse que el señor Viel, cuyo espíritu recto i caballeroso era mui conocido, se negase a dar tal justificativo, lo cual ademas no ha sido siquiera insinuado por el reclamante. En todo caso, no se puede poner en duda que el señor Goodwin estima a mui subido precio el arrendamiento de su casa por el espacio de 25 horas. Talvez la décima parte de la suma reclamada seria una justa indemnizacion, atendida la calidad de la casa i la naturaleza del negocio que alli habia.

La declaracion del señor Wallace que ha sido acompañada, aún

prescindiendo de su falta de mérito legal, carece de importancia porque él no presenció la ocupacion de la casa i se refiere solo a actos que pudieron prepararla.

D. Pérdida sufrida en el negocio que dirijia la esposa del señor Goodwin a causa de la enfermedad i fallecimiento de ella. ocasionadas por la amenaza de un oficial llamado Holgar Birkedal.

Esta parte de la reclamacion parece encontrar su fundamento en un informe del señor Ricardo Cannon, que empieza por manifestar que desconoce el hecho de la amenaza por que en la época en que se dice ocurrido, no se encontraba en Chile ese caballero. Partiendo en seguida de la hipótesis de la efectividad del hecho, expresa la opinion de que pudo producir un efecto perjudicial sobre el cerebro de la señora Goodwin i aun apresurar su fin, «si no fué directamente responsable por sus afecciones cerebrales.»

A esto debo observar: 1.º Que no consta que la señora Isabel Spencer de quien habla la partida de defuncion núm. 5 fuera real i efectivamente la esposa lejitima del reclamante; 2.º Que no es verosímil el hecho, puesto que a las 4 de la tarde del 28 de Agosto de 1891, todo el ejército del Gobierno que peleó en la Placilla estaba roto i desecho, sus soldados i oficiales dispersos, fujitivos u ocultos, e imposibilitados por consiguiente. sobre todo los oficiales, para salir a luz i ménos para ejecutar hechos como el de que se trata; a lo que se añade, que no se ha encontrado en las listas de oficiales de aquel ejército el extraño nombre de *Holgar Birkedal*, que no es siquiera castellano ni chileno, lo cual consta del certificado que acompaño; 3.º Que es imposible establecer que una amenaza de ese jénero pudiera ocasionar la enfermedad i muerte de la señora Goodwin, siendo ineficaz e incompleto el informe que se presenta de un médico que llegó al pais con posterioridad a esos sucesos; 4.º Que la falta de la utilidad de 140 pesos mensuales de que se lamenta el reclamante, no puede comprobarse, ni importaria en ningun caso otra cosa que un perjuicio indirecto, que no hai obligacion de indemnizar; i 5.º finalmente que el Gobierno de Chile no puede ser responsable de las consecuencias de una falta o delito que ha cometido un oficial fuera de las filas, de cuartel i del campamento, espontáneamente sin orden e instruccion de nadie,

antes bien contrariando los propósitos de los jefes, que procuraban mantener todo el respeto debido a las personas i propiedad de los neutrales.

4 Me resta solo considerar dos puntos accesorios.

El señor Goodwin convierte los pesos chilenos en moneda de veinte i cuatro peniques para el efecto de sumar sus cargos. La operacion podrá ser muy conveniente para él; pero no se funda en ninguna razon atendible. El cambio de la moneda nacional estaba en extremo deprimido en la época en que ocurrieron los sucesos que han motivado esta reclamacion. El peso chileno valia entonces algo como diez i seis peniques: suponerles un valor de 24, importa aumentar en un cincuenta por ciento el precio de objetos de cuya pérdida se trata de obtener indemnizacion.

La segunda observacion versa sobre el cobro de intereses, que no hai razon alguna para exigir. Los intereses importan una indemnizacion por la mora; i en el presente caso el Gobierno de Chile no ha incurrido en mora alguna, pues no solo su obligacion no era exigible, sino que ni siquiera estaba declarada, i espera que no se llegará a declarar su existencia en vista de las razones espuestas.

Suplico, pues, a V. E. se sirva rechazar la presente reclamacion, o declararse incompetente para conocer de ella.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Excmo. Señor:

Jorge Goodwin, en el reclamo que tengo interpuesto en contra del Gobierno de Chile, por daños que me acontecieron, a consecuencia de los acontecimientos bélicos, durante los dias 23, 26, 27 i 28 de Agosto de 1891 a V. E. contestando la defensa del agente de Chile, digo:

Que la misma sabia defensa de este señor abogado, milita a favor de mi reclamo, por cuanto reconoce que se me debe pagar, una indemnizacion avaluada en una cantidad menor de la que reclamo i ello es obvio como paso a demostrarlo:

1.º La prueba que acompaño demuestra de un modo fehaciente que los hechos espuestos en mi memorial, son la verdad pura i neta.

2.º Que las personas que absuelven el interrogatorio son de notoria honorabilidad.

3.º Que las excepciones puestas por el agente de Chile con respecto que no soi súbdito británico, o que no lo he comprobado, queda destruida con los documentos que acompaño.

4.º Que el aforismo de *Quod quis ex sua culpa damnum sentit*, no es aplicable en este caso, puesto que el fuerte Callao fué construido con anterioridad a la vijencia que hoi dia tiene la Ordenanza de Artillería, por consiguiente, el *non intellectur damnum sentire*, es estemporáneo.

Finalmente, Excmo. Señor, lo obrado en este espediente da plena prueba de lo lógico i equitativo de mi reclamo.

Por cuyo motivo a V. E. suplico que reservándome para lo oral se sirva tener lo espuesto presente para los fines a que hubiere lugar.

J. GOODWIN

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El agente del Gobierno de Chile, impuesto del escrito de réplica que don Jorge Goodwin ha presentado en la reclamacion núm. 28, procede a duplicar en la forma siguiente.

El reclamante sin preocuparse de las razones de derecho alegados en mi contestacion i que dan suficiente mérito para rechazar su reclamo, se limita a tratar de comprobar que son exactos los hechos

que ha espuesto en su memorial i que él es súbdito británico i lejítimo esposo de doña Isabel Spencer. Circunscrito a estos términos el escrito de réplica, mi tarea se facilita notablemente, permitiéndome no molestar por largo tiempo la atencion del Excmo. Tribunal.

1. Considera el señor Goodwin que queda establecido su carácter de súbdito británico con la exhibicion que hace de un papel que parece ser la copia simple de una partida de nacimiento otorgada por un teniente cura de la parroquia de Barlborrwgh del condado de Derby. Esa copia que no está autorizada por ningun funcionario público, no tiene ninguno de los caracteres exijidos por el Derecho para estimarla auténtica, i en ningun caso llegaria a constituir la prueba necesaria para considerar al señor Goodwin como un súbdito británico, pues no se espresa en ella el país en que está situada la parroquia en que el reclamante fué bautizado.

Queda en pie, por consiguiente, la objecion que le fué hecha acerca de este particular, i el ajente que suscribe se ve en el caso de mantener la escepcion de incompetencia que tiene alegada.

2. No tiene tampoco mas valor la informacion sumaria que el señor Goodwin ha rendido en Valparaiso ante un ministro de fe para acreditar los hechos que aparecen del interrogatorio a cuyo tenor declaran cuatro testigos. Esa informacion carece de mérito probatorio porque se ha rendido sin citacion mia i sin autorizacion de V. E. Aun, dentro de las leyes chilenas, es evidente que de nada sirve, porque el funcionario que ordenó recibirla ha estralimitado sus facultades, desde que la lei solo le permite recibir informaciones *ad perpetuam* para casos i en circunstancias espresamente determinadas, entre los cuales no se comprende el de que ahora se trata.

La partida de matrimonio del señor Goodwin, aunque aparece en un papel despedazado que ni siquiera se ha podido agregar a estos antecedentes sino dentro de un sobre del mismo modo que la copia de la partida de nacimiento, tiene, sin embargo, mayores apariencias de autenticidad que esta última. Apesar de eso, no puede atribuírsele el carácter de instrumento público por faltarle la necesaria legalizacion. Confio en que V. E. asi lo ha de reconocer en el momento oportuno.

Considero, por mi parte, que poco o ningún auxilio puede prestar ese informal documento a la reclamacion del señor Goodwin en cuanto pide se le paguen perjuicios que atribuye a la muerte de su esposa. He tratado este punto en la contestacion, i creo inútil ampliar lo que dije al respecto. Todo lo que puedo agregar es que no se sabe siquiera hasta hoi si el reclamante es o nó heredero de la que dice su esposa, i en caso de no serlo, si tiene o no representacion de los herederos lejitimos de ésta para pedir una indemnizacion que solo a ellos podria corresponder.

No habiendo otra alegacion sustancial en el escrito de réplica, me reservo para responder en la audiencia del Tribunal a las nuevas razones que puedan aducirse verbalmente; concluyendo, entre tanto, por pedir a V. E. que, si no acepta las excepciones dilatorias, se sirva rechazar este reclamo en todas sus partes.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Jorge Goodwin, natural de Balborough Inglaterra, comerciante, reclama del Gobierno de Chile tres mil seiscientos setenta i nueve pesos quince centavos por capital, i cuatrocientos cincuenta i seis pesos veintiocho centavos por intereses, por ocupacion de parte de su casa, daños al edificio, apropiacion de artículos de su almacen i pérdidas sufridas por paralizacion de negocio.

El reclamante espone que el 23 de Agosto de 1881, granadas disparadas de los cerros de las Salinas por las fuerzas de la oposicion atravesaron la casa que tenia el ocurrente en Miramar, calle Viana números 1, 3 i 5, causando daños al edificio por un valor de ciento ocho pesos; que el día 26 de Agosto de 1891, por órden del señor Viel, intendente de Valparaiso, un teniente coronel de ejército se apoderó del departamento principal de la casa del reclamante que, desde algunos dias, se mantenía cerrada por temor a los

reclutas; que tanto al departamento indicado como toda la casa, jardín i patio, quedaron virtualmente ocupados por fuerzas del Gobierno; reclama por este capítulo trescientos sesenta pesos, incluidos los intereses; que durante los días 26, 27 i 28 de Agosto de 1891 de la ocupacion de su casa i almacén, los soldados consumieron mercaderías por un valor de cuatrocientos cincuenta i un pesos sesenta i ocho centavos comprendidos los intereses; que la cuenta de agua potable que tuvo que pagar el demandante, por los días que ocuparon su casa los soldados, ascendió a diecisiete pesos cincuenta centavos, la que, a su vez, él reclama al Gobierno de Chile, mas intereses, importando este ítem veintiun pesos, que la reparacion de los daños causados por los soldados a la cañería de agua costó al reclamante ochenta i cuatro pesos cincuenta centavos, suma que con dieziseis pesos cincuenta centavos por intereses, exige también del Gobierno de Chile; que los soldados ocupantes destruyeron muebles de la casa i servicio por un valor de trescientos cuarenta i seis pesos noventa i cinco centavos, computados también los intereses; i por último, que el 28 de agosto de 1891 el teniente coronel Holgar Birkedal del ejército del Presidente Balmaceda, acompañado de don Carlos Cordovez, espendedor de boletos de la estación de Miramar, amenazó con un revólver a su esposa, estando ésta en la puerta de su casa; que esto sucedió a las 4 P. M. el día de la batalla de la Placilla; que fué tal el espanto que le ocasionó esto a la señora Goodwin que, a pesar de sus sesenta i un años, era persona tan robusta que no había tenido enfermedad alguna desde hacia mas de veinte años, que su cerebro se afectó de tal manera que la postró a la cama i murió a los dieziocho meses; que la señora Goodwin dirigía la venta del comercio del reclamante que producía ciento cuarenta pesos al mē, utilidad que se redujo a cero durante los dieziocho meses de enfermedad de la señora, pues hubo que cerrarse el negocio; por este lucro cesante mas intereses, cobra al Gobierno de Chile dos mil setecientos cuarenta i seis pesos ochenta centavos.

Acompaña como justificativo de lo espuesto en el memorial, declaraciones de dos testigos presentadas ante el vice cónsul de S. M. B. en Valparaíso abril de 1895, ofreciendo además otros

testigos; una partida de defuncion de la esposa del reclamante; un certificado del doctor Cannon, de Valparaiso, que atestigua la buena salud de la difunta esposa i la creencia de que la impresion de la amenaza que, le cuentan, se hizo a la señora, puede mui bien haber sido causa de su fallecimiento posterior; cuenta de las reparaciones de la cañeria de agua potable; i por último, partida de inscripcion del reclamante en el registro del consulado británico en Valparaiso,

El agente de Chile, en su contestacion, pide desde luego que se declare inadmisibile el memorial por no ajustarse a las prescripciones del Reglamento; que la copia de una inscripcion en el registro del consulado británico en Valparaiso, no es justificativo de nacionalidad, pues para que aquella tuviera el alcance que se le pretende dar, debia haber sido estractada de documentos correspondientes, los cuales, si existieran, los habria producido el reclamante ante este Tribunal; por consiguiente, no estando justificada la nacionalidad, el Tribunal es incompetente para conocer de la reclamacion; que entrando al fondo de la reclamacion, la considera ésta insostenible, tanto porque los hechos están totalmente improbados cuanto porque de la relacion misma del memorialista se desprende que los daños que dice sufrió fueron causados durante combates, i como consecuencia de estos, lo que, segun los precedentes establecidos por tribunales análogos, opinion de tratadistas i doctrina universal de Derecho de Jentes, relevan de toda responsabilidad a los belijerantes; que respecto a la muerte de la señora Goodwin, que no consta que la señora Isabel Spencer, de que habla la partida de defuncion agregada, fuera esposa lejitima del reclamante; que no es verosímil el hecho de la amenaza a las 4 P. M. del dia 28 por un oficial del ejército del Gobierno, pues en ese dia i a esa hora estaba deshecho todo ese ejército por la derrota de la Placilla, sin contar con que, segun el certificado que acompaña, no existia oficial del nombre indicado por el reclamante en el ejército del señor Balmaceda; que es imposible probar que el fallecimiento en cuestion proviniera de la amenaza de que se habla; que la falta de utilidad de ciento cuarenta pesos mensuales de que se queja el reclamante no podria comprobarse i que en ningun caso

importaria otra cosa que un perjuicio indirecto que no hai obligacion de indemnizar; i finalmente, el Gobierno de Chile no puede ser responsable de las consecuencias de una falta o delito que ha cometido un oficial fuera de las filas, del cuartel i del campamento, espontáneamente, sin orden e instruccion de nadie; ántes bien, contraviendo los propósitos de los jefes, que procuraban mantener todo el respeto debido a las personas i propiedad de los neutrales; por las razones precedentes, en todo evento deberá rechazarse la reclamacion.

Con la réplica se acompañan varios documentos para justificar la nacionalidad del reclamante i la efectividad de su matrimonio con la señora Spencer, como asimismo una informacion sumaria para comprobar estos mismos hechos i otros de los espuestos en el memorial.

En la dúplica se desconoce el mérito de los documentos i de la informacion rendida, que lo ha sido fuera de juicio i sin las formalidades prescritas por el Reglamento; i

Considerando: que si las granadas i balas dañaron la casa habitada por el reclamante, segun él lo declara, esta desgracia fué consecuencia del combate de artillería que se libró el 23 de agosto de 1891 entre las tropas congresistas acampadas en las alturas de Las Salinas i las tropas balmacedistas colocadas en el cerro de Miramar; que a un Gobierno no puede hacerse responsable por los perjuicios que pudieran ocasionar las balas o bombas disparadas en combate regular i que desgraciadamente cayeran sobre las propiedades de personas que no tomaron parte en el combate;

Considerando: que el reclamante no ha probado en lo bastante que soldados ocuparon su despacho i casa entre el 26 al 28 de agosto de 1891, ni que cometieran los daños o saqueos por los cuales pide indemnizacion; tampoco prueba que esta ocupacion i daños fueran ordenados o tolerados por oficiales; que aun cuando los hechos aducidos por el reclamante estuvieran probados, no podria hacerse responsable al Gobierno de Chile por actos de merodeo cometidos por soldados dispersos i sobre los cuales no ejercian los jefes una vijilancia inmediata;

Considerando: que si la mujer del reclamante, Isabel Spencer,

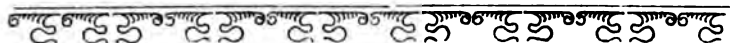
murió el 26 de febrero de 1893, no resulta en manera alguna, de los documentos presentados, que esta desgracia tuviera por orijen la amenaza con que le intimidara dieziocho meses atras un oficial del ejército vencido en la Placilla; que al Gobierno de Chile no puede hacérsele responsable por las pérdidas pecuniarias que el reclamante pretende haber experimentado a consecuencia de la muerte de su esposa, lo que le privó de su cooperacion en las atenciones de su comercio;

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral declara, por unanimidad de votos, disintiendo el señor árbitro británico solamente acerca del ítem por la ocupacion de la casa, que dicho árbitro considera aceptable, sin lugar la presente reclamacion.

Santiago, 4 de noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 4 de noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 29

PETTIE Y C.ª

MEMORIAL

El que suscribe, Santiago A. Pettie, socio de la casa comercial de Pettie i Ca., actualmente residente en Iquique, natural de Edimburgo, Escocia, nacido en el año 1849, por la presente declaro con toda formalidad lo siguiente, referente a nuestro reclamo contra el Gobierno de Chile:

- 1.º Vivía en Iquique cuando ocurrieron los hechos que motivaron este reclamo;
- 2.º Soi súbdito británico;
- 3.º No tomé parte ni directa ni indirectamente en la guerra civil, ni he estado en servicio, ni he recibido pago de ninguna de las partes combatientes;

La razon social de Pettie i Ca., domiciliada en Iquique, consiste de dos personas, a saber: el que suscribe i Santiago Aitken Moir, tambien súbdito británico, nacido en Milngavie, Escocia, el año 1857 e igualmente no ha participado en ninguna manera en la guerra civil;

- 5.º No he recibido compensacion de dinero ni en otra forma, i este reclamo no ha sido presentado a otro Tribunal, pero fué entregado hace algun tiempo al señor Ministro de Su Majestad Británica en Santiago, el señor Kennedy;

6.º Los pormenores del reclamo son como sigue, i el valor total reclamado es de once mil novecientos setenta i dos pesos, al cambio de veinticuatro peniques, a saber: £ 1.196 4-0. Un mil ciento noventa i seis libras esterlinas cuatro chelines, sin contar intereses.

Mercaderias

7 tarros aceite de linaza	\$ 10 50	\$ 73 50
38 libras barras de acero	10	5 51
55 libras acero ampollado	14 1/2	5 50
1 cajon aceite de nabo	15 00	15 00
400 rollos guias para minas	8	32 00
12.66 quintales combos de acero	15	189 90
8.25 id. pintura de color.	9.40	77 55
14.50 id. pintura de color	9.75	141 37
5.75 id. pintura zinc	12 20	70 15
24.50 id. pintura zinc	13 25	324 62
6 id. pintura albayalde	11 75	70 50
7.75 id. pintura albayalde	10 77	83 46
25.75 id. pintura óxido	9 75	251 06
7.50 id. azarcon	12	90 00
3 id. azarcon	16 50	49 50
9 1/2 id. clavos	8 50	80 75
3.71 id. hilo	27	100 17
2.74 id. hilo	46	123 30
3 barriles cerveza negra	14	72 00
Cajon Whiskey	15	15 00
2 id. cerveza blanca	6	12 00
3 docenas baldes de zinc	6 50	19 50
5 1/2 docenas palas cuadradas de acero	11	99 00
13 1/2 metros diablo fuerte	3	40 50
646 sacos metaleros	28	460 88
600 sacos para carbon	30	180 00
2 quintales calamina.	9	18 00
1 barril tiza	8 35	8 35
46 libras pabilo	50	23 00

25 resmas	papel de oficio.	.	.	1 50	37 50
8 tarros	aceite linaza	.	.	12	96 00
5 cajones	jabon, a cuatro pesos	.	.	4	20 00
1 barril	Cimiento	.	.	10	10 00
12	Colchas de vicuña.	.	.	25	300 00
5	id.	.	.	17	85 00
4	id.	.	.	40	160 00
4	id.	.	.	50	200 00
4	id.	.	.	30	120 00
1	id.	.	.	22	22 00
8	id.	.	.	40	320 00
1	id.	.	.	60	60 00
1.160 metros	Cable de acero	.	.	40	464 00
300	id. id.	.	.	30	90 00
300	id. id.	.	.	50	150 00
27	Remos para lanchas	.	.	12 00	324 00
18 docenas	Alfombras	.	.	5 00	90 00
21/12	id. Alfombras	.	.	30 00	62 50
2 barricas	Grasa de pino	.	.	7 00	14 00
1 qtl.	Clavos galvanizados	.	.	16 00	16 00
42 lbs.	Té	.	.	1 35	56 70
3 sacos	Koke Ingles	.	.	4 00	12 00
1 fardo	Pasto	.	.	5 00	5 00
4 docenas	Tubos de vidrio	.	.	9 00	36 00
11 cajas	Conservas inglesas	.	.	30 00	330 00
89	ponchos de lana	.	.	48 00	356 00
352 docenas	pañuelos de algodon	.	.	1 32	464 64
317 1/2	id. id. id.	.	.	1 32	419 10
10	id. pañuelos blancos.	.	.	96	9 60
1 barrica	tierra de color	.	.	10 00	10 00
7 libras	pólvora en frasquitos	.	.	50	3 50
17	paquetes fulminantes.	.	.	20	3 40
1.225 1/2 metros	Percala	.	.	20	245 10
566.25 metros	Percala	.	.	19	107 59
593.25	" id.	.	.	12	124 58
1.191.50	" id.	.	.	19	145 57

711.50	»	id.	.	.	.	22	156 53
135	»	id.	.	.	.	23 1/2	55 11
861	»	id.	.	.	.	10	176.40
1.750	»	id.	.	.	.	10	350.00
							<u>\$ 8.540.06</u>
Al cambio de 14 d:							₡ 854-0-0
Intereses de Feb. 19/91 a Dic. 31/94 6% An.							» 196-8-3

Oficina privada

1 mesa escritorio de caoba.	\$ 500 00
1 caja contra incendio	525 00
1 escritorio de pino	200 00
2 mesas de nogal	30 00
2 sillas	15 00
1 estante	10 00
2 carpetas	16 00
1 diccionario, 1 Lloyd Register	50 00
4 planos de Iquique	40 00
2 canastos para papeles, 1 canasto para car-					
tas, 8 libros copiadores, 10 libros órdenes,					
1 escupidera, 1 termómetro	90 00
1 alfombra i 2 pisos	30 00
Papel sellado i pólizas.	275 00
Papel de carta, papel de oficio	70 00
2 tinteros, 1 regla	10 00
6 metros reja de nogal, 10 pesos.	60 00 \$ 1,921 00

Oficina jeneral

1 escritorio de pino	\$ 80 00
2 mesas imitacion nogal	50 00
2 estantes para libros	38 00
1 prensa de fierro i mesa	100 00
1 mesa de pino	20 00

1 medidor de gas i cañería	120 00	
1 reloj	30 00	
3 sillas i 2 bancos.	50 00	
1 máquina multiplicadora	45 00	
1 estante, 2 canastos para cartas, 7 tinteros, 2 reglas, 1 canasto para papeles, 10 agarra papeles	68 00	
2 mil sobres, 5 resmas papel secante, 3 car- petas, plumas i lápices	64 00	
1 balanza para cartas, 6 sellos de goma, 3 ca- jas de laton charolado	36 00	
15 metros reja de nogal 10 pesos	150 00	
6 metros encerado 3 pesos	18 00	\$ 869 00

Almacen

1 armazon de madera blanca	\$ 30 00	
3 cajones de madera para guardar libros	30 00	
1 romana para salitre	150 00	
1 romana chica	50 00	
Herramientas, cepillos, serruchos, hachas, martillos, formones	75 00	
2 mostradores de pino	90 00	
6 cajas forradas con zinc para muestras de salitre i 2 sondas.	94 00	
2 boses para lanchas i cabo de manilla.	95 00	
24 cajas para muestras de salitre	12 00	632 00

	\$ 3,422 00	
Al cambio de 24 peniques	£ 342-0-40	
Intereses de Febrero 19/91 a Dic. 13/94 6 % An.	78-14-3	

7.º Las mercaderías, muebles i enseres cuyo valor se reclama existian en el almacen núm. 1 F, calle de Bolívar Iquique, i fueron totalmente destruidos el dia 19 de febrero 1891 por un incendio

que principió durante el bombardeo de Iquique. Este incendio fué causado por la lucha entre las dos partes en tierra i el bombardeo de los buques de guerra en la bahía;

8.º No se dió ningun recibo por las mercaderías i efectos destruidos.

9.º Acompaño como prueba de la existencia a esa fecha, de las especies perdidas los certificados de los agentes de las compañías de seguro contra incendio, segun los cuales consta que los efectos fueron asegurados por las pólizas menzuales.

El valor de esas pólizas no fué pagado por las Compañías por ser el origen del incendio fuera de las condiciones de las referidas pólizas.

Tambien acompaño la protesta hecha por mi ante el Consulado británico de este puerto en el año 1891.

Es notorio que el incendio hubiera sido apagado por las bombas, sino por las amenazas de los soldados, quienes por orden superior les impidieron trabajar i los amenazaban con sus rifles.

Tambien es bien conocido i corroborado por evidencia i testigos oculares que esta manzana fue deliberadamente incendiada por las tropas del coronel Soto como una medida para forzar a la partida contraria a salir de la Aduana que defendian.

Véase el Boletín Oficial núm. 21 página 280 del año 1891.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion número 29, en la cual don Santiago A. Pettie titulado socio de la casa comercial Pettie i Cia., demanda la suma de \$ 11.972, o sea, £ 1,196-4-0, al cambio de 24 peniques por peso, mas £ 275-2-6 por intereses, valor atribuido a mercaderías i muebles que se dicen destruidos por un incendio, durante el combate de Iquique, el 19 de Febrero de 1891.

1 Para que V. E. pueda competentemente conocer de esta reclamacion, es preciso que no quede duda acerca de la nacionalidad inglesa del reclamante, y la duda siempre existirá mientras no se acredite la autenticidad i se legalicen debidamente las firmas de las partidas de nacimiento acompañadas.

2 El señor Pettie no ha acreditado la existencia de la sociedad que dice tener con don Santiago Aitken Moir, ni ha justificado su personería para reclamar a nombre del segundo, como debia hacerlo, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 2.º del art. V del Reglamento de Procedimientos dictado por V. E.

Tampoco se ajusta el memorial a otras de las formalidades prescritas en dicho Reglamento, lo que se notará confrontando el primero especialmente con los artículos I, III, VII i IX del segundo.

Todo lo cual hace inadmisibile la reclamacion, por defectos de forma.

3 El reclamante no ha cuidado de acreditar los hechos que en el memorial asevera.

Los testimonios privados anexos, que se dicen espedidos por dos agentes de compañías de seguros, no tienen el mérito probatorio que se les atribuye. Aun revestidos de las formalidades necesarias, seria imposible considerarlos como comprobantes de que las especies cuyo valor se reclama eran del reclamante i existian efectivamente en poder de éste el dia 19 de Febrero de 1891. Verdad que los referidos testimonios o certificados no dicen eso. Se refieren a otra cosa.

Así como no se ha probado el dominio del reclamante sobre aquellas especies, tampoco se ha probado su destruccion en la fecha i por la causa que en el memorial se espresan, ni el valor antojadizo que se les atribuye.

Por mi parte, niego que el incendio fuera obra deliberada de los soldados del coronel Soto i que éstos impidieran trabajar a los bomberos. En la protesta anexa, que el reclamante formuló ante el cónsul ingles de Iquique el dia 10 de Junio de aquel año de 1891, no hizo la menor referencia a esas circunstancias, agregadas *a posteriori*.

4 La verdad es lo que en dicha protesta i en el núm. 7.º del

memorial mismo se dice acerca del incendio, esto es, que se produjo a consecuencia de las operaciones militares, principalmente de las bombas arrojadas por la Escuadra. Fué efectivamente resultado necesario e inevitable de una operacion bélica perfectamente lícita que, como caso de fuerza mayor, no impone responsabilidad a mi Gobierno.

Aun en la hipótesis, no realizada, de haber el coronel Soto ordenado el incendio de ciertos edificios para forzar, como dice el memorial, la rendicion de los defensores de la Aduana, el hecho habria sido autorizado por las leyes i usos de la guerra i no habria, por lo tanto, afectado tampoco aquella responsabilidad.

§ El reclamante alude al *Bolctín Oficial de 1891*. Yo tambien hice referencia a él en la dúplica correspondiente a la reclamacion núm. 1, del señor W. Perkins, el primero de los reclamantes con motivo de aquel incendio i combate de Iquique.

Invocé en aquella dúplica el testimonio de diversos periódico neutrales, la sentencia publicada en la páj. 1113 de la *Gaceta de los Tribunales* del año 1892, i una carta, que acompañé orijinal, firmada en Valparaíso el 18 de Enero de 1892, a bordo del buque de S. M. B. *Warspite*, por el capitán Lambton i el contra-almirante Hot-ham.

En la contestacion a esa primera reclamacion presentada ante V. E. por el honorable agente del Gobierno de S. M. B., ofrecí prueba testimonial sobre el oríjen del incendio i su relacion con los bomberos, indicando como testigos a los siguientes señores, cuyo testimonio ofrezco tambien sobre los mismos hechos:

Coronel don José Maria Soto, domiciliado en el pueblo de Hualqui, provincia de Concepcion;

Diputado don Manuel Salinas;

Capitan de navio don Baltazar Campillo;

Jeneral don Gregorio Urrutia;

Médico don Ramon Vega;

Diputado don David Mac-Iver, residente en Santiago, como los cuatro anteriores.

Comerciante don Augusto Wilson, residente en Iquique.

A esos agregué en dicha contestacion al comerciante don Andres Tassara, italiano, oficial del cuerpo de bomberos de Iquique, residente en esa ciudad, que fué auxiliado por el coronel Soto para contener el incendio.

Ofrecí tambien el testimonio del comandante don Vicente Merino Jarpa, al cual puedo ahora añadir el del capitan de corbeta don Meliton Gajardo i el del teniente de marina don Julio Sánchez, chilenos como el señor Merino Jarpa, a quién acompañaron en la defensa de la Aduana.

Los tres pueden particularmente declarar como es cierto que desde adentro de la casa de la Aduana no podian ver al coronel Soto i sus soldados, i que cuanto han podido aquellos decir atribuyendo a éstos el incendio i el impedimento al trabajo de los bomberos, lo han dicho simplemente de oídas i en circunstancias de haber interes en echar sobre el partido de aquel coronel la mala voluntad del vecindario de Iquique.

Para no repetirme, reproduzco aquí, en cuanto son aplicables a esta reclamacion, todos los antecedentes i alegaciones de hecho i de derecho espuestos en la referida reclamacion núm. 1 del señor W. Perkins.

A todo podría finalmente agregar el pedido de que se tengan presentes, como jurisprudencia, los considerandos últimos de las sentencias núms. 34 i 36 dictadas unánimamente por el Tribunal Arbitral Anglo-chileno de Santiago, en 1886.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva negar lugar a la admision de esta reclamacion o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Santiago A. Pettie por la casa comercial Pettie i C.^a, replica ante V. E. el escrito con que el señor ajente del Gobierno de Chile ha contestado al memorial presentado a V. E. en la reclama-

cion número 29. Seguiré en mi réplica el mismo orden establecido por el señor agente.

1 Estima el señor agente que no está debidamente comprobada nuestra nacionalidad inglesa porque no se han legalizado las firmas de los respectivos certificados.

Las partidas de nacimiento que tengo presentadas han sido espedidas por funcionarios a quienes las leyes inglesas acuerdan tal facultad, teniendo por auténticos i valederos para todo acto, los documentos que suscriben, de suerte que con su exhibicion ante el Tribunal que debe resolver reclamos internacionales, he dejado ampliamente justificada nuestra nacionalidad.

2 Dice el señor agente que no está acreditada en el espediente la existencia de la sociedad Pettie i C.^a i que debo justificar mi personeria en conformidad a lo dispuesto en el artículo V inciso 2.º del Reglamento de Procedimientos dictado por V. E. La existencia de nuestra sociedad con la designacion de sus socios i sus condiciones está acreditada por la protesta estendida por el señor cónsul británico de Iquique. A mayor abundamiento, acompañamos a V. E. un instrumento público autorizado por un notario de Iquique haciendo uso del derecho que nos confiere el inciso 3.º del artículo X del Reglamento de Procedimientos.

I aquí el señor agente sufre un error al creer que debe aplicarse el inciso 2.º del artículo V del Reglamento. Basta leerlo para ver que se refiere al caso en que un mandatario que reclama ante V. E. no sea la persona misma que sufrió el perjuicio, sino su representante legal i solo entonces exige que dicho mandatario justifique su personeria a satisfaccion de V. E.

Mi reclamo se encuentra comprendido en el inciso 1.º del citado artículo, pues, tanto mi socio como yo hemos sufrido los perjuicios por los cuales lo hemos iniciado. Yo hablo a nombre de una firma social i apesar de la ambigüedad aparente de la primera frase del inciso, la disposicion que contiene se refiere al caso en que concurre tal circunstancia. Interpretado así el inciso, como no puede ménos de serlo por V. E. el memorial indica en cuanto es posible las condiciones de los socios de la razon social Pettie i C.^a

Agrega el señor agente que mi reclamo adolece de defectos

de forma, pues no se ajusta a los artículos I, II, VII i IX del Reglamento.

Sostengo, Excmo. Señor, lo contrario i paso a manifestarlo.

Art. I. El memorial ha sido presentado oportunamente con piezas justificativas por intermedio del señor ajente de la Legacion de S. M. B. No se han indicado en él otras pruebas ni el nombre ni demas caracteres de los testigos porque me autoriza a verificarlo mas tarde el artículo X del mismo Reglamento i hago ahora uso de tal facultad.

Art. III. Contiene el memorial el nombre, apellido, profesion i residencia del reclamante, el lugar, año de nacimiento i lugar de residencia al ocurrir los sucesos que motivan el reclamo. Ha sido presentado impreso, en la forma prescrita por dicho artículo. Es todo lo que se exige i satisface completamente el memorial tales condiciones lo cual comprobará V. E. al pasar por él la vista.

Art. VII. Indica clarísimamente el memorial los datos exigidos por este artículo. Lo manifestaré a V. E. en pocas palabras.

Monto del reclamo £ 1,471-6-6 al cambio de 24 peniques.

Lugar i fecha de los actos que dan origen a él. Iquique 19 de febrero de 1891, producido incendio en la lucha de los belijerantes.

Especie, cantidad i valor de la propiedad perdida. Se indican en una detallada lista.

Hechos i circunstancias, etc. Se detallan al final del memorial.

Si se dió o no recibo. Dice el memorial en su núm. 3, que no se dió ningun recibo.

Ve, Excmo señor, con la sola comparacion de las disposiciones reglamentarias con el memorial que no adolece de ningun defecto de forma.

3 Manifiesta el señor ajente que falta prueba. Hoi la produzco, acompañando a V. E. una declaracion suscrita por el señor Chinchilla i otros ante un notario público de Iquique.

Con ella dejo acreditados los siguientes hechos:

- a) Que las mercaderías incendiadas pertenecian a Pettie i C.ª;
- b) Que dichas mercaderías existian en el almacen en ese dia;
- c) Que el incendio de 19 de febrero de 1891 produjo la destruccion de nuestra casa.

En cuanto a que el incendio no fué apagado por haberlo impedido los soldados del coronel Soto, me basta para acreditar este hecho el parte oficial del comandante Merino Jarpa, en el cual se dice:

«Como a la 1 P. M., considerándose ya incapaz el enemigo de hacer rendir la guarnicion de la Aduana, trató de conseguirlo incendiándola, para lo cual aplicó fuego a los edificios vecinos, segun version de muchas personas que presenciaron el hecho. Lo que creo efectivo, pues, el enemigo impedia a los bomberos ejercer sus humanitarios servicios, ofreciéndoles balazos. Gracias a que en el techo del edificio existe un estanque con agua, pude impedir el incendio.»

El comandante Merino Jarpa aprecia de oídas el oríjen del incendio; pero afirma que las tropas de Soto impedían trabajar a los bomberos. Es lo único que he querido manifestar a V. E.

Bajo el núm. 5 el señor agente del Gobierno de Chile trata de desvirtuar la fuerza probatoria del parte del comandante Merino Jarpa. Puede atribuirse mérito a las declaraciones que al efecto se hagan; pero aquí no dejaré de manifestar a V. E. que, así como se aprecia por el señor agente aquel parte en el sentido de que se ha querido arrojar cierta responsabilidad sobre Soto i sus tropas, para granjearles la animosidad del vecindario de Iquique, no podrá V. E. dejar de hacer alto en esta aseveracion a *posteriori* i que seguramente ha de merecer ménos confianza por ser lanzada en época lejana a la en que se verificaron los sucesos i pretenderse probar por testigos tambien distantes de ellos que la hecha por el jefe responsable de aquella operacion i manifestada pocos momentos despues de llevada a cabo.

Debo agregar algunas consideraciones en apoyo del derecho con que hago este reclamo.

Establecido en Chile al amparo de sus leyes, no he podido quedar sometido a otras reglas que a su lejislacion interna i en cuanto a mi carácter de súbdito de otra nacion o las prescripciones comunes del Derecho Internacional.

El incendio que destruyó las mercaderías cuyo valor reclamo fué producido en una guerra civil, iniciada por partidos políticos, en

ninguno de los cuales me encuentro afiliado como que tampoco ninguna parte he tomado en aquella lucha. Ese mismo incendio se verificó sin necesidad imprescindible para llevar a cabo una operacion de guerra.

Es sabido que la lucha civil enardece las pasiones i que los actos que en ellos se ejecutan no se ajustan muchas veces a los principios que en el Derecho Internacional reglan las relaciones de los beligerantes. El indicado incendio, repito, no fué una operacion ineludible de la guerra i en este caso, yo ciudadano extranjero, ajeno a ella, debo ser resarcido de los perjuicios sufridos por aquel acto, por el Gobierno del pais a cuyas leyes suspendidas por disensiones internas de partido, me habia cobijado.

En esta virtud, suplico a V. E. se sirva acceder a este reclamo como lo he pedido en el memorial.

Otro si: Ruego a V. E. se digne tener presente que suscribo esta solicitud como mandatario de los reclamantes, como lo justifica el poder adjunto.

MANUEL LECAROS R.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Con la réplica se ha comprobado la existencia legal de la sociedad colectiva de Pettie i C.^a En ese carácter, i a diferencia de lo que sucedería excepcionalmente en Inglaterra (Lehr, *Eléments de Droit Civil Anglais*, p. 586), dicha sociedad es en Chile una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (art. 2053 del Código Civil i 2 del Comercial chileno). Constituida i domiciliada en Chile, para negociar en Chile, es chilena, cualquiera que sea la nacionalidad particular de los socios, i por lo tanto, carece V. E. de competencia para conocer de esta reclamacion,

hecha por don Santiago A. Pettie a nombre de la referida sociedad chilena.

El artículo V del Reglamento de Procedimientos se pone en el caso de que se reclame a nombre de una sociedad sin carácter de anónima. Claro es que tal sociedad no habría de ser chilena, puesto que, siéndolo, carecería de capacidad legal para presentarse ante este Tribunal Arbitral, abierto únicamente para las reclamaciones británicas. Claro es que dicha sociedad habría de ser forzosamente inglesa, domiciliada en Inglaterra, tuviera o no sucursales en Chile; i a este caso se refiere ciertamente el Reglamento cuando manda que, junto con el domicilio, que determina la nacionalidad de la sociedad, se indiquen todos sus socios o interesados, a fin de eliminar en toda circunstancia la parte de los que no tuvieran el estado o carácter neutral de súbditos británicos. Cualquier otra intelijencia que se diera al citado art. V contrariaria la letra i el espíritu de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Con relacion a los hechos en que se funda esta reclamacion de Pettie i C.^a, la réplica afirma particularmente que las tropas del coronel Soto impidieron a los bomberos extinguir el incendio de Iquique el 19 de Febrero de 1891. El hecho no está probado; pero, a ser efectivo que dicho coronel hubiera ordenado el incendio como medio de forzar la rendicion del enemigo, habría ejecutado un acto permitido por las leyes de la guerra, i siendo así, ni los bomberos ni nadie podian con derecho pretender frustrar los efectos de aquel acto sin esponerse a ser tratados como enemigos o auxiliares del enemigo.

Los señores Pettie i C.^a tenian las mercaderías i efectos cuyo valor se reclama en su almacen de la calle de Bolívar núm. 1 F. A este respecto, es curioso observar que los señores Graham Rowe y C.^a i Williamson, Balfour i C.^a tenian en el mismo almacen las mercaderías a que se refieren sus respectivas reclamaciones núms. 37 i 96: los primeros se han apresurado a desistirse despues de mi contestacion; no sé que hayan hecho otro tanto los segundos.

Por lo demas, a lo dicho en la contestacion nada tengo que agregar sobre esta reclamacion, cuyos puntos capitales de hecho i de derecho han sido ampliamente dilucidados en muchos otros casos

análogos, principalmente en mi dúplica de la reclamacion núm. 1. A ellos me refiero, i con ésto termino aquí rogando a V. E. se sirva resolver como tengo pedido, no admitiendo esta reclamacion, caso de declararse competente para conocer de ella.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Santiago A. Pettie, súbdito británico, nacido en Edimburgo, Escocia, por la sociedad *Pettie i Ca.*, reclama del Gobierno de Chile mil cuatrecientas setenta i una libras esterlinas seis chelines seis peniques (£ 1,471-6-6) por pérdidas sufridas a consecuencia del combate i bombardeo de Iquique el 19 de febrero de 1891.

El reclamante dice que la firma social *Pettie i Ca.* la forman dos socios, el mismo reclamante i Santiago Aitken Moir, tambien súbdito británico, nacido en Milnganie, Escocia; que a consecuencia del incendio que se produjo durante el combate i bombardeo de Iquique, el 19 de febrero de 1891, incendio ocasionado deliberadamente por orden del coronel Soto, perdieron todas las mercaderías, muebles i enseres que tenian en el almacén i oficina situados en la calle de Bolívar número 1 F, en Iquique, pérdidas de las cuales acompaña una lista detallada i cuyo valor asciende a mil cuatrocientas setenta i una libras esterlinas seis chelines seis peniques (£ 1,471-6-6), al cambio de 24 peniques por peso, cantidad que reclama del Gobierno de Chile.

Acompaña como comprobantes: dos certificados de nacimientos; dos certificados de los agentes de las Compañías de Seguros contra incendio *La Pacifico* i la *London & Lancashire*, i una protesta del reclamante presentada ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique

el 10 de junio de 1891, en la que reproduce los hechos espuestos en el memorial.

El ajente de Chile, contestando, espone: que el Tribunal es incompetente para conocer en esta reclamacion por caber duda acerca de la nacionalidad de los reclamantes, pues las firmas de las partidas de nacimiento que se acompañan no tienen la autenticidad i legalizacion debidas; que el reclamante no ha probado la existencia de la sociedad *Pettie i Ca.* ni ha justificado su personería para reclamar a nombre de su socio, como debió hacerlo en conformidad al inciso 2.º, artículo V del Reglamento de Procedimientos; que el memorial contraviene lo dispuesto en los artículos I, III, VII i IX del mismo Reglamento, lo que hace inadmisibile la reclamacion; que el reclamante no ha probado los hechos que asevera en el memorial, como ser: el dominio sobre las especies perdidas, la destruccion de éstas en la fecha i por las causas espuestas por el reclamante, i el valor antojadizo que atribuye a esas pérdidas; que niega que el incendio fuera obra deliberada del coronel Soto i tambien que los soldados de éste impidieran trabajar a los bomberos; que el mismo reclamante declara en la protesta hecha ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, el 10 de junio de 1891, que el incendio se produjo a consecuencia de operaciones militares i por las bombas disparadas por la Escuadra, hecho efectivo i operacion bélica perfectamente lícita que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile; que en la hipótesis de ser efectivo que el coronel Soto ordenara prender fuego a los edificios situados frente a la Aduana, con el objeto de obligar a los enemigos resguardados en ella a evacuarla, el hecho habría sido autorizado por las leyes i usos de la guerra i no habrian tampoco acarreado responsabilidad alguna al Gobierno de Chile; que, en conclusion, se refiere a las alegaciones de hecho i derecho espuestas en las reclamaciones números 1, 34 i 36, en lo que pudieran ser aplicables a la presente, i termina pidiendo al tribunal se sirva negar lugar a la reclamacion o desecharla en todas sus partes.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho, acompañándose a la primera el contrato de sociedad *Pettie i C.ª*, una declaracion suscrita por Chinchilla i otros, justifi-

cando lo espuesto en el memorial por el reclamante, i un poder de *Pellie i C.ª* conferido a Manuel Lecaros R. para que los represente en esta reclamacion, i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes, importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupado inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres, mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra, se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de febrero, ya ántes de las seis de la mañana, el coronel Soto, del Ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un golpe de mano audaz;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder: que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamables, habitados por muchos estranjeros entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que en la protesta hecha por el reclamante ante el Consulado británico en Iquique, el 10 de junio de 1891, declara que «la sociedad *Pellie i C.ª* eran ocupantes de oficinas i un almacén signado con el número 1-F calle de Bolívar, en Iquique, cuyas oficinas i almacén con todo su contenido fueron incendiados a consecuencia de las operaciones militares que tuvieron lugar el 19 de febrero de 1891, entre las fuerzas del Gobierno i las del partido del Congreso»;

Considerando: que en esa protesta que tiene por objeto hacer responsable al Gobierno de Chile, protesta hecha bajo juramento poco despues que acontecieron los sucesos, el reclamante se funda únicamente en que sus pérdidas provinieron a consecuencia de las operaciones militares que tuvieron lugar aquel dia;

Considerando: que efectivamente resulta que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos que estaban en el puerto; que este hecho se deduce no solo de la confesion del reclamante en su protesta el 10 de junio de 1891, sino tambien por declaracion del contra-almirante ingles Hotham, que estaba en la bahía de Iquique en aquel dia[Blue Boock, *Correspondance respecting the Revolution in Chili*, núm. 1-1892-p. 82];

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia a virtud de las leyes de la guerra el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habian reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla no solo por un golpe de mano, sino, que tambien, habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado precisamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios (Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas de 1874, articulo 15. Calvo, *Derecho*

Internacional teórico i práctico, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068. Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, artículo 756, número 4, A. D. Heffter. *Derecho Internacional de la Europa*. Paris, 1883, § 125. Nota de Goffeken, *Manual de derechos de la guerra* del Instituto de Derecho Internacional citado por Hall, páj. 525. Bluntschli; *Derecho Internacional Codificado* art. 55 bis).

Considerando: que el reclamante en su memorial despues de decir que el incendio de Iquique «fué causado por la lucha entre las dos partes en tierra i el bombardeo de los buques de guerra en la bahia», atribuye al incendio otra causa i sostiene que deliberadamente el coronel Soto dió orden de prender fuego a los edificios situados al frente de la Aduana con el fin de obligar a los enemigos encerrados en ella, a evacuarla; sostiene ademas que es notorio que los bomberos no apagaron el incendio por impedirselos los soldados de Soto llegando hasta amenazarlos con sus rifles;

Considerando: que resulta de los datos corrientes en autos que no se puede atribuir importancia seria alguna a estas nuevas alegaciones producidas por el reclamante para apoyar sus pretensiones; que no solamente no atribuye esta causa al incendio de Iquique en su protesta otorgada ante el cónsul británico poco tiempo despues de los sucesos, sino que, ademas, ninguna de las personas lesionadas que han protestado igualmente ante dicho cónsul, en los meses de Junio, Julio i Setiembre de 1891, hicieron alusion a este hecho, que se atribuye ahora al coronel Soto, i que el contra-almirante británico Hotham en su comunicacion citada anteriormente no dice una palabra del pretendido incendio voluntario sino que lo atribuye, al contrario, al bombardeo i al fuego nutrido que no cesó en todo el dia;

Considerando: que, habiéndose levantado un sumario criminal judicial en Iquique, en una época en que las pasiones políticas estaban todavía palpitantes, acerca de los hechos atribuidos al coronel Soto, la Corte de Apelaciones de Iquique absolvió a Soto, reconociendo que solo habia lijeras presunciones para condenarlo como autor del incendio;

Considerando: todavía que aun cuando el coronel Soto hubiera

mandado incendiar las construcciones ubicadas justamente en frente del lugar donde se encontraban resguardados sus enemigos i desde donde disparaba sobre sus tropas, con la esperanza de desalojarlos mediante el fuego, como lo afirma en último término el reclamante, habria tenido derecho a virtud de las leyes de la guerra; que su propósito era obligar a las tropas de la Escuadra, que ocupaban la Aduana, que estaba pegada al mar, a reembarcarse i refugiarse en los buques, abandonándole así la posesion de la ciudad; que este plan no habria sido sino un medio lejítimo de defensa o ataque que no está prohibido por las leyes de la guerra que autoriza el empleo de todos los medios de violencia contra las propiedades para reducir al enemigo, con la única limitacion que el medio empleado no sea desproporcionado al objeto que se persigue (William Edward Hall, *A. Treatise on International Law* Oxford 1890, 3rd edition, page 529, § 184.—Fiore, *Derecho Internacional Codificado* § 1,053.—Bluntschli, *Le Droit International Codifié*. Traducion Lardy.—Paris, 1886, artículo 543 a. 549);

Considerando: que no hai para qué insistir sobre aquella otra alegacion del reclamante, de que el coronel Soto hubiera prohibido a los bomberos combatir el fuego i aun hecho apuntar sobre ellos, pues si Soto tenia derecho, para un objeto estratégico, de incendiar el edificio ubicado al frente de aquel ocupado por sus enemigos, tenia tambien, incontestablemente, el derecho de impedir que se hiciera fracasar la ejecucion de una determinacion que habia tomado en su carácter de jefe de las fuerzas asaltantes, proceder del coronel Soto que de ninguna manera se ha probado; que resulta del parte del contra-almirante Hotham ya citado, que el primer incendio que estalló cerca de la Aduana fué apagado por los bomberos i que cinco jefes i voluntarios de la brigada de bomberos de Iquique, compuesta de extranjeros ingleses, italianos i españoles) i que estuvieron presentes durante los sucesos declararon bajo juramento, ante el juez, el 11 i 13 de Julio último «que el incendio de Iquique se debió a las bombas lanzadas por la Escuadra i que léjos de prohibir a los bomberos, el coronel Soto, que apagaran el fuego les hizo ayudar por sus soldados» (sumario agregado en la reclamacion núm. 12 del doctor James Watson);

Considerando: que estos hechos están corroborados por las declaraciones del capitán de la marina inglesa, A. Lambton, confirmada por el contra-almirante Hotham en una carta dirigida al coronel Soto el 18 de Enero de 1892 i en la cual estos oficiales superiores de la marina inglesa que se encontraban en el puerto de Iquique el 19 de Febrero de 1891 dicen: «que segun todas las probabilidades el incendio que tuvo lugar ese día en Iquique fué la consecuencia natural de las operaciones militares exigidas por el ataque i defensa de la plaza i, que no vieron ni oyeron nada que pudiera hacerles creer que Soto habia incendiado personalmente edificio alguno»:

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los belijerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia procurarles la esplotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;


Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique en 19 de Febrero de 1891 es una consecuencia desgraciada de actos lejítimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile que, como lo dice Vattel «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artilleria en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que la sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios, pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho. (Vattel, *Derecho de Jentes*, libro 3.º cap. XV § 232.—*The Law of claims against Governements*.—*House of Representatives 42d Con-*

gress.—Report número 134, page 274; Washington, *Government Printing Office* 1875);

Por estos fundamentos, el Tribunal por mayoría de votos, disintiendo el árbitro inglés, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 11 de Noviembre de 1895. —CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 11 de Noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 30

FEDERICO GARNETT CLARKE

MEMORIAL

Honorable Tribunal:

Yo, Federico Garnett Clarke, súbdito británico, nacido en Aldridge Lodge, en la parroquia de Great Barr, en el condado de Staffordshire, en Inglaterra, el dieziseis de enero de mil ochocientos sesenta i dos, residente actualmente en Iquique, en la provincia de Tarapacá, Chile, negociante en esa ciudad; jura i declara como sigue:

1.º Que estaba presente en dicha ciudad de Iquique el día dieznueve de febrero i recuerdo los sucesos de esa fecha, los que segun mi leal saber i entender fueron como sigue:

En la antedicha fecha se encontraba Chile en estado de guerra civil, i la dicha ciudad de Iquique estaba ocupada por los soldados de los revolucionarios, o como se les llamaba, del partido constitucional, compuesto de una pequeña fuerza destinada a guardar el

orden. La ciudad habia sido evacuada por el Gobierno, o como se les llamaba tropas dictatoriales, al amanecer del día dieziseis de Febrero, i el mismo día, pocas horas despues, los revolucionarios desembarcaron tropas i tomaron posesion de dicha ciudad. En la mañana del citado día, diezinueve de febrero, los revolucionarios, que se habian retirado a sus buques, al amanecer acababan de volver a desembarcar sus fuerzas, cuando las tropas del Gobierno, al mando del coronel Soto, en número de, mas o ménos, trescientos hombres, entraron a la ciudad, i avanzaron hasta la plaza principal.

Los revolucionarios que habian desembarcado sus tropas, mas o ménos, al mismo tiempo, lograron apoderarse de la Aduana, la que mantuvieron en su poder durante el día. Una batalla sangrienta tuvo lugar entre las dos fuerzas contrarias, i el coronel Soto, a fin de obligar a los revolucionarios a evacuar la Aduana, puso deliberadamente fuego a la manzana del frente, siendo su intencion hacer desaparecer el edificio que impedia a sus soldados hacer fuego sobre la Aduana.

Es un hecho que muchos testigos oculares pueden probar que los soldados del coronel Soto fueron vistos acarreado leña i otras materias inflamables a fin de incendiar ese edificio, i a fin de hacer mas segura la obra de destruccion, gran cantidad de parafina, que habia sido robada de los despachos del Morro, fué arrojada sobre las paredes de las casas. El incendio orijinado de este modo, tomó rápidamente cuerpo i a pesar del empeño del Cuerpo de Bomberos por apagarlo fué impotente para hacerlo, debido al nutrido fuego que se le hacia por los soldados del coronel Soto que obraban segun sus instrucciones. Como prueba de esto me refiero al parte oficial del comandante Jarpa, que aparece en el *Boletín Oficial de la Junta*, número 21, página 280. Es verdad que los buques chilenos en la bahia bombardeaban la ciudad ántes del incendio, que se produjo del modo que he descrito, sin embargo, si se pudiera probar que el incendio fué causado por el bombardeo la responsabilidad del Gobierno de Chile no seria menor, porque no debe olvidarse que no se dió aviso prévio del bombardeo a fin de que los residentes extranjeros pudieran prevenir el daño de sus propiedades i debe

recordarse tambien que el ataque i bombardeo a una plaza indefensa no es considerada por el Derecho Internacional como acto justificable.

2.º Que al tiempo de dicho bombardeo ocupaba yo una oficina en la manzana número 67, en la parte que hace frente a la calle de Luis Uribe en el mencionado Iquique.

3.º Que al tiempo de comenzar dicho bombardeo i batalla me encontraba yo en mi casa, calle de Souper número 69, en Iquique, antedicho, por lo cual me fué imposible, sin correr gran riesgo mi vida, salvar parte alguna de mi propiedad, detalladamente descrita mas adelante, de dicha oficina, i por la cual reclamo compensacion.

4.º Que habiendo comenzado el incendio de la manzana anteriormente descrita tomó rápidamente cuerpo i alcanzó luego al edificio en el cual estaba mi citada oficina, i cuya oficina fué luego presa de las llamas i quemada completamente con todo su contenido a excepcion del contenido de dos cajas de fierro que fueron mui deterioradas.

5.º Que al tiempo de comenzar dicho bombardeo i batalla era yo poseedor de mercaderias i bienes muebles consistentes en menaje de oficinas, cajas de fierro, escritorios, sillas, alfombras, libros i papeles impresos, todo en la dicha oficina i cuyo valor estimo haber sido doscientas treinta i tres libras esterlinas catorce chelines (£ 233.14.0), como se detalla mas adelante.

6.º Que a consecuencia del antedicho incendio declaro que perdí todas esas mercaderias i bienes muebles con la excepcion ántes espuesta i estimo mis dichas pérdidas en la suma de (£ 208.4.0) doscientas ocho libras cuatro chelines, cuyo valor reclamo.

7.º Que el escrito anexo i marcado A es una fiel esposicion de dichas mercaderias i bienes muebles i que las cantidades colocadas al frente de los respectivos artículos es una justa estimacion del valor de ellas.

8.º Que no he tomado parte directa ni indirectamente en la última guerra civil de Chile.

9.º No he recibido compensacion alguna por mis pérdidas declaradas anteriormente de ninguna de las partes contendientes en

dicha guerra civil, ni he trasferido mi reclamo por dichas pérdidas ni parte alguna de él.

10.º Que de acuerdo con el artículo XI de las Reglas de Procedimientos estoy pronto a presentar mi lista de testigos al Honorable Tribunal i cumplir con cualquiera otro requisito que se considere necesario.

F. G. CLARKE

Jurada en Santiago, hoi dia 2 de Abril de 1895.

Ante mi

FREDERICK KERR,
Vice-Consul

CONTESTACION

El ajente del Gobierno de Chile procede a contestar la reclacion número 30 de don Federico Garnett Clarke, en la forma siguiente:

1 El memorial presentado no se ajusta al Reglamento dictado por V. E. para la forma del procedimiento ante el Tribunal. Está omitida en él la manifestacion que debió hacer el reclamante de haber estado o nó al servicio de las partes combatientes o de haber o nó recibido sueldo de alguna de ellas. Tampoco espresa si ha presentado o nó esta reclamacion ante algun otro tribunal; ni aparece firmado el memorial, sino la copia traducida al ingles, ni tampoco consta que el reclamante haya prestado el juramento o declaracion solemne que confirme los hechos aseverados en el memorial. Estos defectos de forma bastan para hacer inaceptable la presentacion; i V. E. puede desecharla por este solo motivo.

2 El señor Garnett Clarke no ha presentado documento ni antecedente alguno que acredite su calidad de súbdito británico. Por mi parte no puedo aceptar, a virtud de su simple esposicion, el

status que se atribuye i que le niego. Mientras no esté comprobado ese *status* en conformidad a las prácticas internacionales, V. E. no puede estimarse competente para conocer de esta reclamacion, puesto que el Tribunal ha sido constituido para oír i fallar las que le sean elevadas por súbditos de S. M. B. Ruego, en consecuencia a V. E. que se sirva declarar que no le corresponde conocer en esta demanda.

3 Parece, además, que el almacén cuya pérdida lamenta el reclamante no era de su pertenencia, sino de la Compañía Salitrera *Santa Rita Limited*. Así lo hace presumir el poder que acompaña i que se dice otorgado por los directores de esa Sociedad. En tal caso deberé oponer a la reclamacion otras dos excepciones. La primera consiste en ser el verdadero reclamante una sociedad anónima que, aun cuando fuera constituida en el Reino Unido, no tendría el carácter de súbdito británico, que solo pueden tener personas humanas i no las civiles o ficticias creadas por la lei en favor de las sociedades anónimas.

El poder acompañado no seria, por otra parte, suficiente para ocurrir ante este Tribunal, pues no ha sido conferido sino para la administracion ordinaria de la sociedad, sin que conste fehacientemente el carácter i facultades de los otorgantes del mandato, ni la legalizacion i aún exacta traduccion del poder.

Hai pues, mérito por estos capítulos, para oponer nuevamente la excepcion de incompetencia, i además la de falta de personeria.

4 Es efectivo que el 19 de febrero tuvo lugar un recio combate en la ciudad de Iquique; i que a consecuencia de él se produjo el incendio en un barrio de la ciudad; pero no hai antecedentes para juzgar que la oficina del reclamante fuera víctima de este accidente. Suponiéndolo así, no hai tampoco datos para estimar el monto de las pérdidas que el reclamante haya sufrido. No ácepto por mi parte otros hechos que los que dejo reconocidos, ni el mérito del inventario i tasacion que se han presentado, ni el valor que se atribuye al mobiliario u objetos que se dicen desaparecidos en el incendio.

Mucho menos ácepto que sea efectivo que el coronel Soto hiciera intencionalmente prender fuego a algun edificio de la ciu-

dad. No podrá citarse un solo testigo de vista de tal acto, que está contradicho por el testimonio del almirante británico señor Hotham que se hallaba en la bahía de Iquique en aquel día, por el comandante Lambton del buque de guerra *Warspite* de la misma nacionalidad, i por numerosos reclamantes que se han presentado a V. E. atribuyendo el incendio a disparos hechos por los buques chilenos, lo mismo que los distinguidos personajes que he nombrado. Es, además, cuestion de simple buen sentido observar que al coronel Soto no podía convenirle el incendio que iba a destruir los edificios que servían de parapeto o defensa para sus tropas, así como el edificio de la Aduana servía para el mismo objeto a las fuerzas que atacaban a las de aquel jefe.

§ Pero, si me he empeñado en restablecer la verdad acerca del orijen del incendio, ha sido únicamente con el propósito de partir de hechos perfectamente exactos; i no porque crea que el coronel Soto no estuviese autorizado por las leyes de la guerra para pegar fuego a los edificios si así convenía al plan estratégico que estaba desarrollando o si era necesario para obtener el triunfo que pretendía.

La posesión de la ciudad era el objetivo actual de los beligerantes el 19 de Febrero de 1891. Esa ciudad era la llave de la provincia de Tarapacá, i por lo tanto de la principal fuente de entradas de la nación. El que la poseyese adquiriría por el mismo hecho la mayor suma de probabilidades en favor del éxito final de la contienda; i los sucesos comprobaron la justicia de esta prevision. Era, por lo tanto, lícito i necesario para los fines de la guerra el apoderarse de la ciudad de Iquique; i desde que las tropas del Gobierno comenzaron el combate, se hacía también lícito todo lo que debía conducir a la consecución de la victoria, salvo el uso de armas vedadas i demás procedimientos prohibidos por las leyes de la guerra, i de los cuales no se echó mano en forma alguna.

La Escuadra chilena hizo uso de un perfecto derecho, valiéndose de sus medios de acción para conseguir el triunfo de sus tropas. La destrucción de edificios, muebles i mercaderías i el incendio producido por las bombas del combate, son consecuencias desgraciadas e inevitables de una batalla empeñada dentro del recinto de

una ciudad. Ninguna responsabilidad queda afectada por las pérdidas que se produzcan: ellas deben ser soportadas del mismo modo que una calamidad natural que no está en manos del hombre prevenir ni evitar.

Esta es la doctrina corriente de los mas afamados tratadistas del Derecho Internacional. Como ya he invocado sus propias palabras en reclamos semejantes a éste, me limito ahora a citar sus obras i lugares de ellas donde se encuentra el testo respectivo.

Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículos 652 i 662; Fiore, *Nuevo Derecho Internacional*, t. 3, § 1,714 i siguientes, el mismo, *Derecho Internacional Codificado*, artículos 1,336 i siguientes, etc.

Con el mérito de lo espuesto, pido respetuosamente a V. E. se sirva desechar la reclamacion deducida, si es que V. E. se llegase a declarar competente para conocer de ella.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Mi honorable colega, el ajente del Gobierno chileno, pide que la reclamacion del señor Clarke sea desechada; primero porque el memorial no se ajusta a las reglas establecidas por el honorable Tribunal, i segundo, porque el señor Clarke no ha presentado documentos que comprueben su carácter de súbdito británico.

Supongo que mi honorable colega no insistirá en su peticion si, como ahora, se llenan las omisiones a que se hace referencia.

Respecto al reclamante, tengo el honor de declarar que el señor Clarke no ha estado al servicio de ninguna de las partes contendientes, ni mucho ménos ha recibido salario de alguna de ellas. El señor Clarke no ha presentado anteriormente su reclamacion ante otro tribunal, i el hecho de que el memorial ingles sea el firmado,

es debido a que éste sea el original mientras que el español es la traduccion.

El señor Clarke creyó que debia firmar el documento en el idioma en que habia sido redactado, de preferencia a su traduccion.

Si esto se considera de vital importancia creo que puedo asegurar que el señor Clarke firmará el documento en español prefiriendo esto a que su reclamacion fuera rechazada por este capítulo.

Refiriéndome a la declaracion de mi honorable colega de que el señor Clarke ha omitido el constatar su carácter de súbdito británico, confio en que la copia anexa de la partida de bautismo del señor Clarke hará desaparecer toda duda a ese respecto. Habiendo cumplido con este requisito, procedo a contestar las demas objeciones que ha tenido a bien hacer mi honorable colega.

Bajo el número 3 se dice que la tienda cuya pérdida reclama el reclamante no era de su propiedad sino de la compañía anónima *Santa Rita*. Me permito preguntar a mi honorable colega ¿de dónde ha obtenido esta estraña informacion? Me fué *difficil* comprender el por qué habia de ser rechazada solamente porque se habian omitido en ella algunas formalidades que de ninguna manera debilitan la justicia de la espresada reclamacion; pero me fué, debo confesarlo, enteramente *imposible* explicarme la razon de por qué habia de rechazarse esta reclamacion por motivo de que mi honorable colega tuviera a bien regalar lo que pertenecia al señor Clarke a una sociedad anónima. Con semejante argumento ninguna reclamacion alcanzaria éxito si se afirmara que el reclamante no era dueño de su propiedad sino que pertenecia a un tercero. Si mi honorable colega me dice que se le ha informado incorrectamente i que involuntariamente ha estampado un error, no me quedará sino decir que en mi humilde opinion no es dable anticipar hechos que afectando como afectan intereses serios, no fueran perfectamente constatados previamente. No hai jénero de duda que la oficina del señor Clarke le pertenecia a él i no a la compañía *Santa Rita*. En aquellos tiempos el señor Clarke nada tenia que ver con la Compañía. Alquilaba el almacen para sus propios negocios. El mobiliario lo compró i pagó el señor Clarke, i si fuese necesario podria presentar el duplicado de recibos del valor de la mayor parte de

los muebles. Presumo, por consiguiente, que cualquiera que fuera el valor de la propiedad, el señor Clarke, habiendo pagado su valor, puede considerársele como dueño, i su derecho para reclamar ante el Excmo. Tribunal no puede ser discutido.

El señor Clarke está dispuesto a presentar, para justificar el valor de su propiedad, a los siguientes testigos: J. Blake, Cárlos Wieber, Eduard Harrington, H. D. Henderson, J. E. Burton i C. H. E. Bull; todos residentes en Iquique.

En el párrafo cuarto, mi honorable colega pone en duda el hecho de que se hubiera quemado la oficina del señor Clarke en el incendio del 19 de Febrero. Para contestar esta duda me cabe observar solamente que las prolijas investigaciones que sin duda se hicieron i se hacen actualmente por los abogados i agentes empleados por el Gobierno de Chile en Iquique en la materia de estas reclamaciones, han debido descartar todo escrúpulo o duda que pudiera haber tenido mi honorable colega acerca de este punto.

No sería asunto difícil probar que la oficina del señor Clarke no se había quemado, si esta fuera la verdad.

El hecho de que mi honorable colega se limite a hacer la afirmacion es, a mi sentir, prueba suficiente de que la oficina en cuestion fué una de las que destruyó el fuego. Sería trabajar demasiado nuestra credulidad suponer que mi honorable colega tuviera en sus manos arma tan eficaz que probara que la relacion del señor Clarke era una simple invencion de principio a fin, i que sin embargo tuviera la benevolencia de no hacer uso de ella. Creo, pues, que podemos dar por sentado: primero, que el señor Clarke era dueño de la oficina; i segundo, que la oficina fué incendiada.

Con respecto a la responsabilidad del coronel Soto, como esta cuestion ha sido discutida tan estensamente i tanto se ha dicho por ambas partes, no me propongo en esta réplica agregar nada a los testimonios que ya se han presentado. Con todo, quisiera hacer notar la ostensible inconsecuencia de un argumento de mi honorable colega. No quiere aceptar las declaraciones de muchos testigos sobre el incendio intencional de la ciudad por el coronel Soto, porque muchos de ellos no fueron testigos oculares de los hechos que acontecieron, i sin embargo se nos pide que tengamos por de-

cisivos los informes del almirante Hotham i del capitan Lambton, del buque de S. M. B. *Warspite*. Ambos caballeros estaban mucho mas léjos del sitio de las ocurrencias que muchos de los testigos citados en diversas reclamaciones. ¿Por qué las declaraciones de aquéllos habian de ser aceptadas i rechazadas las de éstos? El combate se habia prolongado por muchas horas i los cañones de grueso calibre de los buques habian bombardeado la ciudad. No podemos imaginarnos que el almirante Hotham o el capitan Lambton tuvieran vista tan larga i penetrante que les permitiera ver todos los detalles del combate que se verificaba en tierra. Sin embargo, aceptamos hipotéticamente que el coronel Soto no incendiara intencionalmente la ciudad i que tampoco estorbara los trabajos de los bomberos para extinguir el incendio. ¿Seria el Gobierno de Chile en este caso responsable de los daños que causó el incendio, pues es de presumir que si se sienta de que el coronel Soto no incendió la ciudad, las bombas de la Escuadra lo causaron?

Mi honorable colega arguye que la Escuadra chilena ejercitó un derecho perfecto bombardeando a Iquique. Sostengo, sin embargo, que si el bombardeo de Iquique fué una necesidad ineludible, no puede ponerse en duda la responsabilidad del Gobierno de Chile de pagar la propiedad destruida.

Talvez habria sido diferente si los reclamantes hubieran tenido oportunidad para trasladar sus bienes a un lugar seguro. Tal oportunidad, sin embargo, no se les dió, pues no se les notificó el bombardeo; suplico, en consecuencia, al honorable Tribunal, que resuelva que sea el coronel Soto o la Escuadra chilena el responsable de los perjuicios: el derecho para reclamar compensacion es indiscutible.

FREDERICK KERR.

Despues de escrito lo anterior, recibo el memorial del señor Clarke, en español, debidamente firmado i jurado ante el cónsul inglés en Iquique. Me permito acompañar este documento a la presente réplica.

F. K.

DÚPLICA

Excmo. señor:

Como agente del Gobierno de Chile procedo a duplicar en la reclamacion núm. 30, sobre la cual el señor agente británico ha presentado su escrito de contestacion.

1 Mi honorable colega pretende adicionar el memorial llenando en el escrito de réplica los vacios de que aquel adolecia. Sostengo que el memorial no es tal cuando no se ha conformado a las disposiciones reglamentarias, que determinan los requisitos con que debe presentarse. Reformar el memorial en el escrito de réplica equivale a prorrogar por uno o dos meses los seis que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 otorgó a los reclamantes para poder ocurrir al Tribunal. Creo, pues, que estoi en mi derecho insistiendo en que no se dé curso al que ha presentado el señor Garnett Clarke, como lo pedi en mi contestacion.

La falta de la firma del reclamante la esplica el señor agente británico manifestando que el orijinal es el testo ingles i solo una traduccion el testo castellano; i que por eso firmó el señor Garnett el primero i no el segundo.

Esta esplicacion, lejos de justificar el procedimiento del reclamante, lo agrava, puesto que indica que no ha cumplido tampoco lo dispuesto en el art. II del Reglamento, que ordena precisamente lo contrario de lo que ha hecho, esto es, que el memorial se redacte en castellano i se acompañe con una traduccion al ingles.

2 El señor agente británico cree haber probado la nacionalidad del reclamante con la presentacion de una copia de la partida de nacimiento que aparece certificada por el señor cónsul de S. M. B. en Iquique. No puedo esplicarme porque esa partida no se ha presentado orijinal, puesto que existe en el Consulado de Iquique. El tribunal está llamado a resolver si el documento mismo orijinal tiene los caracteres de autenticidad que el Derecho exige. El señor

cónsul británico no puede desempeñar por sí el papel que corresponde al Tribunal; i como por ser lego en derecho, es posible que haya incurrido en error, yo solicito del Tribunal la exhibicion del documento orijinal, i a su tiempo designaré la persona que debe presenciar por mi parte esa diligencia en la ciudad de Iquique. Entre tanto, mantengo la excepcion de incompetencia que, fundada en este motivo, aduje en mi escrito de contestacion.

3 Respecto a la cuestion suscitada a propósito del poder que el reclamante acompañó a su memorial, i que mas tarde fué retirado para agregarlo a otra reclamacion, solo tengo que decir dos palabras.

La presentacion de ese poder hizo presumir a mi parte que el señor Garnett Clarke no procedia en este negocio en su propio nombre sino en el de la sociedad anónima que lo habia conferido. De allí nacieron las observaciones que formulé en el núm. 3 de mi contestacion, i a las cuales daba orijen el poder mismo. Habiéndoseme explicado en secretaria, que el poder habia sido agregado a este espediente por instrucciones del señor ajente británico mal espresadas o mal entendidas, i que a peticion de él mismo se habia desglosado el poder para agregarlo a la reclamacion correspondiente, me veo en el caso de retirar las observaciones formuladas en el núm. 3 de mi contestacion. Esto no significa por cierto que yo acepte como exacto el hecho de haber sufrido el reclamante las pérdidas que motivan esta reclamacion. Me atenderé en este punto a lo que resulte comprobado en forma legal. Entre tanto, creo que el Tribunal habrá de prestar el mérito que merece al testimonio irrecusable de las personas que han declarado oficialmente sobre los hechos, i en especial al del señor almirante Hotham i capitán Lambton, quienes espresamente interrogados han declarado como testigos presenciales del combate de 19 de Febrero de 1891, cual fué el verdadero orijen de los incendios que ocurrieron en esa fecha en el puerto de Iquique.

4 Mi honorable colega manifiesta la opinion de que lo que él llama *bombardeo* de Iquique ha impuesto al Gobierno de Chile el deber de indemnizar a los perjudicados por esa operacion de guerra.

He tenido el honor de demostrar en la dúplica de la reclamación núm. 26, que la cooperación que prestó la Escuadra de Chile a sus tropas de tierra en el combate de 19 de Febrero no es lo que técnicamente se denomina un bombardeo, porque no se ha pretendido rendir la plaza por medio del terror ni destruir fortificaciones que no existían, sino simplemente coadyuvar al éxito de la reñida batalla que se había trabado en el recinto mismo de la población. Los proyectiles lanzados por la Escuadra eran dirigidos contra las tropas mandadas por el coronel Soto, i de ninguna manera contra los edificios de la ciudad. Se comprende fácilmente, por una parte, la necesidad imperiosa que obligaba a la Escuadra a tomar parte en el combate; i por la otra, la imposibilidad de evitar que los proyectiles tocaran los edificios i produjeran el incendio.

Espuse también en aquella dúplica que aun considerada la operación de la Escuadra como un verdadero bombardeo, ninguna obligación incumbía al jefe de ella de dar aviso anticipado para que pudieran ponerse en salvo las personas de los que tomaban parte en el combate. Aquel aviso aconsejado por los tratadistas de Derecho Internacional para ese único i esclusivo objeto, era inútil, desde que no se iba a atacar sino el punto en que estaba el enemigo, de manera que los habitantes podían resguardar sus personas de todo peligro con solo retirarse del lugar en que estaba concentrada la batalla a cualquiera otra parte de la ciudad, lo que efectivamente hicieron, de modo que no hubo daños personales, ni hasta ahora se ha presentado nadie diciéndose víctima del pretendido bombardeo. Hice presente además que dadas las circunstancias en que se produjo la lucha, la rapidez con que el coronel Soto avanzó sobre la ciudad con el propósito de sorprender al enemigo, arrojarlo de sus posiciones i adueñarse de la población, no era necesario el aviso previo que sin duda habría frustrado completamente el plan de defensa que llevó a cabo el comandante Merino Jarpa. Era también imposible noticiar a los habitantes de un hecho que se produjo impensada i sorpresivamente.

Reproduzco en este lugar las alegaciones consignadas en la dúplica de la reclamación núm. 26, i las citas de las autoridades en

que se apoyaban; i concluyo pidiendo a V. E. que, en caso de no dar lugar a las excepciones dilatorias, se sirva rechazar la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Federico Garnett Clarke, súbdito británico, nacido en Inglaterra, residente en Iquique, reclama del Gobierno de Chile la cantidad de doscientas ocho libras esterlinas cuatro chelines, por pérdidas sufridas en el incendio de Iquique, ocurrido el 19 de Febrero de 1891.

Expone el reclamante que el 19 de Febrero de 1891 se trabó, en Iquique, una sangrienta batalla entre las fuerzas del Gobierno de Balmaceda i las fuerzas del partido congresista, i que el coronel Soto, jefe de las fuerzas del Gobierno, a fin de obligar a sus enemigos, que se habian apoderado de la Aduana, a abandonarla, mandó, deliberadamente, prender fuego a la manzana de edificios situada frente a la Aduana; que el incendio tomó rápido incremento propagándose hasta la manzana número 67, frente a la calle Luis Uribe, donde el reclamante tenia su oficina, la que con todo su contenido fué consumida por el fuego, ménos lo guardado en dos cajas de fierro que se salvaron mui deterioradas; que numerosos testigos vieron a soldados del coronel Soto acarreado leña i otros combustibles i una gran cantidad de parafina, con lo que produjeron el incendio; i que el Cuerpo de Bomberos fué impotente para sofocarlo por el nutrido fuego de fusilería que hacian en esos momentos i en ese mismo sitio los soldados del coronel Soto. Acompaña el inventario con los precios de las mercaderías i bienes contenidos en la oficina del reclamante el día del incendio.

El ajente de Chile, rechazando la reclamacion, observa: que el

memorial no se ajusta a las p̄scripciones del Reglamento; que el reclamante no ha probado su calidad de súbdito británico, por lo que el Tribunal es incompetente para entender en esta demanda; que la oficina cuya pérdida reclama no pertenece al reclamante sino a la *Compañía Salitrera Santa Rita Limited*, que es sociedad anónima i por tanto carece del carácter de súbdito británico que solo pueden tener personas humanas; i que, en este caso, es insuficiente el poder que acompaña por no estar claramente manifestada la voluntad i facultades otorgadas por sus mandantes, por lo que opone, nuevamente, las escepciones de incompetencia i falta de personería; que la reclamacion debe desecharse por falta de comprobacion de los hechos i que no acepta el valor que se atribuye a los bienes perdidos en el incendio; que ménos acepta que el coronel Soto haya intencionalmente mandado prender fuego a edificio alguno, pues está comprobado con las manifestaciones de numerosos reclamantes i el testimonio del almirante ingles Hotham que se hallaba en la bahia de Iquique en aquel dia, i declaracion hecha por el comandante del buque de guerra ingles *Warspite*, que el incendio se debió a disparos hechos por los buques chilenos en acto lejítimo de guerra. Cita al efecto varios tratadistas de Derecho Internacional i termina pidiendo al Tribunal se declare incompetente para conocer en esta reclamacion.

En la réplica se insiste en los argumentos espuestos en la demanda, se refutan los de la contestacion i se acompañan una partida de bautismo del reclamante i un nuevo memorial en español, firmado i jurado por el mismo reclamante ante el cónsul de S. M. británica en Iquique.

En la dúplica, el ajente de Chile sostiene lo dicho en la contestacion i se refiere a las alegaciones consignadas en la dúplica de la reclamacion número 26 i las citas de las autoridades en que se apoya; i

Considerando, que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique, en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias antes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonado por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres mas o ménos, desembarcados de los buques de guerra, se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de febrero, ya ántes de la seis de la mañana, el coronel Soto, del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable, habitados por muchos extranjeros, entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que el incendio de esa parte de la ciudad de Iquique, se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos que estaban en el puerto, hecho que se deduce de la declaracion del contra-almirante Hotham, que estaba en la bahía de Iquique, que dice en su comunicacion de 1.º de marzo de 1891: «el dia siguiénte, 19, poco despues de amanecer, se oyó un nutrido fuego de fusileria de tierra i se divisó que Iquique era atacado por fuerzas del Gobierno en número de doscientos cincuenta hombres, mas o menos. En este ataque, que duró desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, los navíos utilizaron continuamente su cañones de tiro rápido i algunas veces de seis i ocho pulgadas en contra de la parte de la ciudad ocupada por las tropas que atacaban, con el objeto de proteger las propias contra un movimiento de flanco. Por informaciones recojidas despues, supe que las tropas marcharon toda la noche i llegaron a la ciudad

al despuntar el día i avanzaron por las calles no encontrando resistencia ántes de llegar a la plaza principal donde cambiaron algunos tiros con las fuerzas navales, que en último término se replegaron a los edificios de la Aduana, donde permanecieron todo el día siendo atacados por pequeñas guerrillas diseminadas en las calles i casas vecinas. Una cantidad considerable de municiones se gastó principalmente por parte de las tropas navales, pues habia cerca de doscientos hombres en la Aduana que estaban surtidos por los buques, de municiones i de agua. Las tropas de la Aduana fueron reforzadas dos veces en el día por la Escuadra; botes con ametralladoras protejieron los refuerzos que se mandaron. Incendios estallaron en dos ocasiones diversas: una vez al comienzo del combate en medio del salitre en depósito a algunas yardas de la Aduana; éste lo extinguieron los bomberos, i un segundo, mas sério, hacía las tres de la tarde, que quemó dos manzanas de edificios, desgraciadamente situados en la parte principal de la ciudad; sin embargo, si se considera el fuego que hacian los buques i el de fusilería que disparaban incensantemente las tropas navales, la ciudad, en jeneral, sufrió relativamente poco.» («Blue Book, *Correspondance respecting the Revolution in Chili*, año 1892, paj. 82.»);

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia, a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los días precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla, no solo con un golpe de mano, sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reco-

noce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada, pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (Declaracion Internacional sobre la lei i usos de la guerra en la conferencia de Bruselas en 1874, artículo 15. Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV. § 2,068. Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, artículo 756 número 4. A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*. Paris, 1885, § 125. Nota de Goffken, *Manual de Derechos de la Guerra, del Instituto de Derecho Internacional* citado por Hall, página 125. Blunsthli, *Derecho Internacional Codificado*, artículo 55 bis.);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin prévio aviso, no es aplicable al caso presente; que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escudra chilena dar un aviso prévio a los habitantes de Iquique, puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de proteger sus tropas que ella habia desembarcado; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas 1874, i que exime de aviso prévio. Blunsthli, *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, artículo 554;

Considerando: que el reclamante, Federico Garnett Clarke, en el memorial, atribuye al incendio de Iquique, otra causa i sostiene que el coronel Soto, que mandaba las fuerzas asaltantes, dió la órden de prender fuego a los edificios que estaban al frente de la Aduana, donde se hallaban reconcentradas las tropas del partido congresista;

Considerando: que resulta de lo espuesto en los considerandos anteriores, que no se puede atribuir importancia séria alguna a estas alegaciones producidas por el reclamante para apoyar sus

pretensiones; que el contra-almirante británico Hotham, en su comunicacion citada anteriormente, no dice una palabra del pretendido incendio voluntario, sino que lo atribuye, al contrario, al bombardeo i al fuego nutrido que no cesó en todo el dia;

Considerando: que habiéndose levantado un sumario criminal judicial en Iquique en una época en que las pasiones políticas estaban todavia palpitantes, acerca de los hechos atribuidos al coronel Soto, la Corte de Apelaciones de Iquique absolvió a Soto, reconociendo que solo habia ligeras presunciones para condenarlo como autor del incendio;

Considerando: todavia, que aun cuando el coronel Soto hubiera mandado incendiar las construcciones ubicadas justamente al frente del lugar donde se encontraban resguardados sus enemigos i desde donde disparaban sobre sus tropas, con la esperanza de desalojarlos, habria tenido para ello derecho a virtud de las leyes de la guerra, que su propósito era obligar a las tropas de la Escuadra, que ocupaban la Aduana, que estaba pegada al mar, a reembarcarse i refugiarse en los buques, abandonando asi la posesion de la ciudad; que la pretendida intencion del coronel Soto «de hacer desaparecer el edificio que impedía a sus soldados hacer fuego sobre la Aduana», no habria sido sino un medio lejítimo de defensa o ataque que no está prohibido por las leyes de la guerra que autorizan el empleo de todos los medios de violencia contra las propiedades para reducir al enemigo, con la única limitacion que el medio empleado no sea desproporcionado al objeto que se persigue (William Edward Hall, *A Treatise on International Law*, Oxford 1890, 3.^a edition, page 529 § 184.—Fiore, *Derecho Internacional Codificado* § 1,053.—Blunstedt, *Le Droit International Codifié*. Traduction Lardy. Paris, 1886, art. 453 et. 549);

Considerando: que no hai para que insistir sobre aquella otra alegacion del reclamante, de que el coronel Soto hubiera impedido a los bomberos combatir el fuego haciendo disparar sobre ellos, pues si Soto tenia derecho, para un objeto estratéjico, de incendiar el edificio ubicado al frente de aquel ocupado por sus enemigos, tenia tambien, incontestablemente, el derecho de impedir que se hiciera fracasar la ejecucion de una determinacion que habria toma-

do en su carácter de jefe de las fuerzas asaltantes, proceder del coronel Soto que de ninguna manera se ha probado; que resulta del parte del contra-almirante Hotham, ya citado, que el primer incendio que estalló cerca de la Aduana fué apagado por los bomberos i que cinco jefes i voluntarios de la brigada de bomberos de Iquique, compuesta de extranjeros [ingleses, italianos, españoles] i que estuvieron presentes durante los sucesos, declararon bajo juramento, ante el juez, el 11 i 13 de Julio último «que el incendio de Iquique se debió a las bombas lanzada por la Escuadra i que léjos de prohibir a los bomberos, el coronel Soto, que apagaran el fuego, los hizo ayudar por sus soldados» [sumario agregado a la reclamacion núm. 12];

Considerando: que estos hechos están corroborados por las declaraciones del capitán de la marina inglesa, A. Lambton, confirmada por el contra-almirante Hotham en una carta dirigida al coronel Soto, en 18 de Enero de 1892, i en la cual estos oficiales superiores de la marina inglesa que se encontraban en el puerto de Iquique el 19 de Febrero de 1891, dicen: «Que segun todas las probabilidades, el incendio que tuvo lugar ese día en Iquique fué la consecuencia natural de las operaciones militares exigidas por el ataque i defensa de la plaza i que no vieron ni oyeron nada que pudiera hacerles creer que Soto habia incendiado personalmente edificio alguno»;

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de esta ciudad para cada uno de los belijerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podria procurarles la esplotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique, en 19 de Febrero de 1891, es una consecuencia de actos léjítimos de guerra i que no compromete la responsabilidad del Go-

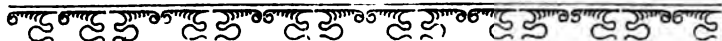
bierno de Chile, que, como lo dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que los sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en cuenta, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracia de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidentes, usando de su derecho.» [Vattel, *Derecho de Jentes*, libro 3.º, capítulo XV, § 232.—*The Law of Claims against Governments, House of Representatives 42-d.*—Congress —Report número 134, page 274 Washington, *Governement Prinling Office*, año 1875.]

Por estos fundamentos, el tribunal por mayoría de votos, disintiendo el árbitro inglés, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 14 de Octubre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Octubre de 1895.
—Diego Armstrong, secretario.





RECLAMACION N.º 31

ELENA O'BRIEN DE BRUCE

MEMORIAL

Al mui honorable Tribunal Arbitral Anglo-Chileno en Santiago.

Honorable Tribunal:

Elena O'Brien de Bruce, viuda súbdita de S. M. B., nacida en Irlanda, Gran Bretaña, en la ciudad de Charleville, condado de Cork, por ahora residente en Valparaíso i durante el tiempo de la guerra civil, ante vuestras señorías espongo:

Que durante la guerra del año 1891 no tomé parte ni directa ni indirectamente en la dicha guerra.

Que no he recibido suma alguna de dinero o compensacion a cuenta del reclamo que ante V. S. instituyo, ni he presentado reclamacion anteriormente ante cualquiera otro Tribunal.

Que la siguiente es la esposicion de los hechos i del reclamo que ante V. S. instituyo:

En la tarde del 28 de agosto de 1891, como a las ocho, una poblada compuesta de hombres, mujeres i soldados, gran número de ellos armados, se presentó ante los edificios de mi pertenencia, situados en la avenida de las Delicias de Valparaíso, bajo los núme-

ros 323, 325, 327, 329, 331, 333 i 335, i que consistian por el lado de la avenida de almacenes i por dentro de bodegas, galpones i casa de habitacion, pesebreras i otros edificios, el todo edificio en un espacio de 36 varas de frente i de mas de una cuadra de fondo i lo cual estaba arrendado bajo contrato a los señores Ruz i Ca. por el cánon de *cuatro mil ochocientos pesos* (\$ 4,800) al año.

La turba, durante algunas horas, hizo empeños para derribar las puertas con el propósito evidente de saqueo; entre otros actos, disparando gran número de balazos. Los arrendatarios habian tomado la precaucion de resguardar las puertas de entrada, formando tras ellas fuertes barricadas con sacos de harina, trigo i otros cereales, por lo que no les fué posible conseguir la entrada, i en vista de ello, a las 11 mas o ménos, prendieron fuego a los edificios, por lo que quedaron completamente destruidos.

El valor mínimum en que estimo la pérdida es de *treinta mil pesos* (\$ 30,000), cantidad que me permito observar no seria en manera alguna adecuada para el reemplazo de lo destruido i quemado.

El interes que reclamo es el de 7 % anual sobre la cantidad de \$ 30,00 por el término desde el 28 de agosto de 1891 hasta la fecha del pago de este reclamo que ante V. S. instituyo.

Abono el presente memorial con mi declaracion solemne i de estilo.

Es justicia.

ELLEN O'BRIEN DE BRUCE.

Sworn at the British Consulate General at Valparaiso, this twenty second day of march 1895. Before me.

JOHN E. CRAKER.

Vice Consul.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como ajente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion número 31, en la cual doña Elena O'Brien, viuda de Bruce, demanda \$ 30,000, mas intereses, valor atribuido a ciertos edificios que se dicen incendiados en Valparaiso la noche del 28 de agosto de 1891.

1 Supuestas la identidad de la persona i la autenticidad de la partida de matrimonio acompañada, se probaria con ésta que la señora reclamante se habia casado en Valparaiso hace medio siglo, el año de 1845; pero no se probaria que dicha señora tiene el estado i carácter de súbdito ingles, necesarios para poder ocurrir ante V. S.

Una partida de matrimonio no es comprobante de nacionalidad, cualquiera que sea, a este respecto, lo que los esposos o interesados hayan querido declarar ante el párroco; sobre lo cual pueden consultarse los artículos 308 i 1,700 de nuestro Código Civil, conformes en esta parte con los principios jenerales de lejislacion.

2 El dominio de la reclamante sobre los edificios a que se refiere tampoco se prueba con la escritura de arrendamiento acompañada, por mas que en ésta la arrendadora se dé el título de dueño.

Por otra parte, casi no necesito agregar que, por las consideraciones en que se han prestado los testimonios de los señores Geddes i Thomas, tasadores oficiosos, no prueban absolutamente que los referidos edificios valieran \$ 30,000 que la reclamante dice; sin que pueda agregarse que su dicho ha sido confirmado con juramento en la forma prescrita en el artículo IX del Reglamento de Procedimientos.

La señora O'Brien no ha acreditado los hechos aseverados en el memorial: no ha acreditado ni su nacionalidad inglesa, ni su dominio sobre los edificios indicados de la avenida de las Delicias, ni que ellos valieran \$ 30,000, ni que fueron totalmente incendiados

por una turba popular, como a las 11 P. M. del 28 de agosto de 1891.

3 Pero, aunque fueran ciertos los hechos espuestos i cierto que entre la turba andaban soldados, el hecho no afectaria la responsabilidad de mi Gobierno.

En esa suposicion, el acto no habria sido ejecutado por las fuerzas militares de la República, sino por hombres i mujeres del pueblo i por soldados dispersos, escapados a la vijilancia de sus jefes i oficiales.

En tales circunstancias, i no pudiendo hacerse justamente a las autoridades la inculpacion de no haber impedido el incendio, pudiendo hacerlo, ninguna responsabilidad resulta de aquel crimen contra el Gobierno de Chile i a favor del reclamante.

Rechazo particularmente el cobro de intereses del 7% i de cualquier tipo, propios de una mora que en ningun caso ha existido.

Para mayor ilustracion, me refiero a los antecedentes i alegaciones de hecho i de derecho espuestos en mi dúplica a la reclamacion número 3, del señor Egerton, análoga a la presente. Al efecto, reproduzco aquí, en cuanto sean aplicables a este caso, aquellos antecedentes i alegaciones.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva no dar lugar a la admision de esta reclamacion, o en subsidio, desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Elena O'Brien de Bruce, en el reclamo que tengo formulado para que se indemnizen los perjuicios que sufrí el 28 de Agosto de 1891 en Valparaiso, a V. E. con todo respeto espongo:

El señor agente del Gobierno de Chile, contestando a mi reclamacion pide que no sea admitida por no haberse justificado de-

bidamente los hechos en que ella se funda, i en subsidio, que sea desechada por no afectar ninguna responsabilidad a su parte.

Respecto a lo primero i haciendo uso de la facultad que me confiere el artículo X, inciso 3.º del Reglamento de Procedimientos de este Excmo. Tribunal, acompaño los siguientes documentos o justificativos:

I Un certificado del señor cura de la parroquia de Charteville, lugar de mi nacimiento i bautismo, por el que consta que no se encuentra en su archivo mi partida de bautismo.

II Una informacion sumaria de testigos rendida ante el señor Juez Letrado de Valparaiso, lugar de mi residencia, por la que se acredita con el testimonio de respetables testigos, mi nacionalidad i los demas hechos referidos en mi anterior memorial.

III Copia del título que acredita mi dominio sobre la propiedad destruida, que es materia de mi reclamo.

I respecto a lo segundo, me parece escusado repetir aquí las alegaciones que se han hecho a V. E. en los demas reclamos de que ha conocido el Excmo. Tribunal i en que uniformemente supongo, se ha presentado la misma defensa por el señor ajente del Gobierno de Chile. Me refiero a ellas en todas sus partes i las doi por reproducidas en esta solicitud.

En consecuencia, suplico a V. E. se sirva admitir mi reclamacion i dar lugar a ella en todas sus partes.

ELLEN O'BRIEN DE BRUCE.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en la reclamacion de doña Elena O'Brien de Bruce, que demanda \$ 30,000 e intereses, por incendio de casas en Valparaiso el 28 de Agosto de 1891.

Se acompaña a la réplica una escritura pública con la cual se prueba que la reclamante compró el año 1863 i por el precio de

§ 11,120 el sitio i casas ubicadas en la Avenida de las Delicias, Valparaiso, a que la reclamacion se refiere.

Nada tengo ya que observar sobre ese punto; pero, en órden al precio de \$ 30,000 atribuido solo a los edificios existentes en dicha propiedad el 28 de Agosto de 1891, no dejaré de hacer notar su grande exajeracion: de la tasacion se desprende que dichos edificios, ya vetustos en 1863, eran de construccion ordinaria, i atendido el trascurso de los tiempos, era natural su depreciacion, imponiéndose ya la conveniencia o necesidad de reconstruirlo; al revés de lo sucedido con el terreno, el cual ha debido ir subiendo en proporcion al notable i rápido incremento de la poblacion i del comercio de Valparaiso durante los últimos treinta años, hasta alcanzar aquel terreno el precio de \$ 30,000 indicado en el recibo anexo de impuesto municipal. Mediante eso, puede la señora reclamante pasar a justo título como capitalista, lo que por mi parte celebro.

2 Pero, si la reclamante ha rendido prueba legal en cuanto a su derecho sobre la propiedad referida, no ha sucedido lo mismo respecto de los demas puntos que han sido materia de observacion de mi parte. La situacion queda despues de la réplica tal como era antes en órden a la fórmula del juramento, a la nacionalidad de la reclamante, a la autenticidad i legalizacion de cartas i documentos, a la verdad de los hechos, a la efectividad i monto de los perjuicios reclamados, etc. Nada queda legalmente comprobado a esos respectos i, por lo tanto, nada acepto como verdadero.

La prueba testimonial acompañada al memorial primero i a la réplica despues, carece de todo valor i no puede ser tomada aquí en cuenta: los testimonios no han sido recibidos por funcionarios designados al efecto por V. E. han sido prestados sin citacion de de mi parte, de modo que no han podido ser contrainterrogados los testigos; respectos de estos, no se ha hecho ninguna de las indicaciones relativas a su profesion, nacionalidad, residencia etc., reiteradamente exigidas en los artículos, I, X i XI del Reglamento de procedimientos.

Por los demas, tampoco se ha ofrecido en forma reglamentaria rendir mas adelante prueba testimonial, i no es culpa del Gobierno reclamado si a ese respecto no ha hecho la reclamante uso del

derecho que solo en el memorial, i subsidiariamente en la réplica, le era permitido ejercitar.

Como quiera que sea, los referidos testimonios, aun tenidos como valederos, no ofrecerian virtualmente una base para la aceptacion de la reclamacion. Sobre ellos, debo llamar la atencion de V. E. a una circunstancia de la mas calificada importancia, a saber: que ni en el memorial, ni en la réplica, ni en ninguna parte, ha hecho la reclamante acusacion alguna a las autoridades de Valparaiso, de modo que no se vé de donde podria resultar la responsabilidad de la República; la señora O'Brien de Bruce no ha podido ni insinuar contra aquellas autoridades la acusacion de que, teniendo poder i medios suficientes, nada hicieron para contener la poblada o turba popular que, segun el memorial, habria sido precisamente la autora del incendio destructor de las casas de la reclamante, no imputado a persona alguna determinada.

3 Por mi parte, pudiendo hacerlo en la dúplica i aunque en rigor no sea necesario, ofrezco aqui, como en la reclamacion número 3, sobre los incendios i desórdenes de Valparaiso, durante la referida noche, i sobre la conducta de las autoridades i disposicion de patrullas en las dichas circunstancias, el testimonio de los siguientes señores, todos chilenos i residentes en Santiago:

Jeneral don Adolfo Holley i comandantes don Eliás Beytia i don Vicente del Solar; capellanes don Francisco Lisboa i don Emeterio Arratia; jерente de la Empresa de Agua Potable de Santiago, don Juan A. Walker Martinez, parlamentario, etc. Residentes en Valparaiso: don Carlos Nebel, comerciante, comandante del Cuerpo de Bomberos en agosto de 1891; don David Burns, mecánico, ingeniero de la 1.ª Compañia del mismo Cuerpo; i don Pedro Smith, comerciante, capitan de la 10.ª Compañia.

En cuanto particularmente se refiere a la organizacion de patrullas que recorrieron la poblacion para contener los desórdenes, i al hecho de que las autoridades de Valparaiso hicieron con la mejor voluntad todo cuanto, en las difíciles circunstancias de la referida noche, era posible hacer con aquel mismo objeto, ofrezco ademas el testimonio de los siguientes comerciantes extranjeros residentes en Valparaiso:

Don Raimundo Devés i don Martin Roy, ámbos franceses, superintendente del Cuerpo de Bomberos i capitán de la 5.^a Compañía respectivamente; don H. C. Sohst, alemán, actual comandante de aquel cuerpo, i don Emilio Eisele, también alemán, dueño del mas antiguo i conocido establecimiento de farmacia en Valparaíso.

Ofrezco todos los testimonios anteriormente indicados, no obstante que no corresponde a Chile el *onus probandi* i que en realidad no son aquellos necesarios, a mi juicio, para que V. E. pueda decidir con pleno conocimiento de causa; no debiendo, por lo demas, olvidarse que cada reclamacion ha de ser fallada en vista de la esposicion i la prueba producida en cada caso particular.

En cuanto al derecho, o sea, la cuestion de responsabilidad de Chile por actos de pillaje, como los indicados, ejecutados por turbas populares, la réplica se refiere en jeneral a las alegaciones hechas contra el Gobierno de la República en reclamaciones análogas a la presente, alegaciones que reproduce por su parte.

Yo, a mi vez, reproduzco las hechas en defensa de dicho Gobierno en aquellas reclamaciones, principalmente en la dúplica de la citada reclamacion número 3, ilustrada con citas de autores i precedentes de cancilleria i tribunales análogos al presente.

Dije allí i repito aquí: la pérdida de que la reclamante se queja habria sido una consecuencia natural e inevitable del estado de guerra, un caso de fuerza mayor, una desgracia i no una injusticia. Como daño proveniente de la guerra civil, Chile no responde legalmente de aquella pérdida, i ménos responderá a una persona como la reclamante, domiciliada en este pais desde ántes de casarse aquí el año de 1845, hace justamente medio siglo. ¿Cómo podria ella pretender una condicion privilegiada respecto de los chilenos, a cuya sociedad ha vivido voluntariamente incorporada durante mas de 50 años, en la cual ha fundado una familia i adquirido una fortuna? No podrá la señora señalar un solo chileno indemnizado en caso como el de ella.

En apoyo de que los extranjeros domiciliados en un pais no pueden pretender mejor situacion que los regnícolas respecto a reclamaciones por perjuicios sufridos a consecuencia de una guerra, invoqué particularmente en la citada dúplica de la reclamacion

número 3 la conducta del Gobierno de S. M. B. durante la guerra franco-alemana, conducta en todo conforme con la opinion que Lord de Granville comunicó a Lord Lyons en nota 2 de setiembre de 1860 inserta en los *Archives Diplomatiques*, 1871-1872, t. II p. 470, núm. 396.

A aquella nota puedo agregar aquí otras dos confirmatorias de las precedentes, emanadas tambien del *Foreign Office*, dirigidas por el mismo conde Granville a Lord Lyons i a Mr. West, en 11 de enero i en 1.º de marzo de 1871 respectivamente. Corren publicadas con los números 3 i 10 en el *Libro Azul (Blue Book)* de aquel año, número 4, o insertadas por don José Eujenio Vergara en su notable *Memorandum del agente del Gobierno de Chile ante las Comisiones Mistas Internacionales de Santiago*, p. 30, Santiago, 1884.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva decidir como pedí en la contestacion, no admitiendo esta reclamacion o desechándola en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El Agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Elena O'Brien de Bruce, viuda, súbdita de S. M. B. nacida en Irlanda, reclama del Gobierno de Chile treinta mil pesos, mas intereses sobre este capital, a razon del 7 por ciento anual, desde el 28 de Agosto de 1891 hasta la fecha del pago, por el incendio ocurrido en Valparaiso en 28 de Agosto de 1891.

La reclamante espone que el dia indicado, como a las 8 de la noche, se presentó, ante los edificios que ocupaban un frente de seis varas por mas de una cuadra de fondo i que poseia en la Alameda de las Delicias en Valparaiso, una poblada de hombres, mujeres i soldados, gran número de ellos armados i que esta turba principió por hacer empeños para derribar la puerta con el propó-

sito evidente de saqueo, disparando gran número de balazos; que los arrendatarios trataron de estorbar la entrada poniendo barricadas por cuyo motivo la turba prendió fuego a los edificios arrendados a los señores Ruz i C.^a en la suma de cuatro mil ochocientos pesos anuales; que el valor de los edificios lo estima en treinta mil pesos, que es la suma que reclama, mas intereses de 7 por ciento anual.

Acompaña como comprobantes: 1.º Una declaracion de dos vecinos de Valparaiso, cuyas firmas están certificadas por notario, que espresan que el valor de la propiedad destruida no puede ser ménos que treinta mil pesos; 2.º Una partida de matrimonio; i 3.º Un contrato de arrendamiento celebrado en Valparaiso ante el notario público, de los edificios destruidos.

El ajente del Gobierno de Chile, contestando, espone: que una partida de matrimonio no es comprobante de nacionalidad; que un contrato de arrendamiento tampoco comprueba el dominio; que el testimonio de los firmantes de la declaracion sobre el precio de los edificios incendiados no prueban absolutamente nada, i ademas no se conforma a la prescripcion del artículo IX del Reglamento; que no se han acreditado los hechos aseverados en el memorial en ninguna de sus partes; que aun cuando fueran ciertos los hechos espuestos i cierto tambien que entre la turba andaban soldados, no estaria afectada las responsabilidad del Gobierno de Chile por ello; que en esa suposicion esos actos no habrian sido ejecutados por fuerzas militares de la República, sino por hombres del pueblo i por soldados dispersos escapados a la vijilancia de sus jefes i oficiales; que no se ha hecho siquiera la inculpacion de que las autoridades no impidieron el incendio, pudiendo hacerlo; en consecuencia, pide que no se admita esta reclamacion i en subsidio se rechace.

En la réplica se acompaña informacion sumaria rendida en Valparaiso para comprobar la nacionalidad del reclamante i una escritura de propiedad de los edificios incendiados; por lo demas, se refiere a la esposicion que han hecho en sus espedientes otros reclamantes por incendio en Valparaiso.—En la dúplica se dice que la escritura de propiedad no le da sino el valor de once mil ciento

veinte pesos a la propiedad que ahora se quiere presentar importando treinta mil pesos, lo que es increíble; que la información rendida no tiene valor alguno para probar la nacionalidad, pues no ha sido prestada ante los funcionarios designados por el Tribunal ni con citación del Gobierno de Chile; que llama la atención a que, ni en el memorial ni en la réplica, se ha hecho cargo alguno a las autoridades de Valparaíso por los sucesos, materia del reclamo; que ofrece testigos, que designa, para probar la inculpabilidad de dichas autoridades, que ya en otras reclamaciones se ha probado con citas de autores i precedentes que no le cabe al Gobierno de Chile responsabilidad alguna por hechos como el de Valparaíso i que menos podía ser responsable respecto de una persona que ha estado domiciliada mas de cincuenta años en Chile, i en conclusión insiste en pedir conforme a la contestación; i

Considerando: que la reclamante Elena O'Brien de Bruce espone que el 28 de agosto de 1891 a las ocho de la noche, mas o menos, una poblada compuesta de hombres, mujeres i soldados, gran número de éstos armados, llegaron ante la casa que posee en la avenida de las Delicias i que esta turba principió por hacer empeños por derribar las puertas con el propósito evidente de saqueo, disparando gran número de balazos; que los arrendatarios de la casa trataron de impedir la entrada poniendo barricadas i por este motivo la turba prendió fuego a los edificios;

Considerando: que la batalla de la Placilla, que dió por resultado la caída definitiva del Presidente Balmaceda, se libró el 28 de Agosto de 1891 i a seis kilómetros mas o menos de la ciudad de Valparaíso; que la noticia de la victoria del partido congresista se supo en esa ciudad como a las diez de la mañana, como lo comprueba el parte dirigido al Almirantazgo por el capitán Saint Clair, de la marina inglesa, que mandaba el buque de guerra *Champion* surto entónces en la bahía de Valparaíso (*Blue Book. Correspondance respecting the Revolution in Chili*. Año 1892. Núm. 1, page 233); que los soldados del ejército derrotado se refugiaron en el pueblo de Valparaíso, como lo constata el cónsul Jeneral de Inglaterra, señor Lewis Joel, en una comunicaciou dirigida en 1.º de Setiembre al *Foreign Office* (loco. citado páj. 250);

Considerando: que como a las once i media de la mañana el intendente de Valparaiso, contra-almirante Viel, convencido de su impotencia para continuar la resistencia i para garantir el orden público, se dirijió espontáneamente a los jefes de las escuadras extranjeras al ancla en el puerto i les solicitó hicieran bajar a tierra un contingente de sus marinerías i que intervinieran en la rendición de la plaza al partido victorioso (Telegrama del contra-almirante alemán de Valois al almirantazgo de Alemania, Libro Blanco núm. 243); que desde el medio día, soldados de marina de las escuadras alemana, inglesa, francesa i de los Estados Unidos, desembarcaron i se distribuyeron en los barrios que principalmente habitaban los extranjeros; que el cónsul jeneral británico, en su comunicacion preindicada estima el total de estas tropas de marina en setecientos hombres;

Considerando: que solo despues que hubieron desembarcado las fuerzas extranjeras i de la entrevista que tuvo i que él solicitó, con los almirantes de las escuadras, en el momento de penetrar las avanzadas del ejército victorioso, fué cuando el intendente Viel se refujió a bordo del buque de guerra alemán *Leipzig* (*Blue Book*, loco. citado); que en la tarde dos batallones de infantería i alguna fuerza de caballería ocuparon la ciudad, i que hácia las 4 P. M., el Estado Mayor instaló su cuartel jeneral en el edificio de la Intendencia;

Considerando: que segun los partes oficiales del comandante de la escuadra inglesa i del cónsul jeneral británico, no se perturbó el orden durante el resto del día 28 de agosto, i que no fué sino al entrar la noche, que soldados desmoralizados i el populacho cometieron excesos en las dos estremidades de la ciudad e incendiaron algunas casas, disturbios que duraron hasta venir el día; que resulta del parte del capitán inglés Saint Clair, que el pueblo se habia apoderado de los fusiles abandonados por los soldados vencidos i que éstos, en su fuga, se despojaron de sus uniformes a fin de no ser conocidos i tomados prisioneros; que todos estos hechos están confirmados por el contra-almirante George Brown de la marina de los Estados Unidos (*Correspondencia oficial relativa a Chile*. Washington, 1892, páj. 284) como tambien por el contra-almirante ale-

man de Valois i el cónsul aleman en Valparaíso, en sus comunicaciones de 1.º de setiembre de 1891 (*Libro Blanco* núm. 261 i 259); que el mismo almirante de Valois constata «*que durante toda la noche se oían descargas de fusilería mas o ménos nutridas, hechas, principalmente, por las patrullas del partido congresista contra los saqueadores e incendiarios;*»

Considerando: que el Gobierno del partido vencedor nombró sin tardanza un nuevo intendente, don Euljio Altamirano, quien se hizo cargo inmediatamente del puesto i dirijió el 29 de agosto una proclama a los habitantes de Valparaíso;

Considerando: que resulta de todos estos hechos, constatados oficialmente por las autoridades estranjeras que allí estuvieron presentes, que si a pesar de las medidas que se tomaron, disturbios graves se produjeron en Valparaíso, en la noche del 28 al 29 de agosto de 1891, no puede de ello hacerse responsable al Gobierno, puesto que en las circunstancias difíciles del momento, despues de una batalla sangrienta, que ponía termino a una guerra civil que habia sobreexitado los ánimos, habia tomado todas las medidas que estaban a su alcance; que la resolucion estrema de solicitar de los comandantes de las escuadras el desembarco de tropas estranjeras, comprueba suficientemente que no hubo de su parte ni la negligencia ni la imprevision capaces de comprometer su responsabilidad;

Considerando: que el reclamante se limita a decir que una turba de hombres, mujeres i soldados armados fué la que se presentó a su casa con el evidente propósito de saqueo, i que por la resistencia hecha por los moradores la turba prendió fuego a los edificios, sin precisar si esos soldados estaban bajo la vijilancia de sus jefes i sin probar que pertenecian al ejército regular; que resulta, por el contrario, de las comunicaciones oficiales citadas anteriormente como un hecho mui verosímil, cosa que tambien dicen el comandante de la escuadra inglesa, el cónsul jeneral británico i los otros funcionarios estranjeros; que los excesos se cometieron por soldados fujitivos i populacho armado, excesos que la autoridad estaba en esos momentos en la imposibilidad de reprimir de una manera completa i eficaz;

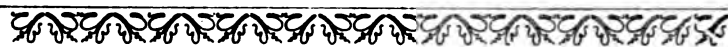
Considerando: que cuando un Gobierno está temporalmente in-

capacitado para dominar en su territorio, los actos de particulares o de una parte del pueblo, que se ha sustraído a su autoridad por medio de una sublevación, de una guerra civil o de disturbios locales, no es responsable de los daños sufridos por extranjeros;

Considerando: que si el Derecho Internacional prescribe a las autoridades militares de una nación beligerante, el que ejercite todas sus facultades para hacer respetar por todas las personas que estuvieren bajo su dependencia, los bienes terrestres de los ciudadanos pacíficos, no hai nada que pruebe que los excesos relativos que la ciudad de Valparaíso hubo de experimentar, fueran perpetrados por los soldados del ejército victorioso, únicos sobre los cuales los jefes habían conservado autoridad; que es además aceptada como doctrina legal i por la jurisprudencia que los actos de merodeo o pillaje practicados por los soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes, no afectan la responsabilidad de los gobiernos; que tales hechos se consideran como delitos comunes, sujetos a la represión penal ordinaria. (William Edward Hall, *Treatise on International Law*, Oxford, Third Edition 1890, page 218. Bluntschli, *Le Droit International Codifié*, artículo 380 bis. Dudley Field, *Cod. International*, page 249 § 721. *Revue Générale de Droit International*, année 1895, número 3, mai, juin. *Tribunal Arbitral de Washington*, 1894. sentencia número 4, páj. 131. *Tribunal Arbitral Anglo-Chileno de 1884*, sentencia número 50, páj. 351. *Tribunal Arbitral Italo-Chileno de 1884*, sentencia número 96, páj. 305.)

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro británico, declara al Gobierno de Chile irresponsable de las pérdidas sufridas por la reclamante Elena O'Brien de Bruce.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Octubre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 32

SMITH I SERVICE

MEMORIAL

Al Tribunal Anglo-chileno de Arbitramento de los reclamos de sujetos británicos procedentes de la guerra civil en 1891 en Chile.

La MEMORIA de SMITH I SERVICE, dueños de buques, de la calle Gordon número 54, Glasgow, en el Condado de Glasgow, en aquella parte de la Gran Bretaña llamada Escocia.

Manifiesta humildemente:

I. Que los nombres de los socios de dicha casa son—John Smith, nació en Saltcoats en el año de nuestro Señor mil ochocientos veinticuatro, de padres escoceses; William Service, nació en Glasgow en el año de nuestro Señor mil ochocientos ochenta i cuatro, de padres escoceses; i Thomas Pairman, nació en Glasgow en el año de nuestro Señor mil ochocientos cincuenta i uno, de padres escoceses; que estos tres mencionados son los únicos socios

de la casa de Smith i Service; que son todos sujetos británicos, residentes para los objetos de los negocios de dicha casa en la calle Gordon núm. 54, ya mencionado, i fueron todos tres residentes allá a las fechas en que tuvieron lugar las ocurrencias de las cuales procede el reclamo relacionado en esta memoria: Que los suplicantes no intervinieron ni directamente ni indirectamente en la guerra civil en Chile que principió el 7 de enero, de mil ochocientos noventa i uno, i concluyó el 28 de agosto de aquel año; que durante aquel tiempo ninguno de ellos estuvo en el servicio o recibió remuneración de cualquier de los belijerosos.

II. Que los suplicantes son los dueños del vapor de hierro británico *Mount Tabor*, cuyo número oficial en el registro británico es 86,685, i su tonelaje neto de registro es 1,494 toneladas, siendo su tonelaje bruto de registro 2,301 toneladas.

III. Que el *Mount Tabor* llegó a la costa chilena en diciembre de mil ochocientos noventa, con carga jeneral de Nueva York para los puertos de Valparaiso, Arica, Mollendo i Callao. Despues de descargar este cargamento el *Mount Tabor*, procedió a Iquique para cargar ahí un cargamento de nitrato de sosa, en conformidad con un contrato de fletamento hecho *antes de salir de Nueva York* entre los suplicantes i Henry Bath e hijo, de Lóndres, obrando como agentes i en nombre de la *Rosario Nitrate Company, Limited*, i fechado el 30 de setiembre de mil ochocientos noventa. Una copia certificada de este contrato de fletamento es anexada a esta memoria. Por este contrato de fletamento se estipuló que el vapor seria cargado a razon de 200 toneladas por dia laborable, i que los fletadores pudieran detenerlo diez dias siguientes sobre demoras, a razon de ocho peniques, moneda británica esterlina, por tonelada de registro al dia, lo que equivale cuarenta libras, dieziseis chelines (£ 49-16) moneda británica esterlina, por dia; pero el dicho contrato de fletamento estipuló que los constreñimientos de príncipes i gobernadores, desordenes e impedimentos políticos serian siempre exceptuados mutuamente. El vapor llegó en Iquique el 29 de enero de mil ochocientos noventa i uno, i estuvo entónces listo a cargar el propuesto cargamento de nitrato de sosa, pero los embarcadores, los señores Gibbs i Compañía, de Iquique, los agentes i

embarcadores de la *Rosario Nitrate Company, Limited*, dijeron al capitán que debido a las circunstancias existentes en aquella plaza i a la circunstancia de estar bloqueado el puerto, les fué de un todo imposible el facilitarle carga alguna. El *Mount Tabor* se quedó en Iquique aguardando su carga (con excepcion de hacer dos vueltas a Arica con refujios) hasta el 23 de marzo, en cuya fecha la primera porcion del cargamento fué recibida. Con tal que el vapor se detuvo del 29 de enero hasta el 23 de marzo, siendo 53 dias. Durante ese tiempo se acudió el capitán repetidamente a los señores Gibbs i Compañía, pidiéndoles carga, pero siempre recibió la misma contestacion, que no fué posible, debido a las circunstancias existentes. En consecuencia de las excepciones estipuladas en el contrato de fletamento, los suplicantes no pudieron recobrar de los fletadores las demoras por los dichos 53 dias, i por lo tanto, estas demoras les formaron una pérdida a causa de las desórdenes políticas en Chile. La pérdida real que sufrieron los suplicantes por la detencion fué mas de la proporcion de demoras estipulada en el contrato de fletamento. Por consiguiente, los suplicantes reclaman, como primera partida de su reclamo, £ 49-16, moneda británica esterlina por dia, por la detencion de su vapor durante los dichos 53 dias, o en todo £ 2,639-8 esterlinos.

IV. El dia 7 de abril el *Mount Tabor* fué cargado i salió de Iquique para Hamburgo con un cargamento de 2,800 toneladas de nitrato de sosa, i el 14 de abril hizo escala en Coronel para tomar el carbon necesario para el viaje de retorno, conforme a las instrucciones orijinales dadas al patron. Luego que llegó en Coronel los oficiales que predominaron el puerto en aquel tiempo quitaron todos los papeles del buque i participaron al capitán que no seria permitido a proseguir su viaje ni tampoco recibiria carbon alguno hasta que los embarcadores hubieran pagado a las autoridades en Coronel los derechos de esportacion sobre el cargamento de nitrato embarcado en Iquique, los cuales habian sido ya exigidos por i pagados a las autoridades en Iquique. Por este motivo el vapor fué detenido en Coronel desde el 14 de abril hasta el 24 de abril, ámbos inclusives, viendose forzados los embarcadores de ceder una obligacion de pagar los derechos ántes de quedarse libre el buque.

Por lo tanto los suplicantes reclaman, como segunda partida de su reclamo, la detencion de su vapor en Coronel por diez dias a la misma proporcion de £49 16c. esterlinos por dia, o en todo £498 esterlinas.

V. En el viaje de retorno de Iquique a Hamburgo, el Patron del *Mount Tabor* encontró que la marcha del vapor no pudiera de ninguna manera exceder de cinco a seis nudos por hora en lugar de los nueve nudos ordinarios por hora, o de los diez nudos amenudo alcanzados. Esta disminucion de marcha fué causada por motivo de haberse ensuciado el fondo del casco del buque, hallándose cubierto de barnacles a consecuencia de su larga detencion en Iquique, habiendo sido detenido allá 68 dias en todo en lugar de los quince dias que se hubiera quedado allá bajo las circunstancias ordinarias i segun lo estipulado en el contrato de fletamento. El vapor, al salir para Chile acababa de meterse en dique en donde recibió una cubierta de la Composicion patente *antifouling* de Rahtjen, i su fondo era perfectamenie limpio a su llegada en Iquique, lo que se prueba por su marcha en los últimos tres dias del viaje de ida, es decir, desde 29 a 31 de diciembre, a saber, 215 nudos, 213 nudos i 215 nudos respectivamente, o sea un promedio de 214 nudos al dia, lo que equivale 9 nudos por hora. Si el vapor hubiera alcanzado su marcha ordinaria de 214 nudos por dia en el viaje de retorno, el buque hubiera llegado en Hamburgo en 45 dias, o a lo mas tardar en 1.º de junio, mil ochocientos noventa i uno, siendo la distancia de Iquique 9,750 nudos i tomando en cuenta la detencion en Coronel, pero debido a la marcha disminuida el vapor no llegó en Hamburgo hasta el 6 de julio, mil ochocientos noventa i uno, haciendo así una pérdida de tiempo de . . . 35 dias.

Concédase por cualquiera demora posible en el viaje

procedente de otras causas que la ensuciarse, . . . 5 »

Dejando el tiempo neto estra en el viaje, . . . 30 dias

A su llegada de vuelta el vapor se metió en dique seco cuando se vió que el fondo fué cubierto mui densamente de barnacles, siendo estos cerca de 2 1/2 pulgadas de largo en algunas partes, i

esto bastó para explicar la marcha tan disminuida. Por lo tanto los suplicantes reclaman, como tercera partida de su reclamo, la pérdida de tiempo en el viaje de 30 dias a la misma proporcion de £49 16 c por dia, o en todo £ 1,494 esterlinas.

VI. El vapor salió de Coronel con 700 toneladas de carbon a bordo, las cuales bastaban bajo las circunstancias ordinarias para llevar el buque a Hamburgo, agregando 120 toneladas de carbon en las Palmas. La calidad del carbon fué la misma que tomó el vapor en Coronel en su viaje de ida por la cual pudo sostener su marcha promedio de 214 nudos por dia como ya explicado. No obstante debido al estado sucio del fondo del buque la marcha se disminuyó tanto i el consumo de carbon necesitado para impellerlo se aumentó tal que el capitan se vió obligado en el viaje de retorno a hacer escala en Rio Janeiro, opuesto a sus intenciones e instrucciones, i a comprar en aquella plaza 440 toneladas de carbon a un costo de £ 1,220 9 8 esterlinos

Se vió obligado tambien a tocar
en San Vicente i despues en
Madera i comprar en aque-
llas plazas carbon adicional
a un costo en San Vicente
de.

i en Madera de

Total

146	18	5	»
320	8	11	»
<hr/>			
£ 1,687	16	11	»

Concédase por 120 toneladas
que debió haberse comprado
en Las Palmas a 24 ch. . .

144	0	0	»
<hr/>			
£ 1,543	16	11	»

Concédase por cualquier con-
sumo posible estra proce-
dente de otras causas que la
de haberse ensuciado . . .

43	16	11	»
----	----	----	---

Arrojando un costo neto estra
de carbon importando. . .

£ 1,500	0	0	»
---------	---	---	---

que reclaman los suplicantes como partida cuarta de su reclamo.

VII. Los suplicantes reclaman tambien como partida quinta de su reclamo el dar asilo a refujios a bordo cuando estaba en el puerto de Iquique segun las circunstancias relacionadas en la carta del capitan de 19 de enero, mil ochocientos noventa i dos, una copia de la cual va anexada a esta memoria—dígase. . . . £ 100 0 0

VIII. Los suplicantes tambien reclaman como partida sesta de su reclamo la cantidad de setenta libras esterlinas británicas, siendo la pérdida sufrida de dos vueltas de Iquique a Arica con refujios. El capitan percibió la cantidad de 1,200 pesos por la primera vuelta, i de 1,800 pesos por la segunda; pero estas sumas no indemnizaron a los dueños por el carbon, comidas i víveres consumidos i por otros gastos adicionales (no tomando en cuenta el tiempo del buque).

IX. Los suplicantes no han recibido de ninguna parte cualquiera dinero alguno o indemnizacion con respecto a los susodichos reclamos.

X. Los suplicantes hicieron lo posible para recobrar de los fletadores los daños i perjuicios enumerados arriba por medio de iniciar contra ellos un proceso en el Tribunal Superior de Justicia en Inglaterra. El reclamo de los suplicantes fué exactamente igual al de esta memoria con escepcion de las partidas quinta i sesta. Sin embargo una sentencia fué decretada contra los suplicantes i a favor de los fletadores, alegando que los fletadores no habian podido principiar a cargar al vapor antes del 23 de Marzo, mil ochocientos noventa i uno, por motivo de las desórdenes políticas. Los suplicantes hicieron apelar contra esta sentencia pero el Tribunal de Apelaciones la confirmó.

Los suplicantes pretenden a ser indemnizados por las costas incurridas en este proceso, como partida séptima de su reclamo, i ascendiendo a £ 1, 159-7-6 esterlinos.

El reclamo no se ha presentado a ningun otro Tribunal,

XI Por lo tanto los suplicantes reclaman contra el Gobierno de Chile las cantidades siguientes en moneda de oro británica esterlina:

I Daños i perjuicios por detencion en Iquique, el
puerto de cargar £ 2,639 8 0

2 Daños i perjuicios por detencion en Coronel..	498	0	0
3 Daños i perjuicios por detencion en el viaje de retorno.	1,494	0	0
4 Los gastos adicionales de carbonar en el viaje de retorno.	1,500	0	0
5 Por dar asilo a refujios.	100	0	0
6 Por pérdida sufrida en trasportar refujios de Iquique a Arica.	70	0	0
7 Por costas del proceso en el Tribunal Superior de Justicia en Inglaterra.	1,159	7	6
Total.	£ 7,460	15	6
8 Por intereses desde 23 de Marzo, 1891, hasta 24 de Abril, 1895, al 5 por ciento al año..	1,523	4	8
	£ 8,984	0	2

XII. Que para sostener su reclamo los suplicantes anexan a esta memoria i firman como relativos a la misma los documentos adicionales siguientes, a saber:

- Certificado **A** Copia del contrato del fletamento fechado 30 de Setiembre, 1890.
- Idem **B** Copia de la protesta ejecutada por el capitan J. Munro en Iquique el 2 de Febrero, 1891, ante el cónsul británico facultado en aquella plaza.
- Idem **C** Protesta ejecutada por el capitan J. Munro en Coronel el 16 de Abril, 1891, ante el vice-cónsul británico facultado en aquella plaza.
- Idem **D** Protesta ejecutada por el capitan J. Munro en Arica el 28 de Febrero, 1891, ante el vice-cónsul británico en aquella plaza.
- Idem **E** Copia de la carta del capitan Munro a Gibbs i Ca. fechada 29 de Enero, 1891.

Certificado **F** Copia de la carta de Gibbs i Ca. al capitan Munro fechada 29 de Enero, 1891.

Idem **G** Copia de la carta del capitan Munro a Gibbs i Ca. fechada 14 de Febrero, 1891.

Idem **H** Copia de la carta de Gibbs i Ca. al capitan Munro fechada 26 de Febrero, 1891.

Idem **I** Copia de la carta del capitan Munro a Gibbs i Ca. fechada 24 de Marzo 1891.

Idem **J** Certificado del Decano del Cuerpo Consular en Iquique con respecto a la suspension de trabajo en esa plaza.

Idem **K** Carta del capitan Munro a los suplicantes.

Idem **L M N** Comprobantes del carbon comprado.

Idem **O** Alegaciones.—Relacion del reclamo i de la defensa en el proceso de Smith i Service *contra* la Rosario Nitrate Company.

Idem **P** Sentencia del baron Pollock en dicho proceso.

Idem **Q** Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el mismo proceso.

Idem **R** Comprobantes de las costas del proceso.

XIII. Que cualquiera demora que pueda haber ocurrida en presentar esta memoria procede de la ignorancia de los suplicantes con respecto al tribunal establecido i de las órdenes espedidas por el mismo, hasta el primero de Marzo mil ochocientos noventa i cinco, cuando recibieron una noticia del Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres. Si las pruebas que acompañan esta memoria no fuesen considerados en debida forma o suficientes para el objeto indicado por el Honorable Tribunal, los suplicantes ruegan permiso de amplificar las mismas para sostener su reclamo.

JOHN SMITH
WILLIAM SERVICE
THOMAS PAIRMAN

Glasgow 11 Marzo 1895.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Los señores John Smith, William Service i Thomas Pairman han presentado ante V. E. una reclamacion contra el Gobierno de Chile por la suma de £ 7,465-15-6 representativa del capital i de £ 1,523-4-8 por razon de intereses calculados al 5 por ciento anual.

Fundan su reclamacion en siete capítulos diversos, de cada uno de los cuales me ocuparé en el curso de esta contestacion. Yo espero que V. E. se ha de servir declararse incompetente para conocer de la reclamacion; i en subsidio desecharla en su totalidad por las razones que paso a manifestar.

1 Aunque los señores reclamantes se titulan súbditos británicos, declarando los dos últimos haber nacido en la ciudad de Glasgow i el primero en Salcoats, no han acompañado documento alguno para acreditar esta circunstancia, que es la base de la reclamacion i de la competencia de V. E.

Parte de las partidas que se cobran no provienen tampoco de actos u operaciones ejecutados por las fuerzas de mar o tierra de la República, apesar de estar comprendidos los sucesos que les han dado oríjen en el período de tiempo que medió entre el 7 de enero i el 28 de agosto de 1891. V. E. segun los términos del artículo I de la Convencion de 26 de setiembre de 1893, no está llamado a conocer de demandas de esa clase, lo cual iré haciendo presente en su oportunidad. Por uno i otro de los espresados motivos suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion.

2 La demanda contenida en el memorial de los señores Smith i Service se presta a ciertas observaciones de carácter jeneral, que desde luego someto a la consideracion de V. E.

Primeramente, los señores reclamantes se han abstenido de presentar documento o dato alguno que acredite la propiedad que se atribuyen sobre el vapor *Mcunt Tabor*, de cuyas demoras i gastos extraordinarios pretenden ser indenmizados. Posible es que den-

tro de su propio país esa prueba pudiera ser escusada, sustituyéndola con la notoriedad pública. En un país extraño i ante un Tribunal Internacional, es indispensable otra clase de prueba para dejar establecido sin lugar a duda este hecho capital. Ninguna han presentado ni ofrecido presentar los reclamantes acerca de este punto; por manera que queda en tela de juicio su lejitima personeria; i yo opongo desde luego esta escepcion a la demanda deducida.

En segundo lugar, el presente juicio aparece seguido en Lóndres en contra de los únicos que pudieran ser verdaderamente responsables de los perjuicios que los reclamantes sostienen haber sufrido. Ellos no han celebrado con el Gobierno de Chile sino con la *Rosario Nitrate Company Limited* el contrato, que estos señores no les cumplieron. Si ya fué escojido ese camino para obtener indemnizacion, no se comprende con que derecho intentan uno nuevo, olvidándose del aforismo de derecho; *electa una via non datur recursus ad alteram*, i de la regla consignada en el Reglamento de Procedimientos de este Tribunal, que en su artículo VI preceptúa que el reclamante declare si ha presentado anteriormente su reclamacion ante cualquiera otro tribunal, con el propósito manifesto e indudable de ceñir sus actos al principio de derecho que dejó mencionado. Siendo así, este antecedente da mérito bastante para que la presente reclamacion sea desechada.

En tercer lugar, la documentacion con que se apareja el memorial no tiene las condiciones de autencidad i legalizacion que son necesarias para considerarlos como fehacientes. Todos los documentos son copias simples sin firma alguna, i no se ha tenido cuidado de decir donde están los orijinales de que se han tomado, ni de acreditar por los medios usuales la conformidad entre unos i otros. No pueden, por consiguiente, aducirse como antecedentes dignos de fé, i que por si constituyan prueba bastante de los hechos a que se refieren.

3 Cobran los reclamantes por razon de estadias en el puerto de Iquique la suma de £ 2,639-8 en que estiman los perjuicios que se les han ocasionado con la demora de 53 dias en que se dicen no pudieron recibir carga a causa del bloqueo del puerto i desórdenes

ocurridos con motivo del estado de guerra en que en que encontró a su llegada a Iquique, a la provincia chilena de Tarapacá.

Es efectivo que, al llegar a Iquique el vapor *Mount Tabor*, el puerto se encontraba bloqueado por la Escuadra chilena, que se habia levantado en amparo del Congreso Nacional i en contra del Presidente de la República. Este bloqueo duró hasta el 16 de Febrero siguiente i el *Mount Tabor* no pudo embarcar salitre durante diecisiete dias. El 19 de Febrero se dió una batalla en la misma ciudad de Iquique, a consecuencia de la cual se suspendió el servicio de la Aduana i el movimiento marítimo en la bahía durante ese dia i los inmediatos. El 23 de Febrero se restableció el servicio i el tráfico; i el 24 ámbos habian entrado ya en plena actividad, para no sufrir ninguna perturbacion posterior. Habria, pues, que agregar a los diecisiete dias de impedimento por causa de bloqueo, otros cuatro dias en que el embarque se hizo imposible a causa del disturbio ocasionado por el combate de 19 de febrero: lo que formaria un total de 21 dias de demora sufrida por el *Mount Tabor* a causa de los sucesos de la guerra. Acompaño a este respecto certificado de la Gobernacion Marítima i de la Aduana de Iquique en que consta que el 23 de Febrero se restableció el tráfico en la bahía i el 24 empezó el funcionamiento de la Aduana. El mismo reclamante confiesa este hecho, puesto que en la carta de 24 de marzo de 1891, el capitan Munro hace presente a los señores Gibbs i C.^a que el 27 de Febrero estos señores habian estado cargando salitre en otro vapor.

Los 53 dias que los reclamantes pretenden haber estado impedidos para llevar a cabo la carga de su buque, quedan así reducidos a 21, o a lo sumo a 22 dias.

Pero en su afan de hacer efectivos sobre Chile los cargos que pueden tener contra los fletadores del vapor *Mount Tabor*, los fletantes pretenden tambien hacer valer en contra de mi representado el contrato de fletamento en que este no ha tenido ninguna intervencion. Así, sostienen que debe serles pagadas por Chile las estadías i sobre estadías, a razon de ocho peniques por tonelada de registro porque así lo pactaron fletante i fletador. Olvidan que ese contrato es para mi parte *res inter alios acta*, i que de ninguna

manera puede afectarle. No acepto, pues, ni el tonelaje que se atribuye al *Mount Tabor*, i que no consta de documento alguno que pueda hacer fe contra mi parte; ni tampoco la aplicacion que se pretende hacer con respecto al Gobierno de Chile de las estipulaciones del contrato de fletamento.

4 Esto por lo que hace a los hechos. En cuanto al derecho, no puede ponerse en duda la facultad con que uno de los beligerantes hizo uso del bloqueo, que es un medio lejítimo de guerra. El fué notificado anticipadamente a los neutrales, a fin de que no sufrieran sino aquellos perjuicios inevitables con una medida de este jénero; i esta es la única condicion que el Derecho Internacional exige para que sea lícito un bloqueo efectivo. Por ser este un punto demasiado conocido i encontrarse uniformes los pareceres de los tratadistas, me limito a referirme a las citas de Hautefeuille i de Fauchille, autores especialistas en la materia, que hice al contestar la reclamacion de Mr. James Ebenezer Dunn, que lleva el número 14.

Un acto lejítimo de guerra como el de que se trata, no impone el deber de indemnizar a aquellos que sufren sus consecuencias. Precisamente estas mismas consecuencias son las que hacen del bloqueo una arma útil de combate i un medio lejítimo de obtener del enemigo las concesiones o ventajas que se pretenden.

Del mismo modo, siendo una batalla una operacion lejítima de guerra, i la mas importante de todas, las consecuencias inmediatas que produce, no dan derecho a obtener una indemnizacion. Si el incendio de una casa, de una sementera o de un bosque, si la muerte misma de un neutral que desgraciada e inopinadamente se encontró en medio de un combate, no dan derecho a indemnizacion, ménos puede darlo la circunstancia de no poder hacerse en un puerto los trabajos cuotidianos por causa de la confusion i desórden producidos por un combate. Me refiero tambien en esta parte a la doctrina de todos los tratadistas, limitándome a citar a Bluntschli i Fiore, al primero en los artículos 652 i 662 de su *Derecho Internacional Codificado*, i al segundo en el t. 3, § 1,714 i siguientes de su *Nuevo Derecho Internacional*.

5 Tambien cobran los reclamantes diversas sumas por perjuicios derivados de la demora habida en Iquique, que suponen haberles

sido impuesta por la fuerza. Esos perjuicios han consistido en la lentitud del viaje de regreso a Hamburgo, ocasionada por la suciedad de los fondos del vapor a causa de su larga permanencia en Iquique; en el mayor consumo de carbon que le fué forzoso hacer por este mismo motivo; i en los gastos del proceso que siguieron en Inglaterra para obtener de la sociedad *The Rosario Nitrate Company. Limited*, la misma indemnizacion que hoi pretenden arrancar del Gobierno de Chile.

Habiendo dejado establecida la inexactitud de los hechos en que se funda la reclamacion i la improcedencia de ésta en conformidad a los principios del Derecho Internacional i a la opinion comun de los tratadistas, es escusado tratar de esta parte de la reclamacion. Si los actos que produjeron la demora no han impuesto responsabilidad al Gobierno de Chile, ménos pueden habérsela impuesto las consecuencias de esa demora, aun supuesta la efectividad de los hechos, puesto que *accessorium sequitur principale*.

No puedo, sin embargo, dejar de llamar la atencion del Tribuna a la partida de £ 1,150-7-6 gastadas en el juicio seguido en Inglaterra, de que tambien se pretende hacer cargo al Gobierno de Chile. Mi representado, Excmo. Señor, no ha tenido noticia de la existencia de tal juicio sino cuando lo han hecho presente los reclamantes; no ha intervenido, por consiguiente, ni en favor ni en contra de ellos; no se ha preocupado de si la accion deducida fué o no legal, si la defénsa fué o no conveniente i completa, ni tiene nada que ver con respecto a las relaciones juridicas de ambos litigantes; i sin embargo, se le quiere hacer cargar con las costas que dicho juicio orijinó. Esta mera esposicion basta para manifestar hasta qué punto increíble e inverosímil se llevan estas reclamaciones, que en cuanto exceden a todo derecho posible, tienen mas aire de una simple aventura que de juicio serio i formal.

6 Otros dos capítulos de la presente reclamacion son los que se refieren a gastos hechos en dar asilo a diversas personas que se refugiaron a bordo del *Mount Tabor* huyendo de los peligros que podia acarrearles su permanencia en tierra, i en trasportar a muchas de esas personas al puerto de Arica. Se cobra por ambos motivos la suma de 170 libras esterlinas.

Por mas esfuerzos que se hagan para encontrar una base jurídica a estas peticiones, será imposible hallarla en el Derecho Internacional o en el Civil, toda vez que los reclamantes convienen en que nadie les obligó a proporcionar ese asilo ni a emprender estos viajes. Fueron ellos o su representante, el capitán del vapor, quienes sin coacción de ningún jénero i movidos por sentimientos de humanidad, invitaron a individuos de diversas nacionalidades, casi todos ellos británicos i alemanes a buscar refugio a bordo. Así lo espresa terminantemente la carta del capitán J. Munro que se halla en la página 23 del memorial impreso. Sabe, además, mi parte que no hubo chilenos entre esos refugiados, que se componen en su mayor parte de empleados de la casa Gibbs i Ca. consignataria de la *The Rosario Nitrate Company Limited*.

Ahora los señores Smith i Service ponen precio a aquel servicio humanitario, pretendiendo todavía que sea el Gobierno de Chile, i no los beneficiados por dicho servicio, quien pague su valor. El Gobierno de Chile no se ha obligado jamás a tal pago, i si se cree que hai acción contra él para cobrarle las deudas que pudieran haber contraído los particulares chilenos que se suponen refugiados a bordo parece que lo justo seria en tal caso hacer el cobro a los Gobiernos de Gran Bretaña i de Alemania, cuyos súbditos fueron los verdaderamente refugiados a bordo del *Mount Tabor*.

En cuanto a los dos viajes que este vapor emprendió a Arica durante los 53 días, que se supone fondeado en Iquique i sin percibir lucro alguno, debo hacer presente que ambos viajes fueron emprendidos nada mas que por simple negocio, sin que en esto tuvieran parte los sentimientos humanitarios que movieron al capitán a proporcionar asilo a alguno de sus conciudadanos.

En el primer viaje a Arica, el vapor cobró pasajes por su cuenta a razon de veinte pesos por persona, tarifa superior a la ordinariamente acostumbrada. Embarcáronse entónces muchas familias de diversa nacionalidad i principalmente peruanas, i entre ellas, talvez una o dos chilenas que pagaron su respectivo pasaje.

Para el segundo viaje, i vista la utilidad del negocio, fué fletado el vapor por los señores Augusto V. Polastri i Alfonso Vallebona, por la suma de dos mil pesos. Estos caballeros cobraron los pasajes

por su cuenta, i aprovecharon naturalmente las utilidades que el negocio les produjo.

En uno i otro viaje los empleados del vapor abusaron de tal modo de la situacion difícil i calamitosa de los pasajeros, que cobraban precios enormes por los servicios extra, por ejemplo, un peso cincuenta centavos por una tasa de café, i así por el estilo.

¡I todavía se pretende que el Gobierno de Chile, que nada ha tenido que ver con todo esto, obsequie a los propietarios del vapor con un suplemento de setenta libras!

Como esta partida, de monto relativamente pequeño, puede sin embargo dar una idea cabal de las pretensiones exorbitantes de los reclamantes, estoi dispuesto a comprobar los hechos que dejo relatados con el testimonio de los señores Alfonso Vallebona, italiano i comerciante, Augusto V. Polastri, cónsul de Colombia, Eduardo F. Robinson, dentista chileno, Timoteo Smith, peruano i empleado particular, i de la señorita peruana María Delmira Miurhead, todos los cuales residen en la ciudad de Iquique.

6 Cobran tambien los señores Smith i Service 498 libras esterlinas por haber sido detenido en Coronel el vapor *Mount Tabor* por orden de la autoridad desde el dia 14 hasta el 24 de abril de 1891. Ellos mismos espresan que la causa de la detencion fué la omision de trámites aduaneros, segun los cuales se les exijia el pago de los derechos del salitre que esportaban del pais, en conformidad a las leyes vijentes.

Llamo desde luego la atencion de V. E. a la circunstancia de que esta detencion no tiene sino una relacion remota con la guerra civil que se desarrollaba en Chile. El acto del Gobierno fué meramente administrativo; i en tal carácter no está comprendido entre aquellos de que V. E. está llamado a conocer. Este tribunal está constituido para conocer de reclamos que provengan de los actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República desde el 7 de Enero al 28 de Agosto de 1891, o de aquellos que hayan tenido lugar con posterioridad a esta última fecha. El punto en reclamo se refiere a un acto anterior al 28 de Agosto, que no ha sido ejecutado por fuerzas de mar o tierra i que carece absolutamente del carácter de operacion bélica. No cabe,

por consiguiente, dentro de las atribuciones del tribunal, tales como las define el artículo 1.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. Considero perfectamente clara esta cuestion; pero aun en el caso de duda, la jurisdiccion no podria aplicarse de una manera estensiva, porque la interpretacion de las facultades de esta especie es siempre *stricti juris*.

Son, pues, los tribunales del pais los llamados a resolver si hubo o no razon de parte de la autoridad para ordenar la detencion en Coronel del *Mount Tabor*, en el supuesto de haber sido ella efectiva. Esta cuestion no es sencilla, si se toman en cuenta las disposiciones aduaneras vijentes, la circunstancia de estar el puerto de Coronel sometido a la autoridad del Gobierno central, i la facultad del Presidente de la República para detener los buques de comercio, sobre todo en época de guerra, facultad reconocida por diversas leyes, a las cuales se refieren varias disposiciones del Código de Comercio, por ejemplo, la consignada en el artículo 1,283.

Aguardo, en vista de lo espuesto que V. E. se declarará incompetente para conocer de esta parte de la demanda; o que, en subsidio, se servirá rechazarla.

7 Por razon de intereses cobran los señores Smith i Service la suma de £ 1,523-4-8. Esta partida debe ser en todo caso eliminada. Solo una deuda líquida i actualmente exigible puede producir intereses.

Estos se conceden por vía de indemnizacion de perjuicios en contra del deudor que se halla constituido en mora; i para que esta exista es menester que esté vencido el plazo estipulado o que el deudor haya sido reconvenido judicialmente. No ocurriendo ninguna de estas circunstancias al tiempo de deducirse la reclamacion, V. E. no puede otorgar favorablemente la peticion de intereses que hacen los reclamantes.

En virtud de las consideraciones aducidas, aguardo con confianza que el fallo del Excmo. Tribunal, ha de venir a declarar su incompetencia, o a rechazar en todas sus partes la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Excmo. Señor:

El señor ajente del Gobierno de Chile contestando el memorial que consigna la reclamacion hecha ante V. E. por los señores John Smith, William Service i Thomàs Pairman sobre indemnizacion de perjuicios ocasionados con motivo de los sucesos ocurridos en el puerto de Iquique, durante los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891, solicita de V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion o en subsidio desecharla en su totalidad.

A mi vez, manifestaré a V. E. la justicia de esta reclamacion i confío en que se ha de servir dar lugar a ella en todas sus partes.

Principia el ajente chileno oponiendo a la reclamacion diversas escepciones de carácter jeneral, sosteniendo que, en virtud de cada una de ellas hai mérito bastante para declarar sin lugar el presente reclamo.

La primera de ellas se refiere a la incompetencia de ese Excmo. Tribunal para conocer en la reclamacion, por la falta de comprobantes para acreditar la nacionalidad británica de los reclamantes, requisito indispensable para que V. E. pueda pronunciarse sobre ella, i ademas porque alguna de las partidas que se cobran no provienen de actos ejecutados por las fuerzas de mar i tierra, conforme lo dispuesto en el artículo I de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Igualmente opone la excepcion de falta de personeria de los reclamantes fundada en la carencia de documentos justificativos que acrediten la propiedad del vapor *Mount Tabor*, materia del reclamo.

Basta la simple lectura de los dos documentos que se registran en el legajo acompañado al memorial, para que V. E. pueda imponerse de la efectividad de que los reclamantes son de nacionalidad británica i de que realmente son los únicos dueños del vapor *Mount Tabor*; hechos todos que aparecen certificados por diversos funcio-

narios consulares i aun por el mismo cónsul de Chile en Glasgow, señor Guillermo R. Cruickshank.

Una prueba mas concluyente para acreditar la nacionalidad de los reclamantes, es el hecho de que este vapor lleve la bandera inglesa i el estar registrado entre los buques de esa nacion. La lejislacion inglesa contiene disposiciones bastante espresas i terminantes a este respecto.

No existe, pues, razon alguna para alegar las excepciones de falta de personeria i nacionalidad opuesta por el señor ajente del Gobierno de Chile.

Por otra parte, todos los perjuicios cuya indemnizacion se cobra provienen de operaciones ejecutadas, por las fuerzas de los dos bandos combatientes en la revolucion que tuvo lugar en la República en el año 1891, i por consiguiente, están espresamente comprendidos en la Convencion de 26 de setiembre de 1893, como lo probaré al ocuparme de cada uno de los demas argumentos que contiene el escrito de contestacion de que me ocupo.

No es igualmente admisible el argumento que se hace de que, por haber los reclamantes seguido un juicio en Lóndres en contra la *Rosario Nitrate Company Limited* hayan perdido sus derechos para exigir del Gobierno de Chile, los perjuicios recibidos a causa de la revolucion de 1891; por el contrario, ese juicio viene a reforzar i a poner mas de manifiesto la razon que les asiste para efectuar este reclamo, i tan es así, que la *Rosario Nitrate Company Limited* en su escrito de defensa a esa demanda, justifica sus procedimientos por la imposibilidad en que se vió para cumplir el contrato que tenia celebrado con los señores Smith i Service a consecuencia de los sucesos habidos en Iquique a la época en que debió haberse efectuado su cumplimiento.

Otra de las observaciones jenerales que se hacen en el ya citado escrito de contestacion, se refiere a la falta de autenticidad i legalizacion de los documentos presentados.

La mayor parte de estos documentos están autorizados, como he dicho antes, por cónsules; cuyas firmas prometo hacer legalizar en Chile.

Estando la reclamacion de los señores Smith i Service ajustada a

las prescripciones del pacto de 26 de setiembre de 1893, i comprendida, en consecuencia, entre los negocios de que puede conocer el Excmo. Tribunal, paso a ocuparme de cada uno de los capítulos del reclamo.

La primera partida de £ 2,639-8-0 proveniente de los perjuicios causados con motivo de las operaciones bélicas ejecutadas en el puerto de Iquique, deben abonarse a mis representados, por ser esa la cantidad que les corresponde con arreglo al número de dias que permaneció el vapor *Mounl Tabor* en aquel puerto sin poder recibir diariamente la carga de nitrato de sosa que tenia estipulada en virtud del respectivo contrato de fletamento.

El señor representante de Chile está perfectamente de acuerdo con mi parte respecto al dia en que principió el impedimento del buque para hacer su carga, pero no sucede lo mismo con relacion a la fecha en que ese impedimiento terminó. Se afirma que el 24 de febrero ha podido sin dificultad alguna comenzarse el carguío del buque, por cuanto ese dia quedó completamente restablecido el perfecto funcionamiento del puerto de Iquique, segun lo justifican los dos certificados que se han acompañado de la respectiva Gobernacion Marítima.

No es mi ánimo, Excmo. Señor, seguir a mi contendor en su ingrata tarea de objetar por falta de autenticidad, documentos que como los presentados por mi parte, son demasiado suficientes para establecer la verdad de los hechos ante un Tribunal Internacional que como el de V. E. está llamado a inspirarse para sus fallos, mas en la equidad i verdadera justicia que en ciertas formas i solemnidades propias, mas bien, de los tribunales especiales de cada pais. Igual derecho me asistiria para pedir, a mi vez, que V. E. no considere tampoco como auténticos los documentos acompañados a su contestacion por el señor agente del Gobierno de Chile por no estar cumplida la solemnidad de la legalizacion de firmas por el correspondiente funcionario consular de S. M. B.

Pero repito, no deseo seguir esta especie de argumentacion, i vuelvo entónces a ocuparme de la partida 1.ª del reclamo. Hai en los antecedentes una prueba capital respecto a la exactitud de esta partida. En el juicio seguido en Lóndres por los fletantes

en contra de los fletadores, los tribunales ingleses establecieron que a causa de los desórdenes políticos existentes en el puerto de Iquique durante el tiempo del cumplimiento del contrato, los fletadores quedaban exonerados del pago de perjuicios i fijaron el 23 de marzo de 1891 como dia inicial para comenzar el carguío del buque.

Es indudable que las dificultades orijinadas por las batallas que se dieron en el mismo puerto de Iquique, batallas sangrientas i que causaron destrozos de gran consideracion en el mismo puerto, justifican demasiado la razon que tengo para negar que el dia 24 de Febrero, esto es, dos o tres dias despues de las batallas, haya podido volver la tranquilidad, la calma i el perfecto funcionamiento de este puerto, como pretende probarlo el representante de Chile. Insisto, pues, en el cobro de la primera partida i suplico a V. E. se sirva no aceptar la reduccion a 22 dias de los 53 que se indican en el memorial.

Es tambien justo i equitativo abonar a los demandantes los demas perjuicios ocasionados a consecuencia de las medidas tomadas por las fuerzas combatientes i que produjeron gran recargo de gastos en el viaje del retorno del vapor, i abonar igualmente el valor de los viajes hechos de Iquique a Arica para trasportar las personas que se refugiaron en él con motivo de los desórdenes consiguientes ocurridos despues de los combates que tuvieron lugar en el puerto mencionado. Todos estos gastos son el resultado esclusivo de la situacion excepcional del puerto i que tuvo su oríjen inmediato en los diversos hechos de armas que se verificaron en Iquique; síguese entónces la consecuencia lójica de que esta especie de perjuicios los comprende espresamente el artículo I de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, por lo que suplico asimismo de V. E. se sirva dar lugar al cobro de las partidas 3.ª, 4.ª 5.ª i 6.ª que se especifican en la demanda.

Tambien ha merecido ser objetada la partida de £ 498-0-0 equivalente a los perjuicios que recibió el vapor *Mount Tabor* por la arbitraria detencion en el puerto de Coronel.

Despues de haber hecho este buque su carga en Iquique, pagado sus derechos de aduana i llenado en fin todos los requisitos

necesarios, salió de aquel puerto el 7 de Abril de 1891 con destino a Hamburgo; haciendo primeramente escala en Coronel en donde tuvo lugar la detencion por las fuerzas del Gobierno que dominaba entónces la parte sur del territorio chileno.

El buque llegaba a Coronel con todos sus papeles en forma; habia pagado los derechos de esportacion a la Excma. Junta de Gobierno que ejercia un poder regular i bien organizado en Iquique, de donde procedia el vapor.

Este hecho está perfectamente comprobado en los antecedentes adjuntos a la demanda, i es un error sostener que la detencion en Coronel fuera orijinada por la carencia de los papeles que debe llevar consigo todo buque.

La causa única i manifiesta de la detencion del buque *Mount Tabor* en el puerto de Coronel, fué el que se hubieran pagado los derechos de aduana por el cargamento de salitre de que era fletador al Gobierno del Norte, cuya facultad para cobrarlos no queria reconocer el del Sur, i trataba de recobrar aquellos derechos en los puertos de su dominio usando de procedimientos a todas luces arbitrarios. Tan irregular i desacertada fué esta medida que no pudo sostenerse i pronto se vió obligado a abandonarla en atencion a las diversas quejas de los Gobiernos extranjeros.

No fueron, pues, simples medidas administrativas las que motivaron la detencion del *Mount Tabor* en el puerto de Coronel tantas veces citado; sino arma de combate con las que pretendia hostilizar el Gobierno del Sur al del Norte, privando a este último de las entradas de aduana, que eran su principal elemento de subsistencia; i no advertia que con medidas de esta naturaleza venia a perjudicar única i esclusivamente a los neutrales, quienes debian reconocer la soberania de los dos Gobiernos organizados en cada territorio. Asi lo dispone el Derecho Internacional, i esa ha sido tambien la práctica constante de las naciones.

El Gobierno del Sur al disponer la detencion del vapor en Coronel ejecutaba un acto injustificado i arbitrario i se hizo, en consecuencia, responsable de los perjuicios causados, que mi parte avalúa en la suma de £ 498-0-0 en la segunda partida del memorial.

Muchas otras observaciones ha hecho el señor ajente de Chile

que por no estar basadas en documentos de ninguna especie que las justifiquen, creo innecesario ocuparme de ellas i concluyo solicitando del Excmo. Tribunal se sirva desechar las excepciones opuestas i dar lugar a esta reclamacion.

J. M. PIZARRO.

En representacion de los reclamantes.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Impuesto el agente del Gobierno de Chile del escrito del réplica que en nombre de los señores Smith i Service, ha sido presentado en la reclamacion número 22, procede por su parte a presentar el escrito de dúplica.

1 He tenido el honor de pedir en la contestacion que V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de este reclamo, fundándose en dos capítulos, la falta de antecedentes que justifiquen que los reclamantes tienen la calidad de súbditos ingleses, i el referirse muchas de las partidas que constituyen la reclamacion a actos meramente administrativos i no a operaciones bélicas ejecutadas por las fuerzas de mar o tierra de la República.

Sobre el primer punto, se limita el señor agente británico a manifestar que la nacionalidad de los reclamantes aparece acreditada en el legajo de documentos que ha acompañado al memorial; i, mas que en ellos, en el hecho de ser propietarios los señores Smith i Service de buques ingleses, porque no pueden serlo, segun la lei vijente en la Gran Bretaña sino los súbditos de S. M. B.

Si V. E. se digna examinar los documentos a que se refieren los reclamantes, no podrá encontrar en ellos la comprobacion de la nacionalidad que se atribuyen. Talvez la mayor parte del legajo, está formada por protestas i otros actos emanados de los mismos reclamantes; i ni en ellos ni en ninguno de los otros hai testimonio acerca del carácter de súbditos británicos que dicen tener.

Tampoco aparece acreditado el dominio del vapor *Mount Tabor* por parte de los señores Smith i Service, ni que ese vapor sea realmente un buque británico. Suponiendo, sin embargo, que estuviera plenamente justificado aquel dominio i la nacionalidad del buque, no por eso lo estaria la de los propietarios de él, cualquiera que sea la disposicion de la lei inglesa relativa a buques mercantes. El *status* de una persona no puede comprobarse por estos medios indirectos, sino con documentos emanados de los funcionarios especialmente encargados del Registro Civil, segun lo establecen las las lejislaciones de todos los paises civilizados. La disposicion que accidentalmente consigna una lei que trata de otra materia, puede ser fácilmente eludida, siempre que se observen sus prescripciones capitales. Así nadie podria pretender que se tuviera como suficientemente comprobada su edad por el hecho de estar inscrito en un registro electoral. Esa comprobacion puede bastar para los efectos de la lei electoral, pero de ningun modo para el ejercicio de derechos meramente civiles. Esto es tan obvio que no necesita mayor demostracion i desenvolvimiento.

Insisto, pues, en sostener que los reclamantes no han comprobado su carácter de súbditos británicos i su consiguiente derecho a ser oídos ante este Excmo. Tribunal.

La otra causal de incompetencia se funda en que no todos los actos que dieron origen a esta reclamacion han provenido de operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República. Al señor ajente británico le parece evidente que la falta de despacho del *Mount Tabor* en el puerto de Coronel importa una operacion efectuada por aquellas fuerzas, pero no se necesita un gran esfuerzo de dialéctica para persuadirse de lo contrario. El puerto de Coronel, i en jeneral toda la zona del sur de la República, no fueron teatro en ninguna ocasion de los sucesos bélicos de 1891, que se desarrollaron casi por entero en las provincias del norte i en la de Valparaiso. Apenas puede mencionarse la ocupacion momentánea de los puertos de Lebu i Ancud por las fuerzas de la Revolucion como incidentes de la guerra ocurridos en las provincias de Arauco i de Chiloé. El 18 de Enero el crucero *Esmeralda* hizo algunos disparos en Coronel contra las tropas del 7.º de línea, operacion que

no dió resultado alguno i que no pasó mas adelante, habiéndose retirado el crucero para no volver mas a ese puerto.

Tales lo que consta de los documentos oficiales que pueden verse en el *Memorandum de la Revolucion*, i que ademas se saben por pública notoriedad. Se pretende, no obstante, por el señor agente británico que se considere como una operacion de las fuerzas de la República el hecho de no haberse permitido que el *Mount Tabor* saliese de Coronel durante el mes de Abril mientras no cubriese en la Aduana de ese puerto los derechos fiscales sobre el cargamento de salitre que conducia, derechos que habian sido cubiertos en el puerto de Iquique. Por mui ciertos que se supongan esos hechos, i por irregular que se estime la conducta observada por los funcionarios fiscales o autoridades marítimas de Coronel, no es posible desconocer que aquellos no han provenido de operaciones militares, i que éstos no ejecutaron sino una medida administrativa para la cual no les fué necesario siquiera hacer uso de la fuerza. Es probable que el suceso no hubiera tenido lugar si la República se hubiese encontrado en paz en aquella época; pero la circunstancia de encontrarse en estado de guerra civil viene a lo sumo a establecer una relacion remota entre el acto de la autoridad i la guerra misma. En ningun caso podria tornarse esa relacion en la de causa eficiente i directa de la medida adoptada con el *Mount Tabor*, ni la guerra misma, tomada en su acepcion jenérica, podria confundirse con una operacion concreta i determinada llevada a efecto por las fuerzas marítimas o terrestres de la República. Solo los perjuicios que provienen directamente de esta clase de operaciones son los que el art. 1.º de la Convencion de 26 de Setiembre defiende al conocimiento de este alto Tribunal.

Estimo, por lo tanto, que V. E. carece de jurisdiccion para conocer de aquellos puntos de este reclamo que mencioné en mi escrito de contestacion; e insisto en que V. E. se sirva declararse incompetente con respecto a ellos, dado caso de que no haga estensiva esa declaracion a todos los puntos que son materia del reclamo por causa de la falta de comprobacion de la nacionalidad de los reclamantes.

2 Mantengo igualmente la excepcion de falta de personería que

proviene de no estar acreditado que los señores Smith i Service sean propietarios de *Mount Tabor*, a lo que debo agregar que el escrito de réplica trae al pie una firma indescifrable de una persona que parece haber asumido la representacion de los reclamantes sin acompañar documento que justifique esa representacion, apesar de lo que al respecto está ordenado en el segundo inciso del art. V del Reglamento.

3 Es un hecho que la misma accion deducida ante este Excmo. Tribunal, fué presentada en Inglaterra en contra de la Compañía fletadora; i que los tribunales de esa nacion no dieron lugar a ella. Pero no aparece entre las piezas presentadas por los reclamante el testo auténtico de las sentencias pronunciadas. Los antecedentes que se han acompañado manifiestan, sin embargo, que la cuestion ha sido juzgada definitivamente, i que ninguna reserva de derechos se hizo a favor de los demandantes para que pudieran reproducir ante otro tribunal i contra diversa persona la misma accion que ya fué desechada. De manera que hai mérito suficiente para tener este negocio como juzgado i resuelto en contra de los reclamantes.

4 Para comprobar los hechos, materia de este reclamo, han presentado los señores Smith i Service una série de piezas que no tienen sello alguno de autenticidad salvo tres protestas formuladas ante diversos cónsules de S. M. B. por la misma parte interesada. El señor agente británico cree que debe prestarse fe a lo que conste de esos papeles por cuanto el Tribunal a quien tengo la honra de dirigirme está llamado a fallar conforme a la equidad.

Estimo por mi parte que el Tribunal arbitral está obligado a sujetarse para sus fallos a las bases que le estan fijadas por el art. V de la Convencion, i que no puede prescindir de ellas para atenerse a la mera equidad, porque la Convencion no le otorga esa facultad que jamas puede considerarse subentendida en un compromiso arbitral. Latamente he desarrollado esta tesis en la dúplica de la reclamacion 10.^a i no he de volver a molestar sobre este punto la atencion del Excmo Tribunal. Solo agregaré que, por latas que se supongan las facultades de V. E., en ningun caso podrían llegar ellas hasta el punto de considerar como documentos

auténticos papeles que carecen hasta de firma, i que no se sabe quien los hizo escribir ni para que objeto.

Mi honorable colega cree que los documentos que yo presento se prestan a una objecion semejante, que sin embargo se abstiene de formular. Pero el señor ajente británico parte de un error que es mui fácil desvanecer.

Los documentos exhibidos por mí tienen todos los caracteres de autenticidad exigidos por el Derecho, i no requieren el de la legalizacion porque han sido producidos dentro del pais mismo en que funciona este alto Tribunal. Las leyes de todos los paises consideran como instrumentos públicos los que el competente funcionario ha autorizado con las solemnidades legales, i a tales documentos atribuyen la fe necesaria para que tengan fuerza probatoria en juicio. Todos los tribunales de la República habrian aceptado sin vacilar, considerándolos como auténticos, los certificados de la Aduana i Gobernacion Marítima de Iquique, que yo he presentado; i ninguno habria atribuido mérito probatorio a los papeles emanados *ex parte*, i muchos de ellos sin firma, que ha presentado mi honorable contendor. Los míos están otorgados en conformidad a la lei chilena, bajo cuyo imperio se han producido; los papeles de los reclamantes no están estendidos en conformidad a las leyes de ningun pais, i los que se han otorgado fuera de Chile no han sido legalizados.

He tenido el honor de comprobar con los documentos que acompañé a mi contestacion que las operaciones bélicas que tuvieron lugar en Iquique durante los primeros meses de 1891 no pudieron impedir el carguío del *Mount Tabor*, sino a lo mas durante veintuno o veintidos dias. No pudiendo el replicante desconocer la fuerza probatoria de aquellos documentos, pretende a lo ménos enervarla, manifestando que los tribunales de Lóndres, que juzgaron su litijio con la Compañía fletadora, dejaron establecido que, a causa de los desórdenes políticos de Iquique, no se pudo iniciar el carguío del buque sino el 23 de marzo de 1891.

Supongo que al hacer esta aseveracion mi honorable colega habrá tenido a la vista el testo de la sentencia a que se refiere, i que

se echa de ménos en las copias incompletas que ha presentado. Yo no pongo en duda la aseveracion que hace bajo su palabra; pero no puedo aceptar que se trate de dar a aquella sentencia, que para el Gobierno de Chile es *res inter alios acta*, el alcance que se le atribuye. Bien puede ser que ese hecho se haya comprobado ante un tribunal de Lóndres, porque eso depende únicamente de los esfuerzos i de los medios a que hayan recurrido las partes. Seguro estoy de que si el Gobierno de Chile hubiera sido oído en ese juicio, se habria podido establecer con documentos fehacientes i con el testimonio de todo un pueblo, que el hecho era inexacto, i que no hubo ningun impedimento para cargar salitre despues del 23 de Febrero de 1891, como lo acredita tambien la carta que el 24 de Marzo dirijió el capitan Munro a la Compañía fletadora, haciéndole presente que no tenia razon para demorar el carguío de su buque, desde que *el 27 de Febrero habia cargado salitre a bordo de otro vapor*. La copia de esta carta ha sido presentada por los reclamantes i figura con la letra *I* entre los documentos anexos. Obra, pues, contra ellos con la fuerza de una prueba concluyente.

§ Esto, por lo que respecta a los hechos. En cuanto al derecho, mi honorable colega no ha agregado razon alguna a las que espuso en su memorial de demanda, i que tuve el honor de examinar en mi contestacion. Hice presente en este escrito que el Gobierno de Chile no podia ser responsable de las consecuencias desgraciadas que hubiera ocasionado al comercio neutral el bloqueo de Iquique; i cité al efecto la autorizada opinion de Hautefeuille i de Fauchille, añadiendo que la doctrina en que mé opoyo no encuentra un solo contradictor entre los tratadistas de Derecho Internacional. Tambien sostuve que, de esa operacion de guerra, ningun acto emanado de la autoridad pública o de los jefes de las fuerzas de mar o tierra habia impedido el carguío i salida del *Mount Tabor*, cuya demora, si la hubo, pudo provenir de falta de trabajadores o de otra causa que, como esa, seria perfectamente estraña al Gobierno de Chile. Manifesté que tampoco habia éste intervenido en el contrato celebrado por el capitan del vapor i las personas que se refugiaron a bordo, casi todas de nacionalidad inglesa; ni en el relativo a los viajes que, por mero negocio, emprendió el *Mount Tabor* al puerto

de Arica; i que, por consiguiente, la responsabilidad del Gobierno de Chile no habia quedado afectada por este motivo.

No tengo para qué dar por ahora mayor desenvolvimiento a las razones que espuse en mi contestacion. A ellas me atengo mientras no se aduzcan por parte de los reclamantes otras nuevas con el objeto de refutarlas o de atenuar su valor.

Concluyo, pues, pidiendo a V. E. que se sirva dar lugar a las excepciones dilatorias, i en subsidio rechazar en todas sus partes la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

John Smith, William Service i Thomas Pairman, dueños de buques, súbditos británicos, reclaman del Gobierno de Chile siete mil cuatrocientas sesenta libras esterlinas quince chelines seis peniques por capital i un mil quinientas veintitres libras esterlinas cuatro chelines seis peniques por intereses, en que estiman los perjuicios que se les ocasionaron con motivo de las demoras i consecuencias consiguientes, del buque *Mount Tabor* de su propiedad en Iquique i Coronel, como tambien por pasajes de fujitivos i refujiados en el mismo buque de Iquique a Arica

Los memorialistas esponen que el vapor *Mount Tabor* llegó a Iquique el 29 de Enero de 1891 a tomar un cargamento de salitre, en conformidad a un contrato de fletamento celebrado en Nueva York en 30 de Setiembre de 1890, entre ellos i los señores Henry Balth i C.^ª, como representante de la *Rosario Nitrate Company Limited*; que el mismo dia que llegó al puerto se les significó a los fletadores que estaba todo listo para recibir el salitre a bordo; pero que los señores Gibbs i C.^ª, ajentes de la *Rosario Nitrate Company*

Limited, le contestaron al capitan que, estando bloqueado el puerto de Iquique, i dadas las circunstancias porque pasaba la ciudad. no podian darle carga; que por esta causa el *Mount Tabor* tuvo que permanecer en el puerto de Iquique hasta el 23 de Marzo del mismo año, sin poder hasta entónces recibir su cargamento, a pesar de haber requerido repetidas veces a los ajentes de los fletadores, que esto constituye una detencion de 53 dias; que a virtud de las estipulaciones del contrato de fletamento no pudieron los dueños del buque cobrar a los fletadores el valor de esta detencion, por haber sido ésta causada por los desórdenes políticos ocurridos en Chile; que, por consiguiente, es el Gobierno de este país el que debe pagarles dicho valor. que importa dos mil seiscientas treinta i nueve libras esterlinas ocho chelines, a razon de cuarenta i nueve libras esterlinas dieziseis chelines por dia; que el 7 de Abril salió el *Mount Tabor* de Iquique para Hamburgo con un cargamento de 2,800 toneladas de salitre, que el 14 de Abril hizo escala en Coronel para tomar carbon para proseguir su viaje; pero que tan luego como llegó a dicho puerto, las autoridades le prohibieron que tomara carbon i prosiguiera su viaje, quitándole al capitan los papeles del buque, miéntras no se pagaran los derechos de esportacion sobre el cargamento de salitre que conducia, a pesar de que éstos ya se habian satisfecho en Iquique; que esto ocasionó una nueva detencion del buque en Coronel de diez dias, de que igualmente hacen cargo al Gobierno de Chile i que importa cuatrocientas noventa i ocho libras esterlinas; que con motivo de estas detenciones los fondos del buque, que al salir de Europa habia entrado al dique para limpiarlos i ponerles una composicion patentada, se llenaron de conchas, lo que hizo disminuir el andar del buque de 9 a 10 nudos, que era su marcha acostumbrada por hora, al de 5 a 6 nudos por hora, obligándole así a emplear treinta i cinco dias mas que lo que eran de su itinerario para llegar a Hamburgo; que conviene en eliminar cinco dias de estos treinta i cinco i cobra solo treinta dias al Gobierno de Chile, los que importan mil cuatrocientas noventa i cuatro libras esterlinas; que con ocasion de haber empleado mas dias en el viaje i estar recargados los fondos del buque con las conchas, hubo éste de recalar a Rio Janeiro,

San Vicente i Madera i tomar en esos puntos carbon que importó en su totalidad mil quinientas cuarenta i tres libras esterlinas diez iseis chelines once peniques; pero que los reclamantes no cobran al Gobierno de Chile sino mil quinientas libras esterlinas por esta partida; que en Iquique, a bordo del *Mount Tabor*, se asilaron varios fujitivos i los reclamantes cobran al Gobierno de Chile cien libras esterlinas por este capítulo; que asimismo tuvieron que trasportar en dos ocasiones refugiados a bordo, de Iquique a Arica i que las sumas que recibieron de éstos que no fueron sino de mil doscientos pesos por el primer viaje i de mil ochocientos por el segundo, no alcanzó a cubrir los gastos de carbon, víveres, etc., consumidos; cobran por el déficit setenta libras esterlinas, i por último, que los reclamantes hicieron todo esfuerzo para cobrar a los fletadores el monto de esta reclamacion, i al efecto siguieron en contra de ellos por todas sus instancias, un juicio cuya demanda estuvo concebida en términos iguales a este memorial; suprimiendo tan solo las partidas de asilo i trasporte de los fujitivos; pero que la habian perdido en todas i cada una de las instancias, con costas, i cobran al Gobierno de Chile todos los gastos que les ocasionó este proceso i que ascienden a mil ciento cincuenta i nueve libras esterlinas siete chelines seis peniques; que asimismo cobran intereses por todas estas partidas, a razon de cinco por ciento anual; que en apoyo de su reclamacion presentan copia del contrato de fletamento de 30 de Setiembre de 1895; copias de protestas hechas por el capitan Munro del *Mount Tabor*, ante el cónsul i vice-cónsul británico en Arica e Iquique en 2 i 28 de Febrero i 16 de Abril de 1891; copias de cinco cartas dirigidas por el capitan Munro a Gibbs i C.ª, fechadas, dos en 29 de Enero de 1891 i las otras en 14 i 26 de Febrero i 24 de Marzo; certificado del decano del Cuerpo Consular de Iquique, sobre la suspension del trabajo en ese puerto; carta del capitan Munro a los reclamantes; tres comprobantes de carbon comprado; i, por último, copia de varios documentos que se refieren al proceso intentado en Inglaterra, notablemente demanda, contestacion, partes dispositivas de las sentencias de primera i segunda instancia i tasacion de costas.

El ajente de Chile, contestando la reclamacion, pide en primer

lugar que el Tribunal se declare incompetente, i en subsidio, se rechace la demanda en todas sus partes.

Funda la peticion principal en que los reclamantes no han justificado su carácter de súbditos británicos i en que las partidas que se cobran no provienen de actos u operaciones ejecutadas por fuerzas de mar i tierra, segun lo contempla el artículo 1.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. La solicitud subsidiaria la basa en que los reclamantes no han probado ser dueños del buque *Mount Tabor*; que el presente juicio ha sido debatido ya en los tribunales ingleses i no contra el Gobierno de Chile, sino en contra de los fletadores, que son los únicos responsables del contrato, que solo con ellos suscribieron, sin que el Gobierno de Chile fuera parte en él; que el artículo VI tiene por objeto escluir reclamaciones que han sido ya presentadas a otro tribunal; que la documentacion con que se apareja el memorial no tiene condiciones de autenticidad i legalizacion, que los 53 dias que se cobran por razon de estadías en el puerto de Iquique quedan reducidos a 22, segun certificados que se acompañan de la Gobernacion Maritima i de la Aduana de Iquique, pues el dia 23 de Febrero se restableció el tráfico en la bahía i el 24 empezó a funcionar la Aduana; hecho que tambien se comprueba por la carta acompañada por los reclamantes, que dirijió el capitan Munro a los señores Gibbs i Ca.; que es insostenible que al Gobierno de Chile pueda hacérsele responsable por estipulaciones de un contrato de fletamento en el que no fué parte i que se refieren al tonelaje del buque i a la fijacion del tipo de compensacion por cada dia de estadía, pues para Chile esto es *res inter alias acta*; que tampoco en el terreno del derecho puede sustentarse la reclamacion, pues la detencion del buque en Iquique fué causada por un bloqueo efectivo de que se dió previo aviso, lo que es acto lejítimo de guerra i no acarrea responsabilidad para el que lo ejecutó; cita a este respecto a Hautefeuille i Fauchille; que despues del bloqueo hubo un combate en Iquique i que naturalmente quedaron perturbados e interrumpidos los trabajos durante 3 o 4 dias, por lo que el Gobierno de Chile no puede responder; que las partidas que se cobran como consecuencia de la detencion tienen que seguir la suerte de aquélla, dado el principio

que *accessorium sequitur principalem*; que el cobro por los gastos del proceso es increíble, pues el Gobierno no tuvo noticia de tal proceso ni ménos intervino en él; ni tiene nada que ver con las relaciones jurídicas de los litigantes en él; que respecto a los gastos ocasionados por el asilo que se dió a las diversas personas que se refugiaron a bordo del *Mount Tabor*, i en trasportar a muchas de esas personas a Arica, el Gobierno de Chile nada tiene que ver, pues no pidió hospitalidad para ellos ni contrató su conducción; que, por lo demas, casi todos los refugiados eran extranjeros i sabe que la mayor parte pagaron su pasaje, superiores a los corrientes; que el cobro por estadía en Coronel es inadmisibile ante este Tribunal, pues ello provino de la omision de ciertos trámites de aduana; que esto no tiene sino una relacion remota con la guerra civil que existia i que tan solo fué ello un acto administrativo, por el que no se puede residenciar a Chile ante este Tribunal, a virtud del artículo 1.º de la Convencion de Setiembre de 1893; que los reclamantes, si creen tener alguna accion por este capítulo, deben ocurrir ante los tribunales ordinarios; por todas estas razones, pide se resuelva en conformidad a lo que tiene pedido.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho.

Considerando: que los reclamantes fletaron, segun contrato de fletamento, suscrito en Nueva York el 30 de Setiembre de 1890, el vapor ingles *Mount Tabor*, del cual se declaran dueños a los señores Henry Bath e hijos, que obran a nombre de la *Rosario Nitrate Company, Limited*, para cargar en Iquique un cargamento completo de salitre; que si el buque que llegó a Iquique el 29 de Enero de 1891, no pudo tomar inmediatamente su cargamento en las condiciones estipuladas en el contrato de fletamento, ello se debe, desde luego, al estado de bloqueo en que se encontraba ese puerto i ademas el de estar su situacion perturbada, política i económicamente, a consecuencia de la guerra civil; que esto resulta, no solo de la correspondencia que se cambió entre el capitan del *Mount Tabor* i los representantes de los cargadores en Iquique, [Documento E. F i H] sino tambien de los documentos corrientes

en el proceso que se inició anteriormente en Inglaterra, por los reclamantes a los fletadores;

Considerando: que el Gobierno de Chile no fué parte en el contrato de fletamento, celebrado en Nueva York el 30 de Setiembre de 1890 i que, por consiguiente, ninguna relacion de derecho existe entre él i los reclamantes, con respecto a la ejecucion de este contrato; que su responsabilidad tan solo podia haberse comprometido si, ejecutando actos contrarios a los principios de Derecho Internacional, hubiere impedido a un buque ingles tomar un cargamento convenido i lícito;

Considerando: que el puerto de Iquique se encontraba en un estado de bloqueo regular efectivo desde el 20 de Enero de 1891 hasta el 16 de Febrero siguiente; que el comandante del buque de guerra *Almirante Cochrane* lo notificó el 13 de Enero, es decir, siete dias antes que se hiciera efectivo i que este bloqueo se levantó el 16 de Febrero de 1891 i que poco despues de levantarse el bloqueo, el carguio de buques se restableció en el puerto de Iquique, como resulta de los documentos oficiales que corren en el expediente i de la carta dirigida por el capitan del *Mount Tabor* en 24 de Marzo de 1891 a los fletadores de Iquique [Documento J.] en la cual se queja «que los fletadores, desde el 27 de Febrero, principiaron a cargar salitre en otro buque»;

Considerando: que si el capitan del vapor *Mount Tabor* hizo entrar su buque al puerto de Iquique el 29 de Enero, cuando este puerto estaba bloqueado de una manera regular, lo hizo a su propio riesgo i no puede intentar accion contra el Gobierno que es un extraño al contrato de fletamento i que al llevar a cabo el bloqueo previamente notificado, no hizo sino ejercitar un acto lejítimo de guerra; que este acto no puede comprometer su responsabilidad para con buques neutrales a quienes otorgó la facultad de salir del puerto o de no entrar en él;

Considerando: que si el buque *Mount Tabor* no fué cargado en las condiciones estipuladas en el contrato de fletamento despues del 16 de Febrero, dia en que se levantó el bloqueo, los reclamantes no deben repetir por ello sino contra los fletadores; lo que en efecto hicieron demandándoles ante los tribunales ingleses; que

no fué sino después que perdieron este juicio, cuando se dirijieron en contra del Gobierno de Chile, con la esperanza de obtener de éste compensacion por las sobre-estadías;

Considerando: que a un Gobierno no puede requerírsele para que pague sobre-estadías a buques neutrales, que ejecutan operaciones por cuenta de terceros, sino cuando ha detenido incorrectamente a dichos buques en los puertos, haciendo uso de medios vejatorios o contrarios al Derecho Internacional; que ninguna responsabilidad cabe cuando la demora en el carguío o descarga es la consecuencia de una guerra o de disturbios políticos internos;

Considerando: que si como lo pretenden los reclamantes, el vapor *Mount Tabor*, fué detenido efectivamente durante diez dias en Coronel, de órden de las autoridades, cuando iba de regreso a Europa, hecho que no se ha probado suficientemente, no se trata, en todo caso, sino de la aplicacion de una medida administrativa que este Tribunal no es el llamado a apreciar; que esta detencion del buque por las autoridades de Coronel, con el objeto de exigir el pago al Gobierno del Presidente Balmaceda de los derechos de esportacion del salitre, no constituye un acto u operacion ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República, segun los términos del artículo I de la Convencion de 26 de setiembre de 1893, i que, por consiguiente, el Tribunal Arbitral es incompetente para conocer de esta parte de la reclamacion; que, en todo caso, el buque aprovechó una parte de la permanencia de diez dias, en tomar su carbon i no podria exigir el pago de estadías por ese lapso de tiempo;

Considerando: que las razones preinsertas para establecer la irresponsabilidad del Gobierno, en materia de sobre-estadías, son suficientes para resolver que no puede hacérsele tampoco responsable de la lentitud de la marcha del buque en su viaje de retorno, ni de su mayor gasto de carbon, circunstancias por las cuales los demandantes reclaman mil cuatrocientos noventa i cuatro libras esterlinas i mil quinientas libras esterlinas respectivamente;

Considerando: que si el capitan del vapor *Mount Tabor* recibió voluntariamente a bordo a asilados, cumplió con ello un deber mui laudable de humanidad, pero que no le da ningun derecho legal

para exigir del Gobierno que se le reembolsen estos gastos de hospitalidad, cuando no fué requerido por las autoridades locales para que recibiera a bordo estos asilados;

Considerando: que si el capitán del *Mount Tabor* trasportó fujitivos de Iquique a Arica, sea contratando con empresarios los pasajes o con los pasajeros mismos, no se concibe por qué título pudiera reclamar del Gobierno las pretendidas pérdidas que sufrió; que los reclamantes confiesan haber recibido de terceros o de los pasajeros, mil doscientos pesos por el primer viaje i mil ochocientos pesos por el segundo; que si el capitán no supo calcular su tarifa de pasaje i la hizo inadecuada no debe culparse sino a sí mismo i mal puede reclamar en contra del Gobierno, que en nada intervino en este negocio, para que se le paguen estas pretendidas pérdidas que se deberian a su negligencia o impericia;

Considerando: que si los gastos del proceso intentado en Inglaterra por los reclamantes a los fletadores i que perdieron, subieron efectivamente a mil ciento cincuenta i nueve libras esterlinas siete chelines seis peniques, ellos deben justamente recaer sobre los que lijeramente dedujeron esta accion, que los tribunales ingleses declararon sin fundamento; que el Gobierno de Chile ni aconsejó este juicio, ni fué parte en él i que no puede bajo ningun concepto hacérsele responsable de los gastos que orijinó.

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por unanimidad, no apartándose el arbitro británico sino sobre el capítulo de la detencion del buque en Coronel, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve, en consecuencia, de ella al Gobierno de Chile.

Santiago, 18 de Octubre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 18 de Octubre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 33

CARLOS HERALDO ECKERSLEY BULL

MEMORIAL

El que suscribe, Guillermo Shiell, residente actualmente en Iquique, socio de la firma Inglis, Lomax i Compañía, comerciantes de Iquique i representantes legales i apoderados de Cárlos Heraldo Eckersley Bull, ahora residente en Inglaterra; por la presente declaro con toda formalidad lo que sigue, referente al reclamo contra el Gobierno de Chile:

1 Residia en Iquique cuando tuvieron lugar los incidentes que orijinan este reclamo;

2 Soi súbdito británico, natural de Edimburgo, Escocia, donde nació el año de mil ochocientos cincuenta i tres;

3 Ni yo ni ninguno de mis socios tomamos parte alguna directa o indirectamente en la guerra civil de mil ochocientos noventa i uno, ni tampoco servíamos o recibíamos pago de las partes beligerantes;

4 Los nombres de los socios de la firma Inglis, Lomax i Ca., son Jorje Martin Inglis, Federico Jorge Lomax i Guillermo Shiell, todos súbditos británicos;

5 Que ningun dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, el cual no ha sido presentado a ningun otro tribunal, pero fué entre-

gado hace algun tiempo al ministro de Su Majestad Británica en Santiago;

6 Los pormenores del reclamo son, a saber:

POR VALOR DE LOS SIGUIENTES EFECTOS I UTENSILIOS PERTENECIENTES
A CÁRLOS HERALDO ECKERSLEY BULL, EN SUS HABITACIONES, EL
DIA DIEZINUEVE DE FEBRERO DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA I UNO:

6 ternos de ropa.	\$	420 00
2 " " " negra.		200 00
1 " " " de etiqueta.		130 00
1 sobretodo grueso.		50 00
1 " " delgado.		30 00
6 pares botines corrientes.		90 00
2 " " de montar.		50 00
1 " zapatos de baile.		18 00
1 " zapatillas.		10 00
2 sombreros de felpa.		28 00
2 " " paja.		16 00
2 docenas camisas blancas.		120 00
1 " " franela.		40 00
1 " camisetas.		50 00
1 " calzoncillos.		60 00
2 " medias.		48 00
2 " cuellos.		24 00
2 " puños.		40 00
3 " pañuelos.		36 00
1 " corbatas de seda.		30 00
2 " " " algodón.		24 00
1 " " " jénero forma rosita.		12 00
1 " pares de guantes.		36 00
1 baul de viaje.		30 00
1 maleta de cuero.		70 00
3 cachimbas espuma de mar.		80 00
6 " de madera.		24 00
3 boquillas para puros, de espuma de mar.		30 00

4 boquillas para cigarrillos, de espuma de mar.	12 00
2 tabaqueras.	10 00
3 libras tabaco para cachimba.	9 00
6 bastones.	18 00
2 chicotes para montar.	14 00
2 chicotillos.	10 00
1 par espuelas.	10 00
1 montura inglesa con freno, completa.	100 00
2 pares fierros extra, para estribos.	10 00
1 cabezal, extra.	15 00
2 caronas de paño.	8 00
1 sobretodo de dormitorio.	40 00
6 ternos de dormir (pyjamas).	42 00
1 reloj ingles (8 dias de cuerda).	30 00
1 estante para idem.	10 00
2 » adornos.	50 00
6 cuadros de vistas fotográficas.	60 00
3 » acuarelas.	60 00
1 album con retratos valiosos.	100 00
1 coleccion de libros.	200 00
1 » de monedas antiguas.	100 00
1 reloj i cadena de plata.	80 00
1 escritorio de cedro con bronce.	50 00
1 caja de fierro de «Chubbs».	25 00
2 pares escobillas de pelo.	20 00
Utensilios de lavatorio.	40 00
1 escobilla de ropa.	5 00
1 » para sombreros.	4 00
1 juego colleras orificadas.	10 00
2 cortaplumas	8 00
2 pares tijeras.	7 00
1 prendedor de oro con brillante al centro.	50 00
1 » » » sencillo.	20 00
1 » » » plata.	10 00
1 sombrero de pelo.	20 00
1 gorro de viaje	8 00

2 gorros para «cricket».	10 00
1 sombrero de felpa.	10 00

\$ 3,081 00

Al cambio de 24 peniques por peso.	£ 308 2 0
------------------------------------	-----------

Interes desde el diezinueve de Febrero de mil ochocientos noventa i uno, al treinta i uno de Diciembre de de mil ochocientos noventa i cuatro, al 6% anual.	£ 71 12 8
---	-----------

7 Todos los artículos reclamados fueron destruidos en el incendio que ocurrió, debido al bombardeo i combate que tuvo lugar en Iquique el diezinueve de Febrero de mil ochocientos noventa i uno, entre la Escuadra por una parte i las fuerzas del Gobierno por la otra.

8 Segun entiendo, ningun recibo fué entregado a los perjudicados en el incendio arriba mencionado.

Acompaño con el orijinal de este memorial:

A. Copia de protesta hecha por el señor C. H. E. Bull ante el cónsul interino de Su Majestad Británica en Iquique, el veintiuno de Setiembre de mil ochocientos noventa i uno;

B. Copia de testimonio del señor C. H. E. Bull ante el cónsul interino de Su Majestad Británica en Iquique, el veintiuno de Setiembre de mil ochocientos noventa i uno;

C. Copia de testimonio de los señores Juan Edmundo Burton i Jorge Elliot Buchanan ante el cónsul interino de Su Majestad Británica en Iquique, el veintiuno de Setiembre de mil ochocientos noventa i uno;

D. Copia de poder del señor C. H. E. Bull a mi firma social.

GMO. SHIELL.

CONTESTACION

Excmo. señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion número 33, en la cual don Guillermo Shiell, titulado socio de la casa comercial de Inglis, Lomax, i Ca., a nombre de don Cárlos Heraldo Bull, demanda \$ 3,081, o sea, £ 308-2-0 al cambio de 24 peniques por peso, mas £ 71-12-8 por intereses, valor atribuido a objetos muebles que se dicen destruidos en un incendio durante el combate de Iquique, el 19 de Febrero de 1891.

1 Es sensible tener que observar que ésta, como otras varias reclamaciones tomadas a su cargo por el señor Shiell, adolece de defectos que la hacen absolutamente inadmisible.

Desde luego, no se acredita que el reclamante señor Bull tenga el estado i carácter de súbdito ingles. Sobre esto ningun mérito probatorio puede darse a la declaracion que oficiosamente aparecen prestando ante el cónsul de S. M. B. en Iquique, el 10 de Abril del presente año, dos individuos llamados Hasler i Syers-Jones.

Opongo, pues, a esta reclamacion la excepcion de incompetencia de V. E. para conocer de ella, por no constar que el reclamante sea súbdito ingles.

2 El poder acompañado aparece en debida forma; pero, él da la representacion del reclamante a los señores Inglis, Lomax i Ca. i no al pareciente.

El señor Shiell, no podria aquí obrar individualmente, aun cuando pudiera probar que era uno de los miembros de aquella casa, con facultad de usar la firma social. En el caso presente, no se trata de una operacion de comercio, ni tiene aplicacion el convenio social, que solo liga a los socios.

De todo lo cual resulta que el señor Shiell, como mandatario no ha justificado su personería, segun lo prescribe el art. VI del Reglamento de Procedimientos dictado por V. E.

3 No solamente falta la prueba de la nacionalidad del reclamante, sino que tampoco el memorial contiene ninguna de las in-

dicaciones que sobre la persona de aquél exigen particularmente los primeros artículos de dicho Reglamento.

Los datos que el señor Shiell ofrece acerca de su persona i de las personas de sus titulados socios carecen de interes en esta ocasion, i jamás podrian suplir los que el Reglamento exige acerca del reclamante mismo.

El no presentarse la reclamacion en debida forma es otra causa que concurre a hacerla inadmisibile.

4 Falta ademas la comprobacion de los hechos que sirven de base a la reclamacion, de modo que, ésta en todo caso deberia ser desechada.

El 21 de Setiembre de 1891, el señor Bull hizo ante el cónsul ingles en Iquique una relacion i protesta relativa a esta reclamacion, que pensaba presentar, i agregó a ellas un inventario de las piezas de ropa i útiles de menaje, que dijo haber perdido; inventario de una prolijidad admirable, propia de una memoria prodijiosa, que no olvidó ni un par de medias de sus docenas completas, etc. El señor Bull no quiso retirar o llevar consigo ni sus prendedores de oro. No quiso salvar nada para reclamarlo todo.

No faltaron en el acto los testigos. los señores Burton i Buchanan, que concurrieron ante el mismo cónsul a confirmar la esposicion del señor Bull, agregando que, segun su opinion, era razonable la estimacion que aquél hacia de sus efectos, avaluándolos en £ 308-2-0.

Aquella esposicion i protesta del reclamante, i el testimonio de esos testigos oficiosos no comprueban ni que el reclamante fuera dueño de todos los bienes indicados, ni que éstos se destruyeran en el incendio referido, ni que tuvieran el valor enorme que el interes de parte les ha atribuido, en pesos de 24 peniques.

5 Lo que sí acepto de aquella esposicion del reclamante, confirmada por sus complacientes testigos, es el hecho de que, a consecuencia del combate i bombardeo de Iquique i en medio de ellos, se produjo un incendio que apareció en varios puntos i que no pudo contenerse, estando el combate trabado en las calles inmediatas.

Si esto es cierto como lo es, i si efectivamente el señor Bull

perdió en ese incendio los bienes que dice, ello no afecta de modo alguno la responsabilidad de mi Gobierno: el caso habria sido de fuerza mayor, consecuencia natural e inevitable de un hecho de guerra, que en derecho exime de toda responsabilidad.

No hubo de parte de las autoridades culpa alguna. Ni el reclamante ni nadie les hace acusacion a ese respecto.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

El ajente del Gobierno ingles, en el reclamo espresado mas arriba tiene el honor de someter al Excmo. Tribunal las siguientes observaciones:

1 Se objeta que no se ha presentado prueba alguna para justificar que el señor Bull es súbdito británico. Si no las presentamos con el memorial fué porque no creíamos que el Gobierno chileno comenzara por desconocer la nacionalidad de los reclamantes, cosa que siempre es mui notoria. No presentamos juntamente con este escrito las pruebas a que venimos refiriéndonos, porque en el corto espacio de 30 dias que tenemos para replicar nos ha sido imposible obtenerlas, pero las presentaremos el dia en que V. E. se ocupe de esta causa.

2 Se objeta tambien la personería del señor Shiell, diciendo que este señor no puede hacer uso de poderes conferidos a la sociedad de Inglis, Lomax i C., aun cuando se pruebe que el espresado señor Shiell es socio de la espresada firma.

En la réplica presentada en la reclamacion núm. 19 de Inglis, Lomax i C.ª exhibimos el contrato social de esa firma, el que com-

prueba que el señor Shiell es socio gestor de la casa de Inglis, Lomax i Ca. En cuanto al resto del argumento, estoi seguro de que el Tribunal, haciendo uso de la facultad que le confiere el inciso 2.º del artículo V, no le atribuirá importancia alguna.

3 Al argumento consignado en el número 3 de la contestacion, contestaré que todo lo que allí se dice respecto del señor Shiell, lo digo ahora respecto del señor Bull, esceptuando talvez la declaracion relativa al lugar del nacimiento, i si esas indicaciones se hicieron en el memorial respecto del mandatario señor Shiell i no del mandante señor Bull, esto se debe a un simple error en la apreciacion del Reglamento.

4 Se dice por el señor ajente de Chile que no se ha presentado prueba alguna para justificar los hechos en que se funda el reclamo, i se agrega que la enumeracion i tasacion de los efectos destruidos es indigna de fe. Se hacen cargos al señor Bull por no haber hecho nada para salvar sus bienes, i al mismo reclamante i a los señores Burton i Buchanan, por la declaracion prestada por éstos ante el cónsul ingles en Iquique, i por último, se tachan de mui excesivos los valores asignados a los efectos destruidos.

No se presentaron pruebas con el memorial porque documentos no habia otros que los presentados i porque la prueba propiamente dicha era inoportuna. Nada tiene de extraño que un hombre arreglado i metódico como el señor Bull recordara con perfecta exactitud cuántos i cuáles eran los objetos de su propiedad. Tampoco es extraño que los señores Burton i Buchanan, como amigos que son del señor Bull, se presentaran voluntariamente ante el cónsul ingles en Iquique a prestar una declaracion i que en ella pudiesen aseverar, en la forma que lo hacen, lo que en ella dicen. La declaracion de estos caballeros prueba suficientemente el dominio del señor Bull sobre los efectos destruidos, porque justifica que el reclamante era poseedor de ellos i el poseedor es reputado dueño, segun una regla universal de Derecho consignada en el inciso 2.º del art. 700 del Código Civil de Chile, en el art. 2230 del Código frances, en el 687 del Código italiano i en el art. 71 del Código de Zurich de 1887. Los precios asignados a los efectos destruidos

son perfectamente lejitimos, como lo puede comprobar cualquiera persona que tenga alguna esperiencia en materia de precios. Por último, si el señor Bull nada salvó fue porque las circunstancias eran tales que antes de preocuparse de salvar sus bienes tenia que preocuparse de salvar su persona.

5 Se dice que la pérdida de los objetos cuyo valor se reclama no da lugar a una indemnizacion por cuanto fue causada por el combate i bombardeo de Iquique, que son actos lejitimos de guerra, en los cuales no puede imputarse a las autoridades acto alguno de negligencia.

En este último punto incurre el representante de Chile en una inexactitud gravísima. El coronel Soto en el dia del bombardeo de Iquique ejecutó un acto verdaderamente culpable al impedir que los bomberos de ese puerto combatieran el incendio, cuando ya éste no podia servir a los propósitos militares del coronel Soto, esto es, cuando las llamas en vez de dirigirse al edificio de la Aduana defendido por las tropas constitucionales, se dirijían hácia el lado opuesto. En este hecho, cuya efectividad se probará oportunamente, se encuentra la base indiscutiblemente legal de la reclamacion del señor Bull.

Con estos antecedentes yo espero que el Excmo. Tribunal aceptará en todas sus partes el presente reclamo.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Vista la réplica declaro que nada tengo que agregar a lo dicho por mi parte en la contestacion. Del incendio producido durante el combate de Iquique de 19 de Febrero de 1891, se ha tratado

largamente en muchas otras reclamaciones, principalmente en mi dúplica de la núm. 1.

A lo dicho en ellas me refiero, en cuanto a los hechos, i en cuanto al derecho, i con esto termino aqui rogando a V. E. se sirva resolver como tengo pedido, no admitiendo esta reclamacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Guillermo Shiell, socio de la firma *Inglis, Lomax i C.^a*, comerciantes de Iquique i representantes legales de Cárlos Heralds Eckersley Bull, reclama del Gobierno de Chile la cantidad de trescientas setenta i nueve libras esterlinas catorce chelines ocho peniques, por pérdidas sufridas en el incendio ocasionado por el combate i bombardeo que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891.

Esponde el reclamante que en el incendio, debido al bombardeo i combate que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891, entre las fuerzas de mar i tierra del partido congresista, por una parte i las fuerzas del Gobierno de Balmaceda por la otra, su representado C. H. E. Bull, perdió todos los efectos i utensilios que tenia en las habitaciones que ocupaba en la calle de Bolívar núm 12, pérdidas cuyo detalle acompaña i que estima en trescientas ocho libras dos chelines, mas intereses que ascienden a setenta i una libras doce chelines ocho peniques, cantidades que reclama del Gobierno de Chile.

Acompaña como comprobantes una protesta hecha por C. H. E. Bull, ante el cónsul interino de S. M. B. en Iquique, el 21 de Se-

tiembre de 1891; testimonio del mismo Bull ante el mismo cónsul en igual fecha; testimonios de los señores Juan Edmundo Burton i Jorje Elliot Buchanan ante el ya nombrado cónsul en el mismo día indicado; copia del poder conferido por Bull a la firma social *Inglis, Lomax i C.^a* i declaracion de los señores Alfredo Syers-Jones i W. H. Hasler justificando el carácter de súbdito británico de Bull.

El ajente de Chile contesta, que no se ha acreditado el carácter de súbdito inglés del reclamante, señor Bull pues no tienen ningun mérito probatorio las declaraciones oficiosas de los señores Hasler i Syers-Jones, i en consecuencia opone desde luego la escepcion de incompetencia del Tribunal para conocer en esta reclamacion; que en el poder que se acompaña, el señor Bull da la representacion a los señores *Inglis, Lomax i C.^a* i no al señor Shiell; que Shiell en este caso, no podría obrar individualmente a nombre de la firma social por no ser esta reclamacion un acto de comercio, por lo que opone la escepcion de falta de personería del ocurrente; que la reclamacion no se ha presentado en debida forma i el memorial no observa las disposiciones de los primeros artículos del Reglamento, lo que hace inadmisibile la reclamacion; que tampoco se han comprobado los hechos que sirven de base a la reclamacion, de modo que ésta, en todo caso, deberia ser desechada; que tanto en lo espuesto por el reclamante en la protesta, como en el testimonio de los testigos oficiosos que presenta, no se comprueba que Bull fuera dueño de los bienes cuyo inventario se acompaña, ni que estos bienes fueran destruidos en el incendio, ni que tuvieran el valor enorme que se les atribuye; que acepta la efectividad del hecho de que el incendio el 19 de Febrero de 1891 en Iquique, fué producido a consecuencia del combate i bombardeo que tuvo lugar aquel día, lo que no afecta la responsabilidad del Gobierno de Chile, por ser, ese incendio, consecuencia natural e inevitable de un hecho de guerra; que las autoridades no tuvieron culpa alguna en esos sucesos i que el reclamante, ni ninguna otra persona, les hace acusacion al respecto; en conclusion pide al Tribunal se declare incompetente para conocer de esta reclamacion i en subsidio no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho; i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes, importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres, mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra, se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero de 1891, ya ántes de las seis de la mañana, el coronel Soto, del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte, lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas, a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana, que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio, compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable, habitados por muchos extranjeros, entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que en la protesta hecha por Cárlos Herald Ekersley Bull, bajo juramento, el 21 de Setiembre de 1891, ante el cónsul británico en Iquique, declara que sus pérdidas se deben al incendio producido por el bombardeo i batalla en Iquique el 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que efectivamente resulta de todo lo obrado en autos, que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos

que estaban en el puerto; que este hecho se deduce no solamente de lo espuesto en el memorial i en la protesta del reclamante en 21 de Setiembre de 1891, sino tambien de las declaraciones de los testigos presentados por el mismo reclamante i declaracion del almirante ingles Hotham, que estaba en la bahía de Iquique en aquel dia, inserta en el *Blue Book, Correspondance respecting the Revolution in Chili*, año 1892, páj. 82;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa, que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla no solo por un golpe de mano sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad cuando ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas de 1874*, artículo 15.—Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, artículo 756, número 4.—A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffken, *Manual de Derechos de la Guerra*, del Instituto de Derecho Internacional, citado por Hall, páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículo 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente, que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso previo a los habitantes de Iquique

puesto que el enemigo se había apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenía el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella había desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la *Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la conferencia de Bruselas*, 1874, i que exime de aviso previo.— (Bluntschli *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, artículo 554);

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los belijerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia proporcionarles la explotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique, en 19 de Febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos lejitimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile, que, como dice Vattel, «hai en tiempos de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes males de la suerte, para los propietarios que la sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho.» (Vattel, *Derecho de Jentes*, libro III, cap. IV, § 232. *The Law of Claims against Governements, House of Representatives 42 d. Congress Report*, núm. 134, page 274, Washington, *Governement Printing Office* año 1875.

Por estos fundamentos, el Tribunal por mayoría de votos, disin-

tiendo el árbitro inglés, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de Chile.

Santiago, 18 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—
ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 18 de Noviembre de 1895.
—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 34

THE NITRATE RAILWAYS COMPANY LIMITED

MEMORIAL

La Compañía de los Ferrocarriles Salitrenos incorporada conforme a la lei en Inglaterra i debidamente reconocida por el Gobierno de Chile reclama de esté Gobierno el pago de las sumas de dinero especificadas mas adelante.

El reclamo es en respecto a desembolsos hechos i daños sufridos a consecuencia de la guerra civil en Chile en el año de 1891. I por servicios prestados a las fuerzas contendientes durante dicha guerra.

El domicilio de la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros es Ingles i como se ha dicho mas arriba ésta ha sido debidamente reconocida segun las leyes de Chile i de consiguiente tiene personeria jurídica en la República contra cuyo Gobierno se entabla el presente reclamo.

Este memorial va firmado por Heriberto Juan Griffin representante de la Compañía de mandante, cuyo poder para obrar como tal representante fué debidamente reconocido por el Gobierno de Chile en octubre 23 de 1891.

Una copia certificada
del poder de H. J.
Griffin va anexo a este
memorial.

La Compañía demandante, como Compañía, no tomó parte alguna en la guerra civil, pero su material i personal fueron aprovechados por ámbas partes contendientes como lo manifiesta la naturaleza del reclamo.

La Compañía demandante no estuvo en tiempo alguno, fuera de lo especificado anteriormente, al servicio o paga de una u otra de las partes contendientes.

Ni la Compañía demandante ni su representante ha recibido suma alguna a cuenta del dicho reclamo.

El referido reclamo no ha sido presentado a ningun otro tribunal.

La suma principal o capital que reclama la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros Limitada en este memorial es *cuarenta i ocho mil setecientas setenta i cinco libras diezinueve chelines i cinco peniques* (£ 48,775-19-5) i a mas reclama intereses sobre dicha suma, a razon de ocho por ciento (8 %) al año a correr desde la fecha en que fué, por primera vez, presentada la cuenta a las autoridades chilenas, es decir: Agosto, 6 de 1891. hasta la fecha en que sea solucionada.

La Compañía demandante ha recurrido varias veces al Gobierno de Chile para sniquitar este reclamo, pero todo esfuerzo al efecto ha sido infructuoso.

Las varias solicitudes que ha presentado la Compañía demandante al Gobierno de Chile con el objeto de conseguir la liquidacion de su cuenta se hallan trascritas literalmente en el apéndice A de este memorial: Las primeras tres solicitudes estan incorporadas en la cuarta o sea la solicitud final, la que fué fechada Octubre 1.º de 1894.

La arriba indicada solicitud final de Octubre 1.º de 1894 fué remitida al intendente jeneral del Ejército, junto con la cuenta del reclamo; para su informe, i el siguiente fué el que dicho funcionario evacuó.

Señor Ministro:

Núm. 1,897.

Don Heriberto J. Griffin en representacion de la Compañía de Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá, reclama del Supremo Gobierno el pago de la suma de £ 48,775 diezinueve chelines i cinco peniques esterlinas, como importe de daños i perjuicios que dice fueron causados a la Compañía que representa, por deterioros i destruccion de parte del material rodante i de otras propiedades de dicha Compañía, durante el período de la pasada revolucion comprendido entre el 1.º de Enero i 31 de Marzo de 1891.

Al efecto acompaña a su solicitud una cuenta detallada i valorizada de esos daños i perjuicios, que resume del modo siguiente:

Cantidad de cargo a la Delegacion del Congreso .	£ 32.457-4-1
Idem a la Dictadura	16.318-5-4
Total.	£ 48.775-19-5

La cuenta mencionada está basada únicamente en la propia esposicion de la Compañía i carece, por lo tanto, de toda comprobacion que permita apreciar no solo la efectividad de los hechos en que se funda la reclamacion, sino tambien el valor de los gastos ocasionados en las reparaciones i reposicion del material i propiedades que se dice fueron destruidos o deteriorados por causa de la pasada revolucion.

En mérito de los antecedentes, piensa esta Intendencia Jeneral que debe desecharse por ahora la reclamacion de la Compañía de Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá mientras no se acredite, de una manera fehaciente e incontrovertible los hechos i gastos ya dichos, que importan, a juicio del representante de la Compañía, la respetable suma de libras 48,775-19-5 esterlinas.

Ademas, debo hacer presente a US. que esta es la primera vez que la oficina de mi cargo tiene conocimiento de la reclamacion

que hace la Compañía de Ferrocarriles salitreros de Tarapacá, no habiendo venido ántes de ahora en informe solicitud análoga del representante de la misma Compañía.

Intendencia Jeneral del Ejército.

Santiago, octubre 20 de 1894.

CÁRLOS BORIES.

Poco despues i en vista del precedente informe del intendente jeneral del Ejército, el Gobierno de Chile espidió el siguiente decreto:

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE GUERRA

Seccion 1.ª

N.º 2316.

Santiago, 26 de diciembre de 1894.

Vista la solicitud en la cual don Heriberto J. Griffin, por la Compañía de Ferrocarriles Salitreros *The Nitrate Railways Company Limited*, cobra al Gobierno de Chile las sumas de £ 32.457.4. 1 i £ 16.318. 15. 4 por perjuicios ocasionados durante la campaña de 1891 por las fuerzas del Congreso i por las que obedecieron a don José Manuel Balmaceda; i teniendo presente:

1.º Que no existe en el presupuesto de guerra cantidad alguna para subvenir al pago de reclamaciones como estas de que se trata;

2.º Que, no hallándose suficientemente atestiguada la efectividad de los perjuicios que se cobran, no habria base para consultar en

el presupuesto para 1895 el dinero que por esa reclamacion habria de abonarse en definitiva;

3.º Que para acreditar los fundamentos de muchos de los cobros relacionados, seria preciso abrir investigaciones del carácter ajeno independiente de la accion administrativa; i

4.º Que ha sido práctica invariable del Departamento de Guerra no hacer administrativamente solidario al Poder Ejecutivo de los perjuicios derivados de los actos u órdenes del señor Balmaceda o de los agentes de éste,

DECRETO:

No ha lugar al reclamo interpuesto por don Heriberto J. Griffin en representacion de la Compañía de Ferrocarriles Salitreros *The Nitrate Railways Company Limited* para que se le abone la suma total de £ 48.775. 19. 5. como valor de los perjuicios que le fueron ocasionados durante la campaña de 1891, dejándose a salvo la accion de los interesados para hacer valer sus derechos donde mejor corresponda.

Tómese razon i comuníquese. —MONTT.—C. Rivera Jofré.

Los hechos en que apoya su reclamo la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros, en contra del Gobierno de Chile, son públicos i notorios i en verdad nadie puede negar que, ámbas partes contendientes tomaron posesion e hicieron uso de las propiedades de la Compañía con el fin de trasportar sus tropas i material de guerra de i a los campos de batalla,—que, las locomotoras, carros i coches de la Compañía fueron empleados durante el período a que se refiere este reclamo, de dia i de noche en perpetuo trajin trasportando tropas i materiales de i a diferentes puntos de la provincia de Tarapacá—que, dichas locomotoras i material rodante fueron sometidas a un tratamiento lo mas severo por las partes contendientes, i que a veces fueron destruidas a propósito, i en otras, convertidas en máquinas de guerra, esponiéndolas a los proyectiles

durante las batallas que se libraron—que, los heridos de ambos partidos fueron trasportados del interior a los puertos, en los trenes de la referida Compañía—que la vía permanente i línea telegráfica de la Compañía fueron cortadas i destruidas en diferentes ocasiones por las tropas empeñadas en la campaña, o por orden de estas:—ni tampoco se puede negar que, perjuicios considerables fueron sufridos por la Compañía, tanto en Iquique como en Pisagua, a consecuencia de los bombardeos de esos puertos por las fuerzas navales del partido congresional.

Los hechos del caso son de público i notorio i no admiten disputa pero al mismo tiempo en apoyo del reclamo, se presenta con este memorial declaraciones personales.

En cuanto a los servicios prestados, por los cuales se reclama, debe tomarse nota de que la Compañía no estaba en el caso de usar discrecion alguna, pues la naturaleza grave de las operaciones que se practicaban i el tumulto i precipitacion inherentes a la guerra no admitian de esa precaucion i tranquilidad de espíritu con que son conducidos los asuntos en tiempo de paz.

Conforme una u otra de las partes contendientes se hacia dueño de la situacion, se aprovechaba inmediatamente de los ferrocarriles, siendo estos el único medio de trasporte i comunicacion,—i la Compañía quedaba obligada a someterse a las órdenes militares, a fin de evitar el secuestro absoluto de toda su propiedad, aunque de hecho no se escapó del todo de tal secuestro pues las locomotoras i material rodante fueron tomados i los empleados de la Compañía obligados a hacer el tráfico bajo las órdenes inmediatas militares, mientras que toda la vía permanente quedaba en poder de las fuerzas i algunas de las estaciones fueron convertidas en cuarteles.

La Compañía de los Ferrocarriles Salitreros reclama daños i perjuicios con respecto a los actos de ámbas partes empeñadas en la guerra civil de Chile de 1891, pues cada una, a su vez, era el Gobierno *de facto* i ejercia poder supremo en la provincia.

Habiéndose escusado el Gobierno de Chile, de satisfacer la demanda de la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros, la dicha Compañía ahora ocurre con el debido respeto ante el alto Tribunal

Anglo-Chileno i somete para su fallo la relacion o cuenta de su reclamo que va detallado en las pájinas siguientes:

(Sigue el Estado que demuestra los daños i perjuicios sufridos por *The Nitrate Railways Company Limited* en sus propiedades durante los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891, a consecuencia de la guerra civil.)

TOTALES

	£	S	D
PARTIDO DEL CONGRESO	£ 32,457	4	1
ID. ID SR. BALMACEDA.	£ 16,318	15	4
Total	£ 48,775	19	5

Iquique, 1.º de Octubre de 1894.

Excelentísimo Señor:

Heriberto J. Griffin por la Compañía de Ferrocarriles Salitreros *The Nitrate Railways Company Limited*, a V. E. con todo respeto digo:

Que me veo en el caso de reiterar ante V. E. las solicitudes que con fechas 8 de Agosto de 1891, 21 de Junio de 1892 i Enero de 1893 tuve el honor de elevar a la consideracion de V. E. con el objeto de solicitar que se mandara pagar a la Compañía que represento los gastos, daños i perjuicios que se le ocasionaron durantela guerra civil con motivo de esa misma guerra.

Séame permitido, Excmo. Señor, recordar los antecedentes a que vengo aludiendo.

En 8 de Agosto de 1891 la Compañía de Ferrocarriles Salitreros presentó a la Excmo. Junta de Gobierno la siguiente solicitud, acompañada de las cuentas a que se refiere:

Excma. Junta de Gobierno:

H. Griffin por la Compañía de Ferrocarriles Salitreros *The Nitrate Railways Company Limited*, a V. E. con todo respeto digo:

Que el ferrocarril de la Compañía que represento ha tenido que sufrir considerables daños i perjuicios con motivo de la guerra civil que ajita hoi la República.

El material rodante, la línea férrea, los terraplenes, las estaciones i telégrafo i cuanto constituye la vía del ferrocarril, han sido varias veces ocupados, destruidos, cortados o inutilizados por orden superior i para objetos de la guerra. En ocasiones, el tráfico ha sido interrumpido o prohibido en absoluto, al mismo tiempo que la autoridad tomaba de hecho, posesion de la línea i disponia a voluntad en todo lo concerniente a ella.

Mui frecuentemente i a todas horas del dia o de la noche, se ha pedido u ordenado que se ponga a disposicion de la autoridad dentro de un corto tiempo, uno o varios convoyes con sus maquinistas, palanqueros i demas elementos de movilizacion para trasportar tropas o víveres o elementos de guerra.

Tambien, como es público i notorio, en muchas ocasiones se han provocado voluntariamente desrielamientos que han producido sérios perjuicios, destrozándose completamente a veces, i en parte, otras, las locomotoras, los carros i parte de la vía.

Se han hecho por la Empresa a consecuencia de estas circunstancias anormales gastos estraordinarios de carbon, agua i demas elementos análogos; i ademas la Empresa ha tenido que pagar sueldos *extra* por los servicios tambien *extra* que se ha exigido a los maquinistas, conductores i demas empleados.

Por último, se ha llegado hasta ocupar las propias cuadrillas de peones de la Empresa para destruir la línea, cuando se juzgaba necesario hacerlo así; i despues se han ocupado esas mismas cuadrillas para componer la línea, haciéndose los pagos por la misma Empresa.

Todos estos perjuicios i daños, de que son testigos todos los

habitantes de la provincia i que están comprobados, parece justo que sean resarcidos i pagados en su justo valor.

A fin de alcanzar tal objeto, i en cumplimiento de instrucciones superiores, elevo a V. E. la presente solicitud, rogando a V. E. se digne dar las órdenes del caso para que me sean pagadas, en conformidad a las planillas adjuntas, las cantidades que en ellas se especifican.

Por tanto:

A V. E. suplico se sirva ordenar en el sentido que dejo pedido.

H. GRIFFIN.»

Trascurridos once meses sin haber obtenido resolución alguna respecto al reclamo, no obstante repetidas presentaciones, la Empresa elevó al Supremo Gobierno copia de su solicitud de 8 de Agosto de 1891, acompañada de la siguiente nota:

« 21 de Julio de 1892.

Excmo. Señor:

Heriberto Griffin, por la Compañía de Ferrocarriles Salitreros *The Nitrate Railways Company, Limited*, a V. E. con todo respeto digo:

Que en el mes de Agosto del año próximo pasado tuve el honor de elevar a la consideración de la Excma. Junta de Gobierno una solicitud, pidiendo al Supremo Gobierno que se dignara dar las órdenes del caso para que me fueran abonadas algunas cantidades de dinero que representaban los perjuicios irrogados a la Empresa que represento, con motivo de la guerra civil.

En esa solicitud esponía que dicho ferrocarril, con todo su material rodante, con su cuerpo de empleados i con cuanto lo constituye, fué utilizado para objetos de la guerra civil, disponiéndose de la vía desde Iquique a Pisagua, i de todo el material rodante; a veces impidiendo completamente todo tráfico, i a veces haciendo que el tráfico fuera o estuviera preparado para hacerse durante

todas las horas del día o de la noche. Hasta se llegó a utilizar el material rodante como máquina de guerra, pues se blindaron algunas locomotoras, haciéndolas prestar así servicios directos en los combates. Todo esto, por supuesto, con perjuicio positivo para la Empresa en cuyo nombre hablo.

Para no repetir, Ilustrísimo Señor, lo que tuve el honor de exponer a la Excma. Junta de Gobierno, hace ya mas o ménos un año, me permito adjuntar a la presente una copia de aquella solicitud, rogando al mismo tiempo a V. E. que se sirva darle lectura i se digne V. E. tomar alguna determinacion acerca de ella.

Es gracia, Excmo. Señor.

HERIBERTO GRIFFIN.»

La providencia que recayó en esta solicitud fué la siguiente:

«Santiago, 5 de Enero de 1893.»

Pase al Ministerio de la Guerra.

Anótese.—Por el Ministro.

A. BASCUÑAN M.»

En consecuencia i a virtud de esta providencia, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio de la Guerra.

En el mismo mes de Enero de 1893 tuve aviso del Ministerio de Guerra de que las solicitudes anteriores, con las cuentas, se habian estraviado. A consecuencia de este aviso, presenté duplicados de todos los antecedentes, acompañando la siguiente solicitud:

« Excmo. Señor:

Heriberto Griffin, por la Compañía de Ferrocarriles Salitreros *The Nitrate Railways Company, Limited*, a V. E. con todo respeto digo:

Que a consecuencia de haberse estraviado en las oficinas del

Ministerio de Guerra una solicitud acompañada de los antecedentes que tuve el honor de elevar a la consideracion de V. E. con fecha de Agosto de 1891, me veo en el caso de presentar un duplicado de todos aquellos antecedentes, reiterando por ahora la peticion que tuve el honor de formular i de que dan cuenta las solicitudes adjuntas.

Por tanto:

A V. E. ruego se sirva haber por presentado este duplicado i acceder a lo que tengo pedido.

Excmo. Señor.

HERIBERTO GRIFFIN.»

La providencia que recayó en esta solicitud fué la siguiente:

«Santiago, 3 de Febrero de 1893.

Núm. 235. —Vuelva al interesado para que se eleven por separado las cuentas de los perjuicios ocasionados por las autoridades i fuerzas constitucionales, de aquellas que se cobran por perjuicios producidos por la Dictadura o por los agentes de ésta.

Anótese.—Por el Ministro.

HUNEEUS.»

En conformidad a lo ordenado en este decreto, la Empresa ha procedido a arreglar las cuentas i distribuirlas en la forma allí indicada, como puede verse de la documentacion que se acompaña.

Tengo, pues, el honor de elevar a la consideracion de V. E. otra vez el reclamo a que se refieren las solicitudes i cuentas acompañadas, i al mismo tiempo me permito reiterar ante V. E. su despacho.

En esta virtud:

A V. E. con todo respeto pido que se digne dar acogida a las solicitudes de mi referencia i ordenar que se paguen a la Empresa que represento las sumas que se indican en las cuentas adjuntas. i que la Empresa cobra por los gastos, daños i perjuicios que se le han irrogado.

Excelentísimo Señor.

HERIBERTO J. GRIFFIN.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile tiene el honor de contestar el memorial que ha sido presentada en nombre de la sociedad anónima denominada *The Nitrate Railways Company Limited*, de quien se dice representante don Heriberto Juan Griffin.

Cobra la mencionada Compañía la suma de £ 48,775-19-5 en que aprecia los daños i perjuicios que le fueron causados por las fuerzas que combatieron en Tarapacá durante la guerra civil de 1891; i exige ademas el pago de intereses sobre aquella suma a contar desde el 8 de Agosto del mismo año hasta la fecha en que esta pretendida deuda sea solucionada, es decir, aproximativamente un cuarenta por ciento sobre el capital, lo que forma un total que excede de 68,000 libras esterlinas.

1 El memorial no se conforma a las prescripciones del Reglamento. Ni siquiera aparece firmado por el mandatario de la Compañía reclamante, ni ménos contiene las designaciones que ordena el artículo 3.º La fórmula del juramento que establece el artículo IX aparece en pliego separado, i la aseveracion de ser exactos los hechos espuestos en el memorial está hecha con reservas que no

concuerdan con la letra i con el espíritu de aquella disposicion. Estas irregularidades del memorial bastan para desecharlo *in limine*, i así lo pido a V. E.

2 El señor Griffin manifiesta obrar a nombre de una sociedad anónima. Esta circunstancia, i la de tratarse de una sociedad que es cesionaria de los derechos de Montero Hermanos, a quien el Gobierno del Perú confirió autorizacion i privilejio para construir i explotar la línea férrea de Tarapacá, hacen absoluta i radicalmente incompetente para conocer de esta reclamacion al Tribunal Arbitral Anglo-chileno constituido por la Convencion diplomática de 26 de Setiembre de 1893.

En todas las contestaciones que he dado a los memoriales elevados en nombre de sociedades anónimas, he tenido el honor de manifestar a V. E. que corporaciones de ese jénero no pueden estimarse como súbditos de S. M. B., porque este carácter no corresponde sino a personas naturales, i no a meras entidades jurídicas, que no existen sino en virtud de la lei segun la cual se han constituido i dentro del pais en que esta rije.

He manifestado, i lo repito ahora, que habiendo sido el propósito de la Convencion amparar los derechos de súbditos británicos, no ha podido pensar en comprender entre ellos a personas ficticias, ni a individuos que, sin embargo de formar parte de las corporaciones que constituyen esas personas pueden o no ser súbditos de S. M. B.; ni a aquellos que en realidad no han soportado los daños i perjuicios de que reclaman por haber adquirido sus acciones con posterioridad a los hechos de que emanan tales daños i perjuicios.

Aun he llamado la atencion de V. E. al Reglamento mismo dictado por este alto Tribunal para fijar el procedimiento que debe seguirse ante él. Muchas de sus disposiciones, i en especial los requisitos exigidos para dar curso a un memorial, no son en manera alguna aplicables a las sociedades anónimas. aun cuando lo fuesen a los socios que la componen. El artículo V ha necesitado descomponer las sociedades colectivas, tomando separadamente en consideracion a cada uno de sus miembros, i ordenando que se espresen, respecto de cada uno i en la medida de lo posible, las circunstancias especificadas en los artículos III i IV

Amparando la reclamacion de una sociedad anónima, se corre el riesgo de que queden bajo el patrocinio de S. M. B. los intereses de personas que no son sus súbditos, o de personas que no hayan guardado la neutralidad durante la guerra civil de 1891, o que hayan estado al servicio de una de las partes contendientes o que hayan recibido sueldo de alguna de ellas. Ni el Gobierno de Chile ni el de S. M. B. han podido pensar, cuando se firmó la Convencion de 1893, que personas colocadas en esa situacion, pudieran reclamar perjuicios i obtener indemnizaciones a que ningun principio de Derecho Internacional da acogida ni amparo.

Ménos aceptable es todavia el que la presente reclamacion sea entablada ante un tribunal internacional, que debe su origen i creacion a jestioncs diplomáticas larga i maduramente discutidas entre los Gobiernos de Chile i de la Gran Bretaña. El resultado final de esas jestioncs no ha podido ser el cambio de la jurisdiccion voluntaria i deliberadamente aceptada por la Compañía reclamante.

El tribunal competente para oír i fallar las cuestiones que esta Compañía entable en contra del Gobierno de Chile, está designado en contratos solemnes; i su jurisdiccion emana por consiguiente de la principal fuente reconocida por el derecho, cual es, la voluntad de las partes. No ha podido entrar en el ánimo de los Gobiernos que negociaron la Convencion de 1893, derogar un principio de derecho comun tan universalmente respetado para conferir jurisdiccion a un tribunal especial, prescindiendo de la establecida por el contrato, lei suprema para las partes que lo han celebrado. Que ese contrato existia lo verá V. E. comprobado en la relacion que voi a hacer acerca de los antecedentes de la Compañía demandante.

En 11 de julio de 1868, el Gobierno del Perú a quien pertenecia en esa época el territorio de Tarapacá, concedió a don Ramon Montero i Hermanos el derecho de construir un ferrocarril desde el puerto de Iquique a las salitreras de la *Noria* con privilejio esclusivo por veinticinco años. Fué condicion esencial de esa concesion i privilejio que, en el caso de trasmitir Montero Hermanos los derechos mencionados, esa trasmision se hiciese con aprobacion del Gobierno, i que si se llegase a verificar en favor de estranjeros,

se sujetasen éstos a las leyes del país, «sin poder hacer uso de ningún recurso diplomático» [artículo 15 del dec. citado]. El artículo 23 del mismo decreto dice a la letra: «Todas las cuestiones que se susciten entre el Gobierno i la Empresa se someterán a la decision de una comision compuesta de un ingeniero del Estado i de otro de la Empresa, i en caso de discordia se nombrará de comun acuerdo un tercero dirimente, cuya resolucion será definitiva.»

En 18 de mayo de 1869, otro decreto del Gobierno del Perú concedia a los mismos Ramon Montero i Hermanos el derecho de construir i explotar un ferrocarril desde el puerto de Pisagua a Zapiga i Sal de Obispo i demas salitreras del norte i de la provincia de Tarapacá, con privilegio esclusivo por el término de 25 años. Los concesionarios quedaban autorizados para formar una sociedad que explotase este privilegio; pero en este caso se disponia por el artículo 12 que si la trasmision de los derechos concedidos se hiciese en favor de extranjeros, estos se sujetarian a las leyes del país, «sin poder hacer uso de ningún recurso diplomático.»

Todavía por decreto de 26 de octubre de 1871 fueron ampliadas las concesiones precedentes, permitiéndose a Montero Hermanos construir las ramificaciones necesarias para poner en comunicacion la *Noria* con las demas salitreras de la provincia de Tarapacá, i prolongar la línea principal hasta la frontera de Bolivia. Tambien en esta concesion se estipuló por el artículo 15 que en el caso de transmitir sus derechos los concesionarios, los extranjeros en cuyo favor se hiciese la transmision, se sujetarian a las leyes del país «sin poder emplear ningún recurso diplomático.»

Estos tres decretos reducidos a escritura pública, tomaron la forma de un contrato solemne celebrado entre el Gobierno del Perú i Montero Hermanos.

En enero de 1874 quedó formada la *Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú*, a la cual traspasaron Montero Hermanos todos los derechos i obligaciones enumeradas en los tres decretos de que se acaba de hacer mencion. Esta sociedad se reconstituyó como sociedad inglesa en 30 de agosto de 1882, con la expresa condicion de quedar sometida a las leyes que rijiesen en

el territorio de Tarapacá i de no poder intentar ningun recurso diplomático.

En presencia de estipulaciones tan claras i espresas, no puede ponerse en duda la situacion que ellas han creado a la Compañía reclamante. Todo contrato importa una lei para los que lo celebran, i toda jurisdiccion puede ser limitada o modificada en los contratos, siempre que esta limitacion o modificacion no afecte el derecho ni el orden públicos. La leislacion de todos los paises ha aceptado como una regla invariable que los contratantes pueden estipuiar un domicilio para el efecto de conferir jurisdiccion al juez del lugar a fin de que conozca i resuelva acerca de las diferencias que entre ellos se susciten; o que pueden sustraer tales cuestiones del conocimiento de la justicia ordinaria para someterlas al de jueces designados por ellos mismos con el carácter de árbitros de derecho o de equidad.

Tal es lo ocurrido en el caso actual: el Gobierno del Perú, a quien el Gobierno Chile ha sucedido en todos los derechos i obligaciones que nacen de los contratos enunciados, concedió ventajas i privilejios a los antecesores de la Compañía reclamante, a trueque de diversas cargas i obligaciones que estos aceptaron, derechos i obligaciones que hoi están radicados en la *Nitrate Railways Company*. Las estipulaciones celebradas no pugnan con el derecho civil privado ni con el internacional: son perfectamente lícitas i obligatorias para las partes.

La Compañía no puede ponerse al amparo de un pacto nacido de arreglos diplomáticos, porque ha renunciado a todo recurso que tenga ese carácter. La Convencion de 26 de Setiembre de 1893 no puede tampoco comprenderla en sus favores, porque el artículo 1.º exige como condicion indispensable para dar curso a las reclamaciones el patrocinio de la Legacion de S. M. B. patrocinio que la Compañía no puede invocar, i que no puede prestársele de oficio en contra de una renuncia espresa hecha a trueque de concesiones de otro jénero de que ella se encuentra en posesion.

La Compañía ha elevado sus peticiones al Supremo Gobierno para obtener el pago de las indemnizaciones que pretende; pero no

ha acudido hasta hoy al Tribunal Arbitral que convino en constituir de acuerdo con el Gobierno, cuando se suscitasen cuestiones entre ámbos. No ha acudido tampoco a los tribunales de Chile, únicos competentes para resolver litijios a que diere lugar el cumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno de la Nación. Porque a este respecto no debe olvidarse que es doctrina que en Derecho Internacional ha tenido jeneral aceptacion que en cuestiones de este jénero no puede ocurrirse a la via diplomática, sino cuando hai una franca denegacion de justicia de parte de los tribunales del pais; (Wharton, *International Law Digest*, § 241, vol. 75). Quiero recordar solamente una autoridad citada en un caso análogo: el de la Corte de Casacion de Francia que en sentencia de 22 de Enero de 1849, dejó sentado el siguiente principio: «Si una persona contrata con un Estado, esta persona por el solo hecho del compromiso que contrae queda sometida a las leyes, al sistema de contabilidad i a la jurisdiccion administrativa i judicial de este Estado.» (Dalloz, *Jurisprudence Generale*, 1849). I si esto sucede en los casos ordinarios i corrientes, ¿con cuanta mayor razon debe ocurrir en aquellos en que ese principio ha sido consagrado por un pacto espreso de las partes! La misma Compañía lo ha declarado así i voi a citar sus propias palabras: «En las concesiones que el Gobierno del Perú hizo a Montero Hermanos, el concesionario fué autorizado para formar una compañía anónima que explotara los ferrocarriles, i para ceder sus derechos a cualquiera persona jurídica o natural, debiendo, en caso de cederlos, obtener la aprobacion previa del Gobierno, i siendo condicion precisa de la enajenacion que, si ella se hacia en favor de extranjeros, *estos quedarian sujetos a las leyes del pais i no podrian emplear nunca recursos diplomáticos.*»

(Memorandum presentado por la *Nitrate Railways Company* a la Comision nombrado por el Presidente de la República. 1883).

Existe, por consiguiente, un doble motivo de incompetencia, que impide a V. E. entrar a conocer de la presente reclamacion: 1.º por haber sido ella elevada por una sociedad anónima, a quien no puede aplicarse la denominacion de «súbdito británico» i que, por tanto, no puede considerarse comprendida en la Convencion de 26 de

Setiembre de 1893; i 2.º porque, habiendo convenido con el Gobierno del Perú los antecesores o causantes de la actual Compañía en someterse a las leyes del país, renunciando a toda intervencion diplomática, i obligándose a ocurrir a árbitros especiales para la solucion de toda dificultad que tuviesen con el Gobierno, cláusula espresamente aceptada por la Compañía actual, no puede ésta ponerse al amparo de la Convencion mencionada, que se ha constituido en virtud de arreglos diplomáticos i ejerce jurisdiccion en los casos que la Legacion Británica somete a su conocimiento.

Pido, por lo tanto, a V. E. que se declare incompetente para conocer en la reclamacion de que se trata.

3 El poder que ha presentado don Heriberto J. Griffin para representar a la *Nitrato Railways Company, Limited*, no me parece suficiente para que pueda ser oido en este juicio. Desde luego falta el testo ingles, es decir, el orijinal, i solo se ha presentado una traduccion de él que, aunque ha sido efectuada con autorizacion judicial, no consta que sea exacta en todas sus partes. En seguida, se nota que el poder ha sido otorgado por personas que se dicen ser director i secretario de la Compañía; pero no consta tampoco la efectividad de la representacion que estas personas se atribuyen, ni la facultad con que han procedido a otorgar el mandato.

Este, por otra parte, se refiere a actos ordinarios de administracion de la Compañía, i no contiene cláusula especial que autorice al señor Griffin para ocurrir ante este Tribunal Arbitral en demanda de la cuantiosa indemnizacion que se pretende. Solo se le permite ocurrir al Gobierno i a los tribunales o Cortes de justicia del país.

Opongo, en consecuencia, la excepcion de falta de personería; i pido que, en todo caso, no se falle acerca de esta excepcion sin tenerse a la vista el testo orijinal ingles del mandato que ha servido al señor Griffin para iniciar esta jestion.

4 Antes de entrar a tratar por su órden las cuestiones de derecho que suscita la lectura del memorial de la Compañía reclamante, voi a hacer ciertas observaciones de carácter jeneral aplicables a todas las cuestiones, i en especial a los numerosos antecedentes presen-

tados con el propósito de darles la importancia i el mérito de una completa prueba de los hechos en que se basa la reclamacion.

La prueba tomada por el cónsul británico en Iquique, por el secretario judicial de Pisagua i los certificados espedidos por el notario de Iquique, señor Martinez Galvez, carecen absolutamente de valor en el presente juicio. Aparte de defectos sustanciales, que luego mencionaré, la prueba acumulada por la Compañía adolece de las siguientes irregularidades: ha sido tomada en hora inoportuna i fuera de juicio, sin citacion de mi parte i por funcionarios a quienes nadie ha comisionado para este objeto. Se ha contravenido, por consiguiente, a las disposiciones del 2.º inciso del artículo I i de todo el artículo XI del Reglamento. No puede, pues, esa prueba producir efecto alguno en el presente juicio.

Por mui amplias que se supongan las facultades del señor cónsul británico de Iquique, ellas no pueden llegar hasta hacer comparecer ante él i tomar declaracion juramentada a personas que no están bajo su autoridad, a funcionarios públicos de Chile, a diputados al Congreso de la Nacion, a quienes, en respeto a los fueros de la Cámara a que pertenecen, no podria exigir ni aun el mas alto tribunal de Chile que compareciesen personalmente ante él a declarar en calidad de testigos.

El notario de Iquique no ha podido dar fe ni autorizar actos que salen de la esfera de atribuciones que la lei le ha conferido. El secretario judicial de Pisagua ha necesitado violar abiertamente la lei para tomar *proprio motu* i sin mandato ni autorizacion judicial las declaraciones de testigos que aparece recibiendo i suscribiendo.

Todo esto, que es nulo segun las leyes del pais, tiene que serlo igualmente segun los principios del Derecho Internacional; porque los actos jurídicos deben ajustarse a la lei del pais en que se verifican. *Locus regit actum*. Declaraciones hai, como la de don Juan Harper, que ni siquiera han sido prestadas ante algun funcionario, habiéndose limitado el señor cónsul de S. M. B. a autorizar la traduccion de ella al castellano.

Aparte de estas irregularidades, que afectan la forma misma de las declaraciones, ellas son tambien inadmisibles por cuanto casi en su totalidad han sido prestadas por individuos que son emplea-

dos de la Empresa i que, como tales, no han podido negarse a declarar en el sentido que se les sujeria. Esta circunstancia consta de sus propias deposiciones; i aunque respecto de los testigos examinados indebidamente por el secretario del juzgado de Pisagua se ha omitido estudiosamente espresar que eran empleados de la Compañía en la época en que declaraban, el hecho real i verdadero es que lo eran i lo son hasta hoi, cosa fácil de comprobar. Los que han dejado de serlo, como Lisandro Palza, tienen cuidado especial de prevenirlo en sus declaraciones. Aun el hecho mismo de presentarse espontáneamente a declarar, hace sospechosos a estos testigos. *Testis se offerens repellitur a testimonio.*

Los pocos testigos que no son empleados de la Compañía prestan declaraciones tan vagas e indeterminadas, que se limitan jeneralmente a indicar cómo es efectivo que la línea férrea fué ocupada en diversas ocasiones por las fuerzas militares de ámbos partidos contendientes, sin precisar hecho alguno, ni dar detalles sobre la fecha del suceso, accion de guerra en que ocurrió, o funcionarios públicos que ejecutaron el acto reclamado.

Otros testigos, jeneralmente empleados de la Empresa, encuentran perfectamente exactas las partidas de la cuenta presentada, i aseveran que las conocen todas i cada una, sin que se haya cometido error alguno al asentarlas. Estas aseveraciones son inverosímiles i no merecen fe, puesto que no es dable creer que los testigos puedan conservar en la memoria lo que es materia de mas de seiscientos items, con los detalles i especificaciones que en ellos se mencionan; ni tener la competencia necesaria para apreciar el valor de objetos tan diversos en su calidad i naturaleza.

Todavía hai otros, como J. M. López, cuya narracion adolece de anacronismos históricos, que es fácil reconocer a la luz de los hechos verdaderos i de todos sabidos, i que constan, ademas, de los datos oficiales que han sido publicados.

No puede tampoco dejar de notarse, i sobre ello vale la pena de llamar de una manera especial la atencion de V. E., la disconformidad que el notario Martinez Gálvez ha observado entre la cuenta impresa que forma parte del memorial i las partidas correspondientes de los libros de la Empresa. Segun el certificado acompañado

por el reclamante, éste habria imputado a órdenes i servicio de los belijerantes, nada ménos que nueve de los viajes de convoyes que salieron por cuenta esclusiva de la Empresa, en los días 6, 13, 15, 16, 22 i 25 de Febrero, i en 2, 14 i 15 de Marzo de 1891. Es imposible, por la falta de detalles del certificado, fijar el monto a que se hace subir el flete de esos convoyes.

Tambien es digno de atencion que se pretenda atribuir responsabilidad al Gobierno de Chile por los deterioros de las locomotoras o carros, que provenian de descuido, falta de limpieza o de aceite, imputables únicamente a la Empresa, o a sus maquinistas i fogoneeros. Muchos de los testigos presentados declaran acerca de ese descuido i faltas, que atribuyen al excesivo servicio. Creo, por mi parte, que en esta materia es la misma Empresa la responsable, i que si realmente ha sufrido perjuicio, debe imputarlo a su propio descuido, tanto en lo referente a deterioros del material, como en lo que respecta a los choques o accidentes debidos a la casualidad o a la incuria de los empleados.

De otro lado, mi parte no puede tampoco aceptar los precios que se atribuyen a las máquinas, material rodante i compostura de la línea o de otros objetos. Hai que tomar en cuenta que se trata de un material usado i que ha perdido considerablemente de su valor primitivo. Si se llegara a declarar responsable al Gobierno de Chile de cualquiera de estas pérdidas seria menester tasar los objetos tomando en consideracion su precio primitivo perfectamente comprobado i los deterioros que habria causado en ellos el tiempo i el uso constante.

5 En la suposicion de que la Compañía logre comprobar los hechos aducidos por ella i de que el Tribunal Anglo-Chileno se declare competente para conocer de la presente reclamacion ella encontrará todavia en el terreno del puro derecho obstáculos insuperables para que pueda ser aceptada.

Las diversas partidas de la cuenta presentada i cuyo monto asciende a £ 48.775-19-5, provienen principalmente de alguna de las siguientes causas:

A.—Gastos efectuados en el transporte de tropas de un punto a otro de la provincia de Tarapacá;

B.—Accidentes causados por operaciones de guerra, especialmente por los combates de 6 de febrero en Pisagua, de 19 del mismo mes en Iquique, de 7 de marzo en Pozo Almonte etc.;

C.—Accidentes casuales, como desrielamientos, choques imprevistos etc.;

D.—Robos i daños hechos por soldados dispersos o fujitivos.

Voi a tratar separadamente las cuestiones que se refieren a cada una de estas causas.

A.—Gastos efectuados en el transporte de tropas de un punto a otro de la provincia de Tarapacá.

Son numerosísimas las partidas de la cuenta que traen este orijen. Al formular estos cargos se echa en olvido que los privilejios i concesiones de que goza la *Nitrate Railways Company* no le han sido otorgados gratuitamente; i se desconoce el contrato conmutativo que contiene cada uno de los decretos de 11 de julio de 1868, de 18 de mayo de 1869 i de 26 de octubre de 1871, reducidos todos a escritura pública que firmó por una parte el representante del Gobierno del Perú i Montero Hermanos por la otra. Esos decretos i contratos quedaron incorporados en los estatutos de la *Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú*, i mas tarde en las de la *Nitrate Railways Company Limited*, que sucedieron una en pos de otra en las obligaciones i derechos de Montero Hermanos en su calidad de concesionarios i contratantes.

Entre esas obligaciones está la de someterse a las leyes i reglamentos jenerales que se dicten respecto de arreglo i policia de los caminos de fierro de la República segun se establece en el artículo 24 del decreto de 1868. Hai, por consiguiente que tomar en cuenta que muchos objetos i personas no pagan flete o pasaje segun las leyes que rijen la materia o que pagan solamente medio flete o pasaje. Entre ellos figuran ciertos empleados públicos i los pertrechos de guerra.

Por el artículo 14 de la concesion de 1868, la Compañía reclamante quedó obligada a conducir gratuitamente las tropas i los empleados civiles o militares que marchen en comision del servicio.

Otro tanto dispone el artículo 14 de la concesion de 1869, i el 16 de la de 1871. Es, pues, evidente que, si tal es su obligacion

prevista precisamente para un caso de guerra, la Compañía no tiene derecho alguno para exigir que se le pague el uso que se ha hecho del ferrocarril para el transporte de tropas de una parte a otra del territorio que su línea recorre. Ello es tan claro que no vale la pena de insistir recordando que todo contrato es una ley para los contratantes. *Pacta dant legem contrahentibus*, dice un conocido aforismo jurídico confirmado por este otro: *Nemini licet adversus sua pacta venire*.

Si la Compañía cumplía, al trasportar las tropas, con una obligación espresamente estipulada en un contrato, mal puede reclamar entónces del Gobierno de Chile que se le pague ese transporte, i ménos a los precios exajerados que lo cobra.

B.—Accidentes causados por operaciones de guerra, especialmente por los combates de 6 de Febrero en Pisagua, de 19 del mismo en Iquique i de 7 Marzo en Pozo Almonte.

Esta clase de perjuicios no dan mérito a indemnización alguna en conformidad a los principios mas elementales del Derecho Internacional. Si es lícito hacer la guerra, punto sobre el cual no es siquiera posible abrir discusión, son lícitas tambien todas las operaciones bélicas que conducen al propósito de obtener el triunfo definitivo, siempre que en ellas no se haga uso de armas vedadas o de otros medios prohibidos por el Derecho Internacional. No hai acerca de estos puntos discordia alguna entre los maestros del Derecho Internacional. No la hai tampoco respecto a la doctrina que exime de toda responsabilidad civil al Gobierno que hace la guerra cuando las operaciones militares no preparadas de tiempo atras, sino imprevistas o exigidas por las circunstancias como seria un combate o una batalla, ocasionaren daños o perjuicios a los ciudadanos pacíficos o a los neutrales. Si para defender una plaza, en el momento del ataque se destruye un edificio particular; si los proyectiles que se disparan contra el enemigo destruyen o dañan una propiedad privada; tales perjuicios son considerados como una calamidad que tuviera una causa superior a la voluntad de los hombres, i de la cual a nadie puede hacerse responsable.

Wharton condensa la doctrina jeneral en las siguientes palabras: «Un soberano no es responsable con respecto a los residentes

extranjeros por daños que estos reciban en su territorio a causa de una operacion bélica, o de insurjentes a quienes no puede dominar, o cuya beligerancia ha reconocido el Gobierno reclamante. (*International Law Digest*, vol. II, § 223).

Bluntschli espone su opinion en esta forma: «Los daños que resultan necesariamente de las operaciones militares para la propiedad privada no constituyen una violacion del derecho, antes bien deben ser considerados como un accidente.» (*Derecho Internacional Codificado*, artículo 662). Agrega que males de este jénero son inevitables i deben soportarse, como se soporta el granizo, la inundacion, el incendio que un rayo causara. El propietario es víctima de un azote i no de una injusticia i carece por tanto, de derecho para exigir una indemnizacion.

Hall reconoce el derecho de usar i destruir la propiedad privada cuando así lo exigen las necesidades de la guerra, i sostiene que los neutrales están colocados en esta materia en la misma situacion que los ciudadanos pacíficos del estado enemigo. (*A Treatise on international law*, § 186 i 278).

Vattel cree que el Estado debe indemnizar los daños que se causan a particulares libremente i por precaucion, como el tomar el campo, la casa o el jardin de algun particular para construir allí una muralla de defensa o una fortificacion, o destruir las mieses o graneros para que no se aproveche de ellos el enemigo; pero nó los demas perjuicios causados por necesidad inevitable, como los destrozos que produce la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo; los cuales son accidentes o males de la suerte, para los propietarios que los sufren. Si el Estado debiera indemnizar estos perjuicios, en breve se agotarían los fondos públicos, i seria preciso que todos contribuyesen en la justa proporcion, lo que seria impracticable, fuera de que estas indemnizaciones estarian espuestas a infinitos abusos i a un pormenor espantoso. (*Derecho de Jentes*, Libro 3.º cap. XV.)

Esta opinion es participada por Fiore, que la reproduce i desarrolla latamente en su *Nuevo Derecho Internacional Público*, T, 3.º, § 1714 i sigts.; i en su *Derecho Internacional Codificado*, artículos 1336 i sigts.

Calvo, después de manifestar que algunos gobiernos han concedido indemnizaciones a personas perjudicadas por las operaciones de la guerra no en cumplimiento de un deber estricto sino por simples motivos de equidad, sintetiza su doctrina con referencia a indemnizaciones solicitadas en razón de daños causados por una guerra civil, en la siguiente proposición: «El principio de indemnización i de intervención diplomática en favor de los extranjeros por motivos de los perjuicios sufridos en los casos de guerra civil, no ha sido ni es admitido por ninguna nación de Europa o de América.» (*Le Droit International* t. 3.º § 1297.)

Aspiazu, en sus *Dogmas del Derecho Internacional*, establece la doctrina de que en el curso de la guerra es permitido destruir los bienes de propiedad privada, entre otros motivos, cuando son necesarios para una operación militar determinada (§. 214).

Foignet, después de manifestar que en la guerra es lícito la destrucción de la propiedad particular cuando así lo exigen las operaciones militares, plantea esta cuestión: ¿Existe en este caso derecho a indemnización?; i la contesta negativamente, manifestando que no podría ser reclamada legalmente a ninguno de los beligerantes, por tratarse de un caso de fuerza mayor, semejante a un fenómeno del orden físico, tal como un granizo o una inundación.

(*Manuel Élémentaire de Droit International Public*, p. 279, éd. 1892.)

Tal es también la opinión de Klüber, en su *Derecho de Jentes moderno de la Europa* §. 262 i 263 nota c.

Bonfils, resumiendo las doctrinas enunciadas, arriba a la conclusión de que el principio de respeto a la propiedad privada en materia de guerra terrestre, se reduce a prohibir los actos que no son útiles para el progreso i éxito de la guerra, especialmente el saqueo i la destrucción llevadas a cabo por pura malicia o maldad. (*Manuel de Droit International Public*, §. 1200). Mas terminante es todavía este autor en el §. 1231.

Funck-Brentano manifiesta igual opinión en su obra *Précis du Droit des Gens*, Lib. 2.º, cap. 3.º, §. III.

Seria inútil seguir acotando citas. Basta i sobra con las enumeradas para convencerse de que con arreglo a los principios general-

mente reconocidos del Derecho Internacional, ninguna indemnización se debe a los particulares cuyos bienes son destruidos por causa de operaciones de guerra. No puede, pues, la Compañía reclamante invocar principio alguno de derecho en apoyo de su solicitud de indemnización por causa de las pérdidas que sufrió durante los combates que tuvieron lugar en Tarapacá en el trascurso de los primeros meses de 1891.

C.—En cuanto a los accidentes casuales como choques, desriamientos etc. que se han producido inesperadamente i sin ser efecto de medidas adoptadas por el enemigo, como destrucción de la línea o estracción de rieles, tampoco hai mérito alguno para hacer cargo por ellos al Gobierno de Chile. Esta cuestión sale ya de la esfera del Derecho Internacional, i corresponde al derecho civil. *Quod contigit casu improviso absque omni culpa nemini imputari potest.*

D.—Robos i daños hechos por soldados dispersos i fujitivos.

Son numerosos los casos fallados sobre esta materia por tribunales análogos al presente. Los que funcionaron en Chile desde 1884 a 1888 para oír las reclamaciones de los damnificados en la guerra del Pacífico, fallaron uniformemente que tales actos de pillaje practicados por soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes no afectaban la responsabilidad del Gobierno a quien servían. Wharton resumió la doctrina aplicada por esos tribunales en la fórmula siguiente: «*Los actos ejecutados por soldados o personas agregadas al Ejército sin órdenes de sus jefes, no comprometen al Gobierno*». [Obra citada, t. 2.º, §. 225].

El Tribunal que funcionó en Washington en 1894, reconoció el mismo principio como regla jeneral que debia aplicarse a todos los casos concretos que se le presentasen, en su sentencia núm. 18 recaída en la reclamación de don Winfield S. Shrigley.

En efecto, segun los principios del derecho civil, la responsabilidad que en ciertos casos nace de actos ajenos, está sujeta a la condicion de haberse podido prevenir el hecho culpable por la persona de quien dependia el que los ejecutó. Es, pues, indispensable que aquella persona hubiera tenido conocimiento del hecho que se iba a efectuar i que hubiera poseido los medios de impedir que se llevase a cabo.

Este principio está consagrado en la jeneralidad de los Códigos modernos. como puede verse en el art. 1384 de los Códigos frances i belga; 1309 del austriaco; 1903 del español; 1153 del italiano; 1403 del holandés. El art. 2326 del Código Civil chileno está tambien conforme con disposiciones análogas de todos los Códigos americanos.

6 He discurrido hasta aquí en el concepto de que los ferrocarriles estén colocados en la misma categoria que los demas bienes de particulares con relacion al derecho que sobre ellos puede ejercitar un belijerante. Pero debe notarse que ese derecho es mayor i mas perfecto tratándose de la ocupacion de líneas férreas para la prosecucion de las hostilidades.

Bluntschli [art. 645 bis.] declara que los ferrocarriles, vapores i embarcaciones de todo jénero, aparatos telégraficos i almacenes militares pueden ser utilizados para las operaciones militares bajo reserva de restitucion e indemnizacion a la conclusion de la paz. Cree este autor que, tratándose de operaciones bélicas, los ferrocarriles deben considerarse temporalmente a lo ménos, como parte del dominio público: su ocupacion, por consiguiente, equivale en cierto modo a la de los bienes mismos del Gobierno enemigo. La indemnizacion solo procederá en casos raros i escepcionales. En el actual, no puede ser exigida teniendo presente los contratos que median entre el Gobierno de Chile i la Compania reclamante.

Calvo comentando la opinion de Mr Laurent de Stein, desarrollada estensamente en el t. 17 de la *Revue de Droit International*, sostiene con ese publicista que el belijerante no tiene con respecto a los ferrocarriles de particulares sino un derecho de ocupacion. Jamas adquiere su propiedad i no puede usar de ellos sino para las necesidades de la guerra, nó para su comercio. Está obligado a una administracion concienzuda, a restituirlos al fin de la guerra i a indemnizar los deterioros que haya sufrido. [Obra citada, t. 4.º §. 2243].

En esta opinion de Calvo hai que notar que la forma limitativa que emplea para hablar de los ferrocarriles particulares proviene de la contraposicion que hace entre ellos i los que pertenecen al enemigo. Estos últimos pasan sin limitacion alguna al uso i pose-

sion del belijerante que ocupa el territorio, i aun a su dominio en el caso de cesion de territorio. Los ferrocarriles particulares no pueden pasar al dominio del ocupante: el derecho de este está restrinjido al uso de ellos para las necesidades de la guerra. Concluida ésta, deben ser devueltos, sin otra indemnizacion que la de los deterioros causados.

Bonfils, en su reciente *Manual de Derecho Internacional público* [§. 1186] dice que los ferrocarriles particulares constituyen evidentemente una propiedad privada de destino i naturaleza esencialmente pacíficos. «Pero tambien es incontestable, agrega, que se prestan a un empleo de los mas eficaces para hostilizar al enemigo. Aunque no hechos para la guerra, dan a los belijerantes facilidades especiales para transportar tropas, material i provisiones. Esta utilidad hace que su ocupacion entre en la categoría de las medidas que deben tomarse para la prosecucion de las operaciones de la guerra. Ninguna duda cabe de que el belijerante puede, en el hecho como en el derecho, secuestrar la via férrea i su material, emplearlos en su servicio i aun continuar la esplotacion comercial, cuyos productos percibirá segun las tarifas, con cargo de rendir cuenta una vez ajustada la paz, a los representantes de las Companías. Despues de la paz, desocupará las estaciones i entregará el material rodante. Pero ¿le deberá una indemnizacion por la privacion momentánea de este material i por los deterioros que haya podido sufrir? Esta cuestion es discutida».

El único ejemplo que cita a continuacion es el de la ocupacion de los ferrocarriles franceses por el ejército aleman durante la guerra de 1870-1871. Los alemanes ofrecieron a las compañías rendirles cuenta de las entradas, i para este efecto se nombró una comision mista encargada de una liquidacion; pero no se tomó en consideracion el uso de la línea para el servicio del ejército, sino los beneficios producidos por su esplotacion.

Este autor cita en apoyo de su doctrina a Guelle, Massé, Morin i Rouard de Card, todos notables publicistas contemporáneos.

Estos principios jenerales con las modificaciones favorables al Gobierno de Chile introducidas por los contratos existentes i de que he hecho relacion, han recibido ya su aplicacion en un caso

anterior al actual. Durante la guerra del Pacífico, tanto el Gobierno del Perú como el Gobierno de Chile usaron sucesivamente las líneas férreas de Iquique i Pisagua para las necesidades de la guerra, i la Compañía nunca tuvo la pretension de exigir una remuneracion por estos servicios a que estaba obligada. Todavía el Gobierno de Chile, como lo habia hecho el de Alemania en Francia, fué mucho mas allá, puesto que tomó la administracion del ferrocarril i lo explotó por su cuenta durante la guerra.

La Compañía, que hoi reclama, ha reconocido el derecho que asistia al Gobierno de Chile para adoptar este procedimiento. En el *Memorandum* que presentó en 1883 a la comision nombrada por el Gobierno para informar sobre las solicitudes referentes a construccion de líneas férreas en Tarapacá, se espresó en los siguientes términos:

« Los ferrocarriles, como elemento de trasporte, tienen grande importancia en la guerra: en poder de un belijerante, facilitan el movimiento de los ejércitos i son causa decisiva en muchos casos de victoria o de derrota.

« De ahí nace el derecho perfecto de todo belijerante para tomar posesion de las líneas férreas cuando las necesita para ejecutar sus operaciones, i el derecho de destruirlas si pueden servir al enemigo.

« En ejercicio de ese derecho, el Perú i Bolivia tomaron posesion de los ferrocarriles de Tarapacá, i Chile, a su turno, hizo igual cosa cuando ocupó militarmente aquel territorio.

« Pero luego que Tarapacá quedó en quieta posesion, cesando allí la guerra activa i alejándose hasta la probabilidad de operaciones bélicas, Chile devolvió los ferrocarriles a sus dueños, restituyendo las cosas al estado anterior a la ocupacion militar.

« Todo ello ha sido enteramente correcto i hace honor al Gobierno de Chile, que ha procedido con estricta sujecion a las leyes de la guerra.

« La devolucion de los ferrocarriles libra a Chile de molestias i de responsabilidad; mantiene el uso de las líneas para todos los menesteres del Estado, sin gravámen alguno, porque la Empresa tiene el deber de conducir gratuitamente las tropas, los empleados

civiles i las balijas del correo i sus conductores, i en nada amengua los medios de defensa, porque si llegara el caso de operar militarmente, habria perfecto derecho para tomar nuevamente la administracion de las líneas.» (Folleto citado, páj. 75).

Considero que no puede hacerse una defensa mas acabada del derecho con que los belijerantes de 1891 hicieron uso del ferrocarril de Tarapacá, sin llegar al extremo de verificar una espropiacion temporal, tomando a su cuenta la administracion de la Empresa, como se efectuó en la guerra del Pacífico. El Gobierno de Chile i la Compañía de los ferrocarriles, creyeron entónces que ésta carecia de todo derecho a indemnizacion, i por eso no pretendió siquiera cobrarla. Así lo aseguró la misma Compañía en la demanda que promovió contra el Fisco para que se le mantuviese el privilegio esclusivo que le otorgaban los decretos de 1868, 1869 i 1871. Léense en ella las siguientes palabras: «Durante la guerra del Pacífico, los belijerantes se sirvieron de las líneas, i el Gobierno de Chile las tuvo bajo su direccion durante quince meses. La paralizacion de fletes producida por el bloqueo de los puertos i los destrozos operados por los actos de guerra, irrogaron a la Compañía pérdidas i gastos que la obligaron a contraer nuevas deudas. Para ello necesitó reconstituirse, en conformidad a cláusulas espresas de sus Estatutos, i bajo la razon social de *The Nitrate Railways Company, Limited*, celebró arreglo con los acreedores en Agosto de 1882, reconociendo una deuda de £ 1.100.000, con primera hipoteca, i otra de £ 850.000, con segunda hipoteca.» (Folleto publicado en 1886, con el título de *Demanda de la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros, Limitada, contra el Fisco, sobre subsistencia de un privilegio*, páj. 8).

Tenemos, pues, que la Compañía en el hecho ha reconocido que ninguna indemnizacion podia exigir al Gobierno por el uso del ferrocarril para las necesidades de la guerra; que era de su obligacion el transporte gratuito de las tropas; i que los deterioros causados por aquel uso i por los actos de guerra, no afectaban al Fisco chileno sino a la Compañía misma, que se vió obligada a recurrir al empréstito para reparar los que se le habian causado en la guerra de 1879.

Siendo ello así ¿cómo se explica que ahora pretenda dar a las doctrinas del Derecho internacional i a las estipulaciones de los contratos celebrados, una aplicacion enteramente contraria a la que les dió en aquella época? ¿Ignora acaso que, aun siendo dudoso el alcance de los contratos, deberían interpretarse en favor de Chile atendiendo a la aplicacion práctica que de ellos han hecho las partes en el primer caso que se les presentó?

A juicio del infrascrito, el derecho del Gobierno a quien representa, está salvaguardado por los principios del Derecho Internacional, por las cláusulas de los contratos i por la intelijencia que las partes le han atribuido, segun una regla de interpretacion universalmente reconocida. Espera, pues, que V. E. se ha de servir así resolverlo en su sentencia, si es que llega a declararse competente para oír esta reclamacion.

7 Sobre la suma de £ 48,775-19-5, reclama la Compañía el interes del 8% anual, a contar desde el 8 de agosto de 1891 hasta la fecha del pago efectivo.

Apénas necesito manifestar que sosteniendo por mi parte la inadmisibilidad de la demanda con respecto al capital con mayor razon debo creerla improcedente con respecto a los intereses.

El cobro de intereses importa la indemnizacion del perjuicio causado por la mora en el pago del capital; pero para que haya mora es preciso que la deuda sea líquida i exigible, condiciones que en ningun caso reuniria la que pretende hacer valer la Compañía reclamante. La mora no existe tampoco, segun los principios jenerales, sino cuando se ha vencido un plazo espresamente estipulado para el cumplimiento de la obligacion o cuando ha existido reconvenccion judicial. Ninguno de estos requisitos se ha cumplido en el presente caso, i por consiguiente la peticion no reposa en ningun fundamento legal. Mucho ménos aceptable es el alto tipo de 8% anual que el reclamante fija a los intereses que cobra. Cuando el cobro es legal, se ocurre tambien a un tipo legal de intereses, que en Chile no es mas que el 6%, i que es mucho menor en la jeneralidad de los paises. Probablemente la Compañía reclamante ha querido armonizar la exajeracion del interes con la exajeracion del capital demandado.

Yo confío, apoyado en los principios de Derecho que tengo invocados, que V. E. no dará lugar al pago del uno ni del otro; i así la suplico mui respetuosamente.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Heriberto Juan Griffin por la Compañía de Ferrocarriles Salitreros Limitada, haciendo uso del derecho que le confiere el párrafo 3.º del art. X del Reglamento de Procedimientos adoptado por V. E., tiene el honor de presentar al Tribunal la siguiente réplica:

I

Observaciones sobre la forma en que se ha presentado el memorial de la Compañía.

La primera observacion que el ajente de Chile hace contra el memorial de la Compañía es que éste no aparece firmado por el que suscribe. Esto no es realmente efectivo, puesto que adjunto al memorial i formando parte de él hai un pliego firmado por mí i por el cónsul en Iquique de S. M. B., en cuyo pliego confirmo bajo mi firma i juramento los hechos que en el memorial he aseverado. Pero, que mi firma no aparezca al fin del memorial no es cosa material ya que el Reglamento de Procedimientos del Tribunal no exige en parte alguna el que los memoriales sean firmados; la firma está reemplazada por el juramento con solemnidades especiales que prescribe el artículo IX. ¿Qué mejor firma puede traer un memorial que la constancia auténtica de haberse prestado ese juramento? —Qué importa la omision de mi firma en una de las páginas del memorial si comparecí ante el cónsul inglés en Iquique a jurar i firmar la exactitud de lo que en mi nombre se esponia en ese documento?

Se pretende tambien que el memorial no contiene las indicaciones exigidas por el artículo III de las Reglas de procedimientos. Ese artículo exige que el reclamante espresese su nombre, apellido, profesion i residencia actual; el lugar i el año de nacimiento i el lugar de su residencia en la época en que ocurrieron los hechos que dan origen a la reclamacion. Ante todo recordaremos que el precepto de este artículo no es aplicable a las sociedades anónimas, como lo manifiesta el artículo V de las Reglas de Procedimientos. Si lo fuera, el solo nombre de la Compañía basta para indicar cuáles son sus nombres o su ocupacion, o mejor dicho, su jiro comercial. Por lo demas, en este escrito agregaremos por complacer al ajente de Chile, que la Compañía de Ferrocarriles Salitreros tiene su domicilio legal en Lóndres i tiene propiedades en la provincia de Tarapacá; que se constituyó en Lóndres el 30 de Agosto de 1882 i que en 1891 tenia el mismo domicilio i las mismas propiedades que tiene actualmente.

El ajente de Chile objeta tambien que el mismo juramento aparece prestado en un pliego aparte i en términos que a su juicio no guardan armonía con la letra i con el espíritu del artículo IX de las Reglas antedichas. Eso del pliego separado es un argumento incontestable para el que suscribe, porque no encuentra palabras suficientemente espresivas con que calificarlo sin faltar a los respetos que debo al Excmo. Tribunal, a mi ilustrado contendor i a mí mismo. En cuanto a los términos en que presté el juramento nada tienen de extraño si se considera que el memorial consigna una multitud de hechos que no podian todos constarme personalmente. sobre todo no habiendo sido el que suscribe jerente de la Compañía en los primeros meses del año 1891.

El ajente de Chile pide que en razon de los defectos que pretende encontrar en el memorial sea éste desechado *in limine*. Aun suponiendo que mi memorial tuviera los defectos que se le imputan, no por eso seria aceptable la peticion que acabo de citar, puesto que ningun artículo de las Reglas de Procedimientos pena los defectos de forma del memorial (véase art. X inc. 3.º) con el rechazo inmediato de la reclamacion. En todos los paises civilizados los defectos de forma deben ser corregidos por la parte que ha in-

currido en ellos i no hai lejislacion alguna que las castigue con la pérdida del pleito. No puede, pues. el ajente de Chile pedir en este caso que V. E. haga lo que ninguna lejislacion o ningun tribunal han hecho jamás.

II

Observaciones relativas a la competencia del Tribunal Anglo-Chileno

El señor ajente de Chile pide tambien que V. E. se declare incompetente para conocer de este negocio i funda esta peticion en los motivos que siguen:

[1] Que, segun la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, este alto Tribunal no tiene jurisdiccion sino sobre las reclamaciones presentadas por *súbditos ingleses*, carácter este último que las sociedades anónimas no pueden tener jamas.

[2] Que la actual reclamacion presentada al Tribunal de V. E. importa un recurso diplomático, que la Compañía no puede entablar ante V. E. sino ante otro Tribunal que indica, todo en conformidad a los contratos de 11 de Julio de 1868, arts. 16 i 23, de 18 de Mayo de 1869, art. 12 i de 26 de Octubre de 1871, art. 15.

La primera de las observaciones anteriores es de suma gravedad, pues tiende al rechazo no sólo de la presente reclamacion si no al de todas las demas que hayan formulado cualesquiera sociedades anónimas.

¿Será esta observacion tan fundada como grave?—Nó, pues no tiene fundamento alguno, como vamos a verlo.

Desde luego, cabe recordar que ella no se desprende del tenor literal de la Convencion de 1893, pues esta no habla en parte alguna ni de personas naturales ni de personas jurídicas.

Recurriendo en seguida al espíritu de aquella Convencion se comprende sin esfuerzo que ni la Gran Bretaña ni Chile pueden haber querido limitar a las personas naturales los efectos de esa Convencion. Estudiando las lejislaciones modernas se ve que todas ellas dan a las personas jurídicas los mismos derechos i les impo-

nen las mismas obligaciones que tienen las personas naturales, exceptuándose solamente aquellos derechos i aquellas obligaciones que nacen de las relaciones de familia o que por su naturaleza no pueden ser ejercitados por las personas jurídicas, como por ejemplo el derecho del hijo para exigir alimento a su padre o el derecho de cualquier adulto para contraer matrimonio. En todas las legislaciones el derecho de propiedad pueden ejercitarlo tanto las personas naturales como las personas jurídicas, entre las cuales se cuentan las sociedades anónimas. Los diplomáticos i los Gobiernos que negociaron la Convencion de 1893 no ignoraban estos principios i, puesto que no dicen otra cosa, es lógico creer que no hayan querido apartarse de ellos. Por otra parte la Gran Bretaña, que es el país donde mas se ha desarrollado el espíritu de asociacion, no ignoraba que muchas sociedades inglesas habian sufrido en 1891 perjuicios en Chile i es imposible creer que el Gobierno ingles haya querido limitar a las personas naturales el beneficio de la Convencion tantas veces citada. El Gobierno de Chile, que tambien conocia esos perjuicios, como se ve en nuestro memorial, no habria podido abrigar por su parte diverso propósito sin desautorizar sus leyes, sus decretos i su política. Ante los tribunales chilenos nadie se atrevería a sostener que las sociedades anónimas no tienen nacionalidad, puesto que en el art. 468 del Código de Comercio de Chile se trata de las *sociedades anónimas extranjeras* i puesto que el tratado de Chile con Bolivia de 6 de Agosto de 1874, que fué lei de la República, reconocia que no sólo las *personas* naturales o jurídicas, sino tambien las *industrias* i los *capitales* podian tener nacionalidad chilena. Luego, segun las leyes chilenas las sociedades anónimas tienen nacionalidad. Decretos del Gobierno de Chile en que se reconoce este principio podríamos citar muchos, pero nos limitaremos a citar el espedido por el ilustrado Presidente Santa Maria, en que este reglamentó la manera de constituir en Chile las agencias de sociedades anónimas extranjeras. Por lo que toca a la política exterior de Chile, ¿quién no sabe que Chile declaró en 1879 la guerra a Bolivia porque este habia violado el pacto de 6 de Agosto de 1874 que ántes citamos, al imponer una contribucion a la Compañía de Salitres i Ferrocarriles de Antofagasta, que era una *sociedad anó-*

nima chilena? I lo mismo sucede en Derecho Internacional, como vamos a verlo.

Calvo, en el número 737, página 227 del tomo II de su obra *El Derecho Internacional*, dice lo que sigue: «Así como los individuos son nacionales o extranjeros, así también las personas jurídicas son nacionales o extranjeras». ¿Pero, cómo se puede determinar su nacionalidad?.....

Fiore nos suministra el criterio necesario.

«Toda persona jurídica adquiere existencia legal por medio de una acta de fundación aprobada por la autoridad suprema, i esta acta es lo que se ha de examinar para decidir si la persona jurídica es nacional o extranjera. Si la personería jurídica de una sociedad le ha sido concedida por la autoridad nacional suprema la sociedad debe ser considerada como nacional; i si, por el contrario, esa personería se le ha concedido por una autoridad suprema extranjera i en seguida la sociedad ejercita en nuestro país los derechos que emanan de la personalidad jurídica que le ha sido concedida por la autoridad extranjera, esa sociedad será considerada como extranjera.»

Puede, pues, decirse en definitiva que las personas morales toman la nacionalidad del Estado o del legislador al cual deben su existencia.

Si se trata de una sociedad comercial, la nacionalidad se determina no por la de los socios, sino por el domicilio de la persona jurídica, por el domicilio de la sociedad. Este se encuentra fijado en el lugar donde existe el establecimiento principal de la sociedad, es decir donde está la dirección o la administración, i no en el lugar o centro de la explotación. Hai que fijarse, pues, en el domicilio que tiene la cabeza, el cerebro de la sociedad. (Duvivier, *Faillites des Sociétés*.)

Con todos estos antecedentes es claro que el espíritu de la Convención de 1893 ha sido el de hacer extensivas sus disposiciones tanto a las personas naturales como a las jurídicas.

Esa intención o espíritu de las Altas Partes Contratantes, queda de manifiesto en el art. V de las Reglas de Procedimiento, el que habla de las reclamaciones de cualquiera especie de sociedades,

sean anónimas o no lo sean. Bien sé que el agente de Chile sostiene que este artículo V es precisamente el que excluye los reclamos de las sociedades anónimas, pero basta leerlo para comprender que ese artículo tiene por objeto fijar la manera como las sociedades colectivas i las comanditarias deben cumplir con lo mandado en los arts. III i IV i declarar que las sociedades anónimas no están sujetas a lo dispuesto en esos dos artículos, puesto que habria sido un absurdo el exigir nombre, apellido, profesion, lugar i fecha de nacimiento, domicilio i residencia de todos los accionistas. Este i no otro es el objeto del artículo V. Si se lo interpretara del modo que pretende el agente de Chile resultaria un verdadero absurdo, que es el siguiente: Para la lei son igualmente personas jurídicas todas las sociedades comerciales, ya sean colectivas, comanditarias o anónimas, como que todas ellas están enumeradas en el artículo núm. 348 del Código de Comercio de Chile, i por consiguiente es absurdo suponer que las dos primeras tengan el derecho de velar por su propiedad i el de reclamar por la violación de ella, i que no tenga ese mismo derecho la tercera.

Creemos que con esto queda refutada la primera causal de incompetencia del Tribunal alegada por el señor agente de Chile.

Vamos ahora a la segunda. Se dice que la presente reclamación importa un recurso diplomático, que la Compañía no puede entablar, por cuanto renunció a todo recurso de esta clase en los contratos de 11 de Julio de 1868, de 18 de Mayo de 1868 i de 26 de Octubre de 1871. Para dar visos de razon a este argumento se hace presente que este alto Tribunal debe su existencia i su organización a las negociaciones diplomáticas concluidas entre la Gran Bretaña i Chile i que no puede conocer sino en los reclamos que le sean presentados por conducto de la Legación inglesa en Chile.

Este argumento nada vale porque aun cuando el Tribunal haya sido creado i organizado mediante negociaciones diplomáticas i aun cuando no tenga jurisdicción sino para conocer en las reclamaciones que se le presentan por conducto de la Legación inglesa, todo esto no da a las diversas reclamaciones el carácter de recursos diplomáticos. Para convencerse de ello basta fijarse en que los señores miembros del Tribunal no son agentes diplomáticos, puesto

que no representan a la persona de su Soberano ni son nombrados ni recibidos en la forma que las leyes de cada país o el Derecho Internacional requieren; i por último que en sus decretos i en sus sentencias no tienen que sujetarse a orden alguna de los Gobiernos que los han nombrado. Hai que fijarse tambien en que la mision del diplomático ingles en Santiago concluye respecto de cada reclamacion en el momento mismo en que la entrega a los secretarios de este Tribunal; en que, una vez presentadas las reclamaciones, se tramitan i se resuelven en una forma análoga a la que usan los tribunales ordinarios de cada país; i por último, en que las sentencias que estos tribunales pronuncian tienen que cumplirse cualquiera que sea la opinion que los Gobiernos interesados se formen acerca de la justicia o injusticia de estos fallos. Estas comisiones son verdaderos tribunales de justicia internacional, ideados por el Derecho moderno, que pueden tener un carácter especial i una duracion temporal, como el Tribunal de Jinebra de 1871 a 1872, los de Santiago despues de la guerra de 1879 i el de Washington de 1894, o un carácter jeneral i una duracion permanente como los tribunales mistos de Ejipto.

Por otra parte es mui fácil comprender cuales son los recursos diplomáticos escludidos por los contratos entre el Gobierno del Perú i los señores Ramón Montero i hermanos. Ellos no son otros que los que se entablan directamente por los Gobiernos ante quienes acudian los particulares que se creian perjudicados por actos de otros Gobiernos. Como las reclamaciones en esta forma daban lugar ordinariamente a un cambio de muchas notas entre las respectivas cancillerias i como estas discusiones concluyeron en algunos casos por el empleo de la fuerza de parte de algunos Gobiernos de Europa, los de Sud América trataban siempre de evitar reclamaciones diplomáticas como las que acabo de indicar. Con esto se comprende fácilmente cuales son los recursos diplomáticos que los contratos de 1868, de 1869 i de 1871 quisieron evitar. Ademas los tribunales de arbitraje internacional, tales como hoi se les comprende, fueron creados por el tratado de Washington de 8 de Marzo de 1871 i funcionaron por primera vez gracias a ese tratado en 1871 i 1872 en el caso del *Alabama*, promovido por los Estados

Unidos contra la Inglaterra. Por consiguiente, es imposible que el Gobierno del Perú i Ramon Montero i hermanos, al celebrar en 1868 i 1869 sus primeros contratos hayan querido escluir tambien los Tribunales de arbitraje internacional; que en esa época no eran conocidos todavia.

Como la demanda presentada a este Tribunal no importa en realidad un recurso diplomático i como la Compañia no ha hecho ni ha pretendido hacer uso de los recursos diplomáticos propiamente tales, no puede, pues, decirse que en esta materia la Compañia haya infringido o infrinja sus contratos.

El señor agente de Chile pretende tambien encontrar en el artículo 22 del contrato de 11 de Julio de 1868 otra causa de incompetencia del Excmo. Tribunal. En ese artículo se dispone que «todas las cuestiones que se susciten entre el Gobierno i la Empresa se someterán a la discusion de una comision compuesta de un *ingeniero* del Estado i otro de la Empresa, i en caso de discordia se nombrará de comun acuerdo un tercero dirimente, cuya resolucion será definitiva.»

Este argumento es infundado; pero aun suponiendo que no lo fuera no seria aplicable sino a los perjuicios causados al ferrocarril en la seccion que va desde Iquique hasta la *Noria*, por cuanto esta parte del ferrocarril fué la única que se construyó en virtud de la concesion de 11 de julio de 1868 i esta es tambien la única que consigna una estipulacion como la que acabo de transcribir que no se encuentra ni en la concesion de 1869 ni en la de 1871. Por consiguiente, este argumento sobre incompetencia del Tribunal aun suponiéndolo exacto no afectaria a todas las partidas de nuestra reclamacion que se refieren a los perjuicios causados a nuestra línea de Pisagua a Zapiga i Negreiros i a los ramales. Respecto a estos últimos perjuicios la competencia de este Tribunal para resolver acerca de ellas es indudable.

Pero el argumento de que me ocupo, formulado a nombre del Gobierno de Chile, es enteramente infundado, como vamos a verlo.

El artículo 22 del contrato de 11 de julio de 1868 se refiere únicamente a las cuestiones técnicas de *ingenieria* a que pudiera dar

oríjen la manera de ejecutar los trabajos de construcción del ferrocarril i por eso las partes contratantes convinieron en ese mismo artículo en que esas cuestiones fueran resueltas por *ingenieros*. Si así no fuera ¿qué objeto i que razón habría habido para someter al fallo de una comisión de ingenieros las cuestiones a que se refiere el artículo 22? Por consiguiente, ese artículo reservó las cuestiones sobre ingeniería a los jueces ingenieros i las cuestiones de derecho a los jueces de derecho.

La interpretación que atribuimos al artículo 22 del contrato de 1868 está corroborada por la aplicación práctica que ambas partes hicieron de ese contrato i que voy a recordar en seguida.

El Gobierno del Perú espidió en 15 de noviembre de 1876 i en 4 de enero de 1878 dos decretos en que obligaba a la Empresa de los Ferrocarriles de Tarapacá a que recibiera los billetes de banco por su valor nominal en pago de fletes i de pasajes. La Compañía reclamó contra la validez de estos decretos *ante los tribunales ordinarios de justicia* i siguió un juicio que fué fallado en 1.ª instancia el 22 de junio de 1878 por los vocales de la Corte Suprema, señores Oviedo, Alvarez, Leon i Mariátegui i el 7 de agosto de 1879 por el Supremo Tribunal de Responsabilidad compuesto de los señores García i García, Pino, Lizarraga, Gómez Sánchez, Benavides Igunza i La Fuente. Todas estas sentencias, expedidas de acuerdo con el dictámen del Fiscal señor Miguel A. de Lama, declararon ineficaces los decretos ántes citados expedidos por el Gobierno del Perú contra la Compañía. Pues bien, en ese largo juicio a nadie se le ocurrió sostener jamás que el conocimiento de esa causa correspondiera al *tribunal de ingenieros* creado por el artículo 22 del contrato de 11 de julio de 1868. Por consiguiente es claro que al tribunal creado por ese artículo le incumbía solamente fallar las cuestiones técnicas de ingeniería i que a los tribunales ordinarios de justicia les correspondía fallar las cuestiones de derecho que se suscitaban entre las partes contratantes. I si los tribunales ordinarios del Perú podían i debían conocer en las cuestiones de derecho que surgieran entre el Gobierno i la Empresa ferrocarrilera, es evidente que V. E. puede conocer de las cuestiones de derecho que encierra esta reclamación, puesto que este

Excmo. Tribunal ha venido a sustituir a los tribunales ordinarios de justicia.

Se dice tambien que en el artículo 16 del contrato de 11 de Julio de 1868 i en los contratos posteriores se estipuló que los cesionarios extranjeros de Ramon Montero i hermanos deberian someterse a las leyes del pais, esto es a las leyes del Perú, i por consiguiente, a las leyes de Chile desde 1879 para adelante. A este argumento contestamos diciendo que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 es lei de la República de Chile, i por consiguiente, que nosotros no infrinjimos nuestros contratos al acojernos a los beneficios de esa lei.

Todo lo anterior basta, a nuestro juicio, para probar que son infundadas todas las alegaciones que hace el agente de Chile a fin de obtener que V. E. se declare incompetente para conocer de esta reclamacion.

III

Observaciones acerca de la personeria del mandatario de la Compañia reclamante, don H. J. Griffin.

El agente de Chile principia sus observaciones a este respecto haciendo presente que no se ha exhibido el poder orijinal del señor Griffin, estendido en ingles; no se declara satisfecho con la version castellana de ese poder, hecha de órden judicial, i manifiesta dudas acerca de la exactitud de esa traduccion. Hai en esto i sobre todo en lo último un exceso de celo, puesto que el mismo Gobierno de Chile me ha reconocido, por medio de un decreto especial, como agente de la Compañia. Pero para evitar cualquiera duda, presento en esta réplica el poder orijinal, cuya exhibicion se desea.

Observa tambien el señor agente chileno que el poder del señor Griffin aparece otorgado por dos personas que se dicen director la una i secretario la otra de la Compañia reclamante, pero que no justifican de modo alguno el carácter que se atribuyen. Para hacer un argumento como éste es preciso no conocer ni remotamente la

organizacion i deberes del notariado en Inglaterra. Tengo, pues, que hacer presente que en todo documento público otorgado en aquel país, cuando el otorgante se atribuye un carácter cualquiera es porque al notario autorizante le consta que lo tiene i da fe de ello i que si al notario no le consta ese carácter no se puede otorgar el documento.

Se dice ademas que el poder del señor Griffin no le ha autorizado para presentar esta reclamacion, puesto que no se le ha conferido poder especial para ello, aun cuando se le ha autorizado para representar a la Compañía ante el Gobierno i ante los tribunales i juzgados.

Para refutar estos argumentos basta reproducirlos en los propios términos que emplea la otra parte i recordar, si se quiere, que el inciso 2.º del artículo V de las Reglas de Procedimiento no exige poder *especial* sino poder *suficiente* a juicio del Tribunal.

IV

Observaciones relativas a diversos documentos presentados en apoyo de la reclamacion.

En el núm. 4 de su contestacion el señor ajente de Chile se empeña en desvirtuar el mérito legal de los documentos presentados en nuestro memorial.

Principia por decir que las declaraciones prestadas ante el cónsul ingles en Iquique, ante el secretario judicial de Pisagua i ante el notario público de Iquique, señor Martínez Gálvez, adolecen todas ellas de nulidad por cuanto se han prestado fuera de término probatorio, sin citacion del ajente de Chile, i por funcionarios que no habian recibido comision alguna de V. E. para recibir aquellas declaraciones.

El ajente de Chile al hacer estas observaciones se olvida de que el artículo I de las Reglas de Procedimiento ordena a los reclamantes que agreguen a su memorial todos los documentos i piezas justificativas de su reclamacion i se olvida tambien de que este

Tribunal está facultado para proceder con absoluta libertad de criterio.

I para evitar dificultades yo declaro que quiero justificar con prueba testimonial todos los hechos apuntados en los documentos que he presentado junto con el memorial i que pienso valerme de todos los testigos que firman las declaraciones que presentamos con nuestro memorial. Para cumplir con lo prescrito en el art. XI del Reglamento, manifestaré que el nombre, apellido, profesion, nacionalidad i residencia actual de todos los testigos es el mismo que ellos indican en esos documentos.

Se manifiesta el señor ajente de Chile mui sorprendido de que entre las declaraciones prestadas ante el cónsul ingles en Iquique, se encuentren algunas emitidas por funcionarios chilenos i por diputados al Congreso Nacional, que no pueden ser obligados a comparecer personalmente como testigos ante ningun tribunal de la República. Nuestro contradictor cree que el cónsul al recibir esas declaraciones ha estralimitado sus facultades. Francamente, no comprendemos la sorpresa del señor ajente, ya que es cosa mui sabida que todo funcionario que tiene fe pública está autorizado para recibir las declaraciones que cualquier funcionario o diputado o particular quiera voluntariamente prestar ante él.

Lo que hemos dicho en defensa de la conducta funcionaria del cónsul ingles en Iquique, lo decimos tambien en apoyo de la conducta funcionaria del secretario judicial de Pisagua i la del notario de Iquique, señor Martínez Gálvez.

La contestacion nos hace retroceder en seguida a los tiempos de don Alfonso el Sabio, que declaró que no podia ser testigo el paniaguado de la parte que lo presenta «nin el que vive de su merced e ha de facer su mandado». Inspirándose en estas añejas prescripciones nuestro ilustrado contradictor sostiene que son indignas de fe las declaraciones prestadas por los empleados de la Compañía o por los testigos que espontáneamente se han presentado a declarar.

Los antiguos preceptos legales que acabo de recordar eran perfectamente lójicos en la época en que se dictaron, en la cual eran sumamente estrechos los vínculos de dependencia que existian

entre los patrones i los criados. Esos mismos principios son realmente absurdos en la época presente en la cual la dependencia de los criados, i con mucha mayor razon la de los empleados, casi no existe. De esto resulta que los empleados i los criados no tienen inconveniente alguno para decir en juicio la verdad, aun cuando ella sea contraria a los intereses o a los deseos de sus patrones. La verdad de estos hechos se impone de tal modo en la época actual que conocemos ya muchas sentencias de los tribunales chilenos en que se han declarado válidas las declaraciones prestadas por empleados en favor de sus principales. I si esto sucede en los tribunales ordinarios que tienen todavía que aplicar en materia de prueba las leyes de don Alfonso el Sabio, con mucha razon sucederá en este Tribunal que no tiene la obligacion de encerrarse dentro de aquellos monumentos de la lejislacion antigua. A este propósito conviene recordar que segun el art. III de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, «el Tribunal admitirá los medios de prueba i de investigacion que, a su juicio i en concepto de sus miembros conduzcan con mayor eficacia al esclarecimiento de los asuntos en litijio.»

Como se ve, este artículo autoriza al Tribunal para apreciar la prueba con entera libertad i si se cerciora de que los empleados en las declaraciones que yo he presentado, han dicho la verdad, puede considerar esas declaraciones como prueba plena.

Mas aun, como todos los testigos podrian ser obligados a declarar a su tiempo en la forma que el Reglamento prescribe i como entónces el ajente de Chile podrá contra-interrogarlos en la forma que crea conveniente, las declaraciones que en tal caso presten permitirán por sí mismas apreciar con exactitud el grado de veracidad que pueda atribuírseles.

Se objeta tambien que los pocos testigos que no son empleados de la Compañía han prestado declaraciones mui vagas e indeterminadas, limitándose los mas a decir que en varias ocasiones el ferrocarril fué ocupado por uno u otro de los partidos en lucha. Forzosamente tenia que suceder que algunas de las declaraciones que se indican se resintieran de alguna vaguedad e indeterminacion, puesto que las prestan personas estrañas a la Compañía i se refieren a

hechos ocurridos en 1891, que solo podian presenciar los empleados de la Empresa, dadas las restricciones impuestas a la libertad individual en aquella época de trastorno.

Si algunas personas estrañas a la Compañía hubiesen prestado declaraciones perfectamente precisas i concretas, razon habria tenido el ajente de Chile para sospechar de la verdad de ellas.

La vaguedad e indeterminacion de algunas declaraciones, léjos de ser un argumento contra la Compañía, lo es en su favor, porque manifiesta que ella no recurre a medios vedados para producir la prueba que necesita.

Se nos enrostra tambien que es increible que algunos de los testigos puedan asegurar con verdad la exactitud de toda la cuenta presentada, que consta de mas de seiscientas partidas. Esto no tiene nada de estraño, tratándose de empleados de la Compañía, pues éstos, en razon de su empleo, han estado en situacion de conocer con exactitud todos los hechos ocurridos en sus respectivos departamentos, i pueden recordarlos con precision si se les presenta una cuenta o razon ordenada, circunstanciada i completa.

El ajente de Chile manifiesta tambien inconvenientes para aceptar los precios asignados en el reclamo a las maquinarias, material rodante, a las reparaciones i a los demas cargos, por cuanto es menester tomar en cuenta el deterioro causado en el material de la Empresa por el tiempo i el uso lejítimo. A este respecto hacemos presente que los precios cargados en la cuenta son enteramente lejítimos, i que si el Tribunal, por cualquier medio llega a convenirse de que no lo son, está ámpliamente facultado para reducir el monto de la indemnizacion a la cantidad que estime justa.

V

Lejitimidad de la presente reclamacion

Entrando a tratar de la lejitimidad de la presente reclamacion, aceptamos en tésis jeneral la clasificacion que ha hecho el señor ajente de Chile de las diferentes partidas de cargos que forman

nuestro reclamo. Las divide la contestacion en cuatro grandes categorías:

A.—Las que se refieren a sumas adeudadas por conduccion de tropas de un lugar a otro, en la provincia de Tarapacá;

B.—Las en que se consignan las sumas invertidas en reparar los daños causados por las operaciones de la guerra;

C.—Las que se refieren a sumas invertidas en reparar los daños causados por accidentes imprevistos, como desrielamientos i choques; i

D.—Los que tienen por objeto obtener la indemnizacion de los hurtos i de los perjuicios causados por los soldados dispersos o fujitivos.

Ya que en la contestacion se examinan separadamente los cargos comprendidos en cada una de estas categorías, procederémos con el mismo método i claridad.

A.—Respecto a las sumas adeudadas por conduccion de tropas, dice el señor ajente de Chile que ninguna de ellas se debe, por cuanto las concesiones hechas por el Gobierno del Perú a los señores Montero i hermanos, antecesores de la Compañía reclamante, no fueron meramente gratuitas, sino con condiciones tales que llegaron a convertir esas concesiones en verdaderos contratos conmutativos, que son una lei para los contratantes. Desarrollando este argumento, recuerda nuestro contradictor que segun el art. 24 de la concesion de Julio de 1868 el ferrocarril de Iquique quedaba sujeto a las leyes i reglamentos jenerales que se dictaron respecto al arreglo i policia de los ferrocarriles, i agrega tambien que no solo el contrato de 1868, ya citado, sino tambien el de 1869 i el de 1871 obligan a la Compañía a trasportar gratis las tropas, los empleados civiles i militares que viajaran en comision del servicio i las balijas del correo i sus conductores.

Como lo hemos visto, se cita de contrario el artículo 23 del contrato de 1868. Francamente, no acertamos a comprender que atinjencia tengan con el caso actual las leyes peruanas o las leyes chilenas sobre arreglo i policia de ferrocarriles, que tienen que referirse a materias mui diversas de las que ahora se discuten. Es cierto que las concesiones imponen a la Compañía esta obligacion

arriba trascrita. Pero, tambien es cierto que no hai en los contratos ningun artículo que imponga a la Compañía la obligacion de proporcionar trenes especiales al Gobierno cuando i cada vez que éste lo exija. Es cosa mui diversa dar pasaje libre en sus trenes a las tropas, a los empleados civiles i militares i a los conductores de las balijas de correo que despachar diariamente trenes en servicio únicamente del Gobierno. I estos trenes especiales son los únicos que cobra la Compañía, como se ve desde la página 15 hasta la página 36 del memorial; la Compañía no cobra pasajes sino trenes especiales. I no se diga que una i otra cosa son análogas; que cobrar trenes especiales es lo mismo que cobrar muchos pasajes a la vez. Nó, puesto que en un tren que viaja en interes de la Empresa el gasto de carbon i todos los demas son reembolsados en todo o en parte por los viajeros que se sirven del tren i que hacen ese reembolso por medio de los pasajes que pagan; en esos trenes poco importa llevar de balde unos cuantos pasajeros, porque éstos no hacen aumentar en grande escala los gastos de traccion. Esto último no sucede tratándose de trenes especiales despachados solo en interes, del Estado. Hai una diferencia entre dar pasajes en trenes de carrera establecida i dar trenes especiales. Por ejemplo, un boleto de pasaje entre Santiago i San Bernardo vale cincuenta i cinco centavos i un tren especial de Santiago a San Bernardo vale cincuenta pesos. El tener derecho a pasaje libre o conduccion grátis no significa el tener derecho a trenes especiales grátis. Por ejemplo, en Chile el señor jeneral don Manuel Baquedano i los señores miembros del Congreso tienen derecho a pasaje grátis en todos los ferrocarriles del Estado, pero a nadie se le ocurrirá sostener que el jeneral Baquedano i los senadores i diputados tienen derecho a trenes especiales grátis.

Con lo espuesto queda palmariamente demostrado que las concesiones no imponen a la Compañía la obligacion de proporcionar al Estado trenes especiales gratis.

Aquí es oportuno rectificar un error notorio en que ha incurrido el señor ajente de Chile. Dice este funcionario que la Compañía carga al Gobierno nueve viajes que sus trenes hicieron, no en provecho de este último, sino en interes de la Compañía. Esta afir-

macion la apoya nuestro contendor en el certificado del notario señor Martínez Gálvez.

Probablemente por el gran recargo de ocupaciones que pesan sobre nuestro contradictor, éste no ha tenido tiempo de leer con atencion el certificado antedicho. Sólo así se comprende que crea que ese certificado se refiere a *viajes de trenes*, siendo que solo trata i habla de disconformidades entre la cuenta i los libros de la Compañía acerca del *tiempo empleado en los viajes* que los trenes hicieron por orden del Gobierno. En otros términos, lo que ese certificado manifiesta es que en algunas partidas de la cuenta se han cargado al Gobierno horas de mas i en otras partidas horas de ménos.

Errores así, que unas veces perjudican a la Compañía i otras la favorecen, se esplican fácilmente como errores de copia, mui naturales cuando se trata de tantas partidas numéricas.

El agente de Chile concluye esta parte de su argumentacion diciendo que son exajerados los precios que cobramos por esos trenes especiales. Para desvanecer esta observacion nos limitaremos a decir que el precio se ha fijado en conformidad a los gastos incurridos.

B. Respecto a las sumas que cobramos por lo que hemos invertido en reparar los daños causados por las operaciones de la guerra, el señor agente de Chile sostiene que esta clase de perjuicios no dan derecho a indemnizacion alguna, en conformidad a los principios mas elementales del Derecho Internacional. Esta afirmacion hecha en los términos tan jenerales en que la fórmula mi contradictor, está mui distante de ser exacta, como lo vamos a demostrar en seguida.

En las páginas 1 a 7 de la cuenta de perjuicios acompañada al memorial, la Compañía cobra el dinero invertido en reparar los daños causados por las tropas constitucionales, i por las tropas del Presidente Balmaceda, a las locomotoras, coches de pasajeros i carros de carga de nuestro ferrocarril.

Léanse todas esas partidas i se verá que los daños causados a nuestro material rodante no se deben a meras casualidades o accidentes de la guerra; todos ellos se deben a la circunstancia de que

los dos partidos en lucha se apoderaron de esas locomotoras, de esos coches i de esos carros para utilizarlos en las operaciones militares. Si la autoridad pública no hubiese tomado posesion de nuestro ferrocarril i de todo el material rodante, éste no habria sufrido los innumerables perjuicios que sufrió. Por consiguiente, las citas que se hacen de Wharton, de Bluntschli, de Hall i de tantos otros tratadistas de Derecho Internacional son enteramente inaplicables a los daños de que me ocupo.

Para que el Tribunal se convenza de la verdad de nuestra afirmacion, vamos a poner un ejemplo, imitando así el método de los tratadistas.

Todos estos sostienen, v. gr., que cuando una bomba disparada contra un fuerte, cae por casualidad no sobre éste sino sobre una casa vecina, el daño causado por esta no es una injusticia que deba repararse sino una desgracia que hai que soportar, como el estrago de un rayo o de un terremoto.

Ahora bien, ¿será posible igualar el daño causado en una casa por una bomba el daño causado a las máquinas i carros de la Compañía por los choques dispuestos i ordenados en Huara i en Pozo Almonte? Basta un ápice de buen sentido para resolver negativamente esta cuestion.

Es bastante orijinal que el agente de Chile cite en su apoyo a Bluntschli, cuando este autor en el art. 645 bis de su *Derecho Internacional Codificado* se espresa así: «El material de los ferrocarriles, locomotoras, carros para pasajeros o para mercaderias..... los aparatos telegráficos, etc.... pueden ser tomados por la autoridad militar, aun cuando pertenezcan a sociedades privadas o particulares, i pueden ser utilizados para las operaciones *con la condicion* de restituirlos cuando se haga la paz i de INDEMNIZAR A LOS PARTICULARES.»

Como se ve, la cita de Bluntschli por parte del señor agente de Chile ha sido bastante desgraciada.

En las páginas 7, 8 i primera parte de la página 9, se cobran perjuicios causados por los bombardeos de Pisagua el 6 i de Iquique el 19 de Febrero de 1891, salvo una pequeña partida por útiles i

herramientas, consignada en la página 8, que corresponde no al presente grupo B, sino al grupo D. Nos creemos con perfecto derecho para reclamar el abono de esos perjuicios, por cuanto los bombardeos de Iquique i Pisagua se llevaron a cabo sin hacer la notificacion o intimacion que prescriben los mismos testos de Derecho Internacional citados en la contestacion del Gobierno reclamado.

La segunda parte de la página 9 i la primera parte de la página 10 de la cuenta se refieren tambien a partidas correspondientes al grupo D.

La segunda parte de la página 10 i las páginas 11 i 12 de la cuenta especifican las sumas pagadas a las diversas cuadrillas de trabajadores que se ocuparon alternativamente en destruir o reparar la línea férrea segun conviniera a los intereses de uno u otro de los partidos contendientes. Para convencerse de que el Gobierno de Chile debe pagar esas cantidades basta fijarse en que la autoridad pública habia tomado posesion del ferrocarril i por consiguiente esa misma autoridad era la que debía pagar los trabajos de destruccion o reparacion que ella ordenaba, i la verdad es que esa autoridad no pagó esos trabajos únicamente porque no tenia dinero disponible con que hacer el pago. Por otra parte, esos trabajos de destruccion i de reparacion se hacian únicamente en beneficio de la autoridad pública i seria profundamente inmoral que se obligara a la Compañía a cargar con el costo de esos trabajos. Si la Compañía en esa época no los hubiese pagado, ¿hoi se atrevería alguien a sostener que la Empresa tendria actualmente la obligacion de pagarlos?—I porque la Compañía pagó por la fuerza en 1891 los trabajos que el Gobierno de Chile ordenaba en su esclusivo provecho, ¿el ajente de ese mismo Gobierno niega hoi a la Compañía el derecho de reclamar la devolucion de las sumas pagadas?

Lo que he sostenido en el párrafo precedente se aplica tambien a las partidas espresadas en las páginas 13, 14 i 15 que se refieren a jornales pagados por destruccion o reparacion de línea férrea i telegráficas.

En las páginas 10 a 15 de la cuenta se consignan tambien algunas

partidas en que se cobra el valor de útiles i herramientas entregadas al ejército. La lejitimidad de los cobros de esta clase es un axioma del Derecho Internacional moderno.

Desde la página 15 hasta la página 36 se cobran los trenes especiales, materia que ha sido tratada anteriormente.

Por último, en la página 36, la Compañía cobra el agua, la leña i el carbon de patente que el Estado necesitó para apagar la sed de sus soldados i para dar movimiento a los trenes que despachaba de un punto a otro de la provincia. Basta decir en qué consiste este cargo para que nadie pueda dudar de su lejitimidad.

C.—En el reclamo se cobran los perjuicios causados por choques i desrielamientos imprevistos, porque todos los que se verificaron en esa época se debieron única i esclusivamente a las órdenes de las autoridades militares. Para comprobarlo vamos a recordar algunos de esos casos. La autoridad militar ordenó, como medida de precaucion, que los trenes viajaran sin luces i que los maquinistas no hicieran señales por medio del pito, lo que trajo como resultado inmediato un choque en Molle el 20 de febrero de 1891, en el cual las locomotoras números 27 i 31 quedaron completamente inutilizadas. Anteriormente, el día 6 de ese mismo mes, la locomotora No. 58 se desrieló en Huará a causa de haber sido obstruida la línea por los partidarios del Congreso i el oficial que iba en esa máquina exijió al maquinista Mateluna que siguiera adelante, i como éste respondiera que le era imposible hacerlo, puesto que la locomotora estaba desrielada, el oficial en el acto mató de un balazo al maquinista. Con este suceso quedaron todos los maquinistas notificados de que debian hacer cuanto se les mandara sin preocuparse mucho ni poco de la seguridad de sus trenes. I a pesar de esto el señor ajente de Chile se atreve a sostener en una parte de su contestacion que los deterioros que esperimentó el material rodante se deben únicamente a descuidos de los maquinistas, fogoneros i demas empleados de la Empresa.

D.—Creo que en la Cuenta no hai otra partida que se refiera a hurtos cometidos por los soldados que las de £ 17-11-0 i de £25 que se ven en las páginas números 8 i 9. Hai algunas de poca cantidad que se refieren a daños causados por los soldados en edi-

ficios de la Compañía que fueron convertidos en cuarteles. Todas estas partidas valen tan poca cosa que no vale la pena de disertar largamente acerca de ellas i conviene mas confiarlas únicamente al buen criterio del Tribunal.

Estudiada así la cuenta que acompaño al memorial, se ve que la inmensa mayoría de las partidas de que consta es de una lejitimidad indisputable i se comprende que el agente de Chile haya evitado el exámen minucioso de la cuenta, para ir a buscar su defensa en una série interminable de citas que no hacen al caso.

VI

Observaciones especiales relativas a la ocupacion de ferrocarriles

El señor agente de Chile entra en seguida a demostrar que los ferrocarriles no pueden equipararse, cuando pertenecen a particulares a los demas bienes de éstos; que el Estado tiene el derecho de ocuparlos i de administrarlos de una manera prudente, en cuanto las necesidades de la guerra lo permitan, i cita en su apoyo la opinion de Bluntschli, artículo 645 bis, la de Calvo, comentando la de M. Laurent de Stein, i la de Bonfils, i recuerda la ocupacion de los ferrocarriles franceses por el ejército alemán en 1870 i 1871.

Precisamente son las opiniones de estos autores los que la Compañía cita en apoyo de su reclamacion, porque todos ellos aceptan la obligacion de indemnizar. Me estraña sí que el agente de Chile al citar a Bluntschli, artículo 645 bis, diga que la indemnizacion solo procede en casos raros i escepcionales, siendo que en la edicion Guillaumin de 1881, que es la que tengo a la vista, no aparece esa limitacion.

A los publicistas citados por el señor agente de Chile, agregaré yo otros dos: Fiore i don Ambrosio Montt, fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Chile.

El primero, en su *Derecho Internacional Codificado*, art. 1,067 dice como sigue:

«Tambien estará en sus facultades [habla de los jefes de los ejér-

citos] en pais enemigo someter por la fuerza a los particulares i a las sociedades privadas a ceder todos los objetos de su propiedad que por su naturaleza o su destino, puedan servir para las necesidades de la guerra, *pagándoles la indemnizacion debida* o dejando a salvo su derecho para obtenerla de quien deba satisfacerla.

«Se reputarán tales: el material de ferrocarriles, de los telégrafos, las armas i cuanto sea necesario para el equipo de las tropas.»

Las opiniones de don Ambrosio Montt son análogas i me abstengo por ahora de reproducirlas, porque las supongo mui conocidas por el señor ajente de Chile.

I aquí debemos recordar un hecho de suma importancia para poder apreciar en su justo valor las opiniones de los tratadistas. Tanto Bluntschli como Calvo, Laurent de Stein, Bonfils i Fiore, han escrito sobre esta materia tomando como base de sus estudios el procedimiento del ejército alemán respecto de los ferrocarriles franceses en 1870 i 1871. Pues bien, los alemanes se sirvieron de los ferrocarriles franceses, confiándolos a un personal alemán mui competente i cuidadoso i haciendo el ocupante todos los gastos de traccion con sus propios fondos, procedimiento que es mui diverso del que empleó el Gobierno de Chile con los ferrocarriles de Tarapacá en 1891, ya que esta Empresa tuvo que pagar ella los sueldos, los jornales i todos los gastos de traccion. No tiene, pues, nada de extraño que los alemanes pagaran a los ferrocarriles franceses solo los beneficios de la explotacion i que la Compañía de Ferrocarriles Salitreros cobre en el caso actual no solo algun beneficio por la explotacion, sino tambien i mui principalmente el importe de los gastos en que ha incurrido.

Pasando a otro órden de consideraciones, el ajente de Chile sostiene que el Gobierno que representa tiene el derecho de ocupar gratuitamente los ferrocarriles salitreros de Tarapacá en virtud de los contratos de 1868, 1869 i 1871 i de la aplicacion práctica que las dos partes contratantes hicieron de esos convenios en 1879 i 1880. Recuerda al efecto que el Perú i Bolivia primero, i Chile en seguida, ocuparon en aquella época los ferrocarriles de Tarapacá, llegando Chile hasta administrarlos en su propio provecho

durante quince meses, que ninguno de esos tres Estados pagó por ello indemnizacion alguna a la Compañía i que esta reconoció espresamente a favor de Chile la justicia de este procedimiento en un *Memorandum* publicado por la Compañía en 1883.

Antes de entrar a ocuparnos de este argumento debemos rectificar un error en que en esta parte ha incurrido nuestro ilustrado adversario.

Dice éste que el Gobierno de Chile tuvo en 1879 i 1880 durante quince meses la administracion en su propio provecho de los ferrocarriles salitreros. El hecho no es exacto, pues la administracion de ellos quedó en manos de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú, limitándose el Gobierno de Chile a nombrar un interventor, encargado de vijilar la marcha de este negocio i de pagar con su producido a los acreedores hipotecarios de esos ferrocarriles, representados en aquella época por el que suscribe. El interventor tenia nominalmente la administracion del ferrocarril, pero su verdadera mision era la que acabo de indicar i que cumplió fielmente.

El señor ajente de Chile hace su argumentacion en una forma que deja comprender que la cree absolutamente incontestable.

Para sacarlo de este error, nos bastará recordarle que los ferrocarriles de Tarapacá pertenecian en 1879 i 1880 a la *Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú*; que la Compañía aceptó, sí, la lejitimidad del procedimiento, pero no su gratuidad, i si no cobró indemnizacion fué porque, como era compañía peruana, no tuvo confianza en el éxito de ese cobro i le pareció mas conveniente para sus intereses no malquistarse con el Gobierno de Chile; i por último, que estos ferrocarriles pertegecian a la *Nitrate Railways Company* solo desde el 30 de Agosto de 1882. Como se ve, el argumento capital del señor ajente de Chile está mui léjos de ser incontestable, i casi podríamos decir que es completamente infundado.

Con lo anterior queda demostrado que las observaciones especiales relativas a la ocupacion de ferrocarriles, que se hacen en la contestacion, favorecen el derecho de la Compañía, o por lo ménos son infundados.

VII

Cobro de intereses

Como la Compañía cobra intereses a razón del 8% anual, desde el 8 de Agosto de 1891, fecha del primer cobro, el ajente de Chile se defiende diciendo que solo abona intereses el deudor que se constituye en mora, cuando se trata de una cantidad líquida i exigible.

Como V. E. no está obligado a ceñirse en sus fallos a la legislación de Chile, puedo afirmar i afirmo que en equidad el Gobierno de Chile está en mora desde el 8 de Agosto de 1891, día en que se cobró por primera vez la cantidad que es materia de este reclamo, i que el interes debe ser, no el legal, sino el corriente de Chile, que es el que ordinariamente se paga, i con mucho mayor razón en la época presente. Por otra parte, no es justo que el Gobierno de Chile se aproveche de sus propios errores en materia de derecho, i de su tardanza para resolver de un modo u otro los asuntos que se le presentan.

Con lo espuesto anteriormente, la Compañía espera con confianza que el Excmo. Tribunal aceptará en todas sus partes esta reclamación, con el mérito de los antecedentes acompañados o el de la prueba que ofrecemos rendir, i si el Tribunal creyere conveniente decretar algo a este respecto, pido que la prueba sea tomada en Iquique por el funcionario que V. E. designe, por cuanto el traer los testigos a Santiago le impondría a la empresa gastos enormes, que quiero evitar.

HERIBERTO J. GRIFFIN.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile, impuesto del escrito de réplica que se ha presentado en nombre de la sociedad denominada *The Nitrile Railways Company, Limited*, procede, en cumplimiento

del Reglamento, a duplicar por su parte en la reclamacion de dicha sociedad, que lleva el número 34.

Ya que el mandatario de la Compañía ha aceptado el método i orden que seguí en mi escrito de contestacion, procuraré a mi vez no apartarme de él, a fin de mantener el debate en terreno perfectamente claro i despejado.

I—Irregularidades de que adolece el memorial

Las faltas del memorial provienen principalmente de la circunstancia de ser una sociedad anónima la reclamante; pero como el Reglamento no exime espresamente del cumplimiento de sus prescripciones a esta clase de sociedades, hai derecho para exigir la observancia de sus disposiciones, manifestando con la imposibilidad misma de hacerlo, que V. E. las ha considerado sin opcion a los beneficios que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 otorga esclusivamente a los súbditos ingleses.

Debo insistir en la observacion de no estar firmado el memorial, ni prestado el juramento en la forma que el Reglamento exige. Mi honorable contradictor cree que la falta de firma nada significa, por no estar espresamente ordenado por el Reglamento que aquella pieza se presente firmada; i que, no estando tampoco espresamente mandado que un memorial que no se ajusta a las condiciones exigidas por el Reglamento sea desechado, no podria correr esa suerte el memorial de la Compañía reclamante. Agrega que en todas las legislaciones del mundo se permite al demandante corregir los defectos de forma de que adolezca una demanda, i ninguna castiga estas omisiones con la pérdida del pleito.

Para refutar estos razonamientos, me basta observar que todo acto no firmado, en derecho, es como si no existiese. Estoy cierto que el señor Griffin o su abogado no habrán visto jamás en Inglaterra o en Chile aceptar peticiones que no sean suscritas por el que las presenta, por mas que la lei no prescriba espresamente esa formalidad. « Un acto no firmado, dice Laurent, no es un acto, i carece de todo valor; es la firma lo que da el sello al acto i, por consiguiente, la existencia. » (Laurent, *Principes de Droit Civil français*, t. 13, núm. 357). El memorial no firmado i en que no se observan

los requisitos del Reglamento, no puede, por consiguiente, ser considerado como tal memorial, ni servir para el efecto de llevar adelante una reclamacion.

Verdad es que jeneralmente pueden subsanarse los defectos de una demanda seguida ante los tribunales ordinarios; pero esa regla no es absoluta como lo pretende el mandatario de la Compañía reclamante, ni es aplicable al caso actual. Una demanda puede ser modificada, rectificada o adicionada únicamente hasta que el demandado la conteste. Verificado este trámite, queda formado por el mismo hecho, el cuasi contrato de litis contestacion, que no permite a ninguna de las partes alterar o adicionar la demanda o la contestacion sin el consentimiento de la otra.

Esto sucede en los juicios ordinarios; pero en el especialísimo de que se trata hai que considerar una circunstancia que le es exclusivamente peculiar. Todo demandante puede disponer del tiempo que le plazca para deducir su accion. Las personas llamadas a entablar reclamaciones ante este Tribunal Arbitral solo han podido disponer del plazo de seis meses, que espiró el 24 de Abril del presente año. Si la reclamacion se dedujo en un memorial que no era tal con arreglo al Derecho o al Reglamento, no puede dársele despues del 24 de Abril la fuerza i vigor de que careció hasta esa fecha, porque ello equivaldria a prorrogar de hecho el plazo que fijó la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 para que los súbditos británicos pudiesen deducir sus reclamaciones. De aquí es que no hai paridad en el ejemplo que se aduce de lo que pasa en los tribunales comunes. ejemplo que se funda en un hecho que tampoco es del todo exacto como lo dejo demostrado.

Hai, pues, motivo suficiente para insistir en la peticion que formulé en mi contestacion de que este reclamo no sea admitido.

II

Incompetencia del Tribunal

La excepcion de incompetencia del Tribunal que alegué en mi escrito de contestacion se funda en dos motivos principales: ser el reclamante una sociedad anónima; i haber renunciado espresamente

a todo recurso diplomático para hacer valer los derechos que pretendiese tener en contra del Gobierno de Chile.

Con respecto al primer punto, aduce el mandatario de la Compañía diversos motivos, que aunque latamente examinados en otras reclamaciones, será preciso tomar nuevamente en cuenta en homenaje a la importancia de este juicio. Procuraré, sin embargo, no estenderme demasiado en mis observaciones, limitándome a considerar la cuestión únicamente bajo los diversos puntos de vista en que la ha estudiado mi honorable contradictor.

Segun él, ni de la letra ni del espíritu de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 se desprende la consecuencia de no estar comprendidas las sociedades anónimas entre las personas hábiles para entablar reclamaciones. La Convencion no habla en ninguna parte de personas naturales ni de personas jurídicas, lo cual, a juicio del mandatario de la Compañía, significa que el tenor literal de la Convencion es favorable a la opinion que él sostiene.

Declaro que por mi parte no alcanzo a comprender la fuerza de este argumento. Al contrario, creo que por el hecho de que la Convencion no hable de personas naturales i jurídicas, llamando a los beneficios que ella confiere tan solo a los súbditos de S. M. B., queda claramente establecido que solo ha comprendido a aquella clase de personas que pueden ser denominadas «súbditos de S. M. B.» He tenido ya el honor de demostrar en numerosas ocasiones que la palabra *súbdito* no es aplicable a una sociedad anónima, por cuanto ella significa en el lenguaje comun asi como en el jurídico una persona natural. A una entidad ficticia no puede aplicarse el calificativo de súbdito, ni de ella puede decirse, como lo espresa el art. III de la Convencion, que tenga un estado o un carácter neutral, porque estas calidades solo son propias de una persona humana. Una entidad moral no es susceptible de afectos, ni pueden atribuírsele actos de voluntad que la inclinen mas bien en favor de un partido que del otro. No puede, por tanto, ser considerada como neutral, ni achacársele simpatias ideales o positivas en favor o en contra de alguno de los bandos en que se dividió la República de Chile durante el año de 1891.

En la dúplica de la reclamacion núm. 5 ha sido citada una sen-

tencia pronunciada por la Corte de Casacion de Francia en 1860 que consagra en términos concluyentes la teoria que vengo sosteniendo.

El silencio de la Convencion con respecto a las sociedades anónimas, no puede interpretarse como un signo de que se quiso incluirlas entre las personas hábiles para comparecer ante este Tribunal. Toda jurisdiccion excepcional debe interpretarse estrictamente, i no puede considerarse como sometidos a ella sino las personas i las materias expresa i taxativamente determinadas.

Mucho ménos lícito es prescindir de sus términos literales a fin de ocurrir a su espíritu, cuando aquellos son bastante claros para no prestarse a una duda fundada, o cuando habiendo duda lejitima se trata de ampliar el alcance de sus disposiciones, en lugar de restringirlo a los precisos límites en que toda duda desaparezca.

Pero me parece que, aun siguiendo a mi contradictoren el terreno en que ha tratado de colocarse, será fácil tarea demostrar que no hai razon para presumir que los negociadores de la Convencion de 1893 pensaron en comprender a las sociedades anónimas entre las personas hábiles para deducir reclamaciones. Desde luego, se presenta al espíritu una observacion que no se puede refutar. Si los negociadores de la Convencion consideraron que las sociedades anónimas estaban incluidas entre los que podian reclamar, ¿por qué no lo dijeron clara i espresamente? ¿Ignoraban acaso que en materia de jurisdiccion escepcional todo lo que no está espresamente incluido, de hecho queda excluido? ¿No habian visto que las convenciones análogas celebradas anteriormente, cuando habian querido comprender a las sociedades anónimas, habian tenido cuidado de decirlo espresamente, puesto que no las consideraban incluidas en los términos *súbditos o ciudadanos*?

Pero, se arguye diciendo que las legislaciones modernas equiparan a las personas naturales con las simplemente jurídicas, para todos los efectos que no nazcan de relaciones de familia o que repugnen a la naturaleza de estas últimas. El hecho es efectivo; dentro de cada Estado, las leyes tratan de dar vida a las sociedades i de vigorizar su existencia; pero ninguno ha podido pretender que las creaciones de sus leyes sean reconocidas i puedan ejercitar

derechos mas allá de los confines del territorio en que esas leyes imperan. El ser humano no debe su existencia a la lei, i donde quiera que vaya lleva consigo el sello de su propia personalidad: una corporacion o sociedad no tiene otra existencia que la que le presta la lei, i esa de nada le sirve allí donde la lei no rige. Por eso es que cuando un gobierno extranjero tiene interes en que las personas jurídicas puedan hacer valer derechos en otro país, recurre a los convenios internacionales para conseguir su objeto. De este modo la Gran Bretaña ha obtenido el reconocimiento de sus sociedades en alguno de los países vecinos; i otro tanto han hecho los gobiernos de varias naciones europeas.

No me detendré a examinar los argumentos que se han deducido para probar que las sociedades anónimas tienen una nacionalidad, porque jamás he sostenido lo contrario, i porque esta cuestion es estraña a la materia que estamos debatiendo. No se trata ahora de saber si una sociedad anónima tiene o nó una nacionalidad, sino únicamente de la existencia extraterritorial de la sociedad misma. Prescindo, por consiguiente, de todo lo que a este respecto se ha servido esponer mi honorable contendor.

Tampoco creo necesario discutir acerca de la diversa intelijencia que cada una de las partes da a la disposicion del art. V. del Reglamento en lo que concierne a sociedades anónimas. Es V. E. mismo quien lo ha dictado, i quien está llamado a aplicarlo en su verdadero i jenuino sentido. No puedo, sin embargo, prescindir de una observacion hecha por el representante de la Compañia.

Cree el señor Griffin que seria absurdo sostener que las sociedades colectivas i en comandita pudieran deducir reclamaciones, i que no tuvieran el mismo derecho las anónimas, siendo así que todas son personas jurídicas ante la lei. A esta observacion contestaré con el Reglamento. El art. V reconoce el derecho que tienen para entablar reclamaciones los súbditos de S. M. B., mas no las sociedades o corporaciones, i por eso es que prescribe que cuando estas se presenten a reclamar, indiquen quienes son los miembros o accionistas de ellas, espresando el nombre, apellido i residencia de cada uno, su estado de súbdito ingles i su carácter de neutral. Son los socios individualmente considerados los que van a ser oidos, i

no la colectividad de ellos, que en cuanto forma una sociedad o corporacion, es como si no existiese. De otra manera no podria explicarse el objeto de la disposicion consignada en el art. V del Reglamento.

Con esto, termino por mi parte esta cuestion tan largamente debatida; i entro a estudiar el segundo capítulo en que he fundado la incompetencia del Excmo. Tribunal para conocer de la presente reclamacion.

Variadas i de diversa índole son las objeciones opuestas por la Compañía reclamante al segundo fundamento alegado por mi parte para probar la incompetencia del Tribunal. Con el testeo de los diversos contratos que el Gobierno del Perú celebró con *Montero Hermanos*, al hacerles la concesion privilegiada de construir los ferrocarriles de Tarapacá, comprobé que estos habian renunciado para sí i sus sucesores a todo recurso nacido de la vía diplomática tendente a hacer valer cualquiera clase de derechos que pretendieran tener en contra del Gobierno. El representante de la Compañía ha aceptado, como no podía ménos de hacerlo, la efectividad de aquel compromiso que liga hoi a la *Nitrate Railways Co.* con el Gobierno de Chile, como ligaba ayer a *Montero Hermanos* i a la *Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros* con el Gobierno del Perú.

Sostiene, sin embargo, que es lícito a la Compañía, apesar de aquella terminante estipulacion, ocurrir a un tribunal internacional que debe su existencia a un pacto diplomático, haciendo llegar su reclamacion hasta él por la misma vía diplomática que ha sido el autorizado conducto de todas las demas reclamaciones que penden del conocimiento del Tribunal.

Para arribar a esta conclusion, sienta las siguientes premisas: 1.º Que la reclamacion misma no es un recurso diplomático, ni los señores árbitros que deben fallarla tampoco tienen el carácter de agentes diplomáticos; 2.º Que los recursos diplomáticos escludidos en el contrato de *Montero Hermanos* con el Gobierno del Perú son los entablados directamente de Gobierno a Gobierno, muchos de los cuales se han desenlazado con el empleo de la fuerza; 3.º Que, habiendo tenido su oríjen el sistema del arbitramento inter-

nacional en el tratado de Washington de 8 de Mayo de 1871, los diversos contratos de Montero Hermanos con el Gobierno del Perú, no han podido tener por objeto evitar que los juicios que surjieran entre los contratantes fueran sometidos al conocimiento de un tribunal que entónces no existia ni se sabia quehubiera de existir mas tarde; 4.º Que el artículo 22 del contrato de 11 de Julio de 1863 que sometió al conocimiento de árbitros nombrados por las partes las cuestiones que surjiesen entre ellas, tiene la limitacion de referirse solo a las cuestiones técnicas a que diese lugar el cumplimiento del contrato de 11 de Julio de 1868, debiendo las demas ser resueltas por los tribunales de derecho, a quienes hoi subroga el internacional ante el cual se ha presentado el reclamante; i 5.º Que, al ocurrir ante este Tribunal, no ha infringido la Compañía la estipulacion en virtud de la cual se sometió a las leyes del pais, porque la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 es tambien una lei de la República de Chile.

Antes de hacerme cargo de cada uno de estos razonamientos, quiero por mi parte llamar la atencion de V. E. a una observacion de carácter jeneral. Es sabido que las Repúblicas sud-americanas han tenido la desgracia de estar sometidas a frecuentes trastornos políticos.

Algunas de ellas, i especialmente el Perú, han vivido durante largos períodos en estado permanente de guerra civil. A causa de esto, han sido numerosas las reclamaciones que contra estos paises han elevado extranjeros que se decian perjudicados, ocurriendo a la proteccion de sus Gobiernos para obtener por la vía diplomática la indemnizacion que reclamaban. Las jestioncs pacíficas al principio, solian dejenerar en polémicas ardientes, i en mas de una ocasion se llegó a la amenaza i hasta al empleo de la fuerza. Si las reclamaciones se hubieran mantenido en términos discretos i equitativos, talvez no habria sido difícil encontrar el medio de arreglar estas diferencias; pero jeneralmente se exajeraban los perjuicios i se cobraban sumas que excedian, no una, sino diez o mas veces a la cuantia del daño experimentado. Los Gobiernos americanos resistíanse a pagar mas de lo que estimaban como justo, i de aquí nacian cuestiones del carácter mas odioso. Un americano distin-

guido, el señor Torres Caicedo, citado por Calvo, pinta esta situación con las siguientes palabras: «Hai extranjeros que sufren perjuicios a consecuencia de alguna de estas revoluciones tan frecuentes en la América latina; naturalmente solicitan que se les indemnice: si han perdido el valor de un peso, reclaman ciento. Su ministro apoya su reclamacion; viene en seguida la historia de las escuadras: protesta del Gobierno injustamente amenazado, pero pago inmediato o promesa de pago de parte de este Gobierno, al cual se cierra la boca mostrándole la de los cañones » (Calvo, *Le Droit International*, t. III, § 1290.)

Los Gobiernos americanos han procurado poner coto a una situación tan molesta, por lo ménos en los casos en que hacian concesiones a extranjeros o contrataban con ellos. Para este efecto, han consignado en las leyes, decretos i contratos, la condicion de que el contratista o concesionario extranjero renunciaria al derecho de ocurrir a la vía diplomática, sometiendo sus cuestiones con el Gobierno a la jurisdiccion de la justicia ordinaria o de jueces árbitros designados por las partes. Tal es el oríjen de la cláusula que contiene cada uno de los tres contratos celebrados con Montero Hermanos para la construccion de las diversas líneas férreas de Tarapacá, por la cual no se permite la trasmision a extranjeros de los derechos conferidos a esos señores, sino bajo la condicion de quedar los concesionarios sujetos a las leyes del pais, *sin poder hacer uso de ningun recurso diplomático*. Tal es tambien el oríjen de una cláusula semejante que se lee en las concesiones hechas por Chile a varios empresarios de ferrocarriles, i el de la lei chilena de 28 de Agosto de 1881, que determina que deben considerarse como chilenas, para todos los efectos, las empresas que se encarguen de la construccion de una obra pública o que sean concesionarias de cualquiera clase de derechos.

El propósito claro i manifiesto de estas disposiciones no es otro que obligar a los extranjeros que contratan en los paises en que ellas se han dictado a renunciar a la proteccion del respectivo Gobierno, evitando toda cuestion diplomática i sometién dose a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios del pais. Pues bien: la presente reclamacion va clara i abiertamente dirigida contra ese pro-

pósito, desde que pretende sustituir el tribunal establecido en el contrato, i en último caso los tribunales ordinarios, por este Tribunal de carácter internacional, que debe su existencia a un tratado nacido de los recursos diplomáticos que se han hecho valer por los mismos reclamantes ante el Gobierno de S. M. B. Importa, por consiguiente, la actual reclamacion una violacion desembozada de las cláusulas de los diversos contratos que Montero Hermanos celebraron con el Gobierno del Perú, las cuales obligan en todas sus partes a la *Nitrate Railways Company*, que les ha sucedido en sus diversos derechos i obligaciones.

Es cierto que la reclamacion, tal como ha sido presentada ante V. E., no puede ser llamada recurso diplomático, ya que V. E. no ejerce principalmente funciones diplomáticas, pero esta circunstancia no puede constituir un argumento serio en contra de la proposicion que vengo sosteniendo. No se trata de saber si la reclamacion formulada en el memorial es en sí misma un recurso diplomático, sino únicamente de establecer si ha llegado o podido llegar a conocimiento de V. E. sin que los reclamantes hiciesen uso de un recurso diplomático. He ahí la cuestion; i esto es cierto de que nadie podrá contestarla afirmativamente. Para que el Gobierno de la Gran Bretaña tomara bajo su patrocinio la presente reclamacion, así como las demas que se han traído ante este Tribunal, ha sido menester que la Compañía misma invocase ese patrocinio, i ocurriese al Foreign Office pidiéndole su proteccion. Tengo a la vista la lista de reclamaciones que el señor ministro residente de la Gran Bretaña pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; i en ella aparece ocupando especial lugar la de los Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá, por creer el señor ministro que no está incluida en ninguna de las cuatro categorías en que distribuye las llamadas « Reclamaciones terrestres. »

La Convencion de 26 de Setiembre de 1893 fué el resultado de las jestioniones diplomáticas entabladas por el Gobierno de la Gran Bretaña ante el Gobierno de Chile; i esas jestioniones se iniciaron i prosiguieron hasta su conclusion, porque los damnificados, entre los cuales figura la *Nitrate Railways Company*, ocurrieron ante el Gobierno de S. M., pidiendo proteccion i amparo en contra del

Gobierno de Chile, que es precisamente lo que se obligó a no hacer la misma Compañía, cuando se constituyó en cesionaria de los contratos que el Gobierno del Perú había celebrado con Montero Hermanos.

Si esos contratos son una lei para las partes que los celebraron, *Pacta dant legem contrahentibus*, es evidente que la Compañía reclamante no pudo ocurrir ante el Gobierno Británico en busca de amparo, i que debió someterse a la jurisdiccion del tribunal especial que el mismo contrato constituia, o a los tribunales ordinarios del país. La prohibicion libremente aceptada por ella de hacer uso de recursos diplomáticos ha sido abiertamente violada; pero, como los actos ilegales o injustos no pueden conferir derechos, ni destruir obligaciones contraidas lejitimamente, la situacion de la Compañía no ha cambiado, i subsiste en pie su obligacion de no ocurrir a la via diplomática i el consiguiente deber de no presentarse ante un Tribunal que debe su existencia a un pacto internacional, fruto de largas i meditadas jestioniones diplomáticas.

Pero se dice que los contratos celebrados entre el Gobierno del Perú i Montero Hermanos no han podido privar a los cesionarios de los derechos de estos últimos, de la facultad de ocurrir ante un tribunal como el presente, porque a la fecha en que fueron celebrados no se conocian tribunales de esta especie, habiendo sido el primero el que funcionó en Jinebra en 1872 para fallar las cuestiones suscitadas entre la Gran Bretaña i los Estados Unidos nacidas de la guerra de separacion, i especialmente la famosa del *Alabama*.

Suponiendo efectivo el dato que sirve a mi contendor de punto de partida, ello en nada amenguaria la fuerza del argumento que se deduce de las cláusulas de los contratos celebrados entre Montero Hermanos i el Gobierno del Perú. Basta i sobra el hecho de haber ocurrido la Compañía reclamante a la via diplomática con el objeto de obtener la formacion de este tribunal, para convencerse de que no ha observado la estipulacion de los artículos de los contratos que le vedaban intentar ese recurso. Las jestioniones diplomáticas deben necesariamente llegar a un desenlace; i este pudo ser el rechazo de la indemnizacion, su aceptacion lisa i llana en todo o en parte, o el sometimiento de la cuestion a un fallo arbitral. Si se

eliminan estos medios de arribar a un acuerdo, la dificultad habria quedado sin otra solucion posible que la amenaza o el empleo de la fuerza. Se llegó a la constitucion del tribunal arbitral como el medio mas adecuado i equitativo de poner término a la discusion empeñada. Fuera o no conocidos los tribunales de arbitraje internacional en los años de 1869, 1870 i 1871, fecha de los contratos invocados por mi parte, el hecho es que por estos contratos se renunció a todo recurso diplomático, i por lo tanto a toda solucion que naciera de dicho recurso. La incompetencia de este Tribunal nace, pues, de un pacto espreso, es decir, de una lei que prevalece sobre cualquiera otra lei en cuanto no contraríe el derecho o el orden público.

No está demas, sin embargo, manifestar que el representante de la Compañía está en un error profundo al creer que el primer tribunal de arbitraje internacional que ha funcionado en el mundo fué el que se reunió en Jinebra en 1872 para juzgar las diferencias entre los Estados Unidos i la Gran Bretaña, conocidas bajo el nombre jenérico de «reclamaciones del *Alabama*». Tribunales como el de Jinebra, encargados de fallar cuestiones entre nacion i nacion han sido conocidos desde la mas remota antigüedad. No necesito hacer sobre el particular una disertacion histórica, bastándome remitir al contendor a cualquiera de los autores que han escrito acerca del arbitraje internacional. Kamarowsky hace mencion de tribunales que resolvieron conflictos entre los antiguos déspotas del Oriente, de los que resolvieron en Grecia acerca de las disenciones con los bárbaros o entre los mismos griegos, i continúa relatando la historia de estos tribunales al traves de la época romana i de la edad media hasta llegar a los tiempos modernos i al tribunal de Jinebra.

Pero tribunales como el constituido por la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 son sin duda de oríjen mas reciente. Son los Estados Unidos quienes han dado el ejemplo de ocurrir a comisiones mistas para resolver las cuestiones que surjen entre una nacion i los ciudadanos de otra. El 11 de abril de 1839 se celebró un tratado entre los Estados Unidos i Méjico, segun el cual diversas reclamaciones de indemnizacion de ciudadanos de Estados

Unidos contra Méjico fueron sometidas a la decision de una comision mista compuesta de cuatro miembros. En caso de empate el rei de Prusia i en su defecto, la reina de Inglaterra, i a falta de ésta, el rei de los Países Bajos, debian ser invitados a designar el tercer árbitro [Calvo, t. III, § 1733].

Despues de este tratado celebraron los Estados Unidos la Convencion de 10 de setiembre de 1857 con Nueva Granada, i con Colombia la de 10 de febrero de 1864; la de 4 de febrero de 1859 con el Paraguai; la de 2 de julio de 1860 con Costa Rica; la de 25 de noviembre de 1862 con el Ecuador; la de 12 de enero de 1862 i 4 de diciembre de 1868 con el Perú; la de 25 de abril de 1866 con Venezuela i de 4 de julio de 1868 con Méjico. «Segun el espíritu de estos tratados, dice el autor de quien tomo estos datos, las comisiones mistas son en un cierto modo una creacion jurídica complementaria ya para los tribunales ordinarios, ya para la diplomacia. Para los tribunales, en cuanto se trata simplemente de los litijios particulares; para la diplomacia, sobre todo en el caso en que las contestaciones tocan mas inmediatamente a los Estados propiamente dichos.» (Kamarousky, *Le Tribunal International*, L. 2.^a, Secc. 2.^a, ch. III.)

De esta esposicion se colije fácilmente que las comisiones mistas internacionales, aun cuando no se compongan de agentes diplomáticos, traen su oríjen de jestioness diplomáticas i participan del carácter diplomático no solo por su oríjen, sino ademas por la naturaleza de sus funciones i por las fuentes a que deben acudir para dictar sus resoluciones, que no son otras que las mismas del Derecho Internacional.

Es, pues, un hecho indiscutible que con anterioridad a los contratos celebrados por el Gobierno del Perú con Montero Hermanos, se habian celebrado numerosos pactos internacionales análogos a la Convencion de 1893; i aquel Gobierno, no podia ignorarlo desde que él mismo habia celebrado con los Estados Unidos el de 12 de enero de 1863, e indudablemente estaba elaborando el que se perfeccionó el 4 de diciembre de 1868, cuando estipuló con Montero Hermanos el contrato cuyas bases estan contenidas en el decreto de 11 de julio de ese mismo año. No hai razon, por consiguiente,

para afirmar que el Gobierno del Perú no pudo prever al contratar con Montero Hermanos, que el recurso a la vía diplomática pudiera tener por resultado la constitucion de un tribunal arbitral. Al contrario, lo natural es que quiso evitar precisamente ese resultado, como que la fuerza de las circunstancias lo obligaban en aquel mismo tiempo a aceptar la constitucion de un tribunal arbitral para fallar reclamaciones de ciudadanos americanos.

El art. 23 del decreto de 11 de Julio de 1868 en que el Gobierno del Perú hizo la primera concesion a Montero Hermanos, sometió a la decision de una comision arbitral todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre los contratantes. El agente de la Compañía reclamante pretende restringir el alcance de esta estipulacion; i sostiene que el tribunal de árbitros que ella crea no está llamado a fallar sino cuestiones técnicas, puesto que debe componerse de dos ingenieros, i en caso de discordia de un tercero dirimente.

Esta interpretacion del contrato es enteramente antojadiza. La cláusula 23 no hace la distincion entre cuestiones técnicas i cuestiones de derecho, que supone el contendor. «*Todas las cuestiones*, dice, que se susciten entre el Gobierno i la Empresa se someterán a la decision de una comision compuesta de un ingeniero del Estado i otro de la Empresa, i en caso de discordia se nombrará de comun acuerdo un tercero dirimente, cuya resolucion será definitiva». Si esta cláusula dispone testualmente que sean sometidas al juzgamiento de la Comision todas las cuestiones que se susciten entre el Gobierno i la Empresa, no se comprende como pueda sostenerse que la frase *todas las cuestiones*, de carácter tan amplio e ilimitado, no se refiere sino única i exclusivamente a las cuestiones técnicas.

Que se ocurriese a ingenieros para elejirlos como jueces, se explica fácilmente por la circunstancia de que era natural pensar que las cuestiones que hubieran de surgir tratándose de una Empresa de ferrocarriles fueran mas propias de la profesion de ingeniero que de la de abogado. Un ingeniero posee ademas los conocimientos necesarios para fallar por si solo la mayor parte de las cuestiones; i en estos paises ha sido mui frecuente la constitucion de tribunales de ingenieros que tanto resolvian las cuestiones técnicas como fallaban las cuestiones de derecho. Si ha habido un

caso en que el Gobierno del Perú i la Empresa de los Ferrocarriles Salitreros han llevado una cuestion legal ante los tribunales ordinarios. nada puede significar ese hecho con respecto al verdadero sentido de la cláusula 23, desde que pudieron mediar motivos especiales que aconsejasen a las partes a prescindir por esa vez del arbitraje convenido. Pero basta imponerse de los antecedentes de ese juicio para comprender el motivo porque la Compañía ocurrió en aquella ocasion a los tribunales ordinarios. La Compañía intentó una querrela posesoria, i juicios de esta clase no pueden ser materia de compromiso. Ademas, la accion deducida afectaba a las tres empresas de ferrocarriles de Tarapacá, o mas bien dicho a las tres concesiones otorgadas a Montero Hermanos; i la constitucion del tribunal arbitral solo estaba prevista en la primera de las concesiones aludidas, como con perfecta razon lo observa el mandatario de la Compañía reclamante. Nada prueba, por consiguiente el antecedente citado tomando en cuenta la naturaleza i estension del juicio iniciado por la Empresa de los Ferrocarriles Salitreros en 1878. Téngase ademas presente que las partes pudieron renunciar a su derecho, prorrogando la jurisdiccion de los tribunales ordinarios.

La Compañía reclamante estaba obligada en virtud de sus contratos a someterse a las leyes del pais, lo que importa el deber de observarlas i de ser juzgado con arreglo a ellas. Cree, sin embargo, que puede eludir el cumplimiento de esta obligacion bajo el pretesto de que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 es tambien una lei chilena, a la cual presta obediencia por el hecho de comparecer ante el Tribunal que ella ha instituido.

La Convencion de 26 de Setiembre es una lei en el sentido jenérico de la palabra, asi como lo son las leyes de la guerra i las leyes internacionales. No es una lei en el sentido político i constitucional, i mucho ménos en aquel que los contratantes le atribuyeron al estipular que, si la concesion hecha a Montero Hermanos era trasferida a extranjeros, estos quedarian sujetos a las leyes del pais, sin poder hacer uso de ningun recurso diplomático.

Un tratado, en jeneral, puede estimarse como una lei, asi como cualquier pacto entre particulares tiene la fuerza de una lei. El

tratado es obligatorio para los Estados que lo celebran: entre ellos la obligacion es principal i directa. Para los ciudadanos constituye solamente obligaciones secundarias e indirectas, porque no son ellos los obligados a darle cumplimiento. Su deber está limitado a no poner dificultades para que el Gobierno cumpla sus obligaciones, i coadyuvar a ese cumplimiento cuando les corresponde desempeñar algun papel para tal objeto.

Pero no es una lei en el sentido constitucional i jurídico. La Constitucion de Chile determina en sus arts. 27 i 28 las resoluciones de carácter jeneral que son materia de lei; i entre ellas no están comprendidos los tratados que el Gobierno celebre con las naciones extranjeras. El art. 73 que trata de las facultades del Presidente de la República enumera bajo el numero 19 la de «mantener las relaciones políticas con las potencias extranjeras, recibir sus Ministros, admitir sus cónsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir i firmar todos los tratados de paz, de alianza de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos i otras convenciones.» Como se ve, es el Presidente de la República quien celebra los tratados: la Constitucion se limita a disponer que, antes de ser ratificados se presenten a la aprobacion del Congreso. Este no puede modificarlos, i los senadores o diputados carecen en esta materia del derecho de iniciativa que les confiere la Constitucion para la formacion de las leyes. No se observan pues, con respecto a los tratados las disposiciones consignadas en los arts. 31 a 42 de la Constitucion relativos a la manera de elaborar las leyes, i mucho ménos las que se refieren a modificaciones o alteraciones hechas en una u otra Cámara. El Presidente de la República es quien celebra los tratados: la mision del Congreso se reduce a aprobarlos o rechazarlos. El tratado no se lleva a efecto ni se perfecciona en la misma forma que la Constitucion ha señalado para la formacion de las leyes: no es, por consiguiente, una lei en el sentido constitucional i jurídico de la palabra.

Con mucha mayor razon puede sostenerse que tampoco es una lei en el sentido que a esta palabra se atribuyó en los decretos que establecieron las bases de los contratos celebrados entre el Gobierno del Perú i Montero Hermanos.

Es sabido que los contratos no se interpretan de la misma manera que las leyes, aun cuando sean comunes a los unos i a las otras muchas reglas de la hermenéutica legal. No es posible sustituir una interpretacion arbitraria al testo claro de una lei positiva i por lo tanto, no es permitido eludir la letra de la lei a pretesto de consultar su espíritu. De allí el axioma juridico: *Verbis legis tenaciter inhærendum*. En materia de contratos sucede precisamente lo contrario. Para su aplicacion es menester tomar en cuenta, mas que las palabras, la voluntad de los contratantes. *In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit*, establecia una lei romana. El principio ha sido repetido en diversas formas que constituyen otros tantos axiomas juridicos. *Melius est sensum quam verba amplecti*, dice uno; *sensum non verba considerare debemus*, dice otro. Los Códigos modernos han reconocido a su turno esa base capital de interpretacion de los contratos; i el art. 1560 de nuestro Código Civil le concede la misma primacia.

Pues bien: sostengo que cuando el Gobierno del Perú estipuló con Montero Hermanos que en caso de que los concesionarios trasmitiesen sus derechos a extranjeros, quedarian éstos sujetos a las leyes del pais sin poder hacer uso de ningún recurso diplomático, ámbos contratantes tuvieron la intencion i el manifiesto propósito de referirse a las leyes comunes vijentes en el pais, fueran estas sustantivas o meramente procesales. Sostengo todavia que no solo fué ese el espíritu e intencion de ámbos contratantes, sino que uno i otro tuvieron el deliberado propósito de evitar que pudiera iniciarse, seguirse o terminarse por la vía diplomática cualquiera cuestion que entre ellos surjiese. Nada importaba para el caso la manera cómo pudieran desenlazarse las jestioncs iniciadas por aquel camino: lo mismo significaba que ellas condujesen a una imposicion de la fuerza como a la constitucion de un tribunal de arbitramento, porque en ámbos casos seria evidente la violacion de la cláusula que vedaba a los cesionarios intentar un recurso diplomático en favor de sus pretensiones.

He manifestado ya como las naciones americanas se sentian recelosas del resultado de las reclamaciones de súbditos extranjeros, que los Gobiernos de Europa i Estados Unidos amparaban en el terreno

diplomático, llegando en ocasiones a los términos de la amenaza hasta de la imposición de la fuerza, como había acontecido en Chile en 1859 respecto de la indemnización solicitada por el súbdito inglés Mr. Whitehead. El Perú se había visto, a su turno, precisado en 1863 a celebrar una convención con el gobierno de Estados Unidos para resolver reclamaciones del mismo carácter; i tenía pendientes de su consideración otras presentadas por el mismo Gobierno, que debían desenlazarse por la convención de diciembre de 1868. Basadas o no en hechos verdaderos i en principios reconocidos de equidad, el hecho es que en jeneral tales reclamaciones eran enormemente exajeradas; i no era para nadie un misterio que, si los reclamantes se negaban a ocurrir a los tribunales del país, prefiriendo la acción diplomática, era para evitar la investigación imparcial de la verdad i la reducción a términos moderados i equitativos de las cuantiosas indemnizaciones que pretendían.

Los Gobiernos americanos empezaron a poner coto por los medios que estaban a su alcance al peligroso sistema que se venía estableciendo. El del Perú no tuvo otro móvil que este para consignar el art. 16 del decreto de 11 de Julio de 1868, el 12 del decreto de 18 de Mayo de 1869, i el 15 del de 26 de Octubre de 1871. Accentuó todavía más su deliberado propósito al dictar el decreto de 10 de Febrero de 1879 por el cual se autorizaba la cesión que Montero Hermanos habían hecho de sus concesiones i privilegios a la *Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú*, haciendo notar que esta transmisión se hacía bajo la expresa condición de que los extranjeros cesionarios se sujetasen a las leyes del país sin que pudieran hacer uso de ningún recurso diplomático. I como si esto no fuese bastante, el decreto agregó en su parte dispositiva: «siendo entendido que las compañías o individuos extranjeros con quienes Montero Hermanos han contratado, no ocurrirán en las cuestiones que con el Gobierno se susciten por razón de los derechos i obligaciones que emanen de los contratos primitivos de concesiones, a otras leyes i tribunales que los de la República, sin que en ningún caso ni circunstancias les sea permitido recurrir a la vía diplomática, a la que espresamente renunciaron en los mencionados contratos Montero Hermanos, por sí, sus herederos,

representantes i contratistas en la trasmision de la propiedad o dominio de los dichos ferrocarriles del departamento de Tarapacá.» Apénas se concibe que pudiera espresarse con mayor enerjía i conviccion el sentido de las cláusulas en que Montero Hermanos se sometian a las leyes del pais i renunciaban a todo recurso diplomático.

Era a las leyes del Perú, que han sido reemplazadas por las de Chile i a los tribunales que esas leyes establecen a las que se sometieron los concesionarios primitivos de los ferrocarriles de Tarapacá i su sucesor la *Nitrate Railways Co.*, que aceptó la cesion con todos los derechos i obligaciones que emanaban de los contratos de 1868, 1869 i 1871. Renunciando a la intervencion diplomática. renunciaron a toda jurisdiccion creada en virtud de jestion es que tuviesen aquel orijen.

I si la voluntad de los contratantes no hubiera sido esa, es evidente que las cláusulas mencionadas no tendrian sentido ni aplicacion posible. Si por leyes del pais deben entenderse convenciones como la de 26 de Setiembre de 1893, era perfectamente inútil estipular que los extranjeros cesionarios del privilejio del ferrocarril quedasen sometidos a esas leyes. Por el solo hecho de callar, deberia entenderse tácitamente establecido esa sujecion puesto que se trataba de bienes inmuebles que, segun los principios del Derecho Internacional privado, se rijen siempre por las leyes del pais en que dichos bienes estan situados. *Lex rei sitæ*.

Lo que se propuso el Gobierno del Perú i lo que fué aceptado por Montero Hermanos i sus sucesores, fue precisamente que sus cuestiones fuesen resueltas por los árbitros que designaban, o por los tribunales de la Nacion, con prescindencia absoluta de todo tribunal extraordinario o que debiese su orijen a recurso diplomático. Lo que ámbos pretendieron i ajustaron fué que las cuestiones que surjiesen entre ellos se fallasen conforme a las leyes del pais, tanto en lo procesal como en lo sustantivo. Los tribunales internacionales no son los creados por las leyes del Estado, ni sus miembros son nombrados conforme a las reglas constitucionales del pais en que funcionan. Sus fallos no se ajustan tampoco a las leyes de la Nacion, sino a principios jenerales de Derecho, i sobre todo de

Derecho Internacional. El Tribunal Anglo-chileno, a quien tengo el honor de dirijirme, decidirá las reclamaciones, no en conformidad a las leyes chilenas, sino con arreglo a los principios del Derecho Internacional i a las prácticas i jurisprudencia establecidas por los Tribunales análogos modernos de mayor autoridad i prestigio, porque así lo establece el art. V de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. ¿Cómo podria entónces sostenerse que la Compañia reclamante cumple su obligacion de sujetarse a las leyes del pais, en el preciso momento en que se va a hacer caso omiso de dichas leyes?

Si para interpretar un contrato debe atenderse al contesto jeneral de las diversas cláusulas de que consta, con mayor razon debe entenderse una cláusula sola de manera que sus diversas partes se armonicen para hacér resaltar el pensamiento comun de los contratantes. En las cláusulas a que me refiero de los tres contratos que el Gobierno del Perú celebró con Montero Hermanos, aparecen ligadas estas dos ideas: que los extranjeros cesionarios deben sujetarse a las leyes del pais, i que no podran hacer uso de ningun recurso diplomático. Las dos frases se completan mutuamente i se esplican la una por la otra. Las leyes del pais son aquellas que no traen su orijen de un recurso diplomático; i estos recursos quedan prohibidos, desde que los cesionarios se obligan a someterse a las leyes del pais, es decir, a la Constitucion, a los tribunales establecidos, a las leyes procesales i a las leyes sustantivas que rijen a la Nacion.

Si el juez debe interpretar la Convencion i ordenar su cumplimiento en conformidad a la intencion de las partes, teniendo presente el objeto que ellas se han propuesto alcanzar, como lo indica Demolombe al comentar el art. 134 del Código Civil frances, me parece fuera de toda duda que V. E. se ha de considerar incompetente para conocer de este juicio.

Las circuntancias en que fueron celebrados los pactos entre el Gobierno del Perú i Montero Hermanos; la inutilidad de la cláusula en que se estipula la renuncia de todo recurso diplomático i el sometimiento absoluto a las leyes del pais si convenciones como la de 26 de Setiembre de 1893 pudieran ser consideradas como una

de las leyes a que se han referido los contratantes: la necesidad de que las palabras de un pacto se entiendan de una manera que produzcan algun efecto conforme al principio jurídico: *Verba intelligenda sunt ut aliquid operentur*; la enerjia con que el Gobierno del Perú ha insistido una i otra vez en manifestar que quedaba cerrado a los cesionarios todo recurso diplomático e impedidos éstos de ocurrir a otras leyes i tribunales que los de la República; i el hecho de que este Tribunal no es Tribunal de la República ni va a juzgar conforme a las leyes del pais; todo esto es mas que suficiente motivo para establecer que obsta a la jurisdiccion de V. E. otra jurisdiccion espresa i anteladamente reconocida por las partes. La de V. E. nacida de un convenio diplomático ha sido renunciada por la Compañia, i en nombre del Gobierno de Chile pido que se respete lo pactado entre las partes; i que V. E. se declare incompetente para conocer de la presente reclamacion.

III

Personeria de don H. J. Griffin

Insisto en creer que el señor Griffin no tiene bastante personeria para presentarse ante V. E. como mandatario de la *Nitrato Railways Company*. El poder ha sido otorgado por dos personas que se dicen presidente i secretario de la Compañia, pero que no hacen constar los títulos que se atribuyen.

A este respecto se afirma que solo por ignorancia de la lejislacion inglesa, he podido dudar de la efectividad de los cargos que en la Compañia desempeñan las personas que firmaron el poder. Para desvanecer mi argumento que tiene tan pobre orijen, el señor Griffin nos hace saber que en Inglaterra cuando un otorgante se atribuye ante el notario un carácter cualquiera es porque al notario autorizante le consta que efectivamente lo tiene, no pudiéndose estender el instrumento si el notario no está cierto de que los otorgantes tienen en realidad el título que se atribuyen.

Habria sido en extremo útil que el señor Griffin nos hubiera

exhibido el testamento de la ley inglesa que concede a los notarios la facultad de suplir con su palabra la falta de documentos, que en todos los países del mundo se exigen para comprobar el carácter de una persona. La legislación antigua de Inglaterra que Blackstone estudia i comenta, i la moderna que ha sido espuesta por Lehr o codificada por Pavitt no registran la disposicion a que se refiere el señor Griffin. Por autorizada que sea la palabra de este caballero, ella no basta en juicio, puesto que es una parte interesada, para tener como existentes las leyes que invoca. Lo ménos que puede exijírsele es que presente el testamento de esas leyes, o compruebe su existencia por los medios establecidos en derecho.

I suponiendo que existiese en la Gran Bretaña una ley que mandase tener como cierto i fuera de toda duda, lo que un notario tuviese a bien afirmar en un instrumento público i que, en consecuencia, debiéramos tener como presidente i secretario de la *Nitrate Railways Company* a las personas que se titulan tales, todavia quedaria por saber si ese carácter de presidente i secretario es bastante segun los estatutos o segun las reglas del *Joint Stock* para conferir poder en nombre de la sociedad.

Aparte de esto, queda todavia en pié la cuestion acerca de si un poder conferido para la administracion ordinaria de un negocio puede estimarse como suficiente para comparecer ante un tribunal de arbitraje. Las legislaciones de diversos países concuerdan en la necesidad de un mandato especial para poder constituir o comparecer ante jueces árbitros. Mucha mayor razon hai para exigir ese poder especial, cuando el arbitraje tiene un carácter especial con respecto a la jeneralidad de los compromisos. Se trata en este caso no solamente de un tribunal arbitral, sino tambien de un tribunal internacional, encargado de juzgar cuestiones de carácter tambien internacional; i de juzgarlas, no en conformidad a las leyes comunes, sino con arreglo a principios de Derecho Internacional i a la práctica i jurisprudencia de los tribunales análogos de mayor autoridad i prestigio. Un mandato estendido para asuntos ordinarios i corrientes de administracion puede entenderse bastante para comparecer ante árbitros que sacan su jurisdiccion del convenio de dos naciones i que deben fallar no con arreglo a las leyes comunes,

sino según principios i reglas especiales? No es probable, o posible a lo ménos, que el mandante no hubiera querido que sus cuestiones con el Gobierno de Chile se fallasen de otro modo que en conformidad a la lei chilena i ante los tribunales del pais? Lo presumible es esto último, i con tanta mayor razon cuanto que la Compañía, comprometida por sus contratos a ser juzgada por las leyes i ante los tribunales del pais, no habria querido violar su compromiso autorizando a su mandatario para que se presentase ante un tribunal de excepcion creado a consecuencia de recursos diplomáticos, a fin de ser juzgado por leyes distintas de aquellas que se obligó a obedecer i respetar.

Como la presuncion hasta este momento es contraria a la pretendida amplitud del poder presentado, mantengo la excepcion de falta de personeria que tengo deducida en mi contestacion, i suplico a V. E. que se sirva dar lugar a ella.

IV Mérito de la prueba presentada

Tuve el honor de hacer presente en mi escrito de contestacion que la prueba presentada por la Compañía reclamante adolecia de defectos de forma i de fondo que la hacian absolutamente ineficaz. Parece que el representante de la Compañía está convencido de que en efecto es inadmisibile la prueba que ha acumulado a los antecedentes con que aparejó su demanda, por cuanto no fué tomada en juicio, con citacion de mi parte i por funcionarios delegados por V. E. para este objeto. Asi lo indica su peticion de rendir nuevamente su prueba, ratificando los testigos que tiene presentados.

De paso, sostiene que el señor cónsul de Iquique asi como los funcionarios chilenos del órden judicial que recibieron las declaraciones procedieron con toda correccion. No tengo para que examinar el procedimiento del cónsul de S. M. B. desde el momento en que se conviene en la necesidad de rendir nuevamente la prueba que se actuó ante él. En cuanto a los funcionarios chilenos, sostengo que han violado abiertamente la lei al recibir informaciones

o dar certificados sin autorizacion judicial. Los jueces de letras solo pueden permitir informaciones *ad perpetuam*, que se reciben en casos mui especiales i determinados por la lei, ninguno de los cuales corresponde al de que ahora se trata. Por lo que hace al secretario del juzgado de Pisagua, ha ultrapasado de tal manera sus atribuciones que su proceder cae bajo la sancion de la lei penal. I sírvase creerme el representante de la Compañía que, si la defensa del Gobierno de Chile no se ha apresurado a denunciar el hecho al tribunal correspondiente, ha sido por motivos de delicadeza que sabrá apreciar. No ha querido la defensa que la Compañía reclamante pudiera creer que se trataba de ponerle trabas inconvenientes para la rendicion de su prueba i para la cabal defensa de sus intereses.

En cuanto al mérito que en si mismas puedan tener las declaraciones para establecer la verdad de los hechos que la Compañía pretende comprobar, me será forzoso insistir manifestando que las que presten los empleados de la Compañía carecen de toda fuerza legal. I esta insistencia se hace mas necesaria desde que en el escrito de réplica se ofrecen como testigos a personas que, segun los principios de derecho, están inhabilitadas para serlo.

Escandalizado se manifiesta el mandatario de la Compañía reclamante por el triste retroceso a los tiempos. del rei D. Alonso el Sabio que envuelve la tacha que he opuesto a los testigos de ser empleados a sueldo i estar bajo la inmediata dependencia de la Compañía. Cree que si la lei que estableció la tacha fué tolerable en aquellos tiempos antiguos en que eran mui íntimas las relaciones entre patrones i dependientes, hoi no tiene razon de ser, ni es aplicable desde que esos vínculos se encuentran completamente relajados. Bajo la fe de su palabra, a que a menudo acude el patrocinante de la Compañía, nos afirma que los tribunales de Chile reaccionan contra aquellas leyes anticuadas, i aceptan hoi como buenos testigos a los empleados i sirvientes de la parte que los presenta

A riesgo de aumentar la estupefaccion que ha producido a mi contradictor mi propósito de tachar a sus testigos, me veo en el caso de manifestarle que la tacha tiene un orfjen mas antiguo aún

que el que él le atribuye, i que teniendo su base en el derecho natural ha sido reconocida i acatada desde la época de la legislación romana hasta nuestros días; i continuará siéndolo sin duda mientras existan en el mundo las desigualdades sociales, i los hombres obedezcan a otros móviles que el amor desinteresado a la verdad i a la justicia.

Idonei non videntur esse lesles quibus imperari potest ut lesles fiant. decia la lei romana, que el ilustrado maestro don Luis Roquer traduce en esta forma: «Puede considerarse a un testigo tachable, si está bajo la autoridad del que lo produce.» Don Alfonso el Sabio reprodujo en las *Partidas* esta disposicion de la lei romana; i ella está vijente en Chile hasta este momento, i se aplica diariamente por todos los tribunales del país. Asi lo acredita el señor Lira en su *Prontuario de los Juicios*, t. 1.º, §. 348; i así consta a todas las personas que conocen el derecho procesal chileno. Las leyes en este país no pierden por el desuso su fuerza obligatoria, porque la costumbre, segun el art. 2.º del Código Civil, no constituye derecho sino en los casos en que la lei se remite a ella; i porque la lei, segun los arts. 32 i 33 solo se deroga por otra lei que la declare sin vijencia o que le sea contraria en todo o en parte, siendo de notar que si la contradiccion es parcial, la antigua lei continua rijiendo en la parte no derogada.

Todo esto es elemental, i apenas se concibe que sea necesario recordárselo al señor ajente de la Compañía reclamante.

Es, pues, un hecho indudable que la lei 18, tít. 16, Partida 3.^a está vijente en Chile, así como el principio fundamental de ella sentado por la legislación romana.

Ahora bien: me parece que V. E. no puede prescindir de su aplicacion, no obstante el grave defecto de su antigüedad que mi contradictor se complace en achacarle, i que yo estimo como uno de sus principales méritos. Sea que V. E. adopte la regla de la *lex fori*, o que crea preferible la *lex loci actus*, en lo cual se separan distinguidos jurisconsultos, en todo caso resulta que esa lei es nada ménos que la tan motejada de don Alfonso el Sabio. Es la *lex fori* porque este alto Tribunal está constituido i funciona en Chile, i es la *lex loci actus*, porque los sucesos que se trata de comprobar han

acaecido tambien en este pais. (Surville et Arthuys, *Cours elementaire de Droit International privé*, §. 419.)

El Instituto de Derecho Internacional reunido en Jinebra discutió i resolvió en 1877 cuales eran las reglas a que debian someterse los juicios ante tribunales internacionales; i entre ellas estableció la siguiente que es la 3.^a de la seccion C:

«La admisibilidad de los medios de prueba (prueba literal, testimonial, juramento, libro de comercio, etc.) i su fuerza probatoria seran determinadas por la lei del lugar en que ha pasado el hecho o acto que se trata de probar.

«La misma regla se aplicará a la capacidad de los testigos salvo las escepciones que los Estados contratantes juzguen conveniente sancionar en los tratados». (*Tableau général de l'organisation des travaux et du personnel de l'Institut de Droit International*, 1893, p. 111).

Segun esta regla que emana de la mas alta autoridad en materia de Derecho Internacional moderno, V. E. no podria prescindir de la aplicacion de la lei vijente en Chile que prohíbe oír como testigos a los empleados o dependientes de la persona que los presenta. V. E. tiene ademas, otras graves razones para no prescindir de esta aplicacion.

El principio de la lei romana es, como lo he dicho, un principio del derecho natural. Es indudable que el patron puede ejercer presion sobre su empleado para que declare en el sentido que le convenga. Le basta para ello la facultad que tiene de despedirlo, privándolo cuando le parezca conveniente de pan i de trabajo. Esta circunstancia hace que las cosas pasen hoi del mismo modo que pasaban en tiempo de D. Alfonso el Sabio i en tiempo de Justiniano i aun en las épocas mas reculadas de la antigüedad. Nada ha cambiado a este respecto, por mas que crea lo contrario mi honorable contradictor. La naturaleza humana, con su séquito de grandeza i de miseria, ha sido, es i será lo mismo. Los hombres han dependido i es probable que habrán de depender siempre los unos de los otros, i que éstos ejercerán siempre marcada influencia sobre los actos de aquellos.

Bien lo han reconocido así todas las naciones civilizadas al re-

producir en sus Códigos el mismo precepto de la lei 18, tít. 16, Partida 3.ª Se puede asegurar sin temor de error que no hai Código moderno de procedimientos que no inhabilite para declarar al empleado o dependiente de quien lo presenta como testigo.

El Código Frances, art. 283, enumera las tachas que pueden oponerse a los testigos, siendo una de ellas la de paniaguado (*domestique*), palabra que, en el idioma i en el lenguaje jurídico, comprende al empleado asalariado. Dalloz comentando esta disposicion al tratar de *l'Enquête*, § 494 i sigtes. esplica que tal es el alcance i sentido jurídico de la palabra *domestique*.

Otro tanto disponen el Código Belga, tambien en su art. 283; el Código Civil de Holanda en su art. 1940; i el de España en el art. 660.

El Código Italiano en su art. 237 autoriza a las partes para tachar los testigos contrarios; i el 242 ordena al testigo que declare si es pariente o si se halla al servicio de alguna de las partes. El aleman contiene en su art. 360 una disposicion análoga, aunque en términos mas jenerales.

La del Código español, uno de los mas adelantados de los Códigos modernos, establece la facultad de tachar los testigos, siempre que se encuentren en la condicion señalada por el número 2.º del art. 660, la cual está concebida en estos términos: «2.º Ser el testigo al prestar su declaracion, socio, dependiente o criado del que le presentare. Es dependiente el que presta servicios mecánicos mediante salario fijo, o habitualmente servicios retribuidos».

Sea, pues, que V. E. atienda a los principios de la lejislacion romana que son hoi dia las que sirven de norma al Derecho de Jentes, sea que atienda a los de la antigua lejislacion española que es la que rije actualmente en Chile, sea que ocurra a las reglas lejislativas de los pueblos modernos, en todo caso se encontrará conel obstáculo invencible que todas ellas oponen a la recepcion de declaraciones que emanen de testigos que dependan de una de las partes, por ser empleados a sueldo de ella, o prestarle cualquier jénero de servicios retribuidos.

Si el Tribunal es libre para dar acogida a los medios de investigacion conducentes al esclarecimiento de los hechos, segun lo dis-

pone el artículo III de la Convencion, no por eso puede apartarse de las reglas que todas las legislaciones han adoptado, desde los tiempos de Roma hasta hoy, para la apreciacion de la misma prueba i del mérito que pueda atribuirse a la rendida por medio de testigos sujetos a la influencia de algunas de las partes. En esta materia no son omnímodas sus facultades ni pueden estenderse hasta el punto de derogar un principio de derecho claro, razonable i universalmente aceptado.

V

La presente reclamacion ante los principios i reglas del Derecho

Ya que el agente de la Compañía reclamante ha aceptado la clasificacion que hice de las diversas categorias de su reclamo, continuaré tratando las diversas cuestiones que surjen de ellas, en el órden i con el método establecido en la contestacion.

A.—Indemnizacion pretendida por transporte de tropas de un punto a otro de la provincia de Tarapacá.

Hice presente en mi contestacion la estrañeza que me causaba este cobro, siendo así que la Compañía obtuvo la concesion i el privilejio de los ferrocarriles de Tarapacá bajo la condicion de quedar sometida a las leyes jenerales referentes a ferrocarriles, i a la obligacion de conducir gratuitamente las tropas del Estado. En la réplica se manifiesta que ninguna aplicacion tienen al caso actual las leyes de policia de ferrocarriles que versan sobre materias mui distintas de las que ahora se tratan; i se sostiene que la obligacion de la Empresa está limitada a conceder pasaje gratuito a los individuos del Ejército, pero nó a proporcionar trenes especiales para trasportarlos.

Voi a mi turno a hacer ver que el representante de la Compañía padece un error al sostener las dos tesis que invoca en defensa de los intereses que le están encomendados.

El art. 24 del decreto de 11 de julio de 1868 determinó que el ferrocarril de Iquique debía quedar sujeto a las leyes i reglamentos jenerales relativos al arreglo i policia de los caminos de fierro de la República. En virtud de esta disposicion que se consignó en el

contrato respectivo, quedó incorporada en dicho contrato la lei peruana que versa sobre la materia, la cual ha quedado sustituida desde la implantacion del régimen chileno en el territorio de Tarapaca por la lei vijente en Chile sobre policia de ferrocarriles, que lleva la fecha de 6 de agosto de 1862. Esta lei, parte integrante del contrato entre la Compañia i el Gobierno a quien represento, contiene entre sus disposiciones los arts. 53 54 i 55 que determinan las personas i cosas que un ferrocarril particular cualquiera está obligado a conducir gratuitamente o por la mitad del pasaje o flete establecido. En el 54 se ordena conducir por la mitad del pasaje las tropas pertenecientes al ejército o a cuerpos de policia; i por el 55 se manda transportar por la mitad del flete de tarifa las armas o pertrechos de guerra o demas elementos destinados al servicio militar.

Esta esposicion convencerá a V. E. de que no carece de relacion con la presente cuestion i tiene alta importancia para resolverla, lo dispuesto en la cláusula 24 del contrato celebrado entre el Gobierno del Perú i Montero Hermanos, al hacerse a estos la concesion privilegiada de construir i explotar un ferrocarril en Tarapacá. Lo que el contrato haya omitido, debe suplirse con las disposiciones de la lei; i la reclamacion en ningun caso podria subir de la mitad de lo que se cobra por pasajes i fletes, en vista del testo mismo de la lei i del art. 24 del decreto peruano de 11 de julio de 1868.

Felizmente el caso referente a la conduccion de tropas, que forma una de las partidas mas importantes de esta reclamacion, está previsto i resuelto en los diversos contratos celebrados con Montero Hermanos. El agente de la Compañia pretende hacer una distincion que no encuentra asidero en la letra ni en el espíritu de esos contratos. Dice que, si los concesionarios se obligaron a dar pasajes libres en sus trenes a las tropas, a los empleados civiles i militares i a los conductores de baltijas de correo, no se han comprometido a poner trenes especiales únicamente en servicio del Gobierno.

No sé hasta qué punto sea aplicable esta distincion inventada por el agente de la Compañia, a los cargos que son materia de la reclamacion. Ignoro si las autoridades militares de Tarapacá han

espedido órdenes para hacer salir trenes especiales que condujesen tropas o pertrechos: hasta ahora no se ha presentado ninguna orden de esta especie; i el hecho no es susceptible de prueba testimonial. Pero, sea de ello lo que fuere, la verdad es que la distincion entre pasajes i trenes no puede deducirse del contesto ni del espíritu del contrato, como acabo de insinuarlo.

El art. 14 del decreto de 11 de julio de 1868 dice testualmente: «Las tropas, los empleados civiles i militares que marchen en comision del servicio i las balijas del correo i sus conductores, se transportarán gratis.»

El artículo 14 del decreto de 18 de Mayo de 1869 está concebido exactamente en los mismos términos que el que se acaba de citar.

El 16 del decreto de 26 de octubre de 1871 es el siguiente: «Las tropas, equipajes, los empleados civiles i militares, que marchen en comision del servicio del Estado, así como las balijas del correo i sus conductores, se transportaran grátis.»

No han podido dictarse disposiciones de carácter mas jeneral i absoluto, i que ménos se compadezcan con la distincion que pretende establecerse entre pasajes i trenes especiales. Todas las tropas del Gobierno, segun los tres artículos citados, deben ser conducidas gratuitamente: ninguna limitacion se pone a este deber de la Compañía, ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto a la cantidad, ni en cuanto a la forma en que haya de cumplirlo. Es evidente que en situaciones normales el Gobierno se limitará ordinariamente a conducir sus tropas en los mismos trenes de pasajeros, pero como el que tiene derecho al fin, lo tiene tambien a los medios que son necesarios para obtenerlo, es claro que si una circunstancia estrordinaria exige la salida de tropas a horas excepcionales, el ferrocarril está obligado a prestar este servicio, aunque para ello le sea menester poner un tren especial.

El Gobierno del Perú preveia que no era difícil que el departamento de Tarapacá pudiera encontrarse convulsionado por una guerra civil, calamidad que azota constantemente a aquel país. Sabia que en caso de guerra interior o exterior, Tarapacá habria de ser precisamente el teatro escogido para las hostilidades, puesto que

la posesion de sus inmensas riquezas debia ser el primer objetivo de cualquier enemigo, tanto para privar al Gobierno de esa fuente de recursos como para proporcionársela a si mismo.

No fué, pues, una condicion accidental de poca importancia la que impuso a los concesionarios, a trueque del enorme privilejio i ventajas que les concedia. Quiso prever, i previó el caso de una guerra interior o exterior, i de la necesidad en que habria de encontrarse de movilizar sus tropas i pertrechos por los ferrocarriles que iban a construirse. En tal evento, habria sido ridículo pensar en trasportar los soldados en los trenes ordinarios de pasajeros: era indudable que debian hacerse salir trenes especiales segun lo exijiesen las necesidades de la guerra.

Este ha sido el motivo porque el contrato no se estipuló en la forma que pretende atribuirle la Compañía diciendo que se concederia pasaje gratuito a los individuos del ejército, sino en esta otra mas absoluta, jeneral i comprensiva: las tropas serán transportadas gratuitamente.

De aquí provino tambien que en la guerra del Pacifico, el Gobierno del Perú primeramente, i despues el de Chile hicieron uso del ferrocarril para trasportar sus tropas desde el primer momento en que lo necesitaron, sin que los Gobiernos hayan pensado en pagar esos servicios a que la Compañía estaba obligada, ni a esta se le ocurriera jamas el cobrarlos, como sin duda lo habria hecho si hubiera dado a sus contratos la interpretacion antojadiza que hoi procura atribuirles.

Pero se pretende equiparar este derecho del Estado con el que ciertas leyes chilenas han concedido a algunos funcionarios públicos para viajar por los ferrocarriles del Estado: i se sostiene que asi como el jeneral Baquedano o un senador o diputado no tiene derecho para exijir trenes especiales, tampoco lo ha tenido el Gobierno de Chile para pedirlos cuando se ha visto precisado, por motivo de la guerra, a trasportar sus tropas de un punto a otro de la provincia de Tarapacá.

V. E. habrá notado la falta absoluta de paridad entre un caso i otro. No ha podido escapar a la penetracion de V. E. el propósito completamente diverso a que han obedecido los contratos del

Gobierno del Perú con Montero Hermanos i las disposiciones de las leyes chilenas que han otorgada al jeneral Baquedano i a los senadores i diputados de Chile un privilejio i favor esencial i estrictamente personal. La movilizacion del ejército es asunto en que está interesado el órden público; puede no ser conveniente que al efectuar esta operacion se trasladen en los mismos trenes individuos estraños al ejército; i puede ser preciso efectuar la traslacion de tropas en días i horas estraordinarios. Todo esto es aplicable al transporte de tropas, i jamas lo será a los viajes del jeneral Baquedano i de los diputados i senadores, que a menudo no tendrán relacion alguna con el interes público,

Ademas, esas leyes están concebidas en términos mui diversos de los usados en aquellos contratos. Miéntras en estos se establece la obligacion de la Compañía de trasportar gratis las tropas del ejército, i no la de conceder pasajes gratuitos, aquellas leyes solo otorgan pasajes o pases libres a los funcionarios a quienes favorece. El pasaje o pase libre es enteramente personal; el transporte gratuito es jeneral e ilimitado hasta donde lo exijan las necesidades del servicio.

A propósito de las disconformidades que el notario de Iquique señor Martinez Gálvez ha encontrado entre el memorial i los libros de la Empresa, hice notar que varios trenes que segun el memorial habian sido proporcionados al Gobierno, aparecian de los libros como viajando por cuenta de la Empresa. El ajente de la Compañía se sirve manifestar que todos esos trenes fueron pedidos por la autoridad chilena i que la disconformidad entre la cuenta i los libros de que fué tomada consiste solamente en el número de horas empleadas en cada viaje. Se sirve tambien disculpar mi error atribuyéndolo a la poca atencion que he podido prestar a este punto a causa de mis multiplicadas ocupaciones.

Agradeciendo la buena intencion de mi honorable contendor, me veo en el caso de manifestar que mi error, si es que existe, proviene únicamente de la forma usada por el notario Martinez Gálvez al dar el certificado que emitió sin autorizacion alguna judicial ni de la lei. Si V. E. se digna revisar ese certificado, verá que es imposible coleccionar de su tenor lo que el representante de la Compañía sostiene

que dice. Mas lójico i natural era entenderlo como yo lo entendí; i puede estar seguro mi contradictor de que no han sido mis ocupaciones, sino la letra misma del certificado, lo que me impidió adivinar que se trataba sólo de fijar las diferencias relativas al *tiempo empleado en los viajes*, frase que se subraya en la contestacion como dando a entender que ella está espresada en el certificado, lo cual no es exacto.

Hecha esta salvedad, i refutados los argumentos con que se pretende sostener la legalidad de esta parte de la reclamacion, paso a ocuparme de la segunda categoría de indemnizaciones reclamadas.

B.—Indemnizacion de daños causados por operaciones de guerra.

El exámen de la cuenta presentada por la Compañía manifiesta que incluye entre las indemnizaciones a que se cree con derecho, los daños sufridos a consecuencia de acciones de guerra, como han sido el combate que tuvo lugar en Pisagua el dia 6 de Febrero, el que ocurrió en Huara el 17 i en Iquique el 19 del mismo mes. Inútil creo entrar en la especificacion de las partidas de la cuenta que se refieren a esos perjuicios, porque me basta espresar que las razones de derecho que tengo alegadas para desechar estos cargos se refieren a todos los que tengan el oríjen que dejo indicado.

A la esposicion que tuve el honor de hacer de la doctrina de los tratadistas de Derecho Internacional, segun las cuales ninguna responsabilidad puede afectar al Gobierno de Chile por perjuicios que reconocen esa causa, opone el representante de la Compañía tres argumentos que me propongo examinar.

Segun el primero, el Gobierno de Chile seria responsable de los perjuicios causados por acciones de guerra, porque sino se hubiera apoderado de las máquinas i material rodante, estos no se habrian encontrado en los lugares en que ocurrieron los combates i no habrian sufrido los daños consiguientes.

El segundo argumento se funda en que las pérdidas que sufrió la Compañía con motivo de los combates de Iquique i Pisagua son imputables al Gobierno, porque el ataque de esas plazas, que el mandatario de la Compañía denomina bombardeo, se llevó a efecto sin la notificacion o intimacion que previene el Derecho Internacional.

El tercer argumento consiste en sostener que la línea fué deshecha i reparada en varias partes para los objetos de la guerra, por orden de la autoridad i sin provecho alguno para la Compañía. Seria inmoral, a juicio de esta, que el pago de esas reparaciones no se hiciese a costa del Gobierno, en cuyo provecho se ocasionaron los desperfectos.

Me haré cargo de estos argumentos en el orden que quedan formulados.

He manifestado ya que la Compañía estaba obligada en virtud de sus contratos con el Gobierno a conducir gratuitamente las tropas que operaban en Tarapacá. El ejercicio del correlativo derecho por parte del Gobierno, no puede ser considerado como la causa eficiente de los perjuicios producidos por los combates. Desde que era lícito el uso de los trenes, tanto por las exigencias de la guerra como por los contratos celebrados, de semejante uso no podia nacer delito o cuasi delito que impusiera una responsabilidad civil. De otra manera tendríamos que aceptar que el ejercicio de un derecho lejítimo puede producir la lesion de otro derecho tambien lejítimo, lo que es contrario al principio que se consigna en el conocido aforismo: *Neminem lædit qui jure suo utitur*.

Los trenes o locomotoras que se han encontrado en sitios próximos a los combates habrán sufrido naturalmente las consecuencias de estos, ya sea que hubiesen servido para la conduccion de tropas, ya sea que hubiesen llegado a esos lugares haciendo su servicio ordinario, punto que tampoco está esclarecido.

En el combate de Huará el coronel Soto se sirvió de dos máquinas de la Compañía para atacar al enemigo, i gracias a tan extraño recurso pudo obtener la victoria. Si hai un caso claro i perfectamente definido por los tratadistas de Derecho Internacional, es la facultad que tiene el jefe militar para usar en el momento de combate de los bienes de particulares que le sean necesarios para la defensa i el ataque. Es lícito en tal caso formar barricadas o parapetos con los muebles, mercaderías u. objetos que puedan prestarse para ese fin. Lícito es tambien incendiar la propiedad particular si ese medio es necesario para desalojar al enemigo u obtener la victoria. Puede decirse que en estos casos extremos e inevitables, la

propiedad desaparece ante el interes público i la necesidad de la guerra. «La destruccion de construcciones que sean obstáculo para la defensa de una posicion es perfectamente lícita», dice Rouard de Card. «No se podría criticar, agrega, el incendio de un bosque que sirviese para abrigar al enemigo, i que desde entónces ofreciese un verdadero peligro. En fin seria permitido arrasar campos cultivados i jardines, sea para hacer trincheras, sea todavia para procurar a las tropas un lugar donde acampar.»

«No se puede obligar, dice mas adelante, a un ejército a perder la victoria i a esponerse a grandes peligros, por satisfacer a las prescripciones del Derecho Internacional.» (Rouard de Card, *La Guerre Continental et la Propriété*, cap. III, secc. IV.)

Sin la feliz ocurrencia del coronel Soto, la batalla de Huara habria tenido un resultado mui diverso para la causa que sostenia. Las dos locomotoras arrojadas sobre la via en que el enemigo desplegaba sus fuerzas, produjo en éstas la confusion i espanto consiguientes, que Soto aprovechó para atacar i vencer. El daño causado a la Compañia en esta forma i circunstancias, no da derecho a indemnizacion. El principio es universalmente reconocido: i el autor que vengo citando lo apoya i explica a continuacion con argumentos irrefutables.

Laurent que sostiene enérgicamente esta misma doctrina, trae a la memoria un caso ocurrido en la guerra franco-alemana de 1871. La autoridad militar requirió unos sacos de lana el dia de la batalla de San Quintin; de allí una accion contra el Estado en razon de pérdidas o averias sufridas por los sacos requeridos. La demanda fué rechazada por motivo de que los sacos habian sido empleados en la construccion de una barricada en un barrio de la ciudad; esta medida de defensa tomada por la autoridad militar en vista de las necesidades inmediatas de la lucha, constituia un hecho de guerra que no daba lugar a indemnizacion por la via contenciosa.

El mismo autor cita resoluciones análogas de las Cortes de Bélgica; i de todas ellas puede deducirse que el empleo de una cosa de propiedad particular para actos de hostilidad durante la lucha no da lugar a indemnizacion. (Laurent, *Principes de Droit Civil français*, t. 20, §. 457.)

Los combates que se libraron en Pisagua e Iquique en los días 6 i 19 de Febrero de 1891, no tienen los caracteres de un bombardeo, ni puede dárseles este nombre como impropiaemente lo hace el representante de la Compañía. El bombardeo tiene por objeto destruir las fortificaciones enemigas, u obligar a que se rinda una plaza introduciendo la consternacion i el espanto entre los habitantes. Mientras tanto, ninguno de estos caracteres tiene el acto por el cual la Escuadra prestó el apoyo de sus cañones a las tropas que habia destacado para apoderarse de aquellas dos poblaciones. La proximidad al mar de los lugares en que se combatia permitió a la Escuadra hacer fuego certero sobre el enemigo. Su accion fué de simple ayuda i cooperacion a las tropas de tierra, como aconteció en los combates de Chorrillos i Miraflores que tuvieron lugar en 13 i 15 de Enero de 1881. La circunstancia de haber tenido lugar estas acciones de guerra casi a orillas del mar permitió a la Escuadra cooperar eficazmente al éxito del Ejército de Chile, i a nadie se le ha ocurrido calificar como un bombardeo el fuego dirigido en esas ocasiones sobre las fuerzas enemigas.

Aun considerado como un bombardeo el ataque de la Escuadra a las posiciones enemigas tanto en Pisagua como en Iquique, en ninguno de los dos casos era obligatorio el aviso previo que es de regla en la guerra para que puedan ponerse a salvo las personas de los no combatientes, sobre todo las mujeres i niños. No se trataba en ninguno de los dos casos de atacar a la ciudad ni de infundir pavor entre los habitantes, sino únicamente de ganar la batalla. En la de Pisagua, fué menester proceder sorpresivamente para apoderarse de la poblacion i en la de Iquique se trató de defender a las fuerzas de la revolucion de un ataque sorpresivo traído por las fuerzas del coronel Soto. En uno i otro caso el aviso previo era imposible dadas las circunstancias; i todos los autores están de acuerdo en que el aviso no es obligatorio cuando se trata de tomar por sorpresa una posicion o una ciudad; o cuando se trata de defenderla de un ataque sorpresivo. Por lo demas, el aviso era inútil, desde que se pudo ver desde el principio que el único objetivo de los fuegos de la Escuadra eran las tropas enemigas. Los ciudadanos pacíficos no tuvieron mas que mantenerse retirados del lugar en que estaba

trabado el combate, para evitar cualquier daño personal, i en efecto ninguno ocurrió de este jénero que merezca mencionarse.

En tales condiciones, ningun cargo puede hacerse contra el Gobierno de Chile por perjuicios orijinados de aquellos combates. Creo haber demostrado ampliamente la irresponsabilidad del Gobierno de Chile a consecuencia de los combates de Pisagua i de Iquique en los escritos de dúplica de las reclamaciones número 22 i 26. Creo inútil repetir lo que en ellos tengo espuesto, máxime cuando V. E. ha conocido ya el fondo de esos dos negocios i es probable que los haya fallado, al tiempo de verse la presente reclamacion.

No tiene, pues, la *Nitrate Railways C.* mejor derecho que las demas personas que han pedido indemnizacion por los perjuicios o pérdidas sufridas en los combates de Pisagua e Iquique en 6 i 19 de Febrero de 1891. Yo espero que V. E. en todo caso habrá de eliminar de la cuenta que se cobra todas las partidas referentes a esos perjuicios.

Por lo que hace a los gastos invertidos en reparacion de los destrozos causados en las líneas, notará V. E. que algunos de esos destrozos se dicen ordenados por los jefes de las tropas que operaban en la provincia; pero la mayor parte de ellos han sido la consecuencia inevitable de los combates trabados a inmediaciones del ferrocarril. Tales son, por ejemplo, los que se enumeran bajo los siguientes rubros:

«Daños causados en la estacion de Huará en el dia de la batalla.»

«Cuadrilla ocupada en componer la vía en el puerto de Iquique en febrero de 1891.»

«Cuadrilla i material empleado en componer la vía destruida por el incendio habido durante el combate de 6 de febrero de 1891 en la estacion de Pisagua.»

Los daños a que se refieren estas partidas han provenido evidentemente de los combates de Huará, Iquique i Pisagua; i es casi seguro que los que resultaron de la batalla de Pozo Almonte i de otros encuentros parciales están comprendidos en el resto de las partidas. De esta clase de perjuicios no responder los gobiernos

belijerantes, segun los principios reconocidos del Derecho Internacional, que he tenido el honor de mencionar estensamente en mi escrito de contestacion.

Tampoco es conforme a derecho hacer responsable al Gobierno de Chile de las destrucciones parciales de la línea que se hubieren ejecutado con propósitos estratégicos durante el curso de la campaña de Tarapacá, que empezó a mediados de enero i concluyó el 7 de marzo de 1891.

Durante todo ese período de tiempo la provincia de Tarapacá se halló en un estado de violenta conflagracion. Las tropas de ambos partidos acampaban alternativamente en los diversos puntos que tomaban i desocupaban segun las exigencias de la situacion. Casi diariamente se empeñaban combates, i es indudable que cada uno de los contendientes trataba de impedir la retirada del enemigo vencido o de proteger la suya propia, inhabilitando la línea férrea para ese objeto. Esta clase de medidas son lícitas en la guerra, así como es permitido destruir los caminos públicos, incendiar edificios o poblaciones o arrasar los campos para evitar la persecucion. Estos daños no dan derecho a indemnizacion: tal es la doctrina jeneralmente, o mas bien dicho, universalmente aceptada, que he espuesto latamente en mi contestacion. A ella me refiero, para desvanecer el último argumento formulado por la Compañía reclamante. Invoco especialmente las palabras de Rouard de Card que se encuentran consignadas en el lugar que he citado mas arriba.

Resulta de los hechos que la Compañía aun no ha comprobado i que yo no aceptaré sino en vista de una prueba completa, i de la doctrina que he tenido el honor de invocar que los daños provenientes de las acciones de guerra que tuvieron lugar en la provincia de Tarapacá no afectan la responsabilidad del Gobierno de Chile, i aguardo de V. E. una declaracion espresa en ese sentido.

C.—Accidentes casuales, desrielamientos, choques imprevistos, etc.

He manifestado en la contestacion que no pueden imputarse al Gobierno de Chile los daños causados por accidentes imprevistos. El mandatario de la Compañía cree que el Gobierno debe respon-

der de tales daños, porque ellos se debieron a las medidas tomadas por la autoridad de hacer marchar los trenes sin luz durante la noche i a la prohibicion de tocar pitos de alarma.

No se habian alegado en la reclamacion los motivos que ahora se esponen como determinantes de la responsabilidad del Gobierno de Chile. Su comprobacion para cada caso especial es indispensable, porque no es verosímil que todos los desrielamientos i todos los choques se debieran a la circunstancia de marchar los trenes sin luz i de no tocar las señales acostumbradas a causa de órdenes superiores. Desde luego, se puede asegurar en vista de la cuenta misma de la Compañía, que muchos choques i desrielamientos ocurrieron durante el día i no durante la noche. Debe suponerse que estos siniestros han sido casuales i no deben por consiguiente imputarse a medidas tomadas por los jefes militares.

Los trenes, segun esposicion de la Compañía, eran manejados por sus propios empleados, quienes corrian los mismos riesgos que las tropas que trasportaban. La intimidacion a estos empleados de que se pretende sacar partido, no tenia razon de ser; ni es posible deducirla del hecho perfectamente inverosímil citado por el ajente de la Compañía, segun el cual un maquinista habria sido muerto por un oficial a causa de que no hacia andar un tren descarrilado.

D.—Robos i daños hechos por soldados dispersos i fujitivos.

El ajente de la Compañía descarta en su réplica esta parte de la reclamacion, a que atribuye poquísima importancia. No tengo, pues, para que volver sobre ella, limitándome a lo que dejé espuesto en mi contestacion.

VI

Observaciones relativas a la ocupacion bélica de los ferrocarriles de Tarapacá

Hube de manifestar en el escrito de contestacion que no eran completamente aplicables a las empresas ferrocarrileras los principios del Derecho Internacional que regulan la forma en que deben ser respetados durante la guerra los bienes pertenecientes a parti-

culares. Demostré, además, que en el caso especial de que se trata, la ocupación de los ferrocarriles de Tarapacá, o mas bien, los servicios que se le exigieron durante la guerra civil de 1891, estaban impuestos por los contratos celebrados, i agregaré impuestos tambien por la condicion especial en que se encuentra esta Compañía con relacion al Gobierno de Chile.

Las autoridades que tuve el honor de citar en apoyo de la doctrina que sostuve han sido tambien invocadas por el agente de la Compañía, quien sostiene que todos reconocen a las Compañías particulares, dueñas de ferrocarriles, el derecho a ser indemnizadas por el uso que de ellos hagan los belijerantes. Hai aquí dos cuestiones perfectamente diversas, que el contendor ha tratado de confundir para el propósito que persigue. Por mi parte me veré nuevamente en la necesidad de separarlas, porque si es verdad que ciertos principios jenerales pueden encontrar en este caso correcta aplicacion, en cambio hai otros que no son aplicables a causa de la excepcional situacion en que la Compañía de los Ferrocarriles de Tarapacá se encuentra con respecto al Gobierno de Chile.

Las dos cuestiones que yo planteé i analicé son estas: 1.^a El respeto a los bienes de particulares durante la guerra, sufre profundas modificaciones cuando se trata de empresas de ferrocarril; la ocupación de esta clase de bienes, su uso i goce por los belijerantes es enteramente lícito i permitido, a diferencia de lo que pasa con las demas clases de bienes; 2.^a Los ferrocarriles de Tarapacá han podido ser ocupados i usados en conformidad a ese principio jeneral; i en cuanto a indemnizaciones, no puede cobrarlas teniendo en cuenta los contratos celebrados, las circunstancias en que se ocasionaron los daños, i las relaciones especiales que median entre la Compañía i el Gobierno de la Nacion.

El señor agente de la Compañía no ha podido negar la verdad de la doctrina que he sostenido con respecto a la primera cuestion; pero se ha complacido en deducir de los testos de los autores que he citado la consecuencia de que la indemnización es procedente en derecho, olvidando que estos autores no han podido tomar en consideracion las circunstancias peculiares del caso, sometido a la resolucion de este alto Tribunal.

Sin embargo, debo manifestar que ni aún en este terreno tiene razon mi honorable contradictor. Es cierto, por ejemplo, que Bluntschli en el art. 645 bis de su *Derecho Internacional Codificado* dice que los ferrocarriles particulares pueden ser ocupados para menesteres de la guerra bajo reserva de restituirlos a la conclusion de la paz con la correspondiente indemnizacion; pero no espresa en qué condiciones ni sobre qué base debe hacerse el cálculo de la indemnizacion. ¿Debe pagarse el uso del ferrocarril? o ¿basta solo pagar los deterioros causados? Parece desprenderse de los comentarios que el mismo Bluntschli hace del artículo que la indemnizacion debe limitarse a este último punto; i por eso me permití deducir la consecuencia de que solo procede en casos raros i excepcionales. No he atribuido esta deducccion al autor que citaba, como erróneamente parece entenderlo el mandatario de la Compañía, puesto que no he pretendido citar el testo mismo, que a ser así habria tenido cuidado de ponerlo entre comillas como acostumbro hacerlo al transcribir literalmente palabras ajenas.

Bonfils, por su parte, no se decide por la indemnizacion, limitándose a manifestar, como lo indiqué en mi contestacion, que la cuestion es discutida, i aún no está resuelta.

Todos los autores manifiestan que la Alemania se limitó a ofrecer rendir las cuentas de la administracion de los ferrocarriles franceses que pertenecian a Compañías particulares, i que usó i explotó durante la guerra de 1870-71. Ninguno espresa si al fin se devolvió a sus dueños el producido de la explotacion; pero es natural que así haya sucedido. Lo que no aparece comprobado en parte alguna es que indemnizara a las Compañías por el uso de los ferrocarriles para las operaciones de la guerra, o por los deterioros que ese uso les causó. Rouard de Card refiere que «cuando los agentes franceses pudieron recibirse de los wagones, locomotoras i demas enseres, encontraron de parte de los que los tenian una mala voluntad evidente i aún consiguieron con gran trabajo los restos de las máquinas, que habian sido destruidas mientras duró esta verdadera confiscacion.» (*La Guerre continentale dans ses rapports avec la propriété*, p. 154.)

Es indudable que si hubieran sido indemnizados los deterioros causados a los ferrocarriles franceses, no habria tenido este escritor ningun motivo razonable para lamentar la conducta de los alemanes.

Guelle hace notar con Calvo que, aunque al fin de la guerra el Gobierno aleman devolvió a las compañías la libre explotacion de sus líneas i ordenó la restitution completa del material a sus lejitimos propietarios; parece que estas órdenes no fueron cumplidas, porque el 19 de Octubre de 1871 las compañías no habian recibido todavía sino la porcion de material mas deteriorada i fuera de servicio i los particulares que tenian en su poder wagones i locomotoras llevadas a Alemania continuaban reteniendo los que habian empleado indebidamente para las necesidades de su tráfico privado i rehusaban poner a disposicion de los ajentes encargados de la recepcion, los restos como ruedas, hierros, resortes, etc., provenientes del material de que se habian servido. (*Guelle, Précis des lois de la guerre*. t. 2, p. 97).

Esta esposicion con la cual concuerdan todas las de los autores que tratan de esta materia, i recuerdan lo sucedido en la guerra franco-prusiana, está mui distante de la narracion que, bajo la sola fe de su palabra, se sirve hacer sobre estos mismos sucesos el señor ajente de la *Nitrato Railways Company*. Segun este caballero los alemanes habrian confiado los ferrocarriles franceses a un personal mui competente i cuidadoso, de tal modo que al efectuar la devolucion del material, solo habian tenido que entregar éste sin necesidad de indemnizar deterioros, a que no dió lugar aquella administracion tan competente i escrupulosa.

Otra cosa mui diversa refieren Rouard de Card, Calvo i Guelle: los alemanes entregaron el material de los ferrocarriles franceses completamente deteriorado i costó gran trabajo conseguir los restos de gran parte de ese material, reducido a ruedas, hierros i resortes.

El Gobierno aleman, se agrega, hizo con sus fondos todos los gastos de traccion, mientras que el de Chile nó. ¿Le consta al señor ajente lo que asevera? ¿podría comprobar de alguna manera

que el Gobierno alemán no hizo uso del combustible i ocupó, en cuanto le convenia, a los empleados que tenían las compañías de ferrocarriles?

Puede suceder que sustituyera los empleados franceses por alemanes, pues así convenia a sus propósitos. Todo lo demas es ahogarse en un mar de suposiciones, que no resisten al mas leve exámen de los hechos referidos por hombres eminentes i hasta testigos de vista de los sucesos.

El Gobierno alemán, por otra parte, no tenía contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles franceses para la conduccion gratuita de sus tropas como las tenía el Gobierno de Chile con la compañía de los ferrocarriles de Tarapacá. Esta es la grave diferencia que existe entre un caso i otro. Los dos Gobiernos pudieron usar los ferrocarriles, en virtud del derecho de la guerra; pero solo el de Chile tenía un derecho particular a ese uso, nacido de una estipulacion anterior a la guerra. El Gobierno alemán no se limitó a hacer de los ferrocarriles el uso estratégico que convenia a las operaciones de la guerra, sino que además los explotó comercialmente por su cuenta. Terminada la guerra, devolvió las líneas i materiales en el estado en que se hallaban, sin otorgar indemnizacion alguna, limitándose a ofrecer rendir cuenta de la explotacion comercial. El Gobierno de Chile solo usó de las líneas férreas cuando se lo exigieron las necesidades de la guerra i para los fines de ésta. Cumplidas las operaciones militares que en aquella rejion no duraron mas de un mes i medio, no volvió a usar los ferrocarriles, i las cosas tornaron a su estado normal. Se pretende sin embargo, que este Gobierno pague indemnizacion por el uso i por los deterioros, lo que la Alemania no hizo, apesar de que no mediaba contrato alguno entre esa nacion i las compañías francesas de ferrocarriles, i de que a estas se obligaba a prestar servicios que debian repugnar a los sentimientos i al patriotismo de las personas que las constituian.

Forma contraste con la situacion de esas compañías la que cupo a la de los ferrocarriles de Tarapacá. Esta sociedad puede considerarse como chilena, aun cuando haya sido constituida en Inglaterra. Al aceptar la cesion de los derechos de la antigua Compañía

de los Ferrocarriles salitreros de Tarapacá, aceptó de un modo espreso la renuncia de su nacionalidad extranjera que estaba estipulada en los artículos del contrato, que ántes he examinado con alguna latitud. Tiene, ademas, en Chile todo su capital i el único centro de esplotacion. Goza de privilejios especiales que le han sido acordados por el Gobierno de la nacion: esto es mas de lo que se necesita para considerarla como una verdadera sociedad chilena. Pretende, sin embargo, gozar como chilena de todas las ventajas que la lei acuerda a las empresas nacionales; i como extranjera entablar reclamaciones por la vía diplomática, a la cual ha renunciado espresamente a trueque del enorme privilejio que le fué concedido.

El sentido i alcance del contrato ha quedado plenamente esclarecido con el precedente que se estableció durante la guerra del Pacífico. En esa ocasion el Gobierno del Perú primeramente i despues el de Chile tomaron posesion de las líneas férreas de Tarapacá, i exijieron de ellas todos los servicios indispensables para las operaciones bélicas; i aun las esplotaron nombrando un administrador. Este hecho público i que consta de numerosos documentos oficiales, ha sido desvirtuado por el señor ajente quien, como de costumbre bajo la sola fé de su palabra, afirma que el administrador nombrado por el Gobierno de Chile era un mero interventor. Pero, cualquiera que haya sido la forma de la ocupacion de los ferrocarriles, el hecho es que se les hizo prestar todos los servicios que la guerra exijia; i que la Compañía reconoció el derecho del Gobierno, por cuanto no hizo reclamo alguno sobre el particular, i por cuanto esplicitamente lo manifestó en los diversos memorandums que la *Nitrate Railways Co.*, presentó a las autoridades de Chile en diversas ocasiones, cuyas propias palabras he tenido el honor de citar en mi escrito de contestacion.

Mi contradictor cree que puede eliminar la fuerza de este argumento incontestable haciendo presente que la actual Compañía no estaba constituida todavia en la época en que ocurrieron aquellos sucesos, i que la antigua *Compañía de los Ferrocarriles Salitreros del Perú*, sociedad peruana, no se atrevió a reclamar por falta de confianza en el éxito de su cobro.

Contra esta aseveracion hecha por el señor ajente bajo la sola fé

de su palabra, protestan los hechos públicos, reconocidos i hasta documentados. La Compañía, fuera o no peruana, había sido organizada en Inglaterra, los acreedores de la Compañía que tenían derechos reales constituidos sobre los inmuebles de ella eran ciudadanos ingleses. Ninguno, sin embargo, presentó reclamación, a pesar de que los acreedores tenían en Chile un representante, que lo era el mismo señor Griffin que hoy representa a la Compañía Inglesa. La misma Compañía actual ha reconocido, como lo he dicho, en documentos públicos, la legalidad i derecho que amparaban la conducta del Gobierno.

Que hoy la persona moral dueña de estos intereses sea diversa de la anterior, no importa nada para el hecho del precedente constituido. Es sabido que el Derecho Internacional otorga durante la guerra, las mismas garantías a los bienes de los neutrales que a los bienes particulares de los súbditos enemigos. La Compañía peruana pudo reclamar ante el Gobierno de Chile, como reclamaron las Compañías francesas ante el Gobierno de Alemania. No lo hizo porque reconocía el derecho de Chile, no porque temiese el mal éxito de sus gestiones como gratuitamente se asevera por el contendor.

Por lo demás, la actual Compañía representa todos los derechos i obligaciones de la anterior, i los precedentes establecidos para la interpretación de esos derechos i obligaciones, la afectan de igual manera que a aquella. Puedo, por consiguiente, invocar como invoco todos aquellos precedentes, i sostener como sostengo, que el contrato, si se prestase a alguna duda, debe interpretarse en conformidad a la aplicación práctica que de él han hecho los contratantes. *Ex subsecuto facto et eventu declaratur qualis fuerit animus in contractu antecedenti*, dice Menochio (L. 6, cap. 38, L. 28) Surdus (dec. 139. núm 9) agrega: *Secula observantia declarat qualis fuerit partium intentio a principio*. Esta doctrina está condensada en el art. 1564 del Código Civil chileno, en cuyo tercer inciso se dispone que las cláusulas dudosas de un contrato se interpreten «por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con la aprobación de la otra».

VII

Cobro de Intereses

El mandatario de la Compañía reclamante cree que, no debiendo fallarse la presente reclamacion en conformidad a las leyes de Chile sino conforme a los dictados de la equidad, tiene derecho para exigir intereses sobre el capital que cobra, a contar desde el 8 de Agosto de 1891 i a razon del 8 por ciento anual. Implicitamente conviene en que, con arreglo al Código Civil de Chile, el cobro de intereses, i todavía de intereses corrientes en lugar del legal, es absolutamente improcedente. Asi lo determinan en efecto los arts. 1551 i 1559 de dicho Código.

Pero al defender su pretension de esta manera, el contendor no toma en cuenta tres circunstancias que la desbaratan por completo.

Es la primera que, segun lo estipulado en los contratos a que debe su privilegio la Compañía, está ésta obligada a sujetarse i debe ser juzgada en conformidad a las leyes del pais. No puede, por consiguiente, pretender que, en lugar de esas leyes, se resuelvan sus cuestiones con el Gobierno de Chile con arreglo a la simple equidad. *Pacta dant legem contrahentibus*.

Es la segunda que este alto Tribunal no puede fallar simplemente por razones de equidad las cuestiones que se le sometan, o sea procediendo con el carácter de arbitrador o amigable compoñedor. La convencion de 26 de setiembre de 1893 le señala en su artículo V las fuentes a que debe acudir para ajustar sus resoluciones. No le es lícito apartarse de los principios del Derecho Internacional i de la práctica i jurisprudencia de tribunales análogos para acudir a los simples dictados de su conciencia.

Es, por fin, la tercera, que las reglas de nuestro Código Civil son precisamente las mas conformes a la equidad, como que han sido tomadas de los mas aceptados i vulgares principios de derecho.

Mantengo, por lo tanto, la peticion que tengo formulada para

que, en ningun caso, se manden abonar los intereses solicitados, i ménos al alto tipo que se pretende.

V E., por lo demas, se ha de servir rechazar esta reclamacion en todas sus partes, a ménos que se declare incompetente para conocer en ella como lo pedí en mi contestacion, súplica que ahora reitero.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

The Nitrate Railway Company Limited, incorporada legalmente en Inglaterra i reconocida debidamente en Chile, reclama del Gobierno de la República la cantidad de cuarenta i ocho mil setecientas setenta i cinco libras esterlinas diezinueve chelines cinco peniques, por capital, mas intereses del ocho por ciento anual, a contar desde el 8 de agosto de 1891 hasta la fecha del pago por daños i perjuicios causados por las fuerzas contendientes durante la guerra civil de Chile.

El representante de la Compañía reclamante espone: que la Compañía ha recurrido varias veces al Gobierno para finiquitar este reclamo, pero que todos sus esfuerzos han sido infructuosos, e inserta en el memorial las diversas solicitudes que se presentaron al Gobierno, siendo todas ellas denegadas, dejando a salvo la accion de los interesados para hacer valer sus derechos donde mejor corresponda; agrega que los hechos en que funda su reclamacion son públicos i notorios; que nadie puede negar que ámbas partes combatientes tomaron posesion e hicieron uso de las propiedades de la Compañía con el fin de trasportar sus tropas i material de guerra, que a las locomotoras se les hizo hacer un servicio perpetuo i mui severo, destruyéndolas a veces intencionalmente i en otras convirtiéndolas en máquinas de guerra; que tampoco puede negarse que la Compañía sufrió perjuicios considerables a consecuencia de

los bombardeos de Iquique i Pisagua por las fuerzas navales congresistas, que los servicios prestados por la Compañía a las partes contendientes no fué voluntario sino impuesto; que reclama daños i perjuicios con respecto a los actos de ámbos contendientes en la guerra civil de 1891, pues cada uno, a su vez, era el Gobierno *de facto* i ejercia poder supremo en la provincia. Entra, en seguida, a detallar cada uno de los servicios prestados i daños sufridos, cuyo valor alcanza a la suma ya espresada i que reclama del Gobierno de Chile con sus intereses.

Acompaña sesenta i nueve declaraciones prestadas ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique en marzo de 1895, que atestiguan la veracidad de las distintas partidas de la lista de servicios i daños enumerados en el memorial.

El señor ajente de Chile, pide desde luego, que se rechace *in limine* la demanda por no haberse conformado el memorial a las prescripciones del Reglamento. En segundo lugar, que el Tribunal se declare incompetente, tanto porque la Compañía reclamante es anónima, cuanto porque segun cláusulas de los contratos de concesion de los ferrocarriles en cuestion, los concesionarios renuncian por sí i por sus sucesores a toda accion diplomática que tenga oríjen en la construccion o esplotacion de estós ferrocarriles; que este Tribunal, que es el resultado de una accion diplomática, está por consiguiente inhibido por las cláusulas ya indicadas de tomar conocimiento de la presente reclamacion i que, ademas, esos mismos contratos, que son lei única i preferente para los contratantes, establecen un tribunal especial de arbitraje para definir las diferencias que, por cualquier motivo, surjan entre la Empresa i el Gobierno; que entrando al exámen de los hechos, ellos son, si fueran ciertos, contratos de trasportes sometidos a los tribunales ordinarios, i la mayor parte consecuencia desgraciada, si se quiere pero de actos lejítimos de guerra; que por lo demas los hechos no han sido probados, pues las declaraciones de testigos, fuera de juicio i sin citacion, no tienen valor alguno, que los intereses en ningun caso se deberian, pues el Gobierno no está en mora, motivos por los cuales, en último caso, tendria que ser rechazada esta reclamacion.

En la réplica se hace esfuerzo para comprobar que esta reclamación deducida ante el Tribunal Arbitral no importa ejercitar acción diplomática, pues ni el Tribunal ni sus miembros tienen carácter diplomático; que todavía aun cuando fuera Tribunal diplomático las cláusulas del contrato en que se renuncia a la acción indicada, no se refiere sino a la ejecución de dichos contratos i no a los abusos i perjuicios que son materia de la reclamación; que todavía esa cláusula en que se instituye una jurisdicción arbitral especial no podría referirse sino a la línea de Iquique hasta la Noria i no a la de Pisagua a Zapiga i a los ramales, pues en las concesiones de estas líneas no crea tal Tribunal.

En la dúplica se contradicen estensamente todas las alegaciones i doctrinas espuestas en la réplica citando precedentes i autores, transcribiendo las doctrinas sustentadas por éstos, i

Considerando: que los particulares o las sociedades pueden, a fin de obtener de un Gobierno extranjero, privilegios i concesiones de trabajos públicos, de minas o de explotación de vías de comunicación i proveer así a sus intereses, renunciar a la protección de sus Gobiernos i comprometerse por un contrato a no ocurrir a la acción diplomática en caso de que surjieran dificultades entre ellos i el Gobierno concesionario; que, teniendo todo Gobierno el derecho de no acordar tales concesiones, sino a sus nacionales, puede, si consiente en otorgar las mismas concesiones a extranjeros, exigir de ellos que se coloquen bajo un pie de igualdad con los nacionales, i que se comprometan no solamente a someterse a las leyes del país sino también a no provocar la intervención de los Gobiernos a que pertenezcan, en la solución de cuestiones litijiosas que surjieran de contratos libremente celebrados, que ningún principio de Derecho Internacional prohíbe a los ciudadanos el pactar personalmente tales compromisos que, por lo demás, no obligan a los Gobiernos extranjeros;

Considerando: que este Tribunal Arbitral, aun siendo un Tribunal de Justicia que falla en conformidad a los principios de Derecho Internacional i a la jurisprudencia de los tribunales análogos de mayor autoridad i prestigio, arranca de todos modos su origen de un convenio diplomático acordado entre el Gobierno de

Chile i el de la Gran Bretaña en 26 de Setiembre de 1893; que la Convencion celebrada en esa fecha, tuvo por único fin sustituir la accion diplomática por la jurisdiccion del Tribunal Arbitral; que el preámbulo de la precitada Convencion lo dice espresamente en los términos siguientes: «Ambos Gobiernos, a fin de poner un término amistoso a las reclamaciones deducidas por la Legacion Británica en Chile con motivo de la guerra civil, han acordado celebrar una Convencion de arbitraje; que el artículo 1.º estipula que *las reclamaciones deberán ser patrocinadas por la Legacion de Su Majestad Británica*; que resulta de la naturaleza misma del arbitraje, como del testo i del espíritu de esta Convencion que este Tribunal reemplaza, para dar solucion a una categoría determinada de negocios, a la accion diplomática trabada en razon de ellas entre ámbos Gobiernos i, que, por consiguiente, los particulares o sociedades que se han obligado por contratos libremente celebrados, a no recurrir personalmente a la accion diplomática, así como no podrian provocar directa i personalmente la intervencion de la Legacion Británica, tampoco podrian impetrar la jurisdiccion de este Tribunal de escepcion para la resolucion de las cuestiones que surjieran entre ellos i el Gobierno con el cual han contratado i para con quien ha contraido compromisos espresos;

Considerando: Que el Gobierno del Perú, en cuyos derechos se ha sustituido el Gobierno de Chile, por la anexion del territorio de Tarapacá, consagrada por el tratado de paz de 21 de Mayo de 1884, por diversos decretos supremos de 11 de Julio de 1868, 18 de Mayo de 1869 i 26 de Octubre de 1871, concedió la construccion i explotacion de los ferrocarriles de Iquique a Pisagua con todas sus ramificaciones a los señores Ramon Montero i Hermanos; que los artículos 12 i 15 de las espresadas concesiones otorgaban a los concesionarios la facultad de trasferir sus derechos, en todo o en parte, a terceros con la aprobacion del Gobierno, pero estipulándose que «si la trasferencia se hacia en favor de extranjeros, éstos quedarian sometidos a las leyes del pais, *sin poder ejercitar ningun recurso diplomático*»;

Considerando: Que la sociedad inglesa reclamante se encuentra hoy en el lugar de los primitivos concesionarios, Ramon Montero

Hermanos; que el Gobierno del Perú ha creído contratar con sus nacionales i que autorizando a los concesionarios a trasferir sus derechos a terceros extranjeros, ha querido que siempre la Empresa del Ferrocarril se encuentre en toda época, con respecto al Gobierno de la nacion, como una empresa peruana; que ésta es la única interpretación natural i lójica que quepa dar a las cláusulas de los contratos de concesion que estipulan que, *«si la trasferencia se hace en favor de extranjeros, éstos quedarán sometidos a las leyes del país sin poder recurrir a la accion diplomática;»*

Considerando: Que la Sociedad reclamante sabia a lo que se comprometia haciéndose trasferir las concesiones, previa la autorizacion del Gobierno, que fué voluntariamente en cambio de privilejios alcanzados i en vista de ganancias por realizar, que ella consintió en esta espatriacion, para todos los efectos de las concesiones, de conservar su nacionalidad de oríjen; que ha habido en esto un contrato bilateral que debe respetarse; que es espontánea i personalmente como la Compañía ocurre ante este Tribunal Arbitral bajo el patronato de la Legacion de S. M. B.; que ella infrinje el compromiso suscrito por ella misma en un contrato al pretender que este Tribunal, llamado a reemplazar la accion diplomática, resuelva una cuestion que no es de su competencia;

Considerando: Que no se puede sostener que esta cláusula en los contratos, que escluye la accion diplomática, no se aplica sino a los efectos directos e inmediatos de las concesiones, es decir, a la construccion de las vías, a la fijacion de tarifas, etc.; que la resolucion de estos diferentes puntos está prescrita en otras disposiciones de los contratos i que los artículos 12 i 15 precitados, consagrando la renuncia a la accion diplomática, se ocupan exclusivamente de la trasferencia eventual que puedan hacer los primitivos concesionarios de todo o de parte de sus derechos del ferrocarril; que fluye evidentemente de los términos en que está concebido el pacto, que la condicion se aplica a todos los actos de la Empresa, mientras dure la concesion, comprendiendo tanto el período de esplotacion como el de construccion; que esta justificada interpretacion se desprende todavía del artículo 22 de la escritura de concesion de 11 de Julio de 1868. que constituye una comision

de arbitraje encargada de definir, sin ulterior recurso, todas las cuestiones litijiosas que pudieran surgir entre el Gobierno i los concesionarios; que la competencia de esta jurisdiccion especial es, según declaracion del mismo agente de Chile, jeneral, i se estiende a todas las dificultades que pudieran producirse entre las partes contratantes; que es esa jurisdiccion competente, constituida de comun acuerdo por las partes para resolver las cuestiones, por lo ménos, aquellas que nazcan de reclamaciones que se refieran a la primera concesion;

Considerando, que las reclamaciones de la Compañía se refieren pertinentemente a la materia misma de sus contratos, pues ellas persiguen la indemnizacion de daños causados durante la guerra civil por destruccion de su material i el uso u ocupacion de las líneas por los ejércitos de Chile.

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro británico, se declara incompetente para conocer en esta reclamacion, debiendo la sociedad reclamante ocurrir donde corresponda.

Santiago, 15 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—
ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 15 de Noviembre de 1895.
—Diego Armstrong, secretario.

VOTO ESPECIAL DEL ARBITRO BRITÁNICO.

El Tribunal Arbitral Anglo-chileno se constituyó para decidir todas las reclamaciones británicas motivadas por los actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la guerra civil que empezó el 7 de Enero de 1891, i terminó el 28 de Agosto del mismo año.

La *Compañía de Salitres i Ferrocarriles* cuya nacionalidad británica ha sido debidamente reconocida por el Gobierno de Chile, habiendo presentado una reclamacion motivada por actos i opera-

ciones de aquella naturaleza ejecutadas en la época tambien indicada. es óbvio que el Tribunal debiera tambien juzgarla.

La excepcion de incompetencia deducida por el agente de Chile se funda en lo prescrito en ciertas cláusulas de las concesiones, segun las cuales se les permitia a los concesionarios primitivos trasferir sus derechos i pertenencias a terceros, bajo condicion de que tales trasferencias se hicieran con la aprobacion del Gobierno del Perú i que si los cesionarios fueran extranjeros, quedarian éstos sometidos a las leyes del pais, sin poder recurrir a accion diplomática alguna.

Estas estipulaciones se refieren tan solo a la que es materia de la ejecucion de los contratos. i. por consiguiente, no pueden importar el que la Compañía se hubiere desprendido de su derecho para solicitar la proteccion que por su nacionalidad inglesa le corresponde, cuando fuere procedente, es decir, por actos ajenos a la ejecucion de los contratos.

El Tribunal, aun cuando reconoce la nacionalidad británica a la Compañía, se declara incompetente i no acepta el conocimiento de la reclamacion. Funda su resolucion en que la Compañía está privada del derecho de recurrir a la accion diplomática i, por consiguiente, de ocurrir a un Tribunal constituido por un convenio diplomático.

El infrascrito no puede aceptar estas apreciaciones i sostiene que el Tribunal es perfectamente competente para conocer de esta reclamacion. por cuanto las cláusulas de referencia no tienen el alcance que se les atribuye. Todavía mas, la presentacion a este Tribunal no era un recurso diplomático.

La Legacion de Su Majestad en Chile prestó su apoyo a la reclamacion. en conformidad al artículo 1.º de la Convencion de 1893; pero el propósito de este apoyo fué tan solo para establecer, en cuanto fuera posible. el carácter nacional de los reclamantes i, por consiguiente. su derecho para ser admitidos ante el Tribunal. Esto no puede negarse desde que los Gobiernos de la Gran Bretaña i Chile ajustaron la Convencion de 1843 con el objeto de que las reclamaciones británicas no fuesen materia de jestion diplomáticas, sino juzgadas por un Tribunal de Justicia, creado especialmente

para conocer de tales reclamaciones i que tuviera jurisdiccion concurrente con la de los tribunales ordinarios de Chile (artículos I i VI de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893).

La *Compañía de Salitres i Ferrocarriles* ha tenido, pues, derecho indiscutible para comparecer ante el Tribunal en su calidad de sociedad inglesa cuya propiedad sufrió perjuicios durante la guerra civil con el objeto de comprobar los hechos por los medios probatorios legales a fin de que, con el mérito de la prueba, se resolviera su reclamacion.

Santiago, 15 de Noviembre de 1895.—ALFRED ST. JOHN.



RECLAMACION N.º 35

BLAIR I C.ª

MEMORIAL

Ernesto A. Hübner por los señores Blair i Ca., segun poder que presentaré dentro de diez dias a V. E. digo: que la casa de Blair i Ca. es una sociedad comercial formada por los señores Juan Blair, Jerman Sillim i Edmundo Harrington, todos súbditos ingleses.

Durante el tiempo trascurrido entre el 7 de enero i el 28 de agosto de 1891, la sociedad de Blair i Ca. que tiene su domicilio en Iquique, no tomó parte alguna directa o indirecta en la guerra civil i no recibió asignacion alguna de ninguno de los partidos contendientes.

El 19 de febrero de 1891 Blair i Ca. tenían sus almacenes en Iquique, calle de Bolívar, núm. 11, almacenes que estaban amoblados con todos los efectos espresados en el inventario que acompaño.

Esos almacenes con todo lo que contenian se quemaron el espresado dia 19 de febrero a consecuencia de la batalla librada entre las tropas del Presidente Balmaceda i las del Partido Constitucional i especialmente a consecuencia del incendio ordenado por el

coronel Soto para desalojar las tropas que defendian el edificio de la Aduana.

Blair i C^a. no han recibido dinero ni compensacion alguna a cuenta de esta reclamacion, que no habia sido presentado anteriormente a ningun otro Tribunal.

El apoderado que suscribe en nombre de su mandante abona con juramento lo espuesto anteriormente, juramento que ha sido prestado ante el señor Frederick Kerr, vice-cónsul ingles en Santiago.

En virtud de lo espuesto anteriormente demando al Gobierno de Chile por la suma espresada en la cuenta que acompaño ascendente a seis mil cuatrocientos treinta pesos (§ 6,430) con intereses del 6% anual hasta el dia del pago efectivo.

Firmo.

ERNESTO A. HUBNER.

CONTESTACION

Excmo. señor:

Como ajente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion núm. 35, en la cual don Ernesto A. Hübner, a nombre de los señores Blair i Ca., demanda 6,430 pesos, mas intereses al 6%, valor atribuido a muebles i útiles de escritorio que se dicen quemados en un incendio durante el combate de Iquique, el 19 de enero de 1891.

1 No consta que los reclamantes sean súbditos ingleses, por lo que V. E. carece de competencia para conocer de esta reclamacion.

Ademas, el memorial no contiene respecto de cada uno de aquellos, las indicaciones o formalidades prescritas en el Reglamento de Procedimientos dictado V. E., defecto que hace inadmisibie la reclamacion.

2 No se han comprobado de ninguna manera los hechos que sirven de base a la reclamacion: ni que los reclamantes fueran dueños de los bienes indicados, ni que éstos se destruyeran en el

incendio referido, ni que tuvieran el valor enorme que el interes de parte les ha atribuido en pesos de 24 peniques.

Para no ser minucioso, llamo en particular la atencion a la última partida que figura al frente del inventario. Importa por sí sola 1,120 pesos, por una maleta con ropa, trajes de señora, joyas, etc. Seria interesante saber si esos trajes i joyas eran tambien de la Sociedad comercial Blair i Ca., i en caso afirmativo, por qué no estaban en la bóveda en que se salvaron libros i papeles, segun la citada protesta anexa.

Dice el memorial que dichos bienes se quemaron a consecuencia de la referida batalla, i especialmente, agrega, a consecuencia del incendio ordenado por el coronel Soto para desalojar las tropas que defendieron el edificio de la Aduana.

Niego terminantemente que el coronel Soto diera la órden que ahora se le atribuye sin prueba alguna. De ella nada dijeron los reclamantes en su protesta de 1891, que han acompañado al memorial; ántes bien, en dicha protesta espusieron lisa i llanamente la verdad, diciendo que sus establecimientos se habian quemado a consecuencia de las operaciones militares que tuvieron lugar ese día, lo que en parte confiesa el memorialista.

Aun considerando el incendio como obra del coronel Soto ejecutada para desalojar al enemigo de su posicion en la Aduana, el hecho tendria el carácter de una lejitima operacion de guerra que no afecta la responsabilidad de Chile.

Sobre este punto, me refiero a los antecedentes i observaciones de hecho i de derecho espuestas en la reclamacion número 1, del señor W. Perkins, análoga a la presente. Por no repetirme, me limito aquí a reproducir dichos antecedentes i observaciones en cuanto sean aplicables al caso presente.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

El apoderado de los señores Blair i C.^a, evacuando el trámite de réplica en el reclamo número 35 formulado por sus mandantes contra el Gobierno de Chile, tiene el honor de someter al elevado criterio del Tribunal las observaciones que siguen:

1 No presenté con el memorial documentos que justificaran la nacionalidad británica de los socios de la casa Blair i C.^a, porque no me imaginé que su nacionalidad fuera puesta en duda. No los presento ahora porque en el término que se me concede para replicar no he podido obtenerlos. Presentaré, sin embargo, los documentos correspondientes cuando el Tribunal se ocupe de esta causa.

Tampoco expresé en el memorial las circunstancias que individualizarían a cada uno de los socios de la casa Blair i C.^a, porque esos datos no son necesarios, según el inciso 1.º del artículo V del Reglamento, que manda espresarlos *en cuanto sea posible*, i yo no tenía esos datos al redactar el memorial i no los tengo ahora tampoco.

2 No presenté prueba con mi memorial acerca de los hechos que motivan la reclamación, porque esa prueba habría sido inoportuna en esa época; me esforzé poco en probar el dominio de Blair i C.^a sobre los bienes cuyo valor reclaman, porque mis mandantes los poseían i el poseedor es reputado dueño en todo país civilizado; cuando llegue el momento de rendir prueba entonces justificaré que los muebles cuyo valor se cobra fueron destruidos por la causa que espresa mi memorial i probaré también que son lejitimos los precios asignados en el reclamo a cada uno de aquellos muebles. Se sorprende el señor agente de Chile de que hubiera dentro de una maleta efectos cuyo valor alcanzaba a \$ 1,120 i de que esa maleta no fuera puesta en salvo dentro de la bóveda. Lo primero nada tiene de extraño si se considera el alto precio a que llegaron las mercaderías de todas clases en 1891, i lo segundo no es mui sorprendente porque para todo comerciante tienen mayor valor sus

libros i papeles que cualesquiera otros objetos, i es natural que trate de salvar primero aquellos que éstos.

El señor ajente de Chile niega la efectividad de los hechos que, segun el memorial, produjeron el siniestro i se estraña de que en la protesta otorgada en 1891 no se hiciera alusion alguna a la órden del coronel Soto que narré en mi memorial. Cuando el reclamante afirma un hecho i el ajente del Gobierno reclamado lo niega, la prueba es i será lo que viene a decidir la controversia. Si en la protesta de 1891 no se hizo alusion a la órden del coronel Soto fué porque los señores Blair i C^ª. no pudieron sospechar en aquella época la trascendental importancia de ese detalle.

3 El señor ajente de Chile pretende tambien que la espresada órden, aunque fuera efectiva, no impondria responsabilidad al Gobierno de Chile. Esta última afirmacion no tiene base alguna en derecho i a este respecto reproduzco lo que espuse en el reclamo número 33 del señor C. H. E. Bull.

A mi juicio, lo espuesto anteriormente i los hechos consignados en mi memorial, bastan para justificar en todas sus partes la presente reclamacion.

ERNESTO HÜBNER.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Nada tengo que agregar a lo dicho por mi parte en la contestacion, si no es la observacion de que los señores Blair i C.^ª forman una sociedad colectiva que, por haberse constituido i estar domiciliada en Chile i para negociar en Chile, es chilena. Se halla en el mismo caso que la de los señores Pettie i C.^ª, Brooking, Comber i C.^ª. etc. (reclamaciones núms. 29 i 49).

Me refiero por lo demas a lo dicho por mi parte en casos análo-

gos al presente, sobre el combate de Iquique de 19 de Febrero de 1891 (reclamacion núm. 1 i otras), i con ésto, termino aqui rogando a V. E. se sirva resolver como tengo pedido.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Ernesto A. Hübner, por la sociedad *Blair i C.*, formada por los señores Juan Blair, Jerman Sillem i Edmundo Harrington, reclama del Gobierno de Chile seis mil cuatrocientos treinta pesos (§ 6,430), mas intereses del 6 por ciento, por pérdidas sufridas en el incendio de Iquique, ocurrido el 19 de Febrero de 1891.

El ocurrente espone: que el 19 de Febrero de 1891 se trabó en Iquique un combate entre las fuerzas de mar i tierra congresistas i las fuerzas del Gobierno de Balmaceda; que a consecuencia de la batalla i especialmente a consecuencia de una orden del coronel Soto, se produjo un incendio en los edificios situados frente a la Aduana, con el propósito de desalojar las tropas congresistas parapetadas dentro de la Aduana; que el incendio cundió alcanzando luego la calle de Bolívar núm. 11, donde sus representados tenian almacenes, los que fueron consumidos por el fuego con todos sus efectos i mobiliario contenidos en ellos, pérdidas cuyo inventario acompaña i que estima en 6,430 pesos, mas intereses del 6 por ciento, valor que reclama del Gobierno de Chile.

Acompaña como comprobantes una protesta de Juan Blair, presentada ante el cónsul de S. M. B. en Iquique el 7 de octubre de 1891, en la que espone los mismos hechos contenidos en el memorial; pero atribuyendo al incendio de Iquique la única causa de ser consecuencia de las operaciones militares que tuvieron lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891.

El ajente de Chile, contestando, espone: que no consta que los reclamantes sean súbditos ingleses, por lo que el Tribunal es incom-

petente para conocer en esta reclamacion; que el memorial no cumple con las formalidades prescritas por el Reglamento, lo que hace inadmisibile la reclamacion; que no se han probado los hechos que sirven de base a la reclamacion, ni que los reclamantes fueran los dueños de los bienes indicados, ni que estos bienes fueran destruidos por el incendio, ni que tuvieran el valor enorme que se les atribuye; que niega la parte del memorial que dice que Soto ordenó el incendio de los edificios situados frente a la Aduana, hecho que se atribuye a Soto sin prueba alguna; que los reclamantes, en su protesta, en 1891, espusieron lisa i llanamente la verdad, diciendo que sus establecimientos fueron incendiados a consecuencia de las operaciones militares, lo que en parte confiesa tambien el memorialista; que aun siendo efectivo que Soto ordenara el incendio de esos edificios, con el propósito de desalojar al enemigo de su position en la Aduana, el hecho tendria el carácter de una lejitima operacion de guerra que no afecta la responsabilidad de Chile, que para no repetir, se limita a reproducir aqui los antecedentes i observaciones de hecho i de derecho espuestas en la reclamacion núm. 1, análoga a la presente; i, en conclusion, pide al Tribunal se declare incompetente para conocer de esta reclamacion, i, en subsidio, no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

En la réplica i dúplica se invocan los mismos puntos de hecho i de derecho, i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes, importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha, la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra, se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de las seis de la mañana, el coronel

Soto, del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de 300 hombres, para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un golpe de mano audaz;

Considerando: que el combate se empenó inmediatamente entre los beligerantes, i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana, que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construccion de material lijero i mui inflamable, habitadas por muchos extranjeros, entre los cuales se contaban los reclamantes;

Considerando: que en la protesta hecha por el señor Juan Blair, ante el Consulado Británico en Iquique el 7 de Octubre de 1881, declara que el incendio de los almacenes pertenecientes a la sociedad *Blair i Ca.* fué motivado a consecuencia de las operaciones militares que tuvieron lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que efectivamente resulta de lo espuesto que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos que estaban en el puerto; que este hecho se deduce, no solamente de la confesion del reclamante hecha el 7 de Octubre de 1891, sino tambien por declaracion del contra almirante ingles Hotham, que estaba en la bahía de Iquique aquel dia, declaracion inserta en el *Blue Book, Correspondance respecting the Revolution in Chile*, número 1, 1892, páj. 82;

Considerando: que la escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia, a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando, que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla, no solo por un golpe de mano, sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas de 1874*, art. 15.—Calvo, *Derecho Internacional teórico i práctico*, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, art. 756, núm. 4.—A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffcken. *Manual de Derecho de la guerra del Instituto de Derecho Internacional* citado por Hall, páj. 325.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, art. 55 bis);

Considerando, que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente; que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso previo a los habitantes de Iquique, puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el art. 16 de la *Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas*, 1874, i que exime del aviso previo.—(Bluntschli. *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, art. 554);

Considerando: que el memorialista, despues de decir que el incendio en Iquique el 19 de Febrero de 1891 se ocasionó a consecuencia de la batalla librada por las fuerzas de mar i tierra del partido congresista i las fuerzas del Gobierno de Balmaceda, atribuye al incendio otra causa i afirma que el coronel Soto dió la órden de prender fuego a los edificios situados frente a la Aduana con el propósito de desalojar al enemigo que estaba encerrado en ella;

Considerando: que resulta de todos los datos corrientes en autos que no puede atribuirse importancia séria alguna a estas nuevas alegaciones producidas por el ocurrente, para apoyar sus pretensiones; que no solamente el reclamante Juan Blair no atribuyó esta causa al incendio de Iquique, en su protesta otorgada ante el cónsul británico, poco tiempo despues de los sucesos, sino que ademas, ninguna de las personas lesionadas que han protestado ante el mismo cónsul en los meses de Junio, Julio, Agosto i Setiembre de 1891, han hecho alusion a este hecho i que el contra-almirante Hotham, en su comunicacion citada anteriormente, no dice una palabra del pretendido incendio voluntario atribuido al coronel Soto, sino que, al contrario, lo atribuye al bombardeo i al fuego nutrido que no cesó en todo el dia;

Considerando: que habiéndose levantado un sumario criminal judicial en Iquique en una época en que las pasiones políticas estaban todavia palpitantes, acerca de los hechos atribuidos al coronel Soto, la Corte de Apelaciones de Iquique absolvió a Soto, reconociendo que solo habia lijeras presunciones para condenarlo como autor del incendio;

Considerando: todavia, que aun cuando el coronel Soto hubiera mandado incendiar las construcciones ubicadas justamente en frente del lugar donde se encontraban resguardados sus enemigos i de donde disparaba sobre sus tropas, con la esperanza de desalojarlos mediante el incendio, habria tenido para ello derecho a virtud de las leyes de la guerra; que su propósito era obligar a las tropas que ocupaban la Aduana, a reembarcarse i refugiarse en los buques abandonándoles así la posesion de la ciudad; que el pretendido plan de repelerlos a la mar, mediante este recurso militar, no habria sido sino un medio lejítimo de defensa o ataque que no está prohi-

bido por las leyes de la guerra que autorizan el empleo de todos los medios de violencia contra las propiedades para reducir al enemigo con la única limitación que el medio empleado no sea desproporcionado al objeto que se persigue (William Edward Hall, *A Treatise on International Law*, Oxford, 1890, 3.rd edition, page 529 §. 184.—Fiore, *Derecho Internacional Codificado*, §. 1,053.—Bluntschli, *Le Droit International Codifié*. Traduction Lardy, Paris, 1886 art. 543 et 549);

Considerando: que estos hechos están corroborados por las declaraciones del capitán de la marina inglesa A. Lambton, confirmada por el contra-almirante Hotham en una carta dirigida al coronel Soto el 18 de Enero de 1892 i en la cual estos oficiales superiores de la marina inglesa que se encontraban en el puerto de Iquique el 19 de Febrero de 1891, dicen «que según todas las probabilidades, el incendio que tuvo lugar en Iquique fué la consecuencia natural de las operaciones militares exigidas por el ataque i defensa de la plaza, i que no vieron ni oyeron nada que pudiera hacerles creer que Soto había incendiado personalmente edificio alguno»:

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesión de esta ciudad, para cada uno de los beligerantes, bajo el punto de vista de los grandes recursos que podía proporcionarles la explotación i exportación del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicación rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminución del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destrucción de la propiedad privada en Iquique, en 19 de febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos legítimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile, que, como lo dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que la sufren. El Soberano debe equitativa-

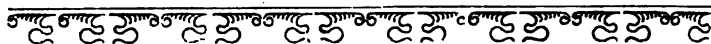
mente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho.» (Vattel, *Derecho de Jentes*, libro III, cap. IV, § 232.—*The Law of Claims against Governements*.—*House of Representatives*, 42 d.; *Congress Report* núm. 134, page 274, Washington, *Government Printing Office*; año 1875).

Por estos fundamentos, el Tribunal por mayoria de votos, disintiendo el árbitro ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de Chile.

Santiago, 6 de noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Trbunal en 6 de noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 36

HENRY JAMES MICHELL

MEMORIAL

Yo Henry James Michell, ciudadano de la Gran Bretaña, nacido en Swansea en el condado de Glamorgan, en aquella parte de la Gran Bretaña conocida como Gales, el día 21 de diciembre del año de Nuestro Señor mil ochocientos sesenta i seis i actualmente residiendo en la oficina *Valparaiso* en el canton de Huará de la provincia de Tarapacá i ocupado como ingeniero residente en la espresada oficina, reclamo el valor de *noventa i tres libras i dos che-lines moneda esterlina* (£ 93-2-0) del Gobierno de Chile conforme se espresa:

El siete de marzo del año de Nuestro Señor mil ochocientos noventa i uno, estaba empleado como ingeniero residente en la oficina *Buen Retiro*, en el canton de Pozo Almonte en la provincia de Tarapacá, en la República de Chile, i tenia en mi habitacion de la espresada oficina, los valores descritos en detalle en el inventario anexo marcado A, por valor de *noventa i tres libras i tres che-lines moneda esterlina* (£ 93-2 0). Al terminar la batalla que tuvo lugar en los alrededores i en la misma ciudad de Pozo Almonte ya citada mas arriba, el mencionado día 7 de marzo del año mil ochocientos noventa i uno, muchos de los oficiales i soldados derrota-

dos pertenecientes al Gobierno se replegaron sobre la oficina *Buen Retiro* i ahí procedieron a romper i saquear baules i otros muebles donde se guardaban efectos de uso personal con el objeto sin duda de proveerse de disfraces de paisano.

Mientras estaban en esta operacion fueron atacados por las tropas victoriosas del ejército constitucional i arrojados al traves de la oficina al desierto.

En esto yo i dos empleados mas de la oficina *Buen Retiro* nos fuimos a Pozo Almonte para pedir proteccion para la oficina a oficiales de responsabilidad del ejército victorioso, lo cual no solo nos fué negado sino que se nos hizo saber que si deseábamos salvar nuestras vidas, huyéramos inmediatamente para Iquique.

A nuestro regreso a la oficina citada, encontramos una partida de soldados armados del partido victorioso, en el momento en que saqueaban los almacenes, tienda i casa habitacion, apropiándose i destruyendo lo que contenian.

Viendo que era de todo punto inútil hacerles observaciones i sobre todo sumamente peligroso, nos escapamos con dificultad para Iquique.

Despues de cesar las hostilidades en los alrededores de Pozo Almonte, i tan pronto como creí que era compatible con mi seguridad personal, volví a la oficina de *Buen Retiro* i encontré que todo lo que me pertenecia, como está descrito en el inventario anexo (A) habia sido robado o destruido.

Yo no tomé parte en la guerra civil que tuvo lugar en la República de Chile el año de mil ochocientos noventa i uno. Yo no estuve al servicio ni recibí paga de ninguna de las partes contendientes en la mencionada guerra civil.

Tampoco he recibido dinero o compensacion alguna en abono de mi reclamacion ni la he presentado ántes de ahora a ningun otro tribunal.

En testimonio de lo espuesto remito las declaraciones de Henry Walter Polwhele, residiendo actualmente en la oficina de *Lagunas*, i la de Robert Lauderadle Maitland que reside actualmente en el puerto de Iquique, calle de Tarapacá; pero los cuales residian en la citada oficina de *Buen Retiro* el mencionado dia 7 de marzo del

año de Nuestro Señor de mil ochocientos noventa i uno, i para mayor testimonio firmo el presente de mi mano i lo sello hoi dia tres de abril del año de Nuestro Señor de mil ochocientos noventa i cinco.

H. J. MICHELL.

Jurado ante mí el 13 de abril de 1895.—(Firmado).—H. A. R. HERVEY.
(Sello).

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile contestando el memorial que formula la reclamacion núm. 36. tiene el honor de esponer lo siguiente:

El señor Enrique Jaime Mitchell reclama la suma de £ 93-2-0, en que estima el valor de ropa de su uso i objetos de tocador, que dice le fueron robados de la oficina *Buen Retiro* en que residia el 7 de marzo de 1891. Espone que este robo fué llevado a efecto por soldados dispersos del ejército derrotado en la batalla de Pozo Almonte que tuvo lugar en aquel dia.

1 El memorial aparece conforme con las prescripciones reglamentarias, salvo en cuanto al juramento, que no está prestado en la forma que prescribe el art. IX. V. E. tomará en cuenta esta falta, i le dará el mérito que crea justo atribuirle. El infrascrito piensa que la omision del juramento, que es a lo que equivale la forma en que aparece prestado, basta para no dar curso a la reclamacion, como sucede en las demandas ante tribunales ordinarios con el denominado juramento de *mancuadra*.

2 El señor Michell no acompaña antecedente alguno para com-

probar su nacionalidad. Esta omision es de suma gravedad, pues mientras no se establezca de un modo fehaciente que es un súbdito británico, no se le puede considerar como tal. Teniendo en consideracion que este tribunal no ha sido instituido sino para oír las reclamaciones de los súbditos británicos, V. E. ha de tener a bien declararse incompetente para conocer de la actual, mientras esté en cuestion la nacionalidad del reclamante; i así lo pido respetuosamente.

3 En cuanto a los hechos espuestos por el reclamante, el que suscribe no tiene noticia alguna de su efectividad. No sabe que haya sido saqueada la oficina *Buen Retiro*, o al ménqs el departamento de ella que dice haber ocupado el reclamante. Con relacion a éste, ha sido informado de que es ingeniero de la Empresa de Agua de Potable, empleo que seria incompatible con el que dice desempeñar en aquella oficina, i de que su residencia habitual es i ha sido siempre la ciudad de Iquique.

No puedo aceptar por mi parte el testimonio que invoca de los señores Enrique Walterio Polwhele i Roberto Lauderdale Maitland, que han declarado sin citacion mia, fuera de juicio i ante un funcionario a quien V. E. no habia comisionado para recibir esta prueba. El primero de los nombrados tiene ademas vivo interes en el éxito de esta reclamacion, puesto que por su parte ha formulado una análoga que lleva el núm. 40.

4 En la hipótesis de ser exactos los hechos aducidos por el reclamante, la demanda intentada es insostenible en el terreno del derecho. El mismo señor Michell declara que su ropa le fué robada por soldados derrotados que huían del enemigo victorioso en Pozo Almonte, i que trataban de proveerse de ropa de paisano para aprovechar el disfraz.

Se comprende fácilmente que despues de una batalla encarnizada i sangrienta como fué la que se libró el 7 de Marzo del 91 en Pozo Almonte, fuera imposible evitar que los derrotados cometieran desmanes como los que el señor Michell les atribuye. El vencedor tomó todas las medidas necesarias para perseguir a los fujitivos, porque así se lo aconsejaba la mas vulgar prevision. El parte que con fecha 13 de Marzo de aquel año pasó el jefe de Estado Mayor

al comandante en jefe del ejército constitucional consigna este hecho en las siguientes palabras: «Los restos de su tropa (la del Gobierno) diezmada por el combate i desmoralizada por la derrota, abandonaron la artillería en la estacion de Pozo Almonte i huyeron en dispersion por la pampa de Tamarugal. Allí los persiguió nuestra caballería.» (*Memorandum de la Revolucion de 1891*, Doc. núm. 31).

Si el ejército victorioso, persiguiendo al enemigo para impedir que pudiera reorganizarse, no logró alcanzar con su caballería a los fujitivos, mal pudo prevenir e impedir los desmanes que éstos dispersos i sin jefes, pudieran haber cometido. Ninguna responsabilidad puede imputarse al Gobierno a causa de que los jefes de aquel ejército no destacasen fuerzas suficientes con la celeridad que el caso requeria para proteger los intereses neutrales de la oficina de *Buen Retiro*. Basta saber que no le fué posible siquiera alcanzar al enemigo que hufa, operacion infinitamente preferente a la anterior en aquellas circunstancias.

En justificacion del Gobierno de Chile puedo citar la doctrina unánime de los tratadistas de Derecho Internacional, que eximen de responsabilidad a los Gobiernos por los actos que tienen lugar durante un movimiento revolucionario, que no le es dado reprimir. Recuérdesse al respecto la opinion frecuentemente citada de Calvo, Fiore, Bluntschli, Hall, Lawrence i Wharton.

Los tribunales internacionales análogos al presente no vacilaron en absolver a los Gobiernos, de quiénes se pretendia una indemnizacion por hechos que no les habia sido posible evitar. Basta para convencerse, recorrer las numerosas sentencias de los Tribunales anglo-americano i franco-americano que funcionaron en Washington despues de la guerra de separacion; de los anglo-chileno e italo-chileno de 1884 a 1888, que consagraron el principio que Wharton formula de esta manera: «Los actos cometidos por soldados o individuos que sirven al ejército, sin orden de sus jefes, no comprometen al Gobierno.» (Wharton, *International law Digest*, t. 2, § 225).

El Tribunal chileno-americano que funcionó en Washington en 1894 estableció la misma regla en la sentencia núm. 18, como base para todos los casos semejantes.

En vista de estas doctrinas i de tales precedentes, espero que V. E. se ha de servir rechazar la presente reclamacion, dado el caso de que se declare competente para juzgarla.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

La presente réplica será brevisima i por esto entraré en materia en seguida.

La observacion que hace nuestro contradictor acerca de la forma en que se ha prestado el juramento i la peticion que de ella deduce son improcedentes, en primer lugar porque lo esencial no es la forma del juramento sino el juramento mismo, i este fué prestado, i en segundo lugar porque la prestacion imperfecta del juramento no es motivo bastante, segun el Reglamento, para no dar curso a una reclamacion.

2 El argumento sobre la nacionalidad tendrá que ser desechado en definitiva en el caso actual, porque el reclamante presentará oportunamente pruebas bastantes para justificar su nacionalidad británica.

3 En nombre del reclamante declaro que oportunamente se rendirá prueba para justificar los hechos espuestos en el memorial e ignorados por el señor ajente de Chile. En esa misma oportunidad se ratificarán en forma legal las declaraciones prestadas por los señores Enrique Walterio Polwhele i Roberto Landerdale Maitland ante el cónsul ingles en Iquique.

La teoría del contendor de que no se tome en cuenta la declaracion de Polwhele por ser interesado en esta causa en razon de que este testigo ha presentado una reclamacion análoga a ésta es enteramente inaceptable porque está basada en un error. En efecto, Polwhele que tiene grande interes en su reclamo núm. 40 no tiene

bido por las leyes de la guerra que autorizan el empleo de todos los medios de violencia contra las propiedades para reducir al enemigo con la única limitacion que el medio empleado no sea desproporcionado al objeto que se persigue (William Edward Hall, *A Treatise on International Law*, Oxford, 1890, 3.rd edition, page 529 §. 184.—Fiore, *Derecho Internacional Codificado*, §. 1,053.—Bluntschli, *Le Droit International Codifié*. Traduction Lardy, Paris, 1886 art. 543 et 549);

Considerando: que estos hechos estan corroborados por las declaraciones del capitán de la marina inglesa A. Lambton, confirmada por el contra-almirante Hotham en una carta dirigida al coronel Soto el 18 de Enero de 1892 i en la cual estos oficiales superiores de la marina inglesa que se encontraban en el puerto de Iquique el 19 de Febrero de 1891, dicen «que segun todas las probabilidades, el incendio que tuvo lugar en Iquique fué la consecuencia natural de las operaciones militares exigidas por el ataque i defensa de la plaza, i que no vieron ni oyeron nada que pudiera hacerles creer que Soto habia incendiado personalmente edificio alguno»;

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad, para cada uno de los beligerantes, bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia proporcionarles la explotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

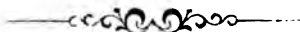
Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique, en 19 de febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos lejitimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile. que, como lo dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que la sufren. El Soberano debe equitativa-

mente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho.» (Vattel, *Derecho de Jentes*, libro III, cap. IV, § 232.—*The Law of Claims against Governements*.—*House of Representatives*, 42 d.; *Congress Report* núm. 134, page 274, Washington, *Government Printing Office*; año 1875).

Por estos fundamentos, el Tribunal por mayoria de votos, disintiendo el árbitro ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de Chile.

Santiago, 6 de noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Trbunal en 6 de noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.



para convencerse de que ninguna responsabilidad puede afectar al Gobierno de Chile por actos de depredacion ejecutados por soldados derrotados i fujitivos que huian dispersos sin reconocer jefe ni obedecer a la disciplina. Actos de esa especie no podian ser prevenidos ni evitados en las circunstancias difíciles en que ocurrieron. Esto no obstante, consta que se enviaron tropas en persecucion de los fujitivos, i es probable que gracias a esta medida, hayan podido evitarse mayores desmanes que los referidos por los reclamantes señores Michell i Polwhele.

El señor ajente británico funda toda su argumentacion del escrito de réplica en un principio que dice existe en todo derecho, segun el cual todo superior es responsable de los actos de sus subordinados. En caso de ser deficiente para su propósito un principio tan absoluto i jeneral, invoca tambien la equidad del tribunal para que le otorgue una indemnizacion a costa del Gobierno de Chile.

Habria sido conveniente, por lo ménos, que mi honorable colega se hubiese servido indicar las fuentes de que ha podido deducir la existencia del principio de derecho que ha tenido a bien formular. Declaro por mi parte que él llega por primera vez a mi conocimiento, siquiera en la forma incondicional i absoluta que se la atribuye.

Es cierto que por regla jeneral toda persona responde no solo de sus propias acciones, sino tambien del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado; pero esta regla tiene una limitacion importantísima que no puede dejar de ser tomada en cuenta al tratar de aplicarla. Esa limitacion consiste en que la obligacion cesa si usando de la autoridad i cuidado que su respectiva calidad le confiere i prescribe, no hubiere esa persona podido impedir el hecho. Nuestro Código Civil (art. 2320) establece la regla limitada en esta forma que casi testualmente he transcrito. Al establecerla se ha conformado con otro principio de derecho mui conocido, i que sirve de base a muchos otros: *Nemo tenetur de casu quem providere et cui providere non potest.*

En Derecho Internacional, la responsabilidad del Estado por actos de sus subalternos aparece aun mucho mas restringida. Dentro de los límites jurisdiccionales de un pais, segun Calvo, los ajentes de cualquiera especie de autoridad son *exclusiva i personalmente res-*

ponsables en la medida establecida por el derecho público interno de cada Estado. Cuando faltan a sus deberes, se exceden de sus atribuciones o infrinjen las leyes, ellos autorizan contra sí i a favor de aquellos cuyos derechos hubieren herido, el empleo de recursos legales, ya administrativos, ya judiciales, segun los casos; pero respecto de los terceros (los ofendidos), sean nacionales o extranjeros, la responsabilidad del Gobierno *es puramente moral*, i no podria transformarse en *efectiva* i *directa* sino en el caso de *complicidad* o *denegacion de justicia*.

En el caso actual seria contrario a toda nocion de justicia imputar a un Gobierno los actos de depredacion llevados a cabo por soldados dispersos i fujitivos i a raiz de una batalla sangrienta. La doctrina i la jurisprudencia están de acuerdo en eximir de toda responsabilidad a los Gobiernos en circunstancias semejantes. He tenido el honor de citar en mi escrito de contestacion las autoridades que sustentan esta doctrina, i cierto estoi de que no podrá invocarse una sola en sentido adverso. El Tribunal chileno-americano que funcionó en Washington en 1894 sentó como base de su sentencia número 18 que «los actos de simple merodeo o pillaje practicados por soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes no afectan las responsabilidades de los Gobiernos. Tales hechos son considerados como delitos comunes, sujetos solo a la represion penal ordinaria.»

Pero a falta de apoyo en el derecho, el reclamante ha tenido a bien acojerse a la equidad del tribunal. Con esto manifiesta un desconocimiento profundo de las reglas que han sido fijadas a los procedimientos i fallos del Tribunal por la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. El Tribunal debe resolver la jestion que ante él se promuevan con arreglo a derecho i no simplemente conforme a equidad. Esta cuestion está estensamente tratada en la dúplica de la reclamacion número 10 i en varias contestaciones presentadas. Inútil es volver a insistir en un punto sobre el cual debe ya el Tribunal haberse formado plena conciencia.

Si se tratara tan solo de consultar la equidad, debería comenzarse por indemnizar los perjuicios que la guerra civil ha ocasionado a todos los habitantes del pais, así nacionales como extranjeros. Seria

manifiesta la falta de equidad en que se incurriria concediendo a los unos lo que se ha denegado a los otros.

V. E. llamado a fallar conforme a derecho i a las prácticas establecidas, se ha de servir negar lugar a esta reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Henry James Michell, natural de la Gran Bretaña, reclama del Gobierno de Chile la suma de noventa i tres libras esterlinas tres chelines (£ 93. 3), valor de ropas de su uso, que dice le fueron robadas de sus habitaciones en la oficina *Buen Retiro* el 7 de Marzo de 1891.

El reclamante espone: que el dia 7 de Marzo de 1891 residia en la oficina *Buen Retiro*, Pozo Almonte, provincia de Tarapacá, teniendo en su habitacion los efectos descritos en un inventario anexo i cuyo valor ascendia a noventa i tres libras tres chelines (£ 93-3); que al terminar la batalla, que tuvo lugar en ese dia en los alrededores i en la ciudad misma de Pozo Almonte, muchos de los oficiales i soldados derrotados que pertenecian a las fuerzas del Gobierno se dirijieron a la oficina *Buen Retiro* i procedieron a romper i saquear baules i otros muebles donde se guardaba ropa, con el objeto, sin duda, de procurarse trajes de paisano, i que mientras estaban en esta operacion fueron atacados por las tropas victoriosas del ejército constitucional, las que les obligaron a huir al desierto; que él i otros empleados salieron de la oficina hácia Pozo Almonte para pedir proteccion a los oficiales del ejército vencedor, proteccion que no solo les fué negada sino que tambien se les hizo saber de que si apreciaban sus vidas huyeran a Iquique; que cuando regresaron a la oficina encontraron una partida de soldados arma-

dos del partido victorioso, que saqueaba los almacenes, tienda i casa-habitacion, apropiándose i destruyendo lo que contenian, que en vista de eso el reclamante i sus compañeros se dirijieron a Iquique; que tan pronto como cesaron las hostilidades volvió el reclamante a la oficina *Buen Retiro* i encontró que todo lo que le pertenecía habia sido robado o destruido.

Acompaña como comprobantes, una declaracion firmada ante el cónsul de S. M. B. en Iquique, sin fecha; de los señores Henry Walter Polwhele i Roberto Lauderdale Maitland que dicen ser verdad lo espuesto en el memorial; tambien agrega un inventario suscrito por el memorialista ante el cónsul de S. M. B. en Iquique el 3 de Abril de 1895 de los objetos que dice perdió de la manera ya espresada.

El agente del Gobierno de Chile solicita, en primer lugar, que el Tribunal se declare incompetente por cuanto Michell no ha probado su nacionalidad i, en subsidio, se rechace la reclamacion puesto que no se han probado los hechos; que sabe que el reclamante es ingeniero de la Empresa de Agua Potable de Iquique, lo que seria incompatible con su residencia en la oficina *Buen Retiro*, que los testimonios acompañados son inaceptables por la época i forma en que se han prestado i, ademas, el testigo Polwhele tiene vivo interes en el éxito de esta reclamacion, puesto que ha formulado una análoga; que aun suponiendo exactos los hechos aducidos, la demanda es insostenible en el terreno del derecho, por cuanto el mismo Michell declara que sus efectos fueron robados por soldados derrotados que huian del enemigo victorioso; que despues de la sangrienta batalla que se libró en Pozo Almonte en 7 de Marzo de 1891, habria sido imposible evitar que los derrotados cometieran desmanes; i que los fujitivos, segun el parte del jefe del ejército constitucional, i los restos de las tropas del Gobierno, desmoralizadas por la derrota, huyeron en dispersion; que el ejército victorioso no logró alcanzar con su caballeria a los fujitivos, i mal podia prevenir e impedir los desmanes que éstos, dispersos i sin jefes, pudieran haber cometido; que dado este antecedente, ninguna responsabilidad puede imputarse al Gobierno de Chile por ello, lo que está conforme con las doctrinas de todos los tratadistas de

Derecho Internacional, de los cuales cita varios; invoca tambien sentencias de tribunales internacionales análogos.

En la réplica i dúplica se debaten las mismas cuestiones de hecho i derecho, diciéndose en aquella que oportunamente se rendirá prueba para justificar los hechos espuestos en el memorial, i

Considerando: que el reclamante Henry James Michell se limita a decir en el memorial presentado a este Tribunal Arbitral, que el 7 de marzo de 1891, despues de la batalla de Pozo Almonte, muchos de los oficiales i soldados derrotados se encaminaron al establecimiento *Buen Retiro* i que con el objeto de procurarse trajes de paisano, se pusieron a descerrajar baúles i otros muebles donde se guardaba ropa de vestir; que el reclamante no regresó al establecimiento *Buen Retiro* sino cuando las hostilidades habian cesado i entónces constató que todo lo que le pertenecia habia sido robado o destruido;

Considerando: que las afirmaciones del reclamante son vagas e indeterminadas; que no da dato alguno que pudiera servir para identificar ni a los oficiales ni a los soldados que hubieren cometido los excesos por los cuales reclama; que ni aun indica los rejimientos a que pertenecian estos militares; que ni precisa siquiera si los presuntos excesos se cometieron el 7 de marzo, dia de la batalla, o despues de esta fecha, puesto que no constató el robo i la destruccion de sus efectos muebles sino algun tiempo despues, cuando regresó de Iquique;

Considerando: que en el memorial no se ofreció rendir la prueba sobre los hechos espuestos, en conformidad a las prescripciones del Reglamento de Procedimientos i que fué tan solo en la réplica cuando el reclamante declara, de una manera vaga, que «está dispuesto a rendir la prueba en el tiempo oportuno, de los hechos consignados en el memorial», pero sin precisar de una manera concreta estos hechos; que el dia de la vista de la causa no se renovó la solicitud de que se permitiera rendir la prueba i que, por consiguiente, no hai razon alguna para abrir de oficio un término probatorio, sobre todo cuando el reclamante conviene en que los excesos de que se pretende víctima lo cometieron soldados dispersos i fujitivos, hechos que no comprometerian la responsabilidad

del Gobierno a ménos que hubieran sido ordenados o tolerados por los jefes.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral por mayoría de votos, disintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente reclamación.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDÚNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Febrero de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.





Reclamacion N.º 37

GRAHAM, ROWE I C.

MEMORIAL

**Nombre i residencia
de los reclamantes.**

Graham, Rowe i Ca., comerciantes británicos, de Liverpool, con ramales en Lima i Valparaiso, representados en esta última plaza por Juan Eduardo Naylor, sometemos el siguiente reclamo a la consideracion del Tribunal Arbitral Anglo-chileno por destruccion de nuestra propiedad durante la guerra civil, comenzada el 7 de enero i concluida el 28 de agosto de 1891.

Neutralidad

No tomamos parte alguna directa o indirectamente en dicha guerra ni estuvimos al servicio ni recibimos pago de ninguno de los beligerantes.

Ningun arreglo previo

No hemos recibido dinero ni compensacion alguna a cuenta de nuestro reclamo, el cual no ha sido presentado a ningun otro Tribunal.

Efectos que orijinan el reclamo i monto del mismo.

Con fecha 19 de febrero de 1891 teníamos almacenadas en Iquique, en manos de los señores Pettie i Ca., calle Bolívar número 1-F, mercaderías por valor de mil catorce pesos, estimados a veinticuatro peniques, representando ciento una libras ocho chelines esterlinos segun nota detallada que acompañamos.

Fecha i modo de la destruccion.

Durante el combate librado entre la escuadra congresista i las fuerzas del Presidente Balmaceda, mandadas por el coronel Soto, el 19 de febrero de 1891, el almacén conteniendo nuestras mercaderías fué arrasado por un incendio, ocasionando la destruccion total de nuestra propiedad.

Propiedad contenida en almacén destruido deliberadamente con objetos estratégicos.

El almacén situado en la calle Bolívar número 1-F, en el cual estaban nuestras mercaderías, se encontraba entre los edificios destruidos por el fuego por orden del coronel Soto para facilitar su ataque sobre la Aduana que defendían denodadamente unos cuantos marinos congresistas.

El Ferrocarril del 11 de marzo de 1892 publicó los siguientes datos oficiales del cónsul alemán en Iquique: «Irritado por la resistencia del enemigo, el coronel Soto se dejó arrastrar por su enojo a la idea de dar orden de que se aplicase fuego a una manzana o grupo de edificios de los que existían frente a la Aduana. Se esperaba que el humo haría retirarse de la Aduana a los soldados de marina, lo cual se frustró por haber cambiado el viento. Mui pronto se propagó el incendio a otras manzanas, a dos o tres de las cuales igualmente

pusieron fuego los soldados de Soto. La conflagracion adquirió pronto, a causa de la construccion lijera de los edificios, grandes proporciones, i no tardaron en verse envueltas por las llamas mas de cuatro manzanas. El Cuerpo de Bomberos pretendió combatir el fuego, pero se le impidió por órden de Soto i aun se hizo fuego contra los bomberos.»

Especificacion exacta del reclamo.

En vista de lo espuesto, reclamamos al Gobierno de Chile la suma de mil catorce pesos (§ 1,014), estimados a veinticuatro peniques, representando ciento una libras ocho chelines (£ 101-8-0) a dicho tipo, mas los intereses sobre dicha suma, a razon de 6% anual hasta la fecha del pago.

GRAHAM, ROWE & C.^{as}

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar, con la brevedad que el caso merece, la reclamacion núm. 37, en la cual los señores Graham, Rowe i Ca. demandan 1,014 pesos al cambio de 24 peniques por peso, o sea £ 101.8.0, mas intereses, valor atribuido a ciertas mercaderías que se dicen destruidas en un incendio, durante el combate de Iquique el 19 de febrero de 1891.

Poco o nada tengo que argumentar contra esta reclamacion, que se condena por sí sola: no constan el estado i carácter de los reclamantes, ni el memorial se ajusta a las formalidades reglamentarias, ni la efectividad de los hechos está comprobada de modo alguno.

De paso diré que ya en la reclamacion núm. 29 los señores Pet-

tie i Ca. han reclamado por el valor de las mercaderías i objetos que tenían en el mismo almacén a que hacen referencia los actuales reclamantes.

La estraña forma en que el caso se presenta, me ahorra toda otra observación. Por eso, termino suplicando a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamación, i en subsidio, no dar lugar a ella o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

The
Secretary of the Honourable Tribunal of Arbitration.

Santiago.

Sir,

I have to advise you on the 20th Inst Messrs. Graham, Rowe i Ca. of Valparaíso informed me that they had decided not to push their claim against the Chilean Government for \$ 1014 for damages suffered in the fire of Iquique on the 19th February 1891.

I have the honour, to be, Sir, your obedient servant.

FREDERICK KERR,
British Claims Agent.

En sesión de 28 de Agosto de 1895 el Excmo. Tribunal aceptó el desistimiento.

DIEGO ARMSTRONG,
Secretario.



RECLAMACION N.º 38

PEDRO EWING

MEMORIAL

Excmo. Tribunal:

Pedro Ewing, industrial residente en Santiago de Chile, a V. E. respetuosamente digo: que, como consta del documento adjunto i de otros que acompañaré oportunamente, soi hijo de don Archibald Ewing i de doña Isabel Mac-Learn. Nací en St. Ninians Shirlingshire, Escocia, el 11 de Setiembre del año 1841, i soi, por consiguiente, ciudadano ingles por nacimiento.—Actualmente tengo mi domicilio en Santiago de Chile, en la avenida de Matucana número 31 i me ocupo en la fabricacion de galletas.

Con motivo de la guerra civil que se inició en Chile el 7 de Enero de 1891 i terminó el 28 de Agosto del mismo año, se cometieron por los agentes del Gobierno constituido en esa época, varios atentados tanto en mi persona como en mis propiedades, que me causaron gravísimos perjuicios i daños en mi salud, la de mi esposa, i en mis intereses.—La injusticia de los actos cometidos i la arbitrariedad de los procedimientos, ejecutados a sabiendas del carácter de súbdito ingles que me revestia, i que lo hice presente, me obligan a entablar el presente reclamo ante V. E.

Relacion

El lunes 15 de Junio de 1891 supe por algunos vecinos del barrio de Yungai que la casa de mi hijo Pedro Arturo estaba custodiada por policia armada; en el acto me trasladé allá para saber el motivo de este procedimiento; pero, cuando quise retirarme de la casa, la fuerza de policia me obligó a ir en contra de mi voluntad a la Comisaría de Yungai. Al llegar ahí, se me dijo por un oficial, que no era a mí sino a mi hijo a quien buscaban, i que mi prision habia sido motivada por una equivocacion de sus ajentes.

El miércoles 17 del mismo mes, a las cinco P. M. i en circunstancia que yo estaba atendiendo a mi señora esposa, quien se encontraba gravemente enferma en cama, se presentó un oficial de la 7.^a Comisaría i me comunicó que el señor comisario i un señor Quiroga me esperaban en la Comisaría para que prestase una declaracion referente a mi hijo Pedro Arturo.—En el acto accedí a la órden de la autoridad i me trasladé a la Comisaría.

Al llegar se me propuso por el señor comisario, que mientras no se encontrase a mi hijo tendria que permanecer en calidad de preso i que mi establecimiento industrial quedaria clausurado.

En el acto protesté de una manera enérgica de los procedimientos injustos e ilegales que se ejecutaban en contra de mi persona i de mis bienes, i presenté al señor comisario el certificado del ministro residente de S. M. B. en Santiago, señor S. G. Kennedy, que acompaño, en el que constaba que yo era súbdito británico. Acojiéndome a las disposiciones de la lei, que tanto protege a los extranjeros como a los chilenos, reclamé de la autoridad que me arrestaba i que clausuraba mi establecimiento, el auxilio i la proteccion que se me debia.

Apesar de hacer presente que el certificado que presentaba estaba refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en esa época, don Domingo Godoy, i que cumplia con todas las formalidades legales que se requieren para la validez de un documento de esa naturaleza, obtuve solo un rechazo de mi peticion, haciéndoseme presente que las autoridades superiores, constituidas

en esa fecha, i que habian ordenado mi prision i la clausura de mi establecimiento, cargarian con la responsabilidad de los actos que ejecutaban u ordenaban ejecutar.

En estas circunstancias reclamé el auxilio del ministro residente de S. M. B. en Santiago, i solo debido a la reclamacion diplomática que inmediatamente se entabló fuí puesto en libertad al dia siguiente, a las 4 P. M.

Los actos que dejo relatados trajeron consecuencias funestas para mi salud i para mis intereses. La prision, en las circunstancias i por los motivos que se efectuó, me acarreó una grave enfermedad que me hizo guardar dos meses de cama. Durante el curso de ella me asistieron los doctores Manuel Barros Borgoño, Isaac Ugarte Gutierrez, Félix Grönhert i Manuel A. Ríos.

En el trascurso de esta larga i penosa enfermedad, mis intereses fueron desatendidos por completo, pues me fué enteramente imposible ocuparme de la direccion de mi fábrica i atender con el esmero debido a mi numerosa clientela.

Por otra parte, la clausura de mi establecimiento durante dos dias, me ocasionó perjuicios de gran consideracion i de diversa naturaleza. Toda la materia prima en elaboracion que existia en la fábrica i que debia servir para la fabricacion de galletas, a fin de surtir mis establecimientos i atender los pedidos de provincia, se perdió por completo.

La clausura violenta de la fábrica, que no permitió a los trabajadores ni aun quitar el fuego de los calderos, ocasionó la quemadura de uno de ellos, cuyo valor asciende a quinientas libras.

Todos estos hechos contribuyeron para que durante mucho tiempo mi fábrica no pudiera tener el movimiento acostumbrado. Hubo que hacer nuevas provisiones de materia prima para reemplazar a la que se habia perdido. Se necesitó efectuar la compra de un nuevo caldero por haberse quemado e inutilizado el que anteriormente tenia, lo que paralizó casi por completo el funcionamiento de mi fábrica durante un mes. Mi clientela, no podia esperar por mucho tiempo que mis negocios volvieran al pié antiguo, hubo de

retirarse en gran parte para buscar otros establecimientos donde fuera mejor atendida.

Por último, durante todo el tiempo que fué necesario para que mi fábrica volviera a su antiguo movimiento, tuve que mantener el mismo número de empleados i trabajadores que existian ántes de la clausura. pues de otra manera se habrían dispersado o habrían buscado otras ocupaciones.

Los hechos que anteriormente dejo relatados. revisten aun mayor carácter de arbitrariedad, por cuanto yo no tomé parte ni directa ni indirectamente en la guerra civil, que comenzó en Chile el 7 de Enero de 1891.

Debo tambien hacer presente a V. E. que, ántes de ahora, no he entablado ningun reclamo por los daños i perjuicios que se me ocasionaron por los agentes del Gobierno, i que no he recibido ninguna suma de dinero, en compensacion de dichos perjuicios i tampoco he trasferido mi reclamacion a otra persona.

Prueba

Los hechos que he mencionado en este memorial, ofrezco probarlos de la siguiente manera:

Primero.—Mi prision puede comprobarse con la inspeccion que se haga de los libros llevados en la 7.^a Comisaría, el año 1891; pero éstos se estraviaron el 29 de Agosto de 1891.

1.^o Con los avisos publicados en esa fecha en el diario *La Nacion*.

2.^o Con la declaracion de los siguientes testigos:

Don Cárlos Simpson
» Antonio Cárdenas
» Diego Michell
» Miguel Prats
» Ricardo Pacheco
» Aníbal Tapia
» E. C. Spencer.

Segundo.—Mi enfermedad i el período de tiempo que ella duró pueden acreditarla los siguientes médicos:

Don Manuel Barros Borgoño
» Isaac Ugarte Gutiérrez
» Félix Grönhert
» Manuel A. Rios.

Tercero.—La clausura de mi Fábrica de Galletas durante dos dias consta de los libros llevados en la 7.^a Comisaría el año 1891; pero éstos se estraviaron el 29 de Agosto de 1891:

- 2.^o Con los avisos publicados en el diario *La Nacion*.
- 3.^o Con las declaraciones de los siguientes testigos:

Don Alamiro Novoa
» Enrique Silva
» Carlos Simpson
» Segundo Molina
» E. C. Spencer
» Manuel Saavedra.

Cuarto.—Sobre los daños experimentados en mi fábrica i sobre la quemadura de un caldero, pueden declarar los siguientes peritos:

Don Strickler i Kupfer
» Tomás Stillman
» Adolfo Tiggelist
» Diego Mitchell
» Adolfo Wegmann.

Las autoridades superiores que habia en esa época i a quienes he hecho referencia, eran el señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Domingo Godoi; el Prefecto de policía, don Juan Nepomuceno Rojas; el jefe de la 7.^a Comisaría, don Ramon Jarpa.

Todos ellos, así como los testigos que he enumerado, residen en la ciudad de Santiago; con escepcion solo del comisario Jarpa, de quien no se ha vuelto a saber despues de la terminacion de la guerra civil, i don Diego Mitchell que reside en Viña del Mar.

La cantidad, cuyo pago solicito del Gobierno Chile, i que espero que V. E. así lo ordenará, asciende a la suma de cuatro mil ochocientas libras esterlinas (£ 4,800), con sus intereses, descompuestos en la siguiente forma:

Por prision arbitraria i los vejámenes cometidos en mi	
persona	£ 1,500
Por mi enfermedad i pago de los médicos	1,500

Por los perjuicios i daños recibidos como sigue:

Clausura de la fábrica	800
Masa i materiales descompuestos	500
Un caldero enteramente quemado	500
Total	£ 4,800

Por lo espuesto, a V. E suplico que, habiendo por interpuesto este reclamo en contra del Gobierno de Chile, por los hechos que dejo mencionados, se sirva ordenar, con el mérito de los antecedentes i de la prueba que se rinda, se me abone por el Supremo Gobierno, la suma de cuatro mil ochocientas libras esterlinas, mas los intereses correspondientes a razon del 6 % desde la fecha de mi prision hasta la de la liquidacion.

PEDRO EWING.

CONTESTACION

El ajente del Gobierno de Chile procede a contestar el memorial en que don Pedro Ewing reclama la suma de 4,800 libras esterlinas en razon de perjuicios que dice haberle ocasionado la prision arbitraria a que fué sometido durante veintitres horas el 15 de junio de 1891.

1 Nótanse en el memorial las siguientes omisiones: no se espresa

cuál era la residencia del reclamante en la época en que ocurrieron los sucesos; no se dice si el reclamante estuvo al servicio de alguno de los combatientes o si recibió sueldo de alguno de ellos; ni se presta juramento en la forma que el Reglamento exige. Estas faltas dan por sí solas mérito para rechazar el memorial como lo suplico a V. E.

2 Opongo a la demanda del señor Ewing la escepcion previa de incompetencia del Tribunal, que fundo en dos causas: la falta de comprobacion de la nacionalidad británica del reclamante que yo le niego; i la naturaleza misma de la reclamacion que no es de aquellas que han sido sometidas a este Tribunal por la Convencion de 26 de setiembre de 1893.

Respecto del primer punto, el reclamante se limita a presentar un salvo-conducto espedido por el señor ministro residente de S. M. B. Este documento no ha sido otorgado con el objeto de establecer la nacionalidad del señor Ewing, ni pertenece a la clase de aquellos que sirven para este fin. Es un simple salvo conducto que se otorga a todos los que lo soliciten i a quienes el ajente diplomático preste fé de que son realmente súbditos británicos como ellos lo afirman. Pero esta aquiescencia del señor ministro de S. M. B. no obliga a otras personas, ni ménos a este alto Tribunal, que necesita pruebas directas de la nacionalidad, pruebas que hasta este momento no han sido exhibidas. Entretanto, V. E. que solo debe conocer de reclamaciones de súbditos británicos, no puede estimarse competente para entender en la presente.

Pero hai todavia otra razon igualmente poderosa para demostrar esa incompetencia. El art. 1.º de la Convencion de 26 de setiembre de 1893, instituyó este Tribunal de arbitraje para decidir las reclamaciones que, con motivo de los actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República, durante la guerra civil que empezó el 7 de enero de 1891 i terminó el 28 de agosto del mismo año i las motivadas por sucesos posteriores, fuesen de la responsabilidad del Gobierno de Chile. Ahora bien: la prision del señor Ewing, a estarse a su propia relacion, se verificó el 15 de junio de 1891, es decir, durante el período de la revolucion; pero ella no tuvo lugar con motivo de actos u operaciones

ejecutadas por las fuerzas de mar o tierra de la República. La ciudad de Santiago no fué teatro de ningun acto bélico, durante todo el tiempo que trascurrió desde el levantamiento de la Escuadra (7 de enero) a la victoria definitiva de la Placilla [28 de agosto]: no lo ha sido tampoco despues de esta fecha hasta el dia de hoi.

La prision del señor Ewing, si ella tuvo lugar, ha provenido de actos de las autoridades subalternas de la capital o, simplemente de la policia; i cualquiera que sea la responsabilidad que estos actos impongan, lo cierto es que no es ante V. E. donde debe perseguirse, sino ante los tribunales ordinarios del pais.

El señor Ewing es un antiguo residente; tiene hijos chilenos que desempeñan en Chile puestos públicos, i que prestaron servicios importantes a la causa de la revolucion: puede decirse que está asimilado a los mismos nacionales; i no se comprende cómo es que haya tenido la idea de ocurrir ante V. E. cuando sabe perfectamente que le están abiertas las puertas de nuestros tribunales, i que en ellos hallará justicia amplia i sobrada. Su adhesion al pais está demostrada por la franca simpatía que manifestó por la causa revolucionaria: precisamente llegó a hacerse sospechoso a las autoridades de Santiago, por haberse sorprendido a empleados o repartidores de su fábrica, distribuyendo en los cuarteles i en otras partes proclamas en que se incitaba al pueblo i al ejército a levantarse contra las autoridades, hecho que comprobaré a su tiempo con algunos de los testigos, cuyo testimonio él mismo ha invocado.

No puede, pues, el señor Ewing acojerse a su carácter de neutral; ni ménos puede ocurrir ante V. E. pretendiendo el amparo de una Convencion en cuyos términos no está comprendida la reclamacion que ha entablado. Los tribunales de arbitraje, sean nacionales o internacionales, son una excepcion al fuero comun; i su jurisdiccion debe por lo tanto interpretarse estrictamente, sin que en caso alguno sea dado ampliarla por analogia a asuntos diversos de los que espresa i taxativamente se enumeran en el acta de su creacion.

Por estas consideraciones, me permito rogar a V. E. que se sirva declararse incompetente para conocer de la presente reclamacion.

3 De los hechos espuestos por el señor Ewing en la relacion que hace en su memorial, hai algunos susceptibles de ser comprobados testimonialmente. Asi, la prision durante 23 horas, la enfermedad de dos meses, la pérdida de la sustancia que tenia preparada para la próxima hornada de galletas, la quemadura de un caldero i la paralización de la fábrica, son hechos materiales i tanjibles, sujetos al exámen i apreciacion de los testigos que puedan haberlos presenciado.

Lo que no cae bajo el dominio de los sentidos, lo que los testigos, cualquiera que sea su competencia, jamas podrán declarar a ciencia cierta, es la relacion que el señor Ewing pretende establecer entre aquellos hechos, i las deducciones de causa a efecto que trata de sacar de unos a otros. Para ello es menester formular un verdadero sorites filosófico, i marchar de deduccion en deduccion, partiendo de la prision del señor Ewing, hasta llegar a la pérdida de la materia prima, a la quemadura del caldero i a la fuga de la clientela. La prision habria causado la enfermedad; la enfermedad lo habria obligado a la reclusion en el lecho; esta reclusion le habria impedido atender su negocio i su fábrica; esta falta de atencion debió ser causa de que quedara encendido un caldero, i sin completar la elaboracion de la materia prima; el fuego produjo la quemadura del caldero, i el abandono de la materia prima la pérdida de ésta; la falta del caldero trajo una paralización en el trabajo; i esta paralización ahuyentó la clientela, sin disminuir por eso los gastos de la fábrica.

Por mucho que sea el respeto que se deba a Aristóteles i a su sistema de deduccion tan en voga en otra época, preciso es convenir que en una tan larga série de silojismos, es difícil no incurrir en error. Alguna de las premisas puede ser inexacta; alguna de las deducciones puede no ser perfectamente lójica; i cualquiera de estos defectos tiene que echar por tierra toda la argumentacion.

El señor Ewing no podrá probar que su enfermedad fué producida por una prision de 23 horas, llevada a efecto con las consideraciones que se debian a su persona. Por mi parte, puedo asegurar que la enfermedad consistió en un absceso que el cirujano hizo desaparecer, i que no le impidió asistir i vijilar su trabajo. Aún cuando

el reclamante hubiera guardado cama, jamas podrá convencer de que, siendo propietario i director de una gran fábrica, hubiera carecido de medios para hacer apagar un caldero, o concluir de cocer la masa preparada para las galletas. Méenos podrá creerse que la falta de un caldero, fácilmente reemplazable en este pais, paralizara el trabajo; ni se esplica que la menor actividad de la fábrica durante los dias necesarios para reemplazar un caldero, fuera causa precisa i necesaria de la pérdida de la clientela; ni menos que fuera necesario mantener en servicio durante la paralización del trabajo a obreros que no poseen conocimientos especiales i que se encuentran a cada paso en todas nuestras ciudades.

Me permito, pues, negar los hechos referidos por el reclamante, i las deducciones que de ellos infiere. No acepto por inverosímil, el gasto de 1,500 libras esterlinas hecho en médicos i remedios para curar el abceso de que padeció; ni tengo noticia de que en Chile los personajes de mayor fortuna hayan invertido veinte i tantos mil pesos de nuestra moneda, que es a lo que equivalen las 1,500 libras dado al cambio en aquella época, en la curacion de una sola enfermedad por grave i peligrosa que haya sido.

V. E. está llamado a apreciar si una detencion de 23 horas aun suponiéndola arbitraria e inmerecida, exige una compensacion de 1,500 libras; si la clausura durante dos dias de una fábrica, en que no se han despedidos los operarios manteniéndolos ociosos por mucho tiempo, i en que no hai sin embargo de quien disponer para que apague un caldero, vale 800 libras; si la masa i materiales preparados para la hornada del dia inmediato puede valer 500 libras; i si es posible estimar en esa misma suma el precio de un caldero usado probablemente durante mucho tiempo.

4. Pero dejo a un lado esta odiosa cuestion de hechos, en que la defensa se ve comprometida a manifestar la inverosimilitud i aun la imposibilidad física o moral de los que han sido alegados; para entrar en el terreno del derecho.

Es un principio de Derecho Internacional que nadie ha negado ni puesto en duda, que todo extranjero está sometido a las leyes del pais en que reside en todo lo que concierne a disposiciones de policia i de orden público. La situacion del extranjero a este respecto

no es ni puede ser mas cómoda o favorable que la del regnícola. Asi, pues, no tiene derecho a reclamar sino en los casos en que ese mismo derecho corresponda al ciudadano del pais.

Dado este antecedente, es el caso de preguntar ¿pudo el señor Ewing ser detenido en una comisaría mientras se averiguaba su responsabilidad en la reparticion de proclamas o impresos que excitaban a sublevarse contra el Gobierno de Santiago? Evidentemente la autoridad pública tenia el derecho de decretar la detencion. He dicho ántes que varios individuos habian sido sorprendidos repartiendo esos papeles, i que pudo averiguarse que ellos provenian de la fábrica de galletas del señor Ewing. Se trata entónces de saber si este acto pudo dar mérito para un juzgamiento, i si las sospechas que recayeron en el señor Ewing bastaban para decretar su detencion. A una i otra cuestion, puedo dar una respuesta afirmativa.

El Gobierno que imperaba en Santiago en la fecha de la aprehension del señor Ewing, puede considerarse como gobierno de hecho o de derecho. En este último concepto lo han estimado los tribunales del pais; i fuéralo o no, no puede ponerse en duda que a lo ménos era un gobierno de hecho. En tal carácter podia imponer su autoridad, i debia ser respetado por los neutrales i los que no tomaban parte en la contienda. Sublevarse contra él o inducir a la sublevacion eran hechos que caian bajo la sancion del Código Penal, pudiendo ser castigados en la forma señalada por este Código. Habiéndose imputado al señor Ewing, con razon o sin ella, que trataba de inducir a la tropa a un alzamiento, hecho que *prima facie* aparecia comprobado con la reparticion de proclamas sediciosas que salian de su establecimiento, el Intendente de Santiago libró una órden de aprehension en contra de él. ¿Este procedimiento estaba ajustado a la lei? Indudablemente: él estaba reconocido por el art. 8.º de la lei de 25 de Setiembre de 1884 que autoriza a los intendentes para dictar órdenes de arresto en casos como el de que se trata.

El intendente pudo equivocarse, i probablemente fué víctima de un error; pero obró dentro de sus facultades, con entera buena fé i sin el propósito de inferir un agravio al señor Ewing. Esto basta,

sino para justificar del todo su procedimiento, a lo ménos para eximir de responsabilidad al Estado.

Los tribunales análogos al presente han absuelto a los Gobiernos tratándose de hechos que reunian las circunstancias del actual. Cuando la prision ha sido a todas luces injusta e inmotivada han impuesto a los Gobiernos el deber de conceder una indemnizacion proporcionada al perjuicio ocasionado; pero cuando ha mediado causa razonable para decretarla, i cuando no se puede imputar mala intencion al acto calificado de arbitrario, no han vacilado en pronunciar un veredicto absolutorio. Por ser las mas recientes, me limito a citar el fallo N.º 13 espedido por el Tribunal Chileno-americano de Washington el 6 de Febrero de 1894 en la reclamacion del ciudadano chileno D. Ricardo L. Trumbull, i el fallo 26, espedido el 7 de Abril del mismo año, en la reclamacion de D. Gilberto Bennet Borden. En ámbos los Gobiernos, en cuyo pais se habia efectuado la aprehension de estos reclamantes, fueron absueltos. En ámbos se encontró una causa razonable para efectuar la prision, dejándose establecido que por «causa razonable» se entendia la existencia de tales hechos i circunstancias que den razonablemente lugar segun los hechos que estan en conocimiento del demandante, a creer que la persona acusada es culpable de la ofensa. I adviértase que la prision del señor Trumbull duró varios dias quedando en seguida arraigado en San Francisco de California, durante varios meses i esto mediante una fianza de 15,000 pesos; habiendo acontecido algo semejante al señor Bennet Borden quien tambien se quejaba de mal trato. Entre tanto, el señor Ewing solo estuvo detenido algunas horas, durante las cuales se le guardó la consideracion debida.

El Gobierno de Chile no puede ser responsable de este acto; i en ningun caso podria exijírsele indemnizacion en razon de los perjuicios indirectos, que el señor Ewing supone que le han sido causados por la detencion. Es doctrina corriente que tales perjuicios no dan derecho a indemnizacion segun los principios del Derecho Internacional. Ella quedó solemnemente consagrada por el Tribunal arbitral de Jinebra que falló las reclamaciones de los Estados

Unidos en contra de la Gran Bretaña; i ha sido puntualmente observada por otros tribunales análogos al presente.

5. El cobro de intereses no tiene tampoco base alguna razonable, desde que no previenen de un pacto, ni pueden considerarse como una indemnizacion por causa de mora.

Fundado en estos antecedentes, el ajente del Gobierno de Chile suplica a V. E. que, en el caso de declararse competente para conocer de esta reclamacion, se sirva negar lugar a ella en todas sus partes.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Pedro A. Ewing, por don Pedro Ewing, replicando a la contestacion del señor ajente de Chile en el reclamo que, ante V. E. tengo interpuesto por prision arbitraria i perjuicios, a V. E. digo: que se hade servir dar lugar en virtud de las razones espuestas en el memorial de mi reclamacion i que ahora paso a esponer.

1 Principia el ajente de Chile por notar en mi memorial las siguientes omisiones: no haberse espresado cuál era residencia del reclamante cuando tuvieron lugar los sucesos de la guerra civil; no decirse si el reclamante estuvo al servicio de alguno de los combatientes o si recibió sueldo de alguno de ellos; i no haberse prestado el juramento en la forma que exige el Reglamento.

Sobre ésto debo advertir a V. E. que en el memorial en que consta mi reclamacion está especificado que mi residencia en la época en que acontecieron los sucesos de la guerra civil, fué la ciudad de Santiago, i desde mi fábrica a la cual está anexa mi casa habitacion fué de donde se me redujo a prision, conduciéndome a la 7.^a Comisaría. En ese mismo memorial espuse no haber tomado ninguna parte, ni a favor ni en contra de la revolucion; no haber recibido sueldo de parte de ninguno de los combatientes no haber

percibido ninguna suma de dinero por reclamos entablados con anterioridad a este. El juramento ordenado por el artículo IX del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Arbitral Anglo-chileno lo presté ante el cónsul inglés que en este caso es la autoridad competente.

2 El agente del Gobierno de Chile opone a mi demanda dos escepciones. La primera consiste en la falta de comprobacion de mi nacionalidad británica; i la segunda en la naturaleza misma de mi reclamacion, que a su juicio, no es de aquellas que han sido sometidas a este Tribunal por la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Respecto al primer punto, el agente del Gobierno de Chile no se conforma con el documento agregado al memorial, en que consta mi carácter de súbdito inglés, por nacimiento, a pesar de haber sido espedido éste por el ministro residente de S. M. B.

Aunque el documento a que hago referencia es un certificado espedido por la autoridad competente, del cual consta la nacionalidad de un individuo, sin embargo, era lo bastante para cumplir con la primera parte del artículo IV del Reglamento el cual dice, que el memorial solo debe indicar si el reclamante es súbdito inglés por nacimiento o por naturalizacion. En cuanto a los datos que exige el artículo III de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, obran en poder del cónsul inglés todas las partidas respectivas a mi nacimiento i ciudadanía, las cuales debe acompañarlas dicho cónsul a su debido tiempo. Por los motivos espuestos no hai motivo fundado por parte el agente del Gobierno de Chile, no solo para negar, ni aun para dudar de mi carácter de súbdito inglés.

Respecto al segundo punto, es decir, si esta reclamacion cabe dentro de la clasificacion jeneral que hace el artículo I de la Convencion de 1893, espone el agente del Gobierno de Chile, que a su juicio mi prision verificada el 15 de Julio de 1891, no tuvo lugar con motivo de actos ejecutados por la fuerza de tierra de la República de Chile i alega que la ciudad de Santiago no fué teatro de ningun acto bélico, durante todo el tiempo de la guerra civil.

Principiando por contestar este acápite, V. E. debe tener presente que no son solo los actos que se ejecutan en los campos de

combate, los que segun la Convencion i los principios del Derecho Internacional dan derecho para entablar un reclamo, sino todos aquellos actos ejecutados con motivo de las operaciones bélicas i que irrogan perjuicios a un tercero de nacionalidad distinta de aquella adonde se ejecutan los actos, amparado por leyes especiales que reglan las relaciones que existen entre las naciones entre sí, i a la de una nacion para con los súbditos de otra.

Por otra parte, se dice, que mi prision provino de actos de las autoridades subalternas o sea de la policia de la capital i que por este motivo no puede reclamarse ante V. E. de los actos ejecutados por ella.

Aparte de que el mismo ajente del Gobierno chileno, reconoce la declaracion que hice en mi memorial de haber sido reducido a prision de orden de las autoridades superiores, no es aceptable la teoria sustentada por el ajente chileno en cuanto cree que por el hecho de haberse llevado a efecto la prision i los actos vejatorios por la policia o las autoridades subalternas no son responsables las autoridades superiores; en primer lugar, porque éstas son ajentes del Gobierno i obran por su inspiracion o por las órdenes que reciben i en segundo lugar porque ellos mismos declaran haber obrado por orden superior del Gobierno.

Ademas de esto, debe V. E. tener presente que mi prision llegó a conocimiento del Gobierno constituido en esa fecha i que solo mediante el reclamo formal del ajente de S. M. B. fuí puesto en libertad.

Se ha espuesto que por ser antiguo residente en Chile i por tener hijos nacidos en este pais, no tengo derecho a reclamar de las vejaciones que se cometan contra mi persona.

Para que esta teoria fuera efectiva, seria necesario que me hubiera nacionalizado, que hubiera adquirido la nacionalidad chilena para gozar de los beneficios que ella importa; pero por el contrario no solo no he perdido mi carácter de ciudadano ingles, durante los años que resido en este pais sino que aun he tenido la honra de ser presidente de la colonia inglesa en esta capital.

Tambien se ha objetado mi falta de neutralidad durante la época de la revolucion aduciéndose a este objeto que varios repartidores

i empleados de mi fábrica distribuian en los cuarteles i otras partes proclamas que incitaban al pueblo i al ejército a levantarse contra la autoridad.

Ignoro si ocultamente alguno de los empleados obedeciendo a sus ideas hubiera ejecutado esos actos, pero, sí puedo asegurar que para ello no se contaba con mi aquiescencia; pues, como súbdito inglés, he tenido siempre que observar la neutralidad declarada por mi Gobierno. Estimo que a este respecto son erróneas las informaciones del ajente chileno; pues, probablemente ha querido referirse a los trabajadores de la *Sociedad de Consumidores de Pan*, establecimiento que nunca me ha pertenecido i en el cual tenia injerencia uno de mis hijos.

Es tambien inaceptable la objecion de que un padre que no tiene la misma nacionalidad de sus hijos i que no ha querido naturalizarse en el pais en que ellos nacieron, tenga que arrostrar las consecuencias por las ideas políticas que ellos manifiestan, siendo que jamas los ha incitado a manifestarla en uno u en otro sentido.

3 Estoy de acuerdo con el ajente del Gobierno de Chile, en que los hechos materia de este reclamo son susceptibles de pruebas; pero no es aceptable la disertacion que hace respecto de que todos estos hechos relacionados íntimamente, como lo están entre sí, no pueden ser suficientes una vez probados para llegar a una conclusion, como la que contiene mi reclamacion.

Es evidente que los efectos que consisten en los perjuicios de que hago mérito en mi memorial han sido orijinados por las causas que en el mismo se apuntan; i aunque no sea del agrado del ajente del Gobierno de Chile el sistema de deducciones de Aristóteles, tendrá que convenir conmigo en que probadas las causas de mi prision, de la clausura de mi establecimiento i de la grave enfermedad que estos hechos me ocasionaron, son naturales i mui fáciles de probar los efectos que de estas mismas causas se orijinan.

Es antojadiza la aseveracion del ajente de Chile al afirmar que mi enfermedad consistia en un absceso que el cirujano hizo desaparecer, pero considero que estos hechos son materia de prueba i que, por consiguiente, ante el ánimo de V. E. tendran mas valor las declaraciones de los médicos que me asistieron que la afirma-

ción del señor agente de Chile, quien solo la hace en virtud de la obligación que tiene de defender los intereses de su país.

No serian presumibles los perjuicios irrogados con la pérdida de los materiales preparados para las galletas, el incendio de un caldero i los perjuicios orijinados con la paralización de los trabajos durante el tiempo necesario para reemplazar el caldero i los materiales i adquirir los trabajadores que se habian ido a otros establecimientos, sino se reconociera la causa primordial de la clausura de mi establecimiento.

Este hecho que probaré a su tiempo, debe comprender V. E. que acusa por parte de las autoridades chilenas, el ánimo preconcebido de orijinarme perjuicios; pues, si por sospechas de que personalmente yo hubiera influido en un movimiento revolucionario o bien, hubiera ayudado a mis hijos o a estraños para ejercitarlos o ejecutarlos, habria bastado con mi prision.

Por consiguiente, no es aceptable la opinion del señor agente de Chile al creer, que las simples sospechas que pudiera haber en contra de mi persona, autorizaba a los agentes del Gobierno para ejecutar vejaciones en mi contra, tanto personalmente, como en mis propiedades. Asi es como es inaceptable que los agentes de un Gobierno sean irresponsables por los actos que ejecutan, con mayor razón cuando son contrarios a las leyes que imperan en el país, i que nos aseguran perfecta igualdad con los chilenos, en lo que se refiere a las garantías individuales i a la inviolabilidad de la propiedad.

Cree exajerado el agente de Chile el cobro de £ 1.500-0-0 que hago por mi enfermedad i los gastos de médicos.

Es natural que asi sea, si fuera efectivo que mi enfermedad solo consistia en el abceso de que hace mencion el señor agente, pero como lo he espuesto en mi memorial esta enfermedad revistió tales caracteres de gravedad que no solo me hizo guardar dos meses de cama, sino que me dejó imposibilitado para continuar al frente de mis negocios, i trabajos, los cuales hube de conferirlos a mis hijos para poder hacer un viaje a Europa, a fin de restablecer mi salud que desde esa fecha ha quedado quebrantada.

V. E. comprende que no solo el pago de médicos es el que se en-

cuentra comprendido en esta cantidad, sino los graves perjuicios que por ella se me han originado, los cuales traducidos en una cantidad pecuniaria, tendrían un valor mucho mayor que los que actualmente cobro.

Respecto del cobro que hago por prision arbitraria i las vejaciones cometidas en mi persona, estimo que el señor agente del Gobierno de Chile, no es el llamado a apreciarlo. Cada uno es el que puede estimar lo que valen las ofensas que personalmente se le hacen i los vejámenes que arbitrariamente llevan a efecto las autoridades.

A este respecto V. E. debe tener presente lo que disponen las legislaciones extranjeras, especialmente la inglesa i la de los Estados Unidos, donde las injurias de hecho o de palabras no solo se castigan con penas gravísimas sino que se indemnizan con fuertes cantidades de dinero. Si el derecho penal privado entre los chilenos castigan estos delitos con fuertes penas, con mayor razon las leyes internacionales deben aplicarse, por las vejaciones que los agentes del Gobierno de una nacion cometan con los súbditos de otra.

Cree el agente del Gobierno de Chile que los perjuicios que se cobran no han existido en gran parte, por cuanto no fueron despedidos los operarios que trabajaban en la fábrica. A este respecto, V. E. debe tener presente, que habiéndoseme reducido a prision i clausurado mi establecimiento, los operarios no encontrando un patron con quien entenderse, se retiraron de la fábrica i fueron a buscar ocupaciones a otra parte. La clausura violenta de la fábrica, la ausencia de mis hijos, la enfermedad de mi señora i mi prision fueron los motivos que existieron para no impedir la pérdida de los materiales que estaban preparados i la quemadura del caldero.

No es efectiva la aseveracion del agente de Chile en cuanto cree que la masa i materiales perdidos eran los preparados para el dia inmediato; pues, siendo mi fábrica la proveedora de todas las galletas de la capital i provincias de Chile, debe V. E. comprender que se hacen trabajos i se preparan materiales en grandes cantidades.

Sobre el valor del caldero que se me inutilizó por completo, he ofrecido a V. E. las declaraciones de peritos, que son los únicos competentes en la materia.

4 Pasando a la cuestion de derecho, espone el ajente chileno, que todo extranjero, está sometido a las leyes del pais en que reside en todo lo que concierne a disposiciones de policía i órden público i que a este respecto su situacion es la misma que la de cualquier chileno.

Nadie puede poner en duda la evidencia de este principio que está escrito en la Constitucion, pero el señor ajente chileno debe convenir que como consecuencia de este principio los extranjeros que están sometidos a las leyes chilenas, lo están en todas sus partes; es decir, si segun ellos tienen obligaciones que cumplir, tambien tienen derechos que ejercitar i por consiguiente no se puede atentar contra sus personas ni contra sus propiedades, sino ajustándose estrictamente a las disposiciones que estas mismas leyes contienen.

Con esta diferencia: que el extranjero en los casos de una guerra interior no solo puede recurrir a los tribunales del pais en que reside, sino hacer presente su carácter de extranjero para que por los ajentes del Gobierno se tenga en consideracion la inviolabilidad de su persona i de su propiedad.

Sea que el Gobierno que imperaba en Santiago en la fecha de mi aprehension, fuera un Gobierno de hecho o de derecho, lo efectivo es que el Gobierno de mi pais reconoció su existencia, i en esta virtud se declaró neutral para los efectos de las operaciones que se ejecutaban en contra del otro Gobierno constituido. Este solo hecho importaba, que para los súbditos de S. M. B., residentes en Santiago i que habian reconocido la existencia de ese Gobierno debian rejir todas las leyes que garantizan la libertad de la persona i la inviolabilidad de la propiedad, de modo que sea que la órden de prision espedida en mi contra i la clausura de mi fábrica, fuera impartida por el señor intendente, por alguno de los señores ministros, o por la policía de Santiago, es el hecho que no fué dictada en forma legal i que no existía causa alguna para ejecutarla. Como he dicho anteriormente, la Convencion de 1803, al hablar de fuerzas de tierra, no distingue entre las tropas de línea movilizadas o de policía. Me basta hacer presente que tanto la capital como muchas otras provincias estaban en esa fecha declaradas en estado de sitio

i que por consiguiente en estos casos las personas i bienes de los extranjeros están amparados no solo por disposiciones de las leyes chilenas sino por los principios del Derecho Internâcional que reglan las relaciones entre paises.

No es admisible la alegacion de que los agentes del Gobierno pudieran equivocarse i que en todo caso obraban de buena fé; pues de esta manera vendria a declararse por completo la irresponsabilidad de los gobernantes i a abrírseles ancha puerta para que violaran las leyes i desconocieran en absoluto los convenios que son jeneralmente aceptados en todas las naciones.

No son conducentes ni tienen ninguna semejanza con el caso actual las citas que el agente chileno hace de algunas reclamaciones falladas por el tribunal chileno-americano de Washington, pues estas se refieren a actos ejecutados por individuos chilenos que violando la neutralidad declarada por los Estados Unidos ejecutaron actos que daban mérito para considerarlos como un delito internacional. Fué este el motivo, porque en Estados Unidos se decretó la prision de don Ricardo Trumbull, hasta poder averiguar los medios de que se valió para violar la neutralidad declarada en ese pais.

Por último V. E. debe tener presente que no es el número de horas de prision la que constituye la gravedad del delito, ni lo que puede fijar el monto de la indemnizacion sino la ilegalidad con que esa prision fué llevada a efecto i los perjuicios que ella orijinó.

V. E. tampoco débete aceptar las citas que se hacen de las declaraciones falladas por el Tribunal Arbitral de Jinebra en los reclamos entablados por los Estados Unidos en contra la Gran Bretaña por cuanto el orijen de ellos difiere por completo del actual.

§ El Reglamento de Procedimientos en su artículo VIII indica que debe hacerse distincion entre el capital i los intereses que se cobra. El fundamento del cobro de intereses se impone porque declarada la efectividad de los perjuicios la indemnizacion que por ellos se deben se retrotrae a la fecha en que esos perjuicios se orijinaron. I si solo ahora se pagan esta indemnizacion es porque solo a la fecha ha podido constituirse el Tribunal que debia fallar este reclamo.

En virtud de los fundamentos espuestos i de los documentos que

acompañó, suplico a V. E. que se sirva no dar lugar a esta declaracion de incompetencia pedida por el ajente del Gobierno de Chile i con el mérito de la prueba que se rinda declarar que ha lugar a mi reclamacion en todas sus partes.

P. A. EWING.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile tiene el honor de formular el escrito de dúplica en la reclamacion número 38 elevada por don Pedro Ewing.

1 Cree el reclamante que su memorial está perfectamente ajustado a las prescripciones del Reglamento. Como se trata de una cuestion de hecho, V. E. resolverá con la lectura del memorial si existen o nó en él las deficiencias que hice notar en mi contestacion. V. E. ha de resolver asi mismo acerca del mérito que pueda atribuirse a una demanda en que no se han llenado las condiciones señaladas por el Reglamento para considerarlas como tales. He formulado una peticion sobre este particular, i aguardo que se ha de servir V. E. pronunciarse sobre ella.

2 A la demanda del señor Ewing tuve el honor de oponer la escepcion de incompetencia del tribunal que apoyé en dos poderosas razones: no estar comprobado el carácter de súbdito británico que se atribuye el reclamante, i no tratarse de actos que constituyan operaciones de las fuerzas de mar o tierra de la República. La primera causal es *ratione personæ*, i la segunda *ratione materiæ*.

La incompetencia por razon del estado personal del reclamante ha sido rechazada por éste, fundándose en que su nacionalidad consta de documentos que obran en poder del cónsul ingles, quien habrá de acompañarlos a su debido tiempo. Esta declaracion importa, a mi juicio, la voluntaria i premeditada violacion del artículo 1.º del Reglamento, que manda acompañar con el memorial todos

los documentos probatorios. El reclamante dice que sus documentos están en poder del cónsul inglés, i en lugar de presentarlos al Tribunal, se reserva para entregarlos a última hora, es decir, cuando esté cerrado el debate, i mi parte imposibilitada para examinarlos i discutir el mérito que en derecho pueda atribuírseles. Por mi parte me opongo a que se agreguen tales documentos a los antecedentes de este juicio; i en caso de que el Tribunal resuelva lo contrario, se ha de servir concederme término especial para su exámen i redargucion. Muchos de los documentos hasta ahora presentados por el señor ajente británico, han dado lugar a graves observaciones; i probablemente se reserva para última hora la presentacion de otros a fin de evitar que sean observados i que se reduzca a lo que vale su verdadero mérito legal.

La incompetencia por razén de la materia no puede ser mas clara i manifiesta. La prision del señor Ewing i la órden, si la hubo, de cerrar su establecimiento, no son actos ni operaciones ejecutados por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la guerra civil de 1891, únicos que, segun el artículo 1.º de la Convencion, han sido sometidos a la jurisdiccion de este tribunal.

El reclamante sostiene, sin embargo, que tanto el Derecho Internacional como la Convencion dan derecho para entablar reclamos, por perjuicios provenientes no solo de actos llevados a cabo en el campo del combate, sino tambien de aquellos actos ejecutados con motivo de operaciones bélicas i que dañan a extranjeros.

Estoi de acuerdo con el reclamante en que el Derecho Internacional no pone restricciones al derecho de los extranjeros para deducir reclamaciones ante su propio Gobierno por motivo de perjuicios que se les irroguen por el Gobierno del pais en que residen con violacion de las reglas que el mismo Derecho establece. No solamente los daños ocasionados en la guerra, sino aún los que se sufren en pleno estado de paz pueden ser materia de reclamos justificados o injustificados. Restricciones indebidas de la libertad de comercio, servicio militar obligatorio i compulsivo o franca denegacion de justicia darian mérito sobrado para que un extranjero que fuese víctima de tales medidas, pudiese implorar la proteccion de su Gobierno, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de

paz. El Gobierno del reclamante podria pedir reparacion por la via diplomática i llegar a un arreglo con el Gobierno reclamado, arreglo que podria sin duda consistir en el sometimiento de la cuestion a un Tribunal de arbitraje. El Derecho Internacioal no obliga, sin embargo, a llegar a este desenlace; i no se pueden invocar los principios que lo constituyen para sostener que no hai otro medio de solucionar dificultades de este jénero.

Pero de que sea posible reclamar de todo acto violatorio de un derecho, no se deduce que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 haya abierto la puerta a toda clase de reclamaciones. La Convencion se celebró con el objeto esclusivo de resolver las que tenian su oríjen en actos u operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la revolucion de 1891. Asi consta de los antecedentes que dieron por resultado la celebracion de ese pacto internacional, i asi lo espresa literalmente el mismo testo de la Convencion.

La prision del señor Ewing no fué en sí misma un acto u operacion bélica, ni fué tampoco causada por actos u operaciones que revitiesen tal carácter. En la hipótesis de ser efectiva, ella habria ocurrido en un lugar en que no se desarrolló ninguna operacion militar; no habria tenido por objeto preparar alguna medida de esa especie, ni tampoco seria efecto de las que se llevaron a ejecucion. No se concibe, pues, de qué manera se pretende relacionar esa prision con los actos u operaciones de las fuerzas de la República.

La verdad es que se trata de una medida simplemente administrativa. Si ella fué violatoria de las garantias que las leyes acuerdan a todos los habitantes de Chile, el reclamante tiene espedito el camino para deducir ante nuestros tribunales de justicia las acciones que les correspondan pero carece del derecho a ser oido ante un tribunal especial constituido para conocer de reclamaciones de carácter mui diverso de la que ha presentado.

El señor Ewing manifiesta que el Gobierno de Chile es el responsable de su prision por cuanto sus agentes obraban obedeciendo a sus inspiraciones, i porque el hecho llegó a noticia del Gobierno mediante las jestion es entabladas por el representante de S. M. B. en Santiago. La afirmacion respecto del primer punto es entera-

mente arbitraria i debería ser comprobada; en cuanto al segundo basta la misma esposicion del reclamante que asegura fué puesto en libertad apénas reclamó de su prision el señor ministro Kennedy, para convencerse de la ninguna responsabilidad del Gobierno, que procuró i consiguió reparar el mal causado desde el instante que fué puesto en su conocimiento.

Por lo que hace a la neutralidad observada por el señor Ewing durante la contienda de 1891, ella aparecerá comprobada o desmentida con la prueba que habrá de rendirse en esta causa, dado caso que el Tribunal no aceptara la excepcion de incompetencia que tengo alegada. Desde luego i como un antecedente que puede arrojar luz sobre la materia, tomó nota de la declaracion que hace acerca de la participacion activa de sus hijos en favor de la revolucion, hecho que, por otra parte, es de pública notoriedad. No pretendo deducir de ese solo hecho la consecuencia de que el señor Ewing no fué neutral; pero es un dato importante que corroborará los demas que resulten de la prueba que oportunamente rendiré.

Por lo demas, el caso actual es exactamente igual al que se presentó con el número 351 ante el tribunal italo-chileno que funcionó en Santiago i que este falló el 18 de enero de 1888. Don Diego Felipe Schiattino reclamaba entre otras cosas, por su prision ordenada por el jeneral chileno que ocupaba la ciudad de Lima, prision que él calificaba de arbitraria. El Tribunal, considerando que solo le estaban sometidas las reclamaciones de súbditos italianos con motivo de actos i operaciones ejecutados por las fuerzas de mar i tierra de la República, i que la prision de Schiattino no podia reputarse hecho de esta clase ni consecuencia de una operacion bélica, sino un mero acto administrativo de los funcionarios establecidos en Lima, *jure belli*, por las autoridades de Chile, declaró que la reclamacion no estaba incluida en los términos de la Convencion i que por consiguiente era manifiesta la incompetencia del Tribunal. Otro tanto incumbe declarar en el presente caso en virtud de las razones i del precedente aducido.

3 Con relacion a los hechos en que se basa el reclamo, tuve ocasion de manifestar cuando contesté el memorial, la inverosimilitud de ellos i las diversas contradicciones que aparecen entre unos i

otros. Naturalmente negué toda fuerza a las que solo aparecian como resultado de meras deducciones hechas por el reclamante. Este cree que podrá probar que su prision le ocasionó una enfermedad i que a consecuencia de la enfermedad se fueron encadenando con la relacion de causa a efecto, una série sucesiva de hechos hasta llegar a los enormes perjuicios que cobra, los cuales con sus intereses pasan de noventa mil pesos de nuestra moneda.

Enhorabuena, aguardo esa prueba para el caso de que Tribunal se considere con jurisdiccion para conocer del reclamo. Por mi parte habré de comprobar tambien que la enfermedad no tuvo la gravedad que el señor Ewing le atribuye, ni fué causa de los sucesos posteriores de que hace emanar los perjuicios de que se queja.

Por lo que hace al monto de los perjuicios, estima el reclamante que el agente del Gobierno de Chile no es el llamado a valorarlo. Esta proposicion no podria ser tachada de inexacta, si a renglon seguido no sostuviese el señor Ewing que la única autoridad competente para apreciar los perjuicios es la misma persona que los ha sufrido. Sin embargo, invoca a continuacion disposiciones legales de Inglaterra i de Estados Unidos, i sin tomarse la molestia de indicar cuales son esas disposiciones, pretende que su caso sea juzgado en conformidad a las leyes de esos paises.

Por mi parte no abrigo la pretension de decir la última palabra sobre el monto de los perjuicios, porque sé que es al Tribunal a quien corresponde pronunciar la decision; pero tampoco creo que sea el reclamante el llamado a hacer la estimacion. Tanto el señor Ewing como el infrascrito tenemos el derecho de examinarlos i discutirlos. El Tribunal resolverá, no tampoco conforme a las leyes inglesas o norte-americanas, sino con arreglo a los principios del Derecho Internacional i a las prácticas i jurisprudencia establecidas por los tribunales análogos modernos de mayor autoridad i prestigio, como lo ordena el art. V de la Convencion.

4 A este respecto, tuve el honor de manifestar en mi contestacion cual habia sido la base adoptada por tales tribunales para fallar reclamaciones de la naturaleza de la presente. Esa base ha consistido en negar toda indemnizacion siempre que se hubiera procedido

a la aprehension del reclamante en virtud de antecedentes medianamente razonables, i no se pudiere imputar el acto a malicia o mala intencion de la autoridad que lo ejecutó. Cité al efecto dos fallos pronunciados por el Tribunal chileno-americano de Washington, que guardan perfecta analogía con el presente.

El señor Ewing cree que no existe paridad entre su caso i los que yo he citado como ejemplo, i que de todas maneras no se podia atentar contra su persona sin violar las leyes del pais que garantizan la libertad individual. Acerca de este último punto, es incuestionable que los extranjeros gozan en Chile de las mismas garantías personales que los chilenos; pero tambien es cierto que no se pueden apreciar los hechos con el mismo criterio cuando se juzga el caso por los tribunales del pais i con arreglo a las leyes nacionales, que cuando va a ser fallado por un tribunal internacional i en conformidad a los principios del Derecho de Jentes. Ningun pais sobre la tierra concede a las personas mayores garantías que los Estados Unidos de América. Ha habido, sin embargo, muchas quejas de prisiones arbitrarias entabladas ante tribunales internacionales como el presente; varias se dedujeron ante las comisiones anglo-americana i franco-americana en 1872 i en 1880. Otra se presentó al Tribunal chileno-americano de Washington por el ciudadano chileno don Ricardo L. Trumbull. En ninguno de los fallos que recayeron sobre esas reclamaciones, fueron tomadas en cuenta las leyes de Estados Unidos que amparan la libertad individual: siempre se falló aplicando los principios de que dejo hecho mencion. La sentencia recaída en la reclamacion del señor Trumbull deja constancia de que hubo causa razonable para el arresto de este caballero, de que no fué víctima de maltrato mientras estuvo arrestado i de que no hubo demora innecesaria en el juicio que se le siguió. La pronunciada en la de Gilberto Bennet Borden dice testualmente: «Aunque las autoridades chilenas hayan cometido un error al dar la orden de arrestar al reclamante, no se deduce de ello que alguna mala intencion haya obrado en ellas, ni que hubiese ausencia de causa razonable o una denegacion de justicia.» En virtud de estas razones, análogas a las que se tuvieron presentes en el caso del señor Trumbull, fueron absueltos respectivamente el

Gobierno de Estados Unidos i el de Chile por el Tribunal de Washington.

Idénticos motivos obran con respecto a la reclamacion del señor Ewing. Tambien en ella aparece que la corta detencion de este caballero fué ordenada por autoridades que tenian la facultad de arrestar segun la lei chilena, hubo antecedentes bastantes para sospechar en el primer momento que el señor Ewing coadyuvaba con sus actos al buen éxito de la revolucion; no medió malicia ni mala intencion en la órden que se dictó para aprehenderlo; durante su arresto fué tratado con toda consideracion i se le puso en libertad al cabo de veinte i tres horas, apenas la autoridad se convenció de que no habia pruebas suficientes para seguirle un proceso.

Parece, pues, incuestionable que en virtud de estos precedentes la sentencia que recaiga en la reclamacion de este caballero habrá de ser idéntica a la que dictó el Tribunal de Washington con relacion a los señores Trumbull i Bennet Borden.

No alegándose ninguna razon de derecho para justificar el cobro de intereses, me atengo a lo que sobre el particular tengo alegado en las demas reclamaciones, i pido a V. E. se sirva desechar la peticion formulada.

Por si el tribunal llegara a conocer del fondo de este negocio i hubiera de recibirse la causa a prueba, ofrezco por mi parte el testimonio de los señores D. Gregorio Cerda i Ossa, antiguo intendente de Santiago, D. Juan Nepomuceno Rojas, antiguo comandante de policía i D. Ramon Jarpa, jefe de comisaría, de los cuales los dos primeros residen en Santiago i el último en Chillan. Estos mismos testigos han sido ofrecidos por el reclamante. Me reservo el derecho de presentar algunos otros, cuya residencia se está averiguando.

Concluyo solicitando a V. E. se sirva declarar su incompetencia para conocer en esta reclamacion; i que, en subsidio, se sirva desecharla en todas sus partes.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Pedro Ewing, súbdito británico, fabricante de galletas, reclama del Gobierno de Chile la suma de cuatro mil ochocientas libras esterlinas, mas intereses, a razon de seis por ciento anual, desde el 17 de Junio de 1891 hasta la fecha del pago, por prision arbitraria, vejámenes a su persona, enfermedad consiguiente i cuenta de médicos, perjuicios i daños resultantes de la clausura de su fábrica ubicada en Santiago.

El reclamante refiere que el 15 de Junio de 1891 supo por algunos vecinos de su casa, Avenida de Matucana número 31, que la casa de su hijo Pedro Arturo estaba custodiada por policía armada, que en el acto se trasladó allá para informarse personalmente de los hechos, i cuando quiso retirarse de la casa de su hijo, la policía se lo estorbó i le condujo a la Comisaría, donde al llegar un oficial le dijo que quedaba en libertad, pues se le habia tomado a él por su hijo, que era a quien se buscaba; que el 17 del mismo mes, las 5 P. M., i cuando estaba su señora gravemente enferma en cama, se le presentó un oficial de la 7.ª Comisaría para decirle que el comisario lo esperaba en su oficina para que prestase una declaracion referente a su hijo Pedro Arturo, él obedeció inmediatamente la orden i cuando llegó a la Comisaría se le dijo que quedaba en calidad de preso mientras no se encontrase a su hijo, i que su establecimiento quedaria clausurado; que a pesar de hacer presente su calidad de súbdito británico i exhibir sus documentos justificativos refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se hizo caso omiso de todas sus protestas i que tan solo pudo conseguir su libertad al dia siguiente, a las 4 P. M., mediante jensiones diplomáticas del ministro residente de S. M. B. en Santiago; que estos actos le produjeron funestas consecuencias a su salud i a sus intereses; que la prision le acarreó una grave enfermedad que le obligó a guardar cama durante dos meses; que durante la enfermedad le fué imposible ocuparse de su fabrica i de atender a su clientela, i que la clausura de su establecimiento durante dos dias le hizo perder toda la materia prima que tenia dispuesta para

el trabajo, se le quemó un caldero, pues no se permitió a los trabajadores apagar el fuego cuando se les hizo salir para cerrar el establecimiento, i tuvo que comprar otro; que mientras se ocupaba de comprar i colocar otro caldero, su clientela se le dispersó i retiró en gran parte; i que como al protestar de la clausura de su establecimiento i prision se le dijo que las autoridades superiores i que habien ordenado esos actos cargarían con la responsabilidad de lo ejecutado u ordenado ejecutar, por este motivo reclama del Gobierno de Chile la suma ya mencionada, pues es la justa apreciacion de los daños que se le ocasionaron.

Ofrece como prueba de los hechos espuestos diversos testigos: descompone el total de la suma reclamada en distintos ítems que importan el perjuicio sufrido por cada uno de los capítulos precitados.

El ajente del Gobierno de Chile pide, en primer lugar, que se rechace el memorial porque no se conforma a las Reglas de Procedimientos, i, en segundo, opone a la reclamacion la excepcion de incompetencia del Tribunal por no haberse comprobado la nacionalidad británica del reclamante i por la naturaleza misma de la reclamacion, que no es de aquellas que están sometidas al Tribunal por la Convencion de 26 de Setiembre de 1893; que un salvoconducto espedido por el ministro residente de S. M. B. no es el documento que sirve para establecer la nacionalidad; que la prision i molestias que tuvo que soportar el reclamante no fué acto u operacion de las fuerzas de mar i tierra, segun la propia relacion del señor Ewing; que precisamente Santiago, donde ocurrieron los sucesos de que se lamenta el reclamante, no fué teatro de ningun acto bélico durante toda la guerra civil de 1891; que la prision del señor Ewing provino de un acto de policía que puede seguirse ante los tribunales ordinarios del pais i no ante un Tribunal Arbitral, que lo es de excepcion; que, por lo demas, se le habia hecho sospechoso el señor Ewing a la policía, porque ella sorprendió a empleados i repartidores de su fábrica distribuyendo carteles i proclamas revolucionarias, lo que ofrece comprobar con testigos; que niega los hechos aducidos por el señor Ewing i las deducciones que de ellos infiere; que llama la atencion a uno solo, para probar

la inverosimilitud de los demas, el de que su enfermedad le costó, en médicos i remedios, mil quinientas libras esterlinas, lo que equivalia al cambio de ese tiempo a veinte i tantos mil pesos; cosa nunca vista en Chile para curar un abceso que pronto se hizo desaparecer, que era la enfermedad que tuvo el señor Ewing; que en cuanto al derecho, la situacion del reclamante es todavía mas desfavorable, porque se trata de un acto de mera policía a la cual están sometidos tanto los extranjeros como los regnícolas i previsto por el artículo 8 de la lei de 25 de Setiembre de 1884 i que ya tribunales análogos han resuelto que un Gobierno no incurre en responsabilidad por actos llevados a cabo en las condiciones en que éste lo fué i cita a efecto varias sentencias pronunciadas por el Tribunal chileno-americano de 1893; que ésta es la doctrina corriente del Derecho Internacional que quedó solemnemente consagrada por el Tribunal Arbitral de Jinebra que falló las reclamaciones de los Estados Unidos de Norte América en contra de la Gran Bretaña.

Considerando: que el artículo primero de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, no somete a la consideracion de este Tribunal sino las reclamaciones motivadas por los actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra durante la guerra civil; que las partes contratantes no han querido evidentemente dar competencia a este Tribunal sino sobre las reclamaciones que se deriven directa o indirectamente de operaciones ejecutadas por los ejércitos i escuadras de la República; pero no sobre aquellas que se orijinan de actos ordenados durante la guerra civil por las autoridades administrativas i judiciales del país;

Considerando: que si el reclamante Pedro Ewing fué aprehendido el 17 de Junio de 1891 en Santiago, i detenido por ménos de un día en la Comisaría de policía de esta ciudad; esta aprehension no fué ejecutada por las fuerzas de mar i tierra de la República sino en conformidad a órdenes de las autoridades regulares del país, administrativas i judiciales, que obraban en virtud de mandato de la lei, a la cual están sometidos tanto los extranjeros como los regnícolas i todavía en una ciudad donde no tuvo lugar ningún acto de guerra; que las medidas que se tomaron en contra del reclamante, no cambian de carácter porque se ejecutaran durante el período

de la guerra civil, i que no puede racionalmente ser considerada por esta sola razon. como una operacion ejecutada por las fuerzas de tierra de la República.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por unanimidad de votos, se declara incompetente para conocer de esta reclamacion.

Santiago, 4 de noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 4 de noviembre de 1895.—*Diégo Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 39

FRANK MELTON FRAMES

MEMORIAL

Yo, Frank Melton Frames, súbdito británico, nacido en St. John's Wood, Lóndres, el 27 de Noviembre de 1861, ahora residente en la Oficina Lagunas de la provincia de Tarapacá, Chile.

Reclamo del Gobierno de Chile la suma de ciento cincuenta i dos libras diez chelines esterlinos (£ 152-10-0) por daños i perjuicios motivados segun paso a espresar.

El dia 19 de Febrero yo ocupaba cuartos de habitacion en el Hotel Ingles situado en la calle Luis Uribe, Iquique.

En la fecha arriba mencionada yo poseia en las piezas de dichos cuartos propiedad hasta el valor de ciento cincuenta i dos libras i diez chelines esterlinos, segun inventario adjunto.

En la batalla que tuvo lugar en Iquique en la mañana del 19 de Febrero de 1891 hubo un incendio, causando la destruccion del Hotel Ingles, entre muchos otros edificios i con el Hotel, de mi propiedad que al tiempo se encontraba en él.

El incendio que causó la destruccion de la manzana de la cual formaba parte el edificio del Hotel Ingles, fué sino realmente desde un principio orijinado por el coronel Soto oficial al mando de

las tropas del Gobierno, si fué estendido por directa accion de los soldados del coronel Soto i a la Compañía de bomberos que atendió prontamente para apagar el fuego, no se le permitió trabajar por órdenes del coronel Soto, quien tenía por plan de batalla el sofocar al enemigo que se encontraba reforzado en la Aduana i hacerlo salir a causa de la conflagracion de las manzanas inmediatas.

Yo no tomé parte en la guerra civil de 1891; yo no he servido ni he recibido pago alguno de ni uno ni otro de los partidos contendientes; yo no he recibido ni dinero ni ninguna otra compensacion a cuenta de mi reclamo; ni tampoco lo he presentado anteriormente para la consideracion de algun otro Tribunal.

En corroboracion de lo que dejo espuesto en este memorial de reclamo me permito someter para la consideracion del Tribunal Arbitral anglo-chileno, los documentos anexados, i si es necesario pueden presentarse como testigos Julio Guillermo Grundy i Alberto James Bennett.

Yo Frank Melton Frames, declaro solemnemente que este memorial de reclamo, es la espresion de la verdad en todas sus partes.

FRANK MELTON FRAMES.

Jurado ante mí el 13 de abril de 1895.—(Firmado).—H. A. R. HERVEY.

(Sello).

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como ajente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion número 39, en la cual don Frank Melton Frames demanda 152-10-0, valor atribuido a la ropa i otros pequeños objetos que se

dicen destruidos en un incendio, durante el combate de Iquique, el 19 de Febrero de 1891.

1 En la protesta anexa hecha aquel año en Iquique ante el cónsul inglés, se atribuye al reclamante el carácter de súbdito inglés por nacimiento. Por mi parte, no me es posible aceptar como legal i fehaciente ese medio de probar la nacionalidad, ya que no es propio de las funciones consulares reemplazar a los oficiales del registro civil, ni dar fé de los actos pasados ante éstos.

2 Segun esa protesta, el reclamante era en 1891 empleado de la Compañía de Ferrocarriles Salitreros; i segun el memorial, ocupaba entonces en el Hotel Ingles de Iquique cuartos de habitacion, o piezas de cuartos, como allí se dice en mui estravagante lenguaje. En esos cuartos, se agrega, tenia el reclamante los objetos enumerados en el inventario anexo, cuyo valor se hace subir a la suma reclamada, o sea, a mas de \$ 2,000 de nuestra actual moneda.

No faltaron, por supuesto, dos personas de buena voluntad que ocurrieron a confirmar ante el cónsul el día 8 de Abril lo aseverado por el señor Frames en su memorial presentado en el Consulado cinco días despues, durante los cuales pudo aquel ser rehecho muchas veces. Pero, no hai que insistir en este punto porque los testimonios de esos dos señores no pueden ser tomados en cuenta por V. E., atendidas las condiciones en que se han presentado.

No dejaré, sin embargo, de observar que aquellos, los señores Grundy i Bennet, se titulan representantes respectivamente de las casas comerciales de North & Jewell i de F. G. Clark, las cuales figuran tambien entre los reclamantes por la misma causa que el señor Frames.

En esta reclamacion todo, i principalmente el exámen del titulado inventario, deja en el ánimo la impresion de que no se trata de un capitalista. Todo hace creer que el señor Frames era un honorable pero modesto empleado, que debia ganar reducido sueldo, i que no tenia para qué ni con qué ocupar varios cuartos en un hotel sobrando uno para su ropa i demas lijeros objetos inventariados, a los cuales, sin duda por afeccion, atribuye un valor que los estraños calificarian de loco. Si hubiera detallado mas su reclamacion, como el Reglamento lo indica, nos habria sacado en parte de dudas di-

ciéndonos, por ejemplo, que empleo tenia, que sueldo ganaba, que pension pagaba por sus cuartos, etc.

Como quiera que sea, no ha probado el señor Frames ni que fuera dueño de los bienes indicados, ni que éstos se destruyeran en el incendio referido, ni que tuvieran el valor enorme que su interes o su afeccion les ha atribuido.

3 Dice el memorial que, si el incendio destructor no fué desde un principio orijinado por el coronel Soto, se propagó por directa accion de los soldados de éste i se impidió trabajar a los bomberos por órdenes del mismo coronel, a quien el memorial atribuye el plan de sofocar al enemigo i hacerlo así salir de la Aduana.

Niego terminantemente que se verificaran tales hechos i que el citado coronel diera tales órdenes, que ahora se le atribuyen sin prueba alguna.

De eso nada dijo el reclamante en su referida protesta de 1891; ántes bien, en ella como en el principio del citado inventario, espuso lisa i llanamente la verdad el señor Frames diciendo que el incendio fué consecuencia de las operaciones militares, esposicion confirmada por los citados señores representantes de North & Jewell i de F. G. Clark.

4 Aun considerando el incendio como obra del coronel Soto, ejecutada para desalojar al enemigo de su posicion en la Aduana, el hecho tendria el carácter de una lejítima operacion de guerra que no afecta la responsabilidad de Chile.

Sobre este punto me refiero a los antecedentes i observaciones de hecho i de derecho espuestas en la reclamacion número 1, del señor W. Perkins, análoga a la presente. Por no repetirme, me limito aquí a reproducir dichos antecedentes i observaciones en cuanto sean aplicables al caso presente.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva negar lugar a la admision de esta reclamacion, o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

El agente del Gobierno británico, cumpliendo el trámite reglamentario, presenta la siguiente réplica en esta causa.

1 El señor agente de Chile principia por desconocer el carácter de súbdito británico que tiene el señor Frames.

Como este caballero no se pudo imaginar que se desconociera un hecho perfectamente notorio, como es su nacionalidad británica, no creyó necesario presentar documentos para comprobarlo. Viendo que se le desconoce su nacionalidad británica, ha resuelto comprobarla plenamente; pero como no era posible hacer llegar los documentos necesarios en los 30 días que tiene para replicar, los presentará cuando V. E. se ocupe de esta reclamación.

2 Mi distinguido contradictor, argumenta también diciendo que el señor Frames no ha probado que fuera dueño de los objetos cuyo valor reclama. A esto contestaré diciendo que la prueba habría sido i es estemporánea, i que hai un axioma de derecho universal el que en frances dice: *possession vaut titre* i en castellano se espresa con la frase *el poseedor es reputado dueño*.

Se dice también que el reclamante no ha probado que los objetos cuyo valor reclama fueron destruidos en el incendio del 19 de Febrero de 1891, en Iquique. No lo hemos probado todavía, pero lo probaremos oportunamente.

Se tacha también de excesivo el valor que el señor Frames asigna a los objetos destruidos. Si, con criterio imparcial, se estudia el inventario i tasación que el reclamante acompañó a su reclamo, se verá que el valor asignado a cada uno de los objetos es el mismo que esos objetos tienen ordinariamente.

3 El señor agente de Chile niega terminantemente el hecho imputado en el memorial al coronel Soto. Por mi parte, insisto en la efectividad del hecho de que se trata.

Como una de las partes afirma un hecho i la otra lo niega, la prueba es lo que viene a decidir la controversia. En el caso actual, a ella me remito; i cuando ella se produzca verá el señor agente de

Chile que estaba mal informado, i que la orden que atribuimos al coronel Soto, es perfectamente efectiva.

4 Se dice, por último, que el hecho a que venimos refiriéndonos, en caso de ser efectivo, importa un acto lejítimo de guerra, i por consiguiente, no impone responsabilidad alguna al Gobierno de Chile.

Negamos en absoluto la lejitimidad de esta aseveracion.

Suponiendo (sin admitirlo i simplemente para los fines de la discusion) que el incendio en Iquique del 19 de Febrero de 1891 fuera un acto lejítimo de guerra mientras que con ello pudo esperar el coronel Soto obligar a los defensores de la Aduana a rendirse, de ninguna manera se podria justificar la orden que dió dicho coronel, prohibiendo a los bomberos apagar el incendio despues de que el viento habia cambiado de direccion i llevaba las llamas en sentido contrario. Un acto de esta naturaleza no puede aceptarse jamas como una operacion lejítima de guerra, i el Gobierno de Chile no puede eludir su responsabilidad por las consecuencias de aquel acto.

Con lo espuesto espero que el Excmo. Tribunal se ha de servir aceptar en todas sus partes el presente reclamo.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. señor:

Vista la réplica de mi honorable colega sobre esta reclamacion, relativa al combate de Iquique de 19 de Febrero de 1891, declaró que nada tengo que agregar a lo dicho por mi parte en la contestacion a la misma i en las otras diversas reclamaciones motivadas por el referido suceso, principalmente en mi dúplica recaida en la reclamacion núm. 1.

Reproduciendo aqui todo aquello, en cuanto fuera aplicable al caso presente, termino suplicando a V. E. se sirva resolver como tengo pedido, negando lugar a esta reclamacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Frank Melton Frames, súbdito británico, nacido en St. John's Wood, Lóndres, reclama del Gobierno de Chile ciento cincuenta i dos libras esterlinas diez chelines (£ 152-10) por pérdidas sufridas en el incendio ocurrido en Iquique el 19 de Febrero de 1891.

Esponde el reclamante que el 19 de Febrero de 1891, se trabó en Iquique un combate entre las fuerzas del Gobierno de Balmaceda i las del partido congresista, i que el coronel Soto, jefe de las fuerzas del Gobierno, dió orden de incendiar unos edificios situados frente a la Aduana con el propósito de sofocar al enemigo que estaba reforzado en la Aduana i obligarlo a evacuarla; que los bomberos trataron de apagar el incendio i que se les impidió por orden del mismo coronel Soto; que el incendio cundió rápidamente alcanzando hasta el edificio del Hotel Ingles, situado en la calle de Luis Uribe, donde el reclamante ocupababa unas piezas; que el incendio consumió toda la casa perdiendo el reclamante bienes por valor de ciento cincuenta i dos libras esterlinas diez chelines, cantidad que reclama del Gobierno de Chile.

Acompaña como comprobantes una protesta hecha por el reclamante ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique el 25 de Setiembre de 1891, i una declaracion de los testigos Julio Guillermo Grundy i Alberto Santiago Bernnett, prestada ante el citado cónsul británico, en 8 de Abril de 1895, en la que afirman ser efectivos los hechos espuestos en el memorial por el reclamante.

El ajente de Chile, contestandó, espone: que el reclamante no ha

acreditado su carácter de súbdito británico; que no ha probado ser el dueño de los bienes que dice haber perdido, ni que estos bienes fueran consumidos por el incendio, ni que tuvieran el valor enorme que les atribuye; que niega que el coronel Soto diera la orden de prender fuego a los edificios situados frente a la Aduana, hecho que se afirma sin prueba alguna i niega tambien que Soto diera orden de impedir a los bomberos que apagaran el incendio; que aun siendo efectivo que Soto diera esas órdenes, con el propósito de sofocar al enemigo mediante el fuego i obligarlo a desalojar la Aduana donde estaba guarecido, tal hecho tendria un carácter de operacion léjítima de guerra que no comprometeria la responsabilidad del Gobierno de Chile; que por no repetir, se refiere a las observaciones de hecho i de derecho espuestas en la reclamacion número 1, análoga a la presente; i en conclusion pide al Tribunal no dé lugar a la admision de esta reclamacion o la deseche en todas sus partes;

En la dúplica i réplica se debaten los mismos argumentos de hecho i de derecho sustentados en el memorial i en la contestacion, i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres, mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero ya ántes de las seis de la mañana el coronel Soto del Ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un golpe de mano audaz;

Considerando: que el combate se empenó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balma-cedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable, habitados por muchos estranjeros, entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que en la protesta hecha por el reclamante ante el cónsul de S.-M. B. en Iquique el 25 de Setiembre de 1891, declara que «a consecuencia de dicho bombardeo i batalla e incendio, ocasionado por ello, dicho Hotel Ingles fué totalmente destruido i con él mismo todos sus bienes»;

Considerado: que efectivamente resulta, de lo obrado en autos, que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos que estaban en el puerto; que este hecho se deduce no solamente de la confesion del reclamante, sino tambien por declaracion del contra-almirante ingles Hotham que estaba en la bahía de Iquique en aquel dia, inserta en el *Blue Book, Correspondance respecting the Revolution in Chili* núm. 1, año 1892, página 82;

Considerando: que la escuadra chilena, anclada al frente de Iquique, tenia a virtud de las leyes de la guerra el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla no solo por un golpe de

mano, sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un beligerante el derecho de bombardear a una ciudad fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra en la conferencia de Bruselas de 1874*, art. 15.—Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, art. 756, núm. 4.—A. J. Hestter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffcken, *Manual de Derecho de la Guerra del Instituto de Derecho Internacional citado por Hall*, páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, art. 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin prévio aviso, no es aplicable al caso presente; que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso previo a los habitantes de Iquique puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la *Declaracion Internacional* sobre las leyes i usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas, 1874, i que exime de aviso previo.—(Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, artículo 554.)

Considerando: que en su memorial presentado al Tribunal Arbitral i redactado mas de tres años despues de los sucesos, el reclamante, Frank Melton Frames, desdiciéndose de sus anteriores declaraciones, atribuye al incendio de Iquique otra causa i sostiene que el coronel Soto, que comandaba las fuerzas asaltantes, dió la

orden de prender fuego a los edificios que estaban enfrente de la Aduana, donde se encontraban reconcentradas las tropas del partido congresista en la esperanza de que el incendio obligaria a los soldados de la Escuadra a abandonar los edificios de la Aduana i regresar a los buques, que el Cuerpo de bomberos trató de sofocar el incendio i se le impidió por orden del coronel Soto;

Considerando: que resulta de todos los datos corrientes en autos que no se puede atribuir importancia seria alguna a estas nuevas alegaciones producidas por el reclamante para apoyar sus pretensiones; que no solamente no atribuye esta causa al incendio de Iquique en su protesta otorgada ante el cónsul británico poco despues de acaecidos los sucesos, sino que ademas ninguna de las personas lesionadas que han protestado igualmente ante el citado cónsul británico en Iquique en los meses de Junio, Julio i Setiembre de 1891, hicieron alusion a este hecho que atribuye ahora al coronel Soto; i que el contra-almirante británico Hotham en su comunicacion citada anteriormente no dice una palabra del pretendido incendio voluntario sino que lo atribuye, al contrario, al bombardeo i al fuego nutrido que no cesó en todo el dia;

Considerando: que habiéndose levantado un sumario criminal judicial en Iquique en una época en que las pasiones políticas estaban todavia palpitantes, acerca de los hechos atribuidos al coronel Soto, la Corte de Apelaciones de Iquique absolvió a Soto, reconociendo que solo habia lijeras presunciones para condenarlo como autor del incendio;

Considerando: todavia que aun cuando el coronel Soto hubiera mandado incendiar las construcciones ubicadas justamente en frente del lugar donde se encontraban resguardados sus enemigos i desde donde disparaban sobre sus tropas, con la esperanza de desalojarlos mediante el incendio, como lo afirma el reclamante, habria tenido Soto derecho para hacerlo a virtud de las leyes de la guerra; que su propósito era obligar a las tropas de la Escuadra, que ocupaban la Aduana, que estaba pegada al mar, a reembarcarse i refugiarse en los buques, abandonándoles así la posesion de la ciudad; que el pretendido plan de repelerlos a la mar mediante al incendio no habria sido sino un medio lejítimo de defensa o ataque

que no está prohibido por las leyes de la guerra que autorizan el empleo de todos los medios de violencia contra las propiedades para reducir al enemigo con la única limitacion que el medio empleado no sea desproporcionado al objeto que se persigue. (William Edward Hall, *A Treatise on International Law*, Oxford, 1890, 3.^a edition, page 329 § 184. Fiore, *Derecho Internacional Codificado* § 1,053. Bluntschli, *Le Droit International Codifié*. Traduction Lardy. Paris, 1886, arts. 543 et 549.)

Considerando: que no hai para que insistir sobre aquella otra alegacion del reclamante, de que el coronel Soto hubiera prohibido a los bomberos combatir el fuego i aun hecho disparar sobre ellos, pues si Soto tenia derecho, para un objeto estratéjico, de incendiar el edificio ubicado al frente de aquel ocupado por sus enemigos, tenia tambien, incontestablemente, el derecho de impedir que se hiciera fracasar la ejecucion de una determinacion que habia tomado en su carácter de jefe de las fuerzas asaltantes, proceder del coronel Soto que de ninguna manera se ha probado; que resulta del parte del contra-almirante Hotham ya citado, que el primer incendio que estalló cerca de la Aduana fué apagado por los bomberos i que cinco jefes i voluntarios de la brigada de bomberos de Iquique, compuesta de extranjeros (ingleses, italianos, españoles) i que estuvieron presentes durante los sucesos, declararon bajo juramento, ante el juez, el 11 i 13 de julio último, «que el incendio de Iquique se debió a las bombas lanzadas por la Escuadra i que lejos de prohibir a los bomberos, el coronel Soto, que apagaran el fuego, les hizo ayudar por sus soldados» (Sumario agregado en la reclamacion número 12);

Considerando: que estos hechos están corroborados por las declaraciones del capitan de la marina inglesa A. Lambton, confirmada por el contra-almirante Hotham en una carta dirigida al coronel Soto el 18 de Enero de 1892 i en la cual estos oficiales superiores de la marina inglesa, que se encontraban en el puerto de Iquique el 19 de Febrero de 1891, dicen: «que segun todas las probabilidades, el incendio que tuvo lugar ese dia en Iquique fué la consecuencia natural de las operaciones militares exijidas por el ataque i defensa de la plaza i que no vieron ni oyeron nada que

pudiera hacerles creer que Soto habia incendiado personalmente edificio alguno»;

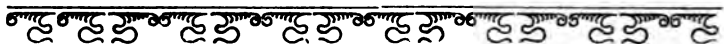
Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuanta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los belijerantes bajo el pnnto de vista de los grandes recursos que podia procurarles la esplotacion i esportacion del salitre: que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique en 19 de Febrero de 1891 es una consecuencia desgraciada de actos lejítimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile que, como lo dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable; tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se conquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que los sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideraclon, si se lo permite el estado de sus negocios, pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho». (Vattel *Derecho de Jentes*, libro III, capítulo XV, párrafo 232. *The Law of Claims against Governments. House of Representatives 42-D Congres. Report*, número 134, page 274, Washington, *Governments Prinling Office*, 1875.)

Por estos fundamentos el Tribunal por mayoria de votos, disintiendo el árbitro ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 18 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDÚNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 22 de Noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 40

HENRY WALTER POLWHELE

MEMORIAL

Yo, Henry Walter Polwhele, súbdito británico, nacido en la Parroquia de St. Clements, Truro, Cornwall, Inglaterra, el 12 de Febrero de 1866 i ahora residente en la oficina Lagunas de la provincia de Tarapacá, Chile.

Pido como indemnizacion la suma de doscientas cuarenta i tres libras esterlinas al Gobierno de Chile, en vista de mis lejitimos derechos que paso a espresar.

El dia 7 de Marzo de 1891 yo estuve empleado como tenedor de Libros la oficina de *Buen Retiro* situada cerca de Pozo Almonte, perteneciente a *The Colorado Nitrate Company* i yo tenia en dicha oficina en mis cuartos de habitacion, segun consta del inventario que acompaño, el valor de doscientas cuarenta i tres libras esterlinas en diferentes muebles i objetos de mi uso.

Al fin de la batalla que tuvo lugar cerca de Pozo Almonte el dia 7 de Marzo de 1891, algunos jefes del Estado Mayor, oficiales e individuos de tropa del ejército derrotado, vinieron a la oficina *Buen Retiro* i dieron principio a un saqueo para apoderarse de todo lo que allí se encontraba, como asi mismo tomar prendas de vestir para disfrazarse de paisanos, habiendo hecho poco despues lo posi-

ble por apoderarse de las mulas i caballos de la oficina. En ese mismo punto fueron atacados por el ejército Contitucional haciéndolos huir en direccion a la pampa. Entónces dos empleados de la oficina i yo fuimos a Pozo Almonte a pedir auxilio al coronel Holley, jefe del ejército congresista, i este señor nos negó todo auxilio i nos recomendó que para salvar nuestras vidas era necesario partir inmediatamente a Iquique, pueblo que por sus recursos, prestaba mayores garantías al ciudadano extranjero. Efectuamos esto con grandes dificultades i peligros, encontrando a nuestro paso por *Buen Retiro* un cuerpo de fuerza armada saqueando las bodegas, pulperia i casas de la oficina.

Despues de terminadas las hostilidades en Pozo Almonte i sus alrededores, regresamos a la oficina sin encontrar nada de lo que constituia mi casa, pues todo habia sido robado o destruido.

Durante el año 1891 no tomé parte alguna en los acontecimientos que se desarrollaron con motivo de la guerra civil de ese tiempo i no he desempeñado ninguna ocupacion ni a uno ni otro partido.

Esta reclamacion, la cual espero sea debidamente atendida, no la he presentado antes a ningun Tribunal.

Yo, Henry Walter Polwhele, declaro solemnemente que este memorial de reclamo presentado al Tribunal Arbitral Anglo-chileno, es la espresion de la verdad en todas sus partes.

HENRY WALTER POLWHELE.

Jurado ante mí el 13 de Abril 1895.—(Firmado).—H. A. R. HERVEY.

Sello.

CONTESTACION

El ajente del Gobierno de Chile, contestando la reclamacion núm. 40, presentada por don Enrique Walterio Polwhele, tiene el honor de esponer lo siguiente.

1 El memorial contraviene en algunos puntos a las prescripciones del Reglamento. Así no espresa cual es la ocupacion actual del reclamante; ni si éste ha recibido dinero o compensacion a cuenta

del reclamo, ni si percibió sueldo de alguna de las partidas belijerrantes en la revolucion de 1891.

Bastan esas omisiones, a juicio del infrascrito, para rechazar la reclamacion, como lo solicito de V. E.

2 No consta tampoco de una manera fehaciente la nacionalidad del reclamante. El certificado que acompaña firmado por dos testigos i autorizado por el cónsul de S. M. B. en Iquique, no es suficiente para comprobar la calidad de súbdito británico que en él se atribuye al señor Polwhele, i que yo le niego. Los señores que firman no dicen de qué manera les consta que el reclamante nació en Cornwall, ni suministran dato alguno que manifieste que saben de ciencia propia aquello que aseveran. Por lo demas esta prueba testimonial es insuficiente, aun para casos ordinarios, por estar recibida fuera de juicio, sin citacion de mi parte i por autoridad incompetente. Para establecer el *status* de una persona, no se puede ocurrir a esa clase de prueba sino a falta de los documentos públicos en que se consigna el estado civil con arreglo a las leyes del respectivo pais.

No estando comprobada la calidad de súbdito británico, V. E. no es el tribunal llamado para conocer de esta reclamacion; i en tal concepto, pido que se sirva declararse incompetente.

3 En cuanto a los hechos espuestos por el reclamante, el que suscribe no tiene noticia hasta hoi de lo que se espone en el memorial. No sabe que haya sido saqueada la oficina del *Buen Reliro*, ni que el reclamante haya perdido poco o mucho en el mencionado saqueo. Con la dúplica espero presentar antecedentes que establezcan la verdad de los hechos: por ahora me limito a negar los aducidos por el reclamante; tomando sí nota del hecho que asevera de haber llegado tropas del ejército victorioso en persecucion de los derrotados i dispersos, que segun el reclamante, se ocupaban en saquear la oficina *Buen Reliro*, i que fueron espulsados en direccion a la pampa.

No puedo aceptar como buena prueba la especie de informacion que se acompaña al memorial, tanto porque no ha sido rendida en juicio, con citacion mia i ante funcionario nombrado al efecto, como porque uno, a lo ménos, de los dos testigos, el señor Francisco

Mateo Jeffery tiene vivo interes en el favorable despacho de esta reclamacion, por haber presentado él otra análoga bajo el núm. 41.

4 Suponiendo exactos los hechos, la peticion del reclamante no encuentra apoyo alguno en el derecho. Declara el señor Polwhele que los individuos derrotados en Pozo Almonte el 7 de Marzo de 1891, invadieron la oficina *Buen Retiro*, i trataron de apoderarse de lo que encontraban, sobre todo de prendas de ropa para cambiarla por los uniformes militares que llevaban. Agrega que tropas del Ejército Constitucional los atacaron haciéndolos huir hacia la pampa. Esta simple esposicion es suficiente justificativo para el Gobierno de Chile.

Se sabe que, segun los principios del Derecho Internacional, no puede hacerse cargo a un Gobierno por los desmanes que lleven a efecto los soldados fujitivos o dispersos. Resumiendo la doctrina sentada por la jeneralidad de los autores, Bonfils se espresa en estos términos: «En cuanto a los perjuicios (*dommages*) que resultan de los hechos de guerra, de los actos de violencia i de lucha, de los combates, de los asaltos, bombardeos, desvastaciones, incendios, saqueos, robos cometidos por soldados, etc., etc., ningun recurso se abre para su reparacion. El Derecho Internacional no puede admitir el principio de una accion. La guerra es para el simple particular un caso de fuerza mayor. Es para él un mal inevitable como lo es una granizada, una inundacion. Es víctima de una plaga, no de una injusticia, dice Bluntschli. Jurídicamente no tienen derecho a ninguna indemnizacion.» (Bonfils, *Manuel de Droit International public*, § 1231).

Les autores mas respetuosos del derecho de los neutrales no llevan sus exigencias mas allá de poner como condicion para la responsabilidad del Gobierno que las depredaciones no hayan podido ser evitadas, i hayan sido reprimidas cuando era posible. En el caso actual, ambas condiciones han sido cumplidas, segun la esposicion misma del reclamante. Tropas de caballería fueron destacadas de Pozo Almonte en persecucion de los fujitivos, logrando arrojarlos de la oficina *Buen Retiro* aunque no les fuera dado apoderarse de ellos. Esto mismo consta del parte pasado por el jefe de Estado

Mayor del Ejército Constitucional que venció en Pozo Almonte. (Véase *Memorandum de la Revolución de 1891*, doc. núm. 31).

Se comprende fácilmente que después de una batalla encarnizada i sangrienta como fué la que se libró el 7 de Marzo de 91 en Pozo Almonte, fuera imposible evitar que los derrotados cometiesen desmanes como los que el reclamante les atribuye. El vencedor tomó todas las medidas necesarias para evitarlos. Lo prueba la persecucion ordenada, i el hecho mismo de haber sido arrojados de la oficina *Buen Retiro*, los que la habian asaltado, hecho confesado por el señor Polwhele, i que hace contraste con la otra parte de su esposicion en que asegura que el coronel Holley, jefe de Estado Mayor, le negó toda proteccion, aconsejándole que se retirase a Iquique para evitar todo peligro personal. Lo que se deduce de esta contradiccion, es que el coronel Holley no pudo proporcionar mas fuerza para resguardar la oficina *Buen Retiro*, i que dió al solicitante un consejo a todas luces conveniente en aquellas difíciles circunstancias.

Creo inútil estenderme en otras consideraciones o aducir nuevas citas. Me refiero a este respecto a lo que he espuesto contestando a la reclamacion núm. 36 de don Enrique Jaime Michell, en la cual el presente reclamante aparece figurando como testigo.

Suplico, pues, respetuosamente a V. E. se sirva rechazar la reclamacion deducida en el memorial a que contesto.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

REPLICA

El ajente británico replicando en la reclamacion del señor Henry Walter Polwhele, tiene el honor de someter al ilustrado criterio del Ecxmo. Tribunal las observaciones que siguen:

1 El señor Polwhele en su memorial no se cuidó de decir que ahora en 1895, es empleado particular, lo mismo que era en 1891, porque creyó que esto se comprendia por si solo con no decir cosa

alguna al respecto. I como no habia recibído sueldo, dinero o pago alguno de cualquiera de los partidos contendientes nada dijo sobre este particular porque creyó que solo debian decir algo lo que algo habian recibido. Estas esplicaciones bastarán para subsanar los defectos que mi contendor ha creido encontrar en mi memorial.

2 El señor ajente de Chile pone tambien en duda la nacionalidad británica del reclamante señor Polwhele i manifiesta que no le merecen fé las declaraciones presentadas con el memorial en las cuales se ve que dos testigos afirman que el señor Polwhele es súbdito ingles. Nuestro contradictor manifiesta que a su juicio la nacionalidad no puede probarse con testigos i que aunque asi no fuera, las declaraciones presentadas no bastarian para probarla, porque esos testimonios se han dado fuera de tiempo, sin decreto judicial i sin citacion del Gobierno de Chile.

El primer argumento para desvirtuar las declaraciones presentadas acerca de la nacionalidad carece de base. En efecto, la nacionalidad es un carácter de toda persona subordinado ordinariamente al hecho del nacimiento i al lugar donde este se verifica, i como los hechos cualquiera que sea su carácter i su importancia, pueden siempre probarse con testigos, la nacionalidad puede tambien probarse de este modo. ¿Qué tiene de extraño que dos individuos o mas puedan saber la nacionalidad de otro? En Chile cualquiera puede en ciertos casos, probar con testigos el lugar i la fecha de su nacimiento i por ende su nacionalidad. ¿Por qué no podrá V. E. aceptar en cada caso en que lo crea correcto i oportuno, este medio de prueba? No hai regla alguna de prudencia que se lo impida.

El segundo argumento aducido contra esas declaraciones no tiene tampoco importancia alguna, porque si se considera que esas declaraciones no son bastantes satisfactorias, el Tribunal puede tomar todas las medidas que estime oportunas para convencerse de la veracidad de ellas.

3 Entrando a ocuparse de los hechos que han dado oríjen a esta reclamacion, el ajente de Chile principia declarando que no ha podido averiguar si son o no exactos, dice que en el momento no podrá manifestar cual es la verdad de los hechos ocurridos i con-

cluye por manifestar que niega los hechos espuestos por el reclamante.

¿Como se esplica que una persona declare que no conoce los hechos espuesta por otra i en seguida niegue esos mismos hechos que declara no conocer? Como un pobre recurso destinado a obligar a la parte contraria a que rinda una prueba sumamente circunstanciada i a esplotar mas tarde todos los ápices que puedan encontrarse en la prueba rendida. Este recurso pocas veces produce el resultado que se busca i en cambio produce muchas veces mala impresion en el ánimo del juez.

La contestacion no atribuye tampoco importancia alguna a las declaraciones prescritas con el memorial en cuanto se trata de probar con ellas los hechos que dan oríjen a este reclamo. I para negarle toda importancia se dice que se ha rendido sin las solemnidades prescritas por el Reglamento i se agrega que el testigo Jeffery no es digno de ser creído por cuanto tiene interes en esta causa en razon de que el mismo Jeffery ha presentado al Tribunal una reclamacion análoga a la presente. En cuanto a la primera de estas observaciones repetimos lo dicho en el último párrafo del núm. 2 de esta réplica. En cuanto a la segunda observacion nos limitaremos a manifestar que el testigo Jeffery tiene mucho interes en ganar su propia reclamacion, pero no tiene ninguno en que Polwhele gane la suya.

4 El señor ajente de Chile dice tambien que aunque se probara que los hechos han pasado tal como lo espone el reclamante, la reclamacion seria improcedente porque los daños causados serian la obra de soldados vencidos, fujitivos i dispersos, i que conforme a derecho, el Gobierno de Chile no está obligado a responder de esos actos.

Esta alegacion se desvanece observando que en derecho el superior responde de los actos del inferior i, por consiguiente, el Gobierno de Chile de los actos de sus soldados.

Por tanto esperamos que el Excmo. Tribunal aceptará en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El agente del Gobierno de Chile tiene el honor de duplicar en la reclamacion número 40 que ha presentado don Enrique Walterio Polwhele.

1 Escusa el señor agente británico las faltas de que adolece el memorial, manifestando que omitió consignar algunos de los datos que exige el Reglamento, porque a su juicio solo era necesario hacerlo en ciertos casos diversos del actual. Mi honorable colega se permite hacer distinciones que el Reglamento no hace, i que ademas no tienen razon de ser. V. E. se servirá resolver sobre este particular lo que estime conveniente, en la intelijencia de que yo no retiro la peticion que formulé en mi contestacion con motivo de las irregularidades del memorial.

2 El señor agente británico pretende probar la nacionalidad del reclamante por medio de prueba testimonial. No es esta, sin embargo, la manera como el Derecho dispone que se pruebe la nacionalidad de las personas. Fiore dice que «la ciudadanía debe probarse como cualquier otro acto jurídico, cuya prueba incumbe a la persona que tenga interes en consignar o establecer que se le debe atribuir una ciudadanía determinada. Dicha prueba debe darse con arreglo a la lei del pais en donde el interesado pretenda haber adquirido la ciudadanía, cuando se trate de establecer la adquisicion de la misma, i segun el pais de oríjen, cuando se trate de probar su pérdida.» (Fiore, *Derecho Internacional Privado*, t. 2.º, § 354).

En conformidad a esta doctrina que emana del principio jeneral *locus regit actum*, la nacionalidad británica de oríjen debe comprobarse con arreglo a las leyes que sobre la materia rijen en el Reino Unido. Pues bien: la lei vijente en Inglaterra es la de 7 de Agosto de 1874, (St. 37 i 38, Vict. c. 88) cuyo artículo 38 establece que el nacimiento se prueba por el registro o un extracto de él, que lleve la firma de una persona que tenga calidad para hacer la declaracion, o si el acto ha sido efectuado conforme a los datos suministrados por un *coroner*. Esta regla escluye la prueba testimonial; i está en per-

fecto acuerdo con las análogas que rijen en todas las naciones civilizadas. En ninguna parte se acredita el *status* personal sino con esta prueba especial. Solo a falta de ella i constando que no existe o ha desaparecido la partida de nacimiento, se admite la prueba de la posesion notoria o la prueba de testigos acerca de ese hecho.

No podria, por consiguiente, el reclamante comenzar por rendir una informacion de testigos para hacer ver que es súbdito británico. Esa informacion, por otra parte, resultará con seguridad insuficiente porque no es probable que puedan presentarse en Chile dos o tres testigos que conozcan a una persona desde su nacimiento, i que constantemente la hayan acompañado durante toda la vida, para que con plena conciencia i certidumbre puedan deponer acerca de su nacimiento i de su identidad personal. Seguro estoi de que no se llegará a establecer el hecho de esta manera irregular, siempre que los testigos sean escrupulosamente examinados i debidamente contra interrogados.

Encontraré, pues, V. E. perfectamente justificada mi oposicion a que se rinda prueba testimonial para acreditar la nacionalidad del señor Polwhele o de cualquiera otro reclamante.

3 Manifesté en la contestacion que no conocia los hechos es-
puestos por el reclamante; i declaro ahora que, apesar de las di-
lijencias que he practicado, no me encuentro hoy mas adelantado a
este respecto que cuando contesté el memorial. El señor agente
británico cree que, puesto que ignoro los hechos i no tengo sobre
ellos otro antecedente que los que el reclamante ha suministrado,
no tengo el derecho de negarlos ni de exigir que se acrediten por
los medios ordinarios. Me parece que semejante teoria no necesita
refutacion, i ménos ante un Tribunal tan ilustrado i competente co-
mo es este a quien me dirijo. Si un demandante debiera ser creido
sobre su palabra, bastaria que iniciase el juicio para tenerlo como
ganado. Miéntas mas inexactos fuesen los hechos, i aunque jamas
hubiesen existido, bastaria que él los afirmase para que fuesen te-
nidos como verdaderos. Nadie puede conocer hechos que no han
ocurrido, i seria suficiente que alguno afirmara su existencia fun-
dando en ella una accion, para considerarlos probados dando lu-
gar a la accion deducida.

Hice presente en la contestacion que era de todo punto inaceptable el testimonio del testigo Jeffery que reclama a su vez una indemnizacion fundándose en los mismos hechos que se trata de comprobar invocando su declaracion. A esto replica el señor ajente británico que Jeffery tiene interes en su propia reclamacion, mas no en la presente. Sostengo por mi parte, que el interes que este testigo tiene en su propia reclamacion lo tiene tambien en la presente. Una i otra reclamacion están fundadas en los mismos hechos i todo lo que se compruebe respecto de la una, sirve de antecedente para el fallo de la otra. Establecido en este juicio el hecho de haber sido asaltada la oficina de *Buen Retiro* i robados los objetos pertenecientes a sus empleados, el Tribunal partiria sin duda de esa base para resolver acerca del reclamo del señor Jeffery, porque no habria de ponerse en contradiccion consigo mismo aceptando en una sentencia como verdad, lo que en otra quedase reconocido como falso o vice-versa.

4 El señor ajente británico cree haber desvanecido las razones de derecho que alegué en mi contestacion para sostener la irresponsabilidad del Gobierno de Chile, aun en el caso de que resultasen comprobados los hechos que se esponen en el memorial. Por todo fundamento aduce un pretendido principio legal, segun el cual todo superior responde de los actos del inferior, i por consiguiente el Gobierno de Chile de los actos de sus soldados. Desconozco semejante principio de derecho en la forma jeneral i absoluta que el reclamante le atribuye. Si de ordinario una persona es responsable de los hechos de aquellos que están a su cuidado, esa responsabilidad tiene una limitacion importantísima: el haber podido prevenir e impedir el hecho, i no haber tomado las medidas necesarias para ello por motivo de negligencia o de malicia. El verdadero principio de derecho aplicable a este caso está formulado en estos términos: *Nemo tenetur de casu quem prævidere et cui providere non potest.*

En Derecho Internacional este principio es universalmente reconocido i aplicado a todos los casos en que un Gobierno es impotente para impedir los desmanes de los soldados que huyen en medio del pavor de la derrota. Podria traer a colacion innumerables

citas de todos los autores de Derecho Internacional; pero para no fatigar inútilmente la atencion del Tribunal, me limité a repetir las palabras de uno de los mas modernos i mejor reputados de Europa. Mi honorable contradictor no ha opuesto a esta doctrina tan concluyente sino un supuesto principio de derecho, evidentemente erróneo en la forma que le ha dado.

Me seria tambien fácil manifestar a V. E. como es que todos los tribunales análogos al presente, han resuelto uniformemente que no afectan a los Gobiernos los actos de los soldados dispersos i fujitivos, que no obedecen ya a sus jefes ni respetan la disciplina. El tribunal chileno-americano que funcionó el año pasado en Washington estableció en su sentencia número 18, principios perfectamente acordes con la doctrina que sostengo.

Apoyado, pues, en el Derecho i en la jurisprudencia, aguardo de V. E. el rechazo de la accion deducida, dado caso de que se declare competente para conocer de esta reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Henry Walter Polwhele, súbdito británico, reclama del Gobierno de Chile la suma de doscientas cuarenta i tres libras (£ 243) por pérdidas sufridas poco despues de la batalla de Pozo Almonte en las habitaciones que ocupaba en la oficina *Buen Retiro*, el 7 de Marzo de 1891.

Esponde el reclamante que era empleado en la oficina *Buen Retiro*, Pozo Almonte, provincia de Tarapacá, i en las habitaciones que él ocupaba tenia bienes por valor de doscientas cuarenta i tres libras esterlinas (£ 243), como se indican en el inventario que acompaña, i que al terminar la batalla de Pozo Almonte, que tuvo lugar el 7 de Marzo de 1891, oficiales i soldados derrotados, que pertenecian

al ejército del Gobierno saquearon dicha oficina, robándole al reclamante todos sus bienes, por lo que cobra al Gobierno de Chile la suma ya espresada.

Acompaña como comprobantes una declaracion jurada ante el cónsul británico en Iquique, el 13 de Abril de 1895, por los señores Frank Matthews Jeffery i Roberto Landerdale Maithand, en la que dicen ser verdad lo espuesto en el memorial; i un inventario de los objetos que dice haber perdido el reclamante.

El ajente de Chile, contestando, espone que el memorial no observa algunas prescripciones del Reglamento, como ser: no espresar el reclamante su ocupacion actual, ni si ha recibido dinero o compensacion a cuenta del reclamo, ni si recibió sueldo de alguno de los belijerantes en la revolucion de 1891, por lo que, al Tribunal en vista de estas omisiones, pide no admita la reclamacion; que tampoco ha acreditado el reclamante, de una manera fehaciente, su calidad de súbdito británico, por lo que solicita al Tribunal se declare incompetente para conocer en esta demanda; que tampoco se han probado los hechos espuestos en el memorial, i el testimonio que se acompaña no es aceptable porque el testigo señor Jeffery tiene vivo interes en el éxito de esta reclamacion, pues tiene pendiente ante este Tribunal una demanda análoga, que aun siendo exactos los hechos aducidos, la demanda es insostenible en el terreno del derecho, por cuanto, segun los principios del Derecho Internacional, no puede hacerse cargo a un Gobierno por los desmanes cometidos por soldados dispersos o fujitivos; que segun la declaracion del mismo reclamante i el parte del jefe del Ejército Constitucional, consta que tropas de caballería fueron destacadas en Pozo Almonte en persecusion de los fujitivos logrando arrojarlos de la oficina de *Buen Retiro*, aunque no les fué dado apoderarse de ellos ni evitar algunos desmanes que alcanzaron a cometer; que de lo espuesto se desprende que el partido vencedor tomó todas las medidas necesarias para evitar que las tropas derrotadas cometieran excesos i, en consecuencia, los desmanes que alcanzaron a cometerse no afectan la responsabilidad del Gobierno de Chile; cita al efecto las doctrinas de varios tratadistas de Derecho Internacional e invoca las sentencias de tribunales internacionales análogos.

En la réplica i dúplica se debaten las mismas cuestiones de hecho i de derecho, i

Considerando: que el reclamante Henry Walter Polwhele se limita a decir en el memorial presentado ante este Tribunal Arbitral, que el 7 de Marzo de 1891, despues de la batalla de Pozo Almonte, muchos de los oficiales i soldados derrotados se encaminaron al establecimiento *Buen Retiro* i que con el objeto de tomar de allí ropa para disfrazarse de paisanos se apoderaron tambien de cuanto encontraron; que el reclamante no regresó al establecimiento sino cuando las hostilidades habia cesado i entonces constató que todo lo que le pertenecia habia sido robado o destruido;

Considerando: que las afirmaciones del reclamante son vagas o indeterminadas, que no da dato alguno que pudiera servir para identificar ni a los oficiales ni a los soldados que hubieren cometido los excesos por los cuales reclama; que ni aun indica los rejimientos a que pertenecian estos militares; que ni precisa siquiera si los presuntos excesos se cometieron el 7 de Marzo, dia de la batalla, o despues de esta fecha, puesto que no constató el robo i la destruccion de sus efectos muebles sino algun tiempo despues cuando regresó de Iquique;

Considerando: que en el memorial no se ofreció rendir la prueba sobre los hechos espuestos, en conformidad a las prescripciones del Reglamento de Procedimientos i que fué tan solo en la réplica cuando el reclamante declara, de una manera vaga, que «está dispuesto a rendir la prueba en el tiempo oportuno de los hechos consignados en el memorial», pero sin precisar de una manera concreta estos hechos; que el dia de la vista de la causa no se renovó la solicitud de que se permitiera rendir la prueba i que, por consiguiente, no hai razon alguna para abrir de oficio un término probatorio, sobre todo cuando el reclamante conviene en que los excesos de que se pretende víctima lo cometieron soldados dispersos i fujitivos, hechos que no comprometieron la responsabilidad del Gobierno, a ménos que hubieran sido ordenados o tolerados por los jefes.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral por mayoria de votos

disintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 21 de Febrero de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.





Reclamacion N.º 41

FRANK MATTHEWS JEFFERY

MEMORIAL

Nombre i descripcion del demandante i el monto del reclamo.

Yo, Frank Matthews Jeffery, súbdito británico, nacido en Highgate, condado de Middlesex, Inglaterra, el 22 de Marzo de 1873, (anexo A) viviendo actualmente en la oficina *Santiago* en la provincia de Tarapacá, de la cual soi el tenedor de libros, reclamo la suma principal de doscientas ochenta i cuatro libras esterlinas quince chelines (£ 284.15.0) con el interes legal, del Gobierno de Chile por lo siguiente.

Motivos para el reclamo.

El 7 de Marzo de 1891 yo era el cajero de la oficina *Buen Retiro* Pozo Almonte en la provincia de Tarapacá en la República de Chile, perteneciente a la Colorado Nitrate Company Limited, i tenia en mis piezas en dicha oficina la propiedad descrita detalladamente en el inventario marcado *B* que acompaña la presente, del valor de £ 284.15.0.

Determinando saqueo de la oficina que contenia propiedad del demandante por oficiales i soldados del Gobierno.

A la conclusion de la batalla que tuvo lugar cerca i en el pueblo de Pozo Almonte el 7 de Marzo de 1891 muchos del Estado Mayor i otros oficiales i tropas de las fuerzas derrotadas del Gobierno se refugiaron en la oficina de *Buen Retiro* e inmediatamente procedieron a saquear con el objeto de proveerse con los artículos que les seria necesarios para disfrazarse como ciudadanos.

Oficina atacada i ocupada por tropas Constitucionales.

Miéntas así ocupados fueron atacados por las tropas del partido Constitucional i arrojados de la oficina al desierto.

Entónces yo i dos otros empleados del mismo establecimiento fuimos a Pozo Almonte i pedimos proteccion para la oficina al coronel Adolfo Holley uno de los oficiales responsables del ejército victorioso.

Proteccion pedida a los oficiales responsables del ejército victorioso i absolutamente rehusada.

Toda proteccion se rehusó i ademas nos dijeron que si queríamos salvar nuestra vida tendríamos que escaparnos a Iquique sin perder tiempo, lo que hicimos con la ayuda de dicho coronel Holley, primero volviéndonos a la oficina *Buen Retiro* donde encontramos un cuerpo de soldados armados en el acto de saquear los almacenes, tienda i domicilio i apropiándose o destruyendo lo contenido, resistencia siendo inútil i nuestra vida en peligro miéntas quedábamos al alcance de los saqueadores. Al cesarse las hostilidades en los alrededores de Pozo Almonte tan pronto fué compatible con mi seguridad personal volví a la oficina *Buen Retiro* i encontré que toda mi propiedad descrita en el anexo B habia sido robada o destruida de pura maldad.

Saqueo i destruccion intencional de propiedad por las tropas Constitucionales.

Declaracion de
neutralidad.

Durante el año de 1891 no tomé parte directa o indirectamente en la guerra civil que entónces tenia lugar; no estuve durante ese tiempo al servicio de ninguna de las partes combatientes ni he recibido dinero ni compensacion alguna a cuenta de mi reclamo ni se ha presentado anteriormente mi reclamo ante ningun otro Tribunal.

En confirmacion de este memorial pido someter a la consideracion del Honorable Tribunal los siguientes documentos:—Anexo A certificado de nacimiento. Anexo B inventario de las propiedades por las cuales se ha hecho el reclamo.. Anexo C una declaracion comun por H. W. Polwhele i Robert Lauderdale Maitland. Anexo D una declaracion conforme al artículo 2 del *Reglamento de Procedimientos* del Tribunal Arbitral Anglo-chileno: i si fuere necesario podré presentar como testigos a los señores:—H. W. Polwhele, R. Lauderdale Maitland, Albin G. H. Ninness, John Blackwall, H. J. Michell, Daniel Rosas, Gustavo Hawes i Pablo Marincovich.

F. M. JEFFERY.

CONTESTACION

Excmo. señor:

Como agente del Gobierno de Chile, paso a contestar la reclamacion núm. 41, en la cual el señor Frank Matthews Jeffery demanda £ 284-15-0, mas intereses, valor atribuido a objetos muebles que se dicen perdidos a consecuencia de la batalla de Pozo Almonte, dada el 7 de Marzo de 1891.

1 Cabe observar desde luego que no está legalmente acreditado el estado de súbdito inglés que el reclamante se atribuye. La partida de nacimiento anexa, no legalizada, está desprovista de todo sello de autenticidad. Según esto, es justificada la excepción que opongo de no ser V. E. competente para conocer de esta reclamación.

2 Por lo demás, no se ha comprobado la efectividad de los hechos espuestos en el memorial. No consta ni que el reclamante fuera dueño de los bienes reclamados, ni que éstos tuvieran el crecido valor que se les atribuye, ni que efectivamente fueran destruidos o robados de tal o cual manera en la época que se indica, por oficiales o soldados de la República. Todo cuanto a estos respectos espone el memorial es increíble: el memorialista mismo no puede referir los hechos sino de oídas, pues el día 7 de Marzo huyó con otros empleados hasta Iquique, i solo cuando mas tarde regresó a la oficina, encontró, según dice, su propiedad robada o destruida. Sin embargo, no ha tenido escrúpulos para jurar que son ciertos todos los hechos que relaciona i jurar además que todo se hizo por *pura maldad*.

Es sabido que en las oficinas salitreras todos los empleados viven en la casa de la administración, de la cual reciben comida, pieza amueblada i hasta ropa de cama. Según esto, los muebles, aparatos de ensayos, instrumentos de matemáticas i dibujo, etc. de cuya pérdida se queja el reclamante, no serian de éste sino de la oficina *Buen Retiro*, perteneciente a la compañía salitrera *Colorado*, de la cual era empleado el señor Jeffery.

Esto, que para mi es lo mas verosímil, se confirma examinando la reclamación siguiente núm. 43. en la cual dicha compañía *Colorado* cobra, entre otras cosas, el valor de los muebles que, según se dice, tenia la administración en *siete dormitorios*, escritorio del administrador i escritorios jenerales, con estantes, libros, etc.

Todo hace creer que entre esos muebles esten incluidos aquellos cuyo valor reclama aquí por duplicado el señor Jeffery.

En cuanto al certificado anexo de los empleados señores Polwhele i Maitland, como al testimonio que pudieran dar en calidad de testigos los nombrados al fin del memorial, me será permitido no

tomarlos en seria consideracion, por no corresponder a lo establecido en órden a prueba testimonial.

3 Finalmente, del memorial mismo i de las relaciones acompañadas se deduce que, caso de haber sido efectivos, la destruccion o robo indicados habrian sido consecuencia natural e inevitable de una sangrienta batalla dada al frente mismo de la referida oficina salitrera.

No habrian sido imputables a nadie en particular o lo habrian sido a paisanos i a soldados dispersos, escapados a la subordinacion militar. En uno i en otro caso, la República de Chile está exenta de toda responsabilidad, porque en derecho no responde de fuerza mayor ni de actos de mordeo o pillaje.

Jamas podrá probarse que, en las circunstancias del caso, tuvo poder i medios suficientes i que no quiso usar de ellos para impedir el desórden i daños consiguientes.

A los testimonios anónimos incorrectamente invocados por el reclamante, ofrezco desde luego el del mismo señor jeneral don Adolfo Holley, citado por aquel, i el del sarjento mayor don Roberto Dávila Baeza, ámbos chilenos i residentes en Santiago, que se encontraron en la batalla i sucesos referidos. Ellos podrán dar testimonio de lo que la autoridad hizo para reprimir los desórdenes, i de lo que por su parte hicieron los empleados de la oficina *Buen Retiro*, de los cuales se dice que hasta dieron de beber a los vencidos dispersos.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

El agente del Gobierno Británico replicando en la reclamacion presentada por don Frank Mathews Jeffery contra el Gobierno de Chile, tiene el honor de someter al criterio de V. E. las siguientes observaciones.

1 La defensa del Gobierno reclamado principia desconociendo al señor Jeffery su carácter de súbdito británico i como el reclamante presentó con su memorial la partida de nacimiento se le impugna porque no aparece legalizada.

Este argumento es realmente triste de parte de un Gobierno sério, porque nada hai que permita sospechar que el documento presentado sea apócrifo i, siendo esto así, el Tribunal que está facultado para proceder mirando solo la verdad de los hechos, podrá considerar e indudablemente considerará probada la nacionalidad del señor Jeffery con ese documento, aunque no aparezca debidamente legalizado.

2 El señor ajente de Chile continúa su defensa diciendo que no están probados los hechos en que se funda el reclamo.

A este respecto solo haré notar la inconsecuencia en que incurre mi contradictor. En efecto ¿cómo puede el señor ajente hacer un argumento de esta clase cuando ese mismo ajente tiene por sistema impugnar las declaraciones que se han presentado juntamente con el memorial, diciendo que ellas se han rendido sin decreto, ante funcionarios incompetentes, fuera de término i sin citacion suya? A los que no presentan prueba, los rechaza porque no las presentan i a los que la presentan porque se han rendido sin las solemnidades de estilo. Comprendo el segundo argumento, pero no el primero.

Se dice tambien que Jeffery no ha probado que haya sido dueño de los objetos cuyo valor reclama. A esto respondo recordando que: *la possession vaut titre*, i que esta materia está latamente tratada en algunas de las reclamaciones anteriores.

Los objetos destruidos no valen lo que por ello se cobran, se nos dice. Este argumento nada vale porque su base es completamente errónea. Cualquiera persona que conozca precios en Chile, i que recorra el inventario i tasacion de los que cobra el señor Jeffery, verá que el precio que se asigna a cada objeto es perfectamente equitativo.

Tambien nuestro contradictor nos hace notar que no se ha comprobado que los objetos destruidos lo hayan sido por oficiales o soldados del ejército de la República de Chile. Por ahora nos

limitaremos a decir que la prueba vendrá a poner en claro este punto.

Lanzándose, en seguida, en el camino de las suposiciones, el señor ajente de Chile manifiesta que, a su juicio, es mui posible que los objetos cuyo valor reclama el señor Jeffery no pertenecieran a este caballero sino a la *Compañía Salitrera Colorado* i funda esta suposicion en el hecho de que esta Compañía haya interpuesto un reclamo mui parecido al del señor Jeffery. Al efecto, recuerda que este señor era empleado de esa Compañía, que le suministraba casa i comida i que tanto la Compañía como Jeffery hacen figurar entre sus pérdidas muebles de dormitorio e instrumentos i útiles empleados en la industria salitrera. Si fuera lícito suponer hechos para sacar de ellos argumentos en pro de una causa, yo por mi parte creería que todo lo que se estrajo de las oficinas de la *Compañía Colorado*, i de las habitaciones de los empleados, se sacó de ellas por orden espresa del coronel Robles i se empleó por su orden en satisfacer las necesidades de su tropa.

El contendor termina el exámen de los hechos diciendo que las dos declaraciones presentadas con el memorial no pueden tomarse en cuenta porque se rindieron sin las solemnidades que prescribe el Reglamento. Cuando llegue el momento de la prueba, los testigos cuyas declaraciones hemos exhibido se ratificarán en ellas con todas las solemnidades, cuyas faltas se nos imputa i entónces se comprobará plenamente la verdad de los hechos que hemos espuesto.

3 El señor ajente de Chile termina su defensa diciendo, que aun cuando fueran efectivos los hechos que dan oríjen a esta reclamacion, esta tendria que ser rechazada porque los perjuicios que se cobran habrian sido irrogados al señor Jeffery por soldados fuji-tivos o dispersos, cuyos actos no imponen responsabilidad alguna al Gobierno de Chile.

Para desvirtuar este argumento, que no es nuevo, me refiero a lo que tengo manifestado a este respecto en otras reclamaciones.

Terminaré, pues, manifestando la confianza que me asiste de que V. E. aceptará en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en la reclamacion del señor Jeffery por objetos muebles que se dicen perdidos despues de la batalla de Pozo Almonte.

Sobre las circunstancias de esa batalla se completan las unas a las otras las reclamaciones números 13, 36, 40, 41, 43 con referencia a partes oficiales i a las esposiciones hechas o presentadas por los reclamantes mismos.

Con respecto a la actual i respondiendo a la réplica, poco tengo que agregar a lo dicho anteriormente por mi parte. Esta reclamacion, como sus conjéneres citadas, que parecen hechas por la misma mano, adolece de vaguedad i deficiencias que la hacen inadmisibile en alto grado. El reclamante abandonó la oficina, en que ocupaba una pieza, despues que las tropas derrotadas habian sido arrojadas de la primera hácia el desierto por las tropas constitucionales, de modo que lo único visto por él resulta ser la proteccion prestada a la oficina contra el robo o la destruccion de que se queja, hablando de éstas solo por oidas i probablemente engañado por versiones interesadas; por lo mismo, sin duda, no precisa nada, omitiéndose en el memorial i en la réplica hasta la designacion del cuerpo o rejimiento a que pertenecian los supuestos soldados saqueadores.

Verdad es que al final del memorial se someten a la consideracion del Tribunal ciertos titulados documentos, i se dan ciertos nombres de personas ofrecidas como testigos; pero los primeros no pasan de declaraciones *ex parte* sin mérito probatorio en derecho, i respecto de los últimos, no se precisan los hechos que el reclamante se propone establecer mediante prueba testimonial, ni se indican la profesion, nacionalidad y residencia de los testigos ofrecidos, burlándose así terminantes prescripciones reiteradas en los artículos I i XI del Reglamento de Procedimientos.

De aquella lista de testigos algunos hai como los señores Mi-

chell i Polwhele, de quienes tenemos alguna noticia por ser ellos autores de las reclamaciones números 36 i 40, relativas a los mismos sucesos: pero esa misma circunstancia quitaria en todo caso a sus testimonios la imparcialidad necesaria para ser atendidos en juicio.

Dice el replicante que, a virtud del principio según el cual, tratándose de muebles, la posesion vale título, deben suponerse de su esclusiva propiedad todos i cada uno de los objetos que figuran en la lista, llamada por él inventario, anexa al memorial. Aceptado el principio, faltaria acreditar que el reclamante, i no la Compañía Salitrera Colorado, tenia la posesion de todos i cada uno de los dichos objetos existentes en la oficina de aquella compañía, la cual da a sus empleados pieza i útiles o muebles, parcialmente a lo ménos, comprendidos en su reclamacion número 47.

Por lo demas, i diga lo que quiera el reclamante, siempre habrá de parecer enorme el valor de mas de £ 284, o sea, como 3,800 pesos de nuestra moneda, por los objetos de uso personal contenidos en el cuarto de un empleado de salitrera en Tarapacá, donde los artículos de importacion europea no tienen porque ser, ni son, mas caros que en Santiago.

No quiere el reclamante lanzarse, como dice que yo lo he hecho, al campo de las suposiciones. Si él lo hiciera así, «creeria que todo lo que se extrajo de las oficinas de la Compañía Colorado i de las habitaciones de los empleados, se sacó de ellas por orden espresa del coronel Robles i se empleó por su orden en satisfacer las necesidades de su tropa.» Para creerlo así, el reclamante olvidaria que el coronel Robles falleció luego despues de la batalla i cuando la derrota i la muerte le habian quitado el cuidado de atender a las necesidades de sus soldados. Quitando la parte de ironía no mui socrática, que pudiera encontrarse en el párrafo transcrito, permite éste admitir que el caso actual seria de requisiciones o de estorsiones anteriores a la batalla i verificados por tropas presidenciales, lo cual trae un elemento mas de confusion i de vaguedad a esta reclamacion.

Que efectivamente no se trataria aquí de saqueo posterior á la batalla, lo haría tambien creer el párrafo 4.º de la réplica corres-

pondiente a la reclamacion número 43, donde se dice por parte de la misma Compañía Colorado que, en las habitaciones de aquella, los empleados tenian objetos de su esclusiva propiedad, «objetos todos, agrega, que fueron tomados para el uso de los oficiales i soldados del ejército de Chile.»

Dije i repito que, aun caso de haber sido efectivos los perjuicios reclamados, la reclamacion deberia ser desechada por haber sido aquellos irrogados por soldados dispersos o fujitivos i porque actos como esos, de pillaje o destruccion, ejecutados sin autorizacion o tolerancia de jefes i oficiales, no imponen responsabilidad a ningun Gobierno, debiendo considerarse como consecuencia natural e inevitable de la batalla, tal como los considera el señor Jeffery mismo diciendo en la portada de su memorial manuscrito que reclama «por las pérdidas que le resultaron de la batalla de Pozo Almonte.»

El defecto que el replicante halla a aquel argumento es el de que «no es nuevo». Tiene sobrada razon: es tan antiguo como el derecho. Es el mismo que los Tribunales Arbitrales de Santiago (1884-1888) siguiendo precedentes de la Comision Mista de Washington (1871-1873), aplicaron en muchísimos casos referentes a robos o pillajes en Tacna o Mollendo, i en otros muchos referentes a las batallas de Chorrillos i Miraflores, con los cuales tienen mayor analogía los casos de Pozo Almonte; es el mismo argumento que V. E. acaba de aplicar rechazando las reclamaciones fundadas en los incendios i saqueos ocurridos en Valparaíso el 28 de Agosto de 1891 durante la noche que se siguió a la batalla de la Placilla; sin embargo de haberse dado ésta léjos de la ciudad, al paso que en la de Pozo Almonte, segun lo cuenta el testigo i reclamante señor Polwhele, especialmente en la reclamacion número 43, «la artillería del partido constitucional abrió fuego sobre las tropas del Gobierno, parte de cuyas tropas habian ocupado una posicion *en frente de la dicha oficina «Buen Retiro»*. Esta era de la Compañía Colorado, a que se refiere la presente reclamacion.

En conclusion, considerando la cuestion, así en el hecho como en el derecho, suficientemente dilucidada en las otras diversas reclamaciones citadas, relativas a las batallas de Pozo Almonte,

suplico a V. E. que, en vista de lo dicho, por mi parte en ellas i en la contestacion a la presente, se sirva resolver como tengo pedido.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Frank Matthews Jeffery, súbdito británico, reclama del Gobierno de Chile la suma de doscientas ochenta i cuatro libras cinco chelines (£ 284.5.0) mas interes legal sobre esta suma, por bienes que le fueron robados de sus habitaciones en la oficina *Buen Retiro* el 7 de Marzo de 1891.

Espone el reclamante que el dia 7 de Marzo de 1891 residia en la oficina *Buen Retiro*, Pozo Almonte, provincia de Tarapacá, de la cual era empleado, i tenia en sus habitaciones los efectos descritos en un inventario anexo, bienes cuyo valor ascendia a doscientas ochenta i cuatro libras cinco chelines; que al terminar la batalla que tuvo lugar ese dia en Pozo Almonte, muchos de los oficiales i soldados derrotados que pertenecian a las fuerzas del Gobierno se dirijieron a la oficina *Buen Retiro*, donde procedieron a saquear, con el objeto talvez, de proveerse de articulos de vestuario para disfrazarse de paisanos i que miéntras estaban en esta operacion fueron atacados por las fuerzas del ejército constitucional i obligados a huir al desierto; que él i otros empleados salieron de la oficina hácia Pozo Almonte para pedir proteccion a los oficiales del ejército victorioso, proteccion que les fué negada i se les aconsejó que si querian salvar su vida partieran sin pérdida de tiempo para Iquique; que cuando regresaron a la oficina encontraron una partida de soldados armados que saqueaban los almacenes, tienda i casa-habitacion, apropiándose i destruyendo cuanta cosa encontraban; que en vista de esto se dirijieron a Iquique, de donde, en cuanto terminaron las hostilidades; el reclamante volvió a la oficina de *Buen*

Retiro i encontró que todo lo que le pertenecía había sido robado o destruido.

Acompaña como comprobante un certificado de nacimiento, inventario de los bienes perdidos, declaraciones juradas prestadas ante el cónsul británico en Iquique, por el reclamante i por los señores Henry Walter Polwhele i Roberto Lauderdale Maitland, en las que dicen ser efectivos los hechos espuestos en el memorial.

El ajente de Chile, contestando, espone: que pide al Tribunal se declare incompetente para conocer en esta reclamacion por no haber acreditado legalmente el reclamante su carácter de súbdito británico; que los hechos en que se funda la demanda no han sido probados, por lo que solicita que el Tribunal rechace la reclamacion que aun suponiendo efectivos estos hechos, el memorial dice que los perjuicios i robos fueron cometidos por soldados dispersos i fujitivos, i en tal caso el Gobierno de Chile está exento de responsabilidad, porque, en derecho, no responde de fuerza mayor ni de actos de merodeo o pillaje; que jamas se podría comprobar que los jefes del partido vencedor hubieran tenido poder i medios suficientes para contener los desmanes de los soldados derrotados i no lo hubieran hecho i que a los testimonios invocados por el reclamante opone la del señor jeneral Holley i la del sarjento mayor Roberto Dávila Baeza, ámbos chilenos i que se encontraron en la batalla i sucesos referidos; i en conclusion, pide al Tribunal, como ya lo ha solicitado, que se declare incompetente para conocer en esta reclamacion o la deseche en todas sus partes.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho.

Se recibió la causa a prueba i se rindió la que corre en autos; i

Considerando: que el reclamante Frank Matthews Jeffery se limita a afirmar en el memorial presentado a este Tribunal Arbitral que el 7 de Marzo de 1891, despues de la batalla de Pozo Almonte, una parte del Estado Mayor, oficiales i soldados que pertenecian al ejército derrotado se replegaron a la oficina de *Buen Retiro* donde él ocupaba un departamento, los cuales, con el objeto de procurarse trajes de paisanos para ocultar su carácter, le robaron su ropa i efectos muebles; que no fué sino despues que cesaron las

hostilidades que el reclamante volvió a la oficina i pudo constatar que todo lo que le pertenecía habia sido robado o destruido;

Considerando: que habiendo el Tribunal concedido un término de prueba para que el reclamante pudiera justificar los hechos espresados en la demanda de una manera vaga e indeterminada, el señor Jeffery no presentó ningun testigo ante el juez de letras de Iquique designado al efecto para recibir declaraciones; que, por consiguiente, deben estimarse los hechos como improbados; que el ajente de Chile, por la inversa, presentó dos testigos que se hallaban ese dia en el *Buen Retiro* i permanecieron allí hasta mui avanzada la tarde i que no vieron nada del pretendido saqueo; que resulta de sus declaraciones que si hubo realmente saqueo, éste no pudo efectuarse sino despues de la partida de las tropas por malhechores que no pertenecian al ejército regular, actos que no podrian afectar la responsabilidad del Gobierno de Chile.

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por mayoria de votos, disintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente demanda.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Febrero de 1896.—DIEGO ARMSTRONG.



RECLAMACION N.º 42

NORTH I JEWELL

MEMORIAL

Yo Heriberto Guillermo Morrison, vecino de Iquique súbdito británico, nacido en Lóndres el ocho de Julio de 1863, representante legal de la razon social North i Jewell, súbditos británicos, comerciantes en Iquique, reclamo en nombre de la dicha razon social la suma de cuatrocientas setenta i siete libras esterlinas (£ 477-0-0) del Gobierao de Chile por los siguientes motivos: i a mas ciento catorce libras nueve chelines ocho peniques esterlinas (£ 114-9-8) intereses a 6 % por cuatro años.

En Febrero 19 de 1891 la razon social de North i Jewell eran inquilinos de los escritorios i casa habitacion numerada 10, 12 i 14 de la calle Esmeralda, Iquique.

En el curso de la batalla que tuvo lugar en esa fecha en Iquique entre las fuerzas del Gobierno del finado Presidente Balmaceda, bajo el mando del coronel Soto, i las fuerzas i Escuadra del partido del Congreso, fueron penetrados por bombas i granadas los escritorios i casa-habitacion arriba mencionados destruyendo o averiando, los muebles i otros bienes que se hallaban allí pertenecientes a los señores North i Jewell, hasta el valor de de £ 477-0-0.

Ningun miembro de la razon social de North i Jewell ni ninguna

persona, por cuyos bienes era responsable la dicha razon social, tomó parte sea directa o indirectamente en la guerra civil chilena de 1891 ni estaban al servicio o paga de cualquiera de las partes contendientes.

Ningun dinero o compensacion alguna ha sido recibida por los señores North i Jewell por motivo de este reclamo, ni tampoco ha sido referido a cualquier otro Tribunal.

En corroboracion de la esposicion contenida en el memorial que antecede, los documentos anexados a esto, consistiendo de protesta, cuenta de reclamo, inventario i declaraciones de testigos, son sometidas para la consideracion del Tribunal Arbitral Anglo-chileno; si necesario pueden presentarse como testigos C. C. Brough, José Blake i Juan W. Niblock.

Yo, Heriberto Guillermo Morrison, juro que todo lo espuesto en este memorial es exacto i verdadero, i confirmo los hechos que en ello he aseverado.

(Firmado).— H. W. MORRISON.

Jurado ante mí el 13 de Abril 1895.—(Firmado).—H. A R. HERVEY.

Sello.

CONTESTACION

El ajente del Gobierno de Chile tiene el honor de contestar el memorial referente a la reclamacion núm. 42 que don Heriberto Guillermo Morrison eleva en nombre de la casa comercial North i Jewell.

Cobra el reclamante la suma de 477 libras esterlinas, en que estima la pérdida sufrida en el escritorio i casa-habitacion de la sociedad por consecuencia de disparos hechos durante la batalla que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891; cobra así mismo £ 114-9-8 por razon de intereses sobre la suma anterior computadas al 6 % en todo, £ 591-9-8.

1 El memorial adolece de defectos que estimo sustanciales.

Apesar de tratarse de una sociedad colectiva, el mandatario de los señores North i Jewell no se ha preocupado de dar cumplimiento al artículo 5.º del Reglamento indicando el domicilio de la sociedad i los nombres de todos los socios o interesados en ella. Tampoco se ha cumplido con lo prescrito en la primera parte de los artículos 4.º i 5.º. Así, pues, el memorial no viene en forma, i el reclamante no tiene derecho a que se le dé curso. Suplico a V. E. que por este motivo se sirva desecharlo.

2 No se ha presentado ningun antecedente que compruebe el carácter de súbditos ingleses que se atribuye a los reclamantes. Estoy en mi derecho al negarles tal carácter mientras no sea comprobado de una manera satisfactoria; i para pedir a V. E. como lo suplico que se sirva declararse incompetente para conocer en la reclamacion.

3 Estimo insuficiente el poder que ha exhibido el señor Morrison para acreditar la representacion que dice tener de los señores North i Jewell. Solo se ha presentado la version castellana de él, i es indispensable conocer el testo en su idioma orijinal, a lo cual da derecho el artículo 2.º del Reglamento. No aparece bastante clara tampoco la legalizacion de la escritura de mandato, puesto que está trascrita despues de nna presentacion hecha a la justicia por el traductor del documento, i en realidad no se sabe si las diligencias copiadas se refieren precisamente a este mandato.

Aparte de estas consideraciones, existen otras dos que estimo de suma gravedad. Es un hecho público i que ha llegado a mi conocimiento que uno de los mandantes, el señor Jewell, ha fallecido. Esta circunstancia basta para poner término al mandato: *mandatum morte dissolvitur*. Por otra parte, el poder de que ha hecho uso el señor Morrison, lo autoriza tan solo para ocurrir a los tribunales ordinarios del pais; no hai razon alguna para creer que los señores North i Jewell tuvieran intencion de autorizar al mandatario para hacer esta presentacion en contra del Gobierno de Chile; i seguramente, si tal intencion hubieran abrigado, no habrian dejado de consignarla en alguna cláusula especial.

El poder es, pues, insuficiente; i así pido que se declare, oponiendo al efecto la excepcion previa de falta de personería.

3 El señor Morrison pretende probar los hechos que relata en el memorial con el testimonio de los señores C. C. Brough, José Blake i Juan W. Niblock. Desde luego puedo manifestar que el hecho del combate que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891 es aceptado por mi parte. No así el de haber perdido los señores North i Jewell los objetos que espresan en la lista que acompañan, ni los deterioros sufridos en su casa i muebles. A este respeto hago presente que es inaceptable el testimonio de las personas indicadas, que son todos empleados o dependientes de la casa, i carecen, por lo tanto, de la independencia necesaria para que su declaracion quede exenta de sospecha.

Ménos acepto todavía el valor que se atribuye a las pérdidas i deterioros.

4 Pero, aun reconociendo en hipótesis la exactitud de los hechos narrados por el mandatario de los reclamantes, la reclamacion es absolutamente insostenible en el terreno del derecho. Segun su propia esposicion, los escritorios i casa-habitacion de los señores North i Jewell fueron penetrados por bombas i granadas que se dispararon durante la batalla de 19 de Febrero entre las fuerzas del Congreso apoyadas por la Escuadra i las del Presidente de la República comandadas por el coronel Soto. En una palabra, se pretende que el Gobierno de Chile pague los daños causados durante una accion lejitima de guerra.

He manifestado ya en muchas reclamaciones análogas el parecer uniforme de los tratadistas de Derecho Internacional, que establecen la doctrina de que tales perjuicios equivalen a una plaga natural, i no confieren accion alguna contra nadie. Entre otros, citaré en apoyo de lo que espongo, a Vattel, (*Derecho de Jentes*; L. 3.^o, cap. 15); Fiore, (*Nuevo Derecho Público Internacional*, t. 3, § 1,714 i siguientes); Bluntschli, (*Derecho Internacional Codificado*, arts. 652 i 662); Wharton, (*Internacional Law Digest* vol. III, § 223); i Bonfils, que resume la doctrina de todos en su obra reciente [*Manuel de Droit International public*, 1894, § 1,200 i 1,231.]

5 Todavía ménos aceptable es el cobro de intereses procedentes de un crédito imaginario. Solo puede imponerse el pago de intereses por vía de indemnizacion en caso de mora; i solo hai mora

cuando se vence el plazo estipulado de una deuda líquida o cuando ha existido reconvencion judicial, circunstancias ámbas inaplicables al presente caso.

No cabiendo responsabilidad al Gobierno de Chile por perjuicios emanados de una operacion lejitima de guerra, espero que V. E. se ha de servir rechazar la presente reclamacion, si es que no da lugar a las excepciones previas deducidas.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

1 Para satisfacer al señor ajente de Chile manifestaré que la sociedad de North i Jewell tiene domicilio en Iquique, i que los socios de ella son los señores Juan Tomas North i Mauricio Jewell, súbditos ingleses por nacimiento, que residian en Inglaterra en la época en que ocurrieron los hechos que dan oríjen a esta reclamacion.

2 Es un hecho perfectamente notorio que los señores North i Jewell son súbditos ingleses, i es realmente extraño que tratándose de personas tan conocidas, el señor ajente manifieste dudas a respecto.

3 No he presentado el poder orijinal otorgado en ingles por los señores North i Jewell a favor del señor Morrison, por cuanto este documento está protocolizado en la notaria de Iquique, i el señor ajente de Chile sabe mui bien que los documentos protocolizados no pueden estraerse de los protocolos. La mejor contestacion que puedo dar al segundo argumento hecho contra el poder, es no dar ninguna.

Se objeta tambien que el poder conferido por los señores North i Jewell al señor Morrison ha terminado por la muerte del señor Jewell, hecho que es notorio segun lo espresa el señor ajente de Chile. Este funcionario desconoce la nacionalidad británica de los

señores Juan Tomas North i Mauricio Jewell que es un hecho perfectamente notorio en Chile; i a renglon seguido alega en su favor la muerte del señor Jewell que es un hecho positivo, pero mui poco conocido en Chile. Como se ve, el señor ajente de Chile niega los hechos notorios que creen le perjudican i hace valer los hechos privados que cree le favorecen.

Entrando ahora a ocuparme del argumento en sí mismo, manifestaré que es enteramente inaceptable, por cuanto el señor Morrison ha recibido su mandato de North i Jewell que no ha muerto i que forma una persona jurídica distinta de la del socio, señor Jewell, individualmente considerada; el axioma jurídico *mandatum morte dissolvitur*, está, pues, mui mal citado porque la sociedad mandante de North i Jewell no ha muerto. Se dice, por último, respecto al poder, que este no autoriza al señor Morrison, para presentarse ante este Tribunal, porque su mandato no le confiere especialmente estas facultades. Para echar por tierra este argumento me bastará recordar que segun el Reglamento no se necesita poder especial, sino poder bastante a juicio del Tribunal, i yo estoy seguro que V. E. considerará bastante el poder que tiene el señor Morrison.

4 En la contestacion se pretende desconocer en absoluto la fuerza probatoria de las declaraciones de los señores C. C. Brough, José Blake i Juan W. Niblock, por ser empleados de la sociedad reclamante.

Precisamente por haber tenido este carácter son estos caballeros las personas que pueden haber conocido mejor los hechos sobre que declaran. Como se objeta que estos caballeros han podido prestar sus declaraciones sin la independencia necesaria, me parece conveniente que en su oportunidad sean interrogados por el funcionario que el Tribunal designe, i que al mismo tiempo los contra-interrogue el señor ajente de Chile, i entónces se verá que estos testigos declaran con perfecto conocimiento de los hechos i con completa independencia.

5 El señor ajente de Chile pide se rechace el reclamo fundándose que el combate i bombardeo de Iquique del 19 de Febrero de 1891 fué un acto lejítimo de guerra que no produce responsa-

bilidad alguna en contra del Gobierno de Chile, i apoya esta afirmacion en la opinion unánime de los tratadistas del Derecho Internacional.

La opinion del señor ajente de Chile no es del todo exacta, pues, hai muchos autores que aceptan la indemnizacion como un deber de equidad, i gobiernos hai que en casos análogos la han pagado.

Este deber de equidad se convierte en un deber de justicia respecto de los daños causados por el bombardeo de Iquique, por cuanto este no fué debidamente notificado; i esta omision importa una infraccion de los preceptos del Derecho Internacional moderno.

Con estos antecedentes, ruego a V. E. acepte en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Impuesto el ajente del Gobierno de Chile del escrito de réplica que se ha presentado a nombre de la razon social *North i Jewell* en la reclamacion núm. 42, tiene el honor de esponer lo siguiente.

1 Procura el señor ajente británico en su réplica, llenar las omisiones en que incurrió en el memorial; pero aparte de la inoportunidad con que se trata de subsanar los defectos de esa pieza, no ha logrado todavia consignar todos los datos que el Reglamento exige. Asi, por ejemplo, no ha espresado el lugar i año del nacimiento de los reclamantes. Insisto, por tanto, en la peticion que tengo formulada de no dar curso a esta reclamacion, por no estar deducida en la forma que prescribe el Reglamento.

2 Ninguna prueba se ha aducido de la nacionalidad de los reclamantes. El señor ajente británico se contenta con manifestar que se trata de un hecho público, sobre el cual no debiera abrigar dudas el ajente que suscribe. V. E. juzgará el caso, resolviendó si cree acreditada la nacionalidad de los reclamantes mediante una obser-

vacion como la que dejo espuesta. Por mi parte carezco de antecedentes para aceptar la verdad de un hecho de tanta importancia para el presente juicio, basado en la simple palabra de mi honorable contradictor.

No comprobándose la nacionalidad de los reclamantes por los medios acostumbrados en el Derecho, es evidente la falta de jurisdiccion del tribunal para conocer de este reclamo.

3 He objetado el poder conque el señor Morrison dice representar a los señores North i Jewell, por ser deficiente en su forma i en su fondo. Sobre lo primero manifesté que no se acompañaba el testo ingles, apesar de la espresa prescripcion del art. II del Reglamento. A esto se replica diciendo que el testo orijinal no podia presentarse por estar protocolizado en una notaria de Iquique. Semejante razon podria tener algun peso, si yo hubiera exigido la exhibicion del testo orijinal que se dice protocolizado. Mi peticion fué mas modesta, i está amparada por la disposicion reglamentaria que he citado. He solicitado simplemente la presentacion del testo en su idioma orijinal, es decir, en ingles; i para el efecto basta una copia autorizada de él. Muchas veces las versiones de un idioma a otro son deficientes, i a traductores mui competentes suelen escaparse errores de concepto, de cuya importancia pueden no darse cuenta. Por lo demas, el Reglamento es terminante, puesto que prescribe presentar los documentos en castellano i en ingles.

En cuanto al fondo, el poder es insuficiente porque uno de los mandantes ha fallecido, i porque no ha sido conferido para entablar esta reclamacion.

Grande admiracion se manifiesta de que haya llegado a mi conocimiento la muerte del señor Jewell, i no el hecho de ser tanto él como el señor North súbditos británicos. Mui dueño es mi honorable colega de sorprenderse por todo lo que parezca conveniente; pero el Tribunal comprenderá que es mas fácil saber el fallecimiento de una persona, que la prensa se ha encargado de publicar *urbi et orbi*, que el hecho de haber nacido ese mismo individuo en tal o cual parte, punto sobre el cual no es fácil tener medios seguros de informacion.

Pero se dice que el poder no ha caducado con la muerte del señor Jewell, porque el verdadero mandante es la sociedad *North i Jewell* que no está disuelta; i no particularmente cada uno de los señores nombrados, que forman una persona distinta de los socios.

Ignoro, por mi parte, si la mencionada sociedad tiene verdadera existencia legal, pues ningun documento se ha acompañado para acreditar esa existencia. Ignoro, asimismo, si ella fué constituida en Chile o en Inglaterra. Quiero suponer que se trata de una sociedad establecida con todos los requisitos legales; i en este concepto, sostengo que ella quedó disuelta desde la muerte del señor Jewell.

Si la sociedad era chilena, seria del caso aplicar el artículo 2103 del Código Civil, segun el cual se disuelve la sociedad por la muerte natural o civil de cualquiera de los socios. En tal caso careceria tambien de todo derecho para reclamar, porque, siendo en Chile la sociedad una persona distinta de los socios individualmente considerados, de nada serviria que éstos fuesen súbditos británicos desde que la sociedad misma fuese chilena, i ella fuese tambien la reclamante.

Si la sociedad hubiese sido constituida en Inglaterra, ella no formaria una persona distinta de los socios individualmente considerados. «Una sociedad, dice Lehr en sus *Elementos de Derecho Civil Ingles, partnership*, compuesta de dos o mas particulares, no constituye, *at law*, una persona moral distinta i no puede estar en juicio como tal i bajo su razon social.» (Obra citada, L. 3.º, seccion 2.ª, cap. 1.º). ✓

Fuera de esto, que basta por sí solo para echar por tierra el argumento del contendor, hai que tener presente que en Inglaterra, lo mismo que en Chile, la sociedad se disuelve de pleno derecho, entre otras causas, *by operation of law*, por la muerte de uno de los asociados. (Obra citada, § 831). I no es extraño que esta disposicion sea comun a todas las lejislaciones, si se tiene presente que ella tiene su orijen de la lei romana: *Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione, ideoque sive homines, sive res, sive voluntas, sive actio interierit, distrahi videtur societas*.

De manera, pues, que si el mandato ha sido otorgado por los

socios separada o colectivamente, en todo caso ha caducado con la muerte de uno de ellos, sea con arreglo al principio de que la muerte del mandante pone término al mandato, sea porque la sociedad misma quedó disuelta desde el fallecimiento de uno de los socios.

No necesito demostrar que para gestionar por otro en un juicio de compromiso, en todas partes se requiere mandato especial, no bastando el que se ha conferido para la administración de los negocios ordinarios del mandante. Juzgo, pues, que también por este motivo es insuficiente el poder acompañado.

4 Se pretende atribuir mérito probatorio a las declaraciones que puedan prestar los empleados de los señores North i Jewell, por cuanto esos testigos tienen pleno conocimiento de los hechos. Ello bien podrá ser exacto; pero de seguro que ningún tribunal del mundo podrá tenerlos como testigos imparciales. Ampliamente he discutido esta cuestión en la réplica de la reclamación número 34, i no creo necesario volver sobre ella. Me basta decir que los dependientes o empleados de una persona son testigos tachables desde el tiempo de la legislación romana hasta hoy; i que la regla está consignada en todos los Códigos modernos.

5 También me parece inútil dilucidar la cuestión legal. Ella ha sido ampliamente tratada en todas las reclamaciones análogas a la actual. El señor agente británico agrega hoy que es deber de equidad indemnizar a los neutrales que sufren a consecuencia de un combate, i que este deber de equidad se transforma en deber de justicia cuando los daños provienen, como en el caso actual, de un bombardeo que no ha sido notificado.

Podrá, agregó a mi vez, haber equidad en resarcir a los neutrales que sufren perjuicios durante un combate; pero el Tribunal no está llamado a fallar conforme a la equidad. Este punto ha sido también largamente discutido para que sea preciso volver sobre él. Lo que no explica mi honorable contradictor es la manera cómo el deber de equidad se transforma en deber de estricta justicia en razón de provenir los perjuicios de un bombardeo no notificado previamente.

He manifestado en otras reclamaciones anteriores a ésta que el

ataque por la Escuadra a las tropas del coronel Soto que pretendia apoderarse de Iquique en la mañana del 19 de Febrero de 1891, no fué propiamente un bombardeo en el sentido técnico de la palabra; i que, aunque lo hubiera sido, no habria habido obligacion de notificar a los neutrales por haberse tratado de la defensa hecha contra un ataque sorpresivo; i porque no corrieron peligro personal los habitantes, todos los cuales pudieron ponerse oportunamente a salvo.

La accion deducida, ne tiene, por consiguiente, base en el derecho, i espero se servirá V. E. desestimarla, en el caso de no dar lugar a alguna de las escepciones previas.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

SENTENCIA

Heriberto Guillermo Morrison, en representacion de la razon social North i Jewell, súbditos británicos, reclama del Gobierno de Chile la suma de cuatrocientas setenta i siete libras esterlinas mas intereses de este capital al seis por ciento en cuatro años, que ascienden a ciento catorce libras nueve chelines ocho peniques, por perjuicios sufridos i causados por bombas i granadas durante el combate de Iquique el 19 de Febrero de 1891.

El ocurrente espone que durante el combate que tuvo lugar en Iquique el dia preindicado entre las fuerzas del Gobierno de Balmaceda, bajo las órdenes del coronel Soto i las fuerzas de tierra i mar del partido congresista, bombas i granadas penetraron en la casa-habitacion i escritorios de sus mandantes, ubicados en los números 10, 12 i 14 de la calle Esmeralda en Iquique, i que dichas bombas causaron destrozos i averías en sus muebles i bienes por el valor de la suma demandada.

Para corroborar su esposicion, acompaña una protesta hecha en 21 de Setiembre por el señor Julio G. Grupdy, representante de

los señores North i Jewell, ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique señor Heriberto Guillermo Morrison; una cuenta del mismo representante del valor de las cosas destruidas, inventario de éstas; declaraciones de tres testigos prestadas ante el cónsul británico en Iquique señor H. A. R. Harvey; i un poder conferido por los señores North i Jewell a favor del señor Heriberto Guillermo Morrison.

El agente del Cobierno de Chile contesta esponiendo que el memorial adolece de defectos sustanciales, no dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos IV i V del Reglamento, por lo que pide al Tribunal se sirva desechar la reclamacion; que no se ha probado el carácter de súbditos ingleses de los reclamantes por lo que el Tribunal es incompetente para conocer en este juicio; que no estima suficiente el poder que se acompaña por haberse presentado solamente la version castellana i no el testo orijinal, como lo exige el artículo II del Reglamento; que siendo notorio el fallecimiento de uno de sus mandantes, esta circunstancia pone término al mandato; no tienen valor las declaraciones de los testigos que presenta el ocurrente por ser estos dependientes de la casa que hace el reclamo; que ménos todavia acepta el valor que se le atribuye a las pérdidas i deterioros que se cobran, i que aun siendo ciertos los hechos espuestos por el reclamante, los perjuicios recibidos fueron consecuencia de un acto lejítimo de guerra, i, en conclusion, tocando el punto de derecho, se refiere a las citas que ha hecho en reclamaciones análogas, de doctrinas sustentadas por varios tratadistas de Derecho Internacional.

En la réplica se rechazan las impugnaciones de hecho, i las de derecho se refutan esponiendo que hai muchos tratadistas que aceptan la indemnizacion como un deber de equidad, i, en casos análogos al presente, otros gobiernos han pagado, i que, en el caso actual, este deber de equidad se convierte en justicia por no haber sido el bombardeo de Iquique debidamente notificado conforme a los preceptos del Derecho Internacional moderno.

El agente de Chile, duplicando, dice que estima que lo espuesto en la réplica no modifica en nada la situacion, i en consecuencia insiste en lo espresado en la contestacion; i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocado por ámbas partes, importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupadas inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres, mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de las seis de la mañana el coronel Soto del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder;

Considerando: que en la protesta hecha por el señor Julio E. Grundy, representante de la firma North i Jewell, bajo juramento, en 21 de Setiembre de 1891, ante el cónsul de S. M. B. en Iquique, declara que sus pérdidas se deben al bombardeo i batalla de 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que esta afirmacion de Grundy está confirmada por las declaraciones juramentadas de los testigos José Blake, Carlos C. Brough i Juan W. Niblock, prestadas en 31 de Enero de 1895 ante el cónsul de S. M. B. en Iquique;

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia, a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Es-

cuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891, una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era una ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla, no solo por un golpe de mano sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un beligerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra, en la Conferencia de Bruselas de 1874*, art. 15.—Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, art. 756, núm. 4.—A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffcken, *Manual de Derecho de la guerra del Instituto de Derecho Internacional* citado por Hall, páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, art. 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad ocupada no puede verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente; que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso previo a los habitantes de Iquique, puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con

anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la Guerra en la conferencia de Bruselas, 1874. i que exime de aviso previo. (Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*. Edicion de 1886, art. 554);

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los beligerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia procurarles la explotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique en 19 de Febrero de 1891 es una consecuencia desgraciada de actos lejitimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile, que, como lo dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable; tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte para los propietarios que los sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, son pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho». —(Vattel *Derecho de Jentes*, libro 3.º capítulo XV, párrafo 232.— *The Law of Claims against Governments*.—*House of Representatives 42 D Congress Report*, número 134, páj. 274 Washington, *Government Printing Office*, año 1875);

Por estos fundamentos, el Tribunal por mayoria de votos, disintiendo el Arbitro Ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 28 de Octubre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED
ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 28 de Octubre de 1895.—
Diego Armstrong, secretario.



RECLAMACION N.º 43

COMPANIA DE SALITRES «CALORADO» LIMITADA

MEMORIAL

Yo Heriberto Guillermo Morrison vecino de Iquique, súbdito británico, nacido en Lóndres el 8 de Julio de 1863, representante legal de la *Compañía de Salitres Colorado Limitada*, reclamo el principal de cinco mil novecientas noventa i tres libras doce chelines un penique esterlinas (£ 5,993-12-1) del Gobierno de Chile, por los siguientes motivos, i a mas un mil cuatrocientas treinta i ocho libras, nueve chelines i cuatro peniques esterlinas, [£ 1,438-9-4] intereses al 6 % por cuatro años.

La arriba mencionada *Compañía de Salitres Colorado Limitada*, es i fué en fecha de Marzo 7 de 1891 una compañía anónima debidamente registrada segun las leyes sobre compañías de responsabilidad limitada, teniendo su domicilio en Inglaterra.

La oficina salitrera *Buen Retiro* situada en la inmediata vecindad de Pozo Almonte, en la provicia de Tarapacá. es i fué en fecha 7 de Marzo de 1891 la propiedad de la *Compañía de Salitres Colorado Limitada*.

En consecuencia de circunstancias que tienen conexión con la batalla que tuvo lugar en i a los alrededores de Pozo Almonte el

dia 7 de Marzo de 1891 cuyas circunstancias está mas particularmente manifestados en la declaracion de Enrique Gualterio Polwhele que va anexada a este i señalada con la letra H la antedicha oficina *Buen Retiro* sufrió perjuicios a consecuencia de pillaje i destruccion licenciosa que causó pérdidas a la *Compañía Salitrera Colorado* ascendente a la suma de £ 5,993-12-1.

Ni la *Compañía de Salitres Colorado* ni cualquiera de las personas por cuyos efectos era responsable la dicha Compañía, tomó parte en la guerra civil chilena de 1891 sea sirviendo o recibiendo pago de cualquiera de los dos partidos contendientes.

La *Compañía Colorado* no ha recibido dinero alguno o compensacion a cuenta de su reclamo ni tampoco ha sido presentado su reclamo, de antemano, a ningun otro Tribunal.

Yo, Heriberto Guillermo Morrison, juro que todo lo espuesto en este memorial es exacto i verdadero, i confirmo los hechos que en ello he aseverado.

[Firmado].—H. W. MORRISON.

Jurado ante mí el 13 de Abril 1895.—(Firmado)—H. A. R. HERVEY.
Sello.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como ajente de Chile, paso a contestar la reclamacion núm. 43, en la cual don Heriberto Guillermo Morrison, a nombre de la *Compañía de Salitres Colorado Limitada*, demanda £ 5,993-12-1, mas £ 1,438-9-4 por intereses, valor atribuidos a objetos que se dicen robados o destruidos en la oficina *Buen Retiro*, a consecuencia de la batalla de Pozo Almonte, el 7 de Marzo de 1891.

Una sociedad anónima industrial como la reclamante, que tiene en Chile, no digo su principal establecimiento, la propiedad terri-

torial que constituye todo el objeto de su explotación, no puede ser considerada como extranjera en Chile.

Aun considerada inglesa, la Compañía reclamante, como persona moral i jurídica creada por la lei inglesa, carecería de *status* o capacidad legal fuera de los dominios ingleses. Para esto, nada importaría que, en un momento dado, muchos o todos los accionistas fueran ingleses, porque en derecho universal toda sociedad anónima constituye una entidad distinta de cada uno de los socios individualmente considerados.

Aun aceptada como persona con capacidad legal suficiente para gestionar ante las autoridades chilenas del fuero comun ordinario, la Compañía reclamante carecería de capacidad para ocurrir ante este Excmo. Tribunal, de jurisdiccion extraordinaria: segun la Convencion que le ha dado oríjen, la competencia de V. E. ha sido limitada al conocimiento de reclamaciones deducidas por *súbditos* ingleses, términos aplicables solo a personas naturales o seres humanos, no a las que son puramente una ficcion de la lei.

Estos puntos relativos a la nacionalidad i existencia estraterritorial de las sociedades anónimas, como el relativo a no estar éstas comprendidas en la denominacion de súbditos que emplea la citada Convencion, se encontrarán ámpliamente dilucidados, con referencias a la lejislacion, al derecho i a la jurisprudencia internacionales, en las reclamaciones presentadas a V. E. con los números 4, 5 i 7, a las cuales me refiero sobre dichos puntos.

A virtud de lo dispuesto, opongo desde luego a esta reclamacion la excepcion de incompetencia fundada en que, por una i por otra causa, la Compañía reclamante no es súbdito ingles.

2 Todo lo dicho lo ha sido en el supuesto de ser cierto que dicha Compañía ha sido legalmente constituida en Inglaterra i que el poder otorgado a su nombre en Liverpool el 17 de Agosto de 1893 a favor del memorialista señor Morrison constituya la lejítima representacion de aquella ante V. E.

Ese poder prueba solo que se otorgó en su fecha ante un notario de Liverpool. Nada prueba en cuanto a la verdad de las declaraciones hechas ante aquél por los interesados, como la de estar la Compañía registrada en conformidad con las leyes inglesas, ni en

cuanto a la legitimidad de los títulos de directores que se atribuyen los dos caballeros que presenciaron la aposicion del sello social, ni en cuanto a la necesaria autorizacion para poner el sello i conferir poderes en representacion de la Compañía. El notario no podia legalmente dar fe de ninguna de esas circunstancias, no pasadas a su vista.

Lo natural era que el memorialista hubiera acompañado los estatutos i demas antecedentes relativos a la constitucion de la Compañía i a su reconocimiento en Chile, si lo ha obtenido. Eso era tambien lo prescrito por el Reglamento de Procedimientos. Una escritura de poder no es comprobante de nada de aquello, siendo de advertir que en ella no consta ni la fecha de incorporacion de la Compañía.

De todo lo cual resulta que no están debidamente justificadas ni la constitucion de la Compañía ni la personería del señor Morrison, i que, por lo tanto, corresponde a V. E. no admitir la reclamacion.

3 En cuanto a los hechos, incompletamente espuestos en el memorial, debo declarar que no acepto como cierto en contra de Chile ninguno, porque ninguno aparece comprobado.

Entre los anexos figuran diversas esposiciones, que parecen copiadas las unas de las otras, firmadas por los señores Polwhele, Jeffery, Ninness i Maitland ante el cónsul ingles de Iquique, en una misma fecha, el 27 de Julio de 1891; pero, tales testimonios no pueden ser tomados en seria consideracion, ya por no ajustarse a lo prescrito en orden a prueba testimonial, ya por carecer los testigos de la imparcialidad necesaria: todos eran empleados de la oficina *Buen Retiro*; i alguno de ellos, como los dos primeros, figuran ademas en calidad de reclamantes por su propia cuenta i por la misma causa que la *Compañía Colorado*.

En comprobante para mayor ilustracion de la materia, pueden confrontarse con esta reclamacion núm. 43, jeneral de dicha Compañía, las tres reclamaciones núms, 36, 40 i 41, particulares de otros tantos empleados de la misma, con cuyas declaraciones procuran favorecerse recíprocamente, sin ajustarse por lo demas a formas reglamentarias.

De las cuatro reclamaciones aparecen en claro los hechos siguien-

tes: que la batalla referida se dió el 7 de Marzo de 1891 en los alrededores i en la misma poblacion de Pozo Almonte; que, en la mañana de aquel dia, la artilleria congresista abrió fuego sobre las tropas gobiernistas, las cuales dominaban la poblacion i, en parte, ocupaban una posicion «en frente de la dicha oficina *Buen Retiro*», como dice la anexa esposicion del señor Polwhele; que las tropas del Gobierno, derrotadas, «se dispersaron en desórden», como dice la anexa declaracion del señor Jeffery, o «huyeron en desórden,» como dice el señor Polwhele.

Agrega éste: que muchos de los derrotados se refujaron en la oficina *Buen Retiro* i allí tomaron de los depósitos de ropas, vestidos de paisanos para disfrazarse, intentando tomar tambien caballos i mulas para seguir su precipitada fuga; que, mas tarde, soldados i una turba de malhechores saquearon i destruyeron el contenido de las bodegas, pulperia i casa-administracion de la oficina; que, habiendo algunos empleados ido al vecino pueblo de Pozo Almonte a pedir auxilio a los vencedores, se les contestó que no se podia dar proteccion ni mandar tropas i que lo mejor seria ir a ponerse en seguridad en Iquique; que efectivamente se fueron a esa ciudad, de la cual regresaron a *Buen Retiro* solo cuando se hubo restablecido la tranquilidad en Pozo Almonte i sus alrededores.

No puedo aceptar en todas sus partes la exactitud de este relato; pero, a ser cierto lo del saqueo de los depósitos de ropa i demas supuestos robos i destrucciones en la oficina de *Buen Retiro* por los soldados dispersos i turbas de malhechores, consta que los fujitivos «fueron rechazados al desierto pasando por la oficina.»

Asi lo reconoce el señor Polwhele, quien esplica mejor el hecho, con referencia a la oficina i a los supuestos saqueadores, diciendo en su reclamacion particular núm. 40: «En ese mismo punto fueron atacados (los saqueadores) por el ejército constitucional, haciéndolos huir en direccion a la pampa.» I si esto es cierto segun lo confirman ademas los memoriales núms. 36 i 41 ¿cómo puede sostenerse que los vencedores negaron a la oficina *Buen Retiro* la proteccion que en tan extraordinarias circunstancias pudiera prestarle?

Las particularidades de aquella batalla pueden leerse en el parte

oficial que de ella pasó seis días después el jefe de Estado Mayor del ejército constitucional, hoy jeneral don Adolfo Holley. Con referencia al enemigo, se dice allí: «Los restos de su tropa, diezmada por el combate i desmoralizada por la derrota, abandonaron la artillería en la estación de Pozo Almonte i huyeron en dispersion por la pampa de Tamarugal. Allí los persiguió nuestra caballería.» (*Memorandum de la Revolucion de 1891*, p. 112. Santiago, 1892).

Como al memorial no se acompaña documento alguno probatorio i como los testimonios anexos carecen, según lo he manifestado, de todo mérito legal en contra de Chile, resulta que, en último caso, esta reclamación debe ser rechazada por falta de prueba de los hechos en que se funda. Nada hai acreditado en ella: ni la existencia de la Compañía, ni su dominio sobre la oficina «Buen Retiro» i los bienes en ella existentes el 7 de Marzo de 1891, ni la efectividad ni el monto de los perjuicios reclamados, a que fabulosamente se refiere el memorial.

Sobre muebles i otros objetos de casa, cabe observar que algunos de los reclamados aquí como de la Compañía, lo han sido ya por empleados de la misma en las citadas reclamaciones números 36, 40 i 41.

Entre los anexos figura una lista de ropas i objetos que se dicen entregados a oficiales desde el 1.º hasta el 7 de Marzo, otra de animales que se dicen tomados por las tropas, i otra de diversos artículos que se dicen robados; todo, no se sabe cómo ni por quiénes, durante la batalla i los sucesos precedentes i siguientes a ella, etc. Nada de eso acredita ni explica el memorial, i la verdad es que todo eso parece poco serio. Por mi parte, no puedo aceptarlo como cierto, i espero que V. E. ha de considerarlo como absolutamente inadmisible.

Si quiere V. E. saber la verdad sobre los sucesos a que esta reclamación se refiere, especialmente en lo relativo a la oficina *Buen Retiro* i a la conducta de los vencedores, ofrezco desde luego el testimonio del citado jeneral don Adolfo Holley i el del sarjento mayor don Roberto Dávila B. ámbos residentes en Santiago, chilenos.

4 En todo caso, lo que vale es el memorial i no listas i exposiciones completamente desautorizadas.

Debe observarse que el poder del señor Morrison, dado en Liverpool en 1893, aparece presentado en Iquique el mes de Junio de 1894, i sin embargo no tuvo reparo para hacer escribir al pié del memorial, sobre sucesos de 1891, estas palabras: «jurado el trece de Abril de 1895». Con ellas creyó talvez cumplir la prescripcion reglamentaria en órden a juramento, siendo que no se sabe qué es lo que así juró; cosa análoga a la protesta anexa de un señor Niness, quien, ausente de *Buen Retiro*, el día de la batalla, no tuvo la menor dificultad para jurar mas tarde como si todo lo hubiera presenciado.

Como quiera que sea, el memorial del señor Morrison es lo que vale, i sobre causa de los perjuicios reclamados por él, se dice allí esto solo: que, por circunstancias conexas con la batalla, «la antedicha oficina Buen Retiro sufrió perjuicios a consecuencia de pillaje i destruccion licenciosa.» Eso es todo.

Segun eso, supuesta la efectividad de los perjuicios reclamados, éstos habrian sido producidos, no por las fuerzas militares de la República, sino por actos de merodeo o pillaje de soldados dispersos, sin antorizacion de sus jefes; i tales actos no afectarian en derecho la responsabilidad de Chile, ya que jamas podria probarse que las autoridades, teniendo el poder i medios suficientes, no quisieron usar de ellos para impedir los supuestos daños.

De este modo, la reclamacion, infundada en los hechos, careceria en todo caso de base en el derecho. Por eso, fío en que será, en último resultado, desechada por V. E. así en la partida referente a capital como en la referente a intereses, los cuales no se deben por ningun capítulo, ya que no hai que indemnizar perjuicios por una mora que no ha podido existir antes del cobro, no existiendo plazo vencido, ni tratándose de una cantidad líquida.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no admitirla o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Para cumplir con las disposiciones reglamentarias, replicaré con la mayor concision posible a la defensa del señor ajente de Chile, tomando en cuenta solo los puntos capitales.

1 Principia la contestacion negando a la Compañía reclamante su nacionalidad británica, por ser persona ficticia, que, segun la opinion del contendor, no puede tener nacionalidad de ninguna clase. Este argumento es infundado, cosa que V. E. habrá visto ya en muchas de las reclamaciones anteriores, en las cuales se ha probado que las personas jurídicas tienen como nacionalidad la del pais al amparo de cuyas leyes se forman.

2 Pretende tambien el señor ajente de Chile que no se ha comprobado que la Compañía reclamante se haya constituido legalmente. Para refutar victoriosamente esta observacion, bastará manifestar que en el poder conferido por la Compañía al señor Morrison se ve que el notario público de Liverpool, don Hugh Bulkeley Kent, certifica la constitucion legal de la sociedad i que el mismo Gobierno de Chile reconoció esplicitamente este hecho en el decreto en que reconoció a los señores North i Jewell como agentes autorizados de la Compañía de Chile.

Tambien mi contradictor se sorprende de que el señor Morrison, que es ajente de la Compañía solo desde 1893, estendiera i jurara una protesta a nombre de ella en 1891.

Este hecho nada tiene de extraño, porque los agentes de la Compañía reclamante eran en 1891 los señores North i Jewell i el señor Morrison era en esa época el representante de North i Jewell. Por otra parte, si algun defecto de personeria hubiera habido en 1891, este habria quedado subsanado con el poder conferido por la Compañía al señor Morrison en 1893.

3 El señor ajente de Chile se manifiesta tambien un tanto sorprendido de que las declaraciones presentadas en apoyo de esta reclamacion sean todas de antiguos empleados de la Compañía. Esto tampoco es extraño porque es mui natural que en el dia en que se verificaron los hechos que motivan esta reclamacion no hu-

biera en las oficinas de la Compañía otras personas que sus propios empleados, pues en aquellas circunstancias nadie se movía de sus casas para no poner en peligro su vida. Si el Tribunal quiere conocer exactamente la verdad de los hechos i cerciorarse de la verdad de las declaraciones de los testigos puede abrir al efecto un término de prueba i hacer examinar a esos testigos en el modo i forma que se estime conveniente i por el funcionario que el Tribunal designe.

4 En el ardor de su defensa, el señor agente de Chile llega hasta decir que los mismos valores que reclama la Compañía han sido también reclamados en parte por empleados de ésta. Hai en esta afirmación una inexactitud gravísima. Lo que la Compañía reclama es lo que a ella le perteneció exclusivamente i lo que sus empleados han reclamado ha sido el valor de los objetos de su propiedad exclusiva que tenían en las habitaciones que les proporcionaba la Compañía, objetos todos que fueron tomados para el uso de los oficiales i soldados del ejército de Chile. La Compañía i los empleados reclaman cada uno lo suyo i a nadie le extrañará que tanto la Compañía como los empleados tuvieran objetos de propiedad exclusiva de cada cual.

5 Al ocuparse del fondo de este reclamo el señor agente de Chile sostiene que es del todo improcedente i se funda para ello en el argumento de que los actos de que se trata han sido ejecutados por soldados fujitivos o dispersos.

Acerca de este argumento me refiriré a lo que tengo espuesto en la réplica presentada en las reclamaciones núm. 40 de don H. W. Polwhell i núm. 41 de don J. M. Jeffery. No estará demás hacer notar a este respecto que el señor agente de Chile se desentien- de de las prendas de vestir i demás objetos que se entregaron a los oficiales i tropa, lo que me hace presumir que acepta en esta parte la justicia de la reclamación.

Con lo espuesto abrigo la esperanza de que V. E. se servirá aceptar en todas sus partes la presente reclamación.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en la reclamacion hecha a nombre de la *Compañía Salitrera Colorado* por perjuicios que, segun el memorial, sufrió la oficina *Buen Retiro* «a consecuencia de pillaje i destruccion licenciosa», relacionados con la batalla de Pozo Almonte, dada el 7 de Marzo de 1891.

De las circunstancias que tienen conexion con esa batalla, dice el memorial que ellas «están particularmente manifestadas en la declaracion de Enrique Walterio Polwhele, que va anexa a aquél.»

Es de advertir que solo en cuanto a las circunstancias de la batalla hace el memorial referencia a la dicha declaracion del señor Polwhele, sin comprender los demas puntos de esta, relativos a sucesos anteriores a aquel hecho de armas, que ninguna conexion tienen con él ni con la indicada destruccion licenciosa.

Por eso no tuve yo en la contestacion para qué tomar en cuenta dicha declaracion en cuanto se refiere a otra cosa que al pillaje consecuencial de la batalla, que es lo único indicado en el memorial como causa de los perjuicios reclamados i lo único a que ha podido referirse el memorialista señor Morrison cuando, al terminar aquél, dijo,: «juro que todo lo espuesto en este memorial es exacto i verdadero, i confirmo los hechos que en él he aseverado».

Digo todo esto porque no dejarán de llamar la atencion de V. E. como han llamado la mfa, las palabras con que concluye la réplica, segun las cuales yo me he desentendido «de las prendas de vestir i demas objetos que se entregaron a los oficiales i tropa, lo que le hace presumir que acepto en esta parte la justicia de la reclamacion.»

No, Excmo. señor; no he aceptado cargo alguno que el memorial no hace: ni por artículos de pulperia, que el señor Polwhele dice entregados ántes del 7 de Enero a titulados oficiales subalternos o a una llamada division de Tarapacá; ni por artículos de ferreteria i de forraje, que se suponen entregados, durante el mes de

Febrero de 1891, a las tropas del Gobierno; ni por animales, que dice tomados por las tropas gobiernistas i por las congresistas durante los sucesos precedentes i siguientes a la batalla de Pozo Almonte; ni por artículos que supone robados, sin designacion de ladrones, ántes de aquella batalla. Nada de eso se demanda determinadamente ni de ninguna manera en el memorial, nada de eso comprende el juramento, nada de eso consta sino por el simple dicho del contador Polwhele (reclamante número 40), ratificado vaga i jeneralmente por los dichos del cajero Jeffery (reclamante número 41), del bodeguero Maitland i del administrador Miness, que confiesa haber estado ausente del referido lugar durante los sucesos referidos.

El testimonio de aquellos cuatro señores, mas o ménos interesado, mas o ménos incongruente con el memorial, constituiria una prueba *ex parte*, que no podria ser tomada en séria consideracion ni por la calidad i circunstancias de los declarantes i de sus dichos, ni por las informaciones de la declaracion misma.

Esto último puede tambien decirse del memorial. Ningun documento se ha acompañado reglamentariamente a él en comprobante de lo que en él se asevera. Ningun testigo se ha ofrecido con todas las indicaciones personales prescritas en el artículo 1.º i reiteradas en el artículo 11 del Reglamento de Procedimientos, para deponer sobre hechos precisos i determinados. De los mismos señores cuyas declaraciones, sin valor alguno, se han acompañado, no se tienen todas aquellas indicaciones reglamentarias.

Todo bien considerado, solo queda como positivamente cierto que, si en verdad sufrió perjuicios la oficina *Buen Retiro* el 7 de Marzo de 1891, ellos tuvieron lugar luego despues de la batalla de Pozo Almonte i fueron consecuencia natural e inevitable de aquel sangriento hecho de armas, mas inevitables que los saqueos i desórdenes habidos en Valparaíso despues de la batalla de la Placilla, en la noche del 28 de Agosto de 1891, porque la oficina *Buen Retiro*, se encontró comprendida dentro de la zona del fuego en aquella primera batalla. I de las reclamaciones fundadas en aquellos desórdenes de Valparaíso, V. E. ha absuelto justamente al Gobierno de Chile fallando primeramente la reclamacion número 3, en la cual

demostré lo que el derecho i la jurisprudencia tienen establecido respecto de actos de pillaje practicados por malhechores i soldados dispersos escapados a las filas i a la vijilancia inmediata de sus jefes.

Las circunstancias conexas con la batalla de Pozo Almonte han sido por mi parte espuestas, con referencias a documentos oficiales i a relaciones de otros reclamantes, en las reclamaciones números 13, 36, 40 i 41, análogas a la presente, i en la contestacion a esta misma, todo lo cual reproduzco en cuanto sea aquí aplicable.

En conclusion, suplico a V. E. que sin 'mas trámite se sirva resolver como lo tengo pedido en la contestacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Heriberto Guillermo Morrison, súbdito británico, representante legal de la sociedad *Colorado Nitrate Company Limited*, a nombre de ella reclama del Gobierno de Chile cinco mil novecientas noventa i tres libras doce chelines un penique (£ 5,993-12-1) por pérdidas sufridas poco despues de la batalla de Pozo Almonte.

Espone el memorialista que la *Compañía Salitrera Colorado* es una sociedad anónima debidamente registrada. que tiene su domicilio en Inglaterra i a la cual pertenecia en 7 de Marzo de 1891 i aun pertenece la oficina *Buen Reliro*, situada cerca de Pozo Almonte, provincia de Tarapacá; que a consecuencia de la batalla que se libró en Pozo Almonte el 7 de Marzo de 1891, dicha oficina sufrió perjuicios de pillaje i destruccion licenciosa por valor de cinco mil novecientas ochenta i tres libras doce chelines un penique, cantidad que reclama del Gobierno de Chile; que las circunstancias particulares de estos hechos se minifiestan en la declaracion anexa del señor Enrique Gualterio Polwhele, en la que espone: «que en el ya indicado dia en que se libró la batalla de Pozo Almonte, a eso de las once del dia, se declaró la completa derrota

de las fuerzas del partido del Gobierno; que muchos de los oficiales i soldados derrotados, huyendo en dispersion i desórden, llegaron a la oficina de *Buen Retiro*, i a pesar de la resistencia de los empleados, tomaron a la fuerza posesion de ella, forzando puertas, cajas i depósitos de ropa; que sustrajeron los artículos necesarios para disfrazarse de paisanos i luego intentaron apoderarse de las mulas i caballos pertenecientes a la oficina, pero mientras estaban en esta operacion fueron atacados por las tropas victoriosas i obligados a huir al desierto; que él i otros empleados salieron de la oficina hácia Pozo Almonte para pedir proteccion a los oficiales del ejército vencedor, proteccion que no solo les fué negada, sino que se les dijo que si apreciaban sus vidas huyeran a Iquique; que regresaron a la oficina i encontraron una partida de soldados armados i una turba de malhechores tambien armados que estaban saqueando i destruyendo cuanto encontraban; que en vista de la imposibilidad de proteger o salvar la propiedad se dirijieron a Iquique i que tan pronto como cesaron las hostilidades volvieron a la oficina de *Buen Retiro*, donde el señor Polwhele pudo cerciorarse de las pérdidas sufridas por la *Compañía Colorado*, que son las que se detallan en el inventario acompañado, letra A.»

Acompaña como comprobante una protesta i declaracion jurada del señor Albino Jorje Heriberto Ninness, administrador de la oficina *Buen Retiro* ante el cónsul británico en Iquique i tres declaraciones mas prestadas ante el mismo cónsul por los señores Enrique Gualterio Polwhele, Francisco Matthews Jeffery i Roberto Lauderdale Maitland, en las que afirman ser efectivos los hechos espuestos por el memorialista, i un poder de la *Compañía Colorado* a don Heriberto W. Morrison.

El ajente de Chile, contestando, espone: que siendo la Compañía reclamante una sociedad anónima carece del carácter de subdito ingles, i, en consecuencia, no tiene la capacidad para ocurrir ante este Tribunal, en virtud de lo cual pide al Tribunal se declare incompetente para conocer en esta demanda; que no aparecen debidamente justificados ni la constitucion de la Compañía ni la personería del señor Morrison, por lo que pide al Tribunal se sirva no admitir la reclamacion; que no se han acreditado los hechos

en que se funda la demanda, ni la existencia de la Compañía, ni su dominio sobre la oficina *Buen Retiro* i los bienes que en ella existían el 7 de Marzo de 1891, ni la efectividad ni el monto de los perjuicios reclamados, ni el valor fabuloso que se atribuye a las pérdidas, por lo que debe desecharse esta reclamacion, que el testimonio de los testigos que se presentan no puede tomarse en seria consideracion, porque dichos testigos carecen de la imparcialidad necesaria, pues todos eran empleados de la oficina *Buen Retiro* i algunos, como los dos primeros, son ademas reclamantes por su propia cuenta i por la misma causa ante este Tribunal; que aun supuesta la efectividad de los perjuicios reclamados, éstos habrian sido producidos, no por fuerzas militares de la República, sino por actos de merodeo o pillaje de soldados dispersos, sin autorizacion de sus jefes, i tales actos no afectan en derecho la responsabilidad del Gobierno de Chile, ya que jamas llegaría a probarse que las autoridades, teniendo poder i medios suficientes no hubiera impedido los supuestos daños; en conclusion pide que en mérito de las consideraciones espuestas se sirva el Tribunal declarase incompetente para conocer en esta reclamacion, o en subsidio, no admitirla o desecharla en todas sus partes.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho.

Se recibió la causa a prueba i se rindió la que corre en autos; i

Considerando: que el señor Heriberto William Morrison, mandatario de la sociedad anónima *Colorado Nitrate Company Limited*, se limita a afirmar en el memorial presentado a este Tribunal Arbitral que a consecuencia de los sucesos que acontecieron despues de la batalla que tuvo lugar en las cercanías de Pozo Almonte en 7 de Marzo de 1891, la Compañía a quien representa sufrió en su establecimiento de *Buen Retiro* perjuicios por valor de cinco mil novecientos noventa i tres libras esterlinas doce chelines un penique, i que estas pérdidas provinieron de saqueo i destruccion de existencias;

Considerando: que el reclamante no ha presentado otra prueba de sus afirmaciones sino las declaraciones prestadas ante el cónsul de S. M. B. en Iquique el 27 de Julio de 1891, sin citacion de la

parte contraria, por un empleado de la Compañía que es a la vez reclamante ante este Tribunal Arbitral;

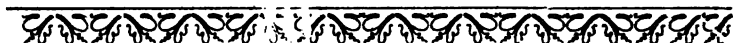
Considerando: que el Tribunal por auto de 27 de Noviembre de 1895, abrió un término de prueba para que el reclamante rindiera ante el juez de letras de Iquique la que juzgare conveniente para comprobar los hechos espuestos en la demanda, i el demandante no hizo jestion alguna ni presentó ningun testigo; que por consiguiante los hechos en que se funda la reclamacion deben considerarse improbados; que el ajente del Gobierno de Chile, por la inversa, presentó dos testigos que se hallaban ese dia en el *Buen Retiro* i permanecieron allí hasta mui avanzada la tarde i que no vieron nada del pretendido saqueo; que resulta de sus declaraciones que si hubo realmente saqueo éste no pudo efectuarse sino despues de la partida de las tropas por malhechores que no pertenecian al ejército regular, actos que no podrian afectar la responsabilidad del Gobierno de Chile.

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por mayoría de votos, disintiendo el arbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion. El arbitro de Chile, al suscribir la presente resolucion, reproduce la reserva contenida al final de los fallos 5 i 7.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Febrero de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.





Reclamacion N.º 44

JUAN KING

MEMORIAL

Yo Juan King declaro que actualmente estoi domiciliado en la Estacion Central de la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros, en la provincia de Tarapacá.

Que soi empleado como maquinista de dicha Compañía.

Que nací en Stewartown, Escocia, en el año de 1831 i por consiguiente soi por nacimiento súbdito de Su Majestad Británica.

Que al tiempo de ocurrirse los hechos que dan oríjen a mi reclamacion contra el Gobierno de Chile, tenia mi residencia en dicha Estacion Central, donde desempeñaba las funciones de jefe de estacion, i que mi reclamacion es por el valor de ciertos bienes tomados de mi casa habitacion por soldados chilenos, i por daños a muebles en dicha casa, hechos por los mismos u otros soldados de la misma nacionalidad, todo durante la indicada guerra civil.

Que excepto como empleado de la Compañía Ferrocarrilera no tomé parte alguna ni directa ni indirectamente en la guerra civil de Chile, de mil ochocientos noventa i uno, cuya guerra principió el 7 de Enero de 1891 i terminó el 29 de Agosto del mismo año.

Que ni durante dicha guerra, ni en ningun otro tiempo, estuve

en el servicio, ni tampoco recibí pago o sueldo de una o de otra de las partes contendientes.

Que mi reclamo no ha sido presentado a otro tribunal, ni tampoco se me ha hecho algun pago o compensacion respecto a ella.

Que el importe de mi reclamacion es la suma principal de setenta i cuatro libras esterlinas, i los detalles de ella son como quedan especificados en el siguiente inventario, i mas, reclamo intereses a razon de 6 por ciento por año desde el mes de Marzo de 1891 hasta la solucion de la cuenta o reclamacion.

INVENTARIO

Parte Primera

	£	S	D
1 Escopeta, con enseres para fabricar cartuchos	12	10	0
1 Maleta de cuero	4	0	0
2 Pares de pantalones	3	0	0
1 Sombrero, 1 gorra i 1 chaqueta . .	2	10	0
6 Pares de medias	1	0	0
1 Un par de botas, 1 par zapatos . .	2	0	0
2 Navajas de afeitar	1	12	0
2 Cojines de sofá	1	4	0
3 Tohallas, 2 almohadas	1	5	0
2 Pares de sábanas i 1 frazada . .	3	4	0
6 Gallinas i 12 palomas	3	0	0
4 Conejos		12	0
3 Ollas		18	0
Algunos cuchillos, tenedores i cucharas	4	0	0
Algunas tazas, platos i vasos. . .	4	10	0
140 Libras harina	3	0	0

	£	S	D
3 Libras té, 12 libras azúcar	1	4	0
10 Latas de carne conservada	1	4	0
12 Tarros de conservas i algunas li- bras de café	1	10	0
6 Frascos de pimenton		12	0
1/3 Saco de papas i una botella de amargo	1	0	0
			£ 53 15 0

Parte Segunda

2 Sofas i 2 butacas	8	0	0
1 Cocina	4	0	0
1 Lámpara de mesa i seis tubos	1	15	0
2 Alfombras i hule	4	10	0
3 Adornos de salon	2	0	0
			£ 20 5 0

SUMARIO: Parte 1.^a £ 53 15 0
 » 2.^a 20 5 0

Total £ 74 0 0

Ademas declaro que durante los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891 la susodicha Estacion Central estaba varias veces ocupada por las tropas de las partes contendientes en dicha guerra civil; i que las indicadas tropas se apoderaron por fuerza de mi casa habitacion; saqueándola i espropiando algunos de mis bienes i malogrando mis muebles.

Que el indicado pillaje se hizo estensivo a la espropiacion de los varios artículos especificados en la primera parte del precedente

inventario. i que los daños a mis muebles son detallados en la segunda parte del mismo inventario.

(Firmado).—JUAN KING.

Yo Jhon King, juro que todo lo que queda espresado en el precedente memorial es exacto i verdadero.

(Firmado).—JUAN KING.

Jurado por Juan King el veintisiete de Marzo de mil ochocientos noventa i cinco.

Por ante mí.

(Firmado).—H. A. R. HERVEY,
cónsul de S. M. B.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile contestando el memorial presentado por don Juan King en apoyo de la reclamacion núm. 44, tiene el honor de esponer lo siguiente.

I El señor King se dice súbdito de S. M. B. por haber nacido en Stewartown, pueblo de Escocia; pero no presenta documento fehaciente de este hecho. Se limita a acompañar la declaracion que dos testigos han prestado ante el cónsul de S. M. B. en Iquique, los cuales aseveran que el señor King es súbdito británico. V. E. no podrá admitir esta manera irregular de comprobar la nacionalidad, que es el *status* del individuo con relacion a estas reclamaciones.

La prueba testimonial no es aceptable para establecer el estado civil de una persona, sino a falta de los libros o registros en que, segun la lejislacion de cada pais, debe estar consignado. No ha alegado el señor King, ni es presumible, que el acta de su naci-

miento haya desaparecido; i mientras no compruebe esa circunstancia, no puede admitirse la informal declaracion de testigos que ha presentado.

Esa declaracion rendida fuera de juicio, sin citacion de mi parte i ante un funcionario que V. E. no ha delegado para este objeto, carece de todo mérito probatorio. Ella, ademas, es vaga i no expresa la manera como han sabido los testigos el hecho de que se trata: si es por haberlo presenciado o por haberlo oido talvez al mismo interesado.

Por mi parte, niego al señor King la nacionalidad que se atribuye, i mientras no la compruebe en debida forma, V. E. habrá de declararse incompetente para conocer de la presente reclamacion, como lo suplico mui respetuosamente.

2 La relacion de hechos contenida en el memorial es de tal manera vaga e indeterminada, que es imposible entrar en el exámen jurídico de la responsabilidad que tales hechos, suponiéndolos efectivos, han podido imponer al Gobierno de Chile.

El reclamante se limita a decir que durante los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891, la Estacion Central de los ferrocarriles de Tarapacá, que dista algunas millas de Iquique, fué ocupada varias veces por las tropas de las partes contendientes en dicha guerra civil; i que las indicadas tropas se apoderaron por fuerza de su casa habitacion, saqueándola i espropiando algunos de sus bienes i malogrando sus muebles.

¿En qué fecha ocurrió este suceso? El reclamante no lo dice, i se limita a indicar vagamente que fué en los tres primeros meses del año 1891.

¿Quién tomó posesion de la Estacion Central i de su casa-habitacion? Tampoco suministra a este respecto otro dato que el haber sido ocupadas ambas por fuerzas de las dos partes contendientes. que es como no decir absolutamente nada.

¿Los muebles i objetos fueron tomados por órden de los jefes, o por soldados dispersos i alejados de sus cuerpos que obraban por su cuenta i riesgo? Nuevo silencio del reclamante, i nueva imposibilidad para contestar a su memorial.

Porque V. E. comprende fácilmente que es de todo punto

imposible hacer la defensa del Gobierno de Chile ni preparar la prueba del caso ante una demanda concebida en términos tan jenéricos i que se prestan a una variedad infinita de interpretaciones. La responsabilidad del Gobierno de Chile puede o no existir i puede tambien ser mui diversa segun la manera como hayan pasado los hechos. Si el señor King fué espropiado por órden de los jefes de las fuerzas militares, i sin que esta medida fuese necesaria para un combate inminente u otra operacion de guerra, es indudable que al Gobierno le incumbe la obligacion de indemnizarlo. Si sus objetos fueron perdidos a consecuencia de un encuentro militar, o robados por soldados que merodeaban separados de las filas i contrariando órdenes superiores, será absolutamente nula la responsabilidad del Gobierno de Chile.

En la imposibilidad de contestar esta demanda a causa de la oscuridad de que adolece el memorial que contraviene en esto a la prescripcion terminante del art. VII del Reglamento, no puedo hacer otra cosa que oponer la escepcion de ineptitud u oscuridad del libelo, escepcion admitida en todas las lejislaciones, i que reconoce la citada disposicion del Reglamento, que no puede haber sido dictada sino con este solo objeto. Ella está de acuerdo con la lei romana: *In actione actor omnia nosse debet et dicere argumenta rei de qua agitur*. Si el actor no especifica los hechos i los fundamentos de su accion, el reo queda en la perfecta imposibilidad de defenderse.

Pido, pues, a V. E. que se sirva rechazar esta demanda por oscura e inepta.

3 El reclamante ha presentado por via de prueba el testimonio de dos personas, para acreditar el hecho de haber sido robado de los objetos de su pertenencia que enumera en el memorial. Esta prueba, aparte de sus defectos de forma que la hacen inadmisibile adolece de la misma oscuridad i deficiencia de que se resiente el memorial. No se espresa la fecha de los saqueos o robos, ni las personas que lo efectuaron ni la manera como fueron llevados a cabo. Juzgan solo que es exacta la esposicion del reclamante en cuanto al número i valor de los objetos desaparecidos.

Por lo demas, estas deposiciones han sido hechas fuera de juicio,

sin citacion de mi parte i ante un funcionario que V. E. no ha deputado para ese fin.

En mérito de lo espuesto, ruego a V. E. que, en caso de declararse competente, se sirva desechar la demanda a causa de su oscuridad i falta de especificacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTINEZ DE F.

RÉPLICA

Juan King contestando las observaciones del Gobierno de Chile respecto a mi reclamacion tengo el honor de presentar la siguiente réplica:

El ajente del Gobierno de Chile niega que yo sea un súbdito de S. M. B.; pero es público i notorio en la provincia de Tarapacá que soi escoces i que vine directamente de Escocia a Sud-América en el año 1873, para ser maquinista de los Ferrocarriles Salitres, i que desde entónces siempre he sido empleado de dichos ferrocarriles.

Los señores Roberto Mac Crae i Cuillermo Downie el uno de Pisagua i el otro de Pozo Almonte, ámbos maquinistas, me conocian bien en Escocia i saben que soi escoces, i estos señores si así deseara el Excmo. Tribunal, estarán listos a comparecer ante cualquier funcionario que sea nombrado *ad hoc* a declarar bajo juramento en el sentido espresado i ofrezco a dichos señores Mac Crae i Downie como testigos en apoyo de mi reclamacion.

El ajente del Gobierno padece de un error al imaginar que en la fecha en que nací, fué práctica universal el registro de los nacimientos en el Reino de Escocia i aunque no puedo probar si existe o nó el registro de mi nacimiento i de mi bautismo, puesto que me falta el tiempo necesario para emprender las indagaciones del caso, creo que la prueba que ofrezco es suficiente para establecer mi nacionalidad.

Respecto a la pérdida de mi propiedad por cuya pérdida reclamo

al Gobierno de Chile, debo decir que mi casa-habitacion fué entrada por fuerza por orden del coronel Soto en Febrero de 1891 i despues por orden del coronel Gana i que dichos oficiales presenciaron los actos indicados i la remocion de mis bienes.

Para corroborar lo que acabo de afirmar, deseo ofrecer como testigo a dicho señor Roberto Mac Crae que se encontraba presente al tiempo en la estacion central i que está listo a declarar bajo juramento ante el comisionado por el Tribunal respecto a los hechos que forman la base de mi reclamacion.

Pido al Excmo. Tribunal, que se ordene examinar mis testigos en Iquique, puesto que no me es posible incurrir en los gastos que me reportaría de llevarlos a Santiago.

JUAN KING

DÚPLICA

D. Juan King, en su escrito de réplica de la reclamacion número 44, se ha limitado a solicitar del Tribunal que se admita para probar su nacionalidad el testimonio de las dos personas que presenta como testigos; i el de una de ellas para comprobar el despojo de que dice haber sido víctima en los primeros meses del año de 1891.

He tenido el honor de impugnar el sistema probatorio que el señor King pretende hacer valer para acreditar su nacionalidad. En derecho es inadmisibile la prueba testimonial para establecer el *status* de una persona. La lei británica, lo mismo que la de todos los paises civilizados, no permite este medio de prueba, sino cuando consta indudablemente que no existe la partida de nacimiento de una persona. Doi por reproducidas en este lugar las razones que aduje acerca de esta misma cuestion en la dúplica de la reclamacion núm. 42, i las doctrinas i disposiciones legales que invoqué al respecto.

Al contestar la reclamacion hice presente que, por no haber

cumplido el reclamante con la prescripción del art. VIII del Reglamento, era imposible a la defensa oponer las escepciones que competían al Gobierno de Chile. No se ha hecho la esposición clara i detallada del reclamo, ni se ha indicado la fecha de los actos que le han dado oríjen, ni siquiera se ha precisado la naturaleza i circunstancias de esos mismos actos.

En su réplica, el reclamante no se ha demostrado mas esplicito que en el memorial. La misma vaguedad en la lacónica esposición de lo sucedido, i la misma oscuridad acerca del oríjen de los hechos se notan en una i en otra pieza.

El único detalle que se agrega consiste en la indicación de haber sido los coroneles Soto i Gana quienes dieron orden i aún presenciaron la sustracción de los objetos pertenecientes al reclamante en el mes de Febrero de 1891.

Creo que me será fácil contrarestar cualquiera prueba que se pretenda rendir sobre este hecho, a todas luces inverosímil; pero necesito para ello que el reclamante espresé como acaecieron los sucesos que narra i en que fecha tuvieron lugar. Sin estos datos, la prueba que yo rindiese adolecería de la misma vaguedad de que se resienten el memorial, la réplica i la prueba misma que en forma irregular se ha presentado por el reclamante.

Pido, en consecuencia, que V. E. se declare incompetente para conocer de esta reclamación por no estar comprobada la nacionalidad del reclamante. En subsidio se ha de servir el Tribunal, rechazar la demanda por no estar formulada con la claridad i precisión que ordena el Reglamento. I todavía, si V. E. creyese del caso recibir la prueba ofrecida por el señor King, ha de tener a bien ordenar que previamente se especifique la demanda de tal modo que permita al agente del Gobierno de Chile oponer las excepciones que correspondan, i rendir la prueba que convenga a su derecho.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

John King, natural de Escocia, comerciante, reclama del Gobierno de Chile: setenta i cuatro libras esterlinas, mas intereses sobre esta suma, a razon de 6 por ciento anual, desde Marzo de 1891 hasta la fecha del pago, por bienes tomados i daños sufrido en su casa-habitacion en la estacion central de los ferrocarriles salitreros (Tarapacá).

Expone el memorialista que durante la guerra civil de Chile en 1891, la Estacion Central de los Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá fué ocupada, en diversas ocasiones, por las tropas de las partes contendientes, i que las indicadas tropas se apoderaron por fuerza de la casa-habitacion del reclamante, apropiándose muchos efectos i malogrando sus muebles; que la especie i valor de los primeros están designados en la primera seccion del inventario que inserta en el memorial, i el importe del daño al mobiliario está especificado en la segunda parte del espresado inventario.

En justificacion de su demanda, acompaña dos declaraciones de testigos, prestadas ante el cónsul de S. M. B. de Iquique, en 1895, para justificar su carácter de súbdito británico, i otras dos prestadas en la misma forma i época para confirmar los hechos espuestos en el memorial.

El agente de Chile pide se declare incompetente el Tribunal, por no justificar el reclamante su carácter de súbdito británico, pues con declaraciones de testigos no es la manera de comprobar la nacionalidad; que, en subsidio, se deseche la reclamacion por estar el memorial concebido de una manera vaga e indeterminada; que no se precisa hecho, época ni persona alguna, lo que se pugna con el artículo VII del Reglamento; que las declaraciones de los testigos, aparte de no tener condicion alguna de legalidad, son tan vagas e indeterminadas como el memorial.

En la réplica se sostiene que basta la prueba de testigos para establecer la nacionalidad, i señala a los coroneles Soto i Gana como los jefes que ordenaron el pillaje de sus bienes i los designa como testigos. En la dúplica se insiste en las mismas alegaciones

espuestas en la contestacion, pues se considera que con la réplica no se ha modificado la situacion.

Considerando: que en el memorial presentado a este Tribunal Arbitral, el reclamante John King no dice sino que durante los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891, cuando él vivia en la Estacion Central de la Compañía de Ferrocarriles de la provincia de Tarapacá soldados chilenos se apoderaron de efectos que le pertenecian i dañaron sus muebles; que no precisa ni el momento en que ocurrieron los sucesos ni el rejimiento a que pertenecian aquellos soldados, ni los nombres de los oficiales que los comandaban i que hubiesen tolerado los excesos; que en la réplica solamente señala a los coroneles Soto i Gana como los jefes que mandaban las fuerzas que ocuparon la Estacion Central en épocas diversas;

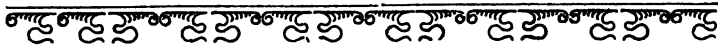
Considerando: que los hechos alegados son demasiados vagos e indeterminados para recibirlos a prueba, que no tendria pertinencia; que ademas el reclamante no se ha ajustado a los artículos I i XI del Reglamento de Procedimientos, i ni ha especificado los hechos que se propone comprobar, ni designado los testigos que han de declarar, dando sobre ellos los datos exijidos por el Reglamento.

Por estos fundamentos, el Tribunal, por mayoría de votos, disintiendo el arbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion.

Santiago, 4 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDÚNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 4 de Noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 45

ZOILA ROJAS VALDES VIUDA DE THOMPSON

MEMORIAL

Yo Zoila Rojas Valdés v. de Thompson, natural de Chile teniendo por matrimonio los derechos de un súbdito británico, respetuosamente someto a la consideracion del honorable Tribunal Anglo-chileno para los reclamos británicos provenientes de la guerra civil de 1891 documentos relativos al reclamo de mi finado esposo W. E. Thompson por las pérdidas sufridas por la firma de Nienhüser i Thompson de la cual era socio, por el incendio a consecuencia del bombardeo de Iquique por la Escuadra chilena el dia 19 de Febrero de 1891 elevándose a la suma de dos mil doscientas libras diezinueve chelines esterlinas e intereses sobre la misma desde el dia 19 de Febrero 1891 a 31 de Diciembre de 1894 elevándose a quinientas diez libras dos chelines i diez peniques esterlinas i ruego respetuosamente que el honorable Tribunal me conceda como representante legal de mi finado esposo la proporcion correspondiente a su mitad de interes en el dicho reclamo de Nienhüser i Thompson. Los documentos sustanciando mi reclamo son los siguientes:

La declaracion jurada de mi finado esposo William Eduardo Thompson sentando los detalles del reclamo.

Protesta hecha por el finado William Eduardo Thompson ante el cónsul británico.

Inventario de las mercaderías i mobiliario de Nienhüser i Thompson.

Declaraciones juradas de J. N. Peake, George W. Sherrat i William Rawlings.

Cuenta de intereses sobre el reclamo.

Certificado del matrimonio entre el finado William Eduardo Thompson i yo.

Certificado de defuncion del finado William Eduardo Thompson.

Escritura de la sociedad de Nienhüser i Thompson.

Es notorio que el fuego podia haber sido estinguidos por las Compañías de Bomberos si no lo hubieran impedido las tropas bajo las órdenes del coronel Soto quienes les amenazaban con rifles i les hicieron retirar de la escena del incendio.— Véase el parte del comandante Merino Jarpa en el *Boletín Oficial*.

(Firmada).—ZOILA ROJAS VALDES V. DE THOMPSON.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente de Chile, anticipo que pocas palabras me bastan para dar por contestada esta reclamacion, en la cual, se hace figura la firma *Nienhüser & Thompson* como reclamante de £ 2,200-19-0, mas £ 510-2-10, por perjuicios que se dicen causados por un incendio durante el combate de Iquique de 19 de Febrero de 1891.

Don Otto Nienhüser, socio de aquella firma, no aparece reclamando por sí ni por mandatario, ni dando paso alguno que manifiesta haber alguna vez tenido el derecho i la voluntad de reclamar.

Don Guillermo E. Thompson, el otro socio, aparece preparando

una reclamacion mediante una protesta i ciertos testimonios rendidos en Iquique el 23 de Enero de 1892; pero, como falleció cuatro meses despues, el 22 de Mayo del mismo año, no alcanzó a realizar su idea de reclamar, la cual talvez habria abandonado por carecer de todo fundamento así en el derecho, como en los hechos, los cuales de ninguna manera se han acreditado.

En esta situacion, se hace aparecer como reclamante a la viuda del señor Thompson, *natural de Chile* doña Zoila Rojas Valdes, probablemente sin su anuencia i voluntad, como que en ninguna parte aparece su firma. No podria ella en derecho titulares representante legal de su finado esposo; i ménos podria tener el estado i carácter de súbdito ingles despues que la muerte rompió el vínculo que el matrimonio habia creado.

No hai, pues, en nuestro caso reclamacion en forma reglamentaria i deducida por parte interesada. En consecuencia, debe ordenarse que se archiven estos antecedentes, como en casos análogos lo ordenó por unanimidad, en 1887, el Tribunal Anglo-chileno de Santiago, segun lo manifiestan sus fallos números 61, 63-66, 86, 87, 93.

En último caso, considerando que doña Zoila Rojas, nacida en Chile i domiciliada en su pais natal ántes de su matrimonio, durante él i en su viudedad, no inviste el carácter de súbdito británico, deberá declararse inadmisibile esta reclamacion, como lo hizo el citado Tribunal Anglo-chileno, tambien por unanimidad, en el caso de doña Virginia Mariátegui viuda de Sewayne, segun los fallos números 55 i 56.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva mandar que se archiven los antecedentes, i en subsidio, que se declare inadmisibile la reclamacion.

GASPARTORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Zoila Rojas Valdes v. de Thompson, en el reclamo interpuesto ante V. E. por mi finado esposo Guillermo E. Thompson, súbdito británico, espongo: que V. E. se ha de servir tener presente al tiempo de fallar las consideraciones que paso a esponer en respuesta al último memorandum presentado por el ajente de Chile.

1 Consta de la presentacion o reclamo hecho por mi finado esposo, en su parte final, que el reclamo lo hizo por sí i a nombre de su socio don Enrique Otto Nienhüser, o lo que es lo mismo a nombre de Nienhüser i Thompson de cuya firma tenia el uso, como aparece de la cláusula segunda del contrato social que tambien se acompañó al reclamo; por consiguiente, mal se puede decir, como lo afirma el señor ajente de Chile, que Nienhüser no ha reclamado.

2 Acompaño el testimonio de mi finado esposo, señor Thompson, en el que consta que yo i sus hijos, mis pupilos, somos sus únicos herederos; así mismo acompaño una escritura de declaracion que he hecho ante el notario público de Iquique, don Enrique Vergara i Vergara, en la que consta que he sido yo por si i a nombre de mis pupilos los hijos i herederos del súbdito británico señor Thompson, la que me he presentado a continuar i hacer las jestionnes del caso en el reclamo deducido por el señor Thompson, cuyos derechos es el único bien que les ha dejado a sus pequeños hijos; por consiguiente, mal puede creerse que se haya tomado mi nombre sin mi voluntad para seguir este reclamo que no puede ser mas justo.

3 Por lo espuesto se verá que no solo no era probable un desistimiento de mi parte, sino que, como guardadora de los hijos del señor Thompson, estoi obligada a seguir adelante el reclamo, hasta conseguir el pago de lo que, en justicia se les debe i no creo que la nacion chilena, que siempre se ha inspirado en actos de la mas estricta justicia, se niegue al pago.

4 Es cierto que soi chilena, nacida i avecindada en Chile, hecho que sostengo con orgullo i no lo negaré jamas, pero aquí no se trata de un reclamo hecho por mí ni sobre mis bienes: se trata de

reclamo hecho por el súbdito británico don Guillermo E. Thompson i sobre sus propios bienes, cuyos derechos pertenecen a sus hijos, a quienes represento como guardadora.

De lo espuesto se deduce que el presente reclamo se halla en un caso distinto de aquellos de doña Virginia Miriátegui i demas que cita en su memorial el señor ajente de Chile, i por tantó, espero que V. E. se sirva dar lugar a él, acordando el pago de lo que se reclama, con intereses hasta en dia que se verifique, por ser así de justicia.

Por tanto, a V. E. suplico se sirva tener presente lo espuesto al tiempo de fallar.

ZOILA ROJAS V. DE THOMPSON

DÚPLICA

Excmo. señor:

La réplica suscrita por doña Zoila Rojas viuda de Thompson, no ha podido, ni con los documentos acompañados, subsanar los vicios orijinales de esta reclamacion: muerto el señor Thompson en 1892, nadie puede reclamar por la citada compañía que dejó de existir, que era chilena i que tenia un socio aleman, el señor Nienhüser; ni la viuda ni los hijos del señor Thompson pueden tampoco reclamar por éste, siendo chilenos por nacimiento, etc.

Por lo demas, a esta reclamacion es aplicable en el fondo lo dicho por mi parte en las otras relativas al combate de Iquique del 19 de Febrero de 1891, principalmente en mi dúplica recaida en la reclamacion número 1. Reproduciéndolo aquí, termino solicitando a V. E. se sirva resolver como tengo pedido, o no dar lugar a esta reclamacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Zoila Rojas Valdes, viuda de Thompson, por la sociedad *Nienhuser i Thompson* reclama del Gobierno de Chile la mitad de las pérdidas sufridas por dicha sociedad en el incendio ocurrido en Iquique el 19 de Febrero de 1891, a consecuencia del combate i bombardeo que tuvo lugar en esa ciudad el indicado dia, pérdidas que ascienden, por capital e intereses, a dos mil setecientas once libras esterlinas un chelin diez peniques (£ 2,711-1-10).

La reclamante espone que es representante legal de su finado esposo William Eduardo Thompson, socio de la firma *Nienhuser i Thompson*; que dicha Sociedad, a consecuencia del combate i bombardeo que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891, sufrió pérdidas por valor de dos mil setecientas once libras un chelin diez peniques (£ 2,711-1-10); i que siendo su finado esposo súbdito británico, reclama del Gobierno de Chile la mitad del valor de la espresada pérdida correspondiente a su finado esposo.

Acompaña como comprobantes una protesta i una declaracion juradas, por el finado William E. Thompson, ante el cónsul británico en Iquique, en las cuales se detallan i ratifican los motivos de la reclamacion; esos detalles son: «que la sociedad *Nienhuser i Thompson* ocupaba el edificio situado en la calle de Bolívar, n.º 21, donde tenian almacen i escritorio i que se dedicaban a los ramos de abastecimientos de buques, ajencia de comisiones i eran propietarios de lanchas; que a consecuencia del combate i bombardeo que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891, se produjo un incendio en el edificio donde tenian su almacen i escritorio los que fueron consumidos por el fuego con todas las mercaderías i bienes muebles contenidos en ellos; que ademas poseian un ponton el cual fué «movido de su fondeadero, por los buques de guerra chilenos, i que durante el ya indicado bombardeo, dicho ponton recibió seis proyectiles, motivo por el cual se fué a pique»: acompaña ademas, la reclamante, un inventario de las mercaderías i mobiliario pertenecientes a sociedad *Nienhuser i Thompson*; declaraciones juradas, ante el cónsul británico en Iquique, de los señores J. N. Peake,

George W. Shewrt i William Rawlings; cuenta de intereses sobre el reclamo; certificado del matrimonio entre el finado William E. Thompson i la reclamante; certificado de defuncion del finado Thompson i escritura social de *Nienhuser i Thompson*.

El ajente de Chile, contestando, espone; que don Otto Nienhüser, socio de la firma por la cual se reclama, no aparece reclamando por sí ni por mandatario ni dando paso alguno que manifieste haber tenido alguna vez el derecho i la voluntad de reclamar: que don Guillermo Thompson, el otro socio, aparece preparando una reclamacion mediante una protesta i ciertos testimonios rendidos en Iquique el 23 de Enero de 1892; pero que, como falleció poco despues, no alcanzó a realizar su idea de reclamar, la que talvez habria abandonado por carecer de fundamento tanto en el derecho como en los hechos, los que no se han acreditado; que en esa situacion aparece como reclamante la señora viuda de Thompson, i probablemente sin su anuencia i voluntad por no aparecer su firma en ninguna parte; que tampoco ella podria titularse representante legal de su finado esposo i ménos aun atribuirse el carácter de súbdito ingles despues que la muerte habia roto el vínculo que el matrimonio habia creado; que, en consecuencia, no hai reclamacion en forma reglamentaria i deducida por parte interesada, i pide al Tribunal ordene se archiven los antecedentes, como en caso análogo, el Tribunal Arbitral Anglo-Chileno de 1887 ordenó en sus fallos números 61, 63, 66, 86, 87 i 93; que, por último, doña Zoila Rojas, nacida en Chile, domiciliada en su pais natal ántes de su matrimonio, durante él i en su viudedad, no inviste el carácter de súbdito británico, por lo que debe declararse inadmisibile la reclamacion.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho, agregándose en la réplica una declaracion prestada por la señora Zoila Rojas viuda de Thompson, ante el cónsul británico en Iquique el 15 de Julio de 1895, i una copia del testamento del finado Guillermo E. Thompson; i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes, importa que el Tribunal arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o

ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de las seis de la mañana, el coronel Soto del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder;

Considerando: que en el memorial, la reclamante espone que las pérdidas de la sociedad Nienhüser i Thompson, se deben al bombardeo que tuvo lugar en Iquique el 29 de Febrero de 1891, afirmacion corroborada por las declaraciones del finado Guillermo E. Thompson i de los testigos J. N. Peake, Jorje G. Shewart i Rawlings, prestadas ante el cónsul de S. M. B. en Iquique.

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique, tenia, a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra, i que el enemigo tentaba un esfuerzo supremo para derrotarlas i apoderarse de la ciudad; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas que se habian reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era una ciudad ocupada

militarmente por el enemigo, que habia intentado ocuparla no solo por un golpe de mano sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado préviamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un belijerante el derecho de bombardear a una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra, en la Conferencia de Bruselas de 1874*, art. 15.—Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV. § 2.060.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, art. 756, núm. 4.—A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffcken, *Manual de Derecho de la guerra del Instituto de Derecho Internacional*, citado por Hall, páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, art. 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin prévio aviso, no es aplicable al caso presente; que supone a una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarlo a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso prévio a los habitantes de Iquique, puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la *Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de guerra en la Conferencia de Bruselas*, 1874, i que exime de aviso prévio, (Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, artículo 554);

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad

para cada uno de los belijerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podía procurarles la esplotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion de tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique, en 19 de Febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos lejitimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile que como dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que los sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidentes. usando de su derecho». (Vattel, *Derecho de Jentes*, libro 3.º, capítulo XV, § 232. *The Law of Claims against Governments House of Representatives*, 42 D, *Congress Report*, núm. 134, page 274, Washington, *Governments, Printing Office* año 1875).

Por estos fundamentos, el Tribunal, por mayoría de votos. disintiendo el árbitro ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 18 de Noviembre de 1895. — CAMILLE JANSSEN.—
ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 18 de Noviembre de 1895.—
Diego Armstrong, secretario.



RECLAMACION N.º 46

J. N. PEAKE

MEMORIAL

Yo, Santiago N. Peake con el debido respeto someto al honorable Tribunal Anglo-chileno, creado para entender en los reclamos británicos provenientes de la guerra civil de 1891, mi reclamo por daños i pérdidas sufridas a consecuencia del bombardeo de Iquique en el día 19 de Febrero de 1891, ascendente a quinientas cincuenta i dos libras doce chelines esterlinas e intereses sobre dicha suma desde el 19 de Febrero de 1891 hasta Diciembre 31 de 1894, ascendente a ciento veintiocho libras un chelin i seis peniques esterlinas i en prueba de lo cual presento los siguientes documentos:

Mi declaracion jurada ante el cónsul británico de Iquique manifestando mis pérdidas i los motivos que los causaron.

Inventario de mis bienes destruidos por el incendio que resultó del bombardeo de Iquique el día 19 de Febrero de 1891.

Cuenta contra el Gobierno de Chile por dichas pérdidas.

Declaraciones de A. V. Polastri, Pedro Jensen i H. B. H. Murphy.

Protesta estendida ante el cónsul ingles de Iquique.

Es bien sabido, que la manzana de edificios en que estaba situado

mi escritorio i depósito, fué incendiado deliberadamente por las tropas del jefe gobernista coronel Soto, para fines estratégicos i con el objeto de desalojar las fuerzas del Congreso, de la Aduana, que sostenian contra las fuerzas del Gobierno, i este objeto se habria obtenido probablemente si el viento no hubiera cambiado, echando las llamas i humo en otra direccion. El cónsul aleman en su informe oficial a su Gobierno endosa esta aseveracion.

Tambien es notorio que las tropas del coronel Soto amenazaron con rifles a los bomberos que trataban de apagar el incendio, obligándolos a desistir de sus esfuerzos para salvar la propiedad. [Véase el informe del comandante Merino Jarpa publicado en el *Boletín Oficial*].

Con las pruebas aducidas dejo mi causa en mano del honorable Tribunal.

Confiado en la reconocida justicia de Chile para determinar mi justo reclamo.

Yo, Santiago Nortcliffe Peake, súbdito británico nacido en la ciudad de Manchester, condado de Lancashire, el día 21 de Noviembre de 1846 i residente actualmente en Iquique, provincia de Tarapacá, en la República de Chile, donde estoi establecido como comerciante i agente comisionista bajo de juramento declaro como sigue:

1.º Que estuve presente en la mencionada villa de Iquique el día 19 de Febrero de 1891 i recuerdo los acontecimientos de esa fecha los que segun mi leal entender fueron como sigue.—En la fecha mencionada, Chile se hallaba en estado de guerra civil i la ya mencionada villa de Iquique estaba ocupada por las tropas del partido constitucional que tenia tambien a su favor en la bahía la Escuadra de buques de guerra siguientes: *Esmeralda*, *Hudscar*, *Blanco Encalada*, *O'Higgins*, *Ablao* i *Magallanes*. Un poco ántes de las seis de la mañana del mencionado día 19 de Febrero las tropas del Gobierno en número de 300 hombres mas o ménos, entra-

ron a Iquique i llegaron hasta la plaza principal dando como resultado un sangriento combate entre las tropas de los partidos ya mencionados, poco tiempo despues la Escuadra principió a hacer fuego sobre la villa de Iquique, i sostuvo el bombardeo con bala i bomba, hasta las cuatro i media de la tarde cuando se arregló una tregua entre los belijerantes.

Como a las dos i media de la tarde a consecuencia del combate i bombardeo principió el incendio simultáneamente en varias partes causando la destruccion total de varias manzanas de edificios i destruccion parcial o daños a otros. Las propiedades destruidas pertenecian casi en su totalidad a súbditos de otras naciones distintas de Chile i estos en su mayor parte súbditos de Su Majestad.

Durante el bombardeo mencionado se hallaban en la bahía de Iquique i fueron testigos de él los buques de Su Majestad *Warspite* i *Pheasant*. El incendio principió de la manera relatada i en poco tiempo alcanzó a la manzana situada en la calle Aníbal Pinto donde estaban ubicados mi escritorio i almacén, no siendo posible combatir las llamas por causa del tiroteo en las calles inmediatas lo que igualmente impidió toda tentativa para salvar propiedades.

2.º Que cuando principió el bombardeo mencionado yo ocupaba el edificio situado en la calle Aníbal Pinto número 5, consistiendo en escritorio i almacén donde ejercía mi profesion de comerciante i agente comisionista i tenia entónces en existencia mercaderías i útiles de valor de quinientas cincuenta i dos libras doce chelines (£ 552-12-0) moneda esterlina, conforme al inventario anexo marcado A el que declaro ser exacto.

3.º Que el edificio que ocupaba en la calle Aníbal Pinto número 5 ya mencionado fué totalmente destruido con todo su contenido, según los detalles del inventario A.

4.º Que las cantidades que aparecen como valor de los varios artículos que figuran en el inventario representan su verdadero valor.

5.º Que no he tomado parte directa ni indirecta en la guerra civil de que se trata.

6.º Que no he recibido compensacion alguna de uno u otro de los belijerantes ni de otra persona por cuenta de las pérdidas expresadas.

7.º Que no he trasferido parcial o totalmente el presente reclamo por pérdidas sufridas en la guerra mencionada a persona alguna.

(Firmado)—J. N. PEAKE

Ratificado en Iquique, provincia de Tarapacá, el día 16 de Febrero de 1895.

Ante mí.

H. A. R. HERVEY,
cónsul de S. M. B.

CONTESTACION

Excmo. señor:

Don Santiago N. Peake reclama del Gobierno de Chile la suma de £ 552-12-0 en que estima los daños i pérdidas sufridos en el almacén que tenía en Iquique, a consecuencia del combate que tuvo lugar en esa plaza el 19 de Febrero de 1891. Reclama también la suma de £ 128-1-6 en razón de intereses sobre la cantidad arriba mencionada. En contestación al memorial en que se formula esta reclamación, el agente del Gobierno de Chile tiene el honor de esponer lo siguiente:

1 El memorial no cumple con las prescripciones contenidas en los artículos III, IV, VI, VII i IX del Reglamento. No está siquiera firmado por el reclamante. Aunque muchas de las disposiciones reglamentarias citadas han sido observadas en la declaración jurada que se acompaña en calidad de documento probatorio, ello no exime al reclamante de los deberes que en tal carácter le impone el Reglamento. El memorial es inadmisibile en la forma presentada, i suplico a V. E. se sirva así declararlo.

2 Tampoco se cuida el reclamante de acompañar los documentos que acrediten su carácter de súbdito de S. M. B., carácter que por mi parte me veo precisado a negarle. Miéntas no esté comprobado su *status* de una manera fehaciente, i en conformidad a las

prácticas usuales, no puede considerarse al señor Peake como súbdito británico, ni le alcanzan los favores de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. Suplico a V. E. que, en mérito de esta razon, se declare incompetente para conocer de la presente reclamacion.

3 Tampoco puedo aceptar la prueba presentada por el reclamante para acreditar que su almacen fué destruido por el incendio que estalló en Iquique a consecuencia del combate de 19 de Febrero de 1891, i para justificar el monto de las pérdidas i perjuicios que dice haberle sido ocasionados. Los testigos que declaran sobre el particular no han podido ser contra-interrogados por mi parte, porque fueron examinados ántes de presentarse el memorial, sin mi citacion i por un funcionario a quien V. E. no habia encomendado esta diligencia. No es verosímil tampoco que conocieran el detalle de las existencias que se suponen destruidas, ni hai razon para aceptar como exacta la apreciacion que de ellas hacen. El inventario aparece formado seis meses despues de la destruccion de los objetos que en él se mencionan; i los testigos no afirman que sea exacto, sino que se limitan a manifestar que así lo creen segun su leal saber i entender.

4 Sea de ello lo que fuere, la verdad es que el Gobierno de Chile no tiene responsabilidad alguna en las pérdidas que haya sufrido el señor Peake por motivo del combate de 19 de Febrero. Puedo asegurar a V. E. que es erróneo el concepto que se ha formado el reclamante de que el coronel Soto, comandante de las fuerzas del Gobierno, hiciera incendiar deliberadamente la manzana de edificios a que se refiere. El testimonio del cónsul aleman que se invoca para probar este hecho i el parte oficial del jefe de las fuerzas estacionadas en la Aduana, no afirman que uno u otro lo hubiera presenciado: se refieren solo a datos inexactos que circularon en los primeros momentos despues del combate, i que prolijas investigaciones efectuadas posteriormente han desvanecido. El señor almirante de la division naval de S. M. B., al ancla en la rada de Iquique i el señor comandante del *Warspile* que formaba parte de esa division han manifestado que el incendio se produjo en el fragor del combate i por efecto de los proyectiles lanzados

durante él. Esta esposicion que orijinal ha sido presentada en la contestacion al reclamo número 1 del señor Guillermo Perkins, está corroborada en muchos de los memoriales presentados a V. E. para sostener reclamaciones análogas a la presente.

Sin embargo, estas observaciones tendentes a restablecer la verdad de los hechos, no alteran la base jurídica de esta defensa. Sea que el incendio se produjese por efecto de proyectiles lanzados por los cañones, sea que el coronel Soto incendiase los edificios deliberadamente i para fines estratégicos, uno u otro acto formaban parte de una operacion de guerra que las circunstancias hicieron indispensable. El combate del 19 de Febrero se verificó a causa de la necesidad que ámbos belijerantes tenian de ocupar la plaza, a fin de proporcionarse los medios de accion que les servirian para obtener el triunfo definitivo. Fué, pues, una operacion lícita de guerra que se llevó a cabo sin violar ninguna de las reglas de la guerra, reconocidas por el Derecho Internacional. Los daños i perjuicios producidos por una operacion de esa clase no imponen a los belijerantes responsabilidad de ningun jénero, ni producen accion en contra de ellos.

La opinion de los tratadistas de derecho internacional es unánime a este respecto. (Véase Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, art. 652 i 662; Fiore, *Nuevo Derecho Internacional Público*, § 1714 i sigtes.; Warton, *International Law Digest*, vol. 111, § 223, Vattel, *Derecho de Jentes*, L. 3.º, cap. 15; Bonfils, *Manual de Derecho Internacionat Público*, § 1,200 i 1,231).

Tambien ha sido uniforme la jurisprudencia establecida por tribunales análogos al presente i como éste de reconocida autoridad i prestigio. Tanto los que han funcionado en Washington en 1871 i 1872 i en 1894, como los que funcionaron en Chile desde 1884 a 1888, rechazaron las reclamaciones que se basaban en daños sufridos a consecuencia de combates o acciones de guerra.

Espero que V. E., en vista de las doctrinas i precedentes citados ha de rechazar la presente reclamacion tanto en lo que se refiere al capital como a los intereses cobrados. Estos no pueden exigirse en derecho sino como una indemnizacion por la mora del deudor; pero esta mora no existe cuando se trata de una deuda

incierta i de una cantidad ilíquida e indeterminada, i ménos cuando no se ha pactado plazo para el pago, ni ha existido reconvencion judicial. Solicito, pues, respetuosamente de V. E. que resuelva la pretente reclamacion pronunciando un fallo absolutorio para el Gobierno a quien represento.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

El que suscribe tiene el honor de someter a la alta consideracion de V. E. las observaciones siguientes:

1 El señor ajente de Chile, contestando al reclamo del señor Peake, principia la defensa de su Gobierno diciendo que el memorial no cumple en su forma esterna con las prescripciones del Reglamento hasta el punto que ni siquiera está firmado por el reclamante. Como mi honorable contradictor reconoce que el señor Peake cumplió con la mayor parte de los preceptos reglamentarios en la declaracion jurada que se acompañó al memorial, el argumento hecho de contrario no tiene razon de ser, puesto que el memorial lo compone la esposicion del reclamante i los documentos acompañados a ella, i como en uno de estos documentos el reclamante mismo consignó todos los datos exigidos por el Reglamento, éste ha quedado cumplido en debida forma. Por otra parte, no hai en ese mismo Reglamento disposicion alguna que condene los defectos de forma del memorial con el rechazo de la reclamacion.

2 La segunda observacion formada de contrario consiste en decir que el reclamante no ha justificado su carácter de súbdito británico. Si el señor Peake hubiera podido imaginarse que iba a ponerse en duda su nacionalidad, habria pedido tiempo ha, documentos que la justificaran. Para satisfacer al señor ajente de Chile, el señor Peake, ha pedido a Inglaterra su partida de nacimiento i alcanzará talvez a presentarla en época oportuna. Pero desde luego

presento un contrato de enganche del señor Peake, como aprendiz de marino, en cuyo documento legalizado oficialmente, se ve que el espresado señor Peake es natural de Manchester, en el condado de Lancaster en Inglaterra. Tengo la conviccion de que este documento, otorgado en 1864, será considerado por V. E. como prueba bastante de la nacionalidad británica del señor Peake.

3 La tercera observacion del señor ajente de Chile consiste en desconocer el hecho de que el almacén del reclamante fuera destruido por el incendio de 19 de Febrero de 1891, i en observar que no se ha justificado satisfactoriamente el monto de los perjuicios ocasionados. Arguye tambien que las declaraciones de testigos, presentadas con el memorial, se tomaron sin sujecion a los preceptos del Reglamento; que no es posible que los testigos pudieran efectivamente dar una declaracion detallada como la dan, aunque no en forma asertiva; i que el inventario se hizo seis meses despues del incendio. Respecto a la efectividad del daño me imagino que V. E. considerará como prueba bastante las declaraciones presentadas, i que ellas pueden servir de punto de partida para fijar el monto de la indemnizacion. Si las declaraciones no se tomaron en conformidad a las prescripciones del Reglamento, fué porque en la época en que se tomaron era imposible ajustarse a esas reglas, i hoi puede ordenar el Tribunal que los testigos se ratifiquen en la forma ordenada por el Reglamento, i podrán entónces corregirse todos los defectos de forma que mi contradictor encuentra en esas declaraciones.

Mi inventario acompañado al memorial pudo hacerse con exactitud seis meses despues del siniestro, por la causa que voi a espresar en seguida. El señor Peake era en 1891 el ajente en Iquique de los señores Grace i C.ª, que le tenian consignada una fuerte cantidad de mercaderias. Apénas comenzada la revolucion, los señores Grace i C.ª ordenaron al señor Peake que les hiciera i les remitiera una nómina de todas las mercaderías de Grace i Ca. que tenia en comision de venta. Al recibir esta órden, el señor Peake resolvió cumplirla i aprovechar el trabajo que ella le imponia haciendo al mismo tiempo un inventario de las mercaderias de su propiedad. Lo hizo en efecto, i cuando sobrevino el incendio el

señor Peake tenia esos papeles en el bolsillo, i mediante ellos pudo hacerse mas tarde el inventario presentado con el memorial. Como se ve, esta explicacion nada tiene de extraño i es del todo satisfactoria.

4 Dice el señor ajente de Chile que no es exacto que el coronel Soto ordenara el incendio de Iquique, i sostiene que la esposicion del cónsul aleman i la del señor Merino Jarpa están basadas en meras conjeturas, pues ni el uno ni el otro presenciaron los hechos que afirman en sus esposiciones. En seguida, al testimonio de estos dos funcionarios oponen la narracion del señor almirante ingles i la del comandante del *Warspile*. La declaracion de los marineros ingleses no tienen gran importancia, pues ellos no podian ver desde sus buques lo que pasaba en tierra, i a la esposicion de esos marineros pueden oponerse con muchísima razon, i con mayor eficacia, las observaciones que el señor ajente de Chile hace contra el dicho del cónsul aleman i contra el del señor Merino Jarpa. Por último, para probar que el incendio de Iquique fué ordenado por el coronel Soto, o por lo ménos que este jefe prohibió a los bomberos de Iquique que lo atacaran, ofrezco las declaraciones de don Tomás Capella, comerciante italiano residente en Iquique, i capitán, en 1891, de la bomba italiana de ese puerto, i la de Federico Sparemberg, capitán, en 1891, de la 2.ª compañía de bomberos de Iquique que es un comerciante que reside ahora en aquella ciudad. A estos caballeros se les notificó personalmente en los momentos del siniestro la órden del coronel Soto de no atacar el incendio. Como se ve, no es posible poner en duda la intencionalidad del incendio que tuvo lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891.

Teniendo la verdad i las consecuencias jurídicas de este hecho el señor ajente de Chile sostiene que ese incendio no es ni ha sido otra cosa que una medida estratéjica perfectamente lícita. Concediendo (sin admitirlo, i puramente para los fines de la discusion), que así fuera mientras el incendio favorecia los planes militares del coronel Soto, llevando el viento las llamas hacia la Aduana i obligando a sus defensores a rendirse, fué una arbitrariedad sin nombre desde el momento en que, a causa de un cambio de direccion del viento las llamas fueron llevadas ya no

hacia la Aduana sino en sentido contrario hacia la parte comercial de la ciudad.

Con éste i los demas antecedentes producidos, espero que V. E. acepte en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El señor agente británico ha tenido a bien presentar un escrito de réplica en la reclamacion número 46 elevada por don Santiago N. Peake. A mi vez cumplo con el deber de responder a ese escrito en la presente dúplica.

1 Inútil me parece ampliar la discusion acerca de las faltas de que adolece el memorial. V. E. se ha de servir resolver como lo estime de justicia la peticion que sobre este particular formulé en mi escrito de contestacion.

2 Tambien se ha discutido estensamente en la mayor parte de las reclamaciones acerca de la manera legal de comprobar la nacionalidad de los reclamantes. El señor agente británico promete presentar oportunamente la partida de nacimiento del señor Peake. Cuando cumpla con este compromiso será del caso examinar el documento i hacer sobre él las observaciones a que pueda prestarse. No puedo, entre tanto, aceptar como bastante prueba de la nacionalidad los papeles que se han acompañado en idioma ingles, sin tomarse la molestia de verterlos al castellano, apesar de la espresa prescripcion del Reglamento. Entré esos papeles se dice que hai un contrato de enganche del señor Peake como aprendiz de marino en el cual se declara que este caballero nació en Manchester, condado de Lancaster en Inglaterra. Me permitirá V. E. prescindir de semejante documento que no tiene carácter alguno oficial, que no está legalizado, ni siquiera traducido. La nacionalidad no puede probarse por estos medios indirectos, i por papeles en que ordinariamente se consignan datos que suministra el mismo interesado.

Insisto, pues en la escepcion de incompetencia del tribunal.

3 El señor ajente británico conviene en que las declaraciones prestadas ante el señor cónsul británico de Iquique, que han sido acompañadas con el carácter de *affidavit* carecen de mérito probatorio hasta que sean ratificadas en la forma ordenada por el Reglamento. Esto basta al propósito de la defensa del Gobierno de Chile. No vale la pena, por consiguiente, de prolongar la discusion habida a este respecto.

En cuanto a los demas hechos, ellos han sido tan latamente dilucidados en las otras reclamaciones análogas a la presente que no tendria objeto repetir lo que se ha dicho por una i otra parte sobre la manera cómo se produjo el incendio de Iquique en el combate de 19 de Febrero de 1891. He sostenido i sostengo que el fuego fué producido por bombas disparadas desde el mar; i que es inexacto que el coronel Soto hiciera incendiar algunas casas, i mas aun que impidiera a los bomberos ocuparse en extinguir el incendio.

Debo solamente llamar la atencion de V. E. a la aseveracion que bajo juramento hizo el señor Peake ante el señor cónsul británico de Iquique, en la protesta que viene en la segunda página de su memorial, de que el incendio se produjo a consecuencia del combate i bombardeo que tuvieron lugar el 19 de Febrero. Esta afirmacion del propio reclamante destruye por su base la esposicion que el memorial no juramentado hace de la causa del incendio, i las argumentaciones que se desarrollan en la réplica partiendo de un hecho distinto i evidentemente erróneo.

4 He sostenido igualmente que sea que el incendio proviniese del fuego hecho por la Escuadra, sea que fuese orijinado por el combate de tierra i aún por órden espresa del coronel Soto, el hecho no afecta en manera alguna la responsabilidad del Gobierno de Chile. En todos los casos, habria provenido de una operacion militar completamente lícita, i las consecuencias de tales operaciones que se traducen en pérdidas o perjuicios para los neutrales, deben ser consideradas como meros accidentes desgraciados semejantes a cualquiera otra calamidad natural. Innecesario es renovar las citas de las autoridades invocadas en la contestacion i en las demas reclamaciones iguales a la presente. El mismo reclamante se

ha encargado de justificar la medida que, segun él, adoptó el coronel Soto al hacer incendiar algunas casas, manifestando en el memorial que ella fué llevada a efecto para fines estratégicos i con el objeto de desalojar las fuerzas del Congreso de la Aduana, «i este objeto, dice, se habria obtenido probablemente, si el viento no hubiera cambiado, echando las llamas i humo en otra direccion».

A este respecto la réplica hace al coronel Soto el singularísimo cargo de no haber hecho cesar el incendio una vez que hubo cambiado la direccion del viento. Esta observacion no puede levantarse a la altura de un razonamiento digno de ser refutado.

I no habiéndose desvanecido en ninguna forma las razones de derecho que abonan la conducta del Gobierno de Chile i lo eximen de toda responsabilidad, concluyo pidiendo a V. E. se sirva rechazar la reclamacion, dado caso de que se declare competente para conocer de ella.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Santiago N. Peake, súbdito británico, reclama del Gobierno de Chile seiscientas libras esterlinas trece chelines seis peniques por pérdidas sufridas en el incendio de Iquique ocasionado a consecuencia de las operaciones de guerra que tuvieron lugar en esa ciudad el 19 de Febrero de 1891.

El reclamante espone que encontrándose Chile en guerra civil se trabó en Iquique un sangriento combate el 19 de Febrero de 1891 entre las fuerzas de mar i tierra del partido congresista i las fuerzas del Gobierno del Presidente Balmaceda, i que a consecuencia de bombas disparadas por la Escuadra se produjo un incendio que causó la destruccion de varias manzanas de edificios ocupados en su mayor parte por súbditos británicos; que el coronel Soto, deliberadamente, ordenó el incendio de la manzana de edifi-

cios situada frente a la Aduana con el fin estratéjico de obligar al enemigo, que se encontraba encerrado en el edificio de la Aduana, a evacuarla; que en esa manzana, calle de Aníbal Pinto, número 4, tenia el reclamante su escritorio i oficina, los que fueron totalmente consumidos por el fuego con todos los útiles i mercaderías contenidos en ellos; que el valor de esos bienes perdidos, segun el inventario que acompaña, asciende, con intereses, a seiscientas ochenta libras esterlinas trece chelines seis peniques (£ 680-13-6); que es notorio que los bomberos trataron de apagar el incendio i se lo impidieron los soldados del coronel Soto, llegando hasta a amenazarlos con sus rifles; que no ha tomado parte en la guerra civil de que se trata; que no ha recibido compensacion alguna de ninguno de los belijerantes i que no ha trasferido su reclamo a ninguna persona.

Acompaña como comprobantes: una declaracion del reclamante prestada ante el cónsul británico en Iquique; una protesta del mismo reclamante ante el mismo cónsul; un inventario de los bienes perdidos; una cuenta contra el Gobierno de Chile por el valor de sus pérdidas; i tres declaraciones de los señores A. V. Polastri, Pedro Jensen i H. B. H. Murphy ante el ya citado cónsul, en la que atestiguan la veracidad de los hechos espuestos por el reclamante.

El ajente de Chile, contestando, espone: que el memorial no cumple con las prescripciones contenidas en los artículos 3.º, 4.º, 6.º, 7.º i 9.º del Reglamento i ni siquiera está firmado por el reclamante, por lo que no debe admitirse la reclamacion; que el reclamante no ha acreditado su carácter de súbdito británico, carácter que le niega, i, en consecuencia, pide al Tribunal se declare incompetente para conocer de esta reclamacion; que la prueba no puede aceptarse porque los testigos presentados han sido examinados ántes de presentarse el memorial, que no han podido ser contra-interrogados; que esa delijencia se ha hecho sin citacion de su parte i ante un funcionario que no era el designado por el Tribunal Arbitral; que tampoco es verosímil que los testigos conocieran el detalle de las existencias que se suponen destruidas i no hai razon para aceptar como exacta la apreciacion que de ellas se hace; que

el inventario aparece formado seis meses despues de la destruccion de los objetos que en él se mencionan; que es erróneo el concepto del reclamante de que el coronel Soto hiciera incendiar deliberadamente la manzana de edificios situada frente a la Aduana; que tanto el almirante de la division naval de su S. M. B., anclada en la rada de Iquique, como el comandante de la *Warspile*, han manifestado que el incendio se produjo en el fragor del combate i por efecto de los proyectiles lanzados por la Escuadra chilena; que esta afirmacion está corroborada en los memoriales de muchas reclamaciones análogas a la presente; que ya sea que el incendio se produjese por los proyectiles lanzados por la Escuadra o por orden del coronel Soto para fines estratégicos, ámbos casos serian operaciones lejitimas de guerra cuyos resultados no comprometerian la responsabilidad del Gobierno de Chile, opinion unánime de los tratadistas de Derecho Internacional; cita varios autores, i en mérito de los antecedentes i doctrinas citadas pide al Tribunal resuelva la reclamacion pronunciando un fallo absolutorio para el Gobierno de Chile.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho, acompañándose a la primera unos documentos en idioma ingles que tratan sobre la nacionalidad inglesa del reclamante, i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes, importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupadas inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de la seis de la mañana el coronel Soto del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para

tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana, que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio, compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable, habitados por muchos extranjeros, entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que el reclamante en su protesta hecha ante el cónsul británico en Iquique el 20 de Agosto de 1891, declara que sus pérdidas se deben al incendio producido a consecuencia de las operaciones militares que tuvieron lugar en Iquique el 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que efectivamente resulta de lo obrado en autos que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos que estaban en el puerto; que este hecho se deduce, no solamente de la confesion del reclamante hecha en su declaracion jurada ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, declaracion corroborada por los testigos presentados por él mismo, sino tambien por declaracion del contra-almirante ingles Hotham, que estaba en la bahia de Iquique en aquel dia, inserta en el *Blue Book, Correspondance respecting the Revolution in Chile*, núm. 1, año 1892, páj. 82.

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia, a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se pue-

de afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla no solo por un golpe de mano, sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un beligerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas de 1874*, art. 15.—Calvo, *Derecho Internacional teórico i práctico*, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, art. 756, núm. 4.—A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffcken, *Manual de derechos de la guerra del Instituto de Derecho Internacional citado por Hall*, páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, art. 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente; que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso previo a los habitantes de Iquique puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la *Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas*, 1874, que exime de aviso previo.—«Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, art. 554»;

Considerando: que en su memorial presentado al Tribunal Arbi-

tral i redactado mas de tres años despues de los sucesos, el reclamante Santiago N. Peake, desdiciéndose de sus anteriores declaraciones atribuye al incendio de Iquique otra causa i sostiene que el coronel Soto, que comandaba las fuerzas asaltantes, dió la orden de prender fuego a los edificios situados en frente de la Aduana, en donde estaban reconcentradas las tropas del partido congresista, con el fin estratégico de obligar al enemigo, mediante al humo producido por el incendio, a evacuar esa posicion i regresar a los buques;

Considerando: que resulta de todos los datos corrientes en autos, que no se puede atribuir importancia seria alguna a estas nuevas alegaciones producidas por el reclamante para apoyar sus pretensiones; que no solamente no atribuyó esta causa al incendio de Iquique en su protesta otorgada ante el cónsul británico, poco tiempo despues de los sucesos, sino que ademas el contra almirante británico Hotham, por el contrario, atribuye al incendio como única causa, el bombardeo i fuego nutrido que no cesó en todo aquel dia;

Considerando: que habiéndose levantado un sumario criminal judicial en Iquique en una época en que las pasiones políticas estaban todavía palpitantes, acerca de los hechos atribuidos al coronel Soto, la Corte de Apelaciones de Iquique absolvió a Soto, reconociendo que solo habia ligeras presunciones para condenarlo como autor del incendio;

Considerando: todavía que, aun cuando el coronel Soto hubiera mandado incendiar las construcciones ubicadas justamente al frente del lugar donde se encontraban resguardados sus enemigos i desde donde disparaba sobre sus tropas, con la esperanza de desalojarlos mediante al humo producido por el incendio, como lo afirma el reclamante, habria tenido para ello derecho a virtud de las leyes de la guerra, pues este medio de defensa o ataque no habria sido sino un recurso militar que no está prohibido por las leyes de la guerra, que autorizan el empleo de todos los medios de violencia contra las propiedades para reducir al enemigo con la única limitacion que el medio empleado no sea desproporcionado al objeto que se persigue. (William Edward Hall. *A Treatise on International Law*, Oxford, 1890, 3.^a edition, page 529, § 184.—Fiore, *Derecho Internacional*

Codificado, § 1,043.—Bluntschli, *Le Droit International Codifié*, traduccion Lardy, Paris, 1886, arts. 543 i 549);

Considerando: que no hai para qué insistir sobre aquella otra alegacion del reclamante, de que el coronel Soto hubiera prohibido a los bomberos combatir el fuego, pues si Soto tenia derecho de incendiar el edificio situado al frente de aquel ocupado por sus enemigos con el fin estratéjico de obligarlo por este medio a desalojar posiciones, tenia tambien, incontestablemente, el derecho de impedir se hiciera fracasar su plan, tomado en su carácter de jefe de las fuerzas asaltantes, proceder del coronel Soto que de ninguna manera se ha probado; que resulta del parte del contra-almirante Hotham, ya citado, que el primer incendio que estalló cerca de la Aduana fué apagado por los bomberos i que cinco jefes i voluntarios de la brigada de bomberos de Iquique, compuesta de estranjeros (ingleses, italianos, españoles) i que estuvieron presentes durante los sucesos declararon bajo juramento, ante el juez, el 11 i 13 de julio último, «que el incendio de Iquique se debió a las bombas lanzadas por la Escuadra i que léjos de prohibir a los bomberos, el coronel Soto, que apagaran el fuego, les hizo ayudar por sus soldados.» (Sumario agregado en la reclamacion número 12 del doctor James Watson);

Considerando: que estos hechos están corroborados por las declaraciones del capitan de la marina inglesa, A. Lambton, confirmada por el contra-almirante Hotham en una carta dirigida al coronel Soto el 18 de Enero de 1892 i en la cual estos oficiales superiores de la marina inglesa, que se encontraban en el puerto de Iquique el 19 de Febrero de 1891. dicen: «que, segun todas las probabilidades, el incendio que tuvo lugar en ese dia en Iquique fué la consecuencia natural de las operaciones militares exijidas por el ataque i defensa de la plaza, i que no vieron ni oyeron nada que pudiera hacerles creer que Soto habia incendiado personalmente edificio alguno.»

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuanta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los belijerantes bajo el punto de vista de los grandes

recursos que podia procurarles la esplotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique, en 19 de Febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos lejítimos de la guerra i que no comprometen la responsabilidad del Gobierno de Chile que, como lo dice Vattel, «hai en tiempo de guerra perjuicios causados per una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artilleria en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que lo sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion si se lo permite el estado de sus negocios, pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho». —[Vattel, *Derecho de Jentes*, libro 3.º, cap. XV, § 232.—*The Law of Claims against Government. House of Representatives 42d. Congress*, Report núm. 134, page 274, Washington, *Government Printing Office*, 1875.]

Por estos fundamentos el Tribunal, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 18 de noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 18 de noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.



Reclamacion N.º 47

BETTELEY Y C.ª

MEMORIAL

Honorable Tribunal:

Conforme con el Reglamento de procedimientos del Tribunal Arbitral Anglo-Chileno pasamos a esponer a ese Honorable Tribunal nuestra reclamacion ascendiendo a la suma total de 15,734 pesos 63 centavos i pedimos se condene al Supremo Gobierno de Chile a pagarnos dicha sumá en indemnizacion de las pérdidas que sufrimos con motivo de los acontecimientos que tuvieron lugar en este puerto inmediatamente despues de la batalla de la Placilla.

Principiaremos, Honorable Tribunal, con manifestarle que los únicos socios de la casa perjudicada son Guillermo Ravenscroft Betteley, nacido en Liverpool en el año de 1834, residente el 28 de Agosto de 1891 i actualmente en Valparaiso; Alfredo Betteley, nacido en Liverpool en el año de 1852 i residente el 28 de Agosto de 1891 i actualmente en Valparaiso, ámbos súbditos británicos por nacimiento i que durante muchos años han hecho sus negocios bajo la firma de Betteley i Compañía, con domicilio en Valparaiso.

Ni la casa como tal ni ninguno de sus socios en su carácter particular ha tomado parte directa o indirectamente en la guerra civil

que comenzó el 7 de Enero de 1891 i que terminó el 28 de Agosto del mismo año, ni ha estado durante ese tiempo al servicio de cualquiera de las partes combatientes, ni ha recibido sueldo de ninguna de ellas.

Nuestra reclamacion, Honorable Tribunal, es por:

a) *Capital*.—Importe de las siguientes mercaderias que teníamos a bodegaje en el edificio que para este objeto poseia don Juan C. Vera en la avenida de las Delicias número 325 C. e incendiada por el populacho en la noche del 28 de Agosto de 1891:

263 i medio cajones gruesos aguarra a	\$ 26.00	\$ 6,831.00
202 i medio id. aceite «Luz Magnética»	14.00	2,835.00
161 cajon aceite «Luz Magnética» 2. ^a	12.50	2,012.50
50 id. id. id. 3. ^a	11.50	575.00
		<hr/>
		\$ 12,273.50

b) *Intereses* sobre esa suma de \$ 12,273.50 desde el 28 de Agosto de 1891 hasta la fecha de la presente reclamacion, el 9 de Marzo de 1895:

Son 3 años 6 meses i 9 dias al 8 % anual . . . 3,461.13

Formando un total de quince mil setecientos treinta i cuatro pesos sesenta i tres centavos moneda corriente de Chile \$ 15,734.63

No hemos recibido ninguna suma de dinero o compensacion a cuenta de nuestro reclamo, ni hemos presentado anteriormente nuestra reclamacion ante otro tribunal alguno.

Acompañamos los siguientes documentos justificativos de nuestra reclamacion:

1 Certificado de don T. W. Mc. Laughlin, agente de la compañía de seguros Commercial Union Assurance C.^o acerca de la anulacion de la póliza de seguro sobre estas mercaderias.

2 Certificado de don W. Lazonby declarando que las bodegas de don Juan C. Vera fueron saqueadas i quemadas por el populacho en la noche del 28 de Agosto de 1891.

3 Declaracion de don Juan C. Vera i Ricardo Jofré Silva, estendida ante el notario don José María Vega en el 12 de Noviembre de 1894 respecto del incendio i saqueo.

I no dudamos que ese Honorable Tribunal encontrará bien fundada i equitativa nuestro reclamo de indemnizacion.

Es justicia.

(Firmado).—BETTELEY I CA.

Yo, Guillermo Ravenscroft Betteley, de la firma Betteley i C.^{ta}, solemnemente declaro i afirmo que son ciertos i efectivos los hechos mencionados en el memorial que precede, i en señal de ello firmo la presente declaracion ante el señor cónsul jeneral de Su Majestad Británica en este puerto.

Valparaiso, Abril 9 de 1895.

(Firmado).—GMO. RAVENSCROFT BETTELEY.

Sworn by Mr. William Ravenscroft Betteley, a member of the firm of Messrs. Betteley i Co. of Valparaiso, at the British Consulate General at Valparaiso this ninth day of April 1895.

Before me

(sgd).—JOHN E. CROKER,
vice-cónsul

CONTESTACION

Excmo. señor:

Como ajente de Chile, paso a contestar la reclamacion número 47, en la cual, a nombre de la firma social Betteley i C.^{ta}, se demandan \$ 12.273.50, mas \$ 3.461.13 por intereses, valor atribuido a mercaderías que se suponen perdidas en un incendio, en Valparaiso, la noche de 28 de Agosto de 1891.

1 No se sabe quien ha puesto al pie del memorial la firma Betteley i C.^a. Parece que la ha puesto don Guillermo Ravenscroft Betteley por el hecho de aparecer éste afirmando ante el cónsul de S. M. B. en Valparaiso la efectividad de los hechos espuestos en el memorial.

Sin embargo, no ha cuidado aquél de acreditar su personeria o el derecho de usar en jeneral la firma social, i particularmente en un caso como el presente, que nada tiene de operacion comercial. Digo mas, que no ha cuidado de acreditar siquiera la existencia de la sociedad reclamante, ni que los socios sean los que así se titulan, ni que tengan el estado i carácter de súbditos ingleses. En consecuencia, no se presenta esta reclamacion en condiciones de ser admitida.

2 Se acompañan al memorial dos certificados: el uno de un titulado ajente de Compañia de Seguros, segun el cual los señores Betteley i C.^a tenian en una bodega de don Juan C. Vera mercaderías parcialmente aseguradas, cuya póliza, que ojalá se hubiera tambien agregado, fué anulada por haberse saqueado i quemado la dicha bodega el 28 de Agosto de 1891; el otro certificado aparece suscrito por un señor W. Lazonby, quien se limita a decir que las bodegas del referido señor Vera fueron saqueadas i quemadas por el populacho durante los disturbios que tuvieron lugar en Valparaiso en la noche de aquel dia, sin hacer por lo demas referencia alguna a los actuales reclamantes.

Aquellos dos certificados, fechados en Octubre de 1891, habrian sido firmados ante el vice-cónsul ingles en Valparaiso, segun certificado puesto por éste estrañamente en Abril de 1895.

Como quiera que sea, sobre no favorecer virtualmente a los reclamantes, tales certificados carecerian en todo caso de fuerza probatoria atendidas las disposiciones del Reglamento de Procedimientos relativas a prueba testimonial.

Segun la escritura pública, tambien anexa, otorgada en Valparaiso el 12 de Noviembre de 1894, seria cierto que los señores Betteley i C.^a tenian depositadas en la bodega de don Juan C. Vera las mismísimas mercaderías indicadas en el memorial, con el precio, no se sabe si de 1891 o de 1894, que aquel les atribuye; en lo que

hai que admirar la memoria de los dos otorgantes para recordar aquellas circunstancias, despues de pasados mucho mas de tres años. Sin embargo, la admiracion no será tan grande cuando se advierta: que uno de los otorgantes de dicha escritura se titula mayordomo de la bodega; i el otro, don Juan C. Vera, administrador de la bodega de don Juan C. Vera.

Por que la verdad es que este señor Vera, como depositario, dueño i administrador, era el obligado a restituir el depósito, i que, por lo tanto, contra él han debido dirigirse los dueños de las mercaderías. A él corresponderia alegar en juicio la escepcion de fuerza mayor fundada en los referidos disturbios populares; i si ella era aceptada, quedarian eximidos de obligacion el señor Vera, i todo el mundo, con escepcion de los incendiarios mismos. Entre tanto, tiene aquél por el momento verdadero interes en apoyar esta reclamacion i en echar la responsabilidad sobre Chile. Por esto, su testimonio i el de su mayordomo carecerian de valor por falta de imparcialidad, si alguno pudieran tener despues de no ajustarse tampoco a las aludidas prescripciones reglamentarias referentes a prueba de testigos.

En resúmen, resulta que no se ha comprobado legalmente ninguno de los hechos en que se funda la reclamacion: ni que los reclamantes fueran dueños de las referidas mercaderías, ni que éstas tuvieran el valor antojadizo que se les atribuye, ni que efectivamente todas se perdieran incendiadas, etc. Por lo tanto, la reclamacion no puede ser aceptada.

3 Al mismo resultado se llegaria en la hipótesis de estar bien comprobado los hechos: los perjuicios no habrian sido causados por fuerzas de mar o de tierra de la República, sino por turbas populares o por el populacho, alzado despues de una sangrienta batalla, como la de la Placilla; i de eso no responde ningun Gobierno, segun el derecho i la jurisprudencia internacionales.

Súbditos chilenos perjudicados por los tumultos populares de la referida noche en Valparaiso hubo muchos. ¿Tienen los señores Betteley noticia de que alguno de aquéllos haya sido indemnizado por el Gobierno de Chile?

Con el mismo motivo que la presente se han presentado a V. E.

las reclamaciones números 3, 11 i otras, a las cuales me refiero, reproduciendo aquí lo alegado en ellas por mi parte en cuanto sea aplicable a la presente.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva no dar lugar a esta reclamacion, o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Federico Juan Askham, por Betteley i C.^a, segun poder que acompaño, en el reclamo entablado contra la República de Chile por indemnizacion de perjuicios, replicando, espongo:

Con el mérito de los antecedentes que ya tengo consignados en el memorial de reclamo, con los que ahora acompaño a esta réplica i con la prueba que, en caso necesario, ofrezco, espero que el Excmo. Tribunal tendrá a bien acojer favorablemente dicho reclamo, desechando las alegaciones del agente del Gobierno de Chile en su contestacion que paso a analizar.

I

La primera objeccion que se hace al reclamo que represento es que no he acreditado mi personería, ni la existencia de la firma social de la casa reclamante, ni el carácter de súbditos británicos que corresponde a los socios.

Creí que el agente del Gobierno de Chile habria aceptado por notoriedad pública estos hechos.

Pero, ya que no es así, acompaño la escritura pública de sociedad, de la cual consta la existencia de la firma social de Betteley i C.^a de la que pueden hacer uso los dos socios, Guillermo R. Betteley i Alfredo Betteley (art. 2).

En cuanto a la nacionalidad de los socios, no tengo a la mano

documentos que la comprueben, pero se puede acreditarla con el testimonio entre otros, de los honorables testigos que a continuacion se espresan, a saber: señores Duncan Fox i C.^a, José Ramon Sánchez, José Luis de Ferrari, José María Vega i Juan Eduardo Naylor, de la casa comercial de Graham Rowe i C.^a, todos residentes en Valparaiso, i ademas con el de F. B. Shanklin, de Santiago.

II

Examinando los documentos acompañados al reclamo, el agente del Gobierno de Chile hace las siguientes observaciones:

Certificado del señor Mac Laughlin.—A este documento de la *Commercial Union Assurance Company, Ld.*, se objeta que hemos debido acompañar la póliza orijinal.

I esto, despues de poner en duda el carácter de tal agente de la Compañía mencionada, que inviste el señor Mac Laughlin, lo cual no nos parece de mui buen gusto en un debate seguido ante un Tribunal de tan elevado oríjen.

Sin embargo, si el honorable agente chileno niega el hecho de ser el señor Mac Laughlin agente de la espresada Compañía aseguradora, podré acreditarlo—i ofrezco hacerlo— con todo el comercio de Valparaiso.

Ahora, por lo que respecta a la póliza orijinal, desde que consta del certificado que ella fué cancelada, i devuelta la parte de la prima aun no devengada, claro es que aquel documento hubo de ser devuelto al agente, i no está en nuestra mano presentarlo.

La carta de fecha 23 de Setiembre de 1891, dirigida a Betteley i Ca. por el mismo señor Mac Laughlin, i que se acompaña a este escrito, reitera la circunstancia arriba mencionada, espresando que el recibo de la cantidad devuelta por prima se ha estendido en la misma póliza, la que por tanto debia quedar como comprobante del pago en poder del agente.

Certificado del señor Lazomby.—Se hace a este documento la objecion de que solo afirma el saqueo e incendio de la bodega del señor Vera pero sin referencia alguna al reclamo.

En cuanto a esto, no es posible que todos los testigos sean sabe-

dores de todos los hechos contenidos en el reclamo, i si la declaracion del señor Lazonby no sirve para acreditar que Betteley i Ca. tenian mercaderías en la bodega núm. 321 C de la calle de las Delicias, sobre lo cual hai otros testigos i documentos, sirve si para aumentar el número de los testigos que dan fe del saqueo e incendio.

Tanto a la declaracion del señor Lazonby como a la del señor Mac Laughlin se hace tambien el reparo de no estar conformes con las reglas de procedimientos relativas a la manera de rendir la prueba testimonial.

No puedo ménos de protestar contra esta curiosa manera de discurrir.

El art. XI del Reglamento de Procedimientos dictado por este Excmo. Tribunal dice que la prueba se rendirá ante el Tribunal mismo o ante los funcionarios que él designe «en cada caso concreto».

Luego, antes que este Tribunal haya fijado la manera de rendir la prueba, no se puede objetar a la que se ha producido previamente por los interesados, que no se ajusta a las reglas de procedimientos.

¿A qué procedimientos podria ajustarse?

No a los procedimientos ordinarios que se usan en Chile, i segun los cuales las pruebas deben rendirse previo decreto del juez competente i con citacion contraria, porque tratándose de un Tribunal especial no ha podido obtenerse ese decreto ántes que el Tribunal existiese.

Tampoco a las reglas establecidas por este mismo Tribunal, porque no ha llegado aun el caso de que ellas sean fijadas en conformidad al Reglamento.

Pero, de que las declaraciones acompañadas no se hayan ajustado —porque no podian ajustarse— a reglas de procedimientos que aun no existen, no puede deducirse que no tengan fuerza eficaz, cuando consta su autenticidad, i se opone, no a un litigante ordinario, que trata de rehuir su responsabilidad, sino a un Estado honorable que ha aceptado lealmente la responsabilidad que pueda corresponderle en acontecimientos que son bien conocidos para tratar

de oscurecerlos por los medios de que hacen uso otra clase de litigantes.

En todo caso, si el agente de Chile no acepta las declaraciones presentadas, i cree que los testigos pueden variarlas rindiéndolas en otra forma; por mi parte no tengo inconveniente en que ellas sean ratificadas de la manera que el Excmo. Tribunal tenga a bien determinar.

Declaracion de don Juan C. Vera i de don Ricardo Silva Jofré prestada por escritura pública. No pudiendo el agente chileno desconocer la fuerza de esta declaracion, producida por dos testigos contestes i perfectamente conocedores del asunto, empieza por estrañarse de que ellos recuerden con tanta exactitud los hechos acerca de los cuales declaran.

Sin embargo, esta estrañeza tiene su esplicacion, como lo reconoce la parte demandada, en la circunstancia de ser los declarantes jerente el uno i mayordomo el otro de la bodega en que se hallaban depositadas las mercaderias destruidas.

Pero esta misma circunstancia, que hace que los testigos indicados sean los mas calificados que podian presentarse, se presta para otra observacion del agente chileno.

Puesto que el señor Vera, dice, era el depositario de las mercaderias, la accion del demandante habria debido dirigirse en contra de aquél, al cual le habria incumbido la prueba de fuerza mayor para eximirse de responsabilidad.

Miéntas ésta no se haga, agrega, el señor Vera tiene gran interes de ayudar a este reclamo, para hacer a Chile responsable de las *supuestas pérdidas de los reclamantes.*

I por esto el testimonio de don J. Vera i el de su mayordomo no tienen mérito, *por carecer de imparcialidad*; fuera de la razon, ya dicha respecto de los otros testigos, de no ajustarse su declaracion a las reglas de procedimiento, aun no dictadas.

No necesito decir que una escritura pública auténtica es en todas partes del mundo un documento digno de crédito, i que el agente chileno que pretende desconocer el mérito de un instrumento semejante, manifiesta a las claras que no está dispuesto a aceptar ninguna clase de prueba, por clara i concluyente que sea.

Por fortuna, no puede ser este el criterio del Excmo. Tribunal, ni aun el del mismo Gobierno de Chile; porque, de otra manera, el Tratado que ha dado oríjen a la creacion de este Tribunal no habria sido un acto sério, lo que no puede admitirse.

El incendio i saqueo de la bodega del señor Vera i de las demas propiedades destruidas en Valparaiso, durante la noche del dia 28 i la mañana del 29 de Agosto es un hecho público, casi podria decirse un hecho histórico, que nadie puede en Chile, no diré negar, pero siquiera poner en duda.

En estas condiciones, la demanda contra el señor Vera por el incendio de mercaderias depositadas en una propiedad de él que ha sido consumida tambien por las llamas, habria sido un verdadero acto de demencia.

Por esta razon i la de no ser el señor Vera reclamante, por su carácter de ciudadano chileno, su declaracion i la de su mayordomo tienen un valor inestimable e indiscutible.

Nadie, como ellos, pueden declarar con mayor conocimiento de causa acerca del hecho mismo del saqueo e incendio, de la cantidad i calidad de las mercaderias destruidas i de su precio.

De modo que si el Excmo. Tribunal diese acogida al reclamo referente a la forma de su declaracion, nada seria mas fácil que renovar o ratificar esa declaracion ante el funcionario que al efecto se designe en Valparaiso.

I en este caso agregaria todavia la declaracion análoga de don Juan E. Vera, hijo de don Juan C. Vera, mayor de edad, i el cual, en su carácter de apoderado de este último, tiene bien cabal conocimiento de lo ocurrido.

En cuanto al precio de las mercaderias, segun los testigos, basta ver que coincide con el del reclamo, i que este fué presentado ante el cónsul británico en Valparaiso el dia 31 de Agosto de 1891, como consta del certificado consular que ahora acompaño para dejar establecido que dicho precio se refiere, como es natural, a la época del incendio i no a la de la declaracion.

I no es estraño que, tratándose de una bodega que servia casi esclusivamente para el depósito de mercaderias inflamables, en cuya categoría no entran jeneralmente sino un limitado número de

artículos; el administrador i mayordomo de esa bodega tengan el recuerdo fresco de la cantidad i calidad de esos artículos i cabal conocimiento de sus precios, puesto que de todo esto tenían que dejar constancia diaria en sus libros.

Debo tambien hacer presente al Excmo. Tribunal que la casa reclamante llevaba un libro auxiliar en que consignaba las mercaderías depositadas en la bodega del señor Vera, i confrontando las diversas partidas de entradas i salidas de ese libro, resulta conforme la existencia con la apuntada en el reclamo.

Este hecho puede acreditarse oportunamente haciendo que el funcionario que al efecto se designe haga la comprobacion correspondiente.

III

Despues de discutir estensamente sobre la ineficacia que atribuye a los documentos en que se funda el reclamo, sostiene el agente chileno que a la misma conclusion se llegaria si la prueba fuera fehaciente a su juicio, porque el daño no fué causado por las fuerzas militares o navales de la República, sino por una turba amotinada despues de una sangrienta batalla, i un acto semejante no afecta la responsabilidad del Gobierno ante el Derecho i la Jurisprudencia Internacional.

Segun se ve, ya el agente chileno no niega aquí los hechos, sino que discute la responsabilidad, que es a lo que debiera haberse contraído exclusivamente.

Esta responsabilidad, que niega el agente chileno está, sin embargo, reconocida por el Gobierno al aceptar la Convencion que creó el Tribunal encargado de fallar esos reclamos i al prescribirle como antecedentes para fundar sus sentencias, las de otros tribunales análogos

Entre éstos, el mas reciente es el de Washington en el que se aceptaron en contra de Chile reclamos semejantes al que motiva este memorial.

I nadie podrá decir que tales fallos no son conformes a la equidad mas estricta.

Los horrores de una calamidad pública, que pesan por iguales partes en contra de una comunidad, está bien que sean soportados como un mal inevitable. Pero los que pesan sobre un número limitado de personas, deben ser indemnizados, sea por el Gobierno jeneral o por el poder local.

En Chile esto último no se halla establecido, como sucede en otros países; luego, es el Gobierno jeneral el que debe indemnizar los perjuicios causados, sea por tropas indisciplinadas, o de cualquiera otra manera, contra particulares que no tienen por qué soportar individualmente daños que deben afectar a la universalidad de los habitantes del país.

El hecho de que los chilenos perjudicados no hayan obtenido indemnización de los daños sufridos por causa análoga, no es un antecedente para combatir nuestro reclamo.

El mismo argumento podría hacerse a todos los reclamos pendientes ante ese Excmo. Tribunal, i el resultado de la aceptación de tal defensa sería convenir en que el Tratado celebrado entre la Gran Bretaña i Chile sería del todo inútil.

No me concierne a mí averiguar las razones que el legislador chileno habrá tenido para proveer de preferencia a la indemnización de los extranjeros perjudicados sobre sus propios ciudadanos.

Supongo que será por aquel sentimiento jeneroso que induce a hacer siempre mejor la condición de los huéspedes que la de las personas de la familia. Pero, en todo caso, la lei es la lei, i como el Tratado no consulta sino los reclamos británicos, solo de ellos debemos ocuparnos.

El ajente chileno escusa entrar en mas estensas consideraciones al respecto refiriéndose a lo que tiene dicho en los reclamos números 3, 11 i otros, cuyas alegaciones reproduce.

El Excmo. Tribunal me permitirá que no acepte esta manera de discutir.

Lo que el ajente chileno haya dicho, contestando otros reclamos, es completamente desconocido para mí i no podría ser tomado en consideración sin faltar a las reglas universales que rijen en la sustanciación de todo proceso.

La discusión de un juicio tiene que ser franca i amplia, i es tarea

mucho mas fácil para el agente chileno repetir en cada reclamo lo que crea conducente de lo que ha dicho en otros, que no obligar a cada reclamante a estudiar todos los demas reclamos.

IV

Acompaño a este memorial los siguientes documentos:

- 1.º Poder de Betteley i Ca. que me autoriza para entender en este reclamo.
- 2.º Escritura social de Betteley i Ca.
- 3.º Certificado del cónsul británico en Valparaiso que atestigua que el reclamo de Betteley i Ca. fue presentando al Consulado en 31 de Agosto de 1891.
- 4.º Copia de la carta dirigida por Betteley i Ca. al señor cónsul británico, en 31 de Agosto de 1891, con inclusion de la cuenta de reclamo, autorizada con la firma ante notario del testigo don Juan C. Vera.
- 5.º Copia de la carta dirigida por Betteley i Ca. al agente de la *Commercial Union Assurance Company*, con fecha 22 de Setiembre de 1891, incluyendo la póliza de seguro.
- 6.º Contestacion del agente a la carta anterior, ofreciendo devolucion de parte de prima en cambio de recibo firmado en la misma póliza.

V

Ademas de los testigos que tengo ofrecidos en el núm. I para acreditar la nacionalidad de los socios de la firma de Betteley i Ca., i de las diligencias probatorias a que me refiero en el número II, ofrezco las declaraciones de los señores Manuel Rus i José Dolores González comerciantes de Valparaiso i vecinos de la Bodega núm. 321 C de la calle de las Delicias, conocedores de todos los detalles referentes al incendio i saqueo de dicha bodega con las mercaderías que en ella estaban depositadas.

En mérito de lo espuesto, pido al Excmo. Tribunal se sirva acceder al reclamo que represento i ordenar que me sea cubierta por el Gobierno de Chile la suma a que asciende con mas los intereses corrientes desde la fecha del siniestro hasta la del pago efectivo.

p. p. BETTELEY I CA.
F. J. ASKHAM

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en la reclamacion hecha a nombre de la firma social Betteley i Ca., que cobra la suma de \$ 15,734.63 de la cual \$ 3,461.13 corresponden a intereses, por mercaderías que se dicen perdidas en un incendio, en Valparaiso, el 28 de Agosto de 1891.

1 Ni don Guillermo ni don Alfredo Betteley han acreditado hasta ahora el estado i carácter de súbditos ingleses por nacimiento que se atribuyen, siendo que la prueba de la nacionalidad es antecedente necesario de la reclamacion i debe producirse por los reclamantes en términos de no dejar lugar a duda acerca de ella, como lo establecen a una la doctrina i la jurisprudencia internacionales, citadas al principio de mi dúplica en la reclamacion núm. 3, a que me refiero, análoga a la presente.

Para probar legalmente su nacionalidad inglesa por nacimiento, han debido los reclamantes presentar copias o extracto legalizado del respectivo registro civil, i este mismo no constituirá prueba de nacimiento si no lleva la firma del *registrar* i cumple los demas requisitos exigidos por el art. 38 del acta o lei inglesa de 1874 sobre la materia. (*Annuaire de Legislation Etrangère*, p. 58).

Ese documento auténtico, debidamente legalizado i espedido en forma por el respectivo funcionario público, es lo que en todos los países constituye la prueba legal de nacimiento. La falta de documento no puede ser suplida por prueba testimonial que acredite la notoriedad sino cuando se ha comprobado la imposibilidad de presentar aquél, por pérdida del registro, etc. En nuestro caso, no se

ha indicado siquiera la imposibilidad de la presentacion, por mas que los reclamantes hayan tenido tiempo sobradísimo para hacer venir de Liverpool el referido comprobante de nacimiento, que seguramente les habrian remitido si éste se hubiera efectivamente verificado en esa ciudad.

En lugar de presentar documentos, se ofrecen por parte de los reclamantes testimonios de diversas personas entre las cuales se enumera una sociedad comercial, que no sé cómo podria declarar. Tal medio de probar el nacimiento en Liverpool no es aceptable por la razon ya indicada i por no hacerse, respecto de los testigos ofrecidos, las indicaciones sobre su nacionalidad, profesion etc., reiteradamente exigidas en los artículos I i XI del Reglamento de Procedimientos, que V. E. dictó para ser cumplido i no para ser burlado.

En resumen sobre esto: se trata aquí de saber si V. E. tiene o nó jurisdiccion para conocer de esta reclamacion, no estando acreditado el estado de súbditos ingleses atribuido a los reclamantes. Por mi parte, sostengo que nó, atendidos los términos de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, segun los cuales no podria ni la voluntad espresa de los respectivos agentes o interesados prorrogar o ampliar la jurisdiccion restringida que dicha Convencion internacional confirió a este Excmo. Tribunal. Por lo tanto, espero que V. E. ha de declararse incompetente para conocer de esta reclamacion.

2 Con el memorial se presentaron un certificado de un señor Mac Laughlin, otro de un señor Lazonby i una declaracion o testimonio otorgado en escritura pública por don Juan C. Vera i don Ricardo Jofré Silva. Con esos testimonios se ha pretendido acreditar, en todó o en parte, la efectividad i el monto de los perjuicios reclamados i el modo cómo estos se produjeron.

Por mi parte, objeté en la contestacion la validez de tales testimonios por haberse prestado sin conformarse con las disposiciones reglamentarias referentes a prueba testimonial; a lo que se ha replicado, con cierta viveza, observando que, mal han podido guardarse aquellas disposiciones cuando todavia no han sido fijadas por el Tribunal.

La observacion, siendo exacta, carece absolutamente de fuerza: si V. E. no ha señalado el modo i condiciones en que habrá de recibirse la prueba testimonial, lo que corresponde hacer despues de la dúplica, claro es que los señores Betteley i C.^a no han debido anticiparse a rendir inútil prueba, en las condiciones que ellos, i no V. E., han elegido. Debian los reclamantes advertir que tal prueba de nada les serviria, estando rendida estemporáneamente, ante funcionarios no designados al efecto, sin comision de V. E., sin citacion ni posible contra-interrogatorio de mi parte, i por testigos respecto de los cuales no se han llenado todas las indicaciones sobre profesion, nacionalidad, residencia, etc. prescritas en los artículos I i XI del Reglamento de Procedimientos del Excmo. Tribunal.

I como ántes no se llenaron esas prescripciones ni se han llenado tampoco en la réplica, última ocasion de ofrecer en forma reglamentaria prueba testimonial, resulta que nada se ha probado legalmente, sobre todo en cuanto se refiere a la especie, cantidad i valor de la propiedad que se supone perdida. A este respecto, me es imposible atenerme a la memoria, siempre frágil, o a los recuerdos de dos individuos, i no lo estrañarán los reclamantes cuando sepan que en todas las legislaciones se ha restringido a mui estrechos límites el empleo de la prueba testimonial.

De todo lo cual resulta que no están legalmente acreditados ni la efectividad ni el monto de los perjuicios reclamados, ni siquiera el hecho concreto de haberse incendiado por el populacho la bodega N.º 325 C de la avenida de las Delicias en Valparaiso. Falta de prueba, la reclamacion debe desecharse.

3 A la discusion de los hechos i de los medios reglamentarios de prueba prefiere el replicante la discusion del derecho, o sea, la cuestion de la responsabilidad que para la República podría resultar de ser cierto que el populacho de Valparaiso incendió en la noche del 28 de Agosto de 1891 la bodega i las mercaderías indicadas.

Comenzaré descartando las consideraciones fundadas en vagos sentimientos de equidad, a los que apela el replicante, sin que en realidad pudieran fovorecerle. Ya en otras reclamaciones (principal-

mente en el final de la dúplica N.º 9) he demostrado que éste es un tribunal, no de *equidad* sino de *justicia*, obligado por la Convencion a juzgar estrictamente, con arreglo a los principios de Derecho Internacional i a la jurisprudencia establecida por tribunales análogos modernos.

Este Tribunal Arbitral, de jurisdiccion mui limitada, no es propiamente análogo a la comision de reclamaciones que funcionó en Washington últimamente (1893-1894) con facultades discrecionales amplísimas. El replicante incurre en un error a este respecto. Con todo, no podría citar, aceptada por dicha Comision, ni una sola reclamacion semejante a la actual, no digo varias, como él lo insinúa.

I si no puede citarse ni una sola sentencia, tampoco se citará principio alguno de Derecho Internacional que haga a Chile responsable de perjuicios como los reclamados por los señores Betteley i Cia., causados luego despues de la batalla de Placilla *por el populacho* de Valparaiso, como lacónicamente dice el memorial, *por una turba de malhechores*, como dijeron los mismos reclamantes en comunicacion, anexa a la réplica, dirigida al cónsul de S. M. B. en Valparaiso el 31 de Agosto de 1891. Ni el populacho ni las turbas de malhechores pueden confundirse con las fuerzas militares de la República, a que se refiere el artículo 1.º de la Convencion. De robos o delitos comunes no responden sino los ladrones o delincuentes ante la justicia criminal.

Porque debo llamar la atencion de V. E. a una circunstancia capitalísima, cual es la de que ni en el memorial, ni en la réplica, ni en ninguna parte, se ha acusado de culpa a las autoridades de Valparaiso; no se ha insinuado siquiera contra ellas la acusacion de que, teniendo poder i medios suficientes, nada hicieron para contener al populacho o turba de pillos o malhechores que, segun los reclamantes, habrian sido precisamente los únicos autores del incendio referido, no imputado a persona alguna determinada.

Los señores Betteley i C.ª admiten como cosa llana i natural que el señor Vera, u otro chileno perjudicado a consecuencia de la guerra civil, no pueda reclamar, aunque si puedan hacerlo los ingleses, en cuyo favor la Convencion habria constituido un privi-

lejo o preferencia sobre los nacionales, talvez por ser aquellos huéspedes, etc. Segun esto, los huéspedes habrian abandonado el papel de tales para tomar otro mui diferente, respecto de los dueños de casa.

Me ha de permitir V. E. no entrar a refutar tan estraña nocion de lo que corresponde a los extranjeros establecidos en un pais, en sus relaciones con los regnícolas i con la autoridad pública. El derecho comun establece como axioma el principio contrario de que un extranjero no tiene mas derecho que un nacional, de que un Estado «no está obligado a hacer por los extranjeros lo que no hace por sus propios súbditos; i jamas un Gobierno ha concedido indemnizacion a sus súbditos por pérdidas o daños sufridos en el curso de una insurreccion civil.» (Hall, *Int. Law*, p, 219, Oxford, 1890).

Manifiestan tambien los reclamantes no haberse formado cabal concepto de la naturaleza i fines de la Convencion a virtud de la cual se ha constituido este Tribunal. De los términos por ellos empleados, parece deducirse que, a su entender, por el solo hecho de haber celebrado aquel acuerdo internacional, la República aceptó como de su responsabilidad todos los perjuicios sufridos, a consecuencia de la guerra civil, por extranjeros, con exclusion de los nacionales. Dejo tambien a la apreciacion de V. E. esta idea, que envuelve en realidad la negacion de este Tribunal.

4 Esta reclamacion 47 es análoga a las precedentes signadas con los números 3, 11 i 31, si bien en las dos primeras se da a soldados dispersos cierta participacion en los sucesos, que de ninguna manera se les da en las últimas i que realmente no les corresponde.

Todo bien considerado, la pérdida de que los reclamantes se quejan, caso de haberse verificado, habria sido una consecuencia natural e inevitable del estado de guerra, un caso de fuerza mayor, de que ningun Gobierno responde, una desgracia i no una injusticia, segun la espresion de Buntschli. En demostracion i para evitar inútiles repeticiones, reproduzco aquí las alegaciones, citas de autores i precedentes de cancillerías i de tribunales, manifestados por mi parte en dichas reclamaciones, principalmente en la dúplica a la reclamacion número 3, en cuanto sean aplicables al caso presente. Reitero asimismo el ofrecimiento hecho allí de testigos con

todas las indicaciones reglamentarias, para los efectos de lo dispuesto en los artículos XI i XII del Reglamento de Procedimientos, por si V. E. considera necesario mayor esclarecimiento en los hechos que el que existe en los autos respectivos. Reitero ese ofrecimiento no obstante que no corresponde a Chile la carga de probar i que, en realidad, no son necesarios mayores datos para que V. E. pueda decidir con pleno conocimiento de causa.

Los señores Betteley i C.^a no han encontrado regular que en una reclamacion se hagan referencias a otra. Sin embargo, eso no ofrece inconvenientes. Muchos reclamantes así han procedido, como el 31, que reprodujo, en jeneral, todas las alegaciones hechas contra Chile en las diversas reclamaciones motivadas por los sucesos de Valparaiso en la noche del 28 de Agosto de 1891. Llamado por el artículo IV de la Convencion a atender a la defensa de su parte ante V. E., mi honorable colega el ajente del Gobierno británico ha hecho ampliamente uso de aquel derecho de referencia, para lo cual puede examinar libremente en secretaría todos los espedientes i se provee, ademas, de copias de mis escritos. Las sentencias mismas de otros tribunales arbitrales hacen frecuentemente referencia a otros precedentes. Una vez por todas, he querido hacer aquí estas observaciones para que sean tomadas en consideracion si por acaso V. E. diera alguna importancia a la objecion de estos reclamantes.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no dar lugar a ella, desechándola en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Guillermo Ravenscroft Betteley i Alfredo Betteley, nacidos en Liverpool, Inglaterra, socios bajo la firma *Betteley i C.^a*, con domicilio en Valparaiso, reclaman del Gobierno de Chile quince mil setecientos treinta i cuatro pesos sesenta i tres centavos por pérdi-

das sufridas a consecuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en Valparaíso inmediatamente después de la batalla de la Placilla.

Esponen los reclamantes, que en la noche del 28 de Agosto el populacho prendió fuego al edificio de don Juan C. Vera, ubicado en la avenida de las Delicias número 325, donde los reclamantes tenían a bodega una cantidad de mercadería, la que fué consumida por el incendio, pérdida que estiman en quince mil setecientos treinta i cuatro pesos, valor que reclaman.

Acompañan como comprobantes, un certificado del ajente de la compañía de seguros *Comercial Union Assurance Company*, acerca de la anulacion de la póliza de seguro sobre las mercaderías incendiadas, otro certificado de W. Lazonby, declarando ser efectivos los hechos espuestos por los reclamantes i una declaracion de los señores Juan C. Vera i Ricardo Jofré Silva, prestada ante un notario público de Valparaíso, en que atestiguan la veracidad de los mismos hechos.

El ajente de Chile, contestando, dice que don Guillermo Ravenscroft Betteley, que parece ha sido el que ha firmado el memorial, no ha cuidado de acreditar su personería ni el derecho de usar de la firma social; que tampoco ha acreditado la existencia de la sociedad reclamante ni el estado i carácter de súbditos británicos de los socios; en consecuencia, no se presenta esta reclamacion en condiciones de ser admitida; que los certificados que se acompañan carecen de fuerza probatoria, atendidas las disposiciones del Reglamento en lo relativo a prueba testimonial; que la declaracion, tambien anexa de los señores Vera i Jofré Silva, fué prestada mas de tres años después del día del incendio, i que siendo el primero, dueño de la bodega, i el segundo, mayordomo, el testimonio de éstos se resiente de parcialidad, atendiendo que el señor Vera, como depositario i dueño de la referida bodega, era el obligado a restituir el depósito i a él correspondia alegar en juicio la escepcion de fuerza mayor por disturbios populares; i que aun en el caso de ser efectivos los hechos espuestos por los reclamantes, los perjuicios causados no habrian sido por las fuerzas de mar o tierra de la República, sino por populacho alzado después de una sangrienta

batalla, lo que no constituye responsable a ningún Gobierno, según el derecho i jurisprudencia internacionales. Termina refiriéndose a lo alegado en las reclamaciones 3 i 11 en lo que sea aplicable a la presente.

En la réplica, se rebaten los argumentos hechos en la contestación i se acompañan los siguientes documentos: 1.º poder de *Belleley i C.ª* que autoriza a don Federico Juan Askhan para entender en este reclamo; 2.º escritura social de *Belleley i C.ª*; 3.º certificado del cónsul británico de Valparaíso, que atestigua que el reclamo de *Belleley i C.ª* fué presentado al Consulado el 31 de Agosto de 1891; 4.º copia de una carta dirigida por *Belleley i C.ª* al cónsul británico en Valparaíso, incluyendo una cuenta, firmada ante notario, por don J. C. Vera; 5.º copia de la carta dirigida por *Belleley i C.ª* al agente de la compañía *Comercial Union*, incluyendo la póliza de seguro, i 6.º contestación del agente a la carta anterior.

En la dúplica, insiste el agente de Chile en lo espuesto en la contestación; i

Considerando: que el reclamante Guillermo Revenscroft Belleley afirma que el 28 de Agosto de 1891, tenía a bodega una cantidad de mercaderías en el edificio de Juan C. Vera, ubicado en la avenida de las Delicias número 325, que dicho edificio fué incendiado por el populacho en la noche del día citado, siendo consumidas por el fuego todas las mercaderías que allí tenía en depósito;

Considerando: que la batalla de la Placilla, que dió por resultado la caída definitiva del Presidente Balmaceda, se libró el 28 de Agosto de 1891 i a seis kilómetros mas o menos de la ciudad de Valparaíso; que la noticia de la victoria del partido congresista se supo en esa ciudad como a las diez de la mañana, como lo comprueba el parte dirigido al almirantazgo por el capitán St. Clair de la marina inglesa que mandaba el buque de guerra *Champion*, surto entónces en la bahía de Valparaíso (*Blue Book Correspondence respecting the Revolution in Chile*, año 1892 número 1, page 253); que los soldados del ejército derrotado se refugiaron en el pueblo de Valparaíso, como lo constata el cónsul jeneral de Inglaterra, señor

Lewis Joel, en una comunicacion dirigida en 1.º de Setiembre al *Foreing Office* (loco citato, páj. 250);

Considerando: que como a las 11 i media de la mañana el Intendente de Valparaiso, contra almirante Viel, convencido de su impotencia para continuar la resistencia i para garantir el órden público, se dirijió espontáneamente a los jefes de las escuadras estranjeras al ancla en el puerto i les solicitó hicieran bajar a tierra un contingente de sus marinerias i que intervinieran en la rendicion de la plaza al partido victorioso [telegrama del contra almirante aleman de Valois al almirantazgo de Alemania, Libro Blanco, núm. 243]; que desde el medio dia, soldados de marina de las escuadras alemana, inglesa, francesa i de los Estados Unidos, desembarcaron i se distribuyeron en el barrio que principalmente habitaban los estranjeros; que el cónsul jeneral británico, en su comunicacion preindicada, estima el total de estas tropas de marina en 700 hombres;

Considerando: que solo despues que hubieron desembarcado las fuerzas estranjeras i de la entrevista que tuvo i que él solicitó, con los almirantes de las escuadras, en el momento de penetrar las avanzadas del ejército victorioso, fué cuando el intendente Viel se refujió a bordo del buque de guerra aleman *Leipzig* (*Blue Book*, loco citato); que en la tarde dos batallones de infanteria i alguna fuerza de caballeria ocuparon la ciudad, i que hácia las 4 P. M. el Estado Mayor instaló su cuartel jeneral en los edificios de la Intendencia;

Considerando: que segun los partes oficiales del comandante de la Escuadra inglesa i del cónsul jeneral británico, no se perturbó el órden durante el resto del día 28 de Agosto i que no fué sino al entrar la noche que soldados desmoralizados i el populacho cometieron excesos en la ciudad e incendiaron algunas casas, disturbios que duraron hasta venir el dia; que estos hechos están confirmados por el contra-almirante George Brown de la marina de Estados Unidos (*Correspondencia oficial relativa a Chile*—Washington 1892, páj. 284), como tambien por el contra-almirante aleman de Valois i el cónsul aleman en Valparaiso en sus comunicaciones de 1.º de Setiembre de 1891 (*Libro Blanco*, núm. 261 i 259) que el

mismo almirante de Valois hace constar que *«durante toda la noche se oían descargas de fusilería mas o ménos nutridas, hechas, principalmente, por las patrullas del partido congresista contra los saqueadores e incendiarios»*;

Considerando: que el Gobierno del partido vencedor nombró sin tardanza nuevo Intendente, don Eulio Altamirano, quien se hizo cargo inmediatamente del puesto i dirijió el 29 de Agosto una proclama a los habitantes de Valparaíso;

Considerando: que resulta de todos estos hechos constatados oficialmente por las autoridades estranjeras que allí estuvieron presentes, que si a pesar de las medidas que se tomaron, disturbios graves se produjeron en Valparaíso, en la noche del 28 al 29 de Agosto de 1891, no puede hacerse de ello responsable al Gobierno; puesto que en las circunstancias difíciles del momento, despues de una batalla sangrienta, que ponía término a una guerra civil que habia sobrexitado los ánimos, habia tomado todas las medidas que estaban a su alcance; que la resolución extrema de solicitar de los comandantes de las escuadras el desembarco de tropas estranjeras, comprueba suficientemente que no hubo de su parte ni negligencia ni imprevision capaces de comprometer su responsabilidad;

Considerando: que el reclamante se limita a decir que el populacho fué el que prendió fuego al edificio situado en la avenida de las Delicias número 325, donde tenia una cantidad de mercaderías, que fué consumida por el incendio;

Considerando: que cuando un Gobierno está temporalmente incapacitado para dominar en su territorio, los actos de particulares o de una parte del pueblo, que se ha sustraído a su autoridad, por medio de una sublevación, de una guerra civil o de disturbios locales, no es responsable de los daños sufridos por estranjeros;

Considerando: que si el Derecho Internacional prescribe a las autoridades militares de una nación belijerante, el que ejercite todas sus facultades para hacer respetar por todas las personas que estuvieren bajo su dependencia, los bienes terrestres de los ciudadanos pacíficos, no hai nada que pruebe que los excesos relativos que la ciudad de Valparaíso hubo de experimentar fueran perpe-

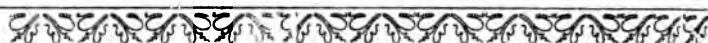
trados por los soldados del ejército victorioso, únicos sobre los cuales los jefes habían conservado autoridad; que es además aceptada como doctrina legal i por la jurisprudencia que los actos de merodeo o pillaje practicados por soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes, no afectan la responsabilidad de los Gobiernos; que tales hechos se consideran como delitos comunes, sujetos a la represión penal ordinaria (William Edward Hall, *Treatise on International Law*, Oxford, Thir.—Edition 1890 pagé 218.—Bluntschli, *Le Droit International Codifié*, artículo 380 bis.—Dudley Field, *Cod. International*, page 249 § 721. *Revue Generale de Droit International*, année 1895, número 3, may, juin.—*Tribunal Arbitral de Washington*, 1894, sentencia número 4, paj. 141.—*Tribunal Arbitral Anglo-chileno de 1884*, sentencia núm. 50. paj. 351.—*Tribunal Arbitral Italo-chileno de 1884*, sentencia núm. 96, paj. 305).

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro británico, declara al Gobierno de Chile irresponsable de las pérdidas sufridas por los reclamantes Betteley i Ca.

Santiago, 14 de Octubre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDÚNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Octubre de 1895.—Diego Armstrong, secretario.





RECLAMACION N.º 48

THE COLORADO NITRATE COMPANY

MEMORIAL

V. V. S. D. J. Morrison, representante de la sociedad *The Colorado Nitrate Company*, dueña de la oficina salitrera *Peruana*, residente actualmente en Iquique i súbdito británico, bajo juramento declaro lo que sigue con referencia a mi reclamo contra el Gobierno de Chile:

2.º Soi súbdito británico.

3.º No he tomado, ni necesito decir que tomó socio alguno de la sociedad, parte directa o indirecta en la guerra civil de 1891; ni tampoco serví a los beligerantes, ni recibí pago alguno de ellos.

4.º Los socios de la sociedad *The Colorado Nitrate Company* son todos súbditos británicos.

5.º Ningun dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, el cual no ha sido presentado ante otro Tribunal.

6.º Se reclama el valor de ocho mulas,

a razon de.	£ 20.34	£ 161.68
Dos caballos	40.00	80.00
Dos mulas de silla	25.00	50.00
Un caballo de silla	40.00	40.00
Suma.		£ 331.68

ESPOSICION

Como es público i notorio, en los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891, ocupaban Arica i Tacna una parte de las fuerzas del Gobierno de don José Manuel Balmaceda, las cuales, a las órdenes de los coroneles don Sofanor Parra, don Miguel Arrate i don Emilio Gana, debian espedicionar sobre Tarapacá para combatir al ejército que sostenia la armada a las órdenes de la delegacion del Congreso Nacional.

Como los jefes de las fuerzas balmacedistas carecian de los elementos necesarios para movilizar las tropas i su equipo, se apoderaron de todos los animales que encontraron a mano. De este modo, las autoridades militares, a nombre del Supremo Gobierno, tomaron posesion de todas o la mayor parte de las mulas o caballos que existian a pastaje en el fundo denominado *Tallape* en Camarones, perteneciente al ciudadano peruano don Fermin Hernández.

El señor Hernández no pudo resistir a semejantes procedimientos, limitándose a exigir, en obsequio propio i en interes de los demas dueños de animales, que se le otorgaran los resguardos del caso i se le diera la debida seguridad de que se le indemnizaría todo daño o perjuicio sobreviniente. Estos resguardos se otorgaron i en prevision de futuras emergencias fueron oportunamente protocolizados en la escribanía de Tacna. Así es como han podido conservarse los documentos probatorios de los hechos relacionados i del correspondiente reclamo que hoy se interpone. Todos llevan la firma de las autoridades que intervinieron en la aprehension o espropiacion de los animales.

De los documentos acompañados aparece claramente establecido que en Camarones le fueron tomados, por orden del Supremo Gobierno de Chile a North i Jewell ocho mulas i dos caballos.

Las otras dos mulas i un caballo, a que se refiere este reclamo, fueron tomados de la misma oficina *Peruana*, para el coronel Robles, una de ellas, para el subdelegado de la Noria, la otra, i para el señor Reivart el caballo.

El presente reclamo se ajusta estrictamente a los términos del

artículo 12, número 5.º de la Constitución Política del Estado, por el cual se asegura a todos los habitantes de la República la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades i sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere, sino dándose la indemnización que se ajustare con el dueño o se avaluare a juicio de hombres buenos.

Por otra parte, siendo extranjeros los miembros de la sociedad a cuyo nombre reclamo, súbditos de S. M. B., se hallan bajo el amparo de las garantías especiales que les acuerdan los artículos 117 i 17 del tratado de amistad, comercio i navegación de 4 de Octubre de 1854.

Habiéndose derrotado al Gobierno del señor Balmaceda, incumbe al nuevo Gobierno cargar con las deudas i responsabilidades de su antecesor, sin considerar para nada los abusos de poder en que aquél hubiese incurrido, ni las violaciones de la Constitución i las leyes.

La permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio reconocido en el derecho público internacional, de tal suerte que se hace innecesario insistir sobre este particular. (Bello, *Derecho Internacional*, páj. 31).

Con lo espuesto creo dejar bien establecido el derecho del reclamo que por *The Colorado Nitrate Company* vengo en formular.

Juro ser ciertos los hechos espuestos.

J. MORRISON.

Sworn by Mr. Herbert William Morrison, at the British Consulate General at Valparaíso, this sixth day of April 1895.

Before me.

JOHN E. CROISER,
vice-cónsul

CONTESTACION

Excmo. Señor:

D. J. Morrison, reclama del Gobierno de Chile la suma de £ 331-6-8, en que estima el valor de ocho mulas i dos caballos que pertenecian a la firma social *North i Jewell*, i de otras dos mulas i un caballo que dice fueron sustraídas con las anteriores por tropas de la República i pertenecian a la sociedad denominada *The Colorado Nitrate Company*. Espero que V. E. se ha de servir declararse incompetente para conocer de esta reclamacion; i en subsidio, rechazarla.

1 El memorial no se conforma a las prescripciones del Reglamento. Las disposiciones de los arts. III, IV i V han sido completamente olvidadas i el juramento ordenado por el art. IX ha sido prestado en una forma ambigua i jenérica, que está mui léjos de ser la que dicho artículo establece.

Estas informalidades bastan para rechazar la reclamacion; i así lo pido a V. E.

2 No hai antecedente alguno que demuestre la nacionalidad de la titulada *The Colorado Nitrate Company*, ni la de los señores North i Jewell. Esta omision da mérito para negar a todos estos reclamantes el carácter de súbditos de S. M. B. que se atribuyen. La sociedad anónima no lo podria tener en ningún caso, puesto que ese título no es aplicable sino a las personas naturales, i no a las ficticias creadas por la lei, i sin existencia legal fuera del territorio en que ella impera.

Por tales motivos, suplico a V. E. que se sirva declararse incompetente para conocer de la presente reclamacion.

3 D. J. Morrison se titula representante de la *The Colorado Nitrate Company*, i no acompaña poder alguno que le otorgue esa representacion. Otro tanto puede decirse con respecto a la firma social de North i Jewell, siendo de notar que es un hecho público que el señor Jewell ha fallecido, i que cualquier mandato otorgado por él que pudiera exhibir el señor Morrison habria caducado. *Mandatum morte dissolvitur*, dice la lei romana.

Opongo, en consecuencia, a esta demanda la excepcion de falta de personería; i pido a V. E. se sirva dar lugar a ella.

4 Por todo comprobante de los hechos que espone, se limita el señor Morrison a presentar una protesta estendida ante un notario público de Iquique por el ciudadano peruano don Fermin Hernández. En esa protesta, cuyo mérito probatorio es absolutamente nulo, se habla de haber sido tomados por tropas del ejército del Gobierno ocho mulas i dos caballos pertenecientes a la oficina *Peruana* de propiedad de la Compañía ántes mencionada, i nada se dice con respecto a las dos mulas i un caballo reclamados a nombre de North i Jewell.

Por mi parte, puedo asegurar que los hechos son inexactos i que las tropas del Gobierno comandadas por los coroneles Gana i Arrate se movilizaron de Tacna a la provincia de Tarapacá en caballos i mulas que fueron arrendadas para prestar este servicio, habiéndose devuelto, despues de prestado, los animales alquilados i pagádose el precio que se estipuló. Este hecho será comprobado con el testimonio de los mismos coroneles don Miguel Arrate i don Enrique Gana i del intendente en aquella época de la provincia de Tacna, don Guillermo Blest Gana, hoi día intendente de Linares, donde tiene su residencia lo mismo que el coronel Gana. El señor Arrate es al presente rejidor de la Municipalidad de Santiago, i reside en esta ciudad,

El señor Morrison señala a cada mula el precio de 20 libras esterlinas i una fraccion, lo que al cambio de aquella época significa un precio equivalente a 300 pesos por cada una. Otros reclamantes han sido un poco mas moderados en sus pretensiones, limitándose a cobrar solamente el doble del valor de estos animales, que han estimado a razon de 120 a 160 pesos. Debo manifestar que en la época en que ocurrieron los sucesos que dan motivo a esta reclamacion, se ofrecieron en venta al señor Blest Gana partidas de mulas a razon de sesenta pesos cada una, hecho que comprobaré a su tiempo. Todavía hai que observar que los administradores de oficinas salitreras solo envian a Camarones o a otros lugares tan distantes como ese, las mulas gastadas por el servicio, que necesitan largo descanso i buen alimento para poderse reponer. Es claro que ani-

males en esas condiciones son estimados a un precio mui inferior al de los que están sanos i en buen estado de servicio.

Otro tanto, puedo decir con respecto a los caballos. Solo animales finos i de primera calidad pueden tener el precio de 20 i 40 libras, que el señor Morrisson atribuye a los que son materia de este reclamo. Un caballo de calidad mediana se obtiene por ochenta o cien pesos con la mayor facilidad, lo que equivale al cambio de aquella época a seis u ocho libras esterlinas.

5 Por lo que hace a la cuestion de derecho, nada se puede decir por el momento, dada la falta de especificacion i detalles de que adolece el memorial. Por ahora repito mi súplica del exordio pidiendo a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer en la reclamacion; i en subsidio, rechazarla.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Redactaré la presente solicitud con suma concision, porque el carácter que ha asumido la discusion i el estudio de los reclamos anteriores al presente hacen inútiles las largas disertaciones a que podria prestarse este reclamo.

1 Principia la contestacion sosteniendo que el memorial no se ha ajustado a las prescripciones del Reglamento, porque el reclamante ha olvidado los artículos III, IV i V de las reglas, i porque a su juicio el juramento prescrito en el artículo IX se ha prestado de una manera ambigua i jenérica.

Para refutar estas alegaciones me bastará hacer presente al Tribunal que cuando el reclamante es una sociedad anónima, los preceptos de los artículos III i IV del Reglamento no la obligan sino en cuanto sea posible, segun lo dispuesto por el artículo V; i agregar que el señor Morrisson consignó en el memorial todas las indicaciones que le fué posible consignar. En cuanto al juramento bastará fijarse en que el memorial del señor Morrisson concluye diciendo: «Juro la verdad de la esposicion precedente» para com-

prender que la objecion hecha al respecto por la parte contraria no tiene mérito alguno.

2 El señor agente de Chile dice, en seguida, que no hai antecedentes que demuestren la nacionalidad de la compañía reclamante, *North i Jewell*.

Es bien singular que mi distiuguido contradictor, que en muchas ocasiones ha tenido mui presente para pedir el rechazo de un reclamo todo lo que aparecia en otros que favorecia sus pretensiones se haya olvidado al hacer el argumento a que vengo refiriéndome, de que en el reclamo número 42 de *North i Jewell* i en el reclamo número 43 de esta misma *Compañía Colorado*, se demostró que todos estos reclamantes eran súbditos británicos.

Tambien dice el señor agente de Chile que el señor H. W. Morrisson, se titula representante de *North i Jewell* i de la *Compañía Colorado*, i no presenta poder que lejitime la personeria que se atribuye. Para desvanecer esta alegacion me bastará recordar que los poderes de que se trata están presentados en los reclamos ántes indicados, números 42 i 43.

3 Se dice tambien que la Compañía reclamante no ha presentado otro documento justificativo de su reclamo que la protesta formulada por el señor Hernández, i que los precios cargados por los animales en el reclamo son exorbitantes.

Incorre aquí mi contradictor en un nuevo olvido, cual es el de no tomar en cuenta los recibos otorgados a favor del señor Hernández i protocolizados en la notaría de Tacna. Respecto a lo que dice mi honorable contradictor refiriéndose a los precios i diciendo que son exorbitantes, solamente puedo decir que los animales, en la estimacion de la Compañía, valen la suma reclamada; i suplico a V. E. cuando llegue a resolver este caso tome en cuenta las pruebas aducidas en otros reclamos parecidos, o iguales al reclamo de la oficina *Peruana*. Para convencerse de que los precios cargados en el reclamo no son exajerados, basta fijarse en las circunstancias en que fueron tomados.

Con lo espuesto, espero que V. E. tendrá a bien aceptar en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. señor:

Impuesto del escrito de réplica presentado por el señor agente británico en la reclamacion número 48, paso por mi parte a evacuar el trámite de la dúplica.

1 A las observaciones que hice en mi contestacion con referencia a la forma irregular en que se presentó el memorial, responde el señor agente británico que no ha podido cumplir con las prescripciones reglamentarias porque el reclamante es una sociedad anónima. Pero en el supuesto de que entidades jurídicas de esta especie tengan el derecho de comparecer ante V. E., debe tenerse presente que el señor Morrison reclama tambien en nombre de una sociedad colectiva conocida bajo la razon social de North i Jewell, la cual no está esceptuada de cumplir las condiciones impuestas por los artículos III i IV del Reglamento. Insisto, por consiguiente, en la peticion que formulé en el punto 1.º de mi contestacion.

2 Tambien insisto en la peticion consignada en el punto 2.º de mi contestacion. Aparte de ser una sociedad anónima uno de los reclamantes i de carecer de derecho para comparecer ante este Tribunal, no está debidamente acreditada la existencia de esa sociedad ni de la de *North i Jewell*, ni la nacionalidad que a una i otra se atribuye. Es indispensable saber en qué lugar se constituyó esta última, pues, si como yo lo creo, fué formada en Chile, es una sociedad chilena i como tal no tiene derecho alguno para deducir su reclamacion ante V. E. Si ella se constituyó en Inglaterra, debe comprobarse fehacientemente la nacionalidad de los socios i la existencia actual de la sociedad, porque, segun la lei inglesa, acorde en esto con la chilena, la sociedad colectiva se disuelve por la muerte de alguno de los socios; i es un hecho público i reconocido por el señor agente británico que el señor Jewell falleció en Inglaterra hace algunos meses.

Estos antecedentes establecen la incompetencia del Tribunal; i yo pido a V. E. se sirva declararla.

3 Habiendo objetado en mi contestacion el poder con que el

señor Morrison representa a los dos reclamantes por quienes habla, a causa de no haberse exhibido tal poder en esta reclamacion, el señor agente británico se admira de que no haya buscado i encontrado sus poderes en las reclamaciones números 42 i 43. Con la indicacion que solo ahora se digna hacer mi honorable colega acerca del lugar en que se encuentran sus documentos, he examinado los poderes a que me refiero; i he notado que ellos son en extremo deficientes i se prestan a graves observaciones que han sido formuladas en las contestaciones respectivas.

Para ahorrar tiempo, doi por reproducidas en este lugar aquellas observaciones, i sobre todo las que se refieren al mandato conferido por los señores North i Jewell, materia tratada *in extenso* en la dúplica de la reclamacion número 42.

4 Por lo que hace a los documentos que justifican el presente reclamo, tuve el honor de hacer notar que el señor Morrison no habia presentado otro que la protesta del señor Hernández, cuyo mérito probatorio es absolutamente nulo. El señor agente británico tiene a bien manifestar que solo a un olvido de mi parte puede atribuirse aquella aseveracion; i para refrescar mis recuerdos, se sirve remitirme, no ya a otras reclamaciones, sino a la notaría de Tacna, donde dice que están protocolizados unos recibos otorgados a favor del señor Hernández. El dato es demasiado vago i el lugar demasiado léjos para que me resuelva a emprender viaje a fin de verificar la exactitud de la afirmacion hecha por mi honorable contradictor.

Me resuelvo mas bien a exigir, dentro de mi derecho, que se presenten aquí mismo los antecedentes comprobatorios de esta reclamacion, pidiendo a V. E. que, si así no se hace, se sirva rechazarla.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

J. Morrison, representante de la sociedad *The Colorado Nitrate Company*, reclama del Gobierno de Chile la suma de trescientas

treinta i una libras esterlinas seis chelines ocho peniques, valor de animales que se tomaron a dicha sociedad.

El memorialista espone que es público i notorio que en los meses de Enero, Febrero i Marzo de 1891, estaban en Arica i Tacna fuerzas del Gobierno del señor Balmaceda, bajo las órdenes de los coroneles Sofanor Parra, Miguel Arrate i Emilio Gana, que debian expedicionar contra las fuerzas congresistas que ocupaban a Tarapacá; que careciendo estas fuerzas de elementos para movilizar la tropa i equipo, las autoridades militares a nombre del Supremo Gobierno, se apoderaron de todos los animales que encontraron a mano i, entre otros, de la mayor parte de las mulas i caballos que existian a pastaje en el fundo de *Fallape*, en Camarones, perteneciente al ciudadano peruano don Fermin Hernández; que, no pudiendo oponerse Hernández a estos procedimientos, se limitó a exigir, en obsequio propio i en interes de los demas dueños de los animales, que se le otorgaran los resguardos del caso i se le diera la seguridad de que se le indemnizaria de todo perjuicio; que otorgados esos resguardos, se protocolizaron ellos oportunamente en la notaria de Tacna; que todos llevan las firmas de las autoridades que intervinieron en la requisicion i apropiacion de los animales; que de los documentos acompañados aparece claramente establecido que en Camarones le fueron tomados, por orden del Gobierno de Chile, a North i Jewell dos caballos i ocho mulas; que las otras dos mulas i un caballo, a que se refiere esta reclamacion, las sacaron de de la misma oficina *Peruana*, las mulas, una para el coronel Robles i la otra para el subdelegado de la Noria, i el caballo para el señor Reivarb; que esta reclamacion está fundada en el artículo 12, núm. 5.º de la Constitucion política del Estado i en el Tratado de Amistad, Comercio i Navegacion de 4 de Octubre de 1854; que la primera asegura a todos los habitantes de la República la inviolabilidad de sus propiedades, de las que no pueden ser desposeidos sino mediante la justa indemnizacion; i el segundo asegura garantías especiales a los súbditos de Su Majestad Británica; que habiendo sido derrocado el Gobierno del señor Balmaceda, debe el nuevo Gobierno cargar con todas las deudas i responsabilidades de su antecesor, sin que deban considerarse para nada los abusos de po-

der en que aquél hubiere incurrido, ni la violacion de la Constitucion i las leyes; que la perpetuidad de las naciones es un principio reconocido en el derecho público internacional (Bello, *Derecho Internacional*, página 31); que, en consecuencia, la *Colorado Nitrate Company* demanda al Gobierno de Chile por la suma de trescientas treinta i una libras esterlinas seis chelines ocho peniques, que es el valor de ocho mulas a razon de veinte libras esterlinas tres chelines ocho peniques cada una, i de un caballo de silla de valor de cuarenta libras esterlinas.

Se acompaña una protesta de don Fermin Hernández otorgada en Iquique en 2 de Junio de 1891 ante notario público.

El ajente del Gobierno de Chile pide en la contestacion: 1.º, que no se admita el memorial, pues no se ha observado en él lo dispuesto en los artículos III, IV, V i IX del Reglamento; 2.º, que el Tribunal se declare incompetente, pues no se ha justificado la nacionalidad de la titulada *The Colorado Nitrate Company* ni la de los señores North i Jewell; 3.º, que el memorialista no acompaña poder de la *Colorado Nitrate Company* i que no podria, tampoco, acompañar de North i Jewell, pues este último señor se dice que ha fallecido, así es que el poder otorgado por esa razon social habria caducado, por lo que opone la escepcion de falta de personería; 4.º, que en subsidio se rechace la demanda, pues los hechos no están comprobados; que la protesta de don Fermin Hernández no tiene mérito probatorio alguno; que puede asegurar que los hechos han pasado de una manera mui diversa; que todos los animales de que se sirvieron todas las fuerzas de Tacna i Arica para espedicionar a Tarapacá fueron arrendados i devueltos, habiéndose pagado el precio estipulado por este alquiler; que los precios que señalan a los animales son exorbitantes i mui superiores a los que otros reclamantes han fijado a animales análogos.

En la réplica se afirma que el memorial está perfectamente ajustado a las prescripciones del Reglamento; que la nacionalidad de la sociedad reclamante i de los señores North i Jewell están comprobados en los espedientes de las reclamaciones números 42 i 43; que es un error decir que no se ha presentado otro documento probatorio que la protesta del señor Hernández, pues están pro-

tocolizados en la notaría de Tacna los recibos a que se hace referencia en el memorial; que el precio atribuido a los animales es equitativo, i que a este respecto pide se tomen en cuenta las pruebas aducidas en otras reclamaciones análogas.

En la dúplica se insiste en pedir todo lo que se ha solicitado en la contestacion, pues la réplica en nada destruye lo que se habia espresado en aquel escrito; que si la sociedad de North i Jewell se constituyó en Chile, es ella chilena i no tiene derecho alguno para deducir reclamacion ante este Tribunal; que el decir que los documentos probatorios están en Tacna, equivale a no decir nada.

La causa se recibió a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que la presente reclamacion ha sido deducida por el señor J. Morrison a nombre de dos reclamantes diversos: 1.º por *The Colorado Nitrate Company* que cobra la suma de noventa libras esterlinas (£ 90), valor de dos mulas i un caballo; i 2.º, por los señores North i Jewell que cobran ciento cuarenta i una libras esterlinas seis chelines ocho peniques (£ 141-6-8), valor de ocho mulas i dos caballos, animales que les pertenecian, respectivamente, i que habian sido tomados de orden de las autoridades gubernamentales i militares;

Considerando: que la sociedad *Colorado Nitrate Company* no ha producido prueba alguna para justificar su demanda i no ha acompañado ningun documento que compruebe que tenia dos mulas i un caballo en la hacienda de *Fallape*, valle de Camarones, lugar de donde se dice se verificó la espropiacion, ni que se hubieran sacado estos animales de orden de las autoridades; que la protesta del señor Fermin Hernández a que se hace referencia en el memorial no contiene indicacion respecto de estas dos mulas i el caballo, i no especifica sino las ocho mulas i dos caballos de propiedad de North i Jewell; que, por consiguiente, la reclamacion de la sociedad carece de toda base;

Considerando: en lo que concierne a la reclamacion de North i Jewell, que los reclamantes no han probado suficientemente ni que las ocho mulas i dos caballos que ellos pretenden les fueron tomados a principios de 1891 de orden de las autoridades gubernamentales, eran de su propiedad exclusiva, ni que esta apropiacion fué

una verdadera requisicion militar; que el único título invocado por los reclamantes para justificar su dominio sobre los espresados animales es una declaracion de don Fermin Hernandez, propietario de la Hacienda de *Fallape*, valle de Camarones, en que dichos animales se encontraban en aquella época a talaje con muchos otros; que la simple afirmacion de un tercero no basta para probar el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesion de los animales i tiene interes en descargar su propia responsabilidad de depositario i que su declaracion, si fuera admitida, daria por resultado el favorecer al pretendido propietario con una jurisdiccion escepcional; que aun cuando los espresados animales hubieran pertenecido a la sociedad reclamante, ésta no ha comprobado que estaban entre los que sirvieron para la movilizacion de las fuerzas i que causaron los recibos exhibidos por Hernández i firmados por Sofanor Parra, Arteaga Alemparte, David Puch, Luis Fuentes i el alférez Porta;

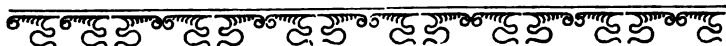
Considerando: en fin, que habiendo la *Colorado Nitrate Company* i North i Jewell obtenido del Tribunal un término para comprobar los hechos en que fundan su demanda, no presentaron ningun testigo ni practicaron jestion alguna durante él.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion.

El árbitro de Chile, al suscribir la presente reclamacion, reproduce la reserva contenida al final de los fallos 5 i 7, que se refiere a sociedades anónimas i su voto especial en la 8, en cuanto a la teoría sobre validez de las requisiciones.

Santiago, 14 de Febrero de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 14 de Febrero de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.



RECLAMACION N.º 49

BROOKING, COMBER Y C.ª

MEMORIAL

Aníbal Rodríguez H., por los señores Brooking, Comber i C.ª segun poder que se acompaña, bajo juramento, espongo:

- 1.º—Los señores Carlos Federico Comber i Jorge C. B. Brooking, de la firma ántes enunciada, residian en Valparaiso a la fecha en que tuvieron lugar los sucesos a que se refiere este reclamo.
- 2.º—Son súbditos británicos.
- 3.º—Ninguno tomó parte directa o indirectamente en la guerra civil de 1891, ni sirvieron a los belijerantes o recibieron pago de ellos.
- 4.º—Ningun dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, ni se ha presentado ante otro Tribunal.
- 5.º—La cantidad que se reclama es la siguiente:

Valor de treinta i nueve mulas, a razon de veinte libras esterlinas, tres chelines, cuatro peniques cada una.	£ 786 10 0
Un caballo, a dieciocho libras, seis chelines, ocho peniques	» 18 6 8
Intereses de estas cantidades en cuatro años al seis por ciento ,	» 193 3 4
Suma en todo.	£ 998 - 0 - 0

Esta cantidad está calculada para un precio de doscientos veinte pesos por cada mula, a un cambio de veintidos peniques por peso, i doscientos pesos por el caballo, al mismo cambio.

De los documentos acompañados consta que a Brooking, Comber i C.^a, le fueron tomadas treinta i nueve mulas i un caballo, a principios de 1891, a nombre del Supremo Gobierno, por orden de las autoridades militares que mandaban las fuerzas del ejército que mantenía en Tacna i Arica el señor don José Manuel Balmaceda, i para que movilizaran dichas fuerzas. Aquellos documentos se hallan, además, suscritos por los jefes que mandaban dicha parte del ejército i por las autoridades civiles que representaban en esa porción del territorio nacional, la autoridad del Presidente de la República.

Este reclamo se halla garantido por la Constitución Política del Estado, artículos 12, número 5.º, i, siendo súbditos de Su Majestad Británica los miembros de la firma social Brooking, Comber i C.^a estan especialmente amparados por las seguridades que les acuerdan los artículos 11 i 17 del Tratado de Amistad, Comercio i Navegación, de 4 de Octubre de 1854; sin que la circunstancia de haber sido derrocado el Gobierno del señor Balmaceda haga variar las responsabilidades del Gobierno de Chile ni la naturaleza o condición de este reclamo, ya que la permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio del Derecho Internacional universalmente reconocido.—(Bello, *Dcho. Int.* páj. 31).

Los documentos a que se refiere esta reclamación son exactamente los mismos que corren agregados a los reclamos de los señores D. Richardson i C.^a i Blair i C.^a. Si fuere necesario, se agregarán, también, a este reclamo.

ANIBAL RODRIGUEZ H.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente de Chile, paso a contestar la reclamacion número 49, en la cual, a nombre de los señores Brooking, Comber i C.^a don Anibal Rodríguez H., demanda £ 998-0-0, comprendiéndose en esta suma £ 193-3-4 por intereses, valor atribuido a 39 mulas i 1 caballo que se dicen tomados a la Compañía reclamante por órden de las autoridades de Tacna i Arica, a principios de 1891.

1 Esta reclamacion se presenta con tantas deficiencias i tan irregularmente que se hace difícil contestarla sobre bases claras i ciertas. El memorial dista mucho de ajustarse a las prescripciones del Reglamento de Procedimientos, en comprobante de lo cual bastará confrontar éste con aquel.

La escritura poder acompañada al memorial con todas las delegaciones que contiene, no alcanza a constituir la lejítima personería del mandatario señor Rodríguez para representar en este asunto a los señores Brooking, Comber i Ca., ni a dar clara noticia de la existencia misma de la Compañía i de los socios que la compongan, con todas las circunstancias requeridas para poder apreciar su estado i carácter.

Los vicios i defectos de forma de que el memorial adolece hacen absolutamente inadmisibile esta reclamacion.

2 En comprobante de los hechos espuestos en el memorial, se refiere éste a los documentos agregados a las reclamaciones núms. 51 i 52 presentadas respectivamente por Blair i Ca. i por D. Richardson i Ca. La última los comprende todos.

De esos documentos, tres son escrituras relativas a la protocolizacion de recibos dados a favor de don Fermin Hernández por 207 mulas i 1 yegua, por 147 mulas i 9 caballos i por 88 mulas i 4 caballos respectivamente, en 17 i 19 de Febrero i 5 de Marzo de 1891. Se agregan ademas dos certificados privados, uno de ellos sin fecha, relativos a la calidad i al precio de los animales indicados.

Sobre no tener el valor que al parecer quiere atribuírseles, nin-

guno de los documentos i certificados se relaciona con esta reclamacion, de modo que no hai para qué tomarlos aquí en cuenta.

El último de los indicados documentos es la escritura pública de protesta otorgada por el mismo señor Hernández en Iquique el 2 de Junio de 1891, a consecuencia de haberle las autoridades tomado en Camarones, segun él dice, 428 mulas i 12 caballos puestos a talaje en una hacienda del otorgante i correspondientes a diversos dueños, en la forma que allí se espresa.

En esa escritura si bien se hace referencia a los señores Brooking, Child i Ca. por la oficina Carolina, nada se dice de los reclamantes señores Brooking, Comber i Ca.

Por lo demas, no se yo para que se trae aquí dicha escritura protesta. En ella ha podido decir el señor Hernández todo cuanto quisiera i le conviniera, teniendo bien presente que, como depositario de los animales a talaje, si efectivamente estos eran ajenos, él era el responsable de la devolucion a sus verdaderos dueños. En ningun caso, la declaracion del señor Hernández puede ni favorecer a la Compañía reclamante ni perjudicar a Chile. Es absolutamente ineficaz.

3 Nada, pues, se ha acreditado en esta reclamacion: ni que los reclamantes fueran en 1891 dueños de los animales reclamados, ni que estos tuvieran los precios exajerados que se les atribuyen, ni que las autoridades dieran orden de tomarlos, etc.

Sobre precio de mulas en las condiciones de las que son objeto de esta reclamacion, reproduzco lo dicho a este respecto por mi parte en las reclamaciones anteriores núms. 23, 25 i 48.

Sobre movilizacion de las tropas de los coroneles Arrate i Gana, entre Arica i Pozo Almonte donde tomaron parte en la batalla del 7 de Marzo de 1891, me refiero asimismo a lo espuesto en mi contestacion a la última de aquellas reclamaciones i al testimonio, ofrecido allí i que tambien reproduzco aquí, de los espresados coroneles i del actual intendente de Linares, que entónces lo era en Tacna, don Guillermo Blest Gana.

La verdad sobre todo eso es que dichas fuerzas se movilizaron mediante arrendamientos de animales, siendo estos devueltos mas tarde i pagado el alquiler. Se asegura por muchos que el señor

Hernández, dueño del fundo de Camarones, tenía contratas con las autoridades para el transporte de tropas.

Segun eso, se trataría aquí, no de actos impuestos o ejecutados por las fuerzas de mar o tierra de la República, a que se refiere la Convencion Anglo-chilena, sino de simples contratos de transporte o de alquiler de animales.

En ocho fojas útiles acompaño a esta contestacion documentos que confirman lo que voi diciendo. A pedido del señor Ministro de Relaciones Exteriores con motivo de la reclamacion de los señores Richardson i Ca., núm. 52, análoga a la presente, se encontraron en la Tesoreria de Tacna las dos cuentas que figuran entre esos documentos, por fletes de mulas i caballos para movilizar las referidas fuerzas del coronel Arrate; cuentas pagadas a virtud de decretos del intendente de Tacna, fecha de 13 de Marzo de 1891, espeditos, segun aquel lo espresa, «en uso de las facultad que me tiene acordada S. E. el Presidente de la República, en telegrama de 12 de Enero último».

Conforme a la primera de aquellas cuentas presentadas por el citado señor Hernández, el Gobierno de Chile debía i pagó a éste \$ 805 por flete de mulas i caballos para las fuerzas del coronel Arrate, al «precio que manda pagar el Gobierno», frase que prueba la frecuencia i la regularidad de la operacion.

Segun la otra de aquellas cuentas, el Gobierno debía a Brooking, Child i Ca. i pagó por estos al mismo señor Hernández \$ 1,365, en la misma forma i por la misma causa.

Sobre esto es de advertir: que el señor Hernández, caballero peruano de nacionalidad, recibió aquella suma por poder de un señor Juan K. Child; que las mulas fletadas pertenecian a los espresados señores Brooking, Child i C.^a, i no a la sociedad reclamante Brooking, Comber i C.^a la cual entónces no existia, *segun lo afirma don Fermin Hernández*, i que, si los recibos dados a éste no se encuentran en su poder sino en poder de las autoridades chilenas, claro es que sucede esto porque los animales han sido pagados al señor Hernández, quien no puede reclamar ante V. E. por sí ni por interpósitas personas.

La tercera de las cuentas a que se refiere el informe del tesorero

de Tacna, señor Mewes, fecha 21 de Diciembre de 1892, corresponde a la reclamacion núm. 52, de los señores Richardson i C.^{as}, en la cual se encontrará anexa.

4 Ni la garantía constitucional de la propiedad ni la perpetuidad de las naciones, que invoca el memorialista, tienen que ver en nuestro caso.

Tampoco tiene aplicacion aquí el art. 11 del Tratado de Amistad i Comercio entre Chile i Gran Bretaña, de 4 de Octubre de 1854. Según el art. 17 del mismo Tratado, habrá lugar a indemnizacion a favor de los respectivos ciudadanos o súbditos, pero cuando sus propiedades «fuesen tomadas, usadas o menoscabadas por las autoridades lejitimas del país para un uso o servicio de interes público».

Este caso será decidido en mérito de la prueba rendida i con arreglo a los principios de derecho i a la jurisprudencia internacionales. Así, espero que no ha de ser acogida la injustificada demanda hecha a nombre de los señores Brooking, Comber i C.^{as}

En conclusion, suplico a V. E. que, habiendo por presentados los indicados documentos que acompaño, se sirva no dar lugar a esta reclamacion o desecharla en todas sus partes, por capital e intereses, no habiendo respecto de los últimos posible mora ni pretesto para cobrarlos.

GASPARTORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Aníbal Rodríguez H. por los señores Brooking, Comber i C.^{as} replicando al señor ajente de Chile, vengo en decir a V. E. se sirva resolver como lo tengo pedido en la demanda.

El poder que acredita mi personeria, como puede verlo V. E., se halla concebido en forma, no se divisa incorreccion alguna. La circunstancia de haberse quitado el nombre del señor Child de la razon social de la Compañía, sin alterarla i sin dejar de ser socio dicho señor, se halla tambien acreditado en las escrituras acompañadas en copia.

Por lo que hace al fondo mismo de la reclamacion, parece estar demas hacer presente a V. E. que nada se exige por los fletamentos contratados voluntaria o forzosamente sino por los animales tomados i no devueltos; de suerte que no tienen valor alguno los documentos que se han agregado, desde el momento que ellos se refieren a fletamentos anteriores a las requisiciones de mulas, cuyo valor o precio se reclama.

El mérito de los documentos exhibidos por mi parte será desarrollado ante V. E. verbalmente i con la amplitud que sea necesaria.

Ruego, en consecuencia, a V. E. se sirva resolver, si lo estima de justicia, como lo tengo pedido en la demanda, con poder de Brooking, Comber i C.^a

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en esta reclamacion por supuesta exaccion de 39 mulas i 1 caballo, que se dicen tomados por las autoridades de Tacna i Arica, a principios de 1891.

1 Hice notar en mi contestacion las muchas i graves deficiencias e informalidades de esta reclamacion: i como a su respecto no ha querido explicarse la réplica, queda aquella en la condicion de una de las mas injustificables presentadas ante V. E.

No se ha demostrado el interes de la parte. De los antecedentes no aparece que los animales cuyo valor se reclama pertenecieran a la compañía reclamante Brooking, Comber i C.^a Si no pertenecian al mismo señor Hernández, tenedor de ellos, o a una tercera persona, pertenecerian a la distinta sociedad Brooking, Child i C.^a El señor Child no figura en el memorial como socio de Brooking i C.^a, ni de manera alguna consta que tenga interes en esa sociedad.

Siendo colectiva la compañía reclamante, a virtud del artículo V

del Reglamento de Procedimientos, debió el memorial indicar el nombre de todos los socios e interesados, el lugar i el año de su nacimiento, etc.; i como no se ha cumplido con esa prescripcion, nada se sabe acerca de esos particulares. De igual modo se ignoran muchos de los detalles requeridos por el artículo VII del citado Reglamento para poder conocer claramente todas las circunstancias relacionadas con esta reclamacion, la cual es así un modelo de oscuridad i confusion.

Lo único que se ve claro es que la sociedad a cuyo nombre se reclama ha sido constituida en Chile, para negociar en Chile, por residentes en Chile. Es, por lo tanto, jenuinamente chilena, sin que, por lo demas, se haya acreditado que los socios, o alguno de ellos, individualmente considerados, tengan el estado o carácter de súbditos británicos, requerido para que este Tribunal pueda conocer de la reclamacion.

En consecuencia, corresponde a V. E. declararse incompetente o dictar aquí una resolucion como ésta: «No habiéndose deducido reclamacion ante este Tribunal por la parte interesada, ni cumpliéndose con los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimientos, archívense estos antecedentes.» Fué literalmente lo que en un caso análogo resolvió por unanimidad, en 1887, el Tribunal Anglo-Chileno de Santiago, sentencia número 63.

2 Dije en la contestacion que, segun por muchos se aseguraba, el referido señor Hernández habia celebrado con las autoridades de Tacna o Arica, a principios de 1891, contratos de fletamentos de animales para movilizacion de tropas por Camarones entre la última de aquellas ciudades i Tarapacá. En comprobante, acompañé documentos que acreditan haberse entregado a aquél, por decreto del intendente de Tacna, diversas cantidades en pago de los indicados fletamentos.

En la réplica se reconoce la efectividad del hecho, i simplemente se agrega que esos fletamentos fueron anteriores a las supuestas exacciones de mulas cuyo valor ahora se reclama.

La gravedad legal i moral del punto exijan alguna explicacion a ese respecto. Su omision me confirma en la creencia de que el señor Hernández, con mulas propias o ajenas, negoció i lucró

transportando, como se ha dicho, las fuerzas a que se refiere el memorial, en Febrero de 1891. Esa es la fecha de los citados documentos i de las expediciones de los coroneles Arrate i Gana, a las cuales se refieren en perfecta concordancia el parte oficial del último, (*Memorandum de la Revolucion de 1891*, páj. 119), aquellos mismos documentos anexos a la contestacion, i los memoriales de ésta i de las reclamaciones números 51 i 52 del mismo memorialista. Antes de aquellas expediciones, no hubo ninguna otra que pudiera dar lugar a fletamentos diversos de los indicados por mi parte como pagados segun contrato.

El hecho del contrato en el caso presente, relativo a 39 mulas, se confirma particularmente leyendo el poder presentado por mi parte entre los referidos documentos; poder otorgado en Tacna, en Febrero de 1891, por don Juan K. Child a favor de don Fermin Hernández para que éste administre precisamente 39 mulas que tenia a pastaje en su poder, pertenecientes a Brooking, Child i C.^{as}. De ese documento se desprende claramente que el mandante, al conferir aquel poder, tuvo presente a la vez las pingües utilidades i los peligros de un negocio de transporte bélico, tan extraordinario en aquellos lugares; por eso, el poder agrega, con relacion a las mulas i a Hernández, las siguientes palabras: «Este señor tendrá facultad de fletarlas, adoptando las seguridades indispensables en los contratos que celebre a fin que se le pague el valor de ellas en el caso de muerte, pérdida o deterioro de dichos animales, cualesquiera que sea la causa o motivo que ocasione estos accidentes».

Queda, a mi juicio, perfectamente establecido que en esta reclamacion no se trata de requisiciones en forma o de exacciones impuestas por los jefes militares, sino de contratos voluntariamente celebrados i cumplidos por una i otra parte. De ello se deduce la inadmisibilidad de la reclamacion por dos nuevas causales: primero, por que no se fundaria aquella en perjuicios impuestos por actos de fuerzas militares; en seguida, porque dichas mulas fueron voluntariamente, con la mira de lucro, puestas al servicio de una de las partes combatientes contra la otra, lo que les dió carácter hostil, i cerró las puertas de este Tribunal a toda reclamacion respecto de ellas.

Sobre este último punto ofrece un precedente favorable a mi parte el fallo número 19 pronunciado en 1894 por la Comisión Mista de Washington, en el caso de Grace Brothers i C.^a contra Chile: la Comisión desechó las reclamaciones de la Compañía reclamante, considerando que ésta había dado voluntariamente ayuda i auxilio a uno de los beligerantes, trasportándole objetos que por su naturaleza pueden servir, directa o indirectamente, para la guerra, lo que se consideró acto ilícito. (Compilación de fallos, páj. 151).

3. Todo exija de parte de los reclamantes amplia prueba que acreditara la verdad de sus afirmaciones y destruyera la fuerza de las alegaciones y de los antecedentes producidos en su contra; i como no ha rendido tal prueba mediante los respectivos documentos, ni ha ofrecido rendirla por ese medio o por el de testigos, en tiempo i forma, según las prescripciones reglamentarias, resulta que la reclamación debería ser desechada, si el Tribunal entrara a conocer del fondo de ella, lo que no espero.

Por mi parte, podría abstenerme de todo ofrecimiento de prueba, ya por no tocar la carga de ésta al Gobierno reclamado, ya por considerar que, a virtud de lo espuesto, la reclamación es inadmisible, prescindiendo de toda prueba; sin embargo, i especialmente en cuanto se refiere a la movilización de las referidas divisiones Arrate i Gana i al valor de las mulas en Camarones, reproduzco aquí el ofrecimiento, hecho en la reclamación núm. 48, del testimonio de aquellos dos señores i del ex-intendente de Tacna, i hoy de Linares, don Guillermo Blest Gana.

Sobre aquel punto relativo al valor de las mulas, i por si V. E. lo creyera de alguna utilidad, ofrezco además aquí el autorizado e imparcial testimonio de los siguientes señores, todos residentes en Iquique, a saber:

Don Federico Geywitz, alemán, comerciante en animales; don Gumecindo Maza i don Ramon Iribárrren, chilenos, comerciantes en lo mismo; Don Simon Barragan, boliviano, agente comercial; i don Enrique Kempfer, alemán, jefente del Ferrocarril Urbano de Iquique.

En conclusion, con lo espuesto en la contestacion i en esta dúplica, suplico a V. E. se sirva resolver como tengo pedido, declarándose incompetente o negando lugar a la reclamacion.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile

El ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Anfbal Rodríguez H., por los señores Brooking, Comber i Ca., reclama del Gobierno de Chile ochocientas cuatro libras esterlinas dieziseis chelines ocho peniques (£ 804.16-8), mas ciento noventa i tres libras esterlinas tres chelines cuatro peniques (£ 193-3-4), por animales tomados.

El memorialista espone que, de los documentos acompañados, consta que a *Brooking, Comber i Ca.* les fueron tomados treinta i nueve mulas i un caballo, a nombre del Supremo Gobierno, por orden de las autoridades militares que mandaban las fuerzas del ejército que mantenía en Tacna i Arica el señor Balmaceda, i que se utilizaron para movilizar dichas fuerzas; que los documentos se hallan suscritos por los jefes de dicho ejército i por las autoridades civiles que representaban en esa parte del territorio nacional la autoridad del Presidente de la República; que este reclamo se halla garantido por la Constitucion Política del Estado, artículo 12, número 5, i siendo súbditos de Su Majestad Británica los miembros de la firma social *Brooking, Comber Cia.* están especialmente amparados por las seguridades que les acuerdan los artículos 11 i 17 del Tratado de Amistad, Comercio i Navegacion, de 4 de Octubre de 1854, sin que la circunstancia de haber sido derrocado el Gobierno del señor Balmaceda haga variar las responsabilidades del Gobierno de Chile ni la naturaleza o condicion de este reclamo, ya que la permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio del Derecho Internacional universalmente reconocido (Bello, páj. 31); que los documentos a que se refiere esta reclamacion son

exactamente los mismos que corren agregados a los reclamos de los señores D. Richardson i Ca. i Blair i Ca., que si fuere necesario se agregarían también a esta reclamación.

El agente de Chile, en su contestación, pide: 1.º que no se admita el memorial por adolecer de vicios i defectos de forma, como asimismo por no estar constituida legalmente la personería del memorialista; 2.º, que en subsidio se rechace la reclamación, pues los documentos en que se apoya i que corren en las reclamaciones números 31 i 32, sobre no tener el valor que al parecer quiere atribuírseles, ninguno de ellos se relaciona con esta reclamación, de modo que no hai para qué tomarlos en cuenta; que la protesta otorgada por el señor Hernández en Iquique, si bien hace referencia a los señores Brooking, Child i Ca., por la oficina *Carolina*, nada habla de los reclamantes señores *Brooking, Comber i Ca.*; que en ningún caso la declaración del señor Hernández puede ni favorecer a la Compañía reclamante ni perjudicar a Chile, por cuanto, como depositario de los animales a talaje, si efectivamente estos eran ajenos, dicho señor Hernández sería el responsable de la devolución de ellos a sus verdaderos dueños, por consiguiente, tiene un interés personal en la demanda; que no se ha acreditado en la reclamación, ni que los reclamantes fueran, en 1891, dueños de los animales reclamados, ni que estos tuvieran los precios exagerados que se les atribuye, ni que las autoridades dieran orden de tomarlos; que sobre el precio de las mulas reproduce lo que ha dicho a este respecto en las reclamaciones números 23, 25 i 48; que sobre la movilización de las tropas de los coroneles Arrate i Gana se refiere asimismo a lo espuesto en su contestación a la reclamación número 48; que la movilización se verificó mediante arrendamientos de animales, siendo éstos devueltos mas tarde i pagado el alquiler, que se asegura que el señor Hernández, dueño del fundo *Camarones*, tenía contrata con las autoridades para el transporte de tropas; que, según esto, se trataría aquí, no de actos impuestos o ejecutados por las fuerzas de mar o tierra de la República a que se refiere la Convención de 26 de Setiembre de 1893, sino de simples contratos de transporte o de alquiler de animales; que acompaña documentos que confirman esto último; que figuran, entre éstos, dos cuentas que se

encontraron en la Tesorería de Tacna, por flete de mulas i caballos para movilizar las referidas fuerzas del coronel Arrate, cuentas pagadas segun el decreto del intendente de Tacna, fecha de 13 de Marzo de 1891, que corre agregado; que, segun la primera cuenta presentada por el citado señor Hernández, el Gobierno de Chile debia i pagó a éste ochocientos cinco pesos por fletes de mulas i caballos para las fuerzas del coronel Arrate; que, segun la otra cuenta, el Gobierno debia, por la misma causa, a *Brooking, Child i Ca.* i pagó por estos al mismo señor Hernandez mil trescientos sesenta i cinco pesos; que el señor Hernández, peruano de nacionalidad, recibió aquella suma por poder de un señor Juan K. Child; que las mulas fletadas pertenecian a los citados señores *Brooking, Child i Ca.* i no a la sociedad reclamante *Brooking, Comber i Ca.* que los recibos dados al señor Hernández por los animales no se encuentran en su poder sino en poder de las autoridades chilenas; que ello sucede evidentemente porque aquéllos han sido pagados a dicho señor Hernández; que ni la garantia constitucional de la propiedad ni la perpetuidad de las naciones tienen nada que ver en el presente caso, que tampoco tiene aplicacion aquí el Tratado de Amistad i Comercio entre Chile i Gran Bretaña.

Se acompañan los documentos a que hace referencia la contestacion.

En la réplica se sostiene que la personería del memorialista está perfectamente acreditada i que, en el poder con que se ocurre, está acreditado el motivo por qué el nombre del señor Child no figura en la razon social de la compañía reclamante; que respecto al fondo de la reclamacion, no hai que agregar sino que nada se exige por los animales contratados voluntaria o forzadamente, sino por los animales tomados i no devueltos; que, en consecuencia, no tienen valor alguno los documentos agregados a la contestacion, puesto que ellos se refieren a fletamentos anteriores a las requisiciones de mulas cuyo valor se reclama.

Se acompañan dos certificados del encargado de negocios de S. M. Británica en Chile, que acreditan el carácter de ciudadanos británicos de los señores Carlos Federico Comber i de Jorje E. Brooking.

En la dúplica se persiste en las causales de inadmisibilidad de la reclamacion por los defectos del memorial i falta de justificacion de la personería, que no han sido subsanados en la réplica; que se ha confesado por el memorialista la efectividad de haberse celebrado contratos de fletamentos por las mulas, observando, sí, que ellos fueron anteriores a las supuestas exacciones de mulas cuyo valor ahora se reclama; que de esa confesion se deduce que el señor Hernández, con mulas propias o ajenas, negoció o lucró trasportando las fuerzas a que se refiere el memorial, i que dichos fletamentos no pueden referirse sino a las expediciones de que habla la demanda, pues no hubo otras expediciones que aquéllas; que el contrato de arriendo en el presente caso, segun se indica en el poder otorgado en Tacna en Febrero de 1891 por don Juan K. Child a favor de don Fermin Hernández para que éste administrara precisamente treinta i nueve mulas que tenia a pastaje en su poder, pertenecientes a *Brooking, Child i C.^a*, revela claramente que se trata del alquiler de las mulas que ahora se pretende fueron tomadas por las autoridades militares; que, dada esta circunstancia, se deduce la inadmisibilidad de la reclamacion por dos nuevas causales: 1.º porque no se fundaria aquélla en perjuicios impuestos por actos de fuerzas militares; i en seguida, porque dichas mulas fueron voluntariamente, con la mira de lucro, puestas al servicio de una de las partes combatientes contra la otra, lo que les dió carácter hostil i cerró las puertas de este Tribunal a toda reclamacion respecto de ellas; que sobre este último punto, ofrece un precedente el fallo número 19 pronunciado en 1894 por la Comision Mista de Washington en el caso de *Grace Brothers i C.^a* contra Chile: la comision desechó las reclamaciones de la compañía reclamante, considerando que éste habia dado voluntariamente ayuda i auxilio a uno de los beligerantes trasportándole objetos que por su naturaleza pueden servir directa o indirectamente para la guerra, lo que se consideró acto ilícito. (*Compilacion de fallos*, páj. 151).

Se recibió la causa a prueba i se rindió la que corre en autos.

En el acuerdo de esta causa las opiniones del Tribunal se han dividido, causando dispersion de votos. En consecuencia, i no habiéndose podido formar sentencia, queda esta causa sin resolu-

cion, reservando cada uno de los señores árbitros su derecho de fundar la opinion que ha sostenido en este caso.

Santiago. 5 de Marzo de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Proveido por el Excmo. Tribunal en 5 de Marzo de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario

VOTO ESPECIAL DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Segun el criterio del infrascrito, el Tribunal no puede dar lugar a la reclamacion de los señores *Brooking, Comber i Cia.* porque los reclamantes no han probado, como no lo hicieron los demandantes en las reclamaciones núm. 23, 25 i 51, motivo por el cual se rechazaron sus demandas, que eran de su propiedad las doscientas cuarenta i ocho mulas i dos caballos que pretenden les fueron tomados de la hacienda de *Faltape* de don Fermin Hernández; el único título que ellos invocan para justificar su dominio es una declaracion del señor Hernández, en cuya hacienda se encontraban los espresados animales, segun dicen, a talaje con otros, cuando fueron requisicionados; pero el simple aserto de un tercero no basta para establecer el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesion de los animales i tiene interes en descargar la responsabilidad que le afecta como depositario, i cuándo su declaracion arrastraria la consecuencia, si fuera aceptada, de atribuir las ventajas de una jurisdiccion especial al pretendido propietario, no teniendo Hernández derecho a ella por ser súbdito peruano.

Esta reclamacion debe, pues, ser desechada, como lo han sido las reclamaciones núms. 23, 25 i 51, que son perfectamente análogas en cuanto al fondo i que fueron rechazadas por una mayoria compuesta de los árbitros belga i chileno.

El infrascrito es de opinion que este Tribunal es competente para conocer del fondo de la reclamacion i no puede aceptar el que los señores *Brooking, Comber i Cia.* hubieren perdido su calidad de

neutrales por haber recibido *por el intermedio de Hernández* el precio del alquiler de cierto número de mulas arrendadas al Gobierno del Presidente Balmaceda *por el mismo Hernández*, siendo que éstas habían sido requisicionadas con antelación; no hubo de parte de los reclamantes un acto voluntario i consciente de la violación de la neutralidad al regularizar un hecho realizado por el Gobierno de derecho en aquella época.

Santiago, 5 de Marzo de 1896.—CAMILLE JANSSEN.

VOTO ESPECIAL DEL ARBITRO BRITÁNICO

La apropiación de treinta i nueve mulas i un caballo, de propiedad de los señores *Brooking, Comber i Cia.*, que se efectuó por las fuerzas del Gobierno, importó en su oríjen una requisición en la acepción jenuina de la palabra, puesto que los animales se tomaron para usos militares, sin el consentimiento, ni siquiera conocimiento de sus dueños.

Sin embargo, aparece de los recibos otorgados por don Fermin Hernández, a nombre de los señores *Brooking, Comber i Cia.*, acompañados con los documentos que corren en autos, que se pagaron mil cuatrocientos pesos a los reclamantes el 13 de Marzo de 1891 (recibos nús. 1 i 2) por alquiler de estos animales.

El concepto de que los reclamantes habían violado la neutralidad por haber realizado una transacción de esa especie, carece de fundamento.

Como ya se ha dicho mas arriba, éstos ignoraban las apropiaciones que se efectuaron el 16 i 17 de Febrero; pero, ya consumadas, consintieron en recibir el precio del alquiler, sin duda con el propósito de disminuir sus pérdidas.

El poder con que autorizaron al señor Hernández para alquilar sus mulas fué otorgado el 27 de Febrero de 1891; por consiguiente con posterioridad a la apropiación de los animales, i no podría tener referencia a ellos.

Pero, en razon de haber aceptado los reclamantes el que se les

pagara el alquiler de los animales cuya apropiacion importó en su orijen una requisicion, ésta dejeneró en un contrato de porteo que les quita todo derecho para ocurrir ante este Tribunal.

Dadas estas circunstancias, esta reclamacion debe ser desechada por falta de jurisdiccion, sin perjuicio de que se ejercite ante quien corresponda.

Santiago, 5 de Marzo de 1896.—ALFRED ST. JOHN.

VOTO DEL ARBITRO DE CHILE

Se produjo en el acuerdo de esta causa, una dispersion de votos que ha imposibilitado su fallo.

El árbitro infrascrito mantuvo la opinion de que la sociedad reclamante carecía de *status* para ocurrir a este Tribunal Internacional por cuanto habia perdido su carácter i sus fueros de neutral, prestando ausilio a uno de los bandos contendientes en la guerra civil de 1891.

I, como la falta de personería obsta al conocimiento de fondo del asunto controvertido, sostuvo el infrascrito que la reclamacion debia rechazarse *in limine* por este capítulo previo.

Se hallan documentalmente comprobados los antecedentes que justifican esta conclusion.

Hai todavia reconocimiento u aceptacion del memorialista, en órden a la exactitud de esos antecedentes.

En 27 de Febrero de 1891, don Juan K. Child, miembro a la sazón de la actual firma de Brooking, Comber i C.ª, comisionó al ciudadano peruano don Fermin Hernández, propietario o arrendatario del fundo de *Fallape*, ubicado en la quebrada de Camarones, provincia de Tarapacá; para que administrara o dispusiera, como lo estimase conveniente, de treinta i nueve mulas pertenecientes a esa firma comercial i colocadas a talaje en las praderas de *Fallape*.

El mandato estrajudicial de 27 de Febrero, fué confirmado mas tarde por un instrumento público otorgado en Tacna.

En ejercicio de sus facultades, Hernández alquiló las treinta i

nueve mulas de Brooking, Child i C.^a [hoi Brooking Comber i C.^a] a la Intendencia de Tacna, para emplearlas en el trasporte de las tropas pertenecientes a la division del coronel Arrate que se dirijia a Tarapacá con el fin de unirse al coronel Robles i librar el combate que tuvo lugar en Pozo Almonte.

Aun cuando el alquiler de las mulas se hiciera verbalmente, ha quedado constancia escrita de ese convenio, en la factura de f....., pasada por Hernández a la Intendencia de Tacna, cobrando la suma de mil trescientos sesenta i cinco pesos por el flete de esos animales, a razon de treinta i cinco pesos cada uno.

En 13 de Marzo de 1891 cancelóse la factura mencionada, suscribiendo Hernández el recibo correspondiente al pié del decreto mismo que ordenaba el pago.

Tales son los elementos de hecho del caso en análisis.

En el acuerdo de la causa, el honorable árbitro de S. M. B. opinó que, aun cuando estaba probada, en su concepto, la requisicion hecha en 16 i 17 de Febrero, de las mulas que se reclaman, tomadas violentamente para usos militares sin el conocimiento o consentimiento de sus dueños; la circunstancia de haber intervenido con posterioridad un convenio de alquiler de esos mismos animales, ajustado entre las autoridades de Tacna i el mandatario de los memorialistas, hace dejenerar la requisicion en un contrato de porteo que priva a los reclamantes de su derecho para ocurrir ante este Tribunal.

No ha podido compartir el árbitro infrascrito esta opinion de su honorable colega, porque no es exacto, a su juicio, que esté probado en autos el dominio de los reclamantes sobre las mulas que se dicen requisicionadas en 16 i 17 de Febrero.

No hai, en efecto, otra prueba del hecho fundamental relacionado sino la declaracion de Fermin Hernández, declaracion que carece de todo mérito legal i de todo valor moral.

Apénas si necesitamos insinuar que tratándose de bienes semovientes, el poseedor se reputa dueño, salvo prueba en contrario, prueba que no se ha producido en este caso.

I no es por cierto admisible que mediante el sencillo i cómodo recurso de atribuir, por su simple dicho, la propiedad de las mulas

reclamadas a un súbdito de S. M. B., pudiera Hernández revestirse de un fuero privilegiado para ocurrir ante este Tribunal de escepcion.

En su calidad de dueño o arrendatario de las praderas de *Fallape*, Hernández investia, ademas, el carácter de depositario responsable de aquellos animales i se concebirá que sin mas pruebas que su palabra, no sea dable aceptar que se desprenda de esas responsabilidades imponiéndolas o traspasándolas al Gobierno de Chile.

Pero, si por esta circunstancia capital no ha podido compartir el infrascrito la opinion del honorable árbitro británico, toma, sin embargo buena nota de un concepto mui interesante que encierra el voto de su honorable colega en este caso. Sostiene, en efecto, el espresado señor árbitro, que, por cuanto con posterioridad a la pretendida *requisicion* intervino un *contrato de porteo* entre el mandatario de los reclamantes i las autoridades de Tacna; esa *requisicion dejeneró* en un pacto comun sujeto a la *lex loci contractus*, sometido al fallo de los tribunales del país de su otorgamiento, i estraño, por lo tanto, a la jurisdiccion diplomática i especialísima de este Tribunal.

Es verdaderamente sensible que este principio no solo verdadero sino axiomático i fundamental en Derecho Internacional público i privado, haya sido reconocido un poco tardíamente por su honorable colega.

De otra manera, el infrascrito habria tenido el honor de contar con su acuerdo i con su apoyo en la resolucion de los casos números 2, 15, 17, 84 i 87; en todos los cuales aquel principio tenia la mas adecuada i rigurosa aplicacion.

Refiérense todos los casos enumerados a reclamaciones que traen origen de *contratos de fletamentos ajustados en Valparaiso* entre diversos armadores de buques i un agente del Gobierno de Chile. Pues bien, en todos esos casos, el infrascrito invocó inútilmente la regla fundamental del *lex loci contractus*.

La mayoría del Tribunal, formada, por cierto, con el voto del honorable árbitro británico, desestimó el valor del principio universal de derecho público i de derecho positivo moderno, que

somete los contratos a la jurisdicción del país de su otorgamiento i, declarando competente a este Tribunal para conocer i resolver de reclamaciones emanadas de tal origen, condenó al Gobierno de Chile al pago de distintas i cuantiosas sumas, tanto en los casos recordados como en otro exactamente análogo del buque *Skomwer*. (Reclamación sueco-noruega número 1).

Es curioso de observar que en todas estas reclamaciones derivadas de *contratos ajustados en Chile*, se dió como fundamento de la competencia que, contra toda ley i toda doctrina, se atribuyó este Tribunal para resolverlas, la circunstancia de que la Convención de 26 de Setiembre de 1893, que constituyó este arbitraje internacional, es también una ley de la República, i que como este pacto *ha sustraído* del conocimiento de los tribunales ordinarios del país, las reclamaciones de súbditos de S. M. B. motivadas por actos u operaciones de los ejércitos o escuadras de la República durante la guerra civil de 1891; no cabía aplicar para resolver tales reclamaciones, el principio del *locus regit actum*.

Dijo a este propósito el considerando 6.º del fallo de mayoría expedido por el Tribunal en la reclamación número 2, de la barca *Athlon*, lo que sigue:

«Considerando: que si es verdad que *este contrato de fletamento celebrado en Valparaíso, está sometido, en cuanto a sus consecuencias, a las prescripciones del Código de Comercio de Chile*, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 975 de dicho Código, no es ménos cierto que la Convención de 26 de Setiembre de 1893 *ha sustraído de la jurisdicción de los tribunales ordinarios del país, las reclamaciones que tienen por causa los actos i operaciones efectuados por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la guerra que principió el 7 de Enero de 1891 i terminó el 28 de agosto del mismo año*».

Tal fué, lo repetimos, la tesis que predominó en las resoluciones de mayoría expedidas por este Tribunal en los casos números 2, 15, 17, 84, 87 i en la número 1 del Tribunal Chileno Sueco-noruego.

Conviene repetir todavía que las condenaciones impuestas al Gobierno de Chile en esos fallos, importan, talvez, algo como el

treinta o treinta i cinco por ciento del total de las sumas juzgadas en favor de los reclamantes.

Fué en vano que el infrascrito protestara en cada uno de aquellos casos, contra la doctrina aceptada por la mayoría del Tribunal para atribuirse una competencia de que, a nuestro juicio, carecia en absoluto para fallar sobre el mérito de *contratos celebrados en Chile*.

Decíamos, a este respecto, en el voto especial emitido con motivo de ese propio fallo número 2, lo que sigue:

«La Convencion de 1893 no ha derogado las doctrinas ni la jurisprudencia internacional.

«Mui por la inversa, la constitucion de este arbitraje del 93 tiene por base fundamental el respeto de esas doctrinas, puesto que nos manda subordinar a ellas nuestras resoluciones.

«De aquí que nada valga ni nada signifique la existencia de la Convencion del 93 como argumento para estender la esfera de accion i de competencia del Tribunal, ni para sustraerle al rigor de las doctrinas del derecho teórico i positivo internacional.

«En el caso concreto que nos ocupa, los principios espuestos tienen una cabal esplicacion.

«La regla del derecho universal del *Lex loci contractus*, somete al armador de la *Athlon*, a las disposiciones del derecho civil positivo chileno, porque fué en Chile donde se ajustó el contrato de 16 de Mayo de 1891.

«La Convencion no ha podido modificar en este ni en ningun sentido, los principios universales i elementales de derecho que gobiernan la solucion de la dificultad.

«No tiene, en consecuencia, la mas remota importancia aquel pacto, ni el hecho de la creacion de este Tribunal, para pretender modificadas o atenuadas las leyes del pais, o sea, las leyes del contrato de 16 de Mayo de 1891.

Combatiendo en otros casos análogos, esta misma arbitraria e incorrecta extension de la competencia que se atribuyera el Tribunal para decidir de reclamaciones fundadas en *contratos ajustados en Chile*, tuvimos ocasion de invocar el testo de documentos públicos recientes, emanados de la Cancilleria norte americana, i el testo de fallos dictados por los Tribunales Arbitrales de 1884-1887.

Inútiles, absolutamente estériles fueron todos nuestros esfuerzos.

La mayoría del Tribunal siguió fallando imperturbablemente todas las reclamaciones emanadas de contratos de fletamentos ajustados en Chile i condenando al Gobierno de este país, a título de infracción de esos contratos, en considerables sumas de indemnizaciones i perjuicios.

Por esto es que tiene una importancia mui considerable la teoría que ostenta el voto del honorable árbitro británico en esta reclamación de Brooking, Comber i Ca.

Reacciona abierta i redondamente el señor árbitro contra la tesis que sostuvo, en unión del honorable Presidente del Tribunal, en los fallos de las reclamaciones recordadas.

Reconoce hoi, *que el Tribunal es incompetente*, a pesar de la Convención del 93, para fallar reclamos emanados *de contratos* o acerca de los cuales ha intervenido un pacto entre los memorialistas i el Gobierno reclamado.

No admite el señor árbitro que Brooking, Comber i Ca. tengan derecho para perseguir el pago de las requisiciones de sus mulas porque, a su juicio, ellas dejeneraron, perdieron su carácter, por el hecho de haber intervenido *un contrato* de flete de esos animales, ajustado en Chile i sometido, por lo tanto, a las autoridades i leyes del país.

Opina, por fin, el honorable árbitro, que vayan los reclamantes a pedir a la justicia ordinaria de Chile la indemnización que se les debe.

Nosotros aplaudimos la entereza i elevación de espíritu de que da testimonio esta abjuración de errores sustentados con tanta persistencia en casos numerosos i graves.

Entre tanto, el relativo acuerdo que a última hora se ha venido a producir entre las opiniones del honorable árbitro británico i la del infrascrito sobre un interesante punto de doctrina, no abarcan por desgracia, todo el conjunto del problema sometido al fallo del Tribunal.

II

Algo semejante pasa con las opiniones del honorable Presidente del Tribunal.

Querría este señor árbitro que la reclamación se desechara fundándose, única i exclusivamente, en que *Brooking, Comber i Compañía* no han probado su dominio sobre las especies en litigio.

Pero, admite también el honorable Presidente, primero, la efectividad de la requisición violenta de las mulas que considera suficientemente establecida en autos i, en seguida, la personería de los memorialistas i su perfecta habilidad para interponer su demanda.

Fuera inútil repetir que el concepto de este señor árbitro en orden a la falta de prueba del dominio de *Brooking, Comber i Compañía* sobre las especies que reclama, es compartido por el infrascrito.

Pero, nos encontramos en un radical disenso sobre el aspecto fundamental i previo que ofrece el caso en exámen.

Este disenso no es de forma, de aquellas cuya manifestación hubiera podido omitirse.

Afecta nuestra divergencia de opiniones, a puntos muy esenciales de doctrina.

Se ha querido precisamente rehuir o escusar estas soluciones de principios, por no establecer precedentes que pudieran invocarse más tarde en casos análogos.

El infrascrito no comprende de la misma manera la misión de estos tribunales internacionales.

Piensa, por el contrario, que el mejor servicio que esta clase de comisiones están llamadas a prestar, es establecer una jurisprudencia que fije el alcance que, en su concepto, deba atribuirse a los principios del Derecho Internacional teórico i las aplicaciones que esas doctrinas hayan tenido en el Derecho Público positivo moderno.

La fijación de estas doctrinas, el establecimiento de estos precedentes, constituye, por lo demás, una preciosa arma de defensa del

derecho contra la fuerza, que no puede ser abandonada; que, a la inversa, debe ser utilizada por los pueblos débiles.

Para dejar establecidos estos precedentes, hemos insistido en que se resuelva la cuestion prévia que hai envuelta en este caso.

Es regla de derecho i de jurisprudencia internacional que la neutralidad se viola por cualquier servicio o cooperacion prestada a uno u otro de los paises o bandos comprometidos en una lucha.

Tenemos documentalmente comprobado en nuestro caso, que *Brooking, Comber i C.ª*, por intermedio de su mandatario don Fermin Hernández, alquilaron a las autoridades locales dependientes del Gobierno de Santiago, en 27 de Febrero de 1891, los mismos animales que ahora se pretenden requisicionados.

Este hecho, aisladamente considerado, importa a todas luces un auxilio, una cooperacion directa i eficaz prestada por un neutral a uno de los bandos contendientes en la guerra civil de 1891.

Tratándose de una campaña que tenia por teatro un desierto, no seria razonable poner en duda que valia tanto suministrar elementos de movilidad i de trasporte a uno cualquiera de los combatientes, como proveerlos de armas, de cañones o de municiones de guerra.

Es evidente que si las tropas de los coroneles Gana i Arrate, no hubieran encontrado en Arica elementos de trasporte para atravesar el desierto, no habrian llegado, o habrian llegado inoportunamente, al combate de Pozo Almonte.

Fué, pues, *directo*, eficacísimo, el auxilio que los reclamantes prestaran a uno de los contendientes en contra del otro.

Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos de este Tribunal, siguiendo las huellas trazadas en el artículo 1.º de la Convencion Chileno-americana de 7 de Agosto de 1892, las que, a su turno, habian sido tomadas del Tratado entre Francia i los Estados Unidos de 15 de Enero de 1881; estableció en su artículo 4.º que los reclamantes, a fin de habilitar su derecho para ser oidos, estaban obligados a esponer si habian tomado parte, directa o indirectamente, en la guerra civil de 1891, si habian estado, durante ese tiempo, al servicio de cualquiera de los combatientes o habian recibido sueldos de alguno de ellos.

Si, pues, cualquiera de estas circunstancias impedian el acceso a este Tribunal i por eso se exijia la declaracion previa de los memorialistas, en órden a ellas; es indiscutible que una vez comprobadas en autos, por cualquier medio fehaciente, quedan los reclamantes inhabilitados para ir adelante en sus jestioness i el Tribunal destituido de competencia para resolverlas.

En otros términos, el neutral que ausilia a un combatiente en daño de otro, *no es neutral*, no conserva los fueros de su estatuto personal para reclamar la proteccion debida a su nacionalidad; no tiene, en suma, personería para ocurrir a un Tribunal de oríjen diplomático.

Estos principios acaban de encontrar una consagracion reciente i por demas autorizada en el fallo núm. 19 espedido por la Comision Chilena-americana de Washington.

La casa de *William R. Grace i Cia.* habia deducido seis reclamaciones distintas ante aquel Tribunal contra el Gobierno de Chile.

El ajente de este Gobierno, sin entrar al fondo de esos reclamos opuso contra todos ellos la escepcion de falta de *status* de los memorialistas, por cuanto habian prestado ayuda i auxilio al Perú durante la guerra de este pais con Chile, auxilio que consistia en haber sido proveedores de la Escuadra, en haber procurado los hilos i baterías eléctricas destinadas a la reserva del ejército peruano, en haber adelantado al señor Bogardus, ajente del Perú en Estados Unidos, la suma de diez mil novecientos noventa i cuatro pesos para compra de armas i en análogos anticipos de fondos hechos en San Francisco al cónsul de aquella misma nacionalidad.

Fué en vano que los reclamantes denegaran o escusaran la prestacion de estos servicios alegando que sus relaciones comerciales con el Gobierno del Perú traian oríjen de una fecha mui anterior a la declaracion de guerra; que en su carácter de comerciantes neutrales tenian perfecto derecho de vender sus mercaderías a ese Gobierno como lo habian hecho con el de Chile despues de la ocupacion de Lima; que los artículos suministrados por ellos al Gobierno del Perú no eran contrabando de guerra i que, aun cuando lo hubieran sido, la única pena que habria podido imponérseles habria

sido la captura de esas especies verificada *in tránsito* por las escuadras de la República.

La alta Comision de Washington desestimó todas estas alegaciones.

En concepto de ese Tribunal, el principio de la ayuda o auxilio prestado a los beligerantes, creacion del derecho internacional moderno, descansa en la idea de que el acceso a las Cortes de Arbitraje, es un privilegio puramente convencional, ya que incumbe a las partes contratantes decidir cuáles son las categorías de personas que tienen *status* para ocurrir ante esa jurisdiccion escepcional.

No se trata, en consecuencia, de hacer un delito de estas prestaciones de servicios hechos por un neutral a los beligerantes, sino de interpretar el espíritu de los pactos que crean estos arbitrajes, i de los cuales se desprende que el Estado que les concerta, no ha podido abrigar la intencion de favorecer con los privilegios de una jurisdiccion escepcional a las personas que han prestado auxilio a sus enemigos. Estas restricciones no deben, pues, mirarse como un castigo impuesto a las personas que violen las prácticas internacionales sino como el rechazo de un favor, de un privilegio a quienes, por medio de actos voluntarios, han tendido a favorecer a un contendiente contra el otro.

Como fuente de esta doctrina, la Comision Arbitral de Washington cita la lei americana de 3 de Mayo de 1893, el tratado entre Francia i los Estados Unidos de 15 de Enero de 1881 i el artículo 1.º de la convencion de este último país con Chile de 7 de Agosto de 1892.

Ahora, como la calificacion de este *auxilio* o *ayuda* prestada por neutrales a los beligerantes, ha sido estendida por muchos jurisconsultos o publicistas a servicios verdaderamente nimios, inconscientes i accidentales; quiso la Comision de Washington dejar establecidas reglas precisas acerca del carácter i alcance que debia tener el auxilio prestado a un beligerante para que pueda constituir una *exceptio pacti*, es decir, un motivo de pérdida de estatuto personal de los reclamantes.

Tres son las circunstancias que, en concepto de aquella Comision, pueden constituir la *exceptio pacti*.

La primera consiste en haberse prestado auxilio a un belijerante con violacion de las leyes comunes del Derecho Internacional.

Revisten, despues, idéntico carácter los servicios hechos a un belijerante siempre que ellos, dada su naturaleza, importasen un delito de alta traicion en el supuesto de que se hubiesen prestado por el súbdito o ciudadano de un país al enemigo de su patria.

La última regla que distingue i acaba de precisar el carácter de los actos que deben considerarse como *ayuda* o *auxilio* de neutrales a un belijerante; es que tienen tambien este alcance i esta trascendencia los suministros de artículos de contrabando de guerra o sujetos a condenacion en caso de captura.

I bien, es manifesto que en el caso en análisis concurren, por lo ménos, dos de las causales enunciadas como habilitantes de la *exceptio pacti*, de manera que a *doble título* debe ser considerado el alquiler de las mulas, hecho por el mandatario de la sociedad reclamante, como auxilio i ayuda prestada por un neutral al bando en cuyo obsequio se ajustara ese contrato.

No podria dudarse, desde luego, que se haria reo de alta traicion un chileno que, en el caso de guerra de este país con una nacion estraña, le suministrase, alquilados o vendidos, elementos de movilidad para el transporte de sus tropas.

Luego, segun la tésis que venimos esponiendo, lo que seria delito de alta traicion en el caso contemplado, tiene que ser un *auxilio* o *ayuda* inhabilitante de los fueros de un neutral para ocurrir a la jurisdiccion de estos Tribunales de privilejio, creados por convenciones que impiden su acceso a quienes, directa o indirectamente, hubieren tomado participacion en la contienda, o recibido remuneraciones pecuniarias de uno de los belijerantes.

Incide todavia, en este caso, la segunda circunstancia característica de estos actos prohibidos a un neutral.

Se trata del suministro de artículos de contrabando de guerra, como son los elementos principales, indispensables, para la movilizacion de un cuerpo de ejército que operaba en un desierto i que, sin esos recursos, habria quedado en forzada inaccion.

Es, por lo tanto, rigurosamente aplicable al caso que nos ocupa, la doctrina de Derecho Internacional que aplica e ilustra el fallo de

la Comision de Washington, i este Tribunal se hallaba tanto mas obligado a seguirla, cuanto que el artículo 5.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, que es su estatuto orgánico, le señala precisamente, como fuente de sus fallos, la jurisprudencia establecida por los tribunales análogos modernos de mayor autoridad i prestigio.

Se comprenderia, por lo demas, que mis honorables colegas hubieran hecho caso omiso de estas enseñanzas, se hubiesen separado de la jurisprudencia que estaban llamados a seguir, si para justificar sus opiniones contrarias a la doctrina i a la jurisprudencia moderna, hubiesen levantado otra teoria opuesta con el apoyo de razones mas o ménos plausibles.

Son mui pocos de esas razones los votos de mis honorables colegas.

El honorable árbitro británico se limita a decir que los reclamantes no han violado la neutralidad en sus contratos con la Intendencia de Tacna, porque «ignoraban las apropiaciones que se efectuaron el 16 i 17 de Febrero; pero ya consumadas, consintieron en recibir el precio del alquiler, sin duda, con el propósito de disminuir sus pérdidas. El poder con que autorizaron al señor Hernández para alquilar sus mulas, fué otorgado el 27 de Febrero de 1891, por consiguiente con posterioridad a la apropiacion de los animales i no podía tener referencia a ellos.»

En estas pocas palabras se encierran distintos conceptos, contraproducentes los unos, difíciles de comprender los restantes.

Si efectivamente hubieren ignorado los memorialistas, al tiempo de otorgar el mandato a Hernández, que sus mulas habian sido requisicionadas por las autoridades militares diez dias antes de esa fecha; es mucho mas evidente todavia su propósito de comerciar con esos animales aun a riesgo de violar la neutralidad.

Ahora, que por cuanto el poder para alquilar las mulas lleve fecha de 27 de Febrero i sea, por lo tanto, posterior a la pretendida requisicion, no puede tener *referencia a ellas*, es algo que francamente no comprendemos. No hemos podido, en realidad, darnos cuenta del pensamiento de nuestro honorable colega, ni explicar-

nos, en manera alguna, cómo un poder para alquilar o fletar ciertos animales, «no pueda tener referencia a ellos.»

A su turno, el honorable presidente del Tribunal, colocándose en un punto de mira completamente opuesto al de su colega británico, piensa que «no puede aceptar el que los señores Brooking, Comber i i C.^a hubieren perdido su calidad de neutrales por haber recibido, por el intermedio de Hernández, el precio de alquiler de cierto número de mulas arrendadas al Gobierno del Presidente Balmaceda por el mismo Hernández, siendo que éstas habian sido requisicionadas con antelacion; no hubo de parte de los reclamantes un acto *voluntario* i consciente de la violacion de la neutralidad—al regularizar un hecho realizado por el Gobierno de derecho en aquella época.»

De manera que para el honorable Presidente, hai tres circunstancias que le impiden aceptar la violacion de neutralidad que envuelve el contrato de alquiler de las mulas.

La primera de esas circunstancias que el honorable Presidente subraya en su voto, es la de que el contrato lo hubiera hecho don Fermin Hernández i no *Brooking, Comber i C.^a*, i que fuese tambien Hernández quien recibiera el precio de la locacion.

El infrascrito no entiende tampoco este primer fundamento de la opinion de su honorable colega, ya que no sabia qué diferencia pudiera existir, legal o moralmente apreciada aquella circunstancia, entre un contrato ajustado i suscrito por Pedro i ese mismo contrato, ajustado i suscrito por el mandatario especial de Pedro.

Insiste despues el voto del honorable presidente en recalcar que el alquiler de las mulas no fué sino *la regularización* de un acto que afectaba la responsabilidad *del Gobierno de derecho* que existia por aquella época en el pais.

Parece desprenderse de este nuevo concepto, que el honorable presidente absuelve de responsabilidad a los neutrales cuando el auxilio o apoyo que prestan a uno de los belijerantes en guerra intestina, resulta en beneficio del *Gobierno de derecho* del pais.

La doctrina, como se ve, no puede ser mas peligrosa ni mas subversiva de los deberes de la neutralidad.

Si quedara al arbitrio de los gobiernos o de los individuos terceros en una contienda, aplicar su criterio para resolver cuál de los bandos en lucha representa *la legalidad i el derecho* i si les fuera lícito intervenir i apoyar al que, en su concepto tuviera estos caracteres, habríamos autorizado el trastorno mas profundo en las nociones fundamentales de la neutralidad.

Estas ideas, por fortuna, no se han abierto paso hasta hoi en el Derecho Internacional teórico ni en las prácticas de las naciones.

Es, por la inversa, el mas elemental de los deberes de la neutralidad, abstenerse de apreciar la justicia o injusticia de una guerra i abstenerse, sobre todo, de llevar auxilio, directo o indirecto, a cualquiera de los beligerantes.

Por lo demas, aquello de afirmar, como lo afirma el honorable presidente en el voto dictado en esta causa, que el alquiler de las mulas de *Brooking, Comber i C.^a*, no fué sino *la regularizacion* de un acto realizado por el Gobierno de derecho del pais, es absolutamente incompatible i contradictorio con el fondo de las opiniones que ha mantenido en esta causa.

Opina, en efecto, el honorable presidente, i éste es el sentido de su voto, que la reclamacion *debe ser rechazada*, porque los memorialistas *no han probado su dominio* sobre los animales que se dicen requisicionados por las autoridades militares de Tacna.

Si, pues, no hai prueba *del dominio* de *Brooking Comber i C.* sobre las treinta i nueve mulas en litijio, no puede tampoco haber prueba del hecho mismo de la requisicion.

Esto es de sano criterio, ya que seria absurdo suponer que existiese *una requisicion* sin que exista una persona, natural o jurídica, cuyos bienes hayan sido *requisicionados*.

No es, por lo tanto, fácil de comprender este doble i contradictorio aserto del voto que analizamos.

Si *Brooking, Comber i C.^a* no han probado dominio sobre las mulas que reclaman, es porque no ha habido *tal requisicion*, a lo ménos, establecida en autos; i si no ha habido *requisicion*, no se concibe que el alquiler de las mulas fuese hecho *para regularizar* un acto que no ha existido.

El último de los conceptos que emite el voto en análisis, no es ménos equívoco que los anteriores.

No fué un acto *voluntario i consciente* de los reclamantes, se arguye, el alquiler de sus mulas. Ese contrato fué impuesto por las circunstancias, por la presion de los acontecimientos i de la fuerza.

Esta nueva aseveracion es de todo punto improbada.

Aparece de las declaraciones prestadas por el ex-intendente de Tacna, don Guillermo Blest Gana, i por el coronel don Emilio Gana; que no se vieron jamas en el caso de hacer *requisiciones* violentas o forzadas de estos elementos de trasporte, porque disponiendo, como dispuso en todo momento el Gobierno de Santiago, del dinero suficiente para pagar estos servicios i para pagarlos con largueza, le sobraron en toda ocasion ofertas de fletes por animales de silla o de carga, que habrian bastado para movilizar un número triple o cuádruple al de las tropas de que disponian en aquellos momentos.

Hai, sobre todo, un hecho que bastaria por sí solo para desautorizar en absoluto esta escusa de la inconsciencia o de la falta de libertad de los reclamantes para celebrar estos contratos.

Se sabe que Hernández no procedió a ajustar esos convenios sino despues que se encontró autorizado *por mandato escrito* de los memorialistas, mandato que le fué conferido en 27 de Febrero i ratificado despues por instrumento público otorgado en Tacna.

Esta circunstancia escluye, desde luego, la escusa de inconsciencia i demuestra en seguida, mui a las claras, que el verdadero propósito de los reclamantes fué lucrar con sus mulas, sacar el partido que ofrecian los acontecimientos, vendiéndolas o fletándolas por precios elevados.

Está mui léjos de ser clara, por lo demas, la doctrina que requiere, para fijar la responsabilidad de los neutrales en esta clase de actos, el concurso de una *voluntad espontánea*.

Juzgando por analogías, ya que se trata de una tésis nueva, podria equipararse el caso que estudiamos con el ejercicio del derecho de *angaria*, tan de antiguo reconocido por buen número de publicistas i apoyado en los usos de algunas naciones.

La *angaria* autorizaba al soberano de un pais para apoderarse

de todas las embarcaciones ancladas en sus puertos i hacerlas servir a las necesidades militares de la nacion, mediante *al pago de un flete* determinado comercialmente.

Eran monstruosas las aplicaciones de este derecho i, como dice Hautefeuille:

«El buque sujeto a la *angaria* presta al soberano que le ocupa un servicio material, trasporta los objetos de los cuales se le carga. Pero para prestar este servicio, sufre daños mui graves: el viaje que habia comenzado se frustra, la carga que traia es arrojada a tierra, los compromisos del armador no se cumplen, el negocio que tenia entre manos i el conjunto de los viajes hechos para realizarle, fracasan. Mas todavia, *por el hecho de trasportar tropas i municiones de guerra por cuenta de un belijerante*, EL NEUTRAL PIERDE SU CARÁCTER i se espone a ser atacado i capturado por el adversario. Si es hecho prisionero, queda sometido a la confiscacion *por que no es neutral sino aliado*, súbdito de un belijerante *al servicio del cual se encuentra, forzadamente, sin duda, pero de una manera positiva i absoluta*».

«El belijerante que ha requerido la *angaria*, paga al armador neutral el flete de su carga, pero nada mas. Las pérdidas impuestas por el ejercicio de este derecho de regalía no le afectan. El naufragio, la captura bélica, son considerados casos fortuitos, de los que el neutral no tiene derecho de quejarse. Es cierto que, en compensacion, el capitan del buque neutral queda sometido a todas las consecuencias de la piratería *si no cumple los deberes que se le han impuesto por la violencia*».

No discutimos, por cierto, la legitimidad, hoi mui controvertida i denegada, del derecho de *angaria*.

Entra solo en nuestro propósito manifestar, para los efectos de la teoría que venimos esponiendo, que no es indispensable que concurra *la voluntad espontánea* del neutral que auxilia a un belijerante, para que ese auxilio le haga perder los privilegios de su estatuto personal. Puede haber prestado ese apoyo cediendo a una presion moral i a un acto de violencia material, como acontece en el caso de la *angaria*, pero no por ello el acto, considerado en sí mismo, se desnaturaliza.

Por el hecho de que un neutral trasporte tropas i municiones de guerra por cuenta de un belijerante, pierde su carácter, se espone a ser atacado i capturado por el adversario, deja de ser neutral para convertirse en aliado del belijerante o en súbdito del Gobierno a quien ausilia.

Esto es lo que enseña Hautefeuille, añadiendo todavía que estos resultados no se alteran por el hecho de ser *forzado i violento* el auxilio que el neutral preste a un belijerante.

Pero, volviendo de lo abstracto a lo concreto, de la hipótesis a la realidad; creemos dejar establecido de antemano que no hai necesidad de aplicar estos rigores, estas violencias de doctrina, al caso que nos ocupa.

Brooking, Comber i Cia. alquilaron sus mulas a la Intendencia de Tacna, mui voluntaria i mui deliberadamente. Así lo prueba la autorizacion especial que dieron a Fermin Hernández para este objeto.

Creyeron acaso los reclamantes que mediante a este recurso se libertaban de una requisicion formal o evitaban el peligro de que se les desconociera mas tarde su dominio sobre esos animales.

Pudo entrar tambien en sus cálculos la conveniencia de asegurar un beneficio, un flete bastante elevado que representaría el interes del capital invertido en las mulas, ya que las circunstancias anormales del pais no permitian utilizarlas de otra manera.

No ha entrado jamas en el ánimo del infrascrito sostener que estos actos importen un delito cometido por los neutrales que los ejecutan corriendo todos los riesgos i eventualidades a que están afectos.

Pero es sí de la mas notoria evidencia que los hechos de nuestro análisis, privan a sus autores de los privilegios de su estatuto personal.

A mayor abundamiento, a doble título, deben ser rigurosamente aplicadas estas doctrinas al caso que contemplamos, puesto que existe una estipulacion, un pacto espreso i solemne, que prohíbe el acceso a este Tribunal a todo individuo que directa o indirectamente hubiere tomado participacion en la guerra civil de 1891.

Santiago, 14 de Abril de 1896.—LUIS ALDÚNATE.





Reclamacion N.º 50

DONALD MAC. QUEEN

MEMORIAL

Yo Donald Mac. Queen, súbdito británico, nacido en Lochaber en el condado de Inverness en esa parte de las Islas Británicas llamada Escocia, el día 19 de Abril de 1857 i residente actualmente en la provincia de Tarapacá en la República de Chile, tenedor de libros del Banco de Tarapacá i Lóndres, en la ciudad de Iquique, en la citada provincia de Tarapacá, juro i declaro como sigue:

1 Que estaba presente en la antedicha ciudad de Iquique el 19 de Febrero último i me acuerdo de los sucesos de ese día, los cuales, segun mis recuerdos i creencia, fueron como sigue: en la fecha indicada Chile estaba en estado de guerra civil i la mencionada ciudad de Iquique estaba ocupada por las tropas del partido revolucionario, o, como se las llama, del partido constitucional, los que tenian tambien en la bahía de Iquique la flota de buques de guerra siguientes: *Blanco Encalada* (buque de la insignia) *Esmeralda*, *Ablao* i *O'Higgins*, *Huáscar* i *Magallanes*. Un poco antes de las seis de la mañana del día 19 de Febrero, las tropas del Gobierno, o, como se las llama, las tropas del partido presidencial, en número de ménos de 300 hombres entraron a la dicha ciudad de Iquique i avanzaron hasta la plaza principal, i allí tuvo lugar una batalla

sangrienta entre las tropas de los ántes mencionados partidos, i poco despues la citada flota de buques abrió el fuego sobre la dicha ciudad de Iquique i continuó bombardeando la ciudad con bala i metralla hasta las cuatro i media de la tarde, hora en que se ajustó una tregua entre las partes combatientes. Se hallaban presentes en la bahía de Iquique i testigos del hecho los buques de guerra de Su Majestad *Warspite* i *Pheasant*. A eso de las dos i media de dicho dia de la batalla i bombardeo i a consecuencia de ello, se declaró simultáneamente en varios lugares un incendio que causó la total destruccion de varias grandes manzanas de edificios i la destruccion parcial i daños de otras. Las propiedades así destruidas pertenecian casi en su totalidad a súbditos extranjeros, i de éstos, la mayor parte súbditos de Su Majestad. Habiendo comenzando el incendio de la manera relatada antériormente, tomó rápidamente cuerpo i en poco tiempo alcanzó a la manzana de edificios en que estaba el hotel en que yo ocupaba un departamento (segun se declara mas adelante). El incendio tuvo lugar en medio de la batalla i de los combatientes luchando por posesionarse del sitio devastado por el fuego. El incendio no pudo contenerse ni pudo intentarse salvar cosa alguna a causa de que el combate tenia lugar en las calles inmediatas vecinas.

2 Que al tiempo de comenzar el combate i bombardeo de que se ha hecho mencion, ocupaba yo un departamento en el Hotel Ingles, situado en la esquina de las calles de Luis Uribe i Bolívar en Iquique i poseia los artículos i bienes muebles descritos detalladamente en el inventario o escrito que se acompaña marcado con la letra A i que se encontraban todos esos artículos i bienes muebles en mi citado departamento al comenzar la mencionada batalla i bombardeo.

3 Que inmediatamente despues de dicha batalla i bombardeo i concluido el incendio visité el local de dicho hotel i encontré que el edificio con su contenido habia sido totalmente destruido por el citado incendio.

4 Que a causa del incendio que fué consecuencia de la batalla i bombardeo ya citado, declaro que perdí todos los artículos i bienes muebles detalladamente descritos en el inventario que se acompaña

marcado con la letra A, i que las cantidades colocadas al frente de los respectivos artículos i bienes muebles en dicho inventario son la estimacion verdadera de sus respectivos valores.

5 Que por las razones espuestas he sufrido pérdidas que suman *trescientas treinta libras esterlinas cuatro chelines* (£ 350—4—0).

6 Que no he tomado parte directa ni indirectamente en dicha guerra civil de Chile.

7 Que no he recibido compensacion alguna por mis citadas pérdidas de ninguna de la partes combatientes en dicha guerra civil.

8 Que no he transferido mi antedicho reclamo en parte alguna de él.

(Firmado).—D. MAC. QUEEN.

Jurada en Iquique, provincia de Tarapacá. hoi catorce de Octubre de 1891.

Ante mf.

(Firmado).—H. W. MORRISON,
cónsul de S. M. B.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile contestando la reclamacion número 50 elevada por don Donald Mac. Queen, tiene el honor de esponer lo siguiente:

1 El memorial no ha sido presentado en la forma exigida por el Reglamento. No aparece firmado por el reclamante; ni se espresa en él si estuvo al servicio o percibió sueldo de alguno de los beligerantes; ni espone si ha sido presentado el reclamo anteriormente ante otro Tribunal; ni por último contiene el juramento de ser exactos los hechos narrados. Estas informalidades hacen inaceptable el memorial, i dan mérito bastante para desechar la reclamacion, Pido a V. E. que así se sirva resolverlo.

2 No se ha cuidado el reclamante de comprobar el carácter de

súbdito británico que se atribuye, carácter que por mi parte le niego. Miétras esa comprobacion no venga en la forma usual, V. E. habrá de declararse incompetente para conocer, cosa que tambien suplico respetuosamente.

3 Trata de acreditar el reclamante que el 19 de Febrero de 1891 a consecuencia del combate que tuvo lugar en Iquique, se incendió el hotel en que vivia, consumiendo el fuego su ropa i objetos de su uso, cuyo valor estima en £ 330-4-0. Invoca para este objeto el testimonio de don Guillermo Patterson Robertson i de don Eujenio Köhler, cuyas declaraciones aparecen tomadas por el cónsul británico señor Morrisson a quien nadie habia comisionado con este objeto, fuera del juicio i sin citacion de mi parte. Estas circunstancias hacen inadmisibile el testimonio de los señores Robertson i Köhler. Es probable que, contrainterrogados por mi parte, no hubieran podido mantener sus afirmaciones, puesto que es difícil que conocieran en su detalle las prendas de vestir del reclamante, i que dieran razon satisfactoria del motivo porque las valorizan a tan subido precio. Por mi parte, sé que el señor Mac. Queen ha tenido en Lima i en Iquique una situacion modesta, que no es compatible con el hecho aseverado por los testigos de que solamente en ropa tuviera invertido un valor equivalente a cerca de cinco mil pesos de nuestra moneda.

Hai, ademas, en esta prueba la particularidad de que el testigo Robertson i el cónsul británico señor Morrison, ante quien se han prestado las declaraciones, son a su vez reclamantes contra el Gobierno de Chile por un motivo análogo al invocado por el señor Mac. Queen; i, por consiguiente, tienen marcado interes en que este obtenga un fallo favorable. El señor Robertson, por lo demas, ha pagado al señor Mac. Queen la deuda que para con él habia contraído, cuando el señor Mac. Queen declaró a favor del señor Robertson en la reclamacion que este tiene presentada con el número 26 para cobrar perjuicios sufridos por idéntica causa a la alegada por aquel. Estos servicios mútuos, *facio ut facias*, han facilitado considerablemente a ámbos reclamantes la rendicion de su prueba; pero toca a V. E. valorar el mérito que ellas tengan en derecho, i que a mi juicio es absolutamente nulo.

4 El reclamante espone que perdió su valiosa guardaropa a consecuencia del incendio que produjo en Iquique la batalla que se libró en esa ciudad el día 19 de Febrero de 1891. Tratándose de una operacion de guerra perfectamente lícita i necesaria, en que no se hizo uso de armas ni medios vedados por el Derecho Internacional, las pérdidas que haya ocasionado no imponen responsabilidad de ninguna especie a los belijerantes. Tal es la doctrina comun de los tratadistas de Derecho Internacional, i siendo escusado repetir en esta contestacion las palabras de los principales de ellos que he citado contestando a reclamaciones del mismo jénero de la presente, me bastará dar sus nombres i las obras en que pueden encontrarse.

Vattel; *Derecho de Jentes*, lib. 3.º, cap. 15; Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículos 652 i 662; Fiore, *Nuevo Derecho Internacional Público*, tom. 3.º, § 1714 i siguientes.

Por estas consideraciones, suplico a V. E. que, en caso de no dar lugar a la escepcion de incompetencia, se sirva rechazar la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Para no hacer perder su tiempo a los señores árbitros, seré sumamente breve en la redaccion de la presente réplica.

1 El memorial no aparece firmado por el señor Mac Queen ni aparece en él juramento prestado por este caballero, porque la protesta exhibida con el memorial está firmada i jurada por el reclamante.

En la presente solicitud ampliaré el memorial declarando que el señor Mac Queen no estuvo en 1891 al servicio de ninguno de los belijerantes, ni recibió sueldo ni pago alguno, ni ha presentado anteriormente este reclamo a ningun otro Tribunal.

2 El señor agente de Chile pone en duda la nacionalidad britá-

nica del señor Mac Queen, i dice que miéntras no se compruebe esa circunstancia de la manera usual, V. E. habrá de declararse incompetente para conocer de este reclamo.

De esta misma esposicion se desprende que ese argumento se destruye justificando la nacionalidad británica del señor Mac Queen. Pues bien, ya que hasta ahora no hemos podido hacerlo declaramos desde luego que justificaremos esa nacionalidad en momento oportuno.

3 Impugna nuestro contradictor las declaraciones de los señores Robertson i Köhler diciendo que han sido tomadas por el cónsul ingles en Iquique, que no estaba facultado por V. E. para tomarlas; que estas declaraciones se han rendido fuera de juicio i sin citacion suya; i que no es creible que el señor Mac Queen tuviera, como lo afirman los testigos, ropa exterior avaluada en cerca de \$ 5,000 de nuestra moneda. Para dar fuerza a su argumento el señor ajente de Chile recuerda que el señor Robertson ha servido de testigo en la reclamacion del señor Mac Queen i éste en la de aquél, cosa que ha servido considerablemente al uno i al otro para preparar su prueba, pero que ésta, a su juicio, no tendrá valor alguno en concepto del Tribunal.

Repetiré aquí lo que he dicho tantas veces; esto es que las declaraciones de los señores Robertson i Köhler han sido presentadas no como prueba testimonial sino como documento relacionado con el reclamo; i que, ya que se duda de la verdad de esas declaraciones, nada es mas fácil que abrir un breve término de prueba i examinar con la minuciosidad que se quiera a los testigos ántes expresados. De este modo quedarán plenamente satisfechos los deseos del señor ajente de Chile, i podrá V. E. fallar este reclamo con perfecto conocimiento de causa.

4 Mi ilustrado contradictor sostiene que el combate i bombardeo de Iquique de 19 de Febrero de 1891, fué un acto lejítimo de guerra que no impone responsabilidad alguna al Gobierno de Chile.

El combate i bombardeo citados pudieron talvez haber sido un acto lejítimo de guerra, si se quiere admitirlo puramente para los fines de la discusion, pero siempre dejaron de serlo desde el momento en que el coronel Soto, con una terquedad inesplicable,

impidió a los bomberos de Iquique que atacaran el incendio de esa ciudad. A este respecto, i para no repetir, me refiero en todas sus partes a lo que espuse en la réplica presentada en el reclamo núm. 46 del señor Santiago N. Peake, esposicion que V. E. se ha de servir considerar reproducida en este escrito.

Por tanto, espero que V. E. se sirva aceptar en todas sus partes la presente reclamacion.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Como ajente del Gobierno de Chile, procedo a duplicar en la reclamacion número 50 presentada por el señor Donald Mac-Queen, en que cobra indemnizacion de los perjuicios que sufrió con motivo del incendio que ocurrió en Iquique el día 19 de Febrero de 1891.

1 Trata el señor ajente británico en su escrito de réplica de subsanar las deficiencias de que adolece el memorial. Para no repetir las observaciones ya largamente esplanadas en otras reclamaciones me limito a pedir a V. E. se sirva declarar que el memorial presentado es inadmisibile por no llenar las condiciones prescritas por el Reglamento.

2 El señor Mac-Queen se reserva presentar mas adelante los documentos que comprueben su nacionalidad. Creo que ha pasado ya el momento oportuno para cumplir con este deber reglamentario, pero si V. E. admitiese tales documentos, espero se servirá ordenar que me sean comunicados para examinarlos i hacer las observaciones a que dieren lugar. Miéntras tanto, el Tribunal no podrá considerarse competente para conocer de esta reclamacion; i así solicito se sirva declararlo.

3 Aunque creo inútil la comprobacion de los hechos espuestos por el reclamante, desde que en derecho es inaceptable la reclamacion, insisto en sostener la invalidez de la prueba que se rinda por

medio de testigos que a su vez sostienen reclamaciones exactamente iguales a la presente. Esos testigos no pueden considerarse como imparciales porque lo que depongan en favor del señor Mac Queen habrá de servir para el juzgamiento de su propia reclamacion. Son pues, interesados en el éxito de este juicio, que importa para ellos el éxito del suyo propio.

4 A los diversos argumentos de derecho con que el ajente que suscribe ha sostenido la irresponsabilidad del Gobierno de Chile por las pérdidas ocasionadas a los neutrales con motivo del combate de 19 de Febrero, se ha opuesto por el señor ajente británico la existencia de una supuesta orden del coronel Soto para impedir que los bomberos de Iquique apagasen el fuego que consumia algunos edificios. El hecho es inexacto i hasta inverosímil. No se comprende cómo, en medio del fragor del combate, hubieran podido los bomberos dedicarse a esta humanitaria tarea. Parece que algunos la intentaron; pero se vieron obligados a desistir a causa del peligro que corrían, i aun se hace notar en otra de las reclamaciones, que un voluntario fué muerto por las balas de los combatientes, lo que obligó a los demas a retirarse hasta que el combate hubiese cesado.

Como, por lo demas, el señor ajente británico se refiere a lo que ha espuesto en la réplica del reclamo número 46, por mi parte me refiero tambien a lo que tuve el honor de esponer en la dúplica de esa misma reclamacion.

Concluyo, pues, pidiendo al Tribunal el rechazo de la presente, si es que no se declara incompetente para conocer.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Donald Mac. Queen, súbdito británico, nacido en Lochaber, en el Condado de Ivernes, Escocia, reclama del Gobierno de Chile trescientas treinta libras esterlinas cuatro chelines (£ 330-4) por

pérdidas de bienes sufridas en el incendio acaecido en Iquique el 19 de Febrero de 1891.

El reclamante espone: que el día 19 de Febrero de 1891, se trabó en Iquique un combate entre las fuerzas congresistas de mar i tierra i las fuerzas del Gobierno de Balmaceda, i que durante la batalla bombas lanzadas de los buques de la Escuadra produjeron a eso de las dos i media de la tarde, de dicho día, un incendio que causó la total destruccion de varias manzanas de edificios, incendio que al propagarse rápidamente, alcanzó a la manzana de edificio donde estaba ubicado el Hotel Ingles, casa esquina de las calles Luis Uribe i Bolívar, donde el reclamante ocupaba un departamento, causándole la pérdida total de los artículos i bienes muebles que allí tenía, cuyo inventario detallado acompaña.

Presenta como comprobantes: una protesta del reclamante, estendida ante el cónsul británico en Iquique, el 14 de Octubre de 1891, i dos declaraciones pasadas ante el mismo cónsul, prestadas por los señores Guillermo Patterson Robertson i don Eujenio Kohler, en las que esponen ser verídicos todos los hechos expresados por el reclamante en su protesta.

El agente de Chile contesta: que el memorial presentado no se ajusta a las prescripciones del Reglamento, pues no dice el reclamante si estuvo al servicio de alguno de los partidos beligerantes, si recibió sueldo de ellos, ni si ha presentado esta reclamacion ante otro Tribunal; que los hechos narrados no han sido abonados con juramento, como lo dispone el Reglamento, i que estas omisiones dan mérito bastante para que el Tribunal deseche la reclamacion; que el reclamante no ha probado su carácter de súbdito británico i que mientras no se haga esa comprobacion en la forma usual el Tribunal debiera declararse incompetente para conocer en esta reclamacion; que carecen de valor los testimonios de los testigos presentados ante una autoridad a quien nadie habia comisionado con este objeto, fuera del juicio i sin citacion de parte; que dada la situacion modesta del reclamante es increíble tuviera en ropa un valor de cerca de cinco mil pesos de nuestra moneda; que tanto el señor Morrison, cónsul británico, como el señor Robertson, son a su vez reclamantes contra el Gobierno de Chile por un motivo análogo al invo-

cado por el señor Mac. Queen, i, en consecuencia, interesados en que éste obtenga un fallo favorable; que reconoce el reclamante que sus pérdidas fueron ocasionadas por el incendio que se produjo en Iquique, a consecuencia de la batalla i bombardeo que se efectuaron en esa ciudad el 19 de Febrero de 1891 i esos actos de guerra son perfectamente lícitos i no comprometen al Gobierno de Chile; que para no repetir las palabras de tratadistas de Derecho Internacional, ya espuestas en otras reclamaciones, análogas a la presente, se limita solamente, por tanto, a citar sus nombres i sus obras que son: Vattel, *Derecho de Jentes*, libro III, capítulo XV; Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículos 652 i 662; Fiore, *Nuevo Derecho Internacional Público*, tomo III, seccion 1,714 i siguientes; i termina pidiendo al Tribunal que en caso de no dar lugar a la escepcion de incompetencia, se sirva rechazar la reclamacion.

En la réplica i dúplica se debaten los mismos puntos de hecho i de derecho, i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios puntos de derecho i de hecho invocados por ámbas partes importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique habia sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres, mas o ménos, desembarcados de los buques de guerra se habia acuartelado en el edificio de la Aduana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de las seis de la mañana, el coronel Soto del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera imprevista, llegó a la cabeza de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los belijerantes i que la Escuadra no tardó en tomar parte lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por fuerzas balmace-

distas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el curso de la batalla se produjo un incendio en diversos edificios cercanos a la Aduana que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable, habitados por muchos extranjeros, entre los cuales se contaba el reclamante;

Considerando: que en la protesta hecha por el señor Donald Mac. Queen en 14 de Octubre de 1891, ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, declara que sus pérdidas se deben al incendio producido por el bombardeo i batalla de 18 de Febrero de 1891;

Considerando: que resulta de todo lo obrado en autos, que el incendio de una parte de la ciudad de Iquique se debió al bombardeo que efectuaron los buques de guerra chilenos, que estaban en el puerto; que este hecho se deduce no solamente de lo espuesto en el memorial i protesta por el reclamante, sino tambien de las declaraciones de los testigos presentados por el mismo reclamante i declaracion del almirante ingles Hotham, que estaba en la bahía de Iquique en aquel dia, inserta en el *Blue Book, Correspondance respecting the Revolution in Chile*, año 1892, páj. 82;

Considerando: que la escuadra chilena anclada al frente de Iquique tenia a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra; que la Escuadra tenia el derecho de proteger a sus tropas desembarcadas anteriormente en los dias precedentes i que se habia reconcentrado en los edificios de la Aduana;

Considerando: que teniendo por establecidos los hechos ya apuntados i que han sido anticipados tambien por el reclamante, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero de 1891 una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarlo no solo por un golpe de mano sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad, que el Derecho Internacional reconoce a un belijerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada pero que está

ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional sobre la lei i los usos de la guerra en la Conferencia de Bruselas en 1874*, artículo 15.—Calvo, *Derecho Internacional teórico i práctico*, edicion de 1888, tomo IV, § 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion de 1881, artículo 756, número 4.—A. J. Heffter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, § 125.—Nota de Geffcken, *Manual de Derecho de la Guerra*, del Instituto de Derecho Internacional citado por Hall, página 525. Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículo 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente, que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habría sido imposible a la Escuadra de Chile dar un aviso previo a los habitantes de Iquique puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la conferencia de Bruselas 1874, i que exime de aviso previo. (*Bluntschli, Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, artículo 554;)

Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los beligerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia procurarles la explotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique en 19 de Febrero de 1891 es una consecuencia desgraciada de actos lejítimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile que, como lo dice Vattel «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable tales son, por ejemplo, los estragos de la artilleria en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que lo sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho» —(Vattel, *Derecho de Jentes*, libro III, capítulo XV, párrafo 232. *The law of Claims against Governements. House of Representatives 42-D Congres. Report núm. 134, page 274, Washington. Governements Printing Office, año 1875.*)

Por estos fundamentos, el Tribunal, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro ingles, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 18 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Ecxmo. Tribunal en 18 de Noviembre de 1895.—Diego Armstrong, secretario.

RECLAMACION N.º 51

BLAIR I C.^a

MEMORIAL

Aníbal Rodríguez H., por los señores Blair i C.^a segun poder que se acompaña, bajo juramento, espongo:

- 1.º—Los señores John Blair, Herman Walter Lillen i Edmund Harrington, socios de la firma ántes enunciada, residian en Tarapacá a la fecha en que tuvieron lugar los sucesos a que se refiere este reclamo.
- 2.º—Son súbditos británicos.
- 3.º—Ninguno tomó parte directa o indirectamente en la guerra civil de 1891, ni sirvieron a los belijerantes o recibieron pago de ellos.
- 4.º—Ningun dinero se ha recibido a cuenta de este reclamo, ni se ha presentado ante otro Tribunal.
- 5.º—La cantidad que se reclama es la siguiente:

Valor de setenta i una mulas, a razon de veinte libras esterlinas, tres chelines, cuatro peniques cada una £ 1,431 16 8

Dos caballos, a dieciocho libras, seis chelines, ocho peniques cada uno 36 13 4

Intereses de estas cantidades en cuatro años al seis por ciento ,	352 88
Suma en todo.	<u>£ 1,820-18-8</u>

Esta cantidad está calculada para un precio de doscientos veinte pesos por cada mula, a un cambio de veintidos peniques por peso, i doscientos pesos por cada caballo, al mismo cambio.

De los documentos acompañados consta que a Blair i Ca., le fueron tomadas setenta i una mulas i dos caballos, a principios de 1891, a nombre del Supremo Gobierno, por orden de las autoridades militares que mandaban las fuerzas del ejército que mantenía en Tacna i Arica el señor don José Manuel Balmaceda i para que movilizaran dichas fuerzas. Aquellos documentos se hallan, además, suscritos por los jefes que mandaban dicha parte del ejército i por las autoridades civiles que representaban en esa porción del territorio nacional, la autoridad del Presidente de la República.

Este reclamo se halla garantido por la Constitución Política de Estado, artículos 12, número 5.º, i, siendo súbditos de Su Majestad Británica los miembros de la firma social Blair i Compañía, están especialmente amparados por las seguridades que les acuerdan los artículos 11 i 17 del Tratado de Amistad, Comercio i Navegación, de 4 de Octubre de 1854; sin que la circunstancia de haber sido derrocado el Gobierno del señor Balmaceda haga variar las responsabilidades del Gobierno de Chile ni la naturaleza o condición de este reclamo, ya que la permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio del Derecho Internacional universalmente reconocido.

ANÍBAL RODRÍGUEZ.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Por los señores *Blair i C.^a* don Aníbal Rodríguez H. demanda £ 1,820-18-8, comprendiéndose en esta suma £ 352-8-8 por intereses, valor atribuido a 71 mulas i 2 caballos que se dicen tomados a aquellos señores por orden de las autoridades de Tacna i Arica, a principios de 1891.

Pocas palabras tengo que decir en contestacion a esta reclamacion, jemela de la número 49 precedente, i tanto o mas que ésta, defectuosa en la forma e injustificable en el fondo. Ni el memorial se ajusta a las prescripciones reglamentarias, ni la personeria del mandatario es lejitima, ni la efectividad de los hechos está acreditada absolutamente, apareciendo mas bien su inexactitud de los documentos mismos presentados.

Por esto, i reproduciendo lo espuesto por mi parte en la contestacion a la reclamacion citada, número 49, en cuanto ello sea aplicable a la presente, me limito aquí a pedir se sirva V. E. no admitir la reclamacion o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Anibal Rodriguez H. por los señores *Blair i C.^a* replicando al señor agente de Chile, solicito de V. E. se sirva si lo creyere de justicia, resolver como lo tengo pedido en la demanda, por las mismas consideraciones espuestas en la reclamacion de los señores Brooking, Comber i C.^a, número 49, análoga a la presente.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

La réplica se limita a invocar las consideraciones espuestas en la reclamacion de los señores Brooking, Comber i C.^a, número 49, análoga a la presente.

No esperaba esto por mi parte, despues de un memorial excepcionalmente incorrecto i de una contestacion acaso demasiado terminante, en la cual procuré provocar alguna explicacion de parte del reclamante. Todo resultó inútil, no sabiéndose siquiera qué lugar corresponde en esta reclamacion, hecha a nombre de los señores *Blair i C.^a*, a la sociedad salitrera limitada *San Sebastian*, que figura en el poder anexo i no en la consabida protesta del señor Hernández.

En consecuencia i reproduciendo tambien lo espuesto i alegado por mi parte en la citada reclamacion número 49, suplico a V. E. se sirva negar lugar a la presente, por ser absolutamente inadmisibile en su forma e inaceptable en el fondo.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Anfbal Rodriguez H. por los señores *Blair i C.^a* reclama del Gobierno de Chile £ 1,820-18-8, capital e intereses por animales tomados.

El memorialista espone que de los documentos acompañados consta que a *Blair i C.^a* le fueron tomadas 71 mulas i 2 caballos a

principios de 1891, a nombre del Supremo Gobierno por órden de las autoridades militares que mandaban las fuerzas del ejército que mantenía en Tacna i Arica el señor Balmaceda; que dichos documentos se hallan suscritos por los jefes que mandaban dichas fuerzas i por las autoridades civiles, que representaban en esa parte del territorio nacional al Presidente de la República; que este reclamo se halla garantido por la Constitucion Política del Estado, artículo 12, número 5.º, i, siendo súbditos de S. M. B. los miembros de la firma social *Blair i C.ª*, estan especialmente amparados por las seguridades que les acuerdan los artículos 11 i 17 del Tratado de Amistad, Comercio i Navegacion, de 4 de Octubre de 1854, sin que la circunstancia de haber sido derrocado el Gobierno del señor Balmaceda haga variar las responsabilidades del Gobierno de Chile ni la naturaleza o condicion de este reclamo, ya que la permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio del Derecho Internacional universalmente reconocido; que las espresadas mulas importaban a razon de veinte libras esterlinas, tres chelines, cuatro peniques (£ 20-3-4) cada una, ciento cuarenta i tres libras esterlinas, dieciseis chelines ocho peniques (£ 143-16-8); que los dos caballos valian treinta i seis libras esterlinas, trece chelines, cuatro peniques (£ 36-13-4); i que el interes de las dos cantidades devengadas en cuatro años al tipo de 6% anuales, importan trescientas cincuenta i dos libras esterlinas, dieciocho chelines 8 peniques (£ 352-18-8), lo que da un total de un mil ochocientos veinte libras esterlinas, dieciocho chelines, ocho peniques (£ 1,820-18-8), cantidad que se reclama del Gobierno de Chile.

Se acompañan varios documentos protocolizados en la notaría de Tacna en 16 de Abril de 1891; protesta de don Fermin Hernández, i poder conferido al memorialista.

El agente de Chile, contestando, dice que siendo esta reclamacion jemela de la número 49, i tanto o mas que ésta, defectuosa en la forma e injustificable en el fondo, reproduce lo espuesto en la contestacion a la reclamacion citada en cuanto ello sea aplicable a la presente i se limita a pedir que el Tribunal no admita la actual demanda o la deseche en todas sus partes.

En la réplica i dúplica no se agrega ninguna otra alegacion o argumento, acompañándose a la primera dos certificados espedidos por el encargado de negocios de S. M. B., que afirma que los señores Harrington i John Blair son súbditos británicos.

La causa se recibió a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que los reclamantes Blair i C.^a no han probado suficientemente ni que las setenta i una mulas i dos caballos que ellos pretenden les fueron tomados a principios de 1891 de orden de las autoridades gubernamentales eran de su propiedad esclusiva, ni que esta pretendida apropiacion fuera una requisicion militar; que el único título invocado por los reclamantes para justificar su dominio sobre los espresados animales es una declaracion de don Fermin Hernández, propietario de la Hacienda de Faltape, valle de Camarones, en que dichos animales se encontraban, en aquella época, a talaje, con muchos otros; que la simple afirmacion de un tercero no basta para probar el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesion de los animales i tiene interes en descargar su propia responsabilidad de depositario, i que su declaracion, si fuera admitida, daria por resultado el favorecer al pretendido propietario con una jurisdiccion escepcional; que aun cuando los espresados animales hubieran pertenecido a los reclamantes, éstos no han comprobado que estaban entre los que sirvieron para la movilizacion de las fuerzas i que causaron los recibos exhibidos por Hernández i firmados por Sofanor Parra, Arteaga Alemparte, David Puch, Luis Fuentes i el alférez Porta;

Considerando: que los reclamantes apesar de haber solicitado un término de prueba, que les fué concedido por el Tribunal, para comprobar los hechos en que fundan su demanda, es decir, la apropiacion en los primeros meses de 1891, por individuos del ejército chileno, de animales que les pertenecian, no han presentado ningun testigo, ni practicado jestion alguna durante él;

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por mayoria de votos, disintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion.

Santiago, 4 de Marzo de 1896.—CAMILLE JANSSEN.——ALFRED ST. JOHN—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 4 de Marzo de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.

En 5 de Marzo de 1896, notifiqué a los ajentes de Chile i británico.

M. A. MARTÍNEZ DE F.

FREDERICK KERR

DIEGO ARMSTRONG,
Secretario.



RECLAMACION N.º 52

D. RICHARDSON I C.ª

MEMORIAL

Aníbal Rodríguez H., representante i apoderado de los señores D. Richardson i C.ª, segun poder que acompaño, respetuosamente espongo lo siguiente, bajo juramento, para la consideracion del Tribunal:

- 1.º—Mi poder lleva firma de David Richardson, súbdito británico nacido en Coventry, condado de Warwick, el dia 13 de Julio de 1849, quien es socio gestor de la firma D. Richardson i C.ª, compuesta de dos súbditos británicos: el ántes nombrado David Richardson i Carlos Federico Comber.
- 2.º—Cuando tuvieron lugar los sucesos a que se refiere este reclamo, David Richardson residia en Iquique i Carlos Federico Comber en Valparaiso. Ninguno de ellos tomó parte directa o indirectamente en la guerra civil de 1891, ni sirvieron a las partes combatientes ni recibieron pago de ellas.
- 3.º—No se ha recibido dinero a cuenta de este reclamo, ni se ha presentado a otro Tribunal. El señor Ministro de S. M. B. puso los hechos en conocimiento del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, sin resultado positivo.

4.º—Se reclama el valor de doscientas cuarenta i ocho mulas (248) a razon de veinte libras, tres chelines, cuatro peniques cada una (£ 20-3-4)	£ 5,001 16 8
Tres caballos, a dieziocho libras, seis chelines, ocho peniques cada uno	55 00 00
Cuatro años de intereses al seis por ciento	1,213 12 10
	<hr/>
Todo lo cual suma	£ 6,270 9 6
	<hr/> <hr/>

Este avalúo de los animales está de acuerdo con el certificado de los peritos, que se presenta adjunto i es a justa tasacion del valor en Tarapacá, o sea doscientos veinte pesos por cada mula, al cambio de veintidos peniques por peso, i doscientos pesos por cada caballo, al mismo cambio.

EXPOSICION

Como es público i nototio en los meses de Enero, Febrero i Marzo del año 1891, ocupaban Arica i Tacna una parte de las fuerzas del Gobierno de don José Manuel Balmaceda, las cuales a las órdenes de los coroneles don Sofanor Parra, don Miguel Arrate i don Emilio Gana debian espedicionar sobre Tarapacá para combatir al ejército que sostenia la Armada, a las órdenes de la Delegacion del Congreso Nacional.

Como los jefes de las fuerzas balmacedistas carecian de los elementos necesarios para movilizar las tropas i su equipo con la debida prontitud, se apoderaron de todos los animales que encontraron a su mano. De este modo las autoridades militares, a nombre del Supremo Gobierno, tomaron posesion de todos o la mayor parte de las mulas i caballos que se hallaban a pastaje en el fundo denominado Faltape, en Camarones. Esta hacienda pertenecia al

ciudadano peruano don Fermin Hernández, i los animales cuyo valor se reclama estaban a talaje en ese sitio i fueron tomados juntos con otros. Como el señor Hernández no pudo impedir la toma de los animales, hizo lo que fué posible e insistió en que se le diera recibo por los que se le quitaron, no solo por los de su propiedad sino por los de varios propietarios que, como los reclamantes, habian mandado sus animales a pasturar a dicha hacienda.

Esto se verificó, i, ademas, se le dió al señor Hernández la seguridad de que despues se le pagaria íntegramente el valor de los animales tomados i los perjuicios causados a sus dueños. Así, pues, los resguardos se otorgaron, i, en prevision de futuras emergencias fueron oportunamente protocolizados en la Escribania de Tacna. De esta suerte han podido conservarse los documentos probatorios de los hechos relacionados i del correspondiente reclamo que hoi se interpone. Todos llevan la firma de las autoridades que intervinieron en la aprehension o espropiacion de los animales.

De las piezas aludidas i que se acompañan en copias autorizadas, aparece:

Que el 17 de Febrero se tomaron doscientas siete mulas i un caballo para las fuerzas dependientes del coronel Parra, comandante de armas de Arica. El resguardo fué otorgado por el mismo señor Parra i por el señor Arteaga Alemparte, i ámbas firmas fueron autorizadas por el señor vice-cónsul inglés, señor W. Finlayson.

Que el 19 del mismo Febrero se tomaron ciento cuarenta i siete mulas i nueve caballos para las fuerzas del coronel Arrate. El recibo, firmado por un señor David Puch, lleva el visto bueno del señor Blest Gana, intendente de Tacna.

Que el 4 de Marzo se tomaron cien mulas para las fuerzas del 5.º i del Quillota, a cargo del capitan Canales. El recibo correspondiente lleva la firma de don Pedro I. Osorio, alférez de granaderos, con el visto bueno del espresado señor Canales.

Finalmente, que el 5 de Marzo se tomaron ochenta i ocho mulas i cuatro caballos para llevarlos a Arica i ponerlos al servicio del coronel Parra. Este hecho se comprueba con la declaracion del alférez don Luis A. Fuentealba i del nombrado capitan Canales.

De los animales aprehendidos i de que hacen mérito los docu-

mentos mencionados, solo eran de don Fermin Hernández, cuarenta i ocho mulas i cinco caballos, perteneciendo los demas a otros extranjeros que, como el señor Hernández, debian considerarse neutrales en la contienda que el Gobierno de entónces sostenia contra las fuerzas opositoras.

De uno de los documentos acompañados consta, que a D. Richardson i C.^{ta}, le fueron tomados doscientas cuarenta i ocho mulas i tres caballos, i de todos ellos resulta plenamente comprobado el despojo de que dicha sociedad fué víctima, pues, están suscritos por personas conocidas, como las firmas de los ex-coroneles Parra i Arrate; i por el ex-intendente de Tacna, señor Blest Gana; por el ex-gobernador de Arica, señor Arteaga Alemparte, etc, i alguno de ellos autorizados por el señor vice-cónsul ingles, señor W. Finlayson.

El presente reclamo se ajusta estrictamente a los términos del artículo 12 número 5.º de la Constitucion Política del Estado, por el cual se asegura a todos los habitantes de la República «la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distincion a las que pertenezcan a particulares o comunidades, i sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere» sino dándose la indemnizacion que se ajustare con el dueño o se avaluare a juicio de hombres buenos.

Por otra parte, siendo extranjeros los miembros de dicha firma, súbditos de Su Majestad Británica, se hallan bajo el amparo de las garantías especiales que les acuerdan los artículos 11 i 17 del Tratado de amistad, comercio i navegacion de 4 de Octubre de 1854,

Habiéndose derrocado al Gobierno del señor Balmaceda, mediante las victorias alcanzadas por el ejército de oposicion en los campos de Concon i la Placilla, incumbe al nuevo Gobierno cargar con las deudas i responsabilidad de su antecesor, sin considerar para nada los excesos de poder en que aquel hubiere incurrido, ni las violaciones de la Constitucion i las leyes.

La permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio reconocido en el Derecho público internacional, de suerte que se hace

innecesario insistir sobre este particular. (Bello, *Dcho. Inter.*, páj. 31).

Si se creyere necesario, aun cuando la prueba documental parece bastante, podría llamarse a declarar o pedirle informe al señor don Guillermo Blest Gana, actual intendente de Linares, i que lo era de Tacna a la fecha del reclamo; i al señor don J. B. Chace, ciudadano norte americano, recidente en Iquique, el cual se encontraba momentáneamente en Arica a principios de 1891, en donde vió algunos de los animales del reclamante que llevaban la marca DR. que es la con que se ha acostumbrado señalarlos.

ANIBAL RODRÍGUEZ

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile tiene el honor de contestar el memorial que ha sido presentado en nombre de *D. Richardson i Ca.* i que lleva el núm. 52 en la forma siguiente:

1 El memorial adolece de defectos sustanciales, que lo hacen inadmisibile. No se espresa en él la residencia actual de los socios Richardson i Comber, ni el lugar i año de su nacimiento del último, apesar de lo prescrito en los arts. III i V del Reglamento. La fórmula de juramento que se usa no indica qué es lo que se quiere confirmar por ese medio, pues está concebida en términos demasiado jenerales, i no tal como lo ordena el art. IX.

La falta de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que dejo citadas, basta para no dar curso a la demanda i rechazarla *in limine* como lo solicito de V. E.

2 Ningun antecedente comprueba la nacionalidad británica que se atribuye a los señores Richardson i Comber, i que yo les niego. Mientras este punto no quede suficientemente esclarecido con los documentos usuales del caso, V. E. no podrá considerarse com-

petente para conocer, ya que el Tribunal ha sido constituido únicamente para oír las reclamaciones que ante él deduzcan los súbditos británicos. Suplico respetuosamente a V. E. que se sirva dar lugar a esta escepcion previa.

3 Don Aníbal Rodríguez H. aparece autorizado por don Teodoro Pepper para deducir esta reclamacion en nombre de *D. Richardson i Ca.* Por desgracia, el mandante señor Pepper no aparece a su vez suficientemente autorizado para otorgar el poder que ha suscrito a favor del señor Rodríguez. En efecto, el mandato otorgado en Iquique por don David Richardson a favor de don Teodoro Pepper, no contiene la cláusula de la escritura social en que se confiere al señor Richardson el cargo de socio gestor i la facultad consiguiente para estender documentos que obliguen a la sociedad. Además el poder conferido al señor Pepper no contiene otras facultades que las relativas a la administracion de la sociedad, i las convenientes para ocurrir a los Tribunales de Justicia en los casos i para el objeto que se indican de una manera especial. El señor Richardson no ha autorizado al mandatario para deducir una reclamacion ante V. E., i hasta ahora no se sabe si tiene o no voluntad de que se inicie esta jestion en su nombre, porque ello no puede deducirse de los términos del mandato que se ha exhibido.

Propongo en consecuencia, la escepcion de falta de personería; i pido a V. E. se sirva dar lugar a ella.

4 Pretende el reclamante que se pague a los señores *D. Richardson i Ca.* la suma de £ 5,056-16-8 en que estima 248 mulas i tres caballos, que asegura le fueron sustraídos del fundo de *Fallape*, en Camarones, por las fuerzas que obedecian al Gobierno de Santiago en 1891. Cobra además £ 1,213-12-10 en razon de intereses al 6% producidos por aquel capital durante cuatro años.

Por todo comprobante de los hechos espuestos, se presenta una protesta estendida por don Fermin Hernández ante un notario de Iquique con fecha 2 de Junio de 1891, en la cual asegura que de su fundo de *Fallape* le fueron tomadas por las autoridades del Gobierno con el fin de movilizar sus tropas, 428 mulas i doce caballos, de los cuales 248 mulas i tres caballos pertenecian a los señores *D. Richardson i Ca.* que las tenian a talaje en aquel fundo.

Se acompaña además la copia de algunos documentos con que se trata de acreditar que efectivamente fueron sustraídos al señor Hernández los animales que éste indica, en virtud de órdenes superiores.

Estos documentos que aparecen protocolizados ante un notario de Tacna, son efectivamente recibos de animales otorgados por funcionarios conocidos los que están archivados en la Intendencia de Tacna, i por personas desconocidas los que don Fermin Hernández presentó para su protocolizacion en una notaria de esa ciudad. De ninguno de ellos consta el número de mulas o caballos que pertenecian a los señores D. Richardson i Ca.

Felizmente en la misma Intendencia se conservan antecedentes de este negocio, que agregados a las declaraciones de las personas que el reclamante cita, vendrán a arrojar plena luz sobre los hechos espuestos.

Desde luego, me hallo en el caso de afirmar que las mulas que sirvieron para trasportar las tropas de Tacna a Tarapacá en Febrero i Marzo de 1891, no fueron tomadas a título de requisicion de guerra, para lo cual habria habido pleno derecho segun las leyes de la guerra. Fueron simplemente alquiladas para este servicio, i devueltas una vez que él fué prestado i pagado.

Segun los documentos existentes en la Intendencia de Tacna, de los cuales acompaño una copia autorizada, fueron fletadas a don Fermin Hernández, que tenia poder en forma de *D. Richardson i C.^a* 182 mulas, mediante el subidísimo flete de 4,917 pesos 50 centavos, suma que oportunamente fué cubierta al mandatario de dichos señores. No es efectivo que se haya tomado para el servicio una sola mula u otro animal fuera de los espresados; i mucho ménos lo es que fueran tomadas por la fuerza i apropiadas para el ejército de Chile.

Me reservo para comprobar estos hechos que ya desde luego aparecen acreditados por los antecedentes que acompaño, con el testimonio de los señores Guillermo Blest Gana, hoi día intendente de la provincia de Linares en cuya cabecera reside, Emilio Gana coronel chileno residente tambien en Linares, i coroneles Sofanor Parra i Miguel Arrate, residentes en Santiago. Todos estos testigos son chilenos i aducidos por el mismo reclamante.

Debo tambien agregar que el hecho de haber sido devueltos a sus dueños las mulas i caballos fletados, se deduce, ademas, de la circunstancia de haber entregado don Fermin Hernández los recibos que se le habian otorgado, devolucion que no habria efectuado, si los animales fletados no le hubieran sido tambien devueltos con anterioridad. Eso esplica cómo el señor Hernández se ha visto obligado a ocurrir a la misma Intendencia de Tacna para sacar copia de documentos que debieran hallarse en su poder.

Agregaré por fin que el dominio sobre las 182 mulas que se atribuye a los señores *D. Richardson i C.^a* en los documentos que presento, solo se deduce de la esposicion hecha por don Fermin Hernández, a la cual no me hallo en el caso de prestar fe. Aguardo que esta circunstancia será a su tiempo debidamente acreditada.

En cuanto a los precios que se señalan a los animales, debo manifestar que son enormemente exajerados. El reclamante supone que cada mula vale 20 libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 300 pesos de nuestra moneda. La mayor parte de los que han deducido reclamos análogos, no se han atrevido a elevar sus abultadas apreciaciones mas allá de ciento a ciento sesenta pesos por cada mula. No es otro tampoco el precio que estos animales alcanzan cuando se hallan en pleno servicio. Los que se llevan a Camarones son los gastados o enfermos que necesitan largo descanso i buen alimento para reponerse; i su valor es naturalmente mui inferior al de los primeros. El señor Blest Gana podrá atestiguar que en aquella época se le ofreció en venta una partida de mulas por el precio de sesenta pesos cada una.

No siendo exactos los hechos en que se apoya esta reclamacion, pido a V. E. se sirva desecharla en caso de no dar lugar a las escepciones previas que tengo deducidas.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Aníbal Rodríguez H. por los señores D. Richardson i C.^a, replicando al señor ajente de Chile, vengo a pedir a V. E. se sirva si lo cree de justicia resolver como lo tengo pedido en la demanda.

A fin de acreditar mi personeria acompaño a V. E. copia autorizada del poder que nuevamente me confieren dichos señores i de la escritura social de la Compañía. Acompaño tambien la declaracion de un alto comerciante de Iquique sobre precios de los animales reclamados. Todos estos documentos ruego a V. E. se sirva tenerlos por acompañados para los fines a que hubiere lugar.

Respecto de las demas consideraciones aducidas por el señor ajente de Chile, me refiero a lo espuesto por mi parte en la reclamacion núm. 49 de los señores Brooking, Comber i C.^a

Ruego, pues, a V. E. se sirva resolver como lo tengo pedido en la demanda.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. señor:

El ajente del Gobierno de Chile procede a duplicar en la reclamacion número 52 que ha sido elevada a la consideracion de V. E. en nombre de la sociedad que jira en la plaza de Iquique bajo la razon social de *D. Richardson i Cia.*

Cobra esta sociedad la suma de £ 6,270-9-6 como indemnizacion que dice debérsele por la apropiacion de 248 mulas i tres caballos hecha por jefes del ejército chileno para movilizar tropas desde Arica hasta el interior de la provincia de Tarapacá. Espero que V. E., en mérito de las consideraciones que voi a desarrollar, ha de tener a bien declararse incompetente para conocer de este reclamo. En subsidio solicitaré que se sirva desecharlo.

1 El mandatario de la sociedad reclamante, con cuyo nombre se

encabeza el escrito de réplica, o el señor agente británico que lo firma, han tenido a bien de prescindir de la cuestion suscitada por mi parte acerca de la informalidad del memorial. Se hacian, sin embargo, en la contestacion observaciones que entrañaban sin duda un carácter bien marcado de gravedad; i yo confío en que V. E. habrá de tomarlas en cuenta, ya que ni siquiera se ha apresurado esta vez el señor agente británico, como lo ha hecho en otras ocasiones, a subsanar, aunque tardíamente, las deficiencias de que adolecia el memorial.

Siendo solo dos los socios de la compañía en cuyo nombre se reclama, no se ha tenido cuidado de espresar el lugar de su residencia, ni el lugar i año del nacimiento del señor Comber.

V. E. se ha de servir resolver si es admisible un memorial en que voluntaria, i ya deliberadamente, se falta a las prescripciones del Reglamento.

2 En mi contestacion hice notar la insuficiencia del poder con que el señor Anibal Rodríguez se presentaba gestionando en nombre de la casa *D. Richardson i Ca.* Ahora se acompaña un poder en forma otorgado al mismo señor Rodríguez por el socio gestor. Con él me parece suficientemente acreditada la personeria del mandatario, i no tengo inconveniente para retirar del debate la escepcion que a este respecto tenia formulada.

3 Junto con el poder se ha acompañado la escritura que contiene el contrato en virtud del cual se constituyó la sociedad denominada *D. Richardson i Cia.* Aparece de él que dicha sociedad se organizó en Iquique el día 28 de Agosto de 1890; i que por escritura de 19 de Febrero de 1892 se amplió el objeto de la sociedad, aumentándose el aporte de los socios.

La sociedad ha sido, pues, establecida en Chile en conformidad a las leyes chilenas, i debe rejirse exclusivamente por estas leyes. Siendo así, ella forma una entidad jurídica completamente independiente de los socios que la forman, segun lo dispone el artículo 2,053 del Código Civil de Chile. La sociedad es, en consecuencia, esencialmente chilena, cualquiera que sea la nacionalidad de los señores Richardson i Comber, socio gestor el primero i comanditario el segundo.

Como sociedad chilena, carece de derecho para ocurrir a este tribunal, puesto que ni natural ni ficticiamente puede considerársela comprendida entre los súbditos británicos, para quienes la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 instituyó este alto Tribunal.

Aún, considerados individualmente, los socios señores Richardson i Comber, lo que seria abiertamente contrario al precepto citado de la lei chilena, ellos no podrian hacer valer ante este Tribunal la accion que han deducido, a causa de que no han acompañado documento alguno que acredite su nacionalidad británica.

Fundo, por consiguiente, la escepcion de incompetencia del Tribunal en los dos capítulos que dejo enunciados; i pido a V. E. se sirva dar lugar a ella.

4 El mandatario del reclamante se ha escusado de tratar la cuestion de fondo, remitiéndome a lo que sobre el particular tiene espuesto en la reclamacion núm. 49 de los señores Brooking, Comber i C.^{as}.

He ocurrido a esta fuente de informacion, i debo manifestar que mi decepcion ha sido grande, porque ni en el memorial ni en la réplica de esa reclamacion se aduce ninguna razon para sostenerla en el terreno del derecho. Todo lo que allí se espresa es que los documentos acompañados por la defensa del Gobierno de Chile se refieren a fletamentos anteriores al hecho de que ahora se trata.

Ignoro si esa misma observacion se pretende hacer estensiva a la reclamacion actual; pero creo que en tal caso son aplicables las razones aducidas por mi parte en la dúplica de esa reclamacion. Pienso, ademas, que con la prueba que a su tiempo rendiré, si es que el Tribunal se llegara a declarar competente, podré acreditar el error que envuelve la afirmacion del mandatario del reclamante.

Este caballero no objeta, pues, el documento que tuve el honor de acompañar a mi escrito de contestacion; ni podria racionalmente hacerlo desde que, en conformidad a la lei, tiene el carácter de instrumento público.

Consta de ese documento que la casa de *D. Richardson i Ca.* fletó al Gobierno del señor Balmaceda 182 mulas i un caballo para movilizar la division del coronel Arrate que se dirijia a Tarapacá con el objeto de coadyuvar a las operaciones bélicas que se desa-

rollaban en aquella provincia. Como precio de este arriendo fué pagada a la casa de *D. Richardson i Ca.* la suma de cuatro mil 917 pesos 50 cts. que percibió la misma casa segun recibo agregado en copia.

Sostengo que este es el único caso en que se hizo uso para la movilizacion del ejército de mulas pertenecientes a esos señores; i apenas necesito agregar que el negocio se llevó a efecto en virtud de contrato legalmente celebrado, como aparece de los mismos documentos.

Quiero suponer por un momento que, aparte de este contrato, hubiera existido la requisicion de las 248 mulas i tres caballos que espresa el memorial. Si así fué, el reclamante no tendria todavia derecho alguno para ocurrir ante este Tribunal, por la sencilla razon de haber perdido su carácter de neutral prestando voluntaria cooperacion a uno de los partidos beligerantes.

Tanto la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 en su artículo III, como el Reglamento de procedimientos del Tribunal en su art. IV son terminantes en exigir que el reclamante haya sido neutral i prescindente en la contienda de 1891, i llegan hasta disponer que sea materia de prueba esa circunstancia. Ello es natural i obedece a los principios jenerales del Derecho Internacional. El que presta ayuda a uno de los beligerantes, sea un Gobierno, sea un individuo particular, pierde por el mismo hecho su carácter de neutral, i no puede por lo tanto invocar a su favor ninguna de las garantías que el Derecho otorga a los neutrales.

La neutralidad se viola prestando a uno de los beligerantes cualquiera clase de cooperacion, i aunque esta sea remunerada. Tal es la regla uniforme de los tratadistas, i yo no creo necesario traer a colacion citas para manifestar que la venta o arrendamiento de armas o de medios de transporte, importa la cooperacion de que se trata en el Derecho. (Calvo, *Le Droit International*, tomo IV, § 2617 i 2618).

La jurisprudencia ha respetado esta doctrina; i sin necesidad de ir mui léjos en busca de precedentes, bastará citar el caso de las reclamaciones, de *Grace Brothers* falladas en 1894 por la Comision Chileno-americana que funcionó en Washington. La sentencia

dictada en esas causas es ilustrativa en alto grado i perfectamente aplicable al reclamo de que ahora se trata. El Tribunal de Washington concluyó por declararse incompetente; i yo pido a V. E. que sea que agregue esta causal de incompetencia a las que tengo alegadas, sea que considere que los señores Richardson i Ca. no pueden ejercitar accion alguna contra el Gobierno de Chile por haber perdido su carácter de neutrales, *sine actione agis*, se ha de servir rechazar la presente reclamacion.

Pero, si apesar de lo espuesto, resolviera V. E. recibir esta causa a prueba, presentaré por mi parte los testigos que he indicado en la contestacion. Fuera de ellos, comprobaré cual era el verdadero precio de las mulas en la época i lugar a que se refiere esta reclamacion, con el testimonio de los señores Federico Geywitz, aleman, Gumecindo Maza i Ramon Iribárrren, chilenos, Simon Barragan, boliviano, i Enrique Kempffer, aleman. Los cuatro primeros comercian en el ramo de animales i el último es jerente del Ferrocarril Urbano de Iquique; i todos residen en esa ciudad.

Por lo espuesto, espero que V. E. se ha de servir declararse incompetente, o rechazar la reclamacion, como lo tengo solicitado.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile

El ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Aníbal Rodríguez H., por los señores D. Richardson i Ca. reclama del Gobierno de Chile la cantidad de seis mil doscientas setenta libras esterlinas nueve chelines i seis peniques (£ 6.270-9-6) capital e intereses por animales tomados.

El memorialista espone que de los documentos acompañados se desprende que a D. Richardson i Ca. le fueron tomadas 248 mulas i 3 caballos por las fuerzas pertenecientes al ejército del señor Balmaceda que operaba en Tacna i Arica al mando de los coroneles

Parra i Arrate; que dichos documentos se hallan suscritos por las autoridades militares i civiles de esa parte del territorio chileno; que este reclamo se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 12 número 5.º de la *Constitucion Política del Estado*, i siendo súbditos de Su Majestad británica los miembros de la firma social D. Richardson i Ca., están especialmente amparados por las garantías que les acuerdan los artículos 11 i 17 del *Tratado de Amistad, Comercio i Navegacion* de 4 de Octubre de 1854, sin que la circunstancia de haber sido derrocado el Gobierno del señor Balmaceda haga variar las responsabilidades del Gobierno de Chile, ni la naturaleza o condicion de este reclamo, ya que la permanencia o perpetuidad de las naciones es un principio de Derecho Internacional universalmente reconocido. (Bello, *Derecho Internacional*, página 31); que las espresadas mulas, a razon de £ 20-3-4 cada una valen £ 5,001-16 8, los tres caballos importan £ 55-0-0, a razon de £ 18-6-8 cada uno i se cobran intereses durante 4 años al tipo de 6 por ciento anual sobre la suma reclamada, intereses que ascienden a £ 1,213-12-10; todo lo que, sumado, da un total de £ 6,270-9-6, cantidad reclamada al Gobierno de Chile.

Se acompañan varios documentos protocolizados en la notaría de Tacna, protesta de don Fermin Hernández, dos certificados de vecinos de Iquique sobre el precio de los animales a que se refiere el memorial i poder otorgado al memorialista.

El agente de Chile, en su contestacion, pide que no se admita el memorial, pues en éste no se observan las prescripciones del Reglamento i no está constituida legalmente la personeria del memorialista, i en subsidio solicita se deseche la reclamacion, pues no se han comprobado ni los hechos, ni que los animales cuyo valor se reclama pertenecian a los reclamantes; los documentos acompañados no tienen fuerza legal probatoria, ni tampoco establecen los hechos que relata la demanda; que la verdad de las cosas es que todos los animales que las fuerzas chilenas de Tacna i Arica usaron las tomaron en arriendo, las devolvieron i pagaron; que hai constancia en la Intendencia de Tacna de haber pagado a don Fermin Hernández, que tenia poder de los reclamantes, 4,917 pesos 50 centavos por alquiler de mulas; que, ademas, se puede probar esto

con los testigos que designa al efecto, que el hecho de haber sido devueltas las mulas se desprende de que éste hubiera devuelto los recibos que por ellas se le habian otorgado; que, ademas, el precio atribuido a las mulas es exorbitante; se acompaña un documento que espresa el pago de los 4,917 pesos 50 centavos, indicado en la contestacion, i copia del poder conferido por D. Richardson i Ca. a don Fermin Hernández.

En la réplica se pide se tenga por reproducidas las alegaciones que se han hecho en la reclamacion número 49 i se acompaña un nuevo poder de los reclamantes conferido al memorialista, copia de la escritura social de los demandantes i un certificado de un comerciante de Iquique en el que atestigua el precio de los animales reclamados.

En la dúplica se mantiene la escepcion de falta de personería, que, dice, no se abona con el nuevo poder acompañado; que la escritura de sociedad que se agrega, comprueba que la razon social reclamante es sociedad chilena, i que, por consiguiente, el Tribunal no es competente para conocer de su reclamacion; que rejistrando el espediente número 49 a que se refiere el demándante en la réplica, no se encuentra nada que contradiga lo espuesto en la contestacion de la presente demanda; que lo único que se desprende del espediente número 49, es la afirmacion de que los contratos de fletamento de mulas son anteriores a las requisiciones por que ahora se reclama; que aun siendo cierto esto, que, por lo demas, es inexacto, resultaria siempre que los reclamantes o su apoderado habian faltado a la neutralidad, prestando en cualquiera época cooperacion a uno de los belijerantes; lo que les inhabilitaria para presentar reclamacion (Calvo, *Le Droit International*, tomo IV, sec. 2,617 i 2,618); que el Tribunal de Washington tambien ha resuelto el punto, segun lo comprueba el caso que cita.

La causa se recibió a prueba i se rindió la que corre en autos.

En el acuerdo de esta causa, las opiniones del Tribunal se han dividido, causando dispersion de votos. En consecuencia, i no habiéndose podido formar sentencia, queda esta causa sin resolucion, reservando cada uno de los señores árbitros su derecho de fundar la opinion que ha sostenido en este caso.

Santiago, 5 de Marzo de 1896.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Proveido por el Excmo. Tribunal en 5 de Marzo de 1896.—*Diego Armstrong*, secretario.

VOTO ESPECIAL DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Segun el criterio del infrascrito, el Tribunal no puede dar lugar a la reclamacion de los señores *D. Richardson i Compañia*, porque los reclamantes no han probado, como no lo hicieron los demandantes en las reclamaciones números 23, 25 i 51, motivo por el cual se rechazaron sus demandas, que eran de su propiedad las doscientas cuarenta i ocho mulas i dos caballos que pretenden les fueron tomadas de la hacienda de *Faltape* de don Fermin Hernández; el único título que ellos invocan para justificar su dominio es una declaracion del señor Hernández, en cuya hacienda se encontraban los espresados animales, segun dicen, a talaje con otros, cuando fueron requisicionados; pero el simple aserto de un tercero no basta para establecer el derecho de propiedad, sobre todo cuando este tercero estaba en posesion de los animales i tiene interes en descargar la responsabilidad que le afecta como depositario i cuando su declaracion arrastraria la consecuecia, si fuera aceptada, de atribuir las ventajas de una jurisdiccion especial al pretendido propietario, no teniendo Hernández derecho a ella por ser súbdito peruano.

Esta declaracion debe, pues, ser desechada, como lo han sido las reclamaciones números 23, 25 i 51, que son perfectamente análogas en cuanto al fondo i que fueron rechazadas por una mayoría compuesta de los árbitros belga i chileno.

El infrascrito es de opinion que este Tribunal es competente para conocer del fondo de la reclamacion; no puede aceptar el que los señores *D. Richardson i Compañia* hubieren perdido su calidad de neutrales por haber recibido *por el intermedio de Hernández*, el precio del alquiler de cierto número de mulas, arrendadas al Gobierno

del Presidente Balmaceda por el mismo Hernández, siendo que esas habian sido requisicionadas con antelacion; no hubo de parte de los reclamantes un acto voluntario i consciente de la violacion de la neutralidad al regularizar un hecho realizado por el Gobierno de derecho en aquella época.

Santiago, 5 de Marzo de 1896.—CAMILLE JANSSEN.

VOTO ESPECIAL DEL ARBITRO BRITÁNICO

La apropiacion de doscientas cuarenta i ocho mulas i tres caballos de propiedad de los señores *D. Richardson i C.^a* que se efectuó por las fuerzas del Gobierno importó, en su orijen, una requisicion en la acepcion jenuina de la palabra, pues los animales se tomaron para el servicio militar, sin el consentimiento, ni siquiera el conocimiento de sus dueños. Sin embargo, aparece de los recibos otorgados por don Fermin Hernández, a nombre de los señores *D. Richardson i C.^a*, que se pagaron cuatro mil novecientos diecisiete pesos, en 31 de Marzo de 1891, por el alquiler de estos animales.

El concepto de que los reclamantes habian violado la neutralidad por haber realizado transacciones semejantes a la de que se ha hecho mérito, no tiene fundamento alguno. Nada supieron de la apropiacion de sus animales, pero, ya consumada, consintieron en recibir el precio del alquiler, sin duda, para disminuir sus pérdidas. Un poder otorgado el 11 de Marzo de 1891, por el señor Chace, quien se llama socio de la casa de *D. Richardson i C.^a*, autorizó al señor Hernández para alquilar estos animales; pero este poder se otorgó con posterioridad a la apropiacion de dichos animales; la cual se efectuó en los dias 17 i 19 de Febrero i 5 de Marzo de 1891, i, por consiguiente, no tiene relacion alguna con ellas. Pero habiendo los reclamantes consentido en que se les pagara el alquiler de ciento ochenta i dos animales para el servicio de las fuerzas militares, lo que en su orijen fué una requisicion, dejeneró de hecho en contrato de acarreo i, por consiguiente, quedó eliminado su

derecho para deducir reclamacion ante este Tribunal. Dado este antecedente, esta parte de la demanda debe desecharse por falta de jurisdiccion, sin perjuicio del derecho de entablar su accion ante quien corresponda.

Con respecto a los animales restantes, que se tomaron, sin que en época alguna se hubiere pagado nada por su alquiler, lo que comprueba que este acto de las autoridades militares fué una requisicion, autoriza a los reclamantes para exigir una indemnizacion por su extravio, pues se rindió prueba bastante para establecer que todos esos animales pertenecian a los señores *D. Richardson i C.*ª

Santiago, 5 de Marzo de 1896.—ALFRED ST. JOHN.

El árbitro infrascrito reproduce, como fundamentos de la opinion que mantuvo en el acuerdo de esta causa, los que deja expresados en el caso número 49, que le son completamente aplicables.

Santiago, 21 de Abril de 1896.—LUIS ALDUNATE.



RECLAMACION N.º 53

D. RICHARDSON I Ca. I CAMPBELL, OUTRAM I Ca.

MEMORIAL

Aníbal Rodríguez H., por D. Richardson i Ca., i Campbell, Outram i Ca., segun poder que se ha acompañado en la primera reclamacion de D. Richardson i Ca., bajo juramento espongo:

- 1.º—Que las especificaciones de la firma D. Richardson i Ca. se hayan determinadas en la primera reclamacion aludida;
- 2.º—Que la cantidad que se reclama es de doscientas catorce libras, dieziseis chelines, ocho peniques [£ 214-16-8].
- 3.º—La firma de Campbell, Outram i Ca. la componen Delmira Campbell, Maria Luisa Jones i Emilia Outram, todas súbditas británicas, representadas en Chile por D. David Richardson, residente en Iquique;
- 4.º—Cuando tuvieron lugar los sucesos a que se refiere este reclamo, todas ellas residian i aun residen fuera del territorio de la República.
- 5.º—No se ha recibido dinero a cuenta de este reclamo ni se ha presentado ante otro Tribunal;

6.º—La cantidad que se reclama es de ciento treinta i cinco libras, tres chelines i once peniques [£ 135-3-11].

En los documentos acompañados aparece el detalle de los perjuicios causados i que motivan este reclamo.

ANÍBAL RODRÍGUEZ

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como agente de Chile, paso a contestar la reclamacion núm. 53, en la cual don Aníbal Rodríguez H. demanda por D. Richardson i Ca. £ 214-15-8, i por Campbell, Outram i Ca. £ 135-3-11, valores atribuidos a objetos muebles que, segun documentos acompañados, se habrian perdido en un incendio, durante el combate de Iquique de 19 de Febrero de 1891.

1 Sobre su personería como representante de la firma D. Richardson i Ca., el memorialista se refiere al poder acompañado a la anterior reclamacion de aquéllos, que es la núm. 52.

Allí aparece que el señor Rodríguez recibió poder de un señor Pepper, quien lo habria recibido de D. David Richardson; pero no consta que este tuviera la representacion de aquella firma social. En todo caso el poder conferido al señor Pepper para los negocios propios de la sociedad mercantil no debe considerarse suficiente en asuntos de un carácter tan particular como el de esta reclamacion ante un Tribunal Internacional.

De todo esto resulta justificada la escepcion de falta de personería del memorialista para representar aquí a D. Richardson i Ca., escepcion que desde luego le opongo.

2 Se dice que don David Richardson i don Cárlos Federico Comber (¿el mismo de la reclamacion núm. 49 de Brooking, Comber i Ca.?) forman la Sociedad D. Richardson i Ca.

Respecto de cada uno de ellos, ha debido contener el memorial a que contesto las indicaciones especificadas en el Reglamento de

Procedimientos. Sobre esto, se refiere aquél a lo determinado en la citada reclamacion anterior, núm. 52; sin embargo, fácil es observar que no se han cumplido a ese respecto en todas sus partes las prescripciones reglamentarias.

Se han omitido particularmente la esposicion de los hechos i las circunstancias especificadas en el art. VII del citado Reglamento, sin los cuales no es posible contradecir la reclamacion i hacer la defensa de Chile con el necesario conocimiento de causa.

La omision de todo eso, que ha debido contener el memorial mismo, hace que aparezca prestado en el vacío el juramento reglamentario sin mas que hacer poner al pie del memorial estas palabras firmadas por mi honorable colega el ajente británico: *sworn before me*, palabras que por no referirse a nada determinado nada significan.

El olvido de las prescripciones reglamentarias hace inadmisibile esta reclamacion. Por mi parte pido i espero que así lo declare V. E. respecto de D. Richardson i Ca.

3 En todo caso, si hubiera de entrarse al fondo de la reclamacion de aquellos, tendria ella que ser desechada por falta de prueba de los hechos que le sirven de base. Mientras estos no se acrediten legal i suficientemente, no puede V. E. admitir ni la efectividad ni el monto de los perjuicios reclamados.

A este respecto los testimonios anexos del señor Polastri i del señor Haltch, prestados oficiosamente en Iquique, el 16 de Setiembre de 1891, ante el cónsul de S. M. B. señor Morrison (memorialista en las reclamaciones 43 i 48), son pruebas *ex parte* destituidas de todo mérito probatorio. No se conforman de manera alguna con lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos en orden a prueba testimonial.

En comprobante del enormísimo valor atribuido a los objetos indicados, que se suponen propiedad de los reclamantes perdida en el incendio, basta observar que por escobas, plumeros, tinta, goma de borrar i otras baratijas de oficina, se cobran £ 20.10.0, esto es, mas de \$ 273, de nuestra moneda. Así aparece en el inventario, al cual no doi ningun valor, anexo a la reclamacion.

En las mismas condiciones que aquellos testimonios, se ha pre-

sentado una protesta de don David Richardson, en la cual se dice que el despacho i oficinas de la sociedad en Iquique ocupaban el piso bajo de la casa número 11 de la calle de Bolívar; pero lo ocupaban, según allí se dice, *inter alia*. Entre estos otros, van saliendo: el almacén i oficinas de Campbell, Outram i C.^a, según esta misma reclamación; los almacenes de Blair i C.^a, según la reclamación número 35, etc. Así se aumentan las cosas, i de pequeñas piezas de pequeña casa, se hace un mundo de almacenes i de oficinas en que es más fácil suponer grandes valores.

4 En la hipótesis de acreditarse los hechos i la efectividad de los perjuicios reclamados, ellos no serían de la responsabilidad de Chile: habrían sido efecto de fuerza mayor, consecuencia natural de un hecho de guerra, de que nadie está obligado a responder, según el derecho i las prácticas internacionales.

Sobre este punto conviene dejar aquí anotado un hecho que las dos protestas anexas de don David Richardson i otras, como la del finado don Guillermo Eduardo Thompson (reclamación 45), refieren en estos términos:

«El incendio tuvo lugar en medio del campo de batalla de las partes contendientes i cundió, sin que las llamas pudieran ser apagadas; ni siquiera hacerse un esfuerzo para salvar la propiedad amagada, debido a la pelea que se desarrollaba en las calles i en su inmediata vecindad.»

Bien se comprende que en esas condiciones nadie habría sido tan temerario que se hubiera atrevido a esponer su vida en medio de las balas para ir a trabajar en la extinción de un incendio.

5 Paso ahora a considerar la parte de esta reclamación relativa a la firma Campbell, Outram i C.^a

A ellas son aplicables i aplico con mayor razón que a la parte relativa a la firma *D. Richardson i Ca.*, las excepciones antes indicadas de falta de personería del titulado mandatario, de no ajustarse absolutamente el memorial a las formalidades reglamentarias, de no acreditarse de ninguna manera la efectividad i el monto de los perjuicios reclamados i de no ser éstos en derecho de la responsabilidad del Gobierno de Chile, ni aun en el caso de comprobarse su efectividad.

Se hace notar particularmente la falta de indicaciones relativas a las tres señoras: Delmira Campbell, Emilia Outram i María Luisa Jones, las cuales, segun el memorial, componen la firma comercial *Campbell, Outram i Ca.* De ellas se dice solamente que residian i residen fuera de la República i que son súbditas británicas, lo que no ha cuidado de acreditar el memorialista.

Aunque no era de mi incumbencia he procurado obtener datos sobre dichas señoras. De los obtenidos resultaria que las verdaderas socias de dicha firma serian: Delmira Vargas, peruana, nacida en Tacna en 1836, viuda de don Juan Javier Campbell; Julia Mac Lean, peruana tambien, nacida en Tacna en 1884, viuda de don José Outram; i María Luisa Zuluaga, argentina, viuda de Jones. En comprobante acompaño un oficio del intendente de Tacna i las partidas de nacimiento i de matrimonio de las espresadas señoras viuda de Campbell i viuda de Outram.

Las disconformidades de nombres podrian explicarse por la costumbre a que alude el citado oficio i por la de designar a las señoras por los apellidos de sus maridos. Parece, por otra parte, que los nombres espresados en el memorial corresponderian a hijas de las tres verdaderas socias referidas.

La parte reclamante es la obligada a esclarecer lealmente estos puntos, sin lo cual forzosamente habrá de negarse lugar a la reclamacion, aun cuando no existieran los antecedentes allegados por mi parte.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva no dar lugar a la admision de esta doble reclamacion, i en subsidio, desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Aníbal Rodríguez H. por los señores D. Richardson i Ca. i Campbell Outram i Ca. ruega a V. E. se sirva tener por acompa-

ñado el poder que se encuentra agregado a la reclamacion de los mismos señores D. Richardson i Ca., número 52.

Debo hacer presente a V. E. que en estas dos reclamaciones me corresponde solo el papel de procurador i no de abogado.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Replicando, el señor ajente de S. M. B. se refiere a un poder acompañado en la reclamacion número 52 i se limita, por lo demas, a advertir que «en estas dos reclamaciones le corresponde solo el papel de procurador i no de abogado». Me esplico perfectamente la salvedad.

A lo dicho ántes por mi parte agregaré aquí únicamente que ámbas compañías reclamantes son chilenas i no inglesas, segun lo deducido a este respecto por el Gobierno reclamado en la reclamacion número 29 de Pettie i Ca. i en otras como la citada número 52, tambien de D. Richardson i Ca., a las cuales me refiero.

En el fondo, a estas dos reclamaciones es aplicable lo dicho en las otras relativas al combate de Iquique del 19 de Febrero de 1891, principalmente en mi dúplica a la número 1. Reproduciéndolo aquí, termino suplicando a V. E. se sirva resolver, como tengo pedido, negando lugar a dichas dos reclamaciones, caso de declararse competente para conocer de ellas.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Aníbal Rodríguez H. demanda al Gobierno de Chile, por *D. Richardson i C.ª*, doscientas catorce libras esterlinas dieziseis chelines ocho peniques (£ 214-16-8), i por *Campbell, Outram i C.ª* ciento treinta i cinco libras tres chelines once peniques (£ 135-3-11) por pérdidas sufridas en el incendio de Iquique el 19 de Febrero de 1891.

El reclamante no espone en el memorial los hechos que dan oríjen a la demanda i acompaña dos protestas hechas por David Richardson ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, en las cuales refiere que el 19 de Febrero de 1891 se trabó en Iquique un combate entre las fuerzas del Gobierno de Balmaceda i las fuerzas congresistas de mar i tierra i que durante la refriega bombas lanzadas por los buques de la Escuadra produjeron, a eso de las dos i media de la tarde, un voraz incendio, en diversos puntos de la ciudad, ocasionando la destruccion de varias manzanas de edificios i la parcial destruccion de otras; que este incendio consecuencia del combate i bombardeo, cundió rápidamente alcanzando luego a la calle de Bolívar, donde se encontraban ubicadas las oficinas, almacén i despacho de las sociedades *D. Richardson i C.ª* i *Campbell Outram i C.ª* las que fueron totalmente destruidas por el fuego, a escepcion de una bodega, con bóveda de cal i ladrillo, perteneciente a *Campbell i Outram i C.ª*, que se salvó con su contenido; que el incendio no pudo contenerse ni intentarse salvar cosa alguna, a causa de que el combate tenia lugar en aquel mismo sitio; que las pérdidas sufridas en dicho siniestro se detallan en dos inventarios que se acompañan i tienen un valor de doscientas catorce libras dieziseis chelines, ocho peniques (£ 214-16-8) pertenecientes a *D. Richardson i C.ª*, i ciento treinta i cinco libras tres chelines once peniques (£ 135-3-11) que pertenecen a *Campbell Outram i C.ª*, que son las cantidades que se reclaman al Gobierno de Chile.

Se acompañan como comprobantes las declaraciones de los testigos Augusto Vicente Polastri i Juan Hatch, prestadas ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, el 16 de Setiembre de 1891, en las que declaran en todo conforme a lo referido en las protestas.

El agente de Chile contesta, oponiendo, desde luego, la escepcion de falta de personería del reclamante; que el memorial adolece de graves omisiones, contraviniendo así las prescripciones del Reglamento, lo que hace inadmisibile la reclamacion; que no existe prueba legal i suficiente de los hechos que sirven de base a la reclamacion: que el precio que se atribuye a las pérdidas es enormísimo e inadmisibile; que considerando la parte relativa a la sociedad *Campbell Outram i C.^a* no se ha probado el carácter de súbditos británicos de los socios que la componen; i que aun acreditando los hechos i efectividad de las pérdidas reclamadas, no seria responsable el Gobierno de Chile por haber sido consecuencias de actos lejitimos de guerra; pide, en conclusion, que el Tribunal no admita la reclamacion i, en subsidio, la deseche en todas sus partes.

En la réplica, el memorialista pide al Tribunal tenga por acompañado el poder que se encuentra agregado a la reclamacion número 52 i hace presente que en estas reclamaciones le corresponde solamente el papel de procurador i no de abogado.

En la dúplica, el agente de Chile dice que las compañías reclamantes son chilenas i no inglesas, i que en el fondo, a estas dos reclamaciones, es aplicable lo dicho principalmente en la dúplica de la reclamacion número 1, a la cual se refiere; i

Considerando: que sin detenerse a discutir varios otros puntos de derecho i hecho invocados por ámbas partes, importa que el Tribunal Arbitral se pronuncie desde luego sobre la lejitimidad o ilejitimidad de los hechos de guerra que ocurrieron en la ciudad de Iquique en 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que pocos dias ántes de esta fecha la ciudad de Iquique había sido abandonada por las tropas del Gobierno del Presidente Balmaceda i ocupada inmediatamente por las fuerzas del otro belijerante, el partido congresista, cuya Escuadra estaba anclada frente al pueblo; que un destacamento de sesenta hombres mas o ménos, desembarcado de los buques de guerra se había acuartelado en el edificio de la Adnana, que estaba pegado al mar; que el 19 de Febrero, ya ántes de las seis de la mañana el coronel Soto, del ejército de Balmaceda, contramarchando de una manera

imprevista, llegó a la cabeza de cerca de trescientos hombres para tratar de tomar por sorpresa la ciudad, mediante un audaz golpe de mano;

Considerando: que el combate se empeñó inmediatamente entre los beligerantes i que la Escnadra no tardó en tomar parte, lanzando granadas sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzaa balmacedistas a fin de proteger su propio destacamento i obligar al enemigo a retroceder; que durante el combate se produjo un incendio en edificios cercanos a la Aduana que no tardó en estenderse i reducir a cenizas todo el barrio compuesto de construcciones de material lijero i mui inflamable, ocupados por muchos extranjeros, entre los cuales se contaban los reclamantes;

Considerando: que en las protestas hechas por el señor D. Richardson, en 7 i 16 de Setiembre de 1891, ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique, declara que las pérdidas se deben al incendio producido por el bombardeo i batalla de 19 de Febrero de 1891;

Considerando: que esta afirmacion de D. Richardson está confirmada por las declaraciones juramentadas de los testigos Augusto Vicente Polastri i Juan Hatch, prestadas en 16 de Setiembre de 1891, ante el cónsul de S. M. Británica en Iquique;

Considerando: que la Escuadra chilena anclada al frente de Iquique, tenia a virtud de las leyes de la guerra, el derecho de disparar sus cañones sobre la parte de la ciudad ocupada por las fuerzas enemigas que tentaban un esfuerzo supremo para apoderarse de la ciudad ocupada al principio del combate por las tropas de la Escuadra;

Considerando: que teniendo por establecido los hechos ya apuntados, se puede afirmar que Iquique no era en 19 de Febrero una ciudad abierta e indefensa que el Derecho Internacional aconseja no bombardear, sino que era ciudad ocupada militarmente por el enemigo, que habia intentado recuperarla no solo por un golpe de mano sino que tambien habia organizado una resistencia encarnizada en contra de aquellos que se habian apoderado previamente de la ciudad; que el Derecho Internacional reconoce a un beligerante el derecho de bombardear una ciudad no fortificada, pero que está ocupada militarmente i que se resiste; con mayor razon reconoce

este derecho cuando la ciudad ha sido ocupada por sorpresa i que el enemigo invasor trata de desalojarla de sus adversarios. (*Declaracion Internacional en Bruselas en 1874, sobre la lei i los usos de la guerra*, artículo 15.—Calvo, *Derecho Internacional Teórico i Práctico*, edicion de 1888, tomo IV, párrafo 2,068.—Dudley Field, *Proyecto de un Código Internacional*, edicion 1881, artículo 756, número 4.—A. J. Helfter, *Derecho Internacional de la Europa*, Paris, 1883, párrafo 125. Nota de Geffcken.—*Manual de Derechos de la Guerra*, del Instituto de Derecho Internacional citado por Hall páj. 525.—Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, artículo 55 bis);

Considerando: que el principio jeneralmente aceptado en el Derecho Internacional, de que el bombardeo de una ciudad no puede verificarse sin previo aviso, no es aplicable al caso presente; que supone una ciudad ocupada por el enemigo a quien su adversario advierte que está dispuesto a bombardearla para obligarla a capitular a la mayor brevedad; que le habria sido imposible a la Escuadra chilena dar un aviso prévio a los habitantes de Iquique puesto que el enemigo se habia apoderado de la ciudad por sorpresa i que tenia el deber de tomar todas las medidas militares necesarias para proteger las tropas que ella habia desembarcado con anterioridad al ataque i mantenerse en posesion de la ciudad; que se trata «de un ataque a viva fuerza» del que habla el artículo 16 de la Declaracion Internacional sobre las leyes i usos de la guerra en la conferencia de Bruselas, 1874, i que exime de aviso previo, Bluntschli, *Derecho Internacional Codificado*, edicion de 1886, artículo 554;


Considerando: que para juzgar debidamente los sucesos acaecidos en Iquique el 19 de Febrero de 1891, es preciso tener en cuenta cuánta era la importancia de tomar posesion de esta ciudad para cada uno de los beligerantes bajo el punto de vista de los grandes recursos que podia procurarles la explotacion i esportacion del salitre; que uno de los objetivos de la guerra es privar a su enemigo de los medios de continuarla i que una aplicacion rigurosa de las leyes de la guerra puede encontrar su justificativo en que se alcanza una disminucion del tiempo que pudiera durar el azote de esta calamidad pública;

Considerando: que la destruccion de la propiedad privada en Iquique, en 19 de Febrero de 1891, es una consecuencia desgraciada de actos lejítimos de la guerra i que no compromete la responsabilidad del Gobierno de Chile que, como lo dice Vattel «hai en tiempo de guerra perjuicios causados por una necesidad inevitable, tales son, por ejemplo, los estragos de la artillería en una ciudad que se reconquista al enemigo. Estos son accidentes, males de la suerte, para los propietarios que la sufren. El Soberano debe equitativamente tomarlos en consideracion, si se lo permite el estado de sus negocios; pero no hai accion contra el Estado por desgracias de esta naturaleza, por pérdidas que no se han causado libremente sino por necesidad, por accidente, usando de su derecho»—(Vattel, *Derecho de Jentes*, libro 3.º, capítulo XV, § 232.—*The Law of Claims against Government, House of Representatives 42 D. Congress. Report* número 134, page 274, Washington, *Government Printing Office*, año 1875).

Por estos fundamentos, el Tribunal, por mayoría de votos, disintiendo el árbitro inglés, declara sin lugar la presente reclamacion i absuelve de ella al Gobierno de la República de Chile.

Santiago, 4 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 4 de Noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 54

WEIR I C.a

MEMORIAL

Excmo. Tribunal:

Pedro Mac-Gregor a V. E. con todo respeto espongo:

Que soi representante de la sociedad de Weir i Ca., segun aparece del mandato adjunto (documento núm. 1). Nací en la ciudad de Glasgow, en Escocia, el año 1859, i el lugar de mi residencia es Santiago de Chile, donde ocurrieron los hechos que motivan la reclamacion que voi a formular. La sociedad de Weir i Ca. tiene su domicilio en Valparaiso, Santiago, etc., i los socios e interesados en ella son los que aparecen en el mandato, que es el documento núm. 1.

Tanto yo, súbdito ingles por nacimiento, como la sociedad de Weir i Ca., nos mantuvimos, durante la guerra civil chilena que comenzó el 7 de Enero de 1891 i que terminó el 28 de Agosto del mismo año, en la mas estricta neutralidad; no estuvimos al servicio de ninguno de los combatientes, ni recibimos sueldo de ellos, no influimos, en suma, directa ni indirectamente en la espresada guerra.

El 21 de Mayo de 1891 fuí requerido por orden del comandante

del Regimiento Esmeralda 7.º de línea del ejército balmacedista, para que entregase las mercaderías que detalla la cuenta adjunta, mercaderías que, según se me dijo, iban a satisfacer las necesidades de la oficialidad del regimiento nombrado. Como representante de Weir i Ca., hube de entregarlas. Importaban esas mercaderías mil doscientos veinte pesos cuarenta centavos (§ 1,220. 40). El 29 del mismo mes i año me fueron devueltas las especies que enumera el documento núm. 3. las cuales importaban doscientos treinta i nueve pesos (§ 239). Con esto i el abono de ochocientos pesos (§ 800) que recibí de don J. E. Otero, capitán del regimiento, en 25 de Mayo del mismo año, quedó un saldo a mi favor de ciento ochenta i un pesos cuarenta centavos (§ 181. 40) que es la diferencia entre § 1,220. 40, importe de las mercaderías que entregué, i § 1,039, suma del precio de las mercaderías devueltas con el abono. Todas las sumas de dinero espresadas en este memorial son de moneda corriente de Chile.

Este saldo de § 181.40 se me debe, porque no me ha sido pagado: ni siquiera he reclamado anteriormente ante otro Tribunal.

Al final del documento núm. 2 encontrará el Excmo Tribunal el *Visto Bueno* del señor García V., comandante del Regimiento Esmeralda en Mayo de 1891. Esa nota es el mejor reconocimiento, la mejor prueba, de la efectividad de mi crédito.

No me limito a demandar el espresado saldo de § 181. 40, pues creo justo que también se me paguen los intereses legales de él a contar desde el 21 de Mayo de 1891, fecha de la cuenta (documento núm. 2). Esos intereses, al 6% anual en tres años once meses, sobre § 181.40, alcanzan a § 42.53.

Con lo espuesto i los tres documentos que acompaño reclamo el pago por el Gobierno de Chile de la suma de §.181.40 por capital, i de § 42.53 por intereses, en la confianza de que el Excmo. Tribunal, convencido de la justicia de mi solicitud, se ha de servir acogerla.

PEDRO MAC GREGOR

CONTESTACION

Excmo. Señor:

D. Pedro Mac. Gregor, diciéndose mandatario de la casa comercial Weir i Ca. solicita del Gobierno de Chile el pago de 181 pesos 40 centavos, saldo de mercaderías tomadas en 1891 para consumo del batallón Esmeralda, que se encontraba acantonado en esta ciudad. Pide además que se le paguen intereses sobre esa suma a razón del 6% anual. En contestación espondré lo siguiente:

1 No se han observado en el memorial presentado las prescripciones de los artículos III, V, VI i IX del Reglamento. Debe por consiguiente, ser desechado sin más trámite.

2 No hai antecedente que acredite la nacionalidad que se atribuye a los miembros de la firma social Weir i Ca. Mientras no se compruebe en la forma usual el *status* de súbditos británicos de cada uno de esos señores, calidad que yo les niego, el Tribunal no puede considerarse competente para conocer, i así pido que se declare.

3 El poder que presenta el señor Mac. Gregor es insuficiente, tanto porque no constan en él las facultades con que procedió a otorgarlo el señor Ewen Cameron; como porque no se autoriza a aquel para proseguir juicios, ni ménos para comparecer ante este alto Tribunal. Suplico a V. E. se sirva dar lugar a la escepcion de falta de personería.

4 En la presente reclamación no se trata de perjuicios causados con motivo de operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar o tierra de la República. Ella se basa simplemente en un contrato de compra de útiles de comedor que hizo el comandante de un cuerpo militar acantonado en Santiago para el servicio del mismo cuerpo. No está, por consiguiente, comprendida dentro de los términos de la Convención de 26 de Setiembre de 1893. Esta es otra causal de incompetencia, que V. E. se ha de servir tomar en cuenta para no conocer de la reclamación.

Si los hechos aducidos son efectivos, lo que no puedo reconocer

sin otro antecedente que el presentado, no acierto a explicarme como la casa de Weir i Ca. no ha ocurrido a los tribunales del pais que le habrian fallado esta cuestion verbalmente i sin necesidad de otra tramitacion, atendida la cuantia de la cantidad que se cobra. Por mi parte, siento tener que oponerme a esta reclamacion tan nimia, lo que hago únicamente porque debo oponerme a que se establezca un precedente, en que podrían apoyarse otros reclamantes de sumas considerables que se encuentran en situacion idéntica al actual.

Si V. E. se declara incompetente, como lo espero, suplico que espresamente deje a salvo el derecho de Weir i Ca. para entablar esta demanda ante los tribunales ordinarios de la Nacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Yo, Pedro Mac Gregor representante de Weir i C.^a, en Santiago replicando en la reclamacion que tengo formulada en contra del Gobierno de Chile, al Honorable Tribunal con todo respeto digo:

1 Aunque en la contestacion del señor agente de Chile se observa que mi memorial no se ajusta a las prescripciones de los arts. III. IV i IX del Reglamento, el Honorable Tribunal no podrá ménos de convencerse del ningun fundamento de esa observacion. Todas las formalidades que prescribe el art. III i el IV i el IX han sido cumplidas: basta tener a la vista el memorial para convencerse de ello.

2 Si bien no es de rigor espresar respecto de cada socio las circunstancias especificadas en los arts. III i IV creo que están ellas suficientemente acreditadas con el poder acompañado, de donde resulta su carácter de súbditos ingleses, i consiguientemente su

neutralidad que era deber de ellos. Puedo, con todo probar de otra manera estos hechos i mi propio carácter por medio de partidas de certificados del señor cónsul inglés i de testigos.

3 El poder con que me he presentado es suficientemente amplio, como ha de verlo el Honorable Tribunal i si en él no se me autoriza especialmente para ocurrir ante el Honorable Tribunal es porque o no es necesario, porque ninguna lei, ni la Convencion Arbitral ni el Reglamento de Procedimientos exigen poder especial para presentarse ante el Honorable Tribunal; i mucho ménos podria exijírmelo a mí que tengo la administracion del negocio de Weir i C.^{as}, en Santiago.

La escepcion de falta de personeria es, pues, improcedente.

4 Mi reclamo, segun aparece de la esposicion que hago en el memorial, tiene por causa las requisiciones practicadas por órden del comandante del rejimiento Esmeralda 7.^o de línea del ejército del Presidente Balmaceda.

No se trata aquí de una compra-venta efectuada entre el comandante Garcia Videla i yo; se trata de una requisicion como cualquiera otra i de la cual es responsable el Gobierno de Chile.

El Honorable Tribunal, segun el art. I de la Convencion, está llamado no solo a resolver las reclamaciones que tratan de perjuicios causados con motivo de operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República de Chile, como lo sostiene el señor ajente de esta Nacion, sino tambien aquellas otras que proceden de simples actos ejecutados por las mismas fuerzas.

En el caso actual se trata de lo último, i no por eso mi reclamacion deja de ser justa, ni el Honorable Tribunal competente para conocer de ella.

(1) Que la requisicion se llevó a cabo i se obtuvieron de la Sociedad que represento las especies requeridas, lo manifiesta el documento núm. 2; que yo fui impotente para resistir, es indudable, i que de todo esto se desprende mi derecho a ser indemnizado, obvio me parece tambien.

El importe de la indemnizacion no puede ser otro que el de las mercaderias cuya entrega efectué mediante una órden irresistible, amenazadora i aun autorizada por el Gobierno del Presidente Bal-

maceda. Sabido lo anterior, mi peticion de intereses es indiscutible, su justicia se impone.

(2) Si se duda de la efectividad de los hechos puede verse en mis libros las partidas correspondientes a la cuenta presentada, lo que por mi calidad de comerciante i la seriedad de la casa que represento, constituiría plena prueba. Tambien podria llamarse a reconocer la firma del documento número 2 i examinarse a los testigos conocedores de los hechos; personas todas cuyas designaciones exijidas en el art. IX daré, si es necesario, en el escrito en que presente interrogatorio.

A virtud de lo espuesto i demas antecedentes, confío en que el Honorable Tribunal se ha de servir desechar las escepciones opuestas por el señor ajente de Chile i dar lugar en todas sus partes a mi reclamacion.

p. p. WEIR I C.^a

(Firmado).—PEDRO MAC. GREGOR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile se ha impuesto del escrito de réplica presentado por el señor Pedro Mac Gregor en representacion de la firma *Weir i Ca.* Cumple por su parte con el deber de presentar el escrito de dúplica correspondiente.

1 Niega el mandatario de la casa reclamante que existan en el memorial las informalidades que mencioné en mi contestacion. Como se trata de una cuestion de hecho fácil de comprobar, me remito a los antecedentes i suplico a V. E. que, en vista de ellos, se sirva tomar en cuenta i resolver acerca de la peticion que formulé en el primer número de mi contestacion.

2 Tuve el honor de manifestar que el Tribunal era incompetente para conocer de esta reclamacion en virtud de dos motivos: no

estar acreditada la nacionalidad británica de las personas que forman la sociedad de *Weir i Ca*; i no versar el reclamo sobre perjuicios que provengan de actos u operaciones de las fuerzas de mar i tierra de la República.

Acerca del primer punto, espresa el señor Mac Gregor que la nacionalidad de sus representados está suficientemente acreditada con el poder acompañado, agregando que puede comprobarla ademas con partidas certificadas por el señor cónsul ingles i con testigos. Por mas que se lea una i otra vez aquel poder, no se encontrará en él una sola palabra que tienda a establecer el carácter de súbditos británicos que se atribuye a los miembros de la sociedad *Weir i Ca*.; pues se limita a manifestar cuál es el domicilio o residencia actual de algunos de ellos. Aun cuando el poder dijese espresamente que los socios eran súbditos ingleses, no por eso quedaria comprobada su nacionalidad por este solo medio. Mientras no se presenten las partidas de nacimiento que se ofrecen, no quedará establecido el *status* de los reclamantes, pues el certificado i prueba de testigos que tambien se ofrecen son en derecho insuficientes para el objeto que se persigue.

Entre tanto la jurisdiccion del Tribunal se mantendrá incierta; i habrá de declararse inexistente si, llegado el caso de ver el presente reclamo, no se hubieren acompañado las partidas que se ofrecen.

No es ménos evidente la falta de jurisdiccion del Tribunal, por razon de la materia de que se trata. Por mas que otra cosa diga i asevere el reclamante, las mercaderias cuyo pago reclama no fueron tomadas por la fuerza, sino compradas en la forma en que comunmente se acostumbra. Suponiendo que hubiera mediado la fuerza, cosa enteramente inexacta i hasta inverosímil, todavia no podria calificarse el hecho como un acto u operacion de guerra. A lo sumo seria un abuso de la autoridad, del cual nacerian acciones a favor de la casa reclamante que ella podria hacer valer ante los tribunales ordinarios; pero que de ninguna manera la autorizarian para ocurrir ante este Tribunal.

En la ciudad de Santiago no se verificó durante el año de 1891 ninguna operacion militar, i solo a estas se ha referido de un modo espreso i suficientemente claro el artículo 1.º de la Convencion de

26 de Setiembre de 1893. Considerar como actos u operaciones de las fuerzas de mar i tierra de la República, no solamente los actos bélicos sino tambien los que tienen alguna relacion, siquiera sea remota, con la guerra civil de 1891, importa no solo olvidarse de la letra de la Convencion sino tambien ir contra el espíritu i propósito de los que la celebraron.

Durante el período de la guerra todo el conato de la autoridad pública de Chile se dirijió a sofocar la insurreccion por una parte i a fomentarla por la otra. Seria difícil, sino imposible, encontrar alguna medida de gobierno que próxima o remotamente no estuviera relacionada con este propósito. Así, todas las medidas administrativas dictadas en aquel tiempo todos los contratos celebrados por el Gobierno habrian de ser considerados como actos de guerra, si prevaleciera lo opinion de los que, en provecho de sus intereses particulares, sostienen la interpretacion estensiva i arbitraria de la frase *actos u operaciones de las fuerzas de mar i tierra de la República* de que se sirve la Convencion. Ello equivaldria a someter a este Tribunal todas las cuestiones de súbditos ingleses con el Gobierno o el Fisco de Chile orijinadas durante el período de la guerra civil; i a la suspension o anulacion de las facultades que la Constitucion i las leyes han conferido a los Tribunales de la Nacion.

No es este ciertamente el criterio a que obedecié el Tribunal Anglo-chileno que funcionó de 1884 a 1887 en la ciudad de Santiago; como se puede ver en muchas de las sentencias que dictó. Voi a citar algunas de ellas por vía de ejemplo.

La casa de Gunston Edmonson i Ca. entabló una reclamacion fundándose en que la ocupacion por parte de Chile del litoral boliviano le habia privado de la garantia que tenia en favor de un crédito contra el Gobierno de Bolivia, por estarle hipotecado el ferrocarril de Mejillones i las rentas del litoral boliviano, que Chile habia empezado a percibir. El Tribunal, por unanimidad de votos, se declaró incompetente para conocer de esta reclamacion que evidentemente traia su orijen de la guerra, fundándose en que el acto ejecutado por la autoridad soberana de Chile, no era en si mismo una operacion de las fuerzas de mar o tierra de la República. «No citan (los reclamantes) decia el fallo, acto alguno ejecutado ya

por militares aislados, ya por cuerpos de tropas, que deban ser juzgados por el tribunal internacional; de lo cual se desprende necesariamente que este no tiene materia en que ejercitar jurisdicción.» (Sentencia número 55, páj. 302).

A juicio, pues, de aquel Tribunal, no bastaba que el acto del cual se reclamaba emanase remotamente de la guerra, sino que era menester que constituyese por si mismo una operacion bélica llevada a cabo por las fuerzas de la República.

D. Jaime Bishop reclamó a consecuencia de una orden dictada por el jeneral en jefe del Ejército de ocupacion del Perú para hacer ingresar en arcas del Ejército ciertos fondos que existian en un Banco a la orden del Gobierno provisorio de aquel pais, cuyo jefe era D. Francisco García Calderon. Esta medida no era en si misma una operacion militar; pero se llevaba a efecto a consecuencia de la ocupacion del territorio enemigo i en virtud del derecho de la guerra. El Tribunal se declaró incompetente por cuanto los hechos no constituian una operacion bélica sino actos meramente administrativos. [Sentencia número 78, páj. 440].

La inexecucion de un contrato pactado entre el Gobierno del Perú i la sociedad *Peruvian Guano Company*, contrato que no pudo llevarse a efecto a causa de la guerra, motivó otra reclamacion por indemnizacion de perjuicios; i el Tribunal, al declarar su incompetencia, hizo la siguiente observacion sobre la cual debo llamar mui especialmente la atencion de V. E. «Si correspondiera a este Tribunal el juzgamiento de la presente reclamacion, le corresponderia igualmente el de todas las demandas por falta de cumplimiento de obligaciones contraidas, aun entre los particulares, a causa de la imprevista i nueva situacion creada por el estado de guerra i de las innumerables consecuencias de ella: todo lo cual no es conforme, como queda dicho, ni al testo literal ni al espíritu de la Convencion» (Sentencia 90, p. 475).

De estas diversas resoluciones se colije fácilmente cual fué el alcance que aquel Tribunal dió á la frase de la Convencion de 4 de Enero de 1883: *actos i operaciones ejecutados por las fuerzas de mar i tierra de la República*, frase que ha sido copiada en la Convencion de 1893 que instituyó el alto Tribunal al cual me dirijo. No basta

que el perjuicio de que se reclama traiga su oríjen de la guerra o tenga con ella una relacion remota, sino que es menester que emane directa i próximamente de una operacion bélica destinada a destruir las fuerzas o recursos del enemigo.

Ninguno de estos caracteres tiene la reclamacion de Weir i C.^ª. La compra de mercaderías fué un contrato llevado a cabo entre el jefe de un cuerpo i la casa mencionada. En ejecucion de él se pagó la mayor parte del precio estipulado por las mercaderías; i seguramente no se pagó la totalidad de él a causa de los acontecimientos que sobrevinieron. Siendo tal el hecho, no es ni puede importar una requisicion militar, porque ninguna se llevó a cabo en esta ciudad, como es público i notorio. Ninguna necesidad habia tampoco de efectuar requisiciones de esta naturaleza en la capital de la República, que era el centro de los recursos del Gobierno. Este contaba con fondos suficientes para pagar los víveres i útiles que se necesitaban en los cuarteles; i nadie ha oído decir que en lugar de comprarlas, ocurriese al arbitrio de requerirlos.

Me parece, pues, de todo punto evidente que este reclamo no proviene de actos u operaciones militares; i que son los tribunales ordinarios, i no V. E., los llamados a conocer de él.

Apoyado en el doble motivo de no estar comprobada la nacionalidad de los reclamantes, i de no tratarse de actos sometidos a la jurisdiccion del Tribunal, insisto en sostener la escepcion de incompetencia que tengo deducida.

3 En mi contestacion objeté como insuficiente el poder con que el señor Mac Gregor ha asumido la representacion de Weir i C.^ª para entablar este reclamo. Al ordenar el Reglamento en su artículo V que el mandatario que reclama en nombre de otro justifique su personería, autoriza por el mismo hecho a oponer a la demanda la escepcion dilatoria de falta de personería. Ella se funda, ademas, en las reglas comunes a todo derecho procesal.

Ahora bien: el señor Mac Gregor podrá haber recibido autorizacion para muchas cosas en el mandato que se le otorgó en Valparaiso el 25 de Junio de 1892 i que ha exhibido junto con su memorial; pero basta la simple lectura de él para convencerse de que no fué autorizado por su mandante para comparecer en juicio ni

mucho ménos para ocurrir ante este Tribunal de arbitramento es-
cepcional. El mandato no faculta al señor Mac Gregor sino para
endosar letras i cheques i jirar a cargo de los bancos, ejecutando
al efecto las operaciones necesarias. En ninguna parte de él se
expresa que pueda estar en juicio a nombre de su mandante, ni
deducir acciones como la presente ante un Tribunal de carácter
escepcional.

Es, pues, perfectamente fundada la escepcion de falta de perso-
nería que tengo aducida i que mantengo.

4 En cuanto a los hechos espuestos por el reclamante, no puedo
aceptar el que se refiere a la fuerza o intimidacion que se supone
empleado por el Gobierno del señor Balmaceda para obtener los
víveres o provisiones cuyo valor se cobra. Sobre este particular
será menester que se rinda una prueba perfectamente clara i con-
vincente, lo que me parece imposible.

Entre tanto, suplico a V. E. que se sirva declararse incompeten-
te, o dar lugar al artículo de falta de personería. En subsidio,
espero se servirá rechazar esta reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

DESISTIMIENTO

Excmo. Señor:

Tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que de
acuerdo con instrucciones de los señores Weir i C.^{as}, vengo en
retirar la reclamacion número 54 que, a nombre de dichos señores
tengo deducida ante este Excmo. Tribunal.

Al mismo tiempo ruego a V. E. se sirva dar tambien por retirada
la reclamacion número 98 de don Humberto Mamport Williams,
por abrigar dudas acerca de su alegada nacionalidad británica.

FREDERICK KERR.

Santiago, Octubre 21 de 1895.

Téngase por desistido al agente británico, a virtud de la solicitud precedente, de las reclamaciones números 54 de Weir i C.^a i 98 de Humberto Mamport Williams i archívense los expedientes respectivos.

CAMILLE JANSSEN

ALFRED ST. JOHN

LUIS ALDUNATE.

Proveido por el Excmo. Tribunal en 21 de Octubre de 1895.

Diego Armstrong,
Secretario.

En 23 de Octubre notifiqué a los señores agentes de Chile i Británico.

M. A. MARTÍNEZ DE F.

FREDERICK KERR

Diego Armstrong,
Secretario.



RECLAMACION N.º 55

ODBER WELLESLEY HEFFER

MEMORIAL

Excmo. Tribunal:

Yo, Obder Wellesly Heffer, súbdito británico, nacido en el condado de St. John, provincia de San Juan, New Brunswick, en el Dominio de Canadá, el 1.º de Junio de 1860, como consta del certificado anexo i marcado A, i el cual no viene acompañado por el trámite de la legalizacion por una autoridad chilena, por la sencilla razon que no hai un oficial diplomático ni consular dentro del distrito notarial en donde fué hecha esta declaracion, i que al presente estoi ocupado en esta ciudad de Santiago, como fotógrafo de la casa del señor Leblanc, juro lo necesario i declaro al tenor lo siguiente:

1 Que durante la invasion de Valparaiso por las tropas victoriosas constitucionales, despues de la batalla de la Placilla el 28 de Agosto de 1891, yo arrendaba un departamento en la casa conocida de Gadina, situada en la Plaza Echáurren de aquella ciudad, i que habia ocupado desde cuatro meses anteriores a la fecha indicada, la dicha casa, incluso mi departamento en ella, fué completamente saqueada i en seguida quemada. Ignoro si esto fué hecho por las tropas victoriosas o la soldadesca desbandada del Gobierno caído.

En el momento del daño, cuyo valor vengo en reclamar, i que consiste en la pérdida total de los efectos personales especificados en el anexo, marcado B, yo estaba ocupado en el cumplimiento de mi deber, como oficial de la Guardia del Orden, en el Cerro de la Concepcion, durante aquella i las tres noches subsecuentes; i, por esta razon, no podia defender mis propios bienes, ni reconocer los autores del robo de ellos, por estar trabajando para asegurar el bien jeneral de la plaza.

El dia despues del saqueo de la casa, se encontraron numerosos soldados muertos, llevando aun los uniformes del ejército constitucional, en la vecindad de la propiedad destruida, i, de las averiguaciones que pude hacer, supe que solo esos soldados i sus compañeros podian haber destruido aquel predio, haciéndome una de las víctimas de esa destruccion. Pero, como dije ántes, estando ocupado en otra parte, en el sagrado deber de guardar la causa del órden durante esas angustiosas horas para el pueblo de Valparaiso, no pude desgraciadamente salvar mis pobres efectos, ni descubrir a punto fijo quiénes los robaron, pero puedo asegurar al Excelentísimo Tribunal que es así como los perdí tal como estan descritos en la lista anexa, pero no reclamo el valor orijinal de ellos, puesto que algunas piezas eran usadas, aunque todas ellas estaban en buen estado de servicio.

2 Que puedo probar lo antedicho con buenos testigos de los hechos.

3 Que la dicha lista de mis efectos es la verdadera, segun mis mejores recuerdos, aunque no reclamo el valor de ellos por la razon indicada.

4 Que el monto de mi reclamacion es la suma de *doscientas cincuenta libras esterlinas* (£ 250), con mas los intereses sobre esa suma a contar desde la fecha en que se produjeron los actos ocasionados de los daños sufridos, i hasta la solucion efectiva que en toda justicia i equidad el Gobierno de Chile debe de pagarme, en vista de las dos razones aducidas. Perdí mis pocos bienes en el momento mismo en que, en union de otros de mis paisanos, estaba haciendo todo lo que me era posible para salvar los bienes de otros i guardar el órden en las calles de Valparaiso.

5 Que ni directa ni indirectamente he tomado parte alguna en la última guerra civil, ni estuve en el empleo ni recibí sueldo de ninguno de los combatientes.

6 Que no he recibido compensacion alguna por la pérdida de mi propiedad cuyo valor reclamo, ni lo he presentado delante de otro Tribunal cobrándolo.

7 Los testigos cuyo testimonio me propongo hacer valer al tiempo oportuno en abono de uno u otro de los factores de que se compone esta reclamacion son: don Félix Leblanc, fotógrafo súbdito frances, vecino de Valparaíso; don Winfield S. Stern, súbdito de los Estados Unidos de América, vecino de Valparaíso, i don Guillermo H. Tolson, comerciante, súbdito británico, vecino de Valparaíso.

8 Que en conformidad con el artículo 11 del Reglamento del Excmo. Tribunal estoy preparado para ofrecer el testimonio necesario para probar esta relacion de los hechos, i para cumplir cualquiera otra condicion referente a esta mi reclamacion.

OBDER WELLESLEY HEFFER.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

El señor Obder Wellesly Heffer demanda £ 250 0 0, mas intereses valor atribuidos a objetos muebles que se dicen perdidos por saqueo o incendio en Valparaíso, la noche del 28 de Agosto de 1891.

Se acompaña una lista de los objetos que se suponen perdidos, en la cual es digno de observarse: el enormísimo valor antojadizamente atribuido a piezas de ropa o a objetos insignificantes, i la circunstancia de figurar entre estos botones o colleras de oro i otras joyas, i hasta una cartera con dos billetes de a \$ 100. ¿Por qué el reclamante, en vista del peligro, no guardó consigo esas joyas i esa cartera con dinero? La existencia de ellas i su posterior

destruccion ¿se cuenta entre los hechos que piensa probar con testigos? Seria absolutamente inadmisibile.

Fuera de aquella lista, solo se han acompañado al memorial dos certificados en ingles, que parecen espedidos en Sackville, Canadá, el 8 de Enero del presente año: el uno, por don Ricardo Heffer titulado padre del reclamante, que asegura la nacionalidad inglesa de éste; i el otro, por don Enrique A. Powell, titulado notario, quien, despues de averiguaciones hechas al respecto, se limita a emitir su creencia de que el aludido reclamante sea tambien súbdito ingles.

Ni uno ni otro de esos certificados aparecen legalizados de manera que revistan caracteres de autencidad. En ningun caso constituyen comprobantes emanados de funcionarios competentes para el caso; siendo de observar ademas que el del titulado padre seria interesado, que el del titulado notario nada afirma, i que ni uno ni otro establecen la identidad personal del reclamante.

De lo dicho, se desprende que aquel no ha acreditado su estado de súbdito ingles, a lo cual se agrega que en el memorial se han olvidado prescripciones como las relativas a la traduccion de documentos, a la formalidad del juramento, etc. Todo ello hace inadmisibile esta reclamacion.

Pero, aun supuestas la nacionalidad inglesa del reclamante i la correccion reglamentaria del memorial, la reclamacion tendria que ser desechada por no acreditarse ni la efectividad ni el monto de los perjuicios reclamados, i en todo caso, porque la República de Chile no responde de actos de merodeo o pillaje ejecutados, indeterminada i desautorizadamente, por soldadesca debandada o por turbas populares. El derecho i las prácticas internacionales concurren a considerar esos casos como de fuerza mayor, que eximen de toda responsabilidad.

Sobre la materia de esta reclamacion, se han presentado varias otras, a las cuales me refiero, reproduciendo aquí lo dicho por mi parte en contestacion a ellas. En cuanto sea aplicable al presente caso, reproduzco particularmente lo espuesto i alegado en mi duplica a la reclamacion número 3 del señor Egerton, i en mi contestacion a la número 11 del señor Barnett, quien habitaba la misma

casa Gadina que el actual reclamante, no habiendo habido en ella dúplica por no haber el señor Barnett creído conveniente replicar.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declarar inadmisibile esta reclamacion o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Al oponerse al reclamo del señor Obder Wellesly Heffer contra la República de Chile, mi honorable colega, el señor ajente de Chile alega:

1 Que el señor Heffer exajera el valor de la propiedad que perdió i que no es racional suponer que dicho señor hubiese dejado dinero i alhajas en su domicilio en una época tal como aquella en que sufrió las pérdidas mencionadas.

2 Que el señor Heffer no ha constatado su nacionalidad británica, mi honorable colega presumiendo, por lo visto, que las formalidades requeridas en tales casos por la lei chilena son reconocidas como un reglamento que el Tribunal Anglo-chileno debe imponer.

3 Que el Gobierno Chileno no puede ser considerado como responsable, segun el Derecho Internacional, por pérdidas sufridas en circunstancias tales como aquellas que prevalecian en Valparaiso en la noche del 28 de Agosto de 1891.

En contestacion a todo esto, me permito someter a V. E. las consideraciones siguientes:

1 El señor Heffer es un caballero de reconocida honorabilidad a quien no es dable suponer que perjurara para ganar una suma relativamente pequeña de dinero. Testigos honrados como los señores Le Blanc, Tolson i Stern, de Valparaiso, estan prontos a certificar respecto a lo intachable de la honradez del señor Heffer

como tambien a la verdad sustancial de sus aseveraciones en cuanto a los detalles i valor de las pérdidas.

Habiendo venido el señor Heffer a Chile por tres años, en vista de un contrato que hizo, se habia proveido de ropa i artículos necesarios para el ejercicio de su profesion, en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades durante el período referido. En el momento en que sufrió el señor Heffer las pérdidas que ahora reclama, servia en la guardia formada por residentes británicos de Valparaíso, mui distante de su domicilio. La única respuesta adecuada talvez a esta clase de argumento adoptado por mi honorable colega para combatir este punto seria preguntarle si alguna vez en su vida ha servido en una guardia urbana, i en caso afirmativo, si le pareció bien acapararse en vestidos de etiqueta i poner todo su dinero i valores, por mayor seguridad en el bolsillo.

II El Reglamento solamente exige a los reclamantes que declaren si son súbditos británicos. En vista de la vaguedad en los términos de esta cláusula, el señor Heffer naturalmente consideraba que un juramento prestado por su padre ante un notario público, i sostenido por el conocimiento que tienen sus amigos i conocidos en Chile respecto a su nacionalidad (habiendo sido adquirido este conocimiento antes de que ocurriese cualquiera cosa que hiciera ventajoso para el señor Heffer preferir una nacionalidad sobre otra) seria suficiente para satisfacer a V. E. Si en esto se equivocó el señor Heffer, no dudo que V. E. tomará en cuenta la manera en que está redactado el Reglamento i no permitirá que se perjudique el reclamo por tales motivos, o a lo ménos, que concederá mas tiempo para permitir al señor Heffer conseguir las pruebas de su nacionalidad que a V. E. le parezcan necesarias.

III Respecto a la cuestion de responsabilidad por los disturbios en Valparaíso el día 28 de Agosto de 1891, me permito invitar la atencion de V. E. a ciertas circunstancias de pública notoriedad. El señor Oscar Viel, intendente de Valparaíso i representante responsable allí del Presidente Balmaceda, ántes de la batalla de la Placilla, negó la súplica de los habitantes de Valparaíso pidiendo permiso para formar guardias urbanas para la proteccion de sus vidas i propiedades en el caso de tener lugar disturbios cual aque-

llos que efectivamente tuvieron lugar, los que tenían que ser esperados como el resultado de una batalla decisiva en los alrededores de Valparaíso. Sin embargo, apesar de la negativa del intendente, algunos residentes extranjeros organizaron privadamente una guardia con el objeto de proteger los dos cerros donde residen la mayor parte de los ingleses i alemanes. Esta guardia, junto con marineros i soldados de los buques de guerra ingleses i alemanes, (lo que se permitió a última hora cuando ya los fujitivos de Placilla principiaron a llegar en número crecido), funcionó, i así fué eficazmente protegido el barrio donde residían la mayor parte de los ingleses i alemanes en Valparaíso del incendio i saqueo que dominaba por horas en otras partes del pueblo i sobre todo en el barrio en que estaba situado el domicilio del señor Heffer, todo lo cual es de presumir se habría podido evitar si no se hubiese prohibido a los habitantes por orden del intendente señor Viel a preparar iguales medidas de precaución.

Ademas, al fijar el grado de responsabilidad en que incurrieron los oficiales al mando del ejército constitucional en consecuencia de la acción de sus soldados en la noche referida, se debe recordar que la esfera de la batalla de Placilla se hallaba distante a lo ménos dos leguas de Valparaíso; que no había fuga, ni por consiguiente, persecución del enemigo; i que fué posible inmediatamente despues de la batalla, establecer perfecta disciplina en el ejército victorioso que marchaba entónces bien ordenado en las alturas de Placilla a dos horas de camino de Valparaíso; que esto se hizo a las diez de la mañana, i que solo en la tarde entraron, en buen orden las tropas a la ciudad.

Me atrevo a sostener, pues, que debía haber sido a consecuencia de un descuido culpable i evitable, por lo cual el Derecho Internacional fija la responsabilidad, que los soldados de dicho ejército despues obtuvieron licencia suficiente para permitirles ser los autores del saqueo e incendiarismo que fueron la causa de las pérdidas cuya indemnización de parte del Gobierno de Chile pide el señor Heffer.

FREDERICK KERR.

DÚPLICA

Excmo. Señor:

Paso a duplicar en la reclamacion del señor Heffer, que demanda £ 250-0-0 e intereses por objetos de uso personal que dice haber perdido por saqueo e incendio, en Valparaiso, el 28 de Agosto de 1891.

1 En orden a la necesidad de acreditarse fehacientemente por el reclamante el estado de súbdito ingles por nacimiento que se atribuye, no encuentro yo que el Reglamento de procedimientos dictado por V. E. adolezca de la vaguedad i de los defectos de redaccion que mi honorable colega, el ajente británico, ha creido ver en él. Desde que se pensó en la constitucion de este Tribunal Anglo-chileno, nadie ha podido poner en duda que tendrian derecho de ocurrir ante él como reclamantes únicamente los que llenaran el requisito de ser súbditos británicos; luego, debian de comenzar por acreditar la posesion de ese requisito, no bastando afirmar esa posesion, porque en derecho no vale aseverar sin probar.

¿Cómo se rendirá aquella prueba? No he sostenido yo que deba rendirse conforme a la lei chilena: sostengo que debe rendirse por los medios determinados por el Derecho Internacional. Sobre ellos i sobre su fuerza probatoria, ese Derecho se refiere a la lei del lugar en que se ha pasado el hecho que se trata de probar, el cual es, en nuestro caso, el hecho del nacimiento del señor Heffer en el Canadá (Art. 3.º del Reglamento sobre procedimientos judiciales adoptado por el Instituto de Derecho Internacional, *Anuario* de 1877, p. 150).

Tanto la lei chilena (art. 305 del Código Civil), como el acta inglesa de 1874 sobre el estado civil i, seguramente, como la lei canadiense de 1893 sobre prueba judicial, a que hace referencia la declaracion atribuida al padre del reclamante; tanto esas leyes como las análogas vijentes en los demas paises de Europa i de América, exigen en jeneral como prueba del nacimiento la presentacion de la copia o extracto de la partida asentada en el res-

pectivo registro civil, con la firma del funcionario encargado de éste, es decir, instrumento o acto auténtico. Si en nuestro caso la lei del Canadá dispusiera escepcionalmente otra cosa, lo que no sucede, segun se desprende de la propia referencia citada, tocaria al reclamante acreditar la existencia de la disposicion i presentar el testo auténtico de ella. (Calvo, *Le Droit International*, 46 ed., 1888, t. II, 883 et s.)

La declaracion atribuida al señor Richard Heffer, que aparece firmada el 8 de Enero de este año por un señor Powell titulado notario de Nueva Brunswick, no puede suplir la falta del indicado instrumento auténtico; no dejando por lo demas, de parecer bien extraño que, pudiendo pedirse al Canadá lo mismo la declaracion paterna que el referido instrumento público, se prefiriera pedir aquella ántes que éste.

Aun en la hipótesis de ser admisible, como prueba de nacimiento, la declaracion del padre del interesado firmada ante un notario, en nuestro caso no puede V. E. aceptar como auténtico el indicado documento: no estando debidamente legalizadas las firmas con que aparece, nada asegura que ellas sean efectivamente las de los señores Heffer i Powell i que estos tengan las calidades que en el documento se les atribuyen. La circunstancia accidental de no haber funcionario consular chileno en un lugar no exime al que presenta documentos otorgados allí de la obligacion de acreditar la autenticidad de ellos, ni puede dar a V. E. la facultad de imponer como auténtico, sin mas trámites cualquier papel que se le presente. La falta de un cónsul chileno puede ser suplida por otro de cualquiera nacion, segun es de derecho diplomático, i ha sido usado por algun otro reclamante ante V. E.

El señor Heffer, obligado por la naturaleza de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, i particularmente, por lo dispuesto en el art. III de la misma, reiterado en el IV del Reglamento, ha debido acreditar especialmente su estado i carácter neutral, esto es, de súbdito ingles. De no haberlo hecho, resulta que V. E. excederia sus poderes si entrara a conocer de esta reclamacion, i no se declarara previamente incompetente, como lo pido a V. E.

Así procedieron constantemente las diversas Comisiones Mistas

de Washington, muy estrictas, además, con ser de equidad, en puntos de autenticidad i legalización de documentos; i lo mismo hicieron los Tribunales Arbitrales de Santiago (1884-1888), mas análogos a este por ser *de justicia*, declarándose incompetentes en casos como el presente: el Anglo-chileno, en las sentencias núms. 6 i 86 i otras, espresándose en la primera que la prueba de la nacionalidad «ha debido traerse a los autos como antecedente previo de la reclamación;» el Italo-chileno, en las sentencias núm. 26, 30, 31, 32, etc., i particularmente en la núm. 47, en la cual se considera justamente el principio de nulidad de los fallos en cuanto éstos alcanzaron a personas estrañas a las incluidas en la Convención.

2 Lijeramente hice notar en mi contestación la circunstancia de que tanto la referida declaración como el respectivo certificado notarial venidos de New Brunswick, cuya autenticidad i fuerza probatoria me ha sido imposible aceptar, no se habían presentado sino en inglés, contrariándose con esto la terminante disposición del art. II del Reglamento de Procedimientos, que exijía su presentación también en castellano, para facilitar así la defensa del Gobierno reclamado. La informalidad subsiste, i toca a V. E. calificarla.

Mas grave es la informalidad, que asimismo hice notar, en orden a la prestación del juramento con que, según el art. IX del citado Reglamento, ha debido el reclamante confirmar todos los hechos aseverados por él en el memorial. No es posible desconocer la importancia de esta condición, sustancial de la presentación. Exijido en favor del Gobierno reclamado, para garantir la sinceridad de la exposición hecha por el reclamante, el juramento se impone a éste con toda la fuerza de la sanción que la religión i la lei penal descargan sobre el perjurio. Por eso debe observarse estrictamente; i si en nuestro caso no se ha dado para la presentación una fórmula sacramental, debe el juramento, a lo ménos, espresar sustancialmente lo que el Reglamento determina.

El actual reclamante, como muchos otros, ha prescindido de los términos reglamentarios a aquel respecto. Hizo poner solo en inglés, al pie del memorial estas testuales palabras «Jurado por Mr. Odber Wellesley Heffer en Santiago el día 23 de Abril de

1893», i como el Reglamento requiere que el juramento por él determinado sea recibido i legalizado por un funcionario diplomático o consular, se agregaron a aquellas palabras estas otras: «Ante mi (firmado) *Frederick Kerr*, vice-cónsul».

Quien así firma, como ministro de fé contra Chile, es mi honorable colega, el señor ajente del Gobierno de S. M. B. ante V.E.; el constituido, a virtud del art. IV de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, para vijilar los intereses de los reclamantes, atender a su defensa, presentar peticiones, rendir prueba, etc, etc.

Dejando a la apreciacion de V. E. esa particularidad, debo insistir en que el juramento prestado en la forma indicada, insustancial i vana, no es juramento de nada, no es en ningun caso el juramento o declaracion solemne prescrita por el citado art. IX del Reglamento, un juramento susceptible de dar origen a una acusacion de perjuro, como todo juramento asertivo de un hecho determinado. Prestado en tales condiciones, puede decirse que, virtualmente, el juramento no ha existido, en nuestro caso, produciendo la omision la inadmisibilidad de la reclamacion, si el Reglamento no de ser impunemente burlado.

En Setiembre de 1893 se reunió en La Haya la primera conferencia de Derecho Internacional privado, presidida por Asser con asistencia de delegados de trece Estados europeos, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, etc. La conferencia adoptó la regla siguiente, que puede aplicarse en nuestro caso: «Cuando la lei que rije una disposicion exige, como condicion sustancial, que el acto tenga una forma solemne, las partes no pueden servirse de otra forma». (*Revue de Droit International, Bruxelles, 1893, p. 531*).

3 Espuse en mi contestacion que consideraba enormísimo el valor de £ 250 0-0, equivalente a \$ 3,333 de nuestra moneda, atribuido por el reclamante a la lista presentada de los objetos que dice haber perdido. Despues de la réplica, me confirmo en lo dicho. Para creerlo así, basta fijarse un poco en los valores atribuidos a aquellos objetos i tener ademas presente: que el reclamante no poseia mueble alguno suyo, pues habitaba un cuarto amueblado de la casa Gadina, en la cual alquilaba otro el señor Barnett (reclama-

cion núm. 11); i que todos los efectos enumerados consistian en ropas usadas i en objetos insignificantes de uso personal.

Cierto que entre los dichos efectos figuran algunas joyas i hasta una cartera con dos billetes. cuyo abandono no alcanza a ser satisfactoriamente explicado con decir que el reclamante fué aquella noche a servir en una guardia urbana, en paraje distante de su casa, i que así no era natural que llevara aquellos billetes en su bolsillo: lo natural era, a mi juicio, que no hubiera abandonado la guarda de su casa para ir a guardar las ajenas, ya protegidas por las fuerzas desembarcadas de la Escuadrilla inglesa; no obstando nada, por lo demas, a que llevara consigo su cartera con billetes, etc.

En cuanto a dinero, alhajas, objetos de arte, etc., si han de servir los precedentes, su pérdida no da, en jeneral, derecho a indemnizacion, por razones cuya justificacion se puso de manifiesto con ocasion del decreto espedido por el Khedive de Ejipto el 15 de Enero de 1883, motivado por el motin e incendio ocurridos en Alejandria el año precedente, i con el objeto de satisfacer las reclamaciones de estranjeros. a las cuales aquéllos dieron lugar. Segun el art. II de dicho decreto khedival, aceptado por las diversas potencias europeas, quedó establecida la regla de que no darian derecho a indemnizacion las pérdidas de dinero, alhajas, etc. (Véase sobre esto el *Alegato del Ajente Chileno ante la Excm. Comision Mista Italo chilena en la reclamacion núm. 288 de Benedetto Bregante contra el Gobierno de Chile*, pp. 165 a 187, Santiago, 1887.)

Son evidentes las razones a virtud de las cuales todas las legislaciones modernas han restringido la admision de prueba testimonial a mui estrechos limites, a casos de mui reducida cuantía cuando no se aduce algun otro antecedente que haga verosímil el hecho litijioso. Sin eso. tan fácil es, en jeneral, por medio de testigos acreditar una existencia de mil como otra de un millon. En ningun caso debe confundirse la prueba del hecho de un incendio o saqueo, por ejemplo, con la prueba del valor o cuantía, de los objetos que se suponen perdidos: la última no podria ser exclusivamente testimonial.

En resumen, no ha probado el reclamante ni que en su habitacion tuviera todos los objetos enumerados en la lista presentada, ni que

todos se perdieran saqueados o incendiados, ni que los mismos representaran los valores que antojadizamente se les ha atribuido. Con los tres testigos ofrecidos en el memorial, de solo dos de los cuales se indica la profesion, ¿probará todo aquello el reclamante? No lo creo posible.

Se dice en la réplica que el señor Heffer es un caballero muy honorable, incapaz de perjurar para ganar una suma pequeña de dinero. Por mi parte, no pongo eso en duda, ni aun para el caso de tratarse de una suma grande de dinero. El señor Heffer es honorable. Supongo que todos los reclamantes lo son; pero, tal circunstancia no tiene para qué ser alegada en una discusion judicial como ésta: este Tribunal no está llamado a pronunciarse sobre la honradez, sino sobre la justicia de los reclamantes, ni la honorabilidad de éstos los exime de la obligacion de jurar i de probar la verdad de lo que aseveren, conforme a las disposiciones legales i reglamentarias relativas a la prueba judicial.

4 Precisamente la propia honorabilidad del señor Heffer hizo que en el memorial juramentado confesara que ignoraba cómo i por quiénes se produjo el incendio de la casa Gadina, que él no pudo presenciar. Atendiéndose a lo que con posterioridad pudo averiguar al respecto, avanzó la suposicion de que los autores del atentado fueran soldados del ejército constitucional, por haberse encontrado muchos de éstos muertos en la vecindad de la casa, segun lo refirieron. No cabe un antecedente mas lijero para deducir una consecuencia mas grave.

Si robos hubo, fueron sin duda de los objetos estraidos de las habitaciones i almacenes i sacados a la calle para escaparlos del incendio, en circunstancias de que el desbande súbito de la antigua policia i la falta de tiempo para organizar la nueva hacian casi imposible una severa vijilancia.

Era aquella casa una vasta construccion de varios pisos, situada en la plaza Echáurren, un gran conventillo en cuyos altos habia 60 piezas alquiladas a jentes de todas condiciones, i en cuyos bajos habia diversidad de tiendas, almacenes i despachos. Era un hormiguero humano, espuesto, aun mas que otras casas, al peligro de un incendio involuntario. Ya se habia reconstruido poco tiempo ántes,

sobre las ruinas de otro incendio; i si el peligro existia en todo tiempo debió naturalmente ser mayor en la noche del 28 Agosto de 1891, atendidas las estraordinarias circunstancias de aquel día de batalla que produjo tan estrepitosas i jenerales manifestaciones de alegría, en el cual se destamparon muchas botellas, se encendieron muchas luces, se avivó el fuego en las cocinas, etc. I si todo esto es cierto i si nadie acusa a nadie determinadamente de ser autor del incendio ¿por qué se discurre como si éste hubiera sido intencional, cuando nada autoriza tal suposicion?

Pero, aun en la hipótesis, verdaderamente inadmisible, de haber sido intencional el incendio de la casa Gadina, no hai antecedente alguno que permita atribuir ese crímen a soldados de la República. Todo cuanto a este respecto se ha insinuado, descansa en suposiciones desprovistas de todo fundamento plausible. Ni el reclamante señor Heffer, ni el referido señor Barnett se han atrevido sino a insinuarlo en términos vagos i jenerales, segun los cuales andarian unidos al populacho algunos soldados. Hablando en jeneral sobre los desórdenes de la referida noche en Valparaiso, i particularmente sobre un incendio de la avenida de las Delicias, los señores Betteley i C.^a. (reclamacion N.º 47) no hacen en su memorial jurado ni siquiera aquella vaga insinuacion: afirman allí simplemente que dicho incendio fué causado *por el populacho* o, como dicen en otra parte, *por una turba de malhechores*.

Quiero llevar bien lejos las concesiones i admitir así, hipotéticamente, que entre las turbas desordenadas anduvieran mezclados algunos soldados. Serian, en todo caso, soldados dispersos, entregados a actos de merodeo o pillaje, fuera de la vijilancia i autoridad de sus jefes.

Porque ninguno de los que han reclamado ante V. E. con motivo de los referidos desórdenes de Valparaiso ha osado insinuar siquiera el hecho de que dichos desórdenes se cometieran a la vista de jefes u oficiales del ejército, no digo con su intervencion o tolerancia. ¿De dónde resultaria, pues, la responsabilidad de la República a favor de los reclamantes?

¿Segun por el señor Heffer se dice en la dúplica, la responsabilidad de la República resultaria de haber sido culpables de descui-

do las autoridades de Valparaiso. Para decirlo, se funda en dos hechos que por primera vez se esponen en la réplica, para la cual se tenian reservados, i que el replicante da por verdaderos sin acreditarlos de modo alguno.

Mi honorable colega replicando cuenta que, ántes de la batalla de la Placilla i en prevision de desórdenes que se consideran naturales, los habitantes de Valparaiso (sic) solicitaron del intendente don Oscar Viel permiso para formar guardias urbanas i que dicho permiso les fué negado, lo que no obstó a que algunos extranjeros organizaran una guardia que mas tarde prestó a la colonia británica eficaz proteccion.

Parece entender mi honorable colega que con aquella negativa el intendente señor Viel hubiera incurrido en una violacion de lei internacional, que da derecho a reclamacion contra la República. Seria un grave error. En ningun pais civilizado puede la autoridad confiar a otros que sus ajentes el cumplimiento de su primordial deber de atender a la seguridad pública. Autorizar la formacion de cuerpos particulares armados, sin estricta sujecion a dicha autoridad, sin que ésta pudiera en todo caso responder por ellos, seria impropio de un Gobierno medianamente constituido, seria en todo caso peligroso, i seria en tiempo de revolucion peligrosísimo para la misma seguridad de la poblacion i para la propia estabilidad del Gobierno. Acordada la peticion de los habitantes de Valparaiso, cuyo 19% era hostil a la autoridad, segun declaraciones de los ajentes de Gobiernos extranjeros, que en la reclamacion tercera he citado; acordada aquella autorizacion i armados los habitantes, tengo por cierto que el primer pensamiento de la titulada guardia urbana habria sido el de derrocar al intendente.

Si hubo extranjeros que, siguiendo, segun se ha dicho, la voz de un ministro protestante, desobedecieron las disposiciones jenerales de policia i la negativa particular del intendente señor Viel para cargar armas, eso quiere decir que se hicieron reos de un grave delito i que deben haberse dado por muy contentos con haber escapado a la dura sancion del Código Penal.

Por lo demas, que dias antes de la batalla de la Placilla la autoridad disponia de los medios necesarios para la conservacion del

orden público en Valparaíso, sin necesidad de guardia especial de paisanos, lo prueba el hecho de no haberse alterado éste ni por un solo instante antes de aquella batalla; i si, a pesar de la anterior prohibicion, una guardia urbana de que formó parte el reclamante, se organizó i ayudó a prestar proteccion especial a la propiedad de los ingleses, despues de la batalla, no sé yo de que puedan aquellos quejarse con razon. Siempre estuvieron mas atendidos que los nacionales sin tener sobre estos derecho o preferencia alguna.

El otro hecho invocado para acusar de culpable descuido, no ya al Intendente señor Viel, sino a las nuevas autoridades que ocuparon la plaza de Valparaíso en la tarde del 28 de Agosto de 1891, consiste en que, segun dice el replicante, los soldados victoriosos obtuvieron licencia, quiere decir franquía, lo que les habria permitido tomar parte en los desórdenes populares. El hecho no está comprobado, como no lo está el anterior: la verdad es que aquellos soldados llegaron a encerrarse en sus cuarteles, sin tener franquía, i que, en realidad, no estaban en situacion de usarla: llegaron a tenderse sobre el suelo, rendidos por el sueño i la fatiga, costando grandísimo trabajo obtener que muchos se levantasen para salir a mantener el orden en la ciudad, haciendo sobre las turbas aquellas mortíferas descargas de que habla el contra-almirante alemán, señor de Valois, en su consabida nota del 1 de Setiembre.

6. Nó, Excmo. señor. A ser efectiva la pérdida de que el reclamante se queja, lo que por mi parte no doi por probado, ella seria consecuencia natural del estado de guerra, caso de fuerza mayor, que en derecho no impone responsabilidad a ningun Gobierno. Jamas podrá probarse en nuestro caso que las autoridades de Valparaíso tuvieron tales o cuales medios suficientes para impedir los desórdenes i que no los hicieron valer con ese fin, por maldad o por negligencia culpable.

Por mi parte, no obstante que no corresponde la carga de la prueba al Gobierno inculpado i que no es en rigor necesaria para que pueda V. E. decidir con pleno conocimiento de causa, reitero aquí, sobre los referidos incendios i desórdenes de Valparaíso i sobre la conducta de las autoridades en aquellas circunstancias, el ofrecimiento de los testigos ofrecidos en las reclamaciones anteriores

relacionadas con los mismos sucesos que han motivado la presente.

Finalmente, en orden a alegaciones de derecho, opiniones de tratadistas i precedentes de cancillerías i de tribunales análogos a este, reproduzco aquí, en cuanto sea aplicable a nuestro caso, todo lo dicho por mi parte en las referidas reclamaciones anteriores relativas a los mismos tumultos de Valparaíso, las cuales llevan los núms. 3, 11, 31, i 47. Particularmente, me refiero a lo espuesto en mi dúplica núm. 3.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio. no dar lugar a su admision o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Odber Wellesly Heffer, nacido en New Brunswik, dominio del Canadá, reclama del Gobierno de Chile doscientas cincuenta libras esterlinas (£ 250) por pérdidas sufridas a consecuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en Valparaíso poco despues de la batalla de Placilla.

El reclamante espone que el 28 de Agosto de 1891 arrendaba un departamento en la conocida casa *Gadina*, situada en la plaza Echáurren, Valparaíso; que durante la invasion de las tropas victoriosas, inmediatamente despues de la batalla de Placilla, dicha casa fué saqueada e incendiada; que ignora si estos desmanes fueron perpetrados por soldadesca desbandada del Gobierno caído o por las tropas triunfantes, pues en ese tiempo el reclamante, sirviendo a los intereses jenerales, prestaba sus servicios como guardia del orden en el cerro de la Concepcion; que a consecuencia del espresado saqueo e incendio perdió todos los efectos personales que tenia en el departamento que ocupaba en la casa *Gadina*, pérdidas

que estima en doscientas cincuenta libras (£ 250), valor que reclama del Gobierno de Chile, mas los intereses de esa suma a contar desde la fecha en que recibió el daño hasta la solución definitiva de esta reclamación.

Acompaña una lista con los precios respectivos de los bienes perdidos i dos certificados en inglés acerca de la nacionalidad del reclamante.

El agente de Chile, contestando, espone: que es enormísimo el valor que antojadizamente se atribuye a los objetos que se dicen perdidos; que el reclamante, en vista del peligro en aquel día, debió guardar consigo las joyas i dinero; que la prueba que ofrece rendir para justificar las pérdidas sería inadmisibles; que los certificados que acompaña para establecer su carácter de súbdito británico no aparecen legalizados ni revisten carácter la autenticidad i que en ningún caso constituyen comprobantes emanados de funcionarios competentes para el caso; que de lo dicho se desprende que el reclamante no ha acreditado su carácter de súbdito inglés, a lo que se agrega que en el memorial no cumple con las prescripciones del reglamento relativas a traducción de documentos, formalidad del juramento, etc. todo lo cual hace inadmisibles esta reclamación; que aun suponiendo la nacionalidad inglesa del reclamante i la corrección reglamentaria del memorial, la reclamación tendría que ser desechada por no acreditarse la efectividad ni el monto de los perjuicios reclamados i porque el Gobierno de Chile no responde por actos de merodeo o pillaje ejecutados por soldadesca desbandada o turbas populares, pues el derecho i práctica internacionales consideran esos casos como de fuerza mayor que eximen de toda responsabilidad; que reproduce, en lo que sea aplicable al caso presente, lo dicho en la réplica de la reclamación número ; i contestación número 11. En conclusión, pide que el Tribunal no admita esta reclamación o la deseche en todas sus partes.

En la réplica i réplica se debaten los mismos hechos i doctrinas, i

Considerando: que el reclamante Obder Wellesly Heffer afirma que el 28 de Agosto de 1891 ocupaba un departamento en la casa *Gadina*, plaza de Echáurren, en Valparaíso, donde tenía efectos personales de un valor de doscientas cincuenta libras esterli-

nas [£ 250]; que ignora si soldadesca desbandada del Gobierno caído o tropas del ejército triunfante saquearon i prendieron en seguida fuego a la casa *Gadina*, perdiendo el reclamante todos los efectos personales que tenia en el departamento que ocupaba en ella;

Considerando: que la batalla de la Placilla, que dió por resultado la caída definitiva del Presidente Balmaceda, se libró el 28 de Agosto de 1891 i a seis kilómetros, mas o menos, de la ciudad de Valparaíso; que la noticia de la victoria del partido congresista se supo en esa ciudad como a las diez de la mañana, como lo comprueba el parte dirigido al Almirantazgo por el capitán St. Clair de la marina inglesa que mandaba el buque de guerra *Champion*, surto entónces en la bahía de Valparaíso. [*Blue Book. Correspondance respecting the revolution in Chili*, año 1892, Núm. 1, page 253]; que los soldados del ejército derrotado se refugiaron en el pueblo de Valparaíso, como lo constata el cónsul jeneral de Inglaterra señor Lewis Joel en una comunicacion dirigida en 1.º de Setiembre al Foreign Office [loco citato, página 250];

Considerando: que como a las 11 i media de la mañana el intendente de Valparaíso, contra-almirante Viel, convencido de su impotencia para continuar la resistencia i para garantir el orden público, se dirigió espontáneamente a los jefes de las escuadras extranjeras al ancla en el puerto, i les solicitó hicieran bajar a tierra un contingente de sus marinerías i que intervinieran en la rendicion de la plaza al partido victorioso. [Telegrama del contra-almirante alemán de Valois al almirantazgo de Alemania, *Libro Blanco* número 243]; que desde el medio día, soldados de marina de las escuadras alemana, inglesa, francesa i de los Estados Unidos desembarcaron i se distribuyeron en los barrios que principalmente habitaban los extranjeros; que el cónsul jeneral británico, en su comunicacion preindicada, estima el total de estas tropas de marina en 700 hombres;

Considerando: que solo despues que hubieron desembarcado las fuerzas extranjeras i de la entrevista que tuvo i que él solicitó con los almirantes de las escuadras en el momento de penetrar las avanzadas del ejército victorioso fué cuando el intendente Viel se

refugió a bordo del buque de guerra aleman *Leipzig* [*Blue Book*, loco citato]; que en la tarde dos batallones de infantería i alguna fuerza de caballería ocuparon la ciudad i que hácia las 4 P. M. el Estado Mayor instaló su Cuartel Jeneral en los edificios de la Intendencia;

Considerando: que segun los partes oficiales del comandante de la escuadra inglesa i del cónsul jeneral británico, no se perturbó el orden durante el resto del día 28 de Agosto i que no fué sino al entrar la noche que soldados desmoralizados i el populacho cometieron excesos en la ciudad e incendiaron algunas casas, disturbios que duraron hasta venir el día; que resulta del parte del capitán inglés St. Clair, que el pueblo se habia apoderado de los fusiles abandonados por los soldados vencidos i que éstos en su fuga se despojaron de sus uniformes, a fin de no ser conocidos i tomados prisioneros; que todos estos hechos están confirmados por el contra-almirante George Brown de la marina de los Estados Unidos, [*Correspondencia oficial relativa a Chile*, Washington, 1892, páj. 284] como tambien por el contra-almirante aleman de Valois i el cónsul aleman en Valparaíso, en sus comunicaciones de 1.º de Setiembre de 1891, [*Libro Blanco*, números 261 i 259]; que el mismo almirante de Valois constata que «durante toda la noche se oían descargas de fusilería, mas o ménos nutridas, hechas, principalmente, por las patrullas del partido congresista contra los saqueadores e incendiarios».

Considerando: que el Gobierno del partido vencedor nombró sin tardanza un nuevo intendente don Euljio Altamirano, quien se hizo cargo inmediatamente del puesto i dirijió el 29 de Agosto una proclama a los habitantes de Valparaíso;

Considerando: que resulta de todos estos hechos, constatados oficialmente por las autoridades estranjeras que allí estuvieron presentes, que si a pesar de las medidas que se tomaron, disturbios graves se produjeron en Valparaíso en la noche del 28 al 29 de Agosto de 1891, no puede hacerse de ello responsable al Gobierno puesto que en las circunstancias difíciles del momento, despues de una batalla sangrienta, que ponía término a una guerra civil que habia sobrexitado los ánimos, habia tomado todas las medidas que

estaban a su alcance; que la resolución extrema de solicitar de los comandantes de las escuadras el desembarco de tropas extranjeras, comprueba suficientemente que no hubo de su parte ni la negligencia ni imprevision capaces de comprometer su responsabilidad;

Considerando: que el reclamante dice que ignora si soldadesca desbandada del Gobierno caído o tropas del ejército triunfante fueron los que perpetraron el saqueo e incendio de la casa *Gadina* sin espresar que fueron soldados que estuvieran bajo la vijilancia de sus jefes; que resulta de las comunicaciones oficiales, citadas anteriormente, como un hecho mui verosímil, cosa que tambien dicen el comandante de la escuadra inglesa, el cónsul jeneral británico, i los otros funcionarios extranjeros que los excesos se cometieron por soldados fujitivos i populacho armado, excesos que la autoridad estaba en ese momento en la imposibilidad de reprimir de una manera completa i eficaz;

Considerando: que cuando un Gobierno está temporalmente incapacitado para dominar en su territorio los actos de particulares o de una parte del pueblo, que se ha sustraído a su autoridad, por medio de una sublevacion, de una guerra civil o de disturbios locales, no es responsable de los daños sufridos por extranjeros;

Considerando: que si el Derecho Internacional prescribe a las autoridades militares de una nacion belijerante, el que ejercite todas sus facultades para hacer respetar, por todas las personas que estuvieren bajo su dependencia, los bienes terrestres de los ciudadanos pacíficos, no hai nada que pruebe que los excesos relativos que la ciudad de Valparaiso hubo de experimentar fueran perpetrados por los soldados del ejército victorioso, únicos sobre los cuales los jefes habian conservado autoridad; que es ademas aceptada como doctrina legal i por la jurisprudencia que los actos de merodeo o pillaje practicados por soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes, no afectan la responsabilidad de los Gobiernos; que tales hechos se consideran como delitos comunes sujetos a la represion penal ordinaria. [William Edward Hall, *Treatise on International Law*, Oxford, Third Edition, 1890, páje 218.—Bluntschli, *Le Droit International Codifié*, artículo 380 bis.—Dudley Field, *Cod. International*, páje 249 i 271.—Revue 1895,

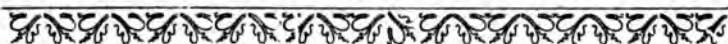
núm. 3, may, juin. *Tribunal Arbitral de Washington*, 1894, sentencia núm. 4, páj. 141. *Tribunal Arbitral Anglo-Chileno de 1894*, sentencia núm. 50, páj. 351. *Tribunal Arbitral Italo-Chileno de 1884*, sentencia núm. 96, páj. 305].

Por estos fundamentos, el Tribunal Arbitral por mayoría de votos disintiendo el árbitro británico, declara al Gobierno de Chile irresponsable de las pérdidas sufridas por el reclamante Obden Wellesly Heffer.

Santiago, 11 de Noviembre de 1895.— CAMILLE JANSSEN.—
ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 11 de Noviembre de 1895.
—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 56

LUIS E. TOMPSON

MEMORIAL

Luis E. Tompson, súbdito inglés, ingeniero, nacido en Straford, provincia de Ontario, dominio del Canadá, el 29 de diciembre de mil ochocientos cincuenta i seis, según consta del certificado que en debida forma acompaño, a V. E. con el debido respeto espongo: Que el veintinueve de Agosto de mil ochocientos noventa i uno, residía con mi familia tranquilamente en la calle de Búlness, núm. 8, de esta ciudad, casa que tenía completamente amueblada con el menaje que se detalla en la lista adjunta.

A las nueve de la mañana, mas o ménos, de ese día una partida de jente, perfectamente disciplinada, que obedecía a determinadas personas que llevaban una lista de las distintas casas que debían saquear, se detuvieron delante de la mía, rompieron la puerta de calle que se encontraba cerrada i sustrajeron cuanto existía en la casa, dando gritos feroces de venganza contra el partido vencido en la guerra civil i sus principales hombres.

Mi familia i yo no tuvimos mas que el tiempo indispensable para salvar los muros interiores de la casa i ponernos en salvo de una muerte casi segura.

Tratando de averiguar el motivo por que yo había sido saqueado, se me dijo que se creía que en mi casa existían los muebles de don

Acario Cotapos: pero el hecho era inexacto, porque dichos muebles fueron salvados, segun supe despues, por el dueño de la casa que arrendaba el señor Cotapos, i yo no tomé parte alguna en esa operacion.

La esposicion anterior la acredito con el manifesto del ministro inglés dirigido a su Gobierno, advirtiendo que en dicho manifesto existe un error en cuanto la aseveracion que se hace de que existian en mi casa los muebles del señor Cotapos.

Esta esposicion la acredito igualmente con los testigos siguientes: J. Clyde Macartney, americano, de profesion dentista, residente en la calle de Moneda, núm. 41; don José Varalla, italiano, profesor de música, residente en el Conservatorio de Música; doña Elisa Osorio v. de Oddo, chilena, que vive de sus rentas, residente en la calle de Búlnes núm. 37; doña Valentina Oddo, chilena, sobrina de la anterior; don Luis Oddo, chileno, comerciante, residente en Iquique, don Juan Kirk, americano, empleado, residente en la calle de Moneda, núm. 224; señoras Elisa i Micaela Prado, chilenas, residentes en la Alameda de las Delicias, núm. 11, sin profesion; don Adolfo Novoa, chileno, comerciante, residente en la calle de . . . núm. . . señora Fidela Urquhart de Rojas, chilena, su residencia Alameda de las Delicias, núm. 182.

Todos estos testigos pueden declarar sobre el hecho del saqueo, valor de los muebles que existian en la casa i la circunstancia de que no se encontraban en ella otros muebles que los míos.

Acompaño igualmente las jestioness que hice ante la autoridad civil de Santiago para desvirtuar la aseveracion hecha por el ministro ingles referente a que en mi casa se encontraban muebles del señor Cotapos en el momento del saqueo.

Mi residencia actual es en esta ciudad, calle de Moneda núm. 244 i mi profesion comerciante, ajente comercial del Gobierno del Canadá en Chile.

Como he dicho al principio, soi súbdito ingles por nacimiento, i jamás he tomado parte alguna en la política de Chile, conservando en todos mis actos el carácter de comerciante neutral. A la fecha del saqueo yo era administrador jeneral de la Compañia Industrial, ubicada en la calle de San Miguel, núm. 32.

No he recibido hasta el presente ninguna suma de dinero a cuenta de los perjuicios experimentados, ni se me han devuelto ningunas de las especies sustraídas.

El total de los valores que reclamo ascienden a la cantidad de veinticuatro mil setecientos setenta i seis pesos (\$ 24,776.00) sin interés, i la suma de cinco mil seiscientos diecisiete pesos ochenta i cinco centavos, intereses, haciendo un total de treinta mil trescientos noventa i tres pesos ochenta i cinco centavos moneda corriente segun se detalla en el pliego adjunto. Juro que la esposicion precedente es perfectamente exacta; i

Por tanto

A. V. E. suplico: se sirva declarar a su tiempo que se me debe abonar por el Gobierno de Chile la suma arriba espresada.

LEWIS E. THOMPSON.

ESTADO DE WASHINGTON

CONDADO DE SPOKANE



Santiago R. Thompson, despues de haber sido debidamente juramentado, espone:

Que él es padre de Luis Edgardo Thompson, quien actualmente reside en Santiago, Chile.

Que el mencionado Luis Edgardo Thompson nació en el condado de Perth. ciudad de Stratford, provincia de Ontario, dominio del Canadá, el 29 de Diciembre del año 1856.

Que tenia ojos oscuros, pelo castaño, i cuando, visto por el declarante por última vez, tenia cinco pies i seis pulgadas de alto.

Que durante todo el tiempo dicho Luis Edgardo Thompson ha residido en Chile, el declarante ha estado en constante comunicacion i mantenido constante correspondencia con él i que sabe él es la persona aquí designada.

Que el declarante reside en la ciudad Spokane, Estado de Washington, Estados Unidos de América.

(Firmado).—J. R. THOMPSON.

Suscrito i jurado segun ello ante mí el 2 de Agosto de 1892.

(Firmado).—W. H. PLUMMER, Notario Público para Washington, i residente en Spokane, Washington.

TRADUCCION

Halifax N. S.

Julio 16 de 1892.

Certifico por la presente que he examinado el registro de familia de James R. Thompson i encuentro que su hijo Luis Edgardo Thompson nació en Canadá el 29 de Diciembre de 1856.

Este es el único registro de su nacimiento en cuya época la lei del Canadá no exijia otra clase de registro.

(Firmado).—ANDRES HUBLEY,

Alcalde i Subdelegado
dentro i por la ciudad de Halifax.

CONTENIDO

DE MI CASA HABITACION, CALLE DE BÚLNES, NÚMERO 8 DE ESTA CIUDAD
I QUE FUE TOTALMENTE SAQUEADA EL DIA 29 DE AGOSTO DE
1891.

Salon principal

1	Un amueblado completo forrado en seda	\$	687
2	Dos cortinas completas.	.	475
6	Seis cuadros diversos	.	406

Al frente. . 1,568

	<i>Del frente.</i>	. \$ 1,568	
1	Un piano	850	
1	Un piso para piano	45	
1	Un mueble para música	60	
1	Un bull dorado con bronce i mármol	350	
2	Dos espejos con marcos dorados	500	
1	Una cítara de concierto	150	
2	Dos mesitas fantasía acero i bronce	220	
1	Una alfombra	325	
1	Una estatua de bronce.	125	50
1	» » »	110	
1	Dos columnas forradas en terciopelo	120	
2	Dos pares jardineras	150	
1	Una lámpara bronce 5 luces.	110	\$ 4,683 50

Antesala

1	Un medio amueblado	312	50
4	Cuatro sillas fantasía	80	
1	Una mesa de centro	140	
5	Cinco cuadros diversos	200	
1	Una cortina.	112	
1	Una alfombra	125	
2	Dos estantes chicos fantasía.	65	
1	Una lámpara 3 luces	50	1,084 50

Escritorio

1	Un escritorio ministro.	125	
	Medio amueblado marroquí.	275	
1	Un estante para libros i planos	150	
	Libros técnicos, planos (estimado)	250	
1	Una alfombra	70	

A la vuelta. 870 5,768

	<i>De la puerta.</i>	\$ 870	5.768
1	Una cortina.	80	
2	Dos sillas junco	40	
1	Una lámpara dos luces	40	1,030

Costurero

1	Un sofá i 4 poltronas	200	
1	Una mesa de centro	55	
1	Una máquina de coser.	85	
2	Dos estantes esquineros	65	
2	Dos costureros cuero i felpa	80	
1	Un espejo	36	
1	Una caja de música	90	
1	Una lámpara de tres luces	55	
	Unos cuadros chicos i otros adornos	125	
1	alfombra	70	861

Comedor

1	Una mesa para 20 personas	75	
1	Un paño para la mesa.	30	
1	Una docena sillas nogal	250	
1	Un aparador enchapado	225	
2	Dos mesas trinchantes	200	
	Varios cuadros chicos (estimados)	100	
1	Un servicio de loza	150	
1	Un » de cristal	180	
1	Un » de cuchillería	210	
1	Una estufa.	30	
1	Una alfombra	150	
6	Seis manteles	150	
24	Servilletas con monograma	150	
1	Una lámpara de tres luces	60	\$ 1,960

Al frente. 9,619

Del frente. . \$ 9,619

Dormitorios

2	Dos catres bronce con fierro . . .	150	
1	Un " " " " . . .	75	
1	Un " " " " . . .	70	
1	Un ropero con espejo . . .	140	
1	Un " " " " . . .	125	
1	Un " con puerta de madera. . .	90	
2	Dos veladores con mármol . . .	60	
2	Dos " sin " . . .	50	
2	Dos cómodas con mármol . . .	120	
1	Una " sin " . . .	50	
2	Un peinador jacarandá. . .	150	
2	Dos peinadores con mármol i espejos . . .	250	
5	Camas con colchones, ropa de cama etc. a 200 pesos cada una . . .	1,000	
2	Dos pieles vicuña . . .	150	
1	Una caja madera de la India. . .	125	
4	Cuatro servicios lavatorio . . .	120	
1	Una caja de fierro chica con coleccion de monedas i en efectivo . . .	1,070	
3	Tres alfombras . . .	250	
3	Tres lámparas de 2 luces . . .	120	
3	Tres ganchos de 1 " . . .	30	4,195

Despensa, cocina i baño

1	Un aparador con provisiones i licores . . .	300	
1	Un estantería i útiles varios . . .	125	
2	Dos servicios plaqué con varias piezas de regalo . . .	500	
	<i>A la vuelta.</i> . . .	925	13,814

<i>De la vuelta.</i>		925	13,814
1	Una cocina económica con sus útiles i estantería de madera.	350	
1	Una tina de baño.	90	
1	Una » » » chica.	50	
3	Tres lámparas de una luz para despensa, cocina i baño	45	1,460

Ropa de hombre

1	Un terno de frac.	150	
2	Dos » » levita	250	
3	Tres » » chaquet	250	
2	Dos » » paletot	200	
3	Tres sobretodos i una capa	325	
6	Seis sombreros	60	
2	Dos paraguas	22	
4	Cuatro pares botines	40	
1	Un chalon de lana	65	
	Ropa interior, camisas, corbatas, etc.	350	1,712

Ropa de señora

1	Un vestido seda de color con punto.	220	
1	Un » raso » » » plumas	175	
1	Un » raso La Reina con brillos	225	
1	Un » » » » »	120	
2	Dos » » inferiores.	165	
4	Cuatro » lana	240	
1	Un paltó felpa con piel.	200	
1	Un » paño » brillos	110	
1	Un paltó paño con brillo inferior.	45	
1	Una capa larga con felpa	250	

Al frente. . . . 1,750 16,986

	<i>Del frente.</i>	. \$ 1,750	16,986
1	Un manto espumilla bordado . . .	180	
1	Un chal i 2 pañuelos tejidos. . .	80	
5	Cinco sombreros finos . . .	155	
	Ropa blanca [estimada] . . .	450	2,615

Joyas

1	Un par solitarios . . .	1,300	
1	Un terno perlas brillantes . . .	550	
1	Un " de coral . . .	350	
1	Un " záfiro i brillantes. . .	1,100	
1	Un par pulseras con " . . .	800	
1	Un anillo " " . . .	500	
1	Un " " " . . .	250	
1	Un " " " záfiro . . .	200	
	Varias pequeñas joyas sueltas . . .	125	5,175
			\$ 24,776

CONTESTACION

Excmo. señor:

Como agente de Chile, paso a contestar la reclamacion número 56, en la cual don Luis E. Thompson demanda \$ 30,393.85, comprendiéndose en esta suma \$ 5,717.85 por intereses, valor atribuido a objetos muebles que dice haber perdido en un saqueo de su casa, en Santiago, el día 29 de Agosto de 1891.

1 En el memorial se indica que el reclamante es súbdito inglés por nacimiento en Canadá.

En comprobacion, se refiere a un certificado anexo, el cual se supone dado el 16 de Julio de 1892 por un alcalde i subdelegado [alderman] de Halifax N. S., en vista de no sé qué rejistro particular de familia, absolutamente desautorizado. Un papel como

ese, presentado además sin formalidad alguna, hasta sin firma, no puede en ningún caso ser admitido como comprobante de nacionalidad ni de nada.

Por aquel papel podría creerse que la familia del señor Thompson residía en Halifax, costas del Atlántico, donde se supone examinado el aludido registro. Nó, señor. Su padre, a lo ménos, residía en la misma época al otro lado del ancho continente, costas del Pacífico, Estado de Washington, de la Union Americana. Así aparece de una declaración, que también se acompaña, la cual se supone prestada allí ante un notario, el 2 de Agosto del mismo año de 1892, por un caballero que se llama padre de don Luis Edgardo Thompson. Según ella, cuando aquél lo vió por última vez, éste tenía ojos oscuros, pelo castaño i cinco pies i seis pulgadas de alto. Ignoro si todo esto corresponda a la filiación del reclamante.

Creo escusado entrar a demostrar que ese testimonio paterno, aun atribuyéndole caracteres de autenticidad no observados en él, carece de valor como prueba de nacionalidad, mayormente tratándose de justificar con él la reclamación de un hijo.

No estando, pues, acreditado el estado de súbdito inglés del reclamante, corresponde a V. E. declararse incompetente para conocer de esta reclamación.

2 Antes de entrar al fondo de la reclamación, conviene establecer con precisión los hechos a que ella se refiere.

En la noche del 28 de Agosto de 1891, el público de Santiago ignoraba en jeneral el resultado de la batalla de la Placilla, perdida por las tropas del Gobierno en la mañana de aquel día. En la madrugada del 29, a las 3 de la mañana, según la relación oficial del ministro alemán, el ex-presidente Balmaceda huyó del palacio de la Moneda. Poco después, se instaló allí el jeneral Baquedano, encargado por el momento del mando de la capital. A las 9 de la mañana, el espresado ministro alemán en Santiago, encontró en palacio al referido jeneral con diversos hombres públicos, ocupado en dictar disposiciones destinadas a mantener el orden en la ciudad.

Desgraciadamente, no fué posible impedir los desmanes a que se entregaron las turbas populares. La noticia de la derrota, que ya

no pudo ocultarse, i de la desaparicion del ex-presidente, determinaron la fuga de todas las autoridades i el desbande de toda la policia i de la mayor parte de algunas tropas recién llegadas a la capital. Muchos de los policiales i soldados tomaron trajes de paisanos i se agregaron a las referidas turbas que, dirigidas o no, recorrían las calles i saqueaban las casas de los principales partidarios del Gobierno derrocado, ántes que los esfuerzos del jeneral Baquedano lograran reorganizar los elementos necesarios para reprimir a los saqueadores i restablecer el orden despues del caso.

En resumen, así pasaron las cosas, segun es notorio i consta en la comunicacion que dos días despues dirijió el jeneral Baquedano al Presidente de la Junta de Gobierno, i en las que a sus respectivos Gobiernos enviaron los representantes de Inglaterra, Alemania i Estados Unidos de América, oficialmente publicadas.

¿A estarnos a lo que el reclamante espone en su memorial, habria tenido él la desgracia de ser el único extranjero cuya casa se comprendió entre las saqueadas aquella mañana del 29 de Agosto.

¿A qué se debió caso tan singular? Segun el memorialista, el señor ministro de S. M. B. en Santiago atribuyó el hecho a la circunstancia de que en casa del primero se encontraban muebles del señor Cotapos; i, supuesto que éste fuera don Acario Cotapos, uno de los mas conspicuos i ardientes partidarios del réjimen que durante ocho meses habia ejercido todos los rigores de la lei marcial, la esplicacion es bastante satisfactoria.

El reclamante niega el hecho aseverado por aquel señor ministro i agrega que hizo ciertas jestioness para desvirtuar la aseveracion, las cuales no se han acompañado al memorial aunque en éste se dan por acompañadas; pero, por otra parte, se afirma que el señor Thompson es casado con una hija del señor Cotapos, i que en casa de aquél se encontraban el 29 de Agosto, no solo muebles, sino tambien parte de la familia del último. Espero sobre esto mas amplias esplicaciones de parte del reclamante, principalmente sobre la salvacion de los muebles del señor Cotapos.

Sea lo que fuere sobre esto, yo estoi conforme en que nada justificaba el saqueo de que se dice víctima el reclamante, ni aun en el caso de tener en su casa a su propio suegro. Si he insistido lijera-

mente sobre el particular es porque creo, como el señor ministro inglés, que la referida circunstancia explica suficientemente el hecho sin atribuir éste a propósitos particulares contra el señor Thompson, que no han podido existir

4 El reclamante ofrece el testimonio de diversas personas para probar el hecho del saqueo de la casa de aquel, calle de Búlnes número 8.

No dudo de que por ese medio pueda acreditarse aquel hecho, no acreditado hasta ahora; pero, jamás podrá probarse válidamente con testigos que todos i cada uno de los muebles u objetos especificados en la lista acompañada, en castellano i sin firma, estaban en la casa en el momento del saqueo; que todos eran propiedad del reclamante, sin haber entre ellos ni uno solo del señor Cotapos o de otra cualquiera persona; que todos fueron destruidos sin salvarse ni siquiera una de las muchas i valiosas joyas indicadas tan fáciles de salvar; i finalmente, que dichos objetos tuvieran el valor, visiblemente exagerado, de \$ 24,776 que el reclamante ha querido atribuirles. Sobre ninguno de esos puntos es siquiera admisible legalmente la prueba testimonial, con la cual podría llegarse léjos, demasiado léjos.

Pero, aun supuesta la efectividad de los hechos, la reclamacion no podría ser admitida por V. E. como justificada en derecho: ni el reclamante mismo ni nadie ha indicado siquiera que el referido saqueo fuera uno de los actos u operaciones ejecutadas por las fuerzas militares de la República, a que se refiere el art. I de la Convencion Anglo-chilena de 26 de Setiembre de 1893.

Como acto directamente relacionado con la guerra civil que terminó el 28 de Agosto de 1891, podría el referido saqueo ser comprendido entre los *sucesos posteriores* a que se refiere el final de aquel artículo de la Convencion; pero, como obra o resultado de tumultos populares, aquel acto criminal fué un caso de fuerza mayor, tan comun como invencible en circunstancias análogas, que no ha podido afectar la responsabilidad del Gobierno de Chile, ni a favor de los nacionales ni a favor de los extranjeros. ¿Tiene el reclamante noticia de que algun chileno haya obtenido, o reclamado

siquiera, indemnizacion de los perjuicios sufridos por los saqueos del 29 de Agosto de 1891?

Si fuera cierto, como lo asevera el memorialista, que su casa fué saqueada por una partida de jente, perfectamente disciplinada, que obedecia a determinadas personas, las cuales llevaban una lista de las distintas casas que debian saquear; si eso fuera cierto, deber era del reclamante, con arreglo a lo prescrito en el art. VII del Reglamento de Procedimientos de este Excmo. Tribunal, indicar quiénes eran aquellas *determinadas* personas para poder así calificar el acto.

Por lo demas, determinadas las personas que dirijian a los saqueadores, yo no sé cómo el reclamante no las ha perseguido ante los tribunales ordinarios para hacer efectiva su responsabilidad civil i criminal, que era lo que correspondia tratándose de crímenes i criminales comunes.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no dar lugar a ella o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Excmo. Señor:

Luis E. Thompson súbdito británico en la reclamacion arbitral que tengo pendiente en contra el Gobierno de Chile por el saqueo de que fui víctima el 29 de Agosto de 1891, replicando a la contestacion del ajente de Chile, a V. E. espongo: que las razones que ha dado este funcionario para que se deseche mi reclamacion son las siguientes:

1.º Que no está acreditada mi nacionalidad i que en consecuencia debe declararse incompetente el Tribunal para conocer de la presente reclamacion.

2.º Que el saqueo se debió a una esplosion popular de odios políticos i que el Gobierno de Chile no tuvo medios de impedir que las masas cometieran aquellos desbordes.

3.º Que el saqueo de mi casa fué debido a que tuviera asilado en ella a la familia de don Acario Cotapos i en resguardo sus muebles.

4.º Que no es posible acreditar con pruebas testimoniales el valor de los muebles destruidos i que no se comprende que se hubiera perdido todo sin estraerse de la casa ni aun aquellos objetos valiosos de mas fácil traslacion.

1.º Prueba de mi nacionalidad.

El ajente de Chile no da importancia al certificado dado, por el subdelegado o autoridad local de Halifax, Nueva Escocia, ni al registro de familia que ha servido de protocolo auténtico a aquel funcionario para dar el informe.

El ajente en su deseo de no encontrar este documento, llega a suponerlo sin firma. Examinaré en detalle sus observaciones.

El alderman de Halifax, pueblo donde se encuentra el registro de mi familia es la autoridad encargada por la lei de dar autenticidad a esta clase de documentos. Es la autoridad encargada de llevar la palabra oficial, de modo que un certificado estendido por el alderman se supone documento auténtico, salvo que se acredite su falsificacion.

Segun el Derecho Internacional Privado en estos casos se aplica el principio: *Locus regit actum*. Es decir, la lei del lugar prescribe sobre las solemnidades que deben acompañar a los actos civiles que ahí se ejecuten.

Por otra parte ni en la ciudad de mi nacimiento, ni en las inmediaciones existe cónsul o ajente diplomático chileno que pueda certificar o autenticar la firma de aquella autoridad, solemnidad inútil en el presente caso, porque presento mi documento por intermedio del representante de S. M. B., quien al recibirlo i darle curso, debe saber si viene o no de autoridad lejitima.

El argumento hecho por el contendor habria podido tener alguna importancia si se hubiera aducido ante un tribunal netamente nacio-

nal, pero no la tiene ante un tribunal arbitral internacional donde el ministro de cada nacionalidad conoce las leyes que rijen las distintas partes de su nacion i el mérito legal i la jurisdiccion de las autoridades en los diversos pueblos que cubren con su bandera.

El registro de familia es el protocolo auténtico que segun las leyes de Canadá dejan constancia del estado civil i éste debe permanecer en poder del jefe de la familia ya sea el padre o el hermano mayor, llevándole donde se traslade.

En cuanto a la firma, bastará que V. E. examine aquel documento para que se persuada si está o no en forma.

No me doi cuenta del alcance de la observacion del ajente de Chile al llamar la atencion de V. E. al hecho de que mi señor padre no reside actualmente en Halifax, sino al otro lado del continente, en el estado de Washington, porque supongo que los miembros de una familia pueden separarse i vivir aun en las distintas partes del globo.

Por el contrario, la declaracion de mi señor padre, estando de acuerdo con el registro de familia, viene a dar mayor fuerza si es posible a este documento.

Por lo demas, entre las piezas que ahora acompaño se encuentra la comunicacion oficial dirigida durante el año de 1891 al Gobierno ingles i ahí el señor ministro reconoce mi nacionalidad i esplica a su Gobierno los motivos que segun sus informes habian inducido al saqueo de mi hogar.

2.º Que el saqueo se debió a una esplosion popular de odios políticos i que el Gobierno de Chile no tuvo medios de impedir se cometieran desbordes.

Están demasiado frescos los tristes recuerdos del 29 de Agosto de 1891, para que el señor ajente pueda poner en duda los hechos que todo el mundo presencié, habiendo sido testigos de esos hechos el mismo Cuerpo Diplomático de Santiago,

Es efectivo que a las tres de la mañana del 29 de Agosto el Presidente Balmaceda dejaba el palacio de la Moneda despues de haber depuesto el mando en manos del jeneral Baquedano a quien al entregarle el poder, los 4,000 hombres del ejército de línea que se encontraban en Santiago i las policías, le dijo estas memorables

palabras: «Jeneral: al entregarle el mando supremo i la fuerza pública lo único que le exijo es que haga respetar el orden.»

Despues de este acto el jeneral Baquedano se retiró tranquilamente a su casa para volver a la Moneda a las siete i media de la mañana donde lo esperaban todos los comandantes de cuerpos para recibir órdenes.

Las palabras del jefe de la Nacion en esos momentos a dichos comandantes fueron las siguientes: «A sus cuarteles, a sus cuarteles i esperen órdenes.» Ordenes que no llegaron hasta las tres o cuatro de la tarde cuando la autoridad temió que la excitacion i los efectos del licor quitasen a una parte del pueblo la docilidad que hasta ese momento habia manifestado para obedecer a los directores del saqueo.

Como lo dice el señor ministro al Gobierno británico, en su comunicacion oficial de aquellos dias, «el saqueo fué perfectamente ordenado». Mas aun fué preparado con algunos dias de anticipacion por los jefes del partido que triunfó i la autoridad pública no impidió ese saqueo con las fuerzas que tenia a sus órdenes porque lo estimó quizas como justo castigo del vencido.

En la comunicacion oficial a que hace referencia el señor ministro se encuentra el siguiente párrafo: «Yo personalmente presencié las operaciones de los devastadores de la casa del señor Eastman; estos ejecutaron su operacion sin meter ruido o desórdenes innecesarios, i *miéntras duraba el saqueo observé que una compañía de soldados pasó en frente de la casa sin demostrar la menor intencion de intervenir.*»

Lo que pasó en esta casa, que por casualidad vió el señor ministro, sucedió en todas las demas. La fuerza pública se abstuvo, en virtud de órdenes superiores, de impedir que se llevara a cabo lo que en esos dias se llamó, el justo castigo popular o *lynchamiento* de los hogares.

Si el ajente quisiera contradecir estos hechos que son de pública notoriedad podria traer comprobantes en exceso.

3.º *Se dice que el saqueo de mi casa se debe a que tuviera asilada en ella a la familia del señor Acario Colápos i guardados sus muebles.*

Para desvirtuar esta falsa aseveracion pido por otrosí, se despache nu oficio al señor conde de Vista Florida, don José Domingo de Osma quien formaba parte de la Legacion Española; i otro a don Cárlos Lira, intendente de Santiago en la misma época, para que se dignen informar si es efectivo, que los muebles del señor Cotapos los salvó el arrendador de la casa introduciéndolos al último patio i haciendo el papel de que el señor Cotapos se había mudado días antes.

Por pedido de la familia el señor intendente Lira dió orden de sacar los muebles de aquella casa.

Con estos comprobantes espero que el agente se convencerá que el saqueo de mi casa no tuvo excusa de ningun jénero i que la autoridad al permitirlo, hizo responsable al país de los perjuicios consiguientes en conformidad al Derecho Internacional Privado.

4.º Se dice por el agente que no es posible acreditar con prueba testimonial el valor de los muebles destruidos i que no se comprende que se hubieran perdido todos, no habiéndose estraído aun aquellos objetos valiosos de mas fácil traslacion.

Solo a una persona que no hubiera estado en Santiago el día del saqueo, como el señor Martínez de Ferrari podrá estrañarle el que las víctimas del saqueo hubieran salido de sus respectivas casas, nada mas que con su ropa puesta i algunas casi desnudas.

Recuérdese por un momento la forma en que se daban los asaltos: llegaba una turba de doscientos o trescientos individuos armados de revólvers, rifles, cuchillos, palos i piedras, capitaneados por dos o tres jóvenes de familia que daban sus órdenes por medio de campanillas; llegaban digo, a una casa i descargaban ahí sus armas, rompian las puertas i ventanas i como un torrente precipitaban a la chusma hacia adentro.

¿Cree el señor agente que él siendo padre de familia i viendo el peligro que corria su esposa e hijos, se habría preocupado en esos instantes en buscar objetos de mérito para poder salvar?

En cuanto a la manera de acreditar la clase, número i valor de los muebles i objetos que habia en mi hogar, pienso que dentro del mas vulgar criterio no se puede aceptar otra prueba que la ofrecida por mi parte.

Desde el momento que los saqueadores me robaron todos mis papeles i documentos, no tengo facturas ni comprobantes por escrito que poder exhibir; pero pienso que las personas, que visitaban a menudo mi casa que vieron el menaje que en ella tenia i el comfortable de que disfrutaba, pueden dar testimonio de aquellos hechos i suministrar datos que permitan hacer una apreciacion mas o ménos aproximada del monto de aquellas pérdidas.

Por tanto,

A V. E. suplico: que, dando por acompañado el espediente adjunto seguido ante los tribunales de Chile, se sirva a su tiempo aceptar en todas sus partes la presente reclamacion.

LUIS E. THOMPSON.

OTROSÍ. A fin de esclarecer los dos puntos que he indicado en el penúltimo párrafo de mi réplica, sírvase V. E. ordenar se despache oficio al señor Osma conde de Vista Florida, para que se digne informar al Tribunal si es efectivo que la familia de don Acario Cotapos, se encontraba asilada en la Legacion Española el 29 de Agosto de 1891, fecha del triunfo de la revolucion, i si continuó allí algunos dias, hasta que se tranquilizó un poco la excitacion pública; i al señor don Cárlos Lira, para que se sirva informar al Tribunal si es efectivo que él, como intendente de Santiago desde que triunfó la revolucion, dió orden para que se estrajesen de la casa que ocupaba don Acario Cotapos en la Alameda los muebles de este señor, que habian sido salvados del saqueo por el arrendador, introduciéndolos al último patio i presentando la casa como que se encontraba desocupada.

L. E. T.

DÚPLICA

Exmo. señor.

Paso a duplicar en la reclamacion de don Luis E. Thompson motivada por un saqueo que dice haber sufrido en su casa de Santiago el 29 de Agosto de 1891.

1 El punto relativo a la nacionalidad del reclamante queda tan improbadado como antes de la réplica. El consabido certificado atribuido al alderman de Halifax (Nueva Escocia) no ha sido presentado a este Tribunal por el representante de S. M. B.; pero si lo hubiera sido, tal circunstancia no podría dar a aquel papel el carácter que absolutamente no tiene, de instrumento público o auténtico, espedido por funcionario competente.

Nada se adelanta sobre este punto con la aludida nota del representante de S. M. B., señor Kennedy, al marqués de Salisbury, fechada en Santiago el 31 de Agosto de 1891, que es la publicada con el número 343 en el Libro Azul (*Blue Book*. Chile. número 1. 1892).

Allí no se nombra al señor Thompson, aunque es evidente para mí que a él se refiere el señor ministro de S. M. B. cuando habla de un sujeto a quien llama simplemente *un canadense, el canadiense*; término con el cual no pudo pretender acreditar la nacionalidad del actual reclamante, ignorada seguramente por él. Del contesto de la nota es permitido deducir que el señor Kennedy no conocía personalmente al señor Thompson, lo que parecería bien extraño si se tratara de un súbdito de S. M. B., y de un súbdito que en el memorial se da el título, desconocido en el vocabulario internacional, de «Ajente comercial del Gobierno del Canadá en Chile».

Niego terminantemente que el llamado registro de familia sea, según las leyes del Canadá, un protocolo auténtico en que se deja constancia del estado civil de las personas. Por mas que he buscado una lei que eso establezca, no la he encontrado, pudiendo asegurar que no existe. Tales registros de familia, si voluntariamente se llevan en los dominios ingleses por familias acomodadas, no pasan de apuntes privados, desprovistos de todo mérito proba-

torio contra terceros. Desde la edad media hasta las leyes de 1836 i 1874, siempre fueron en Inglaterra las autoridades eclesiásticas las encargadas de llevar los registros públicos de nacimientos i de mas actos del estado civil de las personas. Los respectivos registros parroquiales, que en vano se pretende sustituir por los titulados registros domésticos o familiares, han sido i continúan en parte siendo las fuentes auténticas a que ha de ocurrirse para probar legalmente el nacimiento, cuando la lei no haya creado oficinas especiales del registro civil. Es lo que sucede en todos los paises cristianos, sin esceptuar el Canadá (Romero Girón i García Moreno, *Coleccion de las Instituciones Politicas i Juridicas de los Pueblos Modernos*, t. XI, p. 286).

No dudo que el alderman de Halifax sea un funcionario autorizado allí para espedir certificados con carácter público u oficial; pero, su poder no llegará a dar ese carácter a apuntes de familia desprovistos de todo valor legal, debiendo naturalmente dichos certificados referirse a actos propios de las funciones del alderman.

En todo caso, para que un certificado de aquel sea tenido por auténtico en el extranjero, deberá presentarse legalizado en forma, no precisamente por via de solemnidad, como parece creerlo el reclamante, sino por via de prueba. En el caso actual, la falta de legalizacion notada en el certificado del alderman i en la declaracion del padre del señor Thompson no permite asegurar que tales documentos emanen efectivamente de esas personas, ni que éstas tengan las calidades que se les atribuyen.

La circunstancia de que no existiera un diplomático o ajente consular chileno en el lugar del nacimiento del señor Thompson, no puede producir el efecto de que en Chile sean tenidos como ciertos i auténticos todos los documentos que se presenten como otorgados en la provincia de Nueva Escocia o en el lejano Estado de Washington. La legalizacion, si no se hacia por un funcionario diplomático o consular de una nacion amiga, debia hacerse, pasando de un lugar a otro, por las autoridades locales hasta llegar a un funcionario cuya firma pudiera autenticarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Es lo legal i cerriente, lo que en un caso análogo se ha hecho por otro reclamante, señor Dickie,

presentándose un documento estendido ante un funcionario de la misma referida ciudad de Halifax: la firma de aquel fué legalizada por el secretario provincial de Nueva Escocia; la de éste, por el cónsul chileno en Montreal; i la de éste, por el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Con lo cual aceptó V. E. como «debidamente legalizado» dicho documento, espresándolo así en el considerando cuarto de la sentencia recaída en la respectiva reclamacion núm. 2.

Finalmente, como los nombres impresos en el anexo al memorial no constituyen firmas de nadie, i como la tira de papel que les precede no es sino una copia desautorizada e informal del supuesto certificado del alderman de Halifax, resulta que la nacionalidad británica del actual reclamante no ha sido acreditada con arreglo a derecho i que, por lo tanto, carece V. E. de competencia para conocer de esta reclamacion.

Para mayor ilustracion de la materia en órden a prueba de la nacionalidad i a legalizacion de documentos, me refiero a lo ántes espuesto por mi parte, especialmente en las dúPLICAS de las reclamaciones números 15 i 55, la última de las cuales se dice tambien presentada por un canadiense.

2 Lo importante en nuestro caso, i lo que el replicante ni siquiera ha insinuado, era demostrar que el referido saqueo casa del señor Thompson fué un acto ejecutado por o con intervencion de la fuerza pública, una operacion militar. Sin eso V. E. seria incompetente para conocer de esta reclamacion, no valiendo en contra la observacion de que se trata de uno de aquellos sucesos posteriores al 28 de Agosto de 1891, comprendidos en el final del artículo I de la Convencion de Arbitraje de 26 de Setiembre de 1893.

Celebróse ésta, como lo espresa su preámbulo, para poner un término amistoso a las reclamaciones deducidas con motivo de la guerra civil que se produjo en Chile el dia 7 de Enero de 1891, la cual terminó el 28 de Agosto del mismo año. Por eso, el citado artículo I fijó la jurisdiccion de V. E. limitándola al conocimiento de las reclamaciones motivadas por «actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República durante

la guerra civil». Tal fué la base jeneral de la Convencion afirmada implícitamente en su artículo IX cuando habla éste de terminacion «de las dificultades cuyo arreglo se ha tenido en mira». Así, pues: las circunstancias de que los perjuicios reclamados hayan sido causados por actos de las fuerzas del ejército o de la escuadra, *manu militari*, i en operacion de guerra, *sub arbitrio belli*, son las que determinan la competencia de este Tribunal Arbitral, creado en razon de la guerra i para solucionar dificultades nacidas de actos de guerra.

Pero, debió advertirse que, aun despues del dia 28 de Agosto de 1891, en que la batalla de la Placilla puso término a la guerra, era posible que se produjeran en ciertos lugares sucesos relacionados con aquella, los cuales pudieran tambien ser de la responsabilidad del Gobierno de Chile. El final del citado artículo I de la Convencion, previó esta contingencia i puso igualmente el conocimiento de esos sucesos posteriores bajo la jurisdiccion de V. E.; pero, claro es que con ampliar así, solo en el tiempo, la competencia primeramente señalada a este tribunal, no quiso la Convencion ampliarla tambien en órden a la naturaleza misma de las reclamaciones, esto es, a las circunstancias de los actos que las hubieran motivado: siempre deberian ellos haber sido ejecutados por fuerzas de mar o tierra, operando militarmente.

Segun esto, si los perjuicios reclamados por el señor Tompson hubieran sido causados en aquellas circunstancias, V. E. podria conocer de su reclamacion aunque los sucesos que la motivan hubieran sido posteriores al 28 de Agosto de 1891; saltando aquellas circunstancias de fuerza pública i operacion militar, V. E. carece de jurisdiccion para conocer de esta reclamacion fundada en un saqueo ejecutado por turbas populares, i no por fuerzas militares de la República. Al efecto, *la fecha* del saqueo, anterior o posterior al 28 de Agosto, no podia dar a V. E. una competencia que no le daba la naturaleza del caso.

Ignoro con qué antecedentes, i en contra, segun se verá, de lo oficialmente manifestado por Mr. Egan, afirma el replicante que, en jeneral, el saqueo del 28 de Agosto «fué preparado con algunos dias de anticipacion por los jefes del partido que triunfó».

Sobre esto me permito observar que los jefes del Gobierno i del partido vencedor estaban por entónces en Valparaiso o en Iquique; pero, como quiera que sea, preparado o nó de antemano, dirijido o nó por individuos particulares determinados, el acto fué ejecutado por turbas populares. Siendo así, yo no acierto a descubrir de donde podria derivarse la competencia del Tribunal para conocer de una reclamacion fundada, no en actos de las fuerzas militares, sino en una *comision*, efectiva o supuesta, de la autoridad pública.

En consecuencia, si la incompetencia del Tribunal no resultara de no estar legalmente acreditados el estado i carácter de súbdito británico que el reclamante se atribuye, resultaria en nuestro caso de no fundarse la reclamacion en actos positivos ejecutados por las fuerzas de mar i tierra de la República.

3 Quiero por un momento admitir que el conocimiento y la decision de este asunto, sustraídos a la jurisdiccion de la justicia ordinaria, a la cual naturalmente corresponden, cupieran dentro de la órbita de accion señalada por la Convencion a la competencia de V. E. Supuesto esto, creo que, en vista de los hechos y con arreglo a los principios i la jurisprudencia internacionales, la reclamacion del señor Thompson, considerada en el fondo, habrá de ser desechada.

Para el caso, carece de importancia determinar el lugar en que se encontraban, en la mañana del 29 de Agosto de 1891, la familia i los muebles de don Acario Cotapos, suegro del reclamante y «aborrecido miembro del Congreso de Balmaceda», como lo llama la citada nota del señor Kennedy. Sea que aquellos estuvieran, total o parcialmente, en casa del reclamante, como no sin fundamento lo creyeron el populacho alzado, i el representante de S. M. B., despues de que éste hubo tomado informaciones; sea que familia i muebles estuvieran en otros lugares, la solucion en derecho sería una misma, a saber, la irresponsabilidad de Chile.

Dice el reclamante que la autoridad pública no le prestó contra los saqueadores la proteccion debida a los extranjeros, como a los nacionales; i avanzando audazmente en el camino de las afirmaciones temerarias, llega a espresar que dicha autoridad nada hizo por impedir el saqueo, que lo permitió, i que, «al permitirlo, hizo res-

ponsable al país de los perjuicios consiguientes, en conformidad agrega, a los preceptos del Derecho Internacional privado».

Si tan osada afirmación correspondiera, en pequeña parte que fuera, a la verdad de los hechos, la cuestión estaría resuelta por el Derecho Internacional público, sin invocar el privado, que no tiene aplicación en el presente caso.

Pero, las cosas no pasaron como se dice. Veamos. Las acusaciones del reclamante se dirigen desde luego contra el general Baquedano, a quien llama graciosamente «jefe de la Nación», anulando de esta suerte la autoridad de la Junta, afianzada en La Placilla como único Gobierno de Chile.

El general Baquedano no pudo recibir realmente del ex-Presidente Balmaceda un poder que éste no tenía ya, ni de hecho, en la noche de su fuga. Desbandados completamente la policía i, en gran parte, los soldados i hasta los oficiales de los tres o cuatro batallones llegados la víspera a Santiago i compuestos en su mayoría de milicianos no acostumbrados a una antigua disciplina; levantado el populacho de todos los arrabales de la capital, a las primeras noticias ciertas del derrocamiento del Gobierno que durante ocho meses había usado rigurosamente de la ley marcial; sobreexcitados en extremo los ánimos i borrada por el momento toda noción de autoridad, el poder que en la mañana del 29 de Agosto procuró ejercer de hecho en Santiago el general Baquedano, asistido de unos pocos hombres públicos; mal obedecido o desconocido por la jeneralidad, fué de todo punto insuficiente en los primeros momentos para impedir los saqueos i reprimir a los saqueadores.

Dada la magnitud de los desórdenes i la pobreza de los elementos de que podían disponer, el general i sus auxiliares hicieron cuanto era dable hacer en garantía de las personas i de las propiedades, logrando contener el saqueo de las casas de personajes políticos antes de las 11 de la mañana, a las dos horas de comenzado, después de lo cual los desórdenes se localizaron en los arrabales, dirigiéndose los asaltos principalmente contra los despachos de licores i los montepíos o casas de prendas.

Instalado en la casa de Gobierno desde las primeras horas de la mañana, el general Baquedano trabajó activa i eficazmente: nombró

intendente i comandante de armas: espidió proclamas llamando calorosamente al pueblo a la conservacion del órden público; dió nuevos i prestigiosos jefes a los cuerpos desmoralizados, i medio desbandados del ejército balmacedista existentes en Santiago; atendió a despachar piquetes de tropas para resguardar las casas de ciertas legaciones extranjeras, en que se habian asilado muchos de los políticos del bando derrocado, hizo salir patrullas a recorrer las calles en represion de las turbas, llamó i armó al cuerpo de bomberos para el servicio de vijilancia, i con el mismo objetó organizó, de vecinos i comerciantes, en los diversos barrios, la llamada guardia del órden, al mismo tiempo que trabajaba afanosamente en reconstituir el cuerpo de policía, etc., etc. En una palabra, donde por la mañana solo existia el caos, a mediodía existia órden relativo que horas mas tarde fué casi completo.

Cuando el dia siguiente, restablecida ya, aunque imperfectamente, la comunicacion con Valparaiso, pudieron llegar a Santiago los primeros ajentes de la Junta de Gobierno, encontraron aquí del todo restablecida la tranquilidad pública.

4 No se crea que la anterior descripcion es producto de la fantasía. He formado i sostenido hasta aquí el propósito de no afirmar cosa que no pueda probarse. Lo espuesto en nuestro caso aparece acreditado con relaciones imparciales i con documentos públicos emanados, muchos de ellos, de las legaciones mismas extranjeras.

En su proclama de la mañana del 29 de Agosto, decia el jeneral Baquedano: «El Gobierno provisorio organizado en representacion del derecho sagrado de la nacion, espera que el pueblo de Santiago sepa guardar todas las formas del respeto mas profundo por el órden público.—*Los adversarios de ayer deben ser hoy para todo buen chileno mas considerados que nunca, etc.*» (Diario *El Ferrocarril*, del 30 de Agosto de 1891.)

Dos dias despues de los sucesos referidos, con fecha 31 de Agosto en que llegaron de Valparaiso al palacio de la Moneda los altos funcionarios que representaban el único Gobierno de la nacion, dirijió el jeneral Baquedano a la Junta de Gobierno una esposicion de lo que habia hecho en dos dias de mando, accidental i precario,

en Santiago. Guarda ella conformidad con lo anteriormente relatado en este escrito, i es, por la alteza de su orijen i la dignidad de su tono i de su forma, un documento de la mayor autoridad. Corre insertado en la página 346 de la compilacion titulada *Memorándum de la Revolucion de 1891*, Santiago, 1892.

Todos los diarios publicados en Santiago, nacionales i extranjeros, confirman sustancialmente aquella esposicion. Ninguna acusa a las improvisadas autoridades de abandono de sus deberes.

La France del 6 de Setiembre, despues de pintar con vivos colores el entusiasmo jeneral de la primera hora del 29 de Agosto i la furia popular siguiente, i recordando que «jamás se ha visto una revolucion sin excesos», entra a contar la obra de salvacion emprendida por las compañías de bomberos, refiriendo: cómo la 4.^a francesa, armada *la primera* de fusiles Gras, «con el jeneral Arriagada a la cabeza, se lanza de carrera hácia la calle de las Monjitas para libertar la legacion de los Estados Unidos, amenazada por un millar de individuos»; cómo «las compañías nacionales chilenas rivalizaban en celo i abnegacion con las dos compañías francesas para asegurar el mantenimiento del orden i el respeto de todos. . .»

Por su parte, *L'Italia* del 9 de Setiembre se espresaba en igual sentido, i despues de aseverar que en la tarde del 29 de Agosto el orden estaba ya establecido, con escepcion de los suburbios, agrega: «El Gobierno provisorio, a cuya cabeza estaba el benemérito ciudadano señor Baquedano, *con actividad i enerjia*, considerando que debia improvisarlo todo, dispuso las cosas de modo que la ciudad no quedase durante la noche en poder del populacho. . . . Los bomberos, los miembros de las colonias extranjeras i numerosos ciudadanos organizaron la guardia del orden. etc.»

Prescindiendo de insustanciales contradicciones, que fácilmente se esplican, las relaciones oficiales de los sucesos, enviadas a sus respectivos Gobiernos por los ministros diplomáticos acreditados en Santiago, concuerdan en los puntos capitales, i sobre todo, en no hacer cargo alguno a las autoridades por las desgraciadas ocurrencias de aquel día.

El representante de los Estados Unidos de América, cuya mala voluntad personal para con el partido congresista fué notoria, relató

a su Gobierno desde Santiago, el 31 de Agosto de 1891, los últimos sucesos de la Revolucion, terminada dos dias ántes. Despues de referirse a la transmision accidental del mando al jeneral Baquedano, decia Mr. Egan al Secretario de Estado, Mr. Blaine, lo siguiente:

«Tan pronto como se propagó la noticia por la ciudad, los militares i la policia se desmoralizaron completamente; esta última, compuesta de cerca de 1,0000 hombres, se disolvió i desapareció íntegramente con caballos i armas. La mayor parte de los oficiales abandonó sus puestos, dejando a la tropa sin sujecion alguna.» I refiriéndose al saqueo de que fueron víctimas los principales partidarios del régimen derrocado por el movimiento revolucionario, decia tambien Mr. Egan que aquel saqueo fué «orijinado entre las clases mas bajas del elemento revolucionario; yo, agregaba, tengo la completa seguridad de que no tuvieron conocimiento de ello los jefes responsables del movimiento». «Al anohecer, continuaba, el jeneral Baquedano, con ayuda de los miembros de la Junta o Comité revolucionario existentes en Santiago, pudo reorganizar las tropas i poner atajo a la destruccion. Ayer, domingo, todo estaba tranquilo i ahora parece que ya ha pasado todo peligro de nuevos desórdenes.» La casa de la Legacion, en que muchos se asilaron, estuvo protegida por diez soldados proporcionados por las autoridades. (*Correspondence respecting the relations with Chile*, p. 66, núm. 195. Washington, 1892.)

El enviado imperial de Alemania, baron von Gutschmid se dirijió al palacio de la Moneda a las 9 de la mañana del 29 de Agosto i abriéndose paso por entre entusiasmado concurso de pueblo, llegó hasta el gabinete en que, acompañado de algunos hombres públicos, se encontraba el jeneral Baquedano, de quien dice: «Se ocupaba en esos momentos de dictar algunas órdenes destinadas a mantener el orden en la ciudad.» Así lo escribía el mismo dia el señor von Gutschmid al canciller del Imperio, i despues de referirse a los saqueos, agregaba:

«Entretanto, habia dictado el jeneral Baquedano las disposiciones necesarias para impedir que prosiguieran los desórdenes. Piquetes de soldados ocupaban los barrios donde están situadas las

tiendas i casas particulares de mas lujo, i a eso de las tres de la tarde, la tranquilidad estaba restablecida, aun cuando, aquí i allá continuaban cometiéndose desórdenes aislados.» A las 2 de la tarde, tuvo el Cuerpo Diplomático en el palacio de Gobierno una conferencia con el jeneral i con las personas mas influyentes de la que habia sido oposicion, en la cual se manifestó que se habian adoptado acertadamente todas las medidas de seguridad que eran necesarias para la noche.» (*Libro Blanco*, comunicacion núm. 846. Traduccion hecha con el título de «*Los Acontecimientos en Chile*. Documentos publicados por la cancillería alemana.» Valparaiso, 1892).

A las 10, una hora mas tarde que el baron von Gutschmid, llegó a la Moneda, en la mañana del 29 de Agosto, el ministro de S. M. B. en Santiago, Mr. J. C. Kennedy, acompañado de Mr. Kerr, mi honorable colega ante este Tribunal, encontraron al jeneral Baquedano como acababa de encontrarlo el enviado imperial de Alemania.

«El jeneral nos dió, escribia aquel mismo dia el señor Kennedy al marques de Salisbury, seguridades de proteccion para la vida i propiedades, espresándonos su sentimiento de no haber podido evitar el saqueo de las casas de algunos de los principales sostenedores del señor Balmaceda, por la súbita desaparicion i desbanda de la fuerza de policía que servia a aquel.» (*Libro Azul* de 1892, *Blue Book*, referente a la Revolucion de Chile, p. 246, número 342).

§ Nó, Exmo. señor: es la mayor temeridad querer culpar al jeneral Baquedano i hacer al Gobierno de Chile responsable de los perjuicios causados en Santiago, principalmente a los nacionales, por las turbas populares, cuando inopinadamente se publicó la noticia de la caída i fuga del ex-Presidente.

Dadas las circunstancias referidas i comprobadas en el párrafo precedente, aquellos desórdenes, tan lamentables como difíciles de evitar, no salen de la categoría de aquellos que no imponen responsabilidad a los Gobiernos, pues deben considerarse como una desgracia, que soportarán por igual nacionales i extranjeros, producida naturalmente «en tiempo de turbulencias interiores o de

guerras civiles», segun la espresion de Calvo (t. III, 1280), o «en el curso de una insurreccion civil», segun los términos de Hall. (*Int. Law*. Oxford, 1890, p. 219).

Con ser deplorable el desórden producido en Santiago el 29 de Agosto de 1891, no tuvo nada de mui escepcional en circunstancias semejantes: «podia esperarse peor» escribió el citado diario *La France*: i por su parte, el señor Kennedy decia sobre esto a su Gobierno dos dias despues, el 31:

«Fuera de los mencionados desórdenes, Santiago ha permanecido tranquilo; ha escapado afortunadamente de los tumultos i actos de violencia que, segun tengo entendido, se verificaron en Valparaiso despues de la reciente batalla dada en las inmediaciones de aquella ciudad.» (*Libro Azul* citado, final de la comunicacion número 343).

V. E. conoce aquellos tumultos producidos en Valparaiso en la noche del 28 de Agosto de 1891, dia de la batalla de La Placilla: habia en aquella ciudad considerable fuerza del ejército vencedor, i entre los saqueadores e incendiarios, se hacen figurar soldados, aunque dispersos; sin embargo, V. E. creyó, con mucha justicia que aquellos tumultos no imponian responsabilidad a la República, i así lo ha declarado no ha mucho en las sentencias recaidas en las reclamaciones número 3 i otras análogas. ¿Cómo podría ser que el Tribunal juzgara con otro criterio los desórdenes de Santiago, ménos graves que los de Valparaiso?

En vano se ha pretendido derivar la responsabilidad de Chile por los desórdenes de Agosto, culpando al ex-Presidente Balmaceda de no haber accedido a una peticion colectiva que el 15 de aquel mes dirijieron al departamento de Relaciones Exteriores los representantes de diversos Gobiernos europeos, a fin de que se permitiera a las respectivas colonias extranjeras organizarse en guardia urbana armada; peticion a que el Gobierno no pudo acceder por disponer él de fuerzas suficientes para el mantenimiento del órden en la ciudad, i por creer que la cooperacion ofrecida, sobre supérflua, era espuesta a mas inconvenientes que ventajas, segun la respuesta dada a aquella peticion colectiva por el Ministro de Relaciones Exteriores en nota de 17 de Agosto.

Una i otra de aquellas razones eran perfectamente fundadas: que hasta el 18 de Agosto el Gobierno tenia las fuerzas necesarias para la conservacion del orden en Santiago, sin necesidad de guardia armada extranjera, lo prueba el hecho de no haberse alterado aquél ni por un instante ántes de ese dia; i que era peligrosa, no solo para la estabilidad del Gobierno, sino tambien para el orden público mismo, aquella autorizacion de formar cuerpos armados, sin estricta sujecion a la autoridad, es cosa que no puede ponerse en duda por evidente. Ni los representantes de gobiernos extranjeros, ni nadie, pudieron creer que el de Santiago violaba la lei internacional con aquella negativa de confiar a estraños el cumplimiento de su deber de atender a la seguridad pública, que todo pais medianamente constituido no confia sino a sus propios agentes, de los cuales únicamente puede responder.

Tampoco aparece justificada la inculpacion, que tambien se ha hecho al ex-Presidente, de haber fugado sin haber tomado ántes las medidas necesarias para garantir el orden público i el respeto a las personas i a las propiedades, que tanto habia recomendado en su proclama del 25 de Agosto. (*Memorandum de la Revolucion de 1891*, p. 343). En la noche del 26 de Agosto la autoridad del ex-Presidente en Santiago reposaba únicamente en el secreto de su derrota, i éste era inconciliable con la adopcion de medidas eficaces en el sentido indicado: guardando, como guardó aquel secreto, el ex-Presidente atendió a los cuidados de su seguridad personal; pero, sirvió tambien de ese modo a la seguridad de la poblacion. ¿De qué horrores no habria ésta sido víctima durante la noche del 28, si en la tarde de ese dia hubiera el pueblo sabido la derrota i la desaparicion del jefe del gobierno, que solo supo en la mañana del siguiente?

Empeñado en lo imposible, cual es probar la culpable conducta del jeneral Baquedano, a la cual indebidamente vincula la responsabilidad legal del Gobierno de Chile, reproduce el reclamante, señor Tompson, parte de la última nota citada del señor Kennedy a su Gobierno, en la cual cuenta aquél que presencié el saqueo de la casa del señor Eastman, i que, durante él, vió pasar en frente

de la casa una compañía de soldados «sin demostrar la menor intencion de intervenir».

No pongo absolutamente en duda la exactitud de un hecho que dice haber presenciado el honorable representante de S. M. B.; pero, es evidente que tal hecho no justifica por sí solo acusacion o cargo alguno contra el Gobierno, i sin duda por eso lo anotó el señor Kennedy sin comentario ni palabra alguna desfavorable, que de otro modo no habria ahorrado.

El hecho se esplica fácilmente: aquella compañía de soldados iba seguramente en desempeño de alguna importante comision, i las mas elementales reglas de de la disciplina militar, imperiosas como nunca en aquellas circunstancias, vedaban en absoluto al oficial de dicha compañía abandonar su comision i apartarse de su camino para entrar en batidas populares. ¿I si era la pedida por el ministro de los Estados Unidos señor Egan?

Sea lo que fuere, si el señor Eastman no ha tenido derecho para reclamar, i por eso no ha reclamado, como no ha reclamado ningun chileno perjudicado por los saqueos, es difícil comprender que el reclamante señor Tompson quiera convertir en prueba a favor de su reclamacion el incidente relativo a la casa del señor Eastman, la cual nada tuvo que ver con la mui lejana del reclamante. ¿Acaso pasó tambien en frente de la de éste una compañía de soldados?

6 Ni la delincuencia ni la culpabilidad se presumen. Hai que probarlas. En nuestro caso, no se ha insinuado siquiera la pretension de acreditar que los perjuicios reclamados se debieron a tal o cual culpable omision del jeneral Baquedano, a quien no cabe suponer movido por sentimientos apasionados de odio o de venganza, indignos de su elevado carácter: él no fué ni de los vencidos ni de los vencedores; prescindió en términos de que pudo, durante toda la revolucion, permanecer tranquilamente en Santiago sin ser molestado.

I luego, con referencia a daños i perjuicios sufridos en el curso de conmociones civiles por extranjeros, que ningun privilejio pueden alegar sobre los nacionales, sucede lo que justamente dice el citado tratadista Hall, esto es, que los mas altos intereses del Es-

tado se encuentran comprometidos de una manera demasiado profunda en evitar tales conmociones para que se permita la suposición de que tales daños i perjuicios hayan sido causados por negligencia culpable de parte del Gobierno, capaz de afectar la responsabilidad de éste con respecto a una potencia extranjera.

Refiere la historia un caso que tiene con el presente singular analogía, sucedido en Lóndres con motivo de la revolucion inglesa de 1648, luego que ahí se supo que el rei Jacobo habia súbitamente fugado del palacio i de la ciudad ante la expedición vencedora llevada por el príncipe de Oranje. Lo cuenta Macaulay.

«Por el momento no existia en Lóndres ninguna autoridad legítima; las malas pasiones populares, que los mejores Gobiernos no logran reprimir sino imperfectamente, la codicia, la licencia, la venganza, el odio de partidos, se encontraron de repente libres de todo freno. Luego se vió salir de los arrabales, de las tabernas, de todos los escondites del vicio, nubes de malhechores, de ladrones, de pillos de toda clase. A ellos se juntaron millares de ociosos, que gustaban de las emociones del tumulto, i hasta honrados burgueses, impulsados por la animosidad religiosa que gritaban: ¡No mas papismo! El populacho se lanzó contra las capillas católicas: los bancos, las sillas, los confesionarios fueron destrozados, amontonados i entregados a las llamas; los edificios destruidos. Se pasearon en triunfo por las calles imágenes i cuadros. Despues de los templos, de las imprentas realistas i de los establecimientos públicos, el furor popular se dirigió contra las casas de los particulares, muchas de las cuales fueron saqueadas. Luego las turbas sitiaron los palacios de los embajadores extranjeros. El de Luis XIV habia pedido una guardia de soldados, i como ademas se supo que no tenían ni armas ni asilados lo dejaron tranquilo. El enviado de Venecia estaba también protegido por un piquete de tropas, pero las casas del ministro del elector palatino i del ministro de Toscana fueron completamente saqueadas. Los ricos ornamentos de la capilla real habian sido trasportados a la habitacion de Ronquillo, el embajador de España; la casa de éste fué saqueada sin piedad, una magnífica biblioteca, cuidadosamente formada, fué destruida por las llamas. Se prometió una recompensa al que descubriera los

objetos robados a Ronquillo, i como no le habian dejado ni una pieza de su vajilla, ni cama en qué dormir, lo alojaron por el momento en el palacio desierto de los reyes de Inglaterra. Posteriormente, en el Consejo de España (de Castilla) se trató de una indemnizacion para Ronquillo; pero el Consejo rechazó sin consideracion tal proposicion. «Habiendo sido esto hecho por un furor de pueblo, sin consentimiento del Gobierno, i ántes contra su voluntad como lo ha demostrado la satisfaccion que le han dado i le han prometido, parece, dijo el Consejo, que no hai juicio humano que pueda aconsejar que se pase a semejante remedio.» [Macaulay, *Historia de Inglaterra*, t. III, cap X].

Furor de pueblo, sin consentimiento del Gobierno, no impone responsabilidad: bien i severamente formulado por el Consejo de Castilla, ese era el derecho a fines del siglo XVII, i ese es hoi mismo. A él se atiene el Gobierno reclamado.

En conclusion, suplico a V. E., si se declara competente para conocer de esta reclamacion, se sirva desecharla en todo.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

Prueba rendida en la reclamacion número 56, i que el Tribunal ordenó se publicara conjuntamente con la sentencia.

LUIS E. THOMPSON CONTRA LA REPÚBLICA DE CHILE

1.º El saqueo de la casa que Luis E. Thompson ocupaba en la calle de Búlnes número 8.

Luis R. Camacho, cubano, mayor de edad, juramentado en forma, declaró: Que no le tocan las jenerales de la lei; que el 27 de Agosto, estando en la plazuela de los Ferrocarriles, un caballero

cuyo nombre no recuerda, pero que sabe es comisionista en la calle de Huérfanos i a quien le dijo que vivia en la calle de Búlnes número 6, le advirtió que iba a ser saqueado, pues su casa estaba en lista; que sorprendido por esta noticia, le dijo que no lo creia, pues era extranjero; a lo cual el caballero le replicó que se saqueaba esa casa porque era la de Cotapos. El reclamante rectificó el hecho diciendo que la número 8 era la de Cotapos, i tampoco de Cotapos sino de una hija de éste; que como a eso de las ocho de la mañana del 29 de Agosto llegaron unas turbas capitaneadas por un jóven decente, frente a la casa del declarante; que él no lo vió que su señora fué quien se lo contó; que el declarante estaba en ese momento en su establecimiento calle de las Delicias, vecino a la casa de don Cárlos Boizard; que su esposa lo mandó llamar para que la protejera contra la invasion de la turba; que cuando llegó encontró que la casa del señor Thompson estaba completamente saqueada; que encontró el declarante a una de sus niñas lastimadas por efecto de una piedra que se lanzó a su casa; que esto aconteció por la equivocacion de su casa con la número 8, que en la mañana no supo que fué de la policía, porque no la vió; que solo en la tarde, a las cinco i media, mas o ménos, frente a la casa del señor Boizard, calle de las Delicias número 264, vió unos ochenta soldados formados, con su jefe, espada desenvainada i su banda de música que tocaba, i el declarante viendo que en ese momento se saqueaba la casa del señor Boizard solicitó el amparo del jefe; pero éste se lo denegó, contestando que no estaba él allí para inmiscuirse en eso; que no recuerda a qué batallon o cuerpo pertenecian esos soldados, que vestian chaqueta azul; que vió que iban turbas volantes que saqueaban en distintas partes; que no vió tropas en otra parte fuera de la que ha mencionado.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Luis R. Camacho.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Jorje Borchert, chileno, mayor de edad, tiene noticias de la reclamacion, no le tocan las jenerales de la lei, juramentado declaró: que ignora la pregunta.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. Borchert.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo José Varalla, italiano, mayor de edad, no le tocan las jenerales de la lei, conoce el juicio por haber prestado ya una declaracion en los Tribunales de Justicia, i juramentado en forma, declaró: que el 29 de Agosto, cuando tuvo lugar el saqueo que se verificó ántes de las 12 P. M., estaba el declarante en la casa i vió que saquearon la casa hasta el último mueble i aun se llevaron unas puertas; la turba en masa, jente del pueblo, fué la que saqueó; que el declarante estaba en la casa del reclamante, porque habia ido a anunciarle el triunfo de la revolucion; que tenia mucha amistad desde años atras con la señora Thompson; que él no presenció que fuera capitaneada la turba; pero así se lo dijeron; que el saqueo fué antes del almuerzo, es decir, ántes de las doce del día; que la casa de Thompson fué la única saqueada en esa calle; que ignora por qué fué saqueada la casa de Thompson cuando este caballero no se metia en política; que el declarante sabe la hora de almuerzo de Thompson, porque almorzaba allí casi todos los domingos.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*José Varalla.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo J. Clide Macartney, americano de los Estados Unidos, mayor de edad, no le tocan las jenerales de la lei, es compadre con el reclamante, juramentado en forma declaró: que no presenció el saqueo i solo lo supo por la relacion del reclamante; que vió la casa saqueada como a las 10 i media A. M.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. Clide Macartney.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Ejidio Gómez Solar, chileno, mayor de edad i no le tocan las jenerales de la lei, que perteneció al ejército del señor Balmaceda, que era coronel i edecan de S. E. el Presidente de la República i está retirado como teniente-coronel, juramentado en forma declaró que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Ejidio Gómez Solar*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Leon Fournet, frances, mayor de edad, juramentado, en forma, declaró que no le tocan las jenerales de la lei; que a las 9 de la mañana del dia 29 estaba en su casa, frente a la del reclamante, vió llegar a dos personas a caballo, uno como de 62 años i otra como de 24, que cree que el primero tenia una campanilla i el segundo un papel en la mano; que principiaron a tocar la campanilla i a decir a la jente que lo seguia: «muerte a los Cotapos i a sus familias!» vió que alguna jente con piedras i escopetas forzaban las puertas i saquearon la casa; que la turba era como de doscientas personas, pero que no toda era de saqueadores; que vió los muebles despedazados i los sirvientes maltratados; que no habia soldados durante el saqueo frente a la casa; pero que sí los habia en el cuartel de San Miguel; soldados desorganizados que tiraban los fusiles; que el mismo sabe que los cuidadores de la fábrica que rejentaba el declarante recojieron los fusiles i los entregaron a los directores de la sociedad.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Leon Fournet*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Gregorio Cerda i Ossa, mayor de edad, juramento en forma, declaró: que no le tocan las jenerales de la lei; que el 28 de Agosto de 1891 era intendente de Santiago, que la casa del reclamante fué saqueada entre 10 y 11 del dia 29 de Agosto; que el

declarante no la vió saquear; que habia entregado el mando a las 7 i media A. M. al jeneral Baquedano.

Leida que le fue, se ratificó i firmó.—*G. Cerda i Ossa*.—*Diego Armstrong*, secretario.

2.º Quienes perpetraron el saqueo; la designacion i grados de las personas que, segun la afirmacion del reclamante, lo organizaron i comandaron.

Testigo Luis R. Camacho, que fué el pueblo el que perpetró el saqueo; que un joven decente, segun el dicho de una señora, comandaba la turba, pero ignora quién la organizó.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Luis R. Camacho*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Guillermo Borchert, que ignora la pregunta.

Leida que le fué se ratificó i firmó.—*Guillermo Borchert*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo José Varalla, que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó y firmó.—*José Varalla*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo J. Clyde Macartney, que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó y firmó.—*J. Clyde Macartney*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo, Leandro Navarro, que lo ignora, que vió solamente las turbas.

Leida que le fué, se ratificó y firmó.—*Leandro Navarro*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Ejidio Gomez Solar, que lo ignora,

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Ejidio Gómez Solar*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo G. Cerda i Ossa, que no sabe quiénes organizaron i comandaron el saqueo; pero que sí sabe que lo perpetraron turbas del populacho; que lo que sabe sobre estos saqueos fué que, siendo intendente de la provincia, tuvo denuncios que se iban a producir saqueos, i al entregar su dimision al jeneral Baquedano le previno los denuncios que habia recibido i que seria conveniente tomar algunas medidas; pero que el jeneral se desentendió de ello, habiéndole agregado que dictaria bandos para reprimir los desórdenes.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*G. Cerda i Ossa*.—*Diego Armstrong*, secretario.

3. La negligencia grave que hubieran manifestado las autoridades de Santiago para prevenir o reprimir tales excesos i que las fuerzas de que ellas disponian rehusaron impedir el saqueo a virtud de órdenes superiores.

Testigo Luis R. Camacho, que así lo cree, pues a los pies de la casa de Thompson habia un cuartel con soldados; que no sabe si habia oficiales, ni tampoco que fueran requeridas las fuerzas para impedir el saqueo.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Luis R. Camacho*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Guillermo Borchert, que ignora la pregunta respecto de la casa del señor Thompson; que era segundo jefe del segundo batallón del regimiento Imperial el 29 de Agosto; que recibió orden del jefe del regimiento, don Salvador Urrutia, para que con su tropa, 600 hombres, mas o ménos, se trasladara a la calle de la Catedral a resguardar el orden desde la Plaza de Armas hasta la alameda de Matucana, dispersar la jente i evitar en lo posible los saqueos; se dispersaron varios grupos, en la avenida Cumming, sobre todo; saqueos ya no habia que evitar, pues ya habian sucedido casi todos; que repartió su tropa hasta las 3 i media P. M., al mando de los capitanes, por compañías, con las mismas órdenes que el declarante habia recibido; el punto de reunion, ya de retirada, fué el cuartel San Pablo, donde regresó en perfecto orden hasta el último soldado, no faltando ninguno a la lista; que los partes de los capitanes de las compañías fueron que habian dispersado varios grupos en las calles; tambien supo que habia fuerza del Buin que resguardaban las calles; como asimismo comisionados de la policía; que en su cuartel, su tropa que era como de 1,100 hombres estaba en perfecto orden al mando de su jefe; que sabia que estaba el Zapadores, que tenia como 1,100 a 1,200 hombres; que habia tambien dos compañías del Buin sin que sepa quién las comandaba; que todas estas fuerzas obedecian al jeneral Baquedano; que en el Imperial todos los oficiales estaban en sus puestos; que ignora si en los demas cuarteles los oficiales estuvieron en sus puestos; que a las 10 i media A. M. recibió las primeras órdenes su batallón, que fué cuando se le trasladó del Internado al Cuartel de San Pablo; que ellos solo supieron el saqueo cuando venian en camino del Internado al Cuartel de San Pablo; que solo pocos momentos antes de salir del Internado se les comunicó que el jeneral Baquedano estaba investido con el mando de todas las fuerzas; que a las 9 i cuarto A. M. fué cuando llegó el coronel Urrutia de la Moneda i se puso a la cabeza del regimiento llevándolo al cuartel de la policía.

Leida que le fué, se ratificó i firmó. — *Guillermo Borchert.* —
Diego Armstrong, secretario.

José Varalla, que ignora la pregunta; pero que presenci6 el saqueo de la casa del juez Boizard que se perpetr6 a son de música; no sabia si el saqueo fué ántes o despues de las doce, pero sí con posterioridad al saqueo de la casa de Thompson; que la banda de música, que era militar, estaba mas o ménos al frente de la casa de Boizard, pero que no vió tropa con ella; que en la tarde vió en el cuartel de San Miguel un soldado montando la guardia i oficiales pero que ignora si hubiera tropa dentro del cuartel; que tambien vió un piquete de soldados en la calle de Sazie, en la tarde i al mando de un oficial; que el cuartel mas cerca a la casa de Thompson que habia era el de San Miguel, en el que no sabe si habia soldados; que no recuerda el nombre de la calle donde vivia Thompson, pero que sabe que tenia núm. 8 i era una de las casas de Chelli, la calle mas abajo de la de Cienfuegos, media cuadra distante de la Alameda.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*José Varalla.* — *Diego Armstrong*, secretario.

Testigo J. Clyde Macartney, que ignora la pregunta; que no vió soldados en las calles i solo vió cuarenta militares en la Mone-da i veinte frente a la Intendencia, como a las 11 A. M.; que no vió policía en las calles.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. Clyde Macartney.* — *Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Leandro Navarro, que no se atreve a pronunciarse sobre la negligencia que atribuye el reclamante a las autoridades; pero que en su criterio la hubo, porque el jeneral Baquedano disponia de cinco mil seiscientos hombres fuera de las fuerzas de policía; que como a las dos de la mañana del dia 29 fué el declarante a casa del jeneral Baquedano, acompañado del coronel Jarpa con el fin de ponerle a su disposicion las fuerzas i recibir las órdenes del caso;

que le noticiaron que en ese momento comenzaba un incendio por la calle de San Pablo afuera; que las tropas estaban citadas para cituarse afuera en la plazuela de la Moneda i en las calles adyacentes para recibir sus órdenes en prevision de que el pueblo intentara atacar ese edificio, creyendo que Balmaceda estuviera ahí todavía, el jeneral dió orden terminante que no se moviera un solo soldado de sus cuarteles i que los jefes se presentaran a las nueve de la mañana a recibir sus órdenes; al venir el día se presentó el jeneral Baquedano a la Moneda i le pidió tropa al declarante para publicar el bando de su nombramiento; que el declarante era jefe del Estado Mayor de las fuerzas que habia en Santiago en ese momento, cuyo jefe era el coronel Jarpa; desde el aclarar ya se acercó la turba a la Moneda en gran desórden i a las ocho de la mañana en el cuartel que está al frente de la Moneda se le notificó de orden del jeneral Baquedano que cesaba el declarante en el mando del cuerpo de Zapadores, cargo que ejercia conjuntamente con el de jefe del Estado Mayor ya espresado, i que le reemplazaba el comandante Gabriel Alamos, portador de la orden; que el declarante se retiró al punto i se ausentó del cuartel; que cuando se retiraba el declarante vió las turbas i grupos de a caballo con banderas; que el declarante con el coronel Jarpa advirtieron al jeneral Baquedano cuando le visitaron a las dos de la mañana que el incendio de la calle de San Pablo podia ser precursor de excesos del pueblo i que en vista de esto era que habia dispuesto que las tropas vinieran a la Moneda; que el jeneral Baquedano les contestó que no anticiparan desórdenes, que las tropas volvieran a sus cuarteles i que a las 11 A. M. iria él a la Moneda a dar sus órdenes, advirtiéndole el coronel Jarpa que a esa hora vendria ya tarde para evitar los sucesos que temian, el jeneral convino en ir a las nueve a la Moneda, reiterando la orden de que estuvieran todos los jefes a esa hora en ese sitio; que no le consta nada respecto a la efectividad del desbande de la policía, pero que le constaba que compañías de Zapadores, del 4.º de línea i del Imperial habian salido a patrullar las calles para guardar el orden; que se le dijo que en el día habian salido patrullas de tropas i que en la noche vió salir piquetes de éstas para guardar el orden; que ignora que se hubiera formado

guardia del orden; que segun el criterio del declarante si el jeneral Baquedano hubiera hecho uso de las tropas se habrian podido evitar los sucesos, pues estaban completamente disciplinadas i permanecieron así algunos dias con sus jefes i oficiales; que cuando volvió el declarante al cuartel de Zapadores, ocho dias despues, encontró a todos sus antiguos oficiales en sus puestos i a la tropa organizada; que el declarante se ocultó ese dia porque vió que a los jefes i oficiales los maltrataba la turba i recibia vejaciones; que desde la mañana el declarante tenia tropa al rededor de la Moneda i aun mandó buscar la que le restaba de su rejimiento para contener a la turba, pero que toda la fuerza fué impotente contra aquella.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Leandro Navarro*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Ejidio Gómez Solar, que el 29 de Agosto, a las nueve de la mañana, fué el declarante a la Moneda a las órdenes del jeneral Baquedano en cumplimiento del bando que se dictó; que una vez allí el pueblo trató de vejarlo, i como alcanzara hasta la presencia del jeneral Baquedano, éste le ordenó que se quedara a su lado, quedándose como edecan del señor jeneral hasta el 31; que oyó decir que el jeneral Baquedano tenia bajo sus órdenes como seis mil hombres veteranos, perfectamente disciplinados, con sus jefes i oficiales; en estos seis mil hombres se comprendia la policía; que no tuvo conocimiento, a pesar de estar todo el dia 29 de Agosto al lado del jeneral Baquedano, que se hubiera desbandado alguna de las fuerzas que habia en la ciudad; que estuvo con el jeneral casi todo el dia 29 i no oyó que éste diera orden alguna para que salieran tropas de sus cuarteles a resguardar el orden; que no vió a persona alguna, en ese dia, que viniera donde el jeneral Baquedano, a pesar de que todo el mundo tenia acceso a él, a pedirle auxilio o que se mandara proteger la propiedad; que cuando le contaron al jeneral lo que sucedia, salió éste con el coronel Lopetegui a las calles, pero no supo lo que sucedió despues, que cree el declarante que con los seis mil hombres de tropa que habia en la ciudad se

habria podido impedir los saqueos si se les hubiera dado las órdenes consiguientes; que el declarante cree que la razon por que el jeneral Baquedano no dió la órden para que salieran las tropas de sus respectivos cuarteles a resguardar el órden era porque el jeneral estaba ofuscado con tanta jente como iba i venia; que no sabe esplicarse la razon de que si contaba la autoridad con la fidelidad de la tropa hubiera sido menester formar una guardia del órden para custodiar la ciudad.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Ejidio Gómez Solar*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Gregorio Cerda i Ossa, que cree que hubo negligencia por parte de la autoridad para reprimir los desórdenes, pues el jeneral se limitó a decir que publicaran bandos para reprimirlos sin tomar medida alguna; que la policia estaba perfectamente organizada cuando el declarente se retiró de la Moneda i que tan fué así que el prefecto fué a decirle al jeneral que no habia novedad i que todos estaban en sus puestos; que el testigo se escondió ese dia i no supo que se hubiera organizado guardia del órden; que habia como 5,100 i tantos hombres fuera de la policia; que el declarante se asiló a las 7.30 A. M. en una casa de la calle Ahumada i solo hasta entónces tuvo noticias de lo que pasaba en la ciudad.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*G. Cerda i Ossa*.—*Diego Armstrong*, secretario.

4. Número i valor de los objetos perdidos.

Testigo Luis R. Comacho, que ignora la pregunta.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Luis R. Camacho*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Guillermo Brochert, que ignora la pregunta.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Guillermo Brochert.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo José Varalla, que calcula que Tompson tendria en su casa como veinticinco a treinta mil pesos en valores; que no sabia si Tompson tenia asegurado su menaje; que no podria decir el número de piezas que tendria la casa, que era de un piso; que juzga que todo lo que habia en la casa era de Tompson; que no oyó decir que estuvieran allí los muebles de Cotapos; que sí sabia que éstos se habian salvado mediante una estratajema del dueño de la casa donde vivia Cotapos; que ahora recuerda que el nombre de la calle donde estaba la casa de Tompson era Búlnes; que habia salon, antesala, otras piezas, comedor, dormitorio de la casa de Tompson; que habia buen piano, etc., etc. . .

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*José Varalla.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo J. Clyde Macartney, que no puede decir el valor de mobiliario de la casa de Tompson; que eso sí que sabe que estaba bien amueblada, que habia piano, etc., etc. . . .; que vió varios saqueos como a las 8 i media A. M. i ningun acto de la autoridad para estorbarlos.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. Clyde Macartney.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Fidelia Urquhart de Rojas, que cree que el valor del mobiliario mas las alhajas seria como de veinte a veinticinco mil pesos; que lo sabe porque se alojó en la casa i vió que los muebles eran mui buenos, de seda lacre los del salon; que las alhajas valdran como seis a ocho mil pesos; que la casa tenia salon, comedor,

antesala o costurero, pieza de alojado, dormitorio i todo lo necesario en una casa humilde.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Fidelia Urquhart de Rojas*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Declaracion del testigo Leandro Navarro en la primera pregunta: que es chileno, mayor de edad, i juramentado en forma, dijo: que era militar retirado; que tenia noticias por el reclamante de la reclamacion; que no le tocan las jenerales de la lei; que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Leandro Navarro*. —*Diego Armstrong*, secretario.

LUIS E. THOMPSON CONTRA LA REPÚBLICA DE CHILE

1.ª El saqueo de la casa que Luis E. Thompson ocupaba en la calle de Búnes número 8.

Testigo Ramon Yávar, chileno, mayor de edad, juramentado en forma, declaro: ser defensor de ausentes i obras pías de Santiago; que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*R. Yávar*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Juan C. Sullivan, norte-americano, ser mayor de edad, que no le tocan las jenerales de la lei, juramentado en forma, declaró: que supo que habia sido saqueada dicha casa por el populacho.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. C. Sullivan*.—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Rojelio Sullivan, ser chileno, de 19 años, que no le tocan las jenerales de la lei, juramentado en forma, declaró: que lo ignoraba.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*R. Sullivan.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Eduardo Matte, chileno. propietario, mayor de edad, juramentado en forma, declaró: que lo ignoraba.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Eduardo Matte.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Carlos Walker Martínez, juramentado, declaró: ser mayor de edad, senador de la República y que no le tocan las jenerales de la lei.

Que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*C. Walker Martinez.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Cárlos Lira, juramentado en forma, declaró: ser mayor de edad, que no le tocan las jenerales de la lei, que fué Intendente de Santiago desde el 29 de Agosto de 1891 hasta 1894; que tuvo noticias que esa casa había sido saqueada, como muchas otras.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Cárlos Lira* *Diego Armstrong*, secretario.

2.ª Quiénes perpetraron el saqueo, la designacion i grado de las personas que segun la afirmacion del reclamante, lo organizaron i comandaron.

Testigo Ramon Yávar: que sabe que fueron turbas anónimas sin organizacion alguna; que no sabe que fueran comandadas por alguien que no presenció ningun saqueo; que por el rumor público

que circuló por la ciudad en esos momentos sabe él que las turbas saqueadoras no tenían organización alguna.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*R. Yávar.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Juan Sullivan: que no había organización en la turba; que no vió sino al pueblo; que no había policía; que vió la mayor parte de los saqueos; que los gritos eran múltiples en las turbas para que fueran de un punto a otro i verificaran los saqueos; que no vió a nadie que dirigiese la turba por medio de campanilla.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. C. Sullivan.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Rojelio Sullivan: que el pueblo perpetró el saqueo i que éste se organizó sin que supieran que hubiesen algunos que lo comandase; que vió saquear la casa de la señora de Balmaceda i de don Jorje Rojas, como de 10 a 12 del día.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*R. Sullivan.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Eduardo Matte: que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Eduardo Malle.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Carlos Walker Martinez: que lo ignora.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*C. Walker Martinez.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Carlos Lira: que las turbas perpetraron los saqueos i que no supo que nadie las organizara o comandara.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Cárlos Lira.*—*Diego Armstrong*, secretario.

3.º La negligencia grave que hubieran manifestado las autoridades de Santiago para prevenir o reprimir tales excesos i el que las fuerzas de que ellas disponian rehusaran impedir el saqueo a virtud de órdenes superiores.

Testigo Ramon Yávar: que mui al contrario de suponer negligencia por parte de las autoridades de Santiago para prevenir los saqueos puede afirmar que los saqueos trataron de contenerse desde el primer momento; pues el jeneral Baquedano, a cuyo cargo estaba la ciudad, nombró inmediatamente al señor Domingo de Toro Herrera, comandante del Cuerpo de Bomberos, organizado como guardia del órden; al señor jeneral Arteaga, comandante jeneral de armas; al señor Cárlos Lira, intendente de la provincia i al declarante, secretario de la Intendencia; que esta última autoridad, como primer acto que efectuó, fué la organizacion de una guardia del órden de los vecinos mas respetables, dándoles armas para que previnieran estos excesos; que como entre 8 i 9 de la mañana. fué cuando el jeneral Baquedano hizo los nombramientos i se dieron las órdenes a que se ha referido ya el declarante; que no tiene noticia alguna ni llegó especie semejante a la Intendencia ni a la Comandancia Jeneral de que en la tarde del 29 se hubiera perpetrado el saqueo de una casa en la Alameda, estando al frente de dicha casa un piquete de soldados i al son de una banda de músicos; que cree que los primeros saqueos tuvieron lugar como a las 7 A. M., mas o ménos; que la guardia del órden fué la que contuvo los saqueos; que se tomaron varios presos; que hubo algunos muertos, pero no en el centro de la ciudad sino en los suburbios; que poco despues de las 8 A. M. principió a funcionar la guardia del órden, es decir, el Cuerpo de Bomberos, que estaba organizado; que como a las 11 A. M. cesaron los saqueos en la parte central de la ciudad; que hubo algunos aislados en los lugares apartados de la ciudad i ya en la noche todo habia cesado; que la guardia del órden fué la que tomó los presos; que sabe que fue-

ron juzgados algunos de ellos, puesto que a él mismo, como secretario de la Intendencia, se le llamó a declarar en varios procesos; pero ignora la suerte que corrieron dichos procesos; que cuando el señor Cárlos Lira se hizo cargo de la Intendencia, la policía se habia desbandado llevándose el armamento i que la misma suerte habia corrido otro cuerpo organizado por el Gobierno del señor Balmaceda, llamado Guardia del Orden; que no supo que se hubiesen puesto tropas a disposicion del señor Baquedano cuando se hizo cargo de esta ciudad; que sabia sí que en ese momento las habia en la ciudad, pero que cree tambien se desbandaron, de allí la necesidad de formar guardia del orden; que ignora que como a las 10 A. M. se hubieran destacado como seiscientos hombres del rejimiento Imperial, para custodiar la calle de Catedral; que es efectivo que frente a la Intendencia hubo el 29 de Agosto, entre 10 i 11 de la mañana, un piquete de soldados, pero que no recuerda a qué cuerpo pertenecian; que el declarante fué personalmente entre 10 i 11 A. M. a reprimir un saqueo que se efectuaba en la calle Veintiuno de Mayo, frente al Mercado, i hubo dos muertos entre los saqueadores, que en la noche, supone, hubo por lo ménos doscientas personas muertas, saqueadores tambien, muertos por soldados cuyos jefes tenian órdenes mui severas; que si las fuerzas que habia en Santiago el 29 de Agosto no se hubieran desbandado i hubieran permanecido organizadas, habrian sido suficientes para prevenir i reprimir los saqueos que tuvieron lugar ese dia; que el testigo no vió los cuarteles el dia 29 de Agosto, pues sus pasos fueron ese dia de su casa a la Moneda, tan luego como se tuvo noticias del triunfo de la revolucion, i de la Moneda a la Intendencia a servir su puesto de secretario; que ya ha dicho que en ese momento habia fuerzas en los cuarteles; pero que no se podia contar con ellas.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*R. Yávar Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Juan C. Sullivan: que no habia fuerza alguna que pudiese impedir el saqueo; que el declarante con varios otros extranjeros estuvieron mirando los saqueos desde las 8 a 8 i media hasta las 11 A. M., que no vió tomar a nadie preso; que vió a algunos bomberos que hacian de guardia del orden; como a las 11 el jefe de la casa Muzard fué a la Moneda a pedir fuerzas para custodiar el comercio: las que no pudieron dársele porque no las habia i no estaba todavía organizada; que no estuvo en los cuarteles, pero que todos sabian que las fuerzas se desbandaron; que no vió policía ni soldados que estorbaran los saqueos; que solamente hicieron esto los particulares; que vió a muchas personas tratar de estorbar saqueos i conseguirlo en algunos casos; que recuerda que cuando se saqueaba la casa del señor Claudio Vicuña vió a don Carlos Walker Martínez, segun cree, subir a las ventáνας, cerrarlas e imponérselas a los saqueadores.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*J. C. Sullivan.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Rojelio Sullivan: que no habia ni tropa ni policía que oponer a los saqueadores, porque se habia desbandado; que a las 4 P. M. fué llamado el declarante a formar parte de la guardia del orden, la que principió a formarse como a la 1 P. M.; que el declarante patrulló toda la noche en el barrio de Yungai, i que no hubo desorden alguno durante su guardia; que fué de la parroquia de Yungai de donde se le llamó para formar parte de la guardia del orden; que el prefecto de policía don Julio Argomedo, fué quien le dió armas; que supone que no habria tropas en los cuarteles, porque hasta éstos fueron saqueados; que él no vió los saqueos de los cuarteles; pero sí al pasar vió que el cuartel de Yungai i uno de la Alameda de Matucana estaban destrosados.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*R. Sullivan.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Eduardo Matte: Que conoce perfectamente lo que se refiere a estos saqueos; pues, en la mañana del 29, como a las ocho o nueve, el declarante se dirigió en compañía de otros amigos a la policía a poner en libertad a los presos políticos i vió que en el cuartel no habia un solo policial, pues todo ese cuerpo se habia desbandado, temiendo que fueran castigados por los actos que cometieron ántes del triunfo de la revolucion; que todos los cuerpos que habia en la ciudad se desbandaron, a escepcion del batallón Zapadores, pero la organizacion de este cuerpo fué nominal, pues la tropa estaba desmoralizada i mas bien constituía un peligro, pues al salir piquetes de este batallón a la calle se dispersaban i cometian excesos entregándose a la bebida: que en esta emergencia i no teniendo la autoridad fuerzas militares para contener a las turbas que cometian tanto exceso, hubo de llamar a los vecinos mas respetables a formar una guardia del orden, la cual prestó, en efecto, importantísimos servicios, llegando hasta cargar contra el populacho, haciéndole bajas, hasta dominarlo; despues de leído lo anterior, el declarante rectificó la relacion esponiendo que la desmoralizacion del cuerpo de Zapadores no fué de tanta gravedad que no se utilizara una parte de esas fuerzas, pues él mismo pudo conseguir que un piquete mandado por un oficial fuera a proteger la casa de don Nemecio Vicuña; que las órdenes no se daban desde la Moneda sino desde la Intendencia, donde se habia constituido una junta para atender i proveer a la defensa de la propiedad i vida de los ciudadanos; que un hijo del declarante formó parte de la guardia del orden a que se ha referido i que éste le contó que su seccion habia desarmado a un número considerable de soldados que andaban dispersos i ebrios en la tarde en la ciudad; que cuando fué el declarante a casa del Ministro Egan vió allí algunos soldados armados que protegían la Legacion Americana, que cree el declarante que no habria sido posible utilizar mas allá los soldados del señor Balmaceda que quedaron en la ciudad, pues muchos de los oficiales i jefes se dispersaron i arrancaron temiendo que se les lynchara, segun se habia corrido se haria; que no puede precisar la hora en que se desbandaron las tropas a que se ha referido; solo puede repetir lo que ha dicho anteriormente, en concepto jeneral; que

vió cuando algunas casas se saqueaban, que no vió que se tomara preso a nadie, puesto que ya ha dicho que la policía se había desbandado, que al llegar el declarante a la Moneda le pidió el jeneral Baquedano que fuera a la Intendencia a procurar con los demás que había allí ya reunidos a la organización de la guardia del orden que debía custodiar i defender a la ciudad de los excesos.

Leida que le fué, se ratificó i firmó.—*Eduardo Matte.*—*Diego Armstrong*, secretario.

Testigo Carlos Walker Martinez: que cree que debía decirse impotencia de la autoridad i no negligencia; i que era impotencia porque la policía se había desbandado, porque la tropa estaba toda desmoralizada i porque la chusma era inmensa; que considera un absurdo el de suponer siquiera que las autoridades hubieran dado órdenes para que impidieran los saqueos; que todos los individuos que tenían alguna influencia con el pueblo, como el declarante, se consagraron a reducir a éste a que se contuviera, aun haciendo uso de la fuerza muscular; pero era tanta la furia del populacho que todo era ineficaz i que quizás un ejército no habría podido contenerlo; que muchos saqueos se evitaron por intervención e influencia personal de algunos particulares, influencias que les nacía del estado de revolución en que se había encontrado el país; que el declarante mismo evitó algunos i especialmente el incendio de la casa de don Claudio Vicuña; que la guardia del orden principió a organizarse inmediatamente que se produjeron los movimientos; que la policía debe haberse desbandado como a las seis de la mañana; que la guardia del orden comenzó a organizarse temprano cuando se vió que no había fuerzas para custodiar la ciudad; pero como había necesidad de procurarse armas tardó en poder prestar servicios eficaces; que no sabe si se hubiera llevado presos a algunos individuos por la guardia del orden; pero que sí supo que ésta había tenido que hacer fuego sobre asaltantes; que no cree que se llevaran presos en el día porque no habría habido quien los custodiara en la cárcel, porque no había fuerza en ella, i aun sabe que se escaparon muchos reos de delitos comunes, porque no había quien hiciera guardia.

Leida que le fué, el testigo espuso que habia renunciado a su fuero o de solo podersele pedir su declaracion por informe, por deferencia al Tribunal Arbitral i desear de viva voz dar un testimonio mas detallado que sirviera mas eficazmente para formar la conciencia del Tribunal sobre los sucesos materia de la investigacion.

Se ratificó i firmó.—*C. Walker Martínez.*—*Diego Armstrong,* secretario.

Testigo Carlos Lira: que no podia haber habido negligencia desde que no se tenia fuerzas para reprimir los excesos, pues la policia se desbandó toda i las fuerzas de línea eran cívicos movilizados i no obedecian, habiéndose desbandado los oficiales; que se formó guardia del orden para custodiar la ciudad, pues no habia policia ni tropas; que a la guardia del orden se le entregó armas como a las tres de la tarde, pero que ésta no principió a prestar servicio eficaz hasta la noche; que el declarante fué nombrado intendente entre las doce i una del dia; que inmediatamente despues de nombrado intendente salió a la calle con varios caballeros a contener a la turba, pues no tenia por el momento otro medio; que eso mismo habia hecho ántes de ser nombrado intendente; que no cree que se hubiera podido utilizar mas allá por las autoridades las fuerzas que dejó el señor Balmaceda i que si la policia hubiera quedado en su puesto i no se hubiera desbandado se habrian podido impedir los saqueos como que en la noche ya con pocas fuerzas se dominó a las turbas; que lo primero que se hizo con la poca tropa útil que habia fué resguardar las Legaciones; que sabia que habia Zapadores i tropa del 4.º de línea de Santiago, pero sin oficiales porque todos éstos habian huido; que a los Zapadores hubo que encerrarlos porque estaban medio sublevados, puesto que estaban sin oficiales; que el comandante Campos, con una poca fuerza de caballeria que se pudo organizar fué mandado en la noche a custodiar los suburbios; que el comandante del 4.º de línea le dijo en el cuartel de ese cuerpo que habia ido a visitar el declarante, que sus soldados eran tan reclutas que se cuidara, que a pesar de disparar a la derecha

no lo hirieran a él que estaba a la izquierda, por lo que suponía el declarante que esos soldados eran cívicos; que fueron piquetes de Zapadores i no del 4.º de línea los que se utilizaron para resguardar las Legaciones; que la guardia del orden prestó servicios durante tres noches sucesivas para custodiar la ciudad i creó que tomaron presos a algunos individuos; que sabe que se tomaron presos a varios individuos i que gracias a la guardia del orden se libró la ciudad de un nuevo saqueo; que ignora completamente, i al contrario que puede decir que es inexacto que se hubiera formado listas ántes del 29 de Agosto para saquear las casas de los balmacedistas i que sí vió una lista que encontró en la caja de la Policía de Santiago de las casas de los constitucionales que debían ser saqueadas en caso de triunfo.

Leída que le fué, se ratificó i firmó.—*Cárlos Lira.*—*Diego Armstrong*, secretario.

SENTENCIA

Luis E. Thompson, súbdito británico, reclama del Gobierno de Chile la cantidad de veinticuatro mil setecientos setenta i seis pesos (§ 24,776) mas cinco mil seiscientos diecisiete pesos ochenta i cinco centavos de intereses (§ 5,617.85) por saqueo de su casa.

El reclamante espone que a las nueve de la mañana, mas o menos, del día 29 de Agosto de 1891, una partida de jente perfectamente disciplinada, que obedecía a determinadas personas que llevaban una lista de las distintas casas que debían saquear, se detuvo delante de la suya, calle de Búlnes número 8, en Santiago, rompió la puerta de calle que se encontraba cerrada i sustrajo cuanto había en la casa, dando gritos feroces de venganza contra el partido vencido en la guerra civil i sus prohombres; que él i su familia no tuvieron mas que el tiempo indispensable para escalar los muros interiores de la casa i escapar de una muerte casi segura; que tratando de averiguar el motivo por qué había sido saqueado, se le dijo que era porque se creía que en su casa existían muebles

de don Acario Cotapos; pero que el hecho era inexacto, puesto que el mobiliario del señor Cotapos, segun supo despues, lo salvó el dueño de la casa que arrendaba dicho caballero; que puede comprobar la veracidad de los hechos espuestos con los testigos que designa al efecto; que el valor de todo lo que le fué saqueado alcanza a veinticuatro mil setecientos setenta i seis pesos (\$ 24,776), por cuya suma, mas intereses, que importan cinco mil seiscientos diecisiete pesos ochenta i cinco centavos (\$ 5,617.85), demanda al Gobierno de Chile.

Acompaña un certificado de nacimiento otorgado por el alcalde i subdelegado de Halifax en 16 de Julio de 1892: una declaracion jurada del señor James R. Thompson ante el notario público de Washington, en que dice el declarante ser padre del señor Luis E. Thomson; un inventario sin firma, del contenido, en 29 de Agosto de 1891, de la casa saqueada, con los precios de los objetos.

El ajente de Chile pide, desde luego, que el Tribunal se declare incompetente, por cuanto los documentos que se acompañan al memorial no hacen fé ante la lei para comprobar la nacionalidad británica del reclamante; que ántes de entrar al fondo de la reclamacion, es preciso establecer con presicion los hechos a que ella se refiere, que acontecieron de la manera siguiente: «que en la noche del 28 de Agosto de 1891 el público de Santiago ignoraba, en jeneral, el resultado de la batalla de la Placilla, perdida por las tropas del Gobierno en la mañana de aquel dia. En la madrugada del 29, a las tres de la mañana, segun la relacion oficial del ministro aleman, el ex-Presidente Balmaceda huyó del palacio de la Moneda. Poco despues se instaló allí el jeneral don Manuel Baquedano, encargado por el momento del mando en la capital. A las nueve de la mañana, el espresado ministro aleman en Santiago encontró en palacio al referido jeneral con diversos hombres públicos, ocupado en dictar disposiciones destinadas a mantener el orden en la ciudad.

«Desgraciadamente, no fué posible impedir los desmanes a que se entregaron las turbas populares. La noticia de la derrota, que ya no pudo ocultarse, i de la desaparicion del ex-Presidente, determinaron la fuga de todas las autoridades i el desbande de to-

da la policia i de la mayor parte de algunas tropas recién llegadas a la capital. Muchos de los policiales i soldados tomaron trajes de paisanos i se agregaron a las referidas turbas que, dirigidas o nó, recorrían las calles i saqueaban las casas de los principales partidarios del Gobierno derrocado, ántes que los esfuerzos del jeneral Baquedano logran reorganizar los elementos necesarios para reprimir a los saqueadores i restablecer el orden despues del caos.

«En resumen, así pasaron las cosas, segun es notorio i consta en la comunicacion que dos dias despues dirijió el jeneral Baquedano al Presidente de la Junta de Gobierno, i en las que a sus respectivos Gobiernos enviaron los representantes de Inglaterra, Alemania i Estados Unidos de América, oficialmente publicadas»; que el reclamante ofrece el testimonio de diversas personas para probar el hecho del saqueo de su casa; que sin duda, por esta medida podrá acreditar aquel suceso; pero que jamas podrá probar válidamente con testigos ni que todos i cada uno de los muebles i objetos que enuncia la lista acompañada, sin firma, estaban en la casa en el momento del saqueo; ni que todas eran de propiedad del reclamante sin haber uno solo del señor Cotapos o de otra cualquiera persona; que todos fueron destruidas sin salvarse ni siquiera una de las muchas y valiosas joyas que figuran en el inventario i tan fáciles de salvar, i finalmente ni que dichos objetos tuvieran el valor visiblemente exajerado que el reclamante ha querido atribuirles; que sobre ninguno de esos puntos es siquiera admisible legalmente la prueba testimonial; que aun supuesta la efectividad de los hechos, no podria ser admitida, en derecho por el Tribunal, la reclamacion, puesto que el reclamante mismo ni nadie ha indicado siquiera que el referido saqueo fuera uno de los actos u operaciones ejecutadas por las fuerzas militares de la República a que se refiere el artículo 1.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893; que aquel acto criminal fué, como obra o resultado de tumultos populares, un caso de fuerza mayor tan comun como invencible en circunstancias análogas i que no puede afectar la responsabilidad del Gobierno de Chile ni a favor de los nacionales ni a favor de los extranjeros; que si fuera cierto, como lo asevera el memorialista, que su casa fué saqueada por jente que obedecia a determinadas personas,

con arreglo a lo prescrito en el artículo VII del reglamento del Tribunal, debió indicar los nombres de esas personas, lo que no hace, para poder calificar el acto; que, por lo demás, determinadas las personas que dirijian a los saqueadores, no se explica cómo el reclamante no las ha perseguido ante los tribunales ordinarios para hacer efectiva la responsabilidad civil i criminal que afecta a los autores de crímenes comunes como es el de que se trata; termina pidiendo, en consecuencia de lo espresado, que el Tribunal se declare incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio la deseche en todas sus partes.

En la réplica se sostiene que los documentos acompañados son fehacientes para comprobar la nacionalidad, pues el funcionario que los otorgó es el que la lei del pais designa para esto; que, por lo demás, ahora agrega otras piezas que ponen fuera de duda su nacionalidad británica; que respecto a que el saqueo «se debió a esplosion popular de odios políticos i que el Gobierno de Chile no tuvo medios de impedir se cometieran desbordes», basta evocar los tristes recuerdos del 29 de Agosto, que están demasiado frescos para comprobar la inexactitud de lo sostenido por el ajente de Chile en la contestacion; que a las tres de la mañana del día 29 de Agosto, cuando el Presidente Balmaceda depuso el mando en manos del jeneral Baquedano, le entregó cuatro mil hombres de ejército de línea i las policías que se encontraban en Santiago, diciendole que lo único que le exijia «era que hiciera respetar el orden», que el jeneral Baquedano, jefe ya en ese momento de la nacion, no volvió a la Moneda hasta las 7 A. M., donde le esperaban los comandantes de cuerpos para recibir sus órdenes; que no fueron otras sino que «se retiraran dichos jefes a sus cuarteles a esperar órdenes»; las mismas que no llegaron hasta las 3 o 4 P. M., cuando la autoridad temió que la excitacion i los efectos del licor quitasen a una parte del pueblo la docilidad que hasta ese momento habia manifestado para obedecer a los directores del saqueo; que, como lo dice el ministro británico en su comunicacion oficial de aquellos dias, «el saqueo fué perfectamente ordenado», que «mas aun, fué preparado con algunos dias de anticipacion por los jefes del partido que triunfó i la autoridad pública no impidió

ese saqueo con las fuerzas que tenia a sus órdenes, por que lo estimó quizás como justo castigo del vencido»; que en esa misma comunicacion oficial se dice lo siguiente: «yo personalmente presencié las operaciones de los devastadores de la casa del señor Eastman; éstos ejecutaron su operacion sin meter ruido o desórdenes innecesarios, *i mientras duraba el saqueo observé que una compañía de soldados pasó en frente de la casa sin demostrar la menor intencion de intervenir*»; que lo que pasó en esa casa, que por casualidad vió el señor ministro, fué lo que sucedió en todas las demas: la fuerza pública se abstuvo, en virtud de órdenes superiores, de impedir que se llevara a cabo lo que en esos dias se llamó justo castigo; que este hecho se puede comprobar hasta el exceso; que respecto a la especie de que la casa del reclamante se saqueó porque tenia asilado en ella a la familia del señor Cotapos i guardados sus muebles, es enteramente inexacto, por cuanto este caballero i su familia estuvieron en ese dia asilados en la Legacion de España, i, lo segundo, es igualmente erróneo, porque no tuvo un solo mueble del señor Cotapos en su casa; que éstos se pusieron en salvo en otra parte, como le consta al intendente de Santiago de entónces, señor Carlos Lira; que respecto a que no se pueden legalmente comprobar con testigos los hechos a que se refieren a la propiedad de los muebles i su existencia en esa casa como tambien su valor, difiere del señor agente de Chile, i que habiéndose destruido, con las existencias de la casa, todos los documentos, no es posible otra clase de justificacion.

Se acompaña certificado de nacionalidad inglesa espedido por el encargado de negocios de S. M. Británica i un espediente que contiene copia de la nota oficial del señor ministro de S. M. Británica a su Gobierno, i una informacion para acreditar que los muebles del señor Cotapos se habian puesto en salvo en otra casa que no era la del reclamante.

En la dúplica se insiste en que la nacionalidad del reclamante no se halla comprobada ni con los documentos anteriores ni con los que ahora se presentan; se espresa que el reclamante ha descuidado demostrar, lo que es capital, que el saqueo de su casa fué un acto ejecutado por o con intervencion de la fuerza pública, una

operacion militar: que sin eso el Tribunal seria incompetente para conocer de la reclamacion; que no se sabe con qué antecedentes afirma el replicante que, en jeneral, el saqueo de 28 de Agosto «fué preparado con algunos dias de anticipacion por los jefes del partido que triunfó», lo que está en contradiccion con lo que manifestó oficialmente el señor Egan, ministro de los Estados Unidos; i como quiera que haya sido el acto, fué ejecutado por turbas populares, i no por fuerza de la República, de mar o de tierra; que aun dado el caso que cupiera dentro de la órbita de accion señalada por la Convencion a la competencia del Tribunal, dados los hechos i con arreglo a los principios i a la jurisprudencia internacional, la reclamacion del señor Thompson, considerada en su fondo, tendrá que ser desechada; que el reclamante pretende que la autoridad pública no le prestó proteccion contra los saqueadores i llega audazmente avanzando en el camino de afirmaciones temerarias, a espresar que la autoridad nada hizo para impedir el saqueo i que lo permitió; que esto es, como es notorio, completamente contrario a la verdad; que el reclamante acusa desde luego al jeneral Baquedano a quien llama graciosamente *Jefe de la Nacion*, anulando de esta suerte la autoridad de la Junta, afianzada en la Placilla como único Gobierno de Chile; que el jeneral Baquedano no pudo recibir realmente del ex-Presidente Balmaceda un poder que éste no tenia ya, ni de hecho, en la noche de su fuga; que desbandada completamente la policia i, en gran parte, los soldados i hasta los oficiales de los tres o cuatro batallones llegados la víspera a Santiago i compuestos en su mayoria de milicianos no acostumbrados a una antigua disciplina; levantado el populacho de todos los arrabales de la capital, a las primeras noticias ciertas del derrocamiento del Gobierno que durante ocho meses había usado rigurosamente de la lei marcial; sobrexitados en extremo los ánimos i borrada por el momento toda nocion de autoridad, el poder que en la mañana del 29 de Agosto procuró ejercer de hecho en Santiago el jeneral Baquedano, asistido de unos pocos hombres públicos, mal obedecido o desconocido por la jeneralidad, fué de todo punto insuficiente en los primeros momentos para impedir los saqueos i reprimir a los saqueadores; que dada la magnitud de los desórdenes i la pobreza

de los elementos de que podia disponer, el jeneral i sus auxiliares hicieron cuanto era dable hacer en garantia de las personas i de las propiedades, logrando contener el saqueo de personajes políticos ántes de las 11 de la mañana, a las dos horas de comenzado, despues de lo cual los desórdenes se localizaron en los arrabales, dirijiéndose los asaltos principalmente contra los despachos de licores i los montepios o casas de prendas; que instalado en la casa de Gobierno desde las primeras horas de la mañana, el jeneral Baquedano trabajó activa i eficazmente; nombró intendente i comandante de armas; espidió proclamas llamando calorosamente al pueblo a la conservacion del orden público; dió nuevos i prestigiosos jefes a los cuerpos desmoralizados i medio desbandados del ejército balmacedista existentes en Santiago; atendió a despachar piquetes de tropas para resguardar las casas de ciertas legaciones extranjeras, en que se habian asilado muchos de los políticos del bando derrocado; hizo salir patrullas a recorrer las calles en represion de las turbas; llamó i armó al cuerpo de bomberos para el servicio de vijilancia, i con el mismo objeto organizó, de vecinos i comerciantes, en los diversos barrios, la llamada guardia del orden, al mismo tiempo que trabajaba afanosamente en reconstituir el cuerpo de policia, etc , etc.; que, en una palabra, donde por la mañana solo existia el caos, a medio dia existia orden relativo, que horas mas tarde fué casi completo; que, cuando al dia siguiente, restablecida ya, aunque imperfectamente, la comunicacion con Valparaiso, pudieron llegar a Santiago los primeros agentes de la Junta de Gobierno, encontraron aquí del todo restablecida la tranquilidad pública; que esto es lo que consta del *Memorandum de la revolucion de 1891*, de las publicaciones de los principales diarios extranjeros publicados en Santiago, de las relaciones oficiales de los sucesos enviadas a sus respectivos Gobiernos por los ministros diplomáticos acreditados en Santiago, i que corren impresas en el *Correspondence respecting the relations with Chile*, p. 66, núm. 195 Washington, 1892, en el *Libro Blanco* de la concilleria alemana núm. 246, año 1892, en el *Blue Book* de la Gran Bretaña de 1892, páj. 246, núm. 342, que es vana la pretension tambien de derivar la responsabilidad de Chile por los desórdenes de Agosto culpando al ex-Presidente Balmaceda

de haberse fugado sin haber tomado las medidas necesarias para garantir el orden público, porque en la noche del 28 de Agosto la autoridad del ex-Presidente reposaba únicamente en el secreto de su derrota i éste era inconciliable con la adopción de medidas eficaces en el sentido indicado: guardando, como guardó aquel secreto, el ex-Presidente atendió a los cuidados de la seguridad personal; pero, sirvió también de ese modo a la seguridad de la población; que ¿de qué horrores no hubiera sido ésta víctima durante la noche del 28, si en la tarde de ese día hubiera el pueblo sabido la derrota i desaparición del Jefe del Gobierno, que solo supo en la mañana siguiente?; que es cosa sabida que los extranjeros no pueden alegar privilegios sobre los nacionales por los daños sufridos en el curso de conmociones civiles; se cita lo sucedido en Londres con motivo de la revolución de 1688 (Macaulay; *Historia de Inglaterra*, tomo III, capítulo X)

La causa se recibió a prueba i se rindió la que corre en autos.

Considerando: que el reclamante Luis E. Thompson, súbdito británico, declara en el memorial que presentó a este Tribunal Arbitral, i que constituye su demanda, que el 29 de Agosto de 1891, la casa que ocupaba en Santiago, calle de Búlnes núm. 8, «fué saqueada por una partida de jente disciplinada i que obedecía a determinadas personas;»

Considerando: que los sucesos lamentables que ocasionaron los perjuicios al reclamante, cuya indemnización solicita, no podrían comprometer la responsabilidad del Gobierno de Chile sino en el caso de que hubieran sido cometidos por personas que dependieran de él o estuvieran bajo su vijilancia o que las autoridades, disponiendo de los medios suficientes para estorbar el saqueo, no lo impidieran;

Considerando: que el reclamante confiesa que el saqueo de que fué víctima, fué acto del populacho, i que no ha probado en manera alguna que las personas anónimas que pretende lo capitaneaban tuvieran un carácter público o estuvieran bajo la dependencia de la autoridad;

Considerando: que el reclamante no ha probado tampoco que las autoridades superiores de Santiago hubieran manifestado *neglijen-*

cia grave para prevenir i reprimir estos excesos, que son el triste resultado de disenciones profundas internas; ni que las fuerzas de que ellas disponian recibieran la órden de no impedir el saqueo, como lo ha afirmado el demandante;

Considerando: que de la prueba rendida ante el Tribunal resulta que inmediatamente que la autoridad suprema constituida en esos momentos, tuvo noticia de los saqueos, tomó todas las medidas que exigian las circunstancias, pero que necesariamente debian ser mui limitadas desde que la policia entera se habia desbandado, i que las tropas que pertenecian al partido que acababa de ser irrevocablemente vencido i habian perdido su Jefe Supremo debian naturalmente encontrarse desmoralizadas; que a un Gobierno, en todo evento, no puede hacérsele responsable por una simple falta de prevision de uno de sus funcionarios, ni de las consecuencias de una convulsion o estallido popular, cuando no se ha probado que tuviera los medios suficientes i seguros para reprimirla; que su responsabilidad depende en semejante caso de la magnitud i eficacia de los elementos de que pudiera disponer para contener el abuso; pero que no le incumbe ninguna cuando, advertida de los atropellos de la turba, la autoridad hubiera tomado las precauciones que podia ejercitar en tan crítico momento para impedir que se renovaran i detener sus consecuencias;

Considerando: que estos principios unánimemente aceptados por la doctrina i jurisprudencia del Derecho Internacional, deben determinar las resoluciones de este Tribunal en conformidad al artículo 5.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por mayoria de votos, discintiendo el árbitro británico, declara sin lugar la presente reclamacion.

Santiago, 21 de Diciembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—
ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo Tribunal en 21 de Diciembre de 1895.—
Diego Armstrong, secretario.





RECLAMACION N.º 57

JORJE FEDERICO BUSSEY

MEMORIAL

Excmo. Tribunal:

Yo, Ira Haynes La Fetra, por don Jorje Federico Bussey, segun consta del poder que acompaño (véase anexo A), respetuosamente digo: que en ejercicio del derecho reconocido por la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 me presento a nombre del señor Bussey pidiendo una indemnizacion por los perjuicios que se le ocasionaron durante el año de 1891 por causa de la guerra civil.

Mi representado, don Jorje Federico Bussey Uphill, es súbdito ingles por nacimiento, pues segun consta del acta que acompaño (véase Anexo B), nació en la ciudad de North St. Giles in the Field en el Condado de Middlesex, Inglaterra, el 5 de Noviembre de 1856. Se encuentra domiciliado en Chile desde muchos años atras i en el año 1891 en la época en que tuvieron lugar los sucesos que dan orijen a esta reclamacion, residia como reside actualmente en el fundo titulado «San Ignacio de Pemehue», situado en el departamento de Mulchen, República de Chile.

En su carácter de extranjero el señor Bussey no ha tenido ni ántes ni despues del año 1891 injerencia ni participacion alguna en

la administracion jeneral del pais o en la del lugar en que reside ni de ningun modo ha intervenido en actos propios de los ciudadanos del pais, ni estaba en el empleo de ninguna de las partes combatientes ni recibió sueldo de una ni otra de ellas.

En la época de la guerra civil, que principió el 7 de Enero i concluyó el 28 de Agosto de 1891, el señor Bussey permaneció en el fundo ya nombrado, de que era arrendatario, consagrado enteramente a sus trabajos agrícolas. Ni directa ni indirectamente tomó parte en los hechos que ocasionaron esa contienda o se verificaron con posterioridad, i aun se abstuvo de manifestar en público su opinion personal sobre los acontecimientos que se desarrollaban o sobre las pretensiones de cada uno de los bandos.

Todo acto del Gobierno del presidente Balmaceda en contra del señor Bussey era así de tal modo injustificado, cuanto que ninguno de sus empleados o funcionarios podia saber si debia contar al señor Bussey en el número de los partidarios ó de los adversarios de esa administracion.

Los actos de hostilidad i persecucion de que fué víctima el señor Bussey se debieron, no a sus ideas políticas, que no las tuvo en la contienda, ni a su conducta personal durante la guerra, ni a acto alguno que importara un desconocimiento de la autoridad o una ofensa a los representantes del Gobierno, sino a ser el fundo de que él era arrendatario, propiedad de don Francisco Puelma, que figuraba entre los enemigos políticos del Presidente Balmaceda.

Dados estos antecedentes, que podrian ser justificados ampliamente, si el Tribunal lo creyera necesario, i que tienen carácter de notoriedad, paso a formular la reclamacion contra el Gobierno de Chile a que el señor Bussey cree tener derecho.

En la ciudad de Mulchen el día 3 de Abril de 1891 i ante el notario público i conservador, don Fernando E. Dominguez, el señor Bussey levantó una protesta por las vejaciones i perjuicios que se le habian ocasionado i algun tiempo despues en Febrero de 1892, cuando ya se habia restablecido la tranquilidad en el pais, se presentó ante la autoridad judicial de ese departamento, rindiendo una informacion de testigos (véase anexo D) sobre los mismos hechos.

En pliego aparte [véase anexo E] indico las particularidades de estado i residencia de cada uno de los testigos que han declarado en esa informacion, a los cuales podrian agregar muchos otros que tambien son testigos presenciales.

Tanto en la escritura de protesta [véase anexo C] como en la informacion se consigna una relacion suscinta i rigurosamente exacta de los hechos que motivan esta reclamacion, con especificacion del lugar i fecha de los que le han dado orijen i de las personas que en ellos han intervenido.

No reproduzco la parte pertinente por no alargar este memorial i repetir lo que ya está claramente consignado.

En pliego aparte [véase anexo F] presento cuenta detallada de los perjuicios, daños i pérdidas ocasionadas por los acontecimientos mencionados en la protesta i la informacion, [véase anexos C i D], que ascienden a la suma total de ciento sesenta i nueve mil ochocientos noventa i seis pesos treinta i dos centavos [§ 169,896.32] moneda corriente, siendo la suma de § 132 mil por cuenta del capital i § 37,896.32 por cuenta de intereses, previniendo que no se ha presentado a ningun otro Tribunal.

En esta virtud.

Suplico al Tribunal Honorable se digne tener por interpuesta esta reclamacion en tiempo i forma, con los documentos acompañados i en definitiva dar lugar a ella.

I. H. LA FETRA

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Impuesto el agente del Gobierno de Chile del memorial que contiene la reclamacion número 37 presentada a nombre de don Jorge Federico Bussey, tiene el honor de contestar en la forma siguiente:

1 El memorial no está ajustado a todas las prescripciones del Reglamento. Se ha omitido en él en parte importante la declaración ordenada por el art. VI; no se ha hecho la exposición detallada i clara de los hechos que han dado oríjen al reclamo, como lo manda el art. VII; ni se ha abonado la verdad de los hechos con el juramento o declaración solemne en la forma determinada por el art. IX; pues no es aceptable la fórmula vaga i jenérica del certificado consular estampado al pié en que se dice, solo en idioma ingles, que el señor La Fetra ha jurado ante el vice-cónsul de S. M. B., que es al mismo tiempo el ajente nombrado para intervenir en estas reclamaciones por parte de los súbditos británicos. Estas irregularidades son suficientes para no dar curso al memorial, como lo solicito de V. E. mui respetuosamente.

2 No se trata en la presente reclamacion de actos u operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la guerra civil de 1891. Es público i notorio que las operaciones militares se desarrollaron en otras zonas de la República mui distantes de la provincia en que existe el fundo de San Ignacio, de que era administrador el señor Bussey. En rigor, la accion que se pretende hacer valer por la presente demanda se deriva de actos meramente administrativos, que pueden haber impuesto responsabilidad al Gobierno o a los funcionarios que los llevaron a cabo, pero que no caen bajo la jurisdiccion otorgada a V. E. por la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Por otra parte, el ajente que suscribe está en posesion de datos i antecedentes que manifiestan que, a ser efectivos los perjuicios que se reclaman, no recaen ellos sobre un súbdito británico, sino sobre ciudadanos chilenos a los cuales no se estiende tampoco la jurisdiccion de V. E.

Aunque el señor Bussey se titula arrendatario del fundo de San Ignacio i dueño del ganado i enseres de ese fundo, i aun presenta un documento que le da esa apariencia, la verdad es que nunca ha tenido el dominio que se atribuye. Cuando al principio de la guerra civil, comenzaron las autoridades a efectuar requisiciones de animales para el ejército, muchas personas creyeron prudente simular ventas o contratos que les sirviesen para poner a salvo sus bienes

de las medidas que en ese sentido adoptase la autoridad. Los dueños de propiedades rurales que se habían manifestado ostensiblemente como decididos adversarios de la administración, abrigaban fundado temor de que las exacciones se efectuasen de preferencia en los bienes que poseían. No es extraño, pues, que el señor D. Francisco Puelma, senador de la República, i enemigo político del Gobierno del señor Balmaceda, adoptase las medidas que creyó convenientes para poner a salvo sus intereses. Como en 30 de Enero de 1981, el Gobierno dictó un decreto en que prohibía la transferencias de bienes raíces a diversas personas entre las cuales figuraba nominativamente el señor D. Francisco Puelma, no pudo este poner en cabeza de su yerno el señor Bussey el fundo de San Ignacio que éste administraba. Se limitó por consiguiente, a simular un contrato de compra-venta de aquella parte de sus bienes existentes en aquel fundo que, aunque inmuebles por su destino, la lei permite desmembrar i vender separadamente con la calidad de bienes muebles. En cuanto al fundo se supuso que quedaba dado en arrendamiento al señor Bussey por el término de cinco años.

Para acreditar que en realidad no hubo tal arrendamiento ni tal compra-venta, me basta manifestar a V. E. que, habiendo fallecido el señor Puelma en Mayo de 1893, su viuda la señora doña Elisa Tupper i sus hijos, entre los cuales figura la esposa del señor Bussey, procedieron a liquidar la sociedad conyugal i a dividir los bienes que quedaron al tiempo de la muerte de aquel caballero. Estas operaciones fueron encomendadas al abogado D. Luis Barros Borgoño, actual ministro de Relaciones Exteriores, quien despues de oír a las partes en numerosos comparendos, procedió a llenar su cometido.

En los antecedentes de esa particion, no figuró para nada el contrato de arrendamiento ni mucho ménos el de venta de animales i enseres a que se trata ahora de dar un valor que los supuestos contratantes jamas le atribuyeron, i del cual ni siquiera se hizo mencion en la particion de los bienes. En el juicio divisorio se adjudicó el fundo de San Ignacio a la señora viuda i a algunos de sus hijos, sin reconocer al señor Bussey su calidad de arrendatario, de la cual no se habló jamas. En cuanto al ganado i enseres del fundo,

fueron adjudicados a la misma señora viuda i a sus comuneros en la adjudicacion del fundo, por la suma de \$18,355 pesos, considerándose como propiedad esclusiva de la sucesion, i prescindiendo en absoluto de los pretendidos derechos de dominio que el señor Bussey quiere ahora hacer valer contra el Gobierno de Chile. Acompaño copio de las piezas del espediente de particiones que comprueban lo que dejo espuesto. De ellos aparece que el señor Bussey era acreedor de la sucesion por la suma de 18,809 pesos 69 centavos que probablemente provenian de sueldos que se le abonaban, o de otra causa que no se espresa en los documentos de la particion que existen archivados.

Si, pues, todos los interesados, incluso el mismo señor Bussey han estado de acuerdo en que el ganado i enseres del fundo pertenecian al señor Puelma i no a su administrador, i si para nada se tomó en cuenta el contrato de arrendamiento que, a ser real i efectivo, no podia espirar sino en Abril de 1896, es evidente que ese contrato carece de causa, i no tuvo mas objeto que poner a salvo los bienes del señor Puelma del único modo que se creyó posible en las críticas circunstancias porque se atravesaba en aquellos dias.

Hai, ademas, otras consideraciones que corroboran esta apreciacion. Es la primera que el señor Bussey era reconocido por todo el mundo como un simple administrador del fundo de San Ignacio i él mismo no se habia dado a conocer en otro carácter. En comprobacion de este hecho, que acreditaré oportunamente, puedo, desde luego, llamar la atencion de V. E. a documentos presentados por el mismo reclamante. Asi, en el primer telegrama del anexo G, espedido por el Intendente de Biobio, a solicitud del mismo señor Bussey, se le considera como un mero administrador. Otro tanto ocurre con los telegramas núm. 2 i núm. 5 dirigidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores al gobernador de Mulchen, siendo de notar que en el primero de ellos se califica al señor Bussey de simple mayordomo, lo que en el lenguaje corriente importa una situacion inferior aun a la de administrador. Habiendo sido espedidos estos telegramas a peticion del mismo Bussey o de personas relacionadas con él, no cabe duda de que ellos han sido quiénes han manifestado cual era en ese tiempo la condicion en que el señor

Bussey trabajaba en el fundo de San Ignacio. Es en vano, entónces, que *a posteriori* se haya tratado de hacerlo aparecer como socio del señor Puelma o como arrendatario i propietario. Las cartas que se dicen protocolizadas carecen de valor para atestiguar hechos anteriores a la protocolizacion, i en ningun caso tienen la fuerza de un documento fehaciente respecto de terceros.

La compra de los enseres, máquinas, mercaderías, maderas i ganado no es tampoco un contrato válido con arreglo a la lei del país en que se celebró. Prescindiendo de que es un hecho público que el señor Bussey no podrá negar el que este caballero carecia de recursos para hacer una compra tan valiosa, basta considerar que en la escritura no aparece estipulado el precio de los objetos vendidos. Sin esta determinacion no hai contrato de compra-venta, ni ménos puede llegar a efectuarse a este título la correspondiente transferencia de dominio. Así se establece en los § 2.º i 3.º del título 23, L. 4.º, del Código Civil Chileno. Esta disposicion concuerda, además, con todas las correspondientes de los Códigos modernos. En Derecho Romano se decia: *Imaginaria venditio non est, pretio accedente*. De manera que *a contrario sensu* debe tenerse como ficticia o simulada la venta en que no se estipula el precio de lo vendido.

De lo espuesto resulta que el contrato de seis de Febrero de 1891, inserto en la protesta acompañada, i del cual no se ha presentado copia, suponiéndolo efectivo, no puede producir efecto alguno, porque fué simulado i carece de causa; i no tuvo otro objeto que poner a cubierto de requisiciones los bienes del señor Puelma, que este caballero creia en peligro. El señor Puelma fué, ántes i despues de otorgado dicho contrato, el verdadero dueño del fundo de San Ignacio i de todos sus enseres, maderas i ganado. Las requisiciones de animales i los perjuicios directos e indirectos que se reclamaban, solo a él han podido afectarlo. El señor Bussey era simple mandatario del señor Puelma, i en su carácter de administrador no puede sostener que esos perjuicios le afectasen personalmente.

El señor Puelma era un eminente ciudadano chileno, antiguo intendente, diputado i senador de la República. El era el único

damnificado i el único tambien que podia exigir indemnizacion de los daños ocasionados en sus bienes; pero no estaba habilitado para ocurrir ante este alto Tribunal, creado esclusivamente para oír reclamaciones de súbditos británicos.

Espero, por lo tanto, que en virtud de esta consideracion i de no tratarse de actos u operaciones de guerra, V. E. se servirá declararse incompetente para conocer en la actual reclamacion.

3 El señor Bussey ha tratado de acreditar los hechos en que está basada su reclamacion con el testimonio de numerosos individuos ilegalmente examinados, fuera del presente juicio, sin mi citacion i por una autoridad que V. E. no había comisionado para tal objeto, ni estaba tampoco facultada para recibir esta prueba por las leyes vijentes en el pais. Por mi parte, espero comprobar en el momento oportuno que no solamente hai marcada exajeracion en el número de animales que se dicen sustraídos, sino tambien en el precio que se les atribuye. Creo que podré comprobar que han sido pagados por la respectiva tesoreria fiscal los pocos que fueron objeto de requisicion. Manifestaré, ademas, cómo no es efectivo el carácter de neutral en la contienda de 1891 que se atribuye el señor Bussey; y como la autoridad tuvo antecedentes de que en el fundo de San Ignacio se tomaban medidas tendentes a favorecer el movimiento revolucionario, i que no saltaban los cargos fundados en tal sentido, a que hace referencia el señor ministro residente de S. M. B. en el telegrama núm. 3 del anexo G.

4 Examinando la cuenta de perjuicios presentada en el anexo F, se nota que la mayor parte de los que se estiman como tales son de aquellos que en derecho se llaman perjuicios indirectos. El señor Bussey supone que el reclutamiento de jente para el ejército, ahuyentó los trabajadores del fundo San Ignacio; supone que por ese motivo se perdió gran parte de la cosecha; supone que la de avena debia producirle diez mil pesos, i que la de trigo debió producir doce mil pesos mas de lo que en realidad rindió; supone que en seis meses dejó de ganar cincuenta mil pesos en la venta de maderas que los sucesos que menciona no le permitieron elaborar, etc., etc.

Esta clase de provechos eventuales, que han podido o no realizarse, segun las circunstancias, no han sido jamas admitidos como materia de reclamacion por los tribunales internacionales, de acuerdo con los principios reconocidos del Derecho de Jentes.

Es famosa la resolucion dictada a este respecto por el Tribunal Arbitral de Jinebra que funcionó en 1872 para fallar las reclamaciones de los Estados Unidos en contra del Gobierno de la Gran Bretaña. «Considerando, dice esa sentencia, que los provechos eventuales no podrian ser objeto de ninguna compensacion, puesto que se trata de cosas futuras e inciertas»; i en virtud de esta razon se negó lugar a la peticion del Gobierno de Estados Unidos. Esta sentencia fué mui comentada i jeneralmente aplaudida, aceptándose como una regla de derecho el fundamento que le sirve de base.

Las pérdidas indirectas, o *falta de ganancias*, segun Calvo no dan mérito a indemnizacion pecuniaria. Tanto las reglas del Derecho de Jentes como las del derecho civil, no autorizan sino el cobro de pérdidas directas. Cuando se entra al terreno de las hipótesis para sostener que el que ha sido víctima de una espropiacion violenta e injustificada, habria podido obtener tal o cual ganancia mediante ciertas combinaciones que pudo llevar a cabo, se pierde de vista que tambien han podido mediar circunstancias desfavorables o contrarias, que habrian podido echar por tierra todo el negocio, defraudando las esperanzas fundadas en los proyectos i cálculos mas habilmente concebidos. «Todos los precedentes consagrados entre las grandes potencias del mundo civilizado condenan de una manera absoluta todo proyecto, toda idea de proseguir por la via internacional el pago de indemnizaciones por beneficios que los particulares habrian estado hipotéticamente impedidos de realizar a causa de una denegacion de justicia, de actos que entran en el dominio de la administracion interior de un pais, de violacion de la neutralidad, de *revueltas civiles*, de bandolerismo, i hasta de operaciones de guerra propiamente dichas». (Calvo, *Derecho Internacional*, t. 3, §. 2579).

La misma teoría está espuesta i sostenida por Wharton, que cita decisiones pronunciadas en igual sentido por las autoridades i

tribunales de Estados Unidos. (Wharton, *Internacional Law Digest*, vol. II, §. 247).

La misma sirvió también de base a las resoluciones de la Comisión Internacional de Egipto organizada por el Kediye en 1883 con el asentimiento de las grandes potencias. El art. 2.º del decreto de organización estableció la regla de que no daban derecho a indemnización alguna los perjuicios indirectos, ni las pérdidas de dinero, alhajas, obras de artes etc.

Los intereses que también se cobran son exigibles en conformidad a las reglas generales del derecho. Pueden otorgarse por vía de indemnización cuando el deudor de cantidad líquida se halla constituido en mora; pero para que esta exista es necesario que se haya vencido un plazo previamente estipulado o que haya mediado una reconvención judicial. En el caso actual nada de esto ocurre i por consiguiente esta parte de la reclamación es tan improcedente como las demás.

§ Para terminar esta contestación, solo me resta hacer presente que don Jorge F. Bussey reside en Chile desde muchos años atrás, i que era casado con chilena desde antes de la guerra civil de 1891. Es, pues, un extranjero domiciliado, casi un nacional, pues todos sus intereses i negocios están radicados en Chile.

A los extranjeros que se encuentran en esta situación es perfectamente aplicable la regla de Derecho Internacional que niega lugar a la indemnización de los perjuicios que sufran a consecuencia de las discordias intestinas que ocurran en el país en que se hallan domiciliados. Esa regla está formulada por Calvo en estos términos: «El principio de indemnización e intervención diplomática por razón de perjuicios sufridos en los casos de guerra civil, no ha sido ni es admitido por ninguna nación de Europa o América». (Calvo, obra citada, t. 3.º, §. 1297. Fiore, *Nouveau Droit International*, t. 3.º §. 1717 i sigs; Hall, P. 2.º, cap. IV, §. 219. *A Treatise on International Law*; Bluntschli, *El Derecho Internacional Codificado*, art. 380 bis. Lawrence, *Commentaire sur Wheaton*, t. 3, p. 128; Wharton, obra citada, t. 2, §. 224, cap. IV).

En mérito de las consideraciones que dejo aducidas, confío en que V. E., dado caso de no aceptar la excepción de incompeten-

cia, se ha de servir rechazar en todas sus partes la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

DESISTIMIENTO

Excmo. Señor:

Jorge Federico Bussey en la reclamacion interpuesta a mi nombre contra el Gobierno de Chile por indemnizacion de perjuicios, respetuosamente digo: que creo del caso desistir de la reclamacion interpuesta.

Todos los hechos en que dicha reclamacion se funda son perfectamente exactos i de la mas fácil comprobacion.

Me seria asi estremadamente sencillo contestar victoriosamente las observaciones del agente de Chile; pero radicado ya en este pais, deseo aceptar los perjuicios que he sufrido como una consecuencia inevitable de la conmocion política de 1891.

La defensa fiscal ha hecho mal en entrar en el campo de las suposiciones desprovistas de verdad i de razon al atribuir al contrato que celebré con don Francisco Puelma un carácter que no tiene.

Para mi objeto actual, me basta con repetir que todos los hechos que he afirmado son perfectamente exactos i de fácil comprobacion.

Por tanto

A V. E. suplico se sirva tenerme por desistido de la presente reclamacion formulada a mi nombre.

JORGE F. BUSSEY.

Otrosi digo: que retirada la reclamacion i necesitando para fines particulares los documentos acompañados al memorial, ruego a V. E. se sirva ordenar se desglosen dichos documentos i copias del memorial i se me entreguen por el señor secretario.

J. H. LA FETRA.

FREDERICK KERR.

En sesion de 28 de Agosto de 1895 el Excmo. Tribunal aceptó el desistimiento i ordenó la devolucion de los documentos.—
Diego Armstrong, secretario.





RECLAMACION N.º 58

PATRICK SHIELDS

MEMORIAL

Al Honorable Tribunal de Arbitracion Anglo-Chileno

El memorial de Guillermo H. Knight, Administrador-Público del Condado de Alameda, Estado de California a US. respetuosamente declara:

I.

Que el día 28 o el día 29 de Enero 1895, Patrick Shields, partió de esta vida en el mencionado condado i estado. Que vuestro memorialista en debida forma de lei, ofició el 18 de Febrero de 1895, sobre los bienes de dicho finado, en la Corte Superior de de dicho condado, i que dicho finado al tiempo de su muerte i por mucho tiempo anterior, era un residente de dicho condado de Alameda.

Que dicho Patrick Shields en vida, tenia reclamos en contra de la República de Chile; de la siguiente naturaleza i carácter, i que es obligacion de vuestro memorialista esforzar los mismos.

II

Vuestro memorialista se ha informado i crea, i por consiguiente alega como sigue:

Que dicho Patrick Shields, tenia treinta i cuatro años de edad, pues nació en Scotstown, condado de Monaghan, Irlanda, en o a eso del 25 de Marzo de 1861, i sin embargo de haber residido muchos años en los Estados Unidos, él nunca declaró su intencion de ser ciudadano de los Estados de América, ni tampoco fué ciudadano naturalizado, de dichos Estados Unidos de América; sino que siempre permaneció, hasta la hora de su fallecimiento siendo súbdito de Su Majestad Británica, Victoria, Reina de la Gran Bretaña e Irlanda i Emperatriz de la India.

III

Que en o a eso del mes de Agosto de 1891, Patrick Shields, mientras residente temporalmente de la ciudad de Nueva York, Estado del mismo nombre, en Brooklyn, tambien Estado de Nueva York, se enganchó i embarcó, como miembro de la tripulacion abordo del vapor Americano *Keweenaw* para hacer un viaje de Nueva York a San Francisco, i que previó de efectuar dicho viaje, dicho Patrick Shields firmó en Brooklyn, Estado de Nueva York, los documentos usuales en los buques, de acuerdo con las leyes marítimas que sirven de reglamento a los marineros a bordo de buques mercantiles americanos.

Que en o cosa de 24 de Setiembre de 1891, dicho vapor *Keweenaw* arribó a la bahia de Valparaiso, Chile, con objeto de reparar averias. Que en o eso del 24 de Octubre de 1891, Patrick Shields, despues de obtener 24 horas de licencia para estar ausente del *Keweenaw* por medio del primer ingeniero i el capitan, saltó a tierra en Valparaiso, Chile; como a las seis P. M. de aquel dia, i despues de visitar una barberia en compañía de Andrew Mc-Kinstry, marinero americano, i tambien súbdito ingles, Patrick Shields, paseaba

por las calles de dicha ciudad, i como era de su obligacion, se condujo de una manera propia, respetable e inofensiva, i miéntras asi se comportaba i sin causa alguna de provocacion, fué arrestado de la manera que aquí se esplica, a saber:

Que el Sábado 24 de Octubre de 1891, Patrick Shields, despues de haber obtenido veinticuatro horas de licencia para estar ausente del *Keweenaw* saltó a tierra en la ciudad de Valparaíso, i miéntras se divertia viendo inofensivamente la ciudad, él, sin provocacion ni causa, fué arrestado por la policía de dicha ciudad i se le detuvo preso hasta las nueve de la mañana del domingo siguiente 25 de Octubre de 1891 que fué puesto en libertad, sin haber queja ni cargo que se hubiera hecho en contra de él.

IV

Que el Domingo 25 de Octubre de 1891, entre las horas de 9:30 i 10 A. M., Patrick Shields fué otra vez arrestado por la policía de Valparaíso, miéntras buscaba un lugar en donde comprar un sombrero, porque el suyo le fué tomado a la fuerza la noche anterior en la prision, i se le tuvo privado de su libertad hasta el lunes 26 de Octubre de 1891, i sin embargo de que Patrick Shields repetidamente preguntó a las autoridades de la prision en donde se encontraba preso que lo llevaran ante o lo comunicaran con el cónsul americano, sus súplicas fueron cada vez rechazadas por ellos.

V

Que el lunes 26 de Octubre de 1891, Patrick Shields fué removido de la cárcel o lugar donde lo tenian preso, en dicha ciudad, por la policía u otros oficiales cuyos rangos i nombres eran desconocidos para el finado i le obligaron a hacer trabajos forzados en las calles desde el amanecer hasta las cinco de la noche, barriendo calles, como si hubiese sido barrendero. Que habiéndole sido indicado o señalado por algunos cargadores o estivadores de Valparaíso, a la policía u oficiales a cuyo cargo estaban los prisioneros en compañía de quienes Patrick Shields estaba trabajando barren-

dero en las calles, diciendo que pertenecía a un buque americano anclado entónces en la bahía de Valparaíso, los mencionados oficiales i policías comenzaron inmediatamente a abusar i maltratar brutalmente a dicho Patrick Shields. Que en aquel día fué repetidamente golpeado en la cabeza i en varias partes del cuerpo, derribándole con una pesada escoba de calles. i cuando estaba tirado en el suelo, los policías i oficiales le dieron de puntapiés repetidamente en varias partes del cuerpo con una brutalidad sin paralelo.

VI

Que el miércoles 27 de Octubre de 1891, Patrick Shields fué obligado a trabajar como barredor en las calles de Valparaíso, moler maiz, limpiar caballos, llevar agua i heno a los caballos i hacer otros trabajos forzosos desde el alba hasta la noche.

Que en este día, mientras que trabajaba en las calles i en el patio de la prision, dicho Patrick Shields fué repetidamente golpeado con una pesada escoba de calle sobre la cabeza i varias partes del cuerpo. Que cuando paraba de trabajar por motivo del dolor i la fatiga, era de nuevo golpeado i acorreado i brutalmente maltratado. Como a las cinco P. M. de la misma tarde fué puesto en libertad sin haber díchole el motivo o causa de su encarcelamiento i sin darle ninguna excusa o disculpa porque fué tratado tan cruelmente por las autoridades de dicha ciudad de Valparaíso.

VII

Que no habiendo podido, Patrick Shields, llegar a bordo de su buque, fué otra vez arrestado i emprisionado sin causa ninguna, el miércoles en la mañana 28 de Octubre de 1891, por la policía de Valparaíso, i además fué obligado a limpiar caballos, i llevar heno i limpiar cobertizos. Que en la misma fecha habiendo intentado salirse de la prision caminó un cuarto de milla cuando fué rearrestado por la policía y los oficiales de la prision, i en la vuelta a a la cárcel fué de nuevo brutalmente golpeado por un policía, armado con un pesado i largo baston. Casi toda la distancia de

cuarto de milla, i a cada paso que la hacian caminar, Patrick Shields recibia un golpe de dicho policia, i cuando se le condujo al patio de la prision fué golpeado con un palo mensiona ya, hasta quedar tirado en el suelo insensible. Que otro policia llegó entónces i le dió de golpes en la cabeza i en la espalda hasta cerca de los riñones. Despues de haberle dado estos golpes, Patrick Shields, tuvo profuso hemorrájea de sangre, arrojó cerca de un cuarto de sangre i tambien echó sangre por las narices i los oidos de lo que resultó que se desmayara, i como entónces creia los anteriores daños le deberian causar la muerte.

VIII

El juéves 29 de Octubre de 1891, Patrick Shields fué forzado otra vez a moler maiz en el patio de la prision por el término de cinco o seis horas; i estando enfermo i débil, le dijo a un oficial que lo reclavara que queria tomar agua a lo cual el oficial se abrió de pié i lo golpeó varias veces en la cabeza hasta cortarle el forro del cráneo, ocasionándole necesariamente una herida de una i media pulgada de larga en la sien derecha, i otra de una pulgada i media de larga sobre la sien. En este mismo dia Patrick Shields, sin embargo de estar débil i exhausto por motivo de sus heridas, le forzaron a cargar una cama de hierro que pesaba como 150 libras, por una distancia de tres o cuatro millas, por entre la poblacion. Se sentia tan débil que tuvo que descansar cerca de cien veces ántes de llegar al lugar de su destinacion, i estaba tan maltratado, que prácticamente no podrá moverse. La brutalidad i barbaridad de los oficiales chilenos fueron repetidas miéntras que él estuvo en la prision durante los dias viérnes i sábado 30 i 31 de Octubre de 1891. Estaba él tan estúpido i postrado por mal tratamiento que recibió, que la tarde del sábado fué trasportado a otra prision en donde quedó enfermo hasta la tarde del lúnes, Noviembre 2 de 1891, en cuya fecha se le dió libertad sin habersele juzgado completamente; sino que solamente se le dijo: «Que se fuera». El ademas representa, que a consecuencia del brutal e inhumano tratamiento de los oficiales chilenos que llegó a confir-

marse ser paciente crónico epiléptico i paralítico; dificultándosele no solamente buscar su subsistencia, sino que requería atención médica i enfermeros, mientras que antes de habersele causado los daños aquí mencionados, era un hombre robusto i capaz de hacer cualesquiera trabajo que se le presentaba. Vuestra memorialista declara además, que los daños que él recibió fueron la causa directa de su muerte, que ocurrió, en el día 28 o 29 de Enero, 1895.

IX

Que ni al tiempo de los varios arrestos de él, ni tampoco durante su prision, ni desde entónces pudo saber las causas o cargos que hubiera habido en contra de él, por violacion de cualquiera ley de la República de Chile *in ordenanza* municipal cometido por dicho Patrick Shields, ni fíndo saber la causa o excusa que hubiera habido para su encarcelacion i tratamiento brutal, cruel e inhumano a que fué sujetado.

X

Que a los hechos arriba indicados la atención del Departamento de Estado, Estados Unidos de América, fué prontamente llamada, como aparecerá por los despachos del ministro Egan. fechado Santiago, Chile, Noviembre 7 de 1891, dirigidos al secretario de Estado, en Washington, como consta en la página 128 y las páginas subsiguientes del Libro Azul, publicado en Washington, D. C., en Enero de 1892, que vuestra memorialista ruega sea considerado como parte de este memorial, intitulado «Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de América, respecto de las relaciones con Chile,» y por otros papeles i documentos en los archivos del Departamento de Estado, en Washington, D. C., i en el Departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores de la capital de la República de Chile, todos los cuales corroboran las alegaciones antedichas i que vuestro memorialista suplica sean considerados como parte de este memorial.

XI

Que el reclamo de Patrick Shields para indemnizacion fué presentado a la Comision Internacional de Reclamos de los Estados Unidos i de Chile, en sesion en Washington, D C., Estados Unidos de América, en Enero de 1894, en virtud del Convenio fechado en Santiago, Chile, en 7 de Agosto de 1892, i recusado por dicha Comision, por motivo que dicho Patrick Shields era súbdito ingles i no ciudadano americano.

XII

Que Patrick Shields jamas recibió dinero alguno ni compensacion ni indemnizacion de ninguna clase del Gobierno de Chile, por los ultrajes manifiestos e injurias cometidos a él.

Que vuestra memorialista presenta este memorial solamente a favor de la madre i hermana de Patrick Shields, quienes son sus heréderas legales i residen en Scottstown, Condado de Monaghan, Irlanda. Por tanto vuestro memorialista ruega que la suma de £ 20,000 sea decretada a su memorialista con interes desde 25 de Octubre, 1891, i la suma adicional que reembolsará a las herederas de dicho Patrick Shields para las costas i gastos incurridos en la preparacion i presentacion de sus reclamaciones e interes sobre la suma decretada.

XIII

Que Patrick Shields nunca estuvo directa o indirectamente mezclado en la guerra civil de Chile, que principió el 7 de Enero de 1891 i terminó el 28 de Agosto de 1891. Que jamas durante aquel tiempo estuvo en el servicio o pago de ninguno de los contendientes.

XIV

Que ignoraba el rango, nombres o posiciones oficiales de las personas que cometieron los actos que han ocasionado este reclamo.

WILLIAM H. KNIGHT,
Albacea de Patrick Shields, finado.

Licenciado
FREDERICK E. WHITNEY,
Abogado del albacea.

F. ALLEYNE ORR,
Licº. asociado.

ESTADO DE CALIFORNIA, }
Condado de Alameda. } ss.

William H. Knight, habiendo sido debidamente juramentado, declara i dice:

Que él es el memorialista, en la causa antedicha que ha dado lectura a dicho memorial, i queda impuesto de su contenido, i que dicho memorial es verdadero, de su propio conocimiento esceptuando declaraciones hechas en dicho memorial basadas sobre informacion i creencia; i tiene fé en la verdad de dichas declaraciones.

Declaracion juramentada hecha en el Consulado Británico, en San Francisco, hoi el dia 25 de Febrero, *Anno Domini*, 1895.

DENIS DONOHOE,
(Sello).—Cónsul de Su Majestad Británica.
San Francisco.

CONTESTACION

El agente del Gobierno de Chile tiene el honor de contestar el memorial presentado a nombre de los herederos de Patrick Shields, de la manera siguiente:

1 El memorial no cumple con varios de los requisitos exigidos por el Reglamento, en especial con los espresados en los artículos V i VI. No puede, en consecuencia, darse curso a la reclamacion; i así lo pido a V. E.

2 La reclamacion ha sido presentada por don Guillermo H. Knight; que se titula administrador público del Condado de Alameda, estado de California. Este señor dice ser albacea de Patricio Shields; pero este título no está justificado en la forma debida para considerarlo como lejítimo i auténtico, pues carece de los requisitos usualmente exigidos para que pueda producir efecto fuera del pais en que se ha espedido.

En caso de ser realmente un albacea de Patricio Shields la persona que ha asumido su representacion, no tendria personeria suficiente para presentarse en Chile reclamando bienes de la herencia, porque esa accion debería ser ejercitada en conformidad a la lei del pais en que funciona el tribunal. En Chile es prohibido a el albacea comparecer en juicio para otros fines que para defender la validez del testamento o para llevar a efecto las disposiciones testamentarias. En todos los demas casos son los herederos los llamados a representar en juicio a la sucesion; i aun deben intervenir con el albacea en los dos únicos casos en que éste puede parecer en juicio (art. 1295 del Código Civil.)

No tratándose al presente de ninguno de los dos casos esceptuados, es evidente que el señor Knight carece de personeria para ocurrir ante V. E., personeria que por otra parte no está tampoco acreditada con los documentos que ha exhibido.

Opongo, pues, esta escepcion previa suplicando al Tribunal que se sirva dar lugar a ella.

3 Aparte de lo espuesto sobre personeria, es indudable, a juicio

del infrascrito, que V. E. es incompetente para conocer de esta reclamacion.

No se sabe hasta este momento si Patricio Shields ha dejado herederos legales o testamentarios. Si los hubiere, solo ellos podrian deducir la reclamacion, siempre que fuesen súbditos británicos i comprobasen esta calidad. El señor Knight no es súbdito británico, pues, segun él lo espone, ejerce un cargo público en el Estado de California, de los Estados Unidos de Norte América. Tampoco es probable que lo sean los herederos de Shields, porque, segun consta de los antecedentes presentados, este individuo, aunque nacido en Irlanda, ha permanecido en Estados Unidos durante 19 años sirviendo por mucho tiempo en la marina mercante de esta nacion. El mismo se creyó ciudadano americano, i como tal era considerado cuando entabló esta propia reclamacion ante el tribunal chileno-americano que funcionó en Washington durante el año de 1894. No es probable que sus hijos, si los tuvo, hubiesen sido matriculados como súbditos ingleses; ántes deberian ser tenidos como ciudadanos de Estados Unidos en conformidad a la lejislacion de este pais.

Concurre a confirmar esta creencia la circunstancia de que el nombramiento del señor Knight en el carácter de administrador o albacea se verificó sin intervencion alguna del ajente diplomático o consular de la Gran Bretaña. Es sabido que en las leyes civiles de todos los paises se establece jeneralmente que los bienes de los extranjeros fallecidos en el pais sean administrados por sujetos designados por el respectivo ajente diplomático o consular.

En todo caso, el señor Knight ha debido comprobar que su reclamacion tenia por objeto amparar intereses de súbditos británicos; i ningun documento ha presentado para acreditar esa circunstancia, no habiendo siquiera designado en su memorial el nombre de las personas en cuyo provecho ha iniciado la reclamacion.

En tales condiciones, V. E. no puede juzgarse competente para conocer de ella. Existe ademas otra razon igualmente poderosa para establecer la incompetencia que reclamo.

Los hechos que sirven de fundamento a la reclamacion consisten en una prision injusta i en graves maltratamientos de obra inferidos

a Patricio Shields por la policía de Valparaíso en el mes de Octubre de 1891. Estos hechos, cuya efectividad niego desde luego, no tienen relación próxima ni remota con la guerra civil de 1891, que había terminado definitivamente en Agosto de ese mismo año. La Convención de 26 de Setiembre de 1893 instituyó este Tribunal única i exclusivamente para conocer de reclamaciones que traigan su origen de aquella guerra. Si es verdad que el artículo 1.º de la Convención se espresa de una manera que pudiera estimarse ambigua, al establecer que el Tribunal conocerá de las reclamaciones que provengan de actos i operaciones ejecutados por las fuerzas de mar i tierra hasta el 28 de Agosto de 1891 *i de las motivadas por sucesos posteriores*, ello no desvirtúa en manera alguna el propósito claro i espresamente manifestado en la primera parte de la Convención. En esa parte se dice literalmente: «S. E. el Presidente de la República de Chile i S. M. la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, a fin de poner un término amistoso a las reclamaciones deducidas por la Legación de S. M. B. en Chile con motivo de la guerra civil que se produjo el 7 de Enero de 1891, han acordado celebrar una Convención de arbitraje, etc.»

No puede, pues, ponerse en duda que la Convención fué celebrada con el propósito de poner término a las reclamaciones que provinieran de actos de la guerra civil, aun cuando los sucesos se hubiesen desarrollado con posterioridad al 28 de Agosto de 1891. Así, no cabía duda de que el Tribunal sería competente para conocer de una reclamación que se basara, por ejemplo, en una requisición ordenada antes del 28 de Agosto i ejecutada después, o en un suceso que haya sido consecuencia lógica i natural de la guerra, por mas que se hubiera realizado después de aquella fecha.

Que tal es el sentido de la frase: «motivadas por sucesos posteriores», lo indican claramente otras disposiciones de la misma Convención. Así, el art. 3.º manda calificar el carácter neutral del reclamante en la contienda civil; i el 9.º espresa que las Altas Partes Contratantes se obligan a considerar los juzgamientos del Tribunal como una terminación satisfactoria perfecta e irrevocable de las dificultades cuyo arreglo se ha tenido en mira. Sostengo por mi parte que los negociadores del tratado no han tenido en mira

ningun otro arreglo que el de las dificultades nacidas de operaciones de la guerra civil, como lo espresa el preámbulo i como consta de los documentos escritos que se cambiaron entre ellos, i cuyo mérito desde luego invoco para el caso de que el Tribunal abrigase dudas acerca del alcance de su cometido. I todavia, si esa duda existiese, le corresponderia adoptar la interpretacion mas restringida, o *stricti juris*, que es la aplicable en derecho a cuestiones que versan sobre la estension de una jurisdiccion extraordinaria, como es la ejercida por V. E.

Los tratados, por ser contratos de buena fé, dice Calvo, deben interpretarse en el sentido de la equidad i del derecho estricto; para interpretarlos, es menester atenerse mas a su espíritu que a su letra, atribuyendo apénas un valor secundario al sentido literal de las palabras. La ambigüedad de las cláusulas se disipa a veces, cuando se tiene cuidado de referirse al objeto mismo que las partes perseguian al abrirse las negociaciones; i para llegar a una conciliacion conviene examinar los hechos, las circunstancias que han precedido inmediatamente a la firma del acuerdo, examinar los protocolos, las actas i notas dirigidas por los negociadores, estudiar los móviles o las causas que han provocado el tratado, en una palabra, la razon de ser del acto (*ratio legis*); comparar los textos que se trata de interpretar con otros tratados anteriores, posteriores o contemporáneos concluidos entre las mismas partes sobre materias análogas. [Calvo, *Le Droit International*, t. III, §. 1650 i sigts].

La aplicacion al caso presente de las reglas anteriores, nos conduce forzosamente a dar a la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, el alcance i significado que yo le atribuyo. No ha podido entrar en la mente de los contratos el sustraer del conocimiento de los tribunales ordinarios todas las causas que los súbditos británicos pudieran iniciar contra el Gobierno de Chile despues del 28 de Agosto de 1891. Ellos no tuvieron otro objeto que poner término a las reclamaciones orijinadas por actos de la guerra civil de 1891; i hasta podria estimarse como una verdadera aberracion, que la Convencion no hubiera permitido reclamar sino por actos u operaciones de guerra, tratándose del período de tiempo transcurrido entre el 7 de Enero i el 28 de Agosto; i sin embargo hubiera autorizado reclamaciones sobre toda materia desde el 28 de Agosto

en adelante. Las causas de Aduanas, las de terrenos fiscales, las relativas a salitreras, todas aquellas, en fin, que los ingleses pudieran iniciar contra el Estado de Chile por hechos posteriores al 28 de Agosto de 1891 deberían quedar sometidas al conocimiento de V. E. Se puede afirmar con plena seguridad que los negociadores de la Convencion de 1893 no han pensado jamas en semejante cosa.

Ellos no han querido someter al conocimiento del Tribunal que iban a crear sino los hechos nacidos de la guerra civil; nunca idearon constituir este Tribunal con una jurisdiccion universal a partir del 28 de Agosto de 1891.

La reclamacion hecha por el albacea de Patricio Shields se funda en sucesos ocurridos dos meses despues de la pacificacion de la República. Esos sucesos no tienen relacion de ningun jénero con la guerra civil. Se trata simplemente del fogonero de un vapor americano que dice haber sido aprehendido sin derecho i maltratado bárbaramente por la policía de Valparaiso. Estos actos dan origen a acciones civiles i criminales que deben entablarse ante los tribunales ordinarios, del mismo modo que cualquiera otro acto vejatorio o cualquier reclamo que entable un comerciante contra la aduana de Valparaiso o contra el fisco chileno.

Concluyo, pues, sosteniendo que V. E. no es competente para resolver esta reclamacion, tanto porque no se sabe a quien se trata de amparar con ella, i si son o nó súbditos británicos los herederos de Patricio Shields, como porque ella se funda en hechos que no han sido producidos por la guerra civil de 1891, únicos a que se refiere la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. Pido, en consecuencia, al Exmo. Tribunal que se sirva dictar una declaracion en este sentido.

4 Por manifiesta que sea la incompetencia del Tribunal, no puedo escusarme de entrar a la cuestion de fondo, todà vez que el Reglamento no autoriza la tramitacion previa de las escepciones dilatorias. Voi, pues, a hacer presente a V. E. que los hechos espuestos en la reclamacion no son exactos, ni han sido comprobados.

Desde luego salta a la vista la inverosimilitud misma de tales hechos. Por mas que se buscara la razon determinante de la conducta ilegal de la policía i del martirio que se dice inflijido a Pa-

tricio Shields, no podría encontrarse ni en los antecedentes del cuerpo encargado de la custodia de Valparaíso, ni en motivos especiales relacionados con el reclamante. Si en ningún caso pudiera justificarse, se explicaría, a lo menos, que un celo exajerado en favor de las personas i de la propiedad, indujese a atormentar con el propósito de averiguar un crimen. Podría todavía atribuirse el tormento a móviles de venganza, o a la exaltacion de odios profundos e inveterados. Pero Shields no fué, según su propia declaracion, aprehendido para la averiguacion de delitos propios o ajenos; ni su persona desconocida, como que recién pisaba el suelo de Chile, podía inspirar odios ni sentimientos de venganza.

La prision i maltrato que atribuye a la policía de Valparaíso, no están comprobados sino por su propio testimonio, i en parte por el de Andres Mac Kinstry, otro marinero que ha presentado una reclamacion semejante fundada en idénticos motivos. En vano la justicia chilena hizo todo jénero de esfuerzos para investigar lo que hubiera de efectivo en la queja de Shields. Se levantó un sumario para practicar estas averiguaciones; pero ni en la policía, cuyos rejistros se llevan de una manera exacta i prolija, ni en parte alguna se encontraron siquiera vestijios de la prision i del maltrato de Shields. Por culpa de éste o por negativa del cónsul americano de Valparaíso, fué imposible hacer que Shields mismo reconociese a los que suponía autores de la prision i de los golpes que recibió; de manera que esa diligencia fué la única que no llegó a practicarse. Acompaño a esta contestacion una copia autorizada del sumario a fin de que V. E. pueda ver la exactitud de lo que vengo esponiendo.

Es indudable que Shields fué golpeado i duramente maltratado durante los dias que permaneció en tierra durante el mes de Octubre de 1891. De ello dan testimonio no solamente la informacion que se ha acompañado como rendida en California, sino tambien el sumario instruido por el juez del crimen de Valparaíso. Pero no hai razon para achacar a la policía lo que no fué seguramente sino efecto de pendencias o riñas trabadas en alguno de los muchos lugares de entretencion, en que se reúnen los marineros para beber i divertirse.

El mismo Shields declara que el 24 de Octubre habia bebido dos botellas de cerveza, i es posible que esto trastonara su razon, dando lugar este trastorno a mas abundantes libaciones, i a las consecuencias naturales de la embriaguez.

Si Shields riñó con sus compañeros o con otros individuos que estuvieron en la misma situacion que él, se esplica perfectamente la causa de su desgracia; pero no habria razon para imputarla a la policia de Valparaiso, i mucho ménos al Gobierno de Chile. En las grandes poblaciones, i sobre todo en los puertos de mar, no son raros sucesos de esta especie, que la autoridad no puede prevenir ni evitar porque ellos se verifican en lo interior de las casas de hospedaje o de diversion, donde no penetran los agentes de policia sino en casos especiales i calificados.

No hai tampoco por otra parte, datos que permitan afirmar con certidumbre que la enfermedad i la muerte de Shields fueran consecuencia natural e inmediata de los golpes que recibió en Valparaiso. Ni la informacion rendida en California ni el informe del medico que practicó la autopsia del cadáver, piezas que no puedo tampoco aceptar como auténticas, arrojan luz alguna en ese sentido.

No podria explicarse, por consiguiente, ni aún comprobados los hechos, el enorme monto de la indemnizacion solicitada.

En todo caso, confio en que el Tribunal habrá de desecharla, si es que no se declara incompetente, como lo espero i solicito.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

[*En esta reclamacion no hubo réplica ni dúplica.*]

SENTENCIA

Guillermo H. Knight, administrador público del condado de Alameda, California (Estados Unidos), en nombre de la madre i hermana del finado Patrick Shields, reclama del Gobierno de Chile la suma de 20,000 libras esterlinas, mas intereses desde el 25 de

Octubre de 1891 i las costas, por maltrato que sufrió a manos de la policía el difunto Shields.

El memorialista espone que desde el 21 de Octubre hasta el 2 de Noviembre de 1891 Patrick Shields, fogonero del vapor mercante norte americano *Keweenaw*, surto en Valparaiso, estando en tierra con permiso sué, sin causa alguna, reducido tres veces a prision i maltratado atrocemente por soldados i oficiales de la fuerza de policia de la ciudad; que miéntras estuvo en la prision, i a pesar del mal estado en que le habian dejado los feroces golpes que habia recibido, se le obligó a trabajos mui pesados que agravaron su triste condicion física; que él habia pedido, miéntras estuvo en prision, que se le llevara a la presencia del juez del crimen o se le permitiese comunicarse con el cónsul de los Estados Unidos, pero que todo esto se le negó, i solo el 2 de Noviembre se le echó fuera de la cárcel, sin habérsele dicho ni por qué habia sido preso ni por qué se le ponía en libertad; que a consecuencia del maltrato sufrido contrajo Shields las enfermedades de epilepsia i parálisis, las que le causaron la muerte en Enero de 1895; que en notas del ministro Egan fechadas en Santiago de Chile en 7 de noviembre de 1891 dirigidas al secretario de Estado en Washington i publicadas en el *Libro Azul* de los Estados Unidos en Enero de 1892, i que el memorialista suplica se consideren como incorporados al memorial, estan corroborados los hechos consignados; que Shields se presentó a reclamar ante el Tribunal Arbitral Chileno Americano en Enero de 1894; pero que ese Tribunal se declaró incompetente por ser Shields súbdito británico i que en vista de esta circunstancia se ocurre ahora al Tribunal Anglo Chileno a reclamar las sumas ya indicadas.

Se acompaña como documentos justificativos:

1.º Un sumario levantado en San Francisco de California para averiguar la causa de la muerte de Shields, en el cual declaran varios testigos que Shields sufría ataques frecuentes de convulsiones, echaba espuma por la boca, que se quejaba de dolores de cabeza, que decia eran consecuencia de golpes que habia recibido de algunos hombres i soldados en Chile, i que en uno de esos estados convulsivos le habia sobrevenido la muerte;

2.º Varios documentos para comprobar el carácter de albacea de la sucesion de Patrick Shields del ocurrente;

3.º Declaracion de Patrick Shields prestada ante notario en San Francisco de California en 7 de Junio de 1894, en que refiere idénticamente las circunstancias espresadas en el memorial;

Copia legalizada de un sumario levantado en San Francisco acerca del maltrato que sufrió Shields i a que se refiere el memorial i en que declaran los tripulantes del *Keweenaw*; i, por último, un tomo impreso que contiene la parte del mensaje de 1892 del Presidente de los Estados Unidos que se refiere a las relaciones de ese pais con Chile en 1891.

El ajente de Chile pide que el Tribunal no admita la reclamacion, pues no está justificada la personería del ocurrente, ni la calidad de súbdito británico de Shields, ni viene en forma el memorial; que el Tribunal, en todo caso, es incompetente para conocer de esta reclamacion, pues segun la relacion misma del memorialista, se trata de hechos posteriores al 28 de Agosto de 1891 i que no tienen relacion con la guerra civil, ni son consecuencia directa ni indirecta de ella; que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 no da al Tribunal jurisdiccion sobre tales actos; i, por último, que los hechos no están comprobados, i que, segun el sumario que se acompaña, resulta que Shields jamas estuvo preso en Valparaiso.

Considerando: que la Convencion de Arbitraje de 26 de Setiembre de 1893 no somete a la jurisdiccion de este Tribunal sino «las reclamaciones motivadas por los actos i operaciones ejecutados por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la guerra civil que empezó el 7 de Enero de 1891 i terminó el 7 de Agosto del mismo año, i las que fuesen motivadas por sucesos posteriores»; que en este último capítulo evidentemente solo están comprendidos los sucesos que tuvieran una relacion directa con la guerra civil i de la cual no son sino una consecuencia;

Considerando: que la reclamacion del señor Guillermo H. Knight, obrando como ejecutor testamentario de Patrick Shields, se funda en hechos acaecidos con posterioridad a la guerra civil; que si el espresado Patrick Shields, que en aquella época pertenecia a la tri-

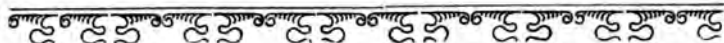
pulacion del vapor *Keweenaw*, con bandera de los Estados Unidos de América i entónces anclado en la rada de Valparaiso, sufrió, como lo pretendió, malos tratamientos de la policia de Valparaiso entre el 24 de Octubre i 2 de Noviembre de 1891, estos hechos no tienen relacion alguna con la guerra civil que habia terminado hacia dos meses; i que, por consiguiente, el Tribunal no tiene jurisdiccion para conocer de ellos.

En virtud de estos fundamentos, el Tribunal Arbitral, por unanimidad de votos, se declara incompetente para conocer de la presente reclamacion.

Santiago, 22 de Diciembre de 1895.—*CAMILLE JANSSEN*.—*ALFRED ST. JOHN*.—*LUIS ALDUNATE*.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 22 de Noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 59

ANDREW MACKINSTRY

MEMORIAL

Al Honorable Tribunal de Arbitracion Anglo-Chileno

El memorial de F. Alleyne Orr, abogado i apoderado de Andrew McKinstry, residente ahora de respetuosamente da a saber:

I.

Que vuestro memorialista es en efecto abogado i apoderado de Andrew Mc-Kinstry, marinero, i es informado i crea, i por consiguiente alega, como sigue:

Que dicho Andrew McKinstry ahora tiene cosa de treinta i tres años de edad, es nativo de Irlanda y cuya presente residencia es desconocida de vuestro deponente; que sin embargo de haber residido por muchos años en los Estados Unidos, i por muchos años nunca declaró su intencion de ser ciudadano de los Estados Unidos; i nunca fué ciudadano naturalizado de dichos Estados Unidos; sino que siempre permaneció súbdito i aun continua siendo súbdito de Su Majestad Británica, Victoria, Reina de la Gran Bretaña, i Emperatriz de la India.

II.

Que en todas las ocasiones en que se ha mencionado, el *Keweenaw* fué un vapor legalmente rejistrado i que viajaba bajo la bandera americana, de acuerdo con las leyes marítimas de los Estados Unidos.

Que en o a eso del mes de Agosto de 1891, mientras residia en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, Andrew McKinstry se embarcó i contrató en Brooklyn, Estado de Nueva York, como miembro de la tripulacion del ya mencionado vapor Americano *Keweenaw* para hacer un viaje de Nueva York a San Francisco, que previo el tiempo de efectuar el viaje, McKinstry, en Brooklyn Estado de Nueva York, se embarcó i contrató como uno de los tripulantes del ya mencionado vapor americano *Keweenaw* para hacer el viaje de Nueva York a San Francisco, i que el mencionado McKinstry, en Newport News, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, firmó los documentos usuales de enganche a bordo de los buques, provistos para i por virtud de las leyes de los Estados Unidos, reglamentando el embarque de marineros a bordo de buques mercantiles americanos.

Que en o a eso del 24 de Setiembre de 1891, el mencionado vapor americano *Keweenaw*, arribó a la bahia de Valparaiso, Chile, con el objeto de reparar averias. Que en o a eso del 24 de Octubre i habiendo obtenido primeramente licencia de ausentarse 24 horas del *Keweenaw* por medio del jefe ingeniero i el capitan, dicho Andrew McKinstry, saltó a tierra en Valparaiso, Chile, a eso de las seis de la tarde de aquel dia, i despues de visitar una barberia. en compañía de Patrick Shields, marinero americano, salió a pasear por las calles de dicha ciudad, como tenia el derecho de hacerlo, conduciéndose propia i respetuosamente, de manera inofensiva, i mientras procedia i sin dar motivo o provocacion, fué arrestado como aquí se esplica asaber:

Que el sabado 24 de Octubre de 1891, habiendo obtenido 24 horas de licencia, dicho McKinstry saltó a tierra en la ciudad de Valparaiso, i quedó allí aquel dia i la noche.

III

Que el domingo en la mañana, 25 de Octubre, dicho Andrew Mc Kinstry fué interpelado por un policia u otro oficial chileno cuyo rango i nombre eran desconocidos por dicho Mc Kinstry, pidiéndole dinero, i como le contestó que no tenia, le dijo: ¿Ud. Inglaterra? Entónces sacó su espada i le dió cuatro o cinco cintarazos.

Andrew Mc Kinstry corrió para dentro de una casa buscando proteccion; pero allí dentro encontró un oficial de la marina chilena, en uniforme, cuyo rango i nombre eran desconocidos para dicho Mc Kinstry le dió un golpe en la cabeza violentamente con en palo i despues lo arrestó sin motivo ni provocacion alguna, entónces fué encerrado en una prision, en donde habia muchos criminales presos.

IV

Que el dia lúnes 26 de Octubre de 1891, a eso de las 5 de la mañana, Andrew Mc Kinstry forzado para un gran patio i se le puso a trabajar barriendo i limpiándolo i a cuidar varios caballos que estaban allí. Despues de haber trabajado allí hora i media, fué obligado a moler maiz i a hacer otros trabajos pesados miéntras le tuvieran allí. Andrew Mc Kinstry fué testigo del terrible tratamiento de su compañero Patrick Shields durante la mañana i temiendo que le darian igual tratamiento se escapó para las cerros inmediatos a la ciudad i estuvo forzado a dormir la noche del lúnes. El dia siguiente llegó a su buque i fué solamente permitido volver a trabajar hasta el miércoles 28 de Octubre de 1891.

V

Que miéntras estaba preso Andrew Mc Kinstry fué obligado a muchas indignidades i otras violencias, i que los daños i ultrajes a que fué sujetado, fueron hechos a causa de la malignidad de la policia chilena, i oficiales cuyos rangos i nombres eran desconocidos al dicho Andrew Mc Kinstry.

VI

Que ni al tiempo de su arresto, ni durante su prision, ni despues, habia sido dicho Andrew McKinstry informado de que hubiera algun cargo en contra suya, por haber violado alguna lei de la República Chilena ni de la ciudad de Valparaiso, ni tampoco se le informó de la causa o escusa por el cruel tratamiento a que fué sujetado.

VII

Que los hechos arriba mencionados fueron prontamente comunicados al Departamento de Estado de Washington, D. C. Estados Unidos de América, como aparecerá por los despachos del Honorable Patrick Egan, ex-ministro en Chile, fechados el 7 de Noviembre de 1891, dirigidos al secretario de Estado en Washington, Estados Unidos de América, como consta en la página 128 del *Blue Book* i siguientes páginas del mismo libro espedido en mismo Washington, en Enero de 1892, que vuestro memorialista ruega sea considerado como parte de este memorial bajo el título de «Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de América, respecto de las relaciones con Chile», i por otros papeles i documentos archivados en el Departamento de Estado en Washington, D. C., todo lo cual corrobora las alegaciones ante dichas, i el cual ruega vuestro memorialista pueda tomarse como parte de este memorial.

VIII

Que vuestro memorialista jamas ha recibido dinero ni compensacion o indemnizacion ni tampoco su cliente, del Gobierno de Chile, por sus manifestos ultrajes i daños cometidos a Andrew McKinstry.

Que su memorialista presenta este memorial esclusivamente en beneficio de su cliente.

IX

Que el reclamo de indemnizacion de Andrew McKinstry fué sometido a la Comision de Reclamos Internacional de los Estados Unidos i Chile en sesion en Washington, D. C., Estados Unidos de América en Enero de 1894, bajo el tratado convenido i fechado en Santiago de Chile, el dia 7 de Agosto de 1892, i por dicha Comision desechado por motivo de que Andrew McKinstry era súbdito ingles i no ciudadano americano.

X

Que Andrew McKinstry no estuvo directa o indirectamente mezclado en la guerra civil en Chile, que comenzó el 7 de Enero de 1891 terminado el 28 de Agosto de 1891. Que nunca fué enganchado o pagado para servir a ninguno de los partidos contendientes.

XI

Que al dicho Andrew McKinstry estaba ignorante de los rangos, nombres o posiciones oficiales de las personas que cometieron los actos que han ocasionado este reclamo.

XII

Que vuestro memorialista reclama por dicho Andrew McKins-try la suma de £ 5,000 esterlinas con interes del 25 de Octubre de mil ochocientos noventa i uno (1891), i tales otras cantidades que bastarian para reembolsar dicho McKinstry los gastos i costos incurridos, en preparar este reclamo.

F. ALLEYNE ORR

A abogado de dicho McKinstry

ESTADO DE CALIFORNIA }
Ciudad i Condado de San Francisco } ss.

Habiendo sido F. Alleyne Orr debidamente interrogado, bajo juramento espone i dice que es el abogado i el apoderado de Andrew McKinstry el reclamante aquí tantas veces mencionado, i que debido a estar actualmente dicho Mc. Kinstry ausente del Estado de California, i no sabiendo vuestro deponente su presente direccion i que habiendo leído vuestro deponente el presente memorial, conoce el contenido; que el mismo es cierto i verdadero de su propio conocimiento, escepto aquellas materias en él mismo declaradas bajo su informacion i creencia, e igualmente respecto a aquellos hechos que cree firmemente son verdaderos.

F. ALLEYNE ORR.

Juramentado y suscrito por F. Alleyne Orr, en el Consulado Británico en San Francisco, hoi el primero de Marzo de 1895.

[SELLO]

WELLESLEY MOORE
Consulado *ad interim* H. B. M.

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Como apoderado i cesionario del marinero Andrew Mc-Kinstry, el señor F. Alleyne Orr demanda £ 5,000-0-0 con intereses i costas, por prision i vejámenes que se suponen impuestos al primero, en Valparaiso, del 25 al 26 de Octubre de 1891.

1 En la misma forma que aquí, esta reclamacion fué presentada en 1893 ante la Comision Mista de Washington acordada entre Chile i los Estados Unidos de América. Segnn el fallo núm. 8,

dicha Comision declaró rechazada la reclamacion, «no siendo Andrew Mc-Kinstry ciudadano de los Estados Unidos».

En el presente memorial se dice que el rechazo se fundó en que Mc-Kinstry «era súbdito ingles i no ciudadano americano». Esto es inexacto. Lo último bastaba i fué lo único considerado. No siendo ciudadano americano, no importaba averiguar si el reclamante era ingles, o aleman o de cualquiera otra nacionalidad.

El estado i carácter de súbdito ingles, como nativo de Irlanda, que el memorialista atribuye a Mc-Kinstry, descansa únicamente en la palabra del primero. En el poder anexo ni siquiera se llama este súbdito ingles. designándose solo con estas palabras: «de la ciudad i condado de San Francisco, Estado de California».

En consecuencia, no estando acreditado de ninguna manera el carácter de súbdito ingles del reclamante, resulta que V. E. carece de competencia para conocer de esta reclamacion.

2 A esa causal de incompetencia se agrega en este caso la de que la reclamacion no es motivada por actos de las fuerzas de mar o tierra de la República, durante la guerra civil que terminó el 28 de Agosto de 1891, como lo determina el art. I de la Convencion Anglo-chilena de 26 de Setiembre de 1893.

Cierto es que, segun el final de dicho artículo, pueden tambien admitirse reclamaciones motivadas por *sucesos posteriores*; pero, es evidente que tales sucesos deben tener relacion inmediata i directa con la guerra civil. Poner término a las reclamaciones deducidas con motivo de esa guerra fué la razon de ser i el objeto de la citada Convencion Anglo-chilena, manifestados en su propio preámbulo i en los documentos diplomáticos que precedieron a su celebracion entre los dos Gobiernos. Suponen la guerra i a ésta se refieren particularmente los arts. III i IX de la misma Convencion, corroborados por el art. IV i otros del Reglamento de Procedimientos acordado por V. E.

Segun esto, una reclamacion como la núm. 56, aunque motivada en un supuesto saqueo posterior al 28 de Agosto de 1891, puede ser de la competencia de este Excmo. Tribunal por la estrecha i directa relacion que el suceso tuvo con la guerra civil, de que fué consecuencia directa; pero, no podrá serlo una reclamacion como

la presente, fundada en una prision que se supone verificada en los últimos dias de Octubre de aquel año, dos meses despues de la terminacion de la guerra, con la cual ninguna relacion aparece tener aquel suceso de la vida ordinaria.

Es absurdo suponer que a los reclamantes por actos coetáneos de la revolucion haya querido la Convencion colocarlos en situacion menos ventajosa que a los reclamantes por actos posteriores.

Lo dicho manifiesta que el conocimiento de esta reclamacion es propio de los tribunales ordinarios locales, a los cuales ha debido dirigirse el reclamante.

3 Objeto, por lo demas, la personeria del señor Orr para reclamar por el marinerio Mc-Kinstry. El poder acompañado en copia, cuya fidelidad con el orijinal aparece certificada por el finado señor Gresham, secretario de Estado de los Estados Unidos, se supone dado, no se dice donde, el 4 de Febrero de 1892 ante los señores Doñovan i Young. Es asi un instrumento privado, sin legalizacion; en el cual ninguna firma ha sido reconocida o autenticada, ni la del otorgante, ni la de los testigos, ni la del secretario Gresham. Por consiguiente, carece de todo valor legal.

Segun el citado fallo núm. 8 de la Comision Mista de Washigton, esta reclamacion fué desechada alli *in limine* por no ser Mc-Kinstry ciudadano de los Estados Unidos. Si hubiera llegado el caso de que dicha Comision entrara a considerar el mérito del poder dado el señor Orr, le habria negado ciertamente cualquier valor, por no revestir caracteres de autenticidad ni formalidades legales. Con mayor razon, debe V. E. desconocer todo mérito a ese titulado poder, cuando ahora se presenta aqui, tres i medio años despues de otorgado, durante los cuales el mandatario mismo no ha tenido siquiera noticia del mandante marinerio.

No se sorprenderia poco éste si, estando vivo, llegara a saber que en Santiago se estaba reclamando a su nombre, como súbdito inglés, con un poder presentado en 1893 para reclamar en Washigton, como ciudadano de los Estados Unidos.

4 En el mismo documento o poder, el marinerio transfirió la mitad de la reclamacion al señor Orr. El memorialista, abogado de San Francisco de California, creará acaso que asi habria pasado a

ser el mismo reclamante contra Chile, como si fuera súbdito ingles, con derecho a la proteccion de S. M. B., como si hubiera recibido algun perjuicio de que la República debiera responderle.

Tal pretension seria absolutamente injustificada, aun supuesta la autenticidad del documento. El derecho de reclamar ante un Tribunal Internacional es estrictamente personal del perjudicado: es inseparable de la nacionalidad, como ésta lo es del amparo diplomático del respectivo soberano, cuya accion ha dado existencia a aquel derecho, de manera que no es este transferible.

Asi lo estableció por unanimidad el Tribunal Anglo-chileno de Santiago, en el considerando 6.º de la sentencia núm. 67, de 7 de Julio de 1887, recaida en la reclamacion de don Cárlos Watson.

Resulta de todo que el memorialista no ha justificado de ningun modo su personeria. i que, por lo tanto, no puede ser admitida la reclamacion.

5 Por lo demas, el memorial no se ajusta a las prescripciones de Reglamento de Procedimientos. Exije este que el memorial contenga ciertos datos o indicaciones, con el manifiesto objeto de facilitar la investigacion de los hechos i la defensa del Gobierno reclamado.

A esa clase pertenecen, por ejemplo, las indicaciones prescritas en el art. III de dicho Reglamento, con las cuales no ha cumplido el memorial: leyendo este, no se encontrarán en él espresados ni el lugar ni el año de nacimiento de Mc-Kinstry; ni su profesion actual; ni siquiera su residencia, respecto de la cual, confiesa el señor Orr que la desconoce, como igualmente la desconocia ya en 1893, cuando presentó su memorial en Washington. La fecha del referido poder, el 4 de Febrero de 1892, seria el último acto de presencia i de vida de Mc-Kinstry.

Otras indicaciones requeridas por el Reglamento se refieren a hechos personales del reclamante, i por eso, se exige que las haga i las abone con juramento el reclamante mismo, lo cual se tuvo sin duda presente al fijarse, para la presentacion de los memoriales, el largo plazo de seis meses contados desde la instalacion del Tribunal, i al autorizarse la prestacion del juramento ante un funcionario

diplomático o consular o ante una autoridad local, esto es, del lugar en que el reclamante se encuentre.

A esa clase pertenecen, por ejemplo, las declaraciones de si el reclamante tomó o nó parte en la guerra, si sirvió a alguno de los combatientes o recibió sueldo de él (art. IV), si ha recibido algo a cuenta de la reclamacion i si ésta ha sido o nó presentada ante otro tribunal (art. VI), si obtuvo algun recibo o declaracion por escrito (art. VII), etc. etc.

En nuestro caso, por ejemplo, el memorialista señor Orr no ha podido hacer esas declaraciones con conocimiento de causa. Por eso, en su juramento no ha podido confirmar todos esos hechos, como el Reglamento lo exige al reclamante mismo, sino de oídas, por informaciones de otros, que le han hecho creer en la efectividad de los hechos aseverados.

No se cumple así la grave prescripcion exigida por el art. IX del Reglamento. Si el memorial hubiera sido jurado en forma por McKinstry mismo, acaso no se habrian aseverado en aquel las inexactitudes que contiene. Ante el temor del perjurio, otra debia ser la relacion.

Sobre no significar así nada el juramento, prestado por el señor Orr, se dejó constancia en él al pié de un memorial redactado en idioma ingles i acompañado de una traduccion al castellano (casi incomprensible). Es precisamente lo contrario de lo que terminantemente manda el art. II del citado Reglamento.

Finalmente, la firma del señor Orr aparece certificada i el memorial jurado por aquel el día 1.º de Marzo del presente año, ante un cónsul *ad interim* de S. M. B. en San Francisco; pero, como la firma del titulado cónsul no aparece legalizada, no puede tenerse por auténtica, resultando de todo que no hai aquí ni memorial ni juramento de parte.

Por lo dicho, si hubiera de declararse competente V. E. i justificada la personeria del memorialista, lo que no espero, la reclamacion no deberá ser admitida por defectos o informalidades reglamentarias.

6 La circunstancia de haberse dejado para el exámen final de la

causa la resolución de las cuestiones previas, como las de competencia i otras, hace que los defensores del Gobierno reclamado se vean en la necesidad de considerar conjuntamente todas las acciones i escepciones a que cada reclamación ha dado o puede dar lugar.

Así, poniéndome en todos los casos posibles, aunque improbables, quiero suponer que, desechadas las anteriores escepciones previas, hubiera V. E. de entrar al fondo de esta causa. En tal caso, la reclamación deberá ser desechada por no estar acreditados los hechos, en que se funda, los cuales son manifestamente inverosímiles i hasta contradictorios.

El primer documento que se refiere a esos hechos es el indicado por anexo de 4 de Febrero de 1892. Dos veces habla allí el marino McKinstry de daños sufridos por él a consecuencia de «los asaltos, golpes, injurias i encarcelamiento falso que sufrió o recibió a manos de la policía chilena, soldados i marineros chilenos, el populacho i otros, o al tiempo de los tumultos en Valparaíso en los meses de Octubre i Noviembre de 1891.»

Ahora bien: el memorial del señor Orr no hace la menor alusión a esos supuestos tumultos de los meses de Octubre i Noviembre. En los párrafos III, IV i V de aquel, el memorialista dice llanamente: que el marino McKinstry, recién llegado a Valparaíso, pasó en tierra con licencia i sin novedad la noche del 24 de Octubre de 1891; que, en la mañana del domingo 25, un policial u oficial le dió varios cintarazos con la espada; que, habiéndose refugiado en una casa, un oficial de la marina chilena encontrado en ella le dió un golpe con un palo i lo arrestó sin motivo; que el día 26 lo hicieron trabajar i lo sometieron a muchas indignidades en la cárcel de la cual se escapó ese día, volviendo el 27 a su buque para hacer allí sus tareas el 28.

Como se vé, nada de comun tiene esta relacion con la otra de McKinstry. Sin duda oyó éste hablar del tumulto popular ocurrido en Valparaíso, dias antes de su arribada a ese puerto, el 16 de Octubre de 1891; tumulto de que resultaron maltratados, entre muchos chilenos, algunos marineros del buque de guerra de los Estados Unidos *Baltimore*, lo que dió lugar entre ese país i Chile

a un grave conflicto que tomó proporciones, pero que luego terminó mediante una indemnización insignificante comparada con la enormísima con que ha soñado el señor Orr.

La gravedad misma de aquel conflicto hizo naturalmente que la autoridad se esmerara en los siguientes días en no dar ni pretexto a nuevas reclamaciones norte-americanas. Así, puede decirse que nunca los marineros extranjeros han gozado en Valparaíso de mayores seguridades que en los precisos días 25 a 26 de Octubre que pasó en tierra McKinstry.

En todo caso, no pudo aquel encontrarse en el tumulto del 16, porque aun no había llegado a Valparaíso; ni pudo encontrarse en otros de ese mes de Octubre o del de Noviembre, porque no hubo ningún otro.

Es falso, pues, lo aseverado por el marino en el referido poder i falso tambien lo que diferentemente asevera el memorial en orden a la conducta de los oficiales chilenos a quienes se calumnia con imputaciones contrarias al honor, sin intentar siquiera comprobarlas de alguna manera.

No hai antecedente alguno que acredite los hechos espuestos ni siquiera el de haber estado McKinstry un dia, o una hora, detenido por cualquier causa en la policia de Valparaíso (cuyas puertas no debian estar mui cerradas, considerada la facilidad con que se escapó de ella). Inutilmente se empeña el memorialista en asociar los nombres del marino McKinstry i del marino Shields, a que se refiere la reclamacion núm. 58. Cualquiera que positivamente hubiera sido la suerte del último, esa suerte no la compartió el primero, ni poco ni mucho.

Dice el señor Orr que los hechos espuestos con relacion a McKinstry fueron comunicados al Gobierno de los Estados Unidos por su ministro en Chile, señor Egan, i que asi consta en las páginas 128 i siguientes del libro publicado en Washington, 1892, con el título de «Mensaje del Presidente de los Estados Unidos respecto de las relaciones con Chile.»

Debo manifestar mi sorpresa ante esa afirmacion. He releido aquellas comunicaciones, i si en ellas se alude al caso de Shields, no se nombra siquiera a McKinstry. Seria de creer que éste no ha

existido. A lo ménos, no consta fehacientemente que haya estado en Valparaíso en la época indicada.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva declararse incompetente para conocer de esta reclamacion, i en subsidio, no admitirla o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El Ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

(*En esta reclamacion no hubo replica ni dúplica*)

SENTENCIA

F. Alleyne Orr, a nombre de Andrew Mc. Kinstry, marinero, reclama del Gobierno de Chile la suma de cinco mil libras esterlinas, mas intereses i costas por prision i vejámenes.

El memorialista espone que Andrew Mc. Kinstry, súbdito ingles marinero del buque americano *Keweenaw*, que llegó a Valparaíso el 24 de Setiembre de 1891, mediante licencia que obtuvo, bajó a tierra el 24 de Octubre del mismo año, i despues de haber visitado una barbería en compañía del marinero americano Patrick Shields, se paseó por las calles sin cometer falta alguna; que al dia siguiente, 25 de Octubre, un policial u otro oficial chileno, cuyo rango i nombre desconoce, se apersonó al espresado Mc. Kinstry i le pidió dinero, i como éste contestara que no lo tenia, el oficial sacó la espada i le dió «cuatro o cinco cintarazos»; que Mc. Kinstry corrió i se metió dentro de una casa, donde se encontró con un oficial de la marina chilena, en uniforme, cuyo rango i nombre eran desconocidos para Mc. Kinstry, el que le dió un violento golpe en la cabeza con un palo i despues le arrestó sin motivo ni provocacion alguna; que se le encerró en seguida en una prision donde habia muchos criminales; que el 26 de Octubre, a eso de las cinco de la mañana, se obligó a Andrew Mc. Kinstry a barrer un patio i a cuidar de varios caballos que allí habia; que despues se le

obligó a moler maiz i a hacer otros trabajos pesados; que Mc. Kinstry fué testigo del terrible tratamiento de su compañero Patrick Shields durante la mañana, i que, temiendo que a él se lo dietan igual, se escapó para los cerros inmediatos a la ciudad donde pasó la noche del lunes; que al día siguiente llegó a su buque i no pudo trabajar hasta el miércoles 28 de Octubre; que los hechos precitados fueron trasmitidos al Departamento de Estado en Washington (E. U. América), según consta de las notas del honorable Patrick Egan, ex ministro en Chile, de fecha 7 de Noviembre de 1891, dirigida al Secretario de Estado en Washington, publicadas en el *Blue Book*, libro oficial de los Estados Unidos de América, de Enero de 1892, página 128 i siguientes i que se reproduce en el mensaje del Presidente de los E. U. de América en la parte que se refiere a las relaciones con Chile; que Mc. Kinstry ocurrió con esta misma reclamacion ante el Tribunal de Washington, constituido a virtud del tratado de 7 de Agosto de 1892, pero que dicho Tribunal lo desechó por cuanto Mc. Kinstry era súbdito ingles i no americano; que a virtud de lo espuesto se cobra al Gobierno de Chile ante este Tribunal a nombre de Andrew Mc. Kinstry la suma de cinco mil libras esterlinas (£ 5,000), mas intereses desde el 25 de Octubre de 1891 i costas por todos los daños que ha sufrido el reclamante.

Se acompañan como documentos justificativos, dos sumarios levantados en San Francisco de California, i que se refieren a Patrick Shields i Mc. Kinstry i un tomo impreso que contiene la parte del mensaje del Presidente de los Estados Unidos de América que se refiere a las relaciones de ese pais con Chile.

El agente de Chile opone a esta reclamacion la escepcion de incompetencia del Tribunal por cuanto no se ha justificado la nacionalidad británica de Mc. Kinstry; que es inexacto que el Tribunal de Washington de 1894 se declarara incompetente porque el dicho Mc. Kinstry fuera ciudadano ingles, que lo hizo porque no era americano; que tambien es incompetente el Tribunal, según el artículo 1º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893, porque los sucesos a que se refiere la reclamacion no se verificaron entre el 7 de Enero i 28 de Agosto de 1891, ni tienen relacion al-

guna con los que acontecieron en ese lapso de tiempo; que, además, es inexacto e inverosímil todo lo espuesto en el memorial; que, desde luego, nada de ello se ha intentado probar siquiera; que en la comunicacion del señor Egan a que se hace referencia i que corre en el *Blue Book* de los E. U. de América. de 1892, no figura para nada ni el nombre de Mc. Kinstry, como se asevera en el memorial; que es risible suponer que las prisiones estuvieran tan mal aseguradas en Chile, que tan fácilmente se escapara un reo, como asegura el memorial lo hizo Mc. Kinstry.

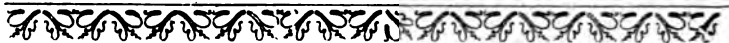
No hubo réplica ni dúplica; i

Considerando: que la Convencion de Arbitraje de 26 de Setiembre de 1893 no somete a la jurisdiccion de este Tribunal sino las reclamaciones motivadas por los actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República durante la guerra civil que empezó el 7 de Enero de 1891 i terminó el 28 de Agosto del mismo año i las que fueran motivadas por actos posteriores; que esto último no se aplica evidentemente sino a los sucesos que tuvieran una relacion directa con la guerra civil i que no fueran sino consecuencia de ella;

Considerando: que la reclamacion del señor Andrew Mc. Kinstry se funda en hechos posteriores a la guerra civil; que si el reclamante sufrió en realidad, como lo afirma, maltrato de parte de la policia de Valparaíso en los dias 25 i 26 de Octubre de 1891, estos hechos no tienen relacion alguna con la guerra civil, la cual habia terminado dos meses ántes, i que, por consiguiente, este Tribunal, no tiene jurisdiccion para resolverla. Por estos fundamentos, el Tribunal, por unanimidad de votos, se declara incompetente para conocer de la presente reclamacion.—CAMILE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Exmo Tribunal Arbitral el 22 de Noviembre de 1895.—Diego Armstrong, secretario.





RECLAMACION N.º 60

VIUDA E HIJOS MENORES DE J. A. SUTCLIFFE

MEMORIAL

Herminia Ruiz Tagle, viuda de Sutcliffe, de nacionalidad chilena, domiciliada en Valparaíso, por mí i como guardadora jeneral de mis menores hijos, segun la escritura de discernimiento que acompaño bajo el número 1, a U. U. S. S. con el mayor respecto digo:

Que segun consta de la partida que acompaño bajo el número 2, fué casada con el súbdito ingles don Juan R. Sutcliffe, en cuyo matrimonio tuvimos a los hijos que se indican en las partidas de nacimiento que tambien acompaño bajo los números 3, 4 i 5.

Mi espresado marido, fué asesinado en el fundo de su propiedad denominado Llampaguillo, situado en el departamento de Casablanca, provincia de Valparaíso, el dia 5 de Febrero de 1891, por una partida de soldados pertenecientes a la guarnicion que existia en el lugar llamado Quintay. Asi consta de los documentos debidamente autorizados que acompaño bajo los números 6, 7 i 8.

La posicion social de mi marido, las circunstancias en que fué asesinado i los perjuicios morales i pecuniarios que a su muerte nos han sobrevenido, a mi i a nuestros hijos, autorizarian plenamente el reclamo de una indemnizacion cuantiosa, pero a fin de no

susitar ninguna dificultad de parte del honorable Representante del Gobierno de Chile, prefiero reducir mis exigencias a las mas modestas proporciones. En este concepto.

A U. U. S. S. suplico: se sirvan declarar a su debido tiempo, que el Gobierno de Chile debe abonarnos la cantidad de veinte mil libras esterlinas, como indemnizacion equitativa por los perjuicios de toda especie que el asesinato del súbdito ingles don Juan R. Sutcliffe, verificados por soldados pertenecientes al ejército del Excmo. Presidente Balmaceda, nos ha ocasionado a mí, como cónyuge sobreviviente, i a los hijos habidos en mi matrimonio con el súbdito ingles don Juan R. Sutcliffe i de quienes soi representante legal.

Otrosí digo: que hago presente a U. U. S. S. 1.º que mi esposo como súbdito ingles no tomó parte directa ni indirecta en la guerra civil que comenzó el 7 de Enero de 1891 que terminó el 29 de Agosto del mismo año, ni estuvo al servicio de ninguna de las partes combatientes ni recibió sueldo de ellas; i 2.º que no he recibido suma alguna de dinero o compensacion a cuenta de este reclamo.

Juro ser verdad todo lo espuesto en el presente memorial.

(Firmado).—HERMINIA RUIZ TAGLE V. DE SUTCLIFFE

CONTESTACION

Excmo. Señor.

El ajente del Gobierno de Chile tiene el honor de contestar al memorial presentado en la reclamacion número 60 por el cual la señora doña Herminia Ruiz Tagle viuda de Sutcliffe demanda para sí i sus hijos la suma de 20,000 libras esterlinas, en que estima la indemnizacion a que cree tener derecho por la pérdida de su esposo don Juan R. Sutcliffe, asesinado el día 5 de Febrero de 1891.

1 El memorial no cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento del Tribunal, especialmente con los señalados en los

artículos IV i VI. Se han acompañado algunos documentos en ingles sin su respectiva traduccion, a pesar de lo ordenado en el artículo II; i no se ha consignado el juramento de que trata el artículo IX en la forma clara i espresa que en él se determina, si no en otra vaga i jenérica que nada dice ni significa. Estas irregularidades son bastantes para no dar curso a la reclamacion; i asi lo solicito de V. E.

2 A juicio del que suscribe, la presente reclamacion no ha podido ser elevada ante V. E. por dos motivos: 1.º porque no son súbditos británicos ni la señora viuda de Sutcliffe ni sus menores hijos a quienes legalmente representa; i 2.º porque los hechos que sirven de fundamento a la demanda no estan comprendidos entre aquellos que autorizan a los súbditos británicos para comparecer ante V. E. en conformidad a la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

1.º Punto.—La señora viuda de Sutcliffe no es súbdito británico: ella misma declara ser de nacionalidad chilena en el encabezamiento del memorial. Aun cuando no lo dijera, es evidente que cae bajo la prescripcion del art. 5.º de la Constitucion de Chile; i si su matrimonio con un súbdito ingles le hubiese conferido la nacionalidad de su marido, muerto éste habria recobrado la de su orijen. Es regla aceptada en el Derecho Internacional que la mujer que ha cambiado de nacionalidad por el hecho de su matrimonio con un extranjero, la recupera cuando enviuda. Ella está ademas espresamente consignada en algunas lejislaciones, como en el art. 19 del Código Civil frances i en el Código Italiano; i es observada constantemente en la práctica de los tribunales de diversos paises. El Tribunal anglo-chileno de 1884-1887, resolvió repetidas veces en este sentido; i puedo invocar al efecto los fallos dictados en las reclamaciones de Doña Maria Portocarrero de Maclean, de Doña Virginia Mariátegui de Swayne, i de Doña Mercedes Mendez de Ried. Estos fallos llevan los números 48, 55, 57 i 89, i rechazaron las reclamaciones en que recaian por el motivo de ser entabladas por señoras peruanas que habian recobrado su nacionalidad por el hecho de la muerte de sus esposos ingleses.

Los hijos del señor Sutcliffe son tambien chilenos como su

madre la señora Ruiz Tagle. El señor Sutcliffe permanecía en Chile desde muchos años atrás, era casado con chilena según las leyes del país, i poseía un bien raíz en el departamento de Casablanca. Estas circunstancias constituyen mucho más de lo que los juriscultos más exigentes consideran como necesario para la existencia del *animus manendi* que requiere el domicilio: de manera que no se presta a duda el hecho de que el señor Sutcliffe había establecido en Chile su domicilio. Ahora bien: la doctrina más aceptada en cuanto a la nacionalidad de las personas es la que sostiene Calvo en su Derecho Internacional. Según ella, no pueden considerarse por sí solas como fuente de la nacionalidad ni el lugar en que se nace ni el origen paterno; sino el domicilio del padre al tiempo del nacimiento. ¿Dónde en efecto se juzga que han nacido los hijos sino es en el domicilio de los padres, con preferencia a cualquiera otra parte? No es, pues, exacto afirmar que el hijo se reputa nacido en la patria de sus padres, puesto que puede suceder que estos no tengan ya su domicilio en ella.

«El niño desde que nace i mientras es de menor edad, tiene por único domicilio el de sus padres; i como el domicilio de origen a lo ménos en cuanto lo demuestran las mismas palabras, es el primero que un individuo tiene de derecho i legalmente, se sigue que la ley de la patria para el hijo no es aquella que tiene su fundamento en el hecho de su origen sino la ley que rige el domicilio en que ha nacido.

«No se podría negar que la ley que rige al individuo domiciliado en el extranjero es la de su domicilio, comprendidos en ella todos sus efectos jurisdiccionales. ¿I no es el nacimiento de un hijo un hecho que cae exclusivamente bajo la jurisdicción territorial? de donde se sigue la consecuencia necesaria, absoluta, de que la ley nacional del padre extranjero no es la que cubre al hijo en el momento de su nacimiento; mientras que la ley del domicilio del padre se hace de hecho la de su hijo; ¿porque entonces no sería considerada como la ley de su propia patria, con más razón que la ley del origen, que en cuanto es ley, según lo hemos demostrado, no le afecta ni le cubre, no tiene ningún fundamento ni jurisdicción para rejirlo?» (Calvo, t. 2.º §. 541).

«El único axioma de derecho que encuentra su aplicación en esta materia, es que la nacionalidad de origen, por indeleble que sea en sí misma, debe ser probada por el que la reivindica, si quiere destruir el significado legal de aquellos hechos que alteran su integridad». (Id., §. 568).

Si de los principios generales del Derecho Internacional descendemos a la legislación interna del país, no se puede poner en duda que los hijos del señor Sutcliffe son chilenos, conforme a lo dispuesto en el art. 5.º de la Constitución del Estado que de una manera absoluta i sin restricción alguna, considera como chilenos a los individuos nacidos en el territorio de Chile. En vano es que, para dar aire i fundamento a esta reclamación se hiciera matricular a los hijos en el Consulado Británico de Valparaíso, porque ese acto no importa el cambio de nacionalidad que no puede efectuar sino aquel que es *sui juris* i mayor de edad.

El señor agente de S. M. B. no pretenderá aplicar a los hijos de este país una regla distinta de la establecida por la legislación i la práctica de la Gran Bretaña, idénticas en esta parte a las que rigen en Chile.

«La Inglaterra, dice Calvo, ha mantenido el principio de que todo individuo nacido en el territorio británico (Reino Unido i sus colonias, comprendiendo los buques ingleses) es inglés», aún cuando sus padres sean extranjeros. A tales hijos se les reconoce únicamente el derecho de optar, al llegar a su mayor edad entre la nacionalidad del país de sus padres i la de aquel en que han nacido. (§. 542, páj. 32).

Consecuente con esta doctrina, el Gobierno británico ha hecho declaraciones de que conviene tomar nota, porque ellas resuelven el caso presente. En 1842, a consecuencia de reclamaciones hechas por individuos hijos de ingleses, pero nacidos en la República Argentina, el abogado general del Reino Unido decidió que «el efecto de la ley inglesa no podía llegar hasta privar al Gobierno del país en que estas personas habían nacido del derecho de considerarlos como sus súbditos naturales, i que ellos no podían ser protegidos contra la ley que regia a los súbditos del país, a menos que esta ley negase la calidad de nacionales a los hijos de extranjeros». En 1857

se suscitó otra cuestión semejante, i Lord Palmerston, en respuesta a la demanda de protección escribió al ministro inglés en Buenos Aires «que el Gobierno de S. M. no podía reclamar en nombre de tales personas como si fuesen súbditos ingleses». (Calvo, §. 547).

En el caso de un joven que había cumplido su mayor edad en Filadelfia, donde había nacido de un padre inglés residente en Estados Unidos i no naturalizado, sin que ni el uno ni el otro hubiesen declarado su intención de hacerse ciudadanos americanos; el Gobierno inglés decidió que no podía insistir cerca del Gobierno de Estados Unidos para hacer considerar al joven como súbdito inglés, i exento de las obligaciones inherentes a la calidad de ciudadano de los Estados Unidos. (Calvo t. 3.º §. 562).

Lawrence, comentando a Wheaton, cita estos mismos i otros casos semejantes, i hace especial mención de la declaración de Sir Roberto Peel en 4 de Abril de 1845, según la cual los hijos de súbditos británicos, nacidos en Buenos Aires tenían el carácter de ciudadanos argentinos. [Lawrence, t. 3.º, p. 209].

De lo espuesto, se deduce que tanto la ley chilena como la inglesa, atribuyen al hijo de extranjero la nacionalidad del país en que ha nacido, i que el Gobierno Británico ha amoldado a esta regla su conducta en numerosos casos en que los hijos de ingleses, nacidos en el extranjero, han reclamado su protección.

En 1887 el Tribunal anglo-chileno que funcionó en Santiago, se declaró incompetente para conocer de la reclamación de Doña Susana Cooper nacida en el Perú de padres ingleses. El fallo se fundó en muchas de las razones que he dejado espuestas; e invocó este precedente que es de suma importancia i que se refiere a un caso idéntico al actual. La sentencia lleva el número 92 i se encuentra en el folio 484 de la colección respectiva impresa en 1889.

Creo, pues, dejar comprobado que la señora Doña Herminia Ruiz Tagle de Sutcliffe no puede reclamar ni para sí ni para sus hijos el carácter de súbdito británico, ni está, por consiguiente, autorizada para ocurrir ante V. E. Agregaré todavía que no hai antecedente que acredite que el mismo señor Sutcliffe fuera súbdito de S. M. B., estado que seria menester comprobar previamente para entrar a tratar las cuestiones anteriores.

2.º Punto.—Pero no es solamente el status de los reclamantes lo que produce la incompetencia de V. E. Ella nace tambien de la materia misma del reclamo. La señora Ruiz Tagle pretende que el Gobierno de Chile la indemnice por el asesinato que malhechores o desertores del ejército perpetraron en la persona de su esposo, don Juan Agustin Sutcliffe. Aunque es efectivo este desgraciado suceso, él no constituye ni puede constituir un acto u operacion ejecutada por las fuerzas de mar o tierra de la República. Es precisamente un hecho criminal que no tiene relacion alguna con las operaciones militares llevadas a cabo durante la guerra civil de 1891. El departamento de Casablanca no fué en ese tiempo el teatro de la guerra, ni consta siquiera que dentro de él se mantuviese alguna guarnicion militar.

La autoridad judicial se apresuró a levantar un sumario para investigar el hecho; i en él recayó la sentencia cuya copia autorizada presento. Su lectura convencerá a V. E. de que no fué posible esclarecer si el señor Sutcliffe fué la víctima de algun bandolero o de sus propios trabajadores i sirvientes o de soldados desertores. En cualquiera de estos casos, el asesinato estaria lejos de provenir de los actos u operaciones que el art. 1.º de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 indica como únicos motivos que autoricen para reclamar ante este Tribunal.

Este antecedente i el que dejo tratado en el primer punto, son sobrados para que V. E. se sirva declararse incompetente, como lo suplico.

3.º Suponiendo que el señor Sutcliffe hubiese sido asesinado por soldados de la guarnicion que la reclamante dice haber existido en el lugar denominado Quintai, todavia esta reclamacion no podria ser aceptada, i mucho ménos en la cuantia en que se valorizan los perjuicios recibidos.

Se trataria, en tal caso, de actos de merodeo o de pillaje llevados a efecto por soldados que no solo se habian apartado de las filas sino que habian desertado de ellas, i andaban prófugos i probablemente perseguidos. Esta clase de actos no imponen responsabilidad a los Gobiernos, sobre todo cuando han carecido de los medios necesarios para prevenirlos, i cuando se han dictado inme-

diatamente las medidas adecuadas para su represion. V. E. puede ver en la sentencia acompañada que en el acto de llegar a conocimiento de la autoridad el crimen cometido en la persona del señor Sutcliffe, ésta procedió a aprehender a las personas en quienes recaía sospecha de haberlo perpetrado, i la justicia instruyó sin dilacion el proceso correspondiente. La causa se siguió por el juez de Casablanca, i terminó en primera instancia con la condenacion a muerte del presunto autor del delito a la pena de presidio perpetuo para los demás presuntos culpables.

Se ha hecho, pues, todo lo que era dable hacer para la represion del delito i el condigno castigo de los culpables. No puede, por lo tanto, imputarse responsabilidad alguna al Gobierno de Chile, segun las reglas del Derecho Internacional. [Vease Wharton, *International Law Digest*, secc. 225, p. 599].

En este sentido han fallado tribunales anteriores de gran prestigio, casos análogos al presente; i son numerosas las sentencias que podrian citarse pronunciadas con arreglo a la doctrina que sostengo por los Tribunales anglo-chileno e ítalo-chileno que funcionaron en Santiago de 1884 a 1888.

En vista de estas consideraciones, suplico a V. E. que, si no diere lugar a la escepcion previa, se sirva rechazar la presente reclamacion.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

RÉPLICA

Excmo. señor:

El agente del Gobierno de S. M. B. replicando a la contestacion del agente del Gobierno de Chile, en la reclamacion número 60 deducida por la señora viuda e hijos de don Juan A. Sutcliffe a V. E. con todo respeto dice:

Que en justicia se ha de servir V. E. aceptar en todas sus partes dicha reclamacion.

El señor ajente de Chile insinúa que no se debe dar curso a la demanda porque la forma en que ha sido presentada adolece de algunas irregularidades. Señala como tales el no haberse cumplido con los requisitos exigidos por el Reglamento del Tribunal en los arts. IV i VI, el haberse acompañado algunos documentos en ingles sin su respectiva traduccion, i el haberse prestado el juramento en una forma que, segun el señor ajente, es vaga i jenérica i no ciara i espresa.

Es sensible que el señor ajente de Chile no haya precisado en su contestacion cuáles son los requisitos que faltan en el memorial, pues nada habria sido mas fácil que llenarlos en la presente réplica. En todo caso, es evidente que de parte de la señora viuda de Sutcliffe ha habido la mejor intencion i buena fé para cumplir todas las disposiciones a que V. E. ha sometido la presentacion de las reclamaciones i si alguna de ellas no se hubiese llenado satisfactoriamente, ello no podria atribuirse en ningun caso a voluntad de la reclamante, sino a la circunstancia de no haberse penetrado bien del espíritu i alcance de las disposiciones reglamentarias.

Aunque en el otrosí del memorial se ha cumplido ya con lo prevenido en los arts. IV i VI del Reglamento, debo sin embargo hacer presente para que el Excmo. Tribunal lo tome en cuenta en conformidad a lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo X, que don Juan A. Sutcliffe es súbdito ingles por nacimiento i que, salvo la presente no se ha interpuesto reclamacion alguna por indemnizacion de perjuicios ante ningun tribunal.

La falta que segun el señor ajente de Chile consiste en no haberse acompañado la traduccion castellana de algunos documentos presentados en idioma ingles no puede considerarse como una deficiencia de la reclamacion tanto porque esas piezas no son propiamente documentos justificativos de los hechos que la orijinan, sino simples datos ilustrativos para corroborar el estado i nacionalidad de los hijos del señor J. A. Sutcliffe, como porque en realidad el Reglamento solo dispone que los documentos redactados en castellano se acompañen de una traduccion en ingles i no que los redactados en este último idioma sean traducidos al primero.

Por lo que hace a la forma en que está prestado el juramento no

cabe duda que ha sido en todo conforme a lo dispuesto en el art. IX i me asiste la confianza que V. E. ha de estimar que ese requisito está perfectamente cumplido.

En todo caso cualquier nuevo dato que desee conocer V. E., cualquiera traduccion que crea necesario agregar o cualquiera variacion que en la forma de juramento exija, será una orden que la sucesion del señor Sutcliffe se apresurará a cumplir en la forma i modo que se le pida. El Excmo. Tribunal puede estar seguro que toda omision o deficiencia en el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento son simples errores que en nada pueden afectar ni la buena fé manifiesta de los representantes del señor Sutcliffe ni la justicia y veracidad de la reclamacion.

II

Se sostiene tambien en la contestacion que la reclamacion no ha podido ser elevada ante V. E. por dos motivos: porque no son súbditos británicos ni la señora viuda de Sutcliffe ni sus menores hijos a quienes legalmente representa; i segundo porque los hechos que sirven de fundamento a la demanda no están comprendidos entre aquellos que autorizan a los súbditos británicos para comparecer ante V. E. en conformidad a la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

El señor ajente de Chile al estimar que la reclamacion no ha podido ser elevada ante V. E. por la primera de las causales arriba indicadas, ha sufrido una verdadera paralojizacion. La señora viuda e hijos de don J. A. Sutcliffe no se presentan como súbditos británicos directamente perjudicados. Fundan su reclamacion en su carácter de representantes i continuadores de la persona del británico señor Sutcliffe, a quien en tal carácter se le debe indemnizar.

Como se ha dicho, don Juan A. Sutcliffe era súbdito británico i su nacionalidad era tan evidente que jamas fué puesta siquiera en duda. El Gobierno de Chile la reconoció de la manera mas formal i solemne admitiendo la procedencia de las jestioncs que el señor ministro de S. M. B. hizo para que se averiguara el delito cometido contra la persona de él i se castigara a los culpables. Aquel mismo

Gobierno despues de ordenar a las autoridades administrativas i judiciales la pronta averiguacion de los hechos, remitia al señor J. G. Kennedy, ministro residente de S. M. B. la nota cuya copia legalizada se ha agregado a la reclamacion i en ella espresamente se reconocia que don Juan A. Sutcliffe, asesinado en Llampaquillo el 21 de Febrero de 1891 era súbdito ingles. El Gobierno de S. M. B. representado en Chile por su ministro residente señor Kennedy gestionando ante este último Gobierno por la via diplomática con motivo del referido asesinato, establecia de hecho la nacionalidad británica que correspondia al señor Sutcliffe. Quiero creer, Excmo. señor, que no se ha de considerar al Gobierno británico tan lijero i tan inconsulto que fuera a poner en movimiento su diplomacia sin estar previa i plenamente convencido que esas jestioncs eran perfectamente procedentes. En el caso actual, si el Gobierno de S. M. B. tomó bajo su proteccion la defensa de los derechos del señor Sutcliffe fué por que éste era súbdito británico. I en la actualidad al patrocinar el Gobierno de S. M. B. por intermedio del infrascrito la presente reclamacion, tiene la íntima persuacion de que se trata en ella de indemnizar los perjuicios que se han ocasionado al súbdito británico don Juan A. Sutcliffe.

Al negar el señor ajente de Chile la calidad de ciudadano ingles que corresponde al señor Sutcliffe coloca en realidad al Gobierno mismo en cuyo favor jestioná, en una situacion inconveniente, pues este apareceria como desconociendo hoi un hecho que ayer reconocia como fuera de toda controversia. No seria, pues, correcto poner ahora en duda la nacionalidad del señor Sutcliffe cuando esa nacionalidad consta de documentos emanados del mismo Gobierno a quien representa el señor ajente.

Establecida esta primera circunstancia seria ocioso estudiar si los hijos del señor Sutcliffe son o no súbditos británicos i si en el presente caso debe prevalecer la lei inglesa, conforme a las cuales son los hijos i hasta los nietos ciudadanos ingleses nacidos en territorio extranjero o si debe aplicarse la lejislacion que está o puede estar en oposicion con aquella. Basta para el objeto que se persigue tener presente que el carácter que inviste tanto la señora viuda de Sutcliffe como sus hijos, es el de herederos o causa habientes del

señor don Juan A. Sutcliffe a quien representan en todos sus derechos exactamente como si fuera él mismo en persona. No se reclaman los daños que los primeros han podido sufrir personalmente, se reclama la indemnización del daño que a don J. A. Sutcliffe se le originó. Quitando la vida a éste, se le infirió el mayor de los males que pueda hacerse a una persona i él mismo, por intermedio de sus herederos que son sus continuadores, reclama ahora la debida indemnización. Pensar de otra manera sería declarar de mejor derecho al que ha perdido un brazo que al que ha perdido la vida, i que el primero podría hacer por sí mismo la reclamación, i no el segundo; sería declarar estinguida la responsabilidad del autor del daño por la muerte del damnificado i tales conclusiones son absolutamente inadmisibles ante la razón, ante la justicia i, por cierto, ante la costumbre invariablemente observada en los fallos de los tribunales arbitrales.

Sostiene, asimismo, el señor agente de Chile que los hechos que dan fundamento a la demanda no están comprendidos entre aquellos que autorizan a los súbditos británicos para comparecer ante V. E.

Conviene, ante todo, notar que con los documentos acompañados tanto por parte de los reclamantes como por el señor agente chileno, está perfectamente comprobado, i este último así lo reconoce también en su contestación, que don J. A. Sutcliffe fué asesinado en su fundo de Llampaiquillo por una partida de soldados pertenecientes a las fuerzas de tierra que el Gobierno de don J. M. Balmaceda mantenía de guarnición en el lugar denominado Quinjay.

Siendo esto así, no cabe duda que el hecho del asesinato cometido por soldados pertenecientes a una guarnición es un acto ejecutado por las fuerzas de tierra. El que hayan sido desertores esos soldados no atenúa en lo menor la responsabilidad del Gobierno chileno. Es un principio incontrovertible de jurisprudencia internacional que un Estado es responsable de los daños i vejámenes causados por los individuos que están bajo sus órdenes aunque esos actos no sean ejecutados precisamente en obediencia de órdenes dictadas al efecto. Restringir la responsabilidad a este último caso equivaldría a anular, la ya que no parece verosímil que autoridades civilizadas i

cristianas dicten órdenes de esa naturaleza. Basta, pues, que el vejámen o el mal haya sido causado por personas que estén de derecho bajo las órdenes de autoridades constituidas. Tratándose de fuerza armada esta responsabilidad es tanto mas estricta cuanto mas esmerada debe ser la vijilancia que sobre ella ha de ejercer en atencion al mayor peligro que naturalmente acarrea su existencia.

Creo escusado entrar en otras consideraciones para demostrar que el acto que sirve de base a la reclamacion está perfectamente comprendido entre los que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 somete al conocimiento i decision de V. E.

En esta virtud, a V. E. suplico: se sirva dar lugar a ella en los términos en que ha sido formulada.

FREDERICK KERR

DÚPLICA

Excmo. Señor:

El ajente del Gobierno de Chile tiene el honpr de duplicar en la reclamacion núm. 60 elevada en nombre de la señora viuda e hijos de D. Juan A. Sutcliffe, en la cual se solicita una indemnizacion de veinte mil libras esterlinas por los perjuicios morales i pecuniaros que ha ocasionado a los reclamantes el asesinato perpetrado en la persona de ese caballero.

I Hice presente en mi contestacion los defectos de que adolecia el memorial, i pedí que, en virtud de ellos, no se diese curso a esta reclamacion. Los reclamantes han encontrado vaguedad en mis observaciones, i solo se hacen cargo de la que se refiere a la falta de traduccion de los documentos presentados. Manifiestan a este respecto que no estiman como documentos las partidas de nacimiento, i que emanando de una oficina que espide sus certificados en idioma ingles, no es llegado el caso de aplicar la disposicion del art. II del Reglamento, que manda presentar los documentos en castellano acompañados de una traduccion inglesa.

Dejo a la resolucion de V. E. las cuestiones promovidas por los reclamantes acerca de la informalidad del memorial. V. E. determinará si yo he tenido el deber de enumerar uno por uno los defectos del memorial, si me bastaba indicar las prescripciones que habian sido infringidas; o si es a los reclamantes a quienes incumbe dar cumplimiento al Reglamento sin necesidad de que el agente del Gobierno demandado les recuerde este deber. V. E. resolverá ademas si se entiende observada la prescripcion del art. II, presentando los documentos en un solo idioma, por el motivo de no haber sido estendidos orijinariamente en la lengua castellana.

Solicito i espero una resolucion sobre estos diversos puntos, que establezcan cual es el mérito que pueda atribuirse al memorial presentado.

2 En mi contestacion aduje la escepcion dilatoria de incompetencia del Tribunal, i la fundé en dos motivos capitales, uno *ratione personæ*, otro *ratione materiæ*.

El primero de estos motivos consiste en que los reclamantes no son súbditos de S. M. B. sino ciudadanos de la República de Chile. Hice presente que, aún cuando se considerase que la señora Ruiz Tagle de Sutcliffe hubiese perdido su nacionalidad chilena con ocasion de su matrimonio, la habria recuperado despues de la muerte de su marido; i que sus hijos son chilenos con arreglo a los principios del Derecho Internacional i a las terminantes prescripciones de la Constitucion del Estado.

No pudiendo los reclamantes desconocer la fuerza de los antecedentes i disposiciones constitucionales en que apoyé mis observaciones, han acudido a un recurso verdaderamente desesperado, i que no resiste al mas lijero exámen. Sostienen en su réplica que la señora viuda e hijos del señor Sutcliffe no acuden ante V. E. como súbditos británicos directamente perjudicados, sino como representantes i continuadores de la persona del británico señor Sutcliffe, a quien en tal carácter se debe indemnizar. No son ellos propiamente los que reclaman, sino que lo es el mismo señor Sutcliffe.

Comenzaré por observar que no es eso lo que dice el memorial. La señora Ruiz Tagle ha comparecido ante V. E. por sí i como

guardadora de sus menores hijos, i nó en nombre del señor Sutcliffe ni como continuadora de su persona. Reclama indemnizacion, no para el señor Sutcliffe i por los perjuicios que a este le ocasionó su muerte, sino para sí i sus hijos a causa de los perjuicios morales i pecuniarios que a ellos les sobrevinieron a la muerte de aquel caballero. Estima que la suma de veinte mil libras es una «indemnizacion equitativa [uso sus propias palabras] por los perjuicios de toda especie que el asesinato del súbdito ingles don Juan A. Sutcliffe, verificado por soldados pertenecientes al Ejército del Excmo. señor Balmaceda, nos ha ocasionado a mi como cónyuge sobreviviente i a los hijos habidos en mi matrimonio con el súbdito ingles D. Juan A. Sutcliffe».

No es, pues, efectivo que esta reclamacion se haya entablado para obtener indemnizacion de los perjuicios causados al mismo señor Sutcliffe. La verdad es que para sostener la jurisdiccion del Tribunal se intenta cambiar la accion deducida, i atribuir el carácter de actor a una persona desgraciadamente difunta. Este cambio es inaceptable despues de formado el cuasi contrato de litis-contestacion, i mucho mas cuando él importa una nueva reclamacion deducida fuera del plazo que para este objeto señaló la Convencion de 26 de Setiembre de 1893.

Pero, por grave i decisiva que sea esa razon para resolver la cuestion en debate, aparece nimia i secundaria delante de la que surge de la simple esposicion hecha por el señor ajente británico para presentar como reclamante en este juicio, no ya a la señora viuda e hijos del señor Sutcliffe sino a este mismo caballero en persona. Es él, segun lo dice la réplica, quién con su muerte adquirió derecho a una indemnizacion: sus herederos se limitan a hacer valer ese derecho del señor Sutcliffe, i no un derecho propio nacido para ellos con ocasion de la muerte de ese señor.

Este nuevo aspecto que se ha dado a la cuestion viene a echar por tierra la base misma del derecho. Hasta ahora, todos los juriconsultos de todos los tiempos, todas las leyes de todos los paises han estado sosteniendo que la persona termina con la muerte natural, como lo indica el principio romano *mors omnia solvit* i como lo dice el art. 18 del Código Civil Chileno. Terminada la

persona, desaparece el sujeto capaz de derechos i obligaciones; de manera que nadie puede adquirir nada con motivo de su propia muerte, ni ménos puede trasmitir a otros lo que no ha podido adquirir. A este principio elemental i de carácter absoluto se opone ahora una escepcion: el caso del señor Sutcliffe. Este caballero recibió una muerte instantánea a consecuencia de un balazo que le disparó un bandido. La muerte le produjo derecho a una indemnizacion, que él no cobra personalmente porque los muertos no pueden comparecer ante los tribunales; en cambio lo cobran sus herederos o continuadores de su persona. ¿Cuándo adquirió este derecho el señor Sutcliffe? Es claro, no ha podido adquirirlo sino despues de fallecido, porque el derecho emana precisamente de su muerte i no podia preexistir a ella, como ningun efecto puede preexistir a la causa que lo produce.

Esta teoria, como he dicho, no resiste al mas leve exámen; ella repugna a las mas elementales nociones de derecho. Si el que no existe nada puede adquirir, el señor Sutcliffe nada adquirió. Sus herederos hicieron mui bien en reclamar indemnizacion por los perjuicios que a ellos les infirió la muerte de su causante; pero hacen mui mal cuando tratan de hacer valer pretendidos derechos que suponen adquiridos por una persona despues de fallecida.

Aunque no pienso que el Tribunal haya de dar aire a esta extraña pretension, no puedo dejar pasar sin observacion los razonamientos con que la réplica trata de establecer la nacionalidad inglesa del señor Sutcliffe.

Se dice que esa nacionalidad está reconocida por el Gobierno de Chile en el hecho de haber dado esplicaciones al señor ministro residente de S. M. B. acerca del asesinato del señor Sutcliffe; i se agrega que tambien comprueba esa nacionalidad el hecho de haber gestionado el representante en Chile del Gobierno Británico para obtener esas esplicaciones.

Para formular un argumento de este jénero es menester olvidar completamente la enorme diferencia que va de las jestioness que se ventilan diplomáticamente a las que se debaten ante un tribunal de derecho. El ajente diplomático no necesita comprobar previamente la nacionalidad de la persona en cuyo obsequio entabla al-

guna jestion. Bástanle el conocimiento personal de ella, las presunciones que haya podido formarse en virtud de antecedentes que siendo suficientes para su conciencia, no pueden serlo para que un tribunal estime un hecho como probado. Aun siendo el caso dudoso, el ajente diplomático puede iniciar una reclamacion que nada le costará retirar si datos posteriormente adquiridos le convencen de su error. El Gobierno reclamado, por su parte, no necesita indagar la nacionalidad de la persona por quien se reclama, si no abriga fundadas dudas sobre ella; i cumple a lo ménos con un deber de cortesía suministrando las esplicaciones i datos que le son pedidos por el representante de un Gobierno amigo.

Ante un tribunal las cosas pasan de mui diversa manera. No es posible prescindir de la prueba de los hechos para atenerse a datos personales o a simples presunciones. Cuando el hecho que sirve de fundamento a una demanda es negado por el demandado, habrá de recibir la causa a prueba; i no podrá aceptar otros medios probatorios que los que reconoce el derecho. Por respetable que sea la autoridad de un testigo, el tribunal necesitará examinar los motivos de sus afirmaciones, i segun sean ellos les dará el mérito probatorio que en realidad les corresponda.

En el caso de que se trata, el Gobierno de Chile no ha reconocido la nacionalidad del señor Sutcliffe, sino que se ha limitado a no poner en duda la palabra del señor ministro residente. Este, a su vez, no ha necesitado pruebas ni las ha exigido: para proceder le ha bastado presumir fundadamente que se trataba de un súbdito británico.

Por lo demas, antecedentes de esta clase no constituyen prueba en derecho. El *status* de una persona requiere una prueba particular; i esa no se ha rendido hasta ahora respecto del señor Sutcliffe. Lo que hai son meras presunciones, o prueba indirecta deducida con buenos o malos motivos; pero que en todo caso el derecho reputa insuficientes, como he tenido el honor de demostrarlo en muchas otras reclamaciones.

Asi, pues, ya se considere que el reclamo ha sido entablado por la viuda e hijos del señor Sutcliffe, para obtener indemnizacion de los perjuicios que a ellos les ocasionó la muerte de ese caballero,

como ha sido en realidad i cómo únicamente puede ser; ya sea que los reclamantes comparezcan en calidad de herederos de derechos nacidos para el señor Sutcliffe despues de su muerte, lo que puede calificarse de absurdo juridico, en todo caso falta la comprobacion del carácter de súbditos británicos que necesitan para comparecer ante V. E. los herederos del señor Sutcliffe i el señor Sutcliffe mismo.

El segundo motivo de la incompetencia del Tribunal que tuve el honor de alegar en mi contestacion consiste en que el hecho materia del reclamo, no fué un acto u operacion de guerra, ni emanó de actos u operaciones que puedan estimarse como tales. El señor ajente británico dice que está comprobado i aun aceptado por mí el hecho de que el señor Sutcliffe fué asesinado por una partida de soldados pertenecientes al ejército del Gobierno. Partiendo, en seguida, de ese antecedente manifiesta que el acto ha sido ejecutado por fuerza de la República, i se encuentra comprendido en los términos de la Convencion de 1893.

Hai en tales afirmaciones un doble error, uno de hecho i otro de derecho. No consta de los antecedentes que fueran soldados del ejército chileno los que asesinaron al señor Sutcliffe; apénas se desprenden de ellos leves indicios para inferir que efectivamente hayan sido soldados los asesinos. Por mi parte, jamas he reconocido ese hecho; al contrario, tuve cuidado de hacer presente en mi contestacion que no habia podido averiguarse si el señor Sutcliffe habia sido víctima de bandoleros o de soldados desertores, agregando que en ningun caso este crimen podria constituir un acto u operacion ejecutado por las fuerzas de mar o tierra de la República.

I asi es la verdad. Cuando la Convencion habla de actos i operaciones ejecutadas por las fuerzas de mar i tierra de la República, se ha referido esclusivamente a los actos u operaciones de guerra. Los antecedentes de ese tratado internacional, su espíritu claro i manifiesto i su letra misma, demuestran la exactitud de mi afirmacion. Ella, ademas, está corroborada con la jurisprudencia adoptada por el Tribunal anglo-chileno de 1884-1887, que siempre interpretó i aplicó el tratado de 1883, del cual es copia el de 1893, en el sentido que vengo sosteniendo. En la dúplica de la reclamacion

número 54 he tratado por estenso esta cuestion, i no molestaré la atencion de V. E. repitiendo en este lugar lo que allí tuve el honor de esponer. Agregaré solo que si la ejecucion de órdenes superiores o de resoluciones judiciales que se llevan a efecto por la fuerza pública (*manu militari*) hubieran de estimarse como los actos u operaciones de las fuerzas de mar i tierra de que habla la Convencion, se llegaria al absurdo de atribuir competencia a V. E. sobre todos los actos de las autoridades administrativas i judiciales de la República que se relacionasen con súbditos británicos, ocurridos durante el período de la guerra civil de 1891. Si actos de esa naturaleza no pueden considerarse comprendidos en la Convencion por mas que en ellos haya intervenido la fuerza pública, mucho ménos aceptable es la pretencion de considerar comprendidos aun los delitos comunes, los crímenes cometidos por malhechores, sean estos o no soldados desertores del ejército.

La responsabilidad civil i criminal que nace de tales delitos está sujeta por la lei al exámen i decision de los tribunales ordinarios. Un hecho, como el actual, que ni próxima, ni siquiera remotamente, se relaciona con la guerra civil de 1891, no puede ser sometido a un tribunal de escepcion creado para conocer de reclamaciones por perjuicios provenientes de actos u operaciones de las fuerzas de mar i tierra de la República llevados a efecto durante el curso de aquella guerra.

Asi, pues, la incompetencia del tribunal *ratione materiae* es tan clara i evidente como la incompetencia *ratione personae*, que ántes he demostrado.

3 En cuanto a los hechos en que se basa la reclamacion me limitaré a manifestar que despues de una prolija i concienzuda investigacion judicial, solo han podido ser averiguados los que aparecen consignados en la sentencia que acompañé a mi contestacion. De ella solo puede deducirse con toda seguridad que el señor Sutcliffe fué alevosamente asesinado, sin que se sepa a punto fijo quienes perpetraron este crimen i mucho ménos si los asesinos eran desertores del ejército chileno. Verdad es que algunos presuntos reos de ese delito han sido condenados a la pena de muerte i a la de presidio perpetuo, con calidad de oírseles cuando fueren aprehen-

didos; pero debe tener presente V. E. que se trata de reos ausentes, i que segun la lei 1.^a tit. 37, L. 12 de la Novísima Recopilacion, que es la vijente en Chile sobre esta materia, para condenar a un reo ausente, basta la prueba semi-plena que consiste en la deposicion de un testigo o en una fuerte presuncion. La condenacion se pronuncia; pero no está llamada a producir otro efecto que el de una simple conminacion, porque, aprehendido el reo, es juzgado nuevamente i la sentencia debe entónces ajustarse al mérito de la prueba que se rinda.

Nada importa, por consiguiente, la condenacion recaida en algunos de los reos, fundada en la mera presuncion que se deduce del dicho de uno o dos testigos que afirman haber oido a alguno confesar estrajudicialmente su delito. La circunstancia de que los reos eran desertores de un cuerpo de tropas destacadas en el departamento de Casablanca, no está acreditada en manera alguna, ni podrá serlo desde que no se ha conseguido esclarecer este punto ni aun mediante una severa investigacion judicial.

4. Pero suponiendo que estuviera plenamente probado que el señor Sutcliffe hubiera sido asesinado por desertores del ejército de Chile, i que los reclamantes tuvieran el derecho de comparecer ante V. E., es perfectamente incuestionable que el Gobierno de Chile no tiene que responder civilmente a los herederos del señor Sutcliffe. Los desertores del ejército son personas sobre las cuales el Gobierno i sus delegados militares no pueden ejercer supervijilancia alguna, puesto que andan prófugos i ocultos para sustraerse a la accion de las autoridades i a las severas penas con que la Ordenanza militar castiga el delito de desercion. Los Gobiernos, lo mismo que los particulares, no responden de los actos de las personas que estan bajo su dependencia, sino en el caso de haber podido impedir el hecho culpable mediante su autoridad i cuidado. Jamas responden de lo que no está en sus manos evitar: *nemo tenetur de casu quem prævidere et cui prævidere non potest*. Este principio de derecho natural ha servido de norma a los preceptos de la lei civil i ha sido observado constantemente en la jurisprudencia interna e internacional. He invocado a este respecto en mi contestacion la doctrina de Wharton, a cuya autoridad puedo agregar

la de Calvo (§. 1280 i sigts), (Fiore §, 675 i 1717 sigts.), Bluntschli (380 bis) Hall, (P. 2.^a cap. IV), i Lawrence (t. 3, p. 128).

En cuanto a sentencias, puedo citar, entre muchas, por lo claras i concluyentes las del Tribunal Italo-chileno que llevan los números 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 40, 78, 80 i 96, que corren respectivamente en las páginas 88, 94, 100, 105, 110, 120, 126, 132, 202, 261, 265 i 305 de la obra en que están publicadas las sentencias de aquel Tribunal. El Tribunal Anglo-chileno pronunció tambien en el mismo sentido las sentencias que llevan los números 13, 29, 31, 37 i 50, que se hallan en las páginas 93, 281, 291, 308 i 348 de la obra en que están recopiladas dichas sentencias. En todas ellas se establece el principio de que los delitos cometidos por individuos del ejército que obran por su cuenta, fuera de las filas, solo son pesquisables ante la justicia ordinaria comun, i no imponen responsabilidad al Estado de quien dependen. Se citan ademas en ellas las resoluciones análogas pronunciadas por la Comision anglo-americana de Washington que llevan los números 12, 100, 133, 134 i 136.

La Comision Chileno-americana que funcionó en esa misma ciudad el año último, estableció como base para decidir las reclamaciones el siguiente principio: «Los actos de simple merodeo o pillaje practicados por soldados fuera de las filas i de la vijilancia inmediata de sus jefes no afectan la responsabilidad de los Gobiernos. Tales hechos son considerados como delitos comunes, sujetos solo a la represion penal ordinaria». (Caso de Shrigley, fallo número 18, páj. 141).

V. E. al fallar la reclamacion número 20 de don Federico G. Lomax ha rendido a estos principios el acatamiento que se les debe. «Considerando, ha dicho esa sentencia, que aun cuando se hubiera probado la efectividad del robo, no podria hacerse responsable al Gobierno de Chile de un delito de derecho comun, esto es de un robo o pillaje cometido, segun el decir del mismo reclamante, por una partida de amotinados sobre los cuales el Gobierno no ejercia autoridad alguna».

Seria el mismo caso actual. Individuos prófugos del ejército i sobre los cuales era imposible que el Gobierno ejerciese alguna

autoridad han sido, segun los reclamantes, los autores del asesinato del señor Sutcliffe. El Gobierno de Chile no pudo impedir el hecho; pero tomó en el acto de llegar a su conocimiento las medidas necesarias para castigarlo. No es, pues, responsable de los perjuicios sufridos por los herederos del señor Sutcliffe ni por este mismo.

Ningun tribunal chileno podria declarar esa responsabilidad; el Tribunal Internacional tampoco podria hacerlo, porque los mismos principios de la lei civil que servirian para absolver al Fisco ante un tribunal chileno, tienen que ser aplicados por este Tribunal, como que no son sino la espresion de un principio mas alto de Derecho Natural que ya he tenido el honor de citar.

Apesar de que no abrigo el menor temor de que V. E. se aparte en esta vez de la doctrina espuesta i sustentada por V. E. mismo, no puedo dejar de llamar su atencion a la circunstancia de que los reclamantes han avaluado en veinte mil libras los perjuicios *morales* i *pecuniarios* que les ha causado el lamentable asesinato del señor Sutcliffe. Ignoro qué parte de las veinte mil libras corresponda a cada una de esta clase de perjuicios; pero es de suponer que la mitad, ya que los reclamantes no hacen la distribucion. Apénas necesito manifestar que los perjuicios *morales* no son susceptibles de indemnizacion, ni pueden estimarse pecuniariamente. Esta doctrina de Derecho Civil es corriente i aceptada por todos los jurisconsultos, i cierto estoi de que V. E. la habria de tener presente si el caso llegara.

Espero, sin embargo, que la reclamacion será rechazada totalmente, en el evento de que no se dé lugar a la escepcion de incompetencia que tengo deducida.

M. E. BALLESTEROS,
Abogado de Chile

El ajente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

SENTENCIA

Herminia Ruiz Tagle, viuda de Sutcliffe, chilena, domiciliada en Valparaiso, por sí i como curadora de sus hijos menores, reclama del Gobierno de Chile la suma de veinte mil libras esterlinas, como indemnizacion equitativa de los perjuicios ocasionados a los reclamantes por el asesinato de don Juan Sutcliffe.

En el memorial se espone que el señor Juan Sutcliffe, esposo de la señora Ruiz Tagle i padre de los hijos menores de aquélla, fué asesinado el 5 de Febrero de 1891 en su fundo Llampaiquillo, por una partida de soldados pertenecientes a la guarnicion que existia en Quintay; que la posicion social del occiso, las circunstancias en que fué asesinado i los perjuicios morales i pecuniarios, que con ocasion de su muerte han sobrevenido a los reclamantes, autorizarian plenamente el reclamo de una indemnizacion cuantiosa, pero que a fin de no suscitar dificultad alguna de parte del representante del Gobierno de Chile, reducen sus exigencias a las mas modestas proporciones i que, en consecuencia, piden que se condene al Gobierno de Chile solo al pago de veinte mil libras esterlinas.

Se acompañan como justificativos de la reclamacion: un certificado del matrimonio de la señora Ruiz Tagle con don Juan Sutcliffe, celebrado en Valparaiso en 28 de Mayo de 1878; tres certificados de inscripciones en el libro de registro de nacimiento del consulado jeneral de S. M. B. en Valparaiso, verificadas en 4 de Marzo de 1891, que constatan el nacimiento en Valparaiso i Llampaiquillo (Casablanca) de tres hijos de los precitados esposos, en 18 de enero de 1885, en dos de Agosto de 1888 i en 28 de Junio de 1890. respectivamente; copia de un informe pasado por el juez de letras de Casablanca al ministro de Relaciones Exteriores en 6 de Mayo de 1891, que comunica a ese Ministerio que del sumario que se levantó para averiguar la muerte de Juan Sutcliffe, acaecida en 21 de Febrero del mismo año, resulta que el occiso fué asesinado en una de las quebradas de su fundo Llampaiquillo por unos soldados desertores, Miguel Ordenes i Adolfo Lobos, a quienes se les llamó por edictos; una nota del ministro de Relaciones Exteriores

al ministro de S. M. B., trasmitiendo a la Legacion Británica copia del informe precedente; i por último, una carta de fecha 17 de Julio de 1891, dirigida por el ministro de S. M. B. en Santiago a la señora Ruiz Tagle, en contestacion a una de esta señora, haciéndole saber que habia hecho la representacion solicitada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile acerca del asesinato de su marido i que habia trasmitido al cónsul jeneral de S. M. B. en Valparaíso todo lo obrado a este respecto para que impusiera de ello a la espresada señora.

El ajente de Chile pide: 1.º que no se dé curso a la reclamacion por no cumplir el memorial con las prescripciones de los artículos II, IV i VI del Reglamento; 2.º que el Tribunal se declare incompetente, ya porque no son súbditos británicos los reclamantes, ya porque se trata de hechos que no caen bajo la jurisdiccion del Tribunal, segun los términos de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893; que en efecto, la señora viuda de Sutcliffe es chilena, segun lo declara ella misma en el encabezamiento del memorial i que aun cuando no lo dijera, el artículo 5.º de la Constitucion de Chile lo diria por ella; que aunque su matrimonio con un ingles le hubiera conferido la nacionalidad de su marido, muerto éste, habria recobrado ella la de su oríjen; que esta es regla aceptada en Derecho Internacional, consignada en Códigos de muchos paises i consagrada por fallos de Tribunales Arbitrales modernos; hace varias citas al caso; tambien invoca en apoyo de la doctrina declaraciones del Gobierno Británico, que se refieren igualmente a los hijos de la señora viuda de Sutcliffe; pues éstos son igualmente chilenos, han nacido en Chile i su padre estaba domiciliado en Chile en condiciones de *animus manendi*, lo que segun todos los tratadistas que cita en gran número los hace chilenos; que la materia de la reclamacion causa tambien la incompetencia del Tribunal, pues no se trata de un acto u operacion de las fuerzas de mar o tierra de la República, sino de un delito comun que no tiene relacion alguna con la guerra, cometido en un departamento que no fué, en ese tiempo, el teatro de la guerra i donde no se mantenía siquiera guarnicion; que como se trata de un crimen, la autoridad judicial se apresuró a levantar un sumario i que en él recayó la

sentencia que se acompaña en copia autorizada; que de la misma sentencia resulta que no ha podido comprobarse si los asesinos del señor Sutcliffe fueron bandoleros, sus propios trabajadores i sirvientes o soldados desertores; lo que en ningun caso importaria acto u operacion de guerra; que aun cuando Sutcliffe hubiera sido asesinado por soldados de la guarnicion que se dice habia en Quintay tampoco seria aceptable la reclamacion, pues seria acto cometido por soldados desertores i quizas prófugos perseguidos.

En la réplica i dúplica se debaten largamente las alegaciones i doctrinas ya espuestas; i

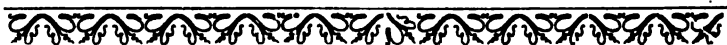
Considerando: que si se ha probado que el señor Juan R. Sutcliffe fué asesinado el 21 de febrero de 1891 en su hacienda de *Llampaiquillo*, departamento de Casablanca, provincia de Valparaiso, la reclamacion deducida por sus herederos para el pago de una indemnizacion, no es de la competencia de este Tribunal Arbitral, puesto que el acto reclamado no fué ejecutado por las fuerzas de mar o tierra de la República; que aun cuando el crimen hubiera sido cometido, como se pretende sin acompañar prueba suficiente, por soldados desertores i dispersos, la condicion de los criminales no puede ejercer influencia sobre la naturaleza del delito i transformar un crimen de derecho comun en un acto ejecutado por las fuerzas de la República.

Por estos fundamentos el Tribunal, por unanimidad de votos, se declara incompetente para conocer en la presente reclamacion.

Santiago, 22 de Noviembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 22 de Noviembre de 1895.—*Diego Armstrong*, secretario.





RECLAMACION N.º 61

JUAN HALLAM MADGE

Y

EDUARDO WELLINGTON WILLIAMS

MEMORIAL

Juan Hallam Madge, metalúrgico, actualmente residente en Camarones del Rio, cerca de Vallenar, nacido en Swansea, Inglaterra, Marzo 31 de 1849; i Eduardo Wellington Williams, empleado particular, súbdito británico, segun documento que acompaño, nacido en Coquimbo el 21 de Noviembre de 1870; el primero siendo súbdito ingles de nacimiento i el segundo de naturalizacion; ninguno ha tomado parte, directa ni indirectamente, en la guerra civil de 1891, ni recibido empleo ni sueldo alguno de los combatientes; venimos a reclamar ante el Tribunal Anglo-chileno la suma de dos mil pesos oro para el primero i de mil pesos oro para el segundo como indemnizacion por actos cometidos contra sus personas durante la citada revolucion por personas dependientes de la Administracion Balmaceda, cuyos hechos tuvieron lugar como sigue:

El dia 13 de Marzo de 1891, como a las 10.30 A. M., el señor

Antonio Briebe, entonces intendente de la Provincia de Coquimbo, i el señor Valentin Torres, comandante de policia de Serena, ámbos como hemos dicho ántes, adictos a la Administracion Balmaceda, se presentaron a la sucursal de Serena del establecimiento de fundicion de Bella-Vista de Antofagasta, situada en esa ciudad en la calle de la Catedral, núm. 22, de la cual el primero de nosotros era ajente i el segundo cajero; i sin mas motivos que el haber recibido el señor Briebe una carta anónima, acusándonos de estar remitiendo a Antofagasta en los sacos de metales dinero i correspondencia para los constitucionales, fuimos conducidos a la Intendencia por un policial, donde fuimos interrogados i espusimos que éramos súbditos británicos; pero en seguida, conducidos por el comandante Torres i policiales, fuimos llevados al cuartel de policia, donde retienen a los reos ordinarios. Despues de haber pasado una noche como verdaderos criminales, el dia 14 fuimos conducidos con centinelas a la sucursal para presenciar en parte el registro de toda la casa, sacos de metales, etc. Durante esta operacion, las personas encargadas de registrar se robaron un revólver que estaba en una de las piezas de habitacion. Solamente a las 4.30 P. M. del dia 14 fuimos puestos en libertad.

Ninguna suma de dinero ni compensacion alguna ha sido recibida a cuenta.

Una protesta con reclamos en debida forma fué en el acto de nuestra liberacion estendida por el cónsul ingles de Coquimbo, señor José Grierson, i presentado por los señores Brownell, Lewis i C.^a, quienes eran nuestros empleadores, pero parece que dicho reclamo ha sido perdido.

Serena. Marzo 30 de 1895.

EDO. W. WILLIAMS.

I, Thomas Ireland, Her Britannic Majesty's Pro Consul at Coquimbo, do hereby certify and attest, that the foregoing signature of Mr. Edward W. Williams is of his true and proper hand

writing, and that he is now Manager of Messrs. Brownell Lewis & Co. of Serena, furthermore that he is a British subject, having been registered at this Consulate.

In testimony whereof I have hereunto set, my hand and affixed my seal of office at Coquimbo this 30th day of March 1895.

THOMAS IRELAND,
H. B. M's Pro-Cónsul.

Vallenar, 9 de Abril de 1895.

J. HAL. MADGE.

Certifico: que el señor Juan Hallam Madge ha firmado ante mí el presente documento hoy día de la fecha. Vallenar, nueve de Abril de mil ochocientos noventa i cinco.

DANIEL SOLIS DE OVANDO,
Notario

CONTESTACION

Excmo. Señor:

Don Juan Hallam Madge demanda \$ 2,000 oro i don Eduardo Wellington Williams \$ 1,000 oro, por haber sido, segun dicen, llevados al cuartel de policia de la Serena i retenidos allí del día 13 al día 14 de Marzo de 1891.

1 No consta de ninguna manera que el señor Madge sea súbdito ingles por nacimiento, ni que el señor Williams lo sea por naturalizacion.

Verdad es que el señor Tomas Ireland, titulado pro-cónsul de S. M. B. en aquella ciudad, certifica al pié del memorial que el segundo de los reclamantes, nacido chileno, en Coquimbo, es súbdito ingles por haberse registrado en el Consulado; pero, ni basta el solo hecho del registro como medio de adquirir nacionalidad, ni consta la autenticidad de los certificados agregados por el señor Ireland en esta doble reclamacion, porque no se ha cuidado de legalizarlos como era debido.

2 La Convencion de 7 de Agosto de 1892, que creó la Comision Mista de Washington, no restrinjó la jurisdiccion de ésta a los casos de perjuicios causados por las fuerzas de mar o tierra durante la guerra, de modo que pudo conocer de casos de detencion personal o prision preventiva, ordenadas por autoridades administrativas.

Pero la Convencion de 7 de Diciembre de 1882 i la de 26 de Setiembre de 1893, que dieron lugar al Tribunal Arbitral Italo-chileno i al actual Anglo-chileno de Santiago, contienen aquella restriccion. En virtud de ella, V. E. no seria competente para conocer de esta reclamacion por detencion preventiva verificada en la Serena por disposicion del intendente. A este respecto, puede justamente servir de precedente la sentencia núm. 140 pronunciada por el citado Tribunal Italo-chileno, en la reclamacion del señor Schiattino, el 18 de Enero de 1888.

3 Por lo demas, no se ha presentado el memorial en la forma reglamentaria, segun es fácil comprobarlo con los arts. II, III, VI, IX, etc. del Reglamento de Procedimientos.

Los testimonios de un señor Henderson i de un señor Pablo Vega, que firma estrañamente con una marca, a los cuales se refiere uno de los dichos certificados del señor Ireland, no pueden ser tomados en consideracion, vistas las disposiciones reglamentarias relativas a la prueba testimonial.

4 No acreditándose los hechos espuestos en el memorial, la reclamacion deberá ser desechada.

En todo caso, no bastaria probar el hecho de la detencion: seria preciso probar ademas que ella se verificó, no por un error o equivocado antecedente, sino por una pura maldad, por tirania o co-

rrupcion de las autoridades, con evidente injusticia o con denegacion de justicia.

Pueden sobre esto servir de antecedente los fallos núms. 13 i 14, dictados en 1894 por la Comision Mista de Washington, en los casos del chileno señor R. L. Trumbull i del norte-americano señor Bennet Borden.

§ En el supuesto de haber sido efectiva la detencion de los reclamantes, cierto estoi de que ella se verificó correctamente i guardándose a aquellos todas las consideraciones posibles. La intervencion personal del intendente en el acto es una garantia de ello.

En comprobante de la verdad de los hechos referentes a la reclamada detencion, no vacilo en ofrecer el testimonio del mismo citado intendente don Antonio Briebe, ingeniero, residente hoi en Santiago, i del mismo citado comandante de policia, hoi industrial-comerciante en Talca. A ellos, puedo agregar el de don Wenceslao Varela, hoi agricultor, residente en la Serena, que en la época indicada comandaba en aquella ciudad un escuadron. Los tres chilenos.

En conclusion, suplico a V. E. se sirva negar lugar a la admision de esta reclamacion o desecharla en todas sus partes.

GASPAR TORO,
Abogado de Chile.

El agente de Chile,
M. A. MARTÍNEZ DE F.

[*En esta reclamacion no hubo réplica ni dúplica.*]

SENTENCIA

Juan Hallam Madge i Eduardo Wellington Williams, reclaman del Gobierno de Chile dos mil pesos oro (§ 2,000), el primero, i mil pesos oro (§ 1,000) el segundo, por prision i perjuicios.

Refieren los memorialistas que el 13 de Marzo de 1891, como a

las 10.30 A. M., el señor Antonio Briebe, entonces intendente de la provincia de Coquimbo, i el señor Valentin Torres, comandante de policia de la Serena, ámbos autoridades del Gobierno del señor Balmaceda, se presentaron a la sucursal en Serena del Establecimiento de Bellavista, de Antofagasta, de la cual el primero era ajente i el segundo cajero, i sin mas motivo que el haber recibido el señor Briebe una carta anónima, acusándolos de estar remitiendo a Antofagasta, en los sacos de metales, dinero i correspondencia para los constitucionales, fueron conducidos a la Intendencia por un policial, donde fueron interrogados i, a pesar de esponer que eran súbditos británicos, llevados en seguida por el comandante Torres i policiales al cuartel de policia, donde se detienen a los reos de delitos comunes; que despues de haber sido tratados en la noche como verdaderos criminales, el dia 14 fueron trasladados con centinelas a la sucursal para presenciari, en parte, el rejistro de toda la casa, sacos de metales, etc.; que las personas encargadas de rejistrar se robaron un revólver que estaba en una de las piezas de habitacion; que solo el 14 se les puso en libertad.

El señor ajente de Chile solicita que el Tribunal se declare incompetente, pues no se ha constatado la nacionalidad británica de los reclamantes, i aun siendo ciertos los hechos alegados por ellos que, por lo demas, no estan comprobados, no importan ellos un acto u operacion de las fuerzas de mar i tierra de la República, únicos actos que caen bajo la jurisdiccion del Tribunal en conformidad a la Convencion de 26 de Setiembre de 1893; que se trata de una medida administrativa de policia, que se verificó correctamente, i que segun los fallos números 140 del Tribunal Italo-chileno, de 1894, i 13 i 14 de la Comision Mista de Washington de 1894, no son del resorte de tribunales arbitrales, constituidos como éste i aquéllos. No hubo réplica ni dúplica. Se acompaña por parte de los reclamantes certificados de nacionalidad inglesa espedido por el Encargado de Negocios de S. M. B.; i

Considerando: que la Convencion de 26 de Setiembre de 1893 no somete a la jurisdiccion de este Tribunal Arbitral, sino las *«reclamaciones motivadas por los actos u operaciones ejecutadas por la fuerza de mar i tierra de la República durante la guerra civil que*

empezó el 7 de Enero de 1891 i terminó el 28 de Agosto del mismo año;»

Considerando: que los reclamantes Juan Hallan Madge i Eduardo Wellington Williams se querellan de haberseles arrestado el 13 de Marzo de 1891, en la Serena, de orden del Intendente de la provincia de Coquimbo señor Antonio Briebe i del señor Valentin Torres, comandante de policía de la Serena, ámbos pertenecientes a la administracion del Presidente Balmaceda i de haber sido detenidos durante 30 horas como reos del delito de haber llevado dinero i correspondencia del partido congresista;

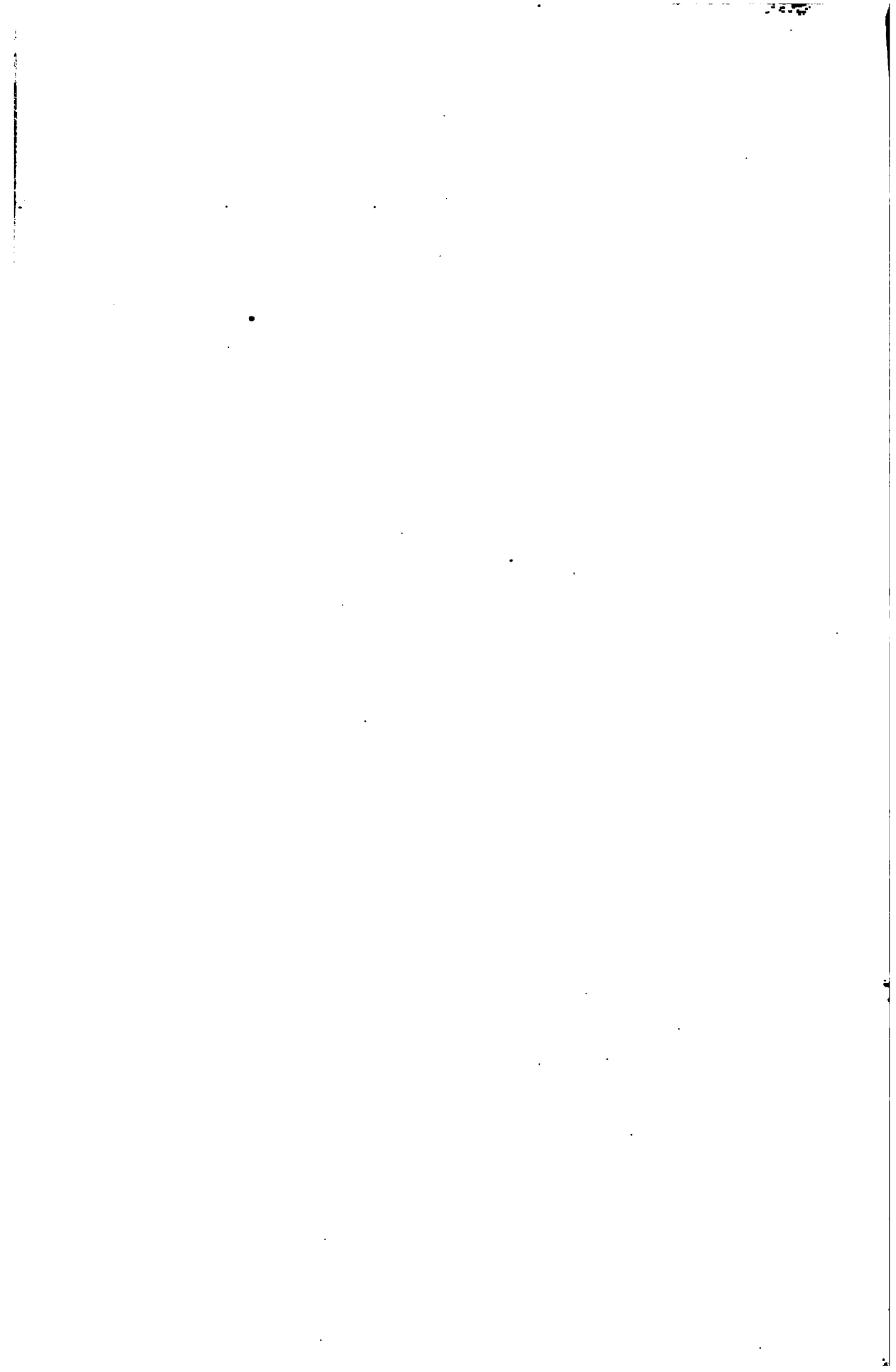
Considerando: que aunque el hecho del arresto se hubiera probado, no caeria bajo la jurisdiccion de este Tribunal Arbitral, pues no constituiria un «acto u operacion ejecutada por las fuerzas de mar i tierra de la República»; que no se trata en este caso sino del empleo de una medida de policía cuyo propósito era cautelar la seguridad del Estado, i ejecutada de orden de las autoridades administrativas i judiciales del pais, que obraban en virtud de las facultades que les acuerda la lei, a cuyo imperio están sometidos tanto los extranjeros como los regnícolas; que la medida tomada en contra de los reclamantes no cambia de naturaleza por haberse ejecutado durante el período de la guerra civil i no puede racionalmente, por esta sola causa, considerársele como una operacion ejecutada por «las fuerzas de tierra de la República.»

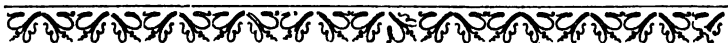
Por estos fundamentos el Tribunal Arbitral, por unanimidad de votos, se declara incompetente para conocer en la presente reclamacion.

Santiago, 17 de Diciembre de 1895.—CAMILLE JANSSEN.—
ALFRED ST. JOHN.—LUIS ALDUNATE.

Fallada por el Excmo. Tribunal en 17 de Diciembre de 1895.—
Diego Armstrong, secretario.







INDICE

DE LOS NOMBRES DE LOS RECLAMANTES.

B

				Págs.
Betteley i C. ^a —	Reclamacion	número	47	500
Blair i C. ^a	id	id	51	583
Id. id.	id.	id	35	328
Brooking, Comber i C. ^a —	id	id	49	537
Bussey, Forje Federico	id	id	57	715

C

Campbell, Outram i C. ^a —	Reclamacion	número	53	608
Colorado Nitrate Company	id	id	48	524
Compañía de Salitres Colorado Limitada.—	id	id	43	445

D

D. Richardson i C. ^a —	Reclamacion	número	52	590
Id id id	id	id	53	608

E

				Págs.
Eckersley Bull, Carlos Heraldó.—Reclamacion número	33			205
Ewing Pedro.—	id	id	38	358

G

Garnet Clarke Federico.—Reclamacion número	30			135
Goodwin, Jorge.—	id	id	28	91
Graham, Rowe i C. ^a —	id	id	37	354

H

Hallam Madge, Juan.—Reclamacion número	61			785
--	----	--	--	-----

J

Jeffery, Frank Matthews.—Reclamacion número	41			416
---	----	--	--	-----

K

Kerr Andres.—Reclamacion número	27			73
King Juan. —	id	id	44	460

M

Mackinstry Andrew.—Reclamacion número	59			745
Mac Queen, Donald.—	id	id	50	570
Melton Frames, Frank.—	id	id	39	389
Michell Henry James. —	id	id	36	340

N

Nitrate Railways Company Limited.—Reclamacion número	34			220
North i Jewell.—		id	id 42	429
Id	id	id	id	id 48 524

P

				Págs.
O Brien de Bruce Elena.—	Reclamacion número	31		156
Patterson Robertson Guillermo.—	id	id	26	54
Peake J. N.—	id	id	46	480
Pettie i G ^ —	id	id	29	113
Polwhele Henry Walter.—	id	id	40	402

R

Rojas viuda de Thompson, Zoila —	Reclamacion número	45		471
Ruiz Tagle de Sutchliffe Herminia. —	id	id	60	760

S

San Jorje Nitrate Company Limited.—	Reclamacion núm.	25		41
San Pablo Nitrate Company Limited.—	id	id	24	22
Santa Elena Nitrate Company Limited.—	id	id	23	5
Shields Patricio.—	id	id	58	727
Smith i Service.—	id	id	32	170
Sutcliffe J. A.—Sus hijos menores.—	id	id	60	760

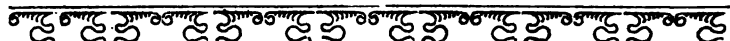
T

Thompson Luis E.—	Reclamacion número	56		658
-------------------	--------------------	----	--	-----

W

Weir iC.ª.—	Reclamacion número	54		619
Wellesly Heffer, Obder.—	id	id	55	631
Wellington Williams Eduardo.—	id	id	61	785





INDICE DE MATERIAS

SOBRE QUE VERSAN LAS RECLAMACIONES

B

Págs.

Bombardeo de Iquique.—Véase: *Combate de Iquique*.

Bloqueo.—Véase: *Detencion de buque mercante por causa de bloqueo*.

Buques mercantes.—Véase: *Detencion de buques mercantes por causa de bloqueo. Id por trámites aduaneros*.

C

Combate de Iquique.—Reclamacion núm.					26	.	.	54
Id	id	—	id	id	29	.	.	113
Id	id	—	id	id	30	.	.	135
Id	id	—	id	id	33	.	.	204
Id	id	—	id	id	35	.	.	328

						Págs.
Combate de Iquique.—Reclamación núm. 37						354
Id	id	—	id	id	39	389
Id	id	—	id	id	42	429
Id	id	—	id	id	45	471
Id	id	—	id	id	46	480
Id	id	—	id	id	50	570
Id	id	—	id	id	53	608

D

Destrucción o daño de propiedades.—Reclamación número 28						91
Id	id	id	—	id	id 34	220
Id	id	id	—Véase: <i>Combate de Iquique.—Saqueo e incendio en Valparaíso.—Saqueo en la oficina salitrera Buen Retiro.—Saqueo en la Estación Central.—Saqueo en Santiago.</i>			

Detencion de buque mercante por causa de bloqueo.—Re-						
Reclamacion	número	32	.	.	.	170
Id	id	id	id	motivos aduaneros.—		
Reclamacion	número	32	.	.	.	170

F

Ferrocarriles.—Véase: *Uso de ferrocarriles particulares.*

H

Homicidio voluntario.—Reclamación número 28						91
Id	id	id	id	id	60	760
Hospedaje de refugiados a bordo.—Reclamación núm. 32						170

I

Incendio de Iquique.—Véase: *Combate de Iquique.*
 Id en Valparaíso.—Véase: *Saqueo e incendio en Valparaíso.*

P

PÁs.

Prestacion de servicios.—Véase: *Hospedaje de refugiados a bordo.*

Prision arbitraria.—Reclamacion número 38.	.	.	.	358
Id. id. — id. id. 58.	.	.	.	727
Id. id. — id. id. 59.	.	.	.	745
Id. id. — id. id. 61.	.	.	.	785

R

Refugio.—Véase: *Hospedaje de refugiados a bordo.*

Requisiciones.—Reclamacion número 23.	.	.	.	5
Id. — id. id. 24.	.	.	.	22
Id. — id. id. 25.	.	.	.	41
Id. — id. id. 27.	.	.	.	73
Id. — id. id. 28.	.	.	.	91
Id. — id. id. 48.	.	.	.	524
Id. — id. id. 49.	.	.	.	537
Id. — id. id. 51.	.	.	.	583
Id. — id. id. 52.	.	.	.	590
Id. — id. id. 54.	.	.	.	619
Id. — id. id. 57.	.	.	.	715

S

Saqueo e incendio en Valparaiso.—Reclamacion núm.	31	156
Id. id. id. — id. id.	47	500
Id. id. id. — id. id.	55	631
Id. en la oficina salitrera <i>Buen Retiro</i> id. id.	36	340
Id. id. id. id. id.	40	402
Id. id. id. id. id.	41	416
Id. id. id. id. id.	43	445
Id. en la Estacion Central id. id.	44	460
Id. en Santiago id. id.	56	653

U

Págs.

Uso de ferrocarriles particulares.—Reclamacion número 34	220
--	-----

V

Voto disidente del árbitro belga, que opina por desechar la reclamacion número 49	551
Id. id. la núm. 52	605
Id. del árbitro británico, que se niega a aceptar la excepcion de incompetencia en la reclamacion núm. 34.	325
Id. id. que opina por la incompetencia del Tribunal en la reclamacion número 49.	552
Id. id. en el mismo sentido respecto de una parte de la reclamacion número 52 i porque se acepte la otra parte.	606
Id. del árbitro chileno que opina por rechazar la reclamacion número 49 por falta de neutralidad de los reclamantes.	553
Id. id. respecto de la reclamacion número 52.	607







HARVARD LAW LIBRARY

LAMMASCH COLLECTION
OF
INTERNATIONAL ARBITRATIONS

Received